CRONISTA LEGISLATIVO

Secretaría de Asuntos Parlamentarios

GÉNESIS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO

(Crónica Legislativa 1809-1835)

Jorge Reyes Pastrana

Primer Libro de la Crónica Legislativa Mexiquense

Diputados Locales
ESTADO DE MÉXICO

31/05/2024)

Génesis del Congreso del Estado de México (Crónica Legislativa 1809-1835)
Primer Libro de la Crónica Legislativa Mexiquense
Jorge Reyes Pastrana

Edición electrónica, 2017
Toluca, Estado de México, Estados Unidos Mexicanos

© Secretaría de Asuntos Parlamentarios del Poder Legislativo del Estado de México
Mariano Riva Palacio 100, Colonia Centro, C.P. 50000, Toluca de Lerdo, México

© Jorge Reyes Pastrana

CRÉDITOS

Dip. Cruz Juvenal Roa Sánchez
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura

Mtro. Javier Domínguez Morales
Secretario de Asuntos Parlamentarios

Lic. Jorge Reyes Pastrana
Cronista Legislativo

Pr. Ángel Chopín Cortés
Corrección de Estilo

C. Guillermina Burgos García
Apoyo Secretarial

Se autoriza la reproducción total o parcial de esta obra, siempre y cuando no se omitan los créditos correspondientes a su autoría y edición

“No puede lisonjearse este Congreso de que la Constitución que ha dictado sea la obra más perfecta que pueda haber salido de manos de los hombres. Sus obras por su naturaleza misma están llenas de defectos, y particularmente las de esta clase que solo se pueden corregir de algún modo con el tiempo y la experiencia. Empero, tiene la mayor satisfacción de haber hecho cuanto está de su parte por fijar los destinos del Estado de una manera digna de él; y aunque no haya por tanto, conseguido su objeto, se lisonjea no obstante, de haber puesto todos los medios que a este fin ha creído más adecuados”

Diputado José María Luis Mora, Presidente del Congreso del Estado de México[1]

[1] Fragmento del discurso publicado en el acta del Congreso Constituyente del 25 de febrero de 1827.

Contenido

Presentación 5

I. Órganos Legislativos Provinciales (1809-1824) 6

1. Génesis de la Diputación Provincial (1809-1814) 7
2. Diputación Provincial de la Nueva España de 1814 31
3. Suspensión del Orden Constitucional (1814-1820) 33
4. Diputación Provincial de la Nueva España de 1820 36
5. Diputación Provincial de la Nueva España (1820-1821) 38
6. Diputación Provincial de México (1821-1822) 46
7. Diputación de la Intendencia de México (1822-1823) 50
8. Diputación de la Provincia de México (1823-1824) 64

II. Congresos de la Primera República Federal (1824-1835) 74

1. Congreso Constituyente (1824-1827) 75
2. Primer Congreso Constitucional (1827-1829) 183
3. Segundo Congreso Constitucional (1829-1830) 257
4. Congreso Constituyente (1830) 299
5. Primer Congreso Constitucional (1830-1831) 317
6. Segundo Congreso Constitucional (1831-1832) 336
7. Primera Suspensión del Orden Constitucional (1832-1833) 372
8. Tercer Congreso Constitucional (1833-1834) 376
9. Segunda Suspensión del Orden Constitucional (1834) 448
10. Cuarto Congreso Constitucional (1834-1835) 450

Sinopsis de los Órganos Legislativos y sus Predecesores 481

Fuentes Documentales Consultadas 491

Índice Cronológico 498

Libro Anexo: Génesis del Congreso del Estado de México
(Adenda de la Crónica Legislativa 1809-1835)

Presentación

“Génesis del Congreso del Estado de México (Crónica Legislativa 1809-1835) Primer Libro de la Crónica Legislativa Mexiquense” es el primer tomo de los libros referentes a la historia del Poder Legislativo del Estado de México, en donde se expone el devenir histórico del Congreso que operó en los periodos comprendidos entre el 2 de marzo de 1824 y el 5 de octubre de1835, con base en la información publicada en la “Colección de Decretos”, en las “Actas de Debates” y en otros documentos referentes a la época. También se incluyen las principales disposiciones que emitieron el Poder Ejecutivo del Estado, los Supremos Poderes de la Federación y los órganos coloniales, nacionales y locales que antecedieron la actuación del Congreso a partir de 1809.

El lector de esta obra podrá apreciar en la Parte I cómo operaron las tres diputaciones de la Provincia de la Nueva España en el régimen colonial, así como las tres diputaciones de la Provincia de México que operaron a partir de la consumación de la independencia de México en 1821, incluyendo los rasgos característicos de la Constitución de Cádiz de 1812, del Acta Constitutiva de la Federación de 1824 y de otros ordenamientos de gran relevancia para comprender el entorno de aquella época.

En la Parte II se presenta la actuación de los seis congresos del Estado de México que operaron en la Primera República Federal, incluyendo los rasgos característicos de la Constitución Federal de 1824 y de otras disposiciones que consolidaron su actuación o que pusieron en peligro su continuidad, tal como se constató cuando el Congreso interrumpió brevemente su actuación en 1830, 1832 y 1834.

Finalmente, se señala que esta obra se complementa con el libro intitulado “Génesis del Congreso del Estado de México (Adenda de la Crónica Legislativa 1809-1835)”, en donde se presenta en forma abreviada, en cuadros sinópticos, la información reseñada en este libro, para que el lector pueda comprender lo que es y lo que ha sido el Poder Legislativo del Estado de México durante los primeros años de su vida institucional, sin dejar de señalar otros aspectos que favorecieron su gestación y desarrollo.

Parte I
Órganos Legislativos Provinciales (1809-1824)

En este apartado se presenta la actuación de los órganos legislativos que funcionaron en el actual territorio del Estado de México a partir del 24 de septiembre de 1810. Se analiza la actuación y el entorno en que operaron las diputaciones provinciales de la Nueva España y de la Provincia de México.

Antes de que se constituyera el Estado de México como tal, en el territorio que conformó la Provincia de México y que tuvo como Capital a la Ciudad de México, operaron seis diputaciones provinciales, las cuales se integraron por vocales nombrados por electores de partido (distrito), el Jefe Político y el Intendente.

Las seis diputaciones provinciales que operaron en el actual territorio del Estado de México en este periodo son las siguientes:

1.- La Diputación Provincial de la Nueva España de 1814 que operó del 13 de julio al 5 de octubre de 1814.

2.- La Diputación Provincial de la Nueva España de 1820 que operó del 20 de julio al 26 de septiembre de 1820.

3.- La Diputación Provincial de la Nueva España (1820-1821) que operó del 30 de septiembre de 1820 al 8 de octubre 1821.

4.- La Diputación Provincial de México (1821-1822) que operó del 9 de noviembre de 1821 al 23 de febrero de 1822.

5.- La Diputación de la Intendencia de México (1822-1823) que operó del 5 de marzo de 1822 al 18 de septiembre de 1823.

6.- La Diputación de la Provincia de México (1823-1824) que operó del 23 de septiembre de 1823 al 1 de marzo de 1824.

Capítulo 1
Génesis de la Diputación Provincial (1809-1814)

El 29 de enero de **1809** el Rey Fernando VII expidió una Real Orden que fue dada a conocer en la Ciudad de México el 14 de abril siguiente por el Virrey de la Nueva España,[2] en la cual después de señalarse que "los vastos y preciosos dominios que España posee en las Indias, no son propiamente colonias o factorías como los de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la Monarquía Española", se indicó que "los reinos, provincias e islas que forman los referidos dominios, deben tener representación inmediata a su real persona, y constituir parte de la Junta Central Gubernativa del Reino por medio de sus correspondientes diputados. Para que tenga efecto esta Real Resolución, han de nombrar los virreinatos de la Nueva España, el Perú, Nuevo Reino de Granada y Buenos Aires, y las capitanías generales independientes de la Isla de Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Chile, provincias de Venezuela y Filipinas, un individuo cada cual que represente su respectivo Distrito" (Dublan I, 1876. Orden del 29 de enero de 1809: 326).

Se indicaba que en las capitales cabeza de Partido del Virreinato "inclusas las provincias internas, procederán los ayuntamientos a nombrar tres individuos de notoria probidad, talento e instrucción, exentos de nota que pueda menoscabar su opinión pública". "Verificada la elección de los tres individuos, procederá el Ayuntamiento con la solemnidad de estilo a sortear uno de los tres, según la costumbre, y el primero que salga se tendrá por elegido".

"Luego que V. E. haya reunido en su poder los individuos sorteados en esa Capital y demás del Virreinato, procederá con el Real Acuerdo, y previo examen de dichos testimonios, a elegir tres individuos, de la totalidad, en quienes concurran cualidades más recomendables, bien sea que se conozca personalmente, bien por opinión o voz pública, y en caso de discordia decidirá la pluralidad. Esta terna se sorteará en el Real Acuerdo, presidido por V. E, el primero que salga se tendrá por elegido y nombrado Diputado de ese Reino y Vocal de la Junta Suprema Central Gubernativa de la Monarquía, con expresa residencia en esta Corte".

[2] El 16 de septiembre de 1808 asumió el cargo de Virrey de la Nueva España el Mariscal del Campo Pedro de Garibay (Wikipedia, 2013. Pedro de Garibay).

Conforme con la convocatoria antes señalada, bajo el mandato de otro Virrey,[3] "las elecciones fueron llevadas a cabo el 4 de octubre de 1809 por doce consejos municipales de las intendencias existentes y dos provincias adicionales: la de Querétaro y la de Tlaxcala, que habían protestado por su omisión, Miguel Larrazábal y Uribe, de la Provincia de Tlaxcala, fue el triunfador de la vuelta final para representar a la Nueva España y a las Provincias Internas ante la Junta Central del Gobierno Superior de España y las Indias y tomó posesión inmediatamente, pues ya se encontraba en Sevilla cuando fue electo" (Benson, 1994:15).

"En febrero de **1810**, en medio de una gran confusión y temor (ante los ejércitos franceses que amenazaban a Sevilla), la Junta nombró una Regencia de cinco miembros, incluido el conservador mexicano Miguel Larrazábal, con indicaciones para que se convocara a una reunión de las Cortes españolas en septiembre de 1810 en la Isla de León, en Cádiz. La Regencia hizo la convocatoria para las elecciones en ese mismo mes. El decreto, con las instrucciones para llevar a cabo las elecciones, llegó a la Ciudad de México el 16 de mayo de 1810 y fue publicado en el Diario Oficial el día 18 del mismo mes y año (Benson, 1994: 15).

El procedimiento para la elección era relativamente simple. Se establecía que cada Consejo Municipal de cada Capital, de cada Provincia o Intendencia debía reunirse y nombrar a tres hombres, nativos de la Provincia o Intendencia Mexicana, dotados de integridad, talento y educación. Sus nombres debían ser colocados en un recipiente del que debía sacarse uno. El hombre cuyo nombre fuese sacado sería el Diputado por la Provincia Mexicana a las Cortes de España. Entonces, el Consejo Municipal debía certificar la elección y dar indicaciones al diputado sobre los asuntos que presentaría ante las Cortes.

En mayo, actuando con la autoridad del Virrey, la Audiencia de México ordenó que sin demora alguna efectuaran las elecciones los consejos municipales de las capitales de las provincias o intendencias de la Nueva España: México, Puebla, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Guadalajara, Zacatecas, Tabasco, Querétaro, Tlaxcala, Nuevo León y Nuevo Santander (Tamaulipas); y en todas ellas se llevaron a cabo".

[3] El 19 de julio de 1809 asumió el cargo de Virrey de la Nueva España el Arzobispo de México Francisco Javier de Lizana y Beaumont (Wikipedia, 2013. Francisco Javier Lizana y Beaumont).

El 24 de septiembre al declararse establecidas las Cortes en España como depositarias del Poder Legislativo, sus integrantes declararon: “que las personas de los diputados son inviolables, y que no se puede intentar por ninguna autoridad ni persona particular cosa alguna contra los diputados, sino en los términos que se establezcan en el Reglamento General que va a formarse, y a cuyo efecto se nombrará una Comisión” (Dublan I, 1876. Decreto del 24 de septiembre de 1810: 385).

El 27 de septiembre el Virrey Marqués de la Reunión Francisco Javier Venegas de Saavedra[4] ofreció una gratificación de diez mil pesos a quienes le dieran muerte a los insurgentes: Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama. Se indicó que a quienes cumplieran con esa encomienda: “se les atenderá con los demás premios y distinciones debidas a los restauradores del sosiego público, y en inteligencia de que se dará también igual premio y recompensa con el indulto de su complicidad a cualquiera que desgraciadamente los haya seguido en su partido faccionario, y loablemente arrepentido los entregase vivos o muertos” (Torre Villar de la, 1974. Bando del 27 de septiembre de 1810: 51).

El 10 de noviembre las Cortes dispusieron que “todos los cuerpos y personas particulares, de cualquiera condición y estado que sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación anteriores a la publicación”. Es digno señalar que con esta disposición se abolieron los tribunales de imprenta, que los autores e impresores serían castigados por “los libelos infamatorios, los escritos calumniosos, los subversivos de las leyes fundamentales de la Monarquía, los licenciosos y contrarios a la decencia pública y buenas costumbres”, y que para asegurar la libertad de imprenta y contener su abuso las Cortes nombrarían una Junta Suprema de Censura, la cual debía ser auxiliada por una Junta Censoria de Provincia (Dublan I, 1876. Decreto del 10 de noviembre de 1810: 336).

El 9 de febrero de **1811** las Cortes dispusieron “que los naturales y habitantes de América puedan sembrar y cultivar cuanto la naturaleza y el arte les proporcione en aquellos climas y del mismo modo, promover la industria manufacturera y las artes en toda su extensión”, y que “los americanos , así españoles como indios, y los hijos de ambas clases tengan igual opción que los españoles europeos para toda clase de empleos y destinos, así en la Corte como en cualquier otro lugar de la Monarquía,

[4] El Virrey asumió su cargo el 13 de septiembre de 1810 (Wikipedia, 2011. Francisco Javier Venegas de Saavedra).

sean de la carrera eclesiástica, política o militar" (Dublan I, 1876. Decreto del 9 de febrero de 1811: 340).

El 28 de marzo las Cortes expidieron el Reglamento de Provincias, en el cual se "estipulaba que en cada Provincia habría una Junta Superior compuesta del Capitán General, el Intendente, los cuales serían nombrados por el Rey, y nueve vocales elegidos en la Provincia. En las provincias de más de nueve corregimientos o partidos, habría tantos vocales como corregimientos o partidos hubiere. Cada Partido habría de elegir un Miembro o Diputado a la Junta. Los elegidos debían tener bienes o arraigo y ser naturales de la Provincia o haber tenido en ella diez años de vecindad y estar adornados de las demás cualidades requeridas para ser diputados a las Cortes. El encargo de Vocal de las juntas provinciales duraría a lo más tres años y su renovación sería por terceras partes cada año. Los vocales habrían de servir sin sueldo, gratificación, honores ni tratamiento alguno, sin derecho a usar insignia ni distintivo por razón de su cargo y sin goce de fuero en causas civiles; solo en las causas criminales gozarían del privilegio de no poder ser acusados, salvo en las audiencias o cancillerías territoriales, mientras ejercieran su cargo de vocales (Benson, 1994: 21).

El Capitán General, si lo hubiere, sería Presidente de la Junta y cada Junta elegiría de entre sus miembros, por mayoría de votos, un Vicepresidente cuyo encargo duraría un año sin que pudiera ser reelegido. Cada Junta debería nombrar también un Secretario, quien serviría sin sueldo ni gratificación y podría ser reelegido después de transcurridos tres años de mandato".

Las juntas serían el conducto por el que el Gobierno comunicaría al pueblo las órdenes y cuantas providencias estimare convenientes para la defensa de la Patria en contra de los franceses y habrían de administrar los negocios que el Gobierno les confiase.

El 22 de abril las Cortes abolieron "para siempre el tormento en todos los dominios de la Monarquía Española y la práctica introducida de afligir y molestar a los reos por los que ilegal y abusivamente llaman apremios; y prohíben los que se conocían con el nombre de esposas, perrillos, calabozos extraordinarios y otros, cualquiera que fuese su denominación y uso; sin que ningún Juez, Tribunal ni Juzgado, por privilegios que sea, pueda mandar ni imponer la tortura, ni usar de los inusitados apremios bajo su responsabilidad, y la pena, por el mismo hecho de mandarlo, de ser sustituidos los

jefes de su empleo y dignidad, cuyo crimen podrá perseguirse por acción popular" (Dublan I, 1876. Decreto del 22 de abril de 1811: 342).

El 14 de julio con el propósito de establecer en todas las clases de la Monarquía la absoluta subordinación al Gobierno, las Cortes determinaron que "todo General, Junta, Audiencia, o cualquier otro superior, a quien incumba el dar cumplimiento a las superiores órdenes, será responsable de la ejecución de ellas, y privados de sus respectivos empleos, si por culpable omisión, negligencia o tolerancia, por no aplicar inmediatamente las penas a los desobedientes, dejaren de cumplimentarse" (Dublan I, 1876. Decreto del 14 de julio de 1811: 342).

El 18 de marzo de **1812** las Cortes expidieron la Constitución Política de la Monarquía Española (Secretaría de Gobernación, 2010), en cuyo Título I "De la Nación Española y los Españoles", se indica que "la Nación Española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios" (art. 1); que "la Nación Española es libre e independiente, y no es, ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona" (art. 2); que "la soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo, pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales" (art. 3), y que "la Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad, y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen" (art. 4).

En el Título II "Del Territorio de las Españas, su Religión y Gobierno y de los Ciudadanos Españoles", se señala que el territorio español comprende en la América Septentrional a la "Nueva España con la Nueva-Galicia y la Península de Yucatán, Guatemala, las Provincias Internas de Oriente, las Provincias internas de Occidente, la Isla de Cuba con las dos Floridas, la parte española de la Isla de Santo Domingo y la Isla de Puerto Rico, con las demás adyacentes a éstas y al Continente en uno y otro mar" (art. 10); que "se hará una división más conveniente del territorio español por una Ley Constitucional, luego que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan" (art. 11), y que "la religión de la Nación Española es y será perpetuamente la Católica, Apostólica, Romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra" (art. 12).

En cuanto a la forma de gobierno, se indica que "el objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen" (art. 13); que "el Gobierno de la Nación Española es

una monarquía moderada hereditaria" (art. 14); que "la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey" (art. 15); que "la potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey" (art. 16), y que "la potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la Ley" (art. 17).

En cuanto a los españoles, se indicaba que "son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios, y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios" (art. 18); que "es también ciudadano el extranjero que gozando ya de los derechos de Español, obtuviere de las Cortes carta especial de ciudadano" (art. 19); que "son asimismo, ciudadanos los hijos legítimos de los extranjeros domiciliados en las Españas, que habiendo nacido en los dominios españoles, no hayan salido nunca fuera sin licencia del Gobierno, y teniendo veinte y un años cumplidos, se hayan avecindado en un pueblo de los mismos dominios, ejerciendo en él alguna profesión, oficio, ó industria útil" (art. 21); que "solo los que sean ciudadanos podrán obtener empleos municipales, elegir para ellos en los casos señalados por la ley" (art. 23), y que la calidad de ciudadano español se pierde: "por adquirir naturaleza en país extranjero", "por admitir empleo de otro Gobierno", "por sentencia en que se impongan penas aflictivas o infamantes, si no se obtiene rehabilitación", y "por haber residido cinco años consecutivos fuera del territorio español sin comisión o licencia del Gobierno" (art. 24).

En el Título III "De las Cortes", se indica que "las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan la Nación, nombrados por los ciudadanos" (art. 27); que "la base para la representación nacional es la misma en ambos hemisferios" (art. 28); que "esta base es la población compuesta de los naturales que por ambas líneas sean originarios de los dominios españoles, y de aquellos que hayan obtenido en las Cortes carta de ciudadano, como también de los comprehendidos en el artículo 2l" (art. 29); que "por cada setenta mil almas de la población, compuesta como queda dicho en el artículo 29, habrá un Diputado de Cortes" (art. 31); que "para la elección de los diputados de Cortes se celebrarán juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia" (art. 34); que "en las juntas de parroquia se nombrará por cada doscientos vecinos un elector parroquial" (art. 38); que "el número de electores de partido será triple al de los diputados que se han de elegir" (art. 63); que "las juntas electorales de provincia se compondrán de los electores de todos los partidos de ella, que se congregarán en la Capital a fin de nombrar los diputados que le correspondan, para asistir á las Cortes, como representantes de la Nación" (art.78); que "se juntarán las Cortes todos los años en la Capital del Reino, en edificio destinado á este solo objeto"

(art. 104); que “las sesiones de las Cortes en cada año durarán tres meses consecutivos, dando principio el día primero del mes de marzo” (art. 106); que “los diputados se renovarán en su totalidad cada dos años” (art. 108), y que “los diputados no podrán volver a ser elegidos, sino mediante otra Diputación” (art. 110).

En el artículo 131 se establecieron como facultades de las Cortes: las de “proponer y decretar las leyes, e interpretarlas y derogarlas en caso necesario” (1ª); “recibir el juramento al Rey, al Príncipe de Asturias, y a la Regencia” (2ª); “resolver cualquiera duda de hecho o de derecho, que ocurra en orden a la sucesión a la Corona” (3ª); “elegir Regencia o Regente del Reino, cuando lo previene la Constitución, y señalar las limitaciones con que la Regencia o el Regente han de ejercer la Autoridad Real” (4ª); “hacer el reconocimiento público del Príncipe” (5ª); “nombrar tutor al Rey Menor, cuando lo previene la Constitución” (6ª); “aprobar antes de su ratificación los tratados de alianza ofensiva, los de subsidios, y los especiales de comercio” (7ª); “conceder o negar la admisión de tropas extranjeras en el Reino” (8ª); “decretar la creación y supresión de plazas en los tribunales que establece la Constitución; e igualmente la creación y supresión de los oficios públicos” (9ª); “fijar todos los años a propuesta del Rey las fuerzas de tierra y de mar, determinando las que se hayan de tener en pie en tiempo de paz, y su aumento en tiempo de guerra” (10ª); “dar ordenanzas al Ejército, armada y Milicia nacional en todos los ramos que los constituyen” (11ª); “fijar los gastos de la Administración Pública” (12ª); “establecer anualmente las contribuciones e impuestos” (13ª); “tomar caudales a préstamo en casos de necesidad sobre el crédito de la Nación” (14ª); “aprobar el repartimiento de las contribuciones entre las provincias” (15ª); “examinar y aprobar las cuentas de la inversión de los caudales públicos” (16ª); “establecer las aduanas y aranceles de derechos” (17ª); “disponer lo conveniente para la administración, conservación y enajenación de los bienes nacionales” (18ª); “determinar el valor, peso, ley, tipo y denominación de las monedas” (19ª); “adoptar el sistema que se juzgue mas cómodo y justo de pesos y medidas” (20ª); “promover y fomentar toda especie de industria, y remover los obstáculos que la entorpezcan” (21ª); “establecer el Plan General de Enseñanza Pública en toda la Monarquía, y aprobar el que se forme para la educación del Príncipe de Asturias” 22ª); “aprobar los reglamentos generales para la policía y sanidad del Reino” (23ª); “proteger la libertad política de la imprenta” (24ª); “hacer efectiva la responsabilidad de los secretarios del despacho y demás empleados públicos” (25ª), y “dar o negar su consentimiento en todos aquellos casos y actos, para los que se previene en la Constitución ser necesario” (26ª).

En cuanto a la formación de las leyes, se indica que “todo Diputado tiene la facultad de proponer a las Cortes los proyectos de ley, haciéndolo por escrito, y exponiendo las razones en que se funde” (art.132); que “la votación se hará a pluralidad de absoluta de votos, y para proceder a ella, será necesario que se hallen presentes a lo menos la mitad y uno más de la totalidad de los diputados que deben componer las Cortes” (art. 139); que “si las Cortes desecharen un proyecto de ley en cualquier estado de su examen, o resolvieren que no debe procederse a la votación, no podrá volver a proponerse en el mismo año” (art. 140); que “el Rey tiene la sanción de las leyes” (art. 142); que “si el Rey negare la sanción, no se volverá a tratar del mismo asunto en las Cortes de aquel año; pero podrá hacerse en las del siguiente” (art. 147), y que “publicada la ley en las Cortes, se dará de ello aviso al Rey, para que se proceda inmediatamente á su promulgación solemne” (art. 154).

Se indica que “antes de separarse las Cortes nombrarán una Diputación que se llamará Diputación Permanente de Cortes compuesta de siete individuos de su seno, tres de las provincias de Europa y tres de las de Ultramar, y el séptimo saldrá por suerte entre un Diputado de Europa y otro de Ultramar” (art. 157); que “al mismo tiempo nombrarán las Cortes dos suplentes para esta Diputación, uno de Europa y otro de Ultramar” (art. 158); que “la Diputación Permanente durará de unas Cortes ordinarias a otras” (art. 159), y que “las Cortes Extraordinarias se compondrán de los mismos diputados que forman las ordinarias, durante los dos años de su Diputación”.

En el Título IV “Del Rey”, se indica que “la persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a responsabilidad” (art. 168); que “la potestad de hacer ejecutar las leyes reside exclusivamente en el Rey, y su autoridad se extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo interior, y a la seguridad del Estado en lo exterior, conforme a la Constitución y a las leyes” (art. 170); que “durante la menor edad del Rey, será gobernado el Reino por una Regencia” (art. 186); que “los secretarios del despacho serán siete” (art. 222);[5] que “habrá un Consejo de Estado compuesto de cuarenta individuos” (art. 231), y que “l Consejo de Estado es el único Consejo del Rey, que oirá su dictamen en los asuntos graves gubernativos, y señaladamente para dar o negar la sanción a las leyes, declarar la guerra, y hacer los tratados” (art. 236).

[5] Las secretarías eran las: de Estado, de Gobernación del Reino para la Península e Islas Adyacentes, de Gobernación del Reino para Ultramar, de Gracia y Justicia, de Hacienda, de Guerra y Marina.

En el artículo 171 se indica que “además de la prerrogativa que compete al Rey sancionar las leyes y promulgarlas, le corresponden como principales las facultades” las de: “expedir los decretos, reglamentos e instrucciones que crea conducentes para la ejecución de las leyes” (1ª); “cuidar de que en todo el Reino se administre pronta y cumplidamente la justicia” (2ª); “declarar la guerra, y hacer y ratificar la paz, dando después cuenta documentada a las Cortes” (3ª); “nombrar los magistrados de todos los tribunales civiles y criminales, a propuesta del Consejo de Estado” (4ª); “proveer todos los empleos civiles y militares” (5ª); “presentar para todos los obispados y para todas las dignidades y beneficios eclesiásticos de real patronato, a propuesta del Consejo de Estado” (6ª); “conceder honores y distinciones de toda clase con arreglo a las leyes” (7ª); “mandar los ejércitos y armadas, y nombrar los generales” (8ª); “disponer de la Fuerza Armada, distribuyéndola como más convenga” (9ª); “dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias, y nombrar los embajadores, ministros y cónsules” (10ª); “cuidar de la fabricación de la moneda, en la que se pondrá su busto y su nombre” (11ª); “decretar la inversión de los fondos destinados a cada uno de los ramos de la Administración Pública” (12ª); “indultar a los delincuentes, con arreglo a las leyes” (13ª); “hacer a las Cortes las propuestas de leyes o de reformas que crea conducentes al bien de la Nación, para que de liberen en la forma prescrita” (14ª); “conceder el pase, o retener los decretos conciliares y bulas pontificias con el consentimiento de las Cortes, si contienen disposiciones generales; oyendo al Consejo de Estado, si versan sobre negocios particulares o gubernativos; y si contienen puntos contenciosos, pasando su conocimiento y decisión al Supremo Tribunal de Justicia, para que resuelva con arreglo a las leyes” (15ª), y “nombrar y separar libremente los secretarios de Estado y del despacho” (16ª).

En el Título V “De los Tribunales y de la Administración de Justicia en lo Civil y Criminal”, se indica que “la potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los tribunales” (art. 242); que “ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales, avocar causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos” (art. 243); que “las leyes señalarán el orden y las formalidades del proceso que serán uniformes en todos los tribunales; y ni las Cortes ni el Rey podrán dispensarlas” (art. 244); que “el Código Civil y Criminal, y el de Comercio serán unos mismos para toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones, que por particulares circunstancias podrán hacer las Cortes” (art. 258); que “habrá en la Corte un Tribunal, que se llamará Supremo Tribunal de Justicia” (art. 259); que “las Cortes determinarán el número de magistrados que han de componerle, y las salas en que ha de distribuirse” (art. 260); que “todas las causas civiles y criminales se

fenecerán dentro del territorio de cada Audiencia" (art. 262); que "pertenecerá a las audiencias conocer de todas las causas civiles de los juzgados inferiores de su demarcación en segunda y tercera instancia, y lo mismo de las criminales, según lo determinen las leyes; y también de las causas de suspensión y separación de los jueces inferiores de su territorio, en el modo que prevengan las leyes, dando cuenta al Rey" (art. 263); que "se determinará por leyes y reglamentos especiales el número de los magistrados de las audiencias, que no podrán ser menos de siete, la forma de estos tribunales y el lugar de su residencia" (art. 271); que "se establecerán partidos proporcionalmente iguales, y en cada cabeza de Partido habrá un Juez de Letras con un Juzgado correspondiente" (art. 273); que "las facultades de estos jueces se limitarán precisamente a lo contencioso, y las leyes determinarán las que han de pertenecerles en la Capital y pueblos de su Partido, como también hasta de qué cantidad podrán conocer en los negocios civiles sin apelación" (art. 274); que "en todos los pueblos se establecerán alcaldes, y las leyes determinarán la extensión de sus facultades, así en lo contencioso como en lo económico" (art. 275), y que "las leyes decidirán si ha de haber tribunales especiales para conocer de determinados negocios" (art. 278).

En el artículo 26l se indica que toca al Supremo Tribunal de Justicia: "dirimir todas las competencias de las audiencias entre sí en todo el territorio español, y la de las audiencias con los tribunales especiales que existan en la Península e islas adyacentes", y "en Ultramar se dirimirán estas últimas, según lo determinaren las leyes" (1º); "juzgar a los secretarios de estado y del despacho, cuando las Cortes decretaren haber lugar a la formación de causa" (2º); "conocer de todas las causas de separación y suspensión de los consejeros de estado y de los magistrados de las audiencias" (3º); "conocer de las causas criminales de los secretarios de estado y del despacho, de los consejeros de estado y de los magistrados de las audiencias, perteneciendo al Jefe Político más autorizado la instrucción del proceso para remitirlo a este Tribunal" (4ª); "conocer de todas las causas criminales que se promovieren contra los individuos de este Supremo Tribunal" (5º);[6] "conocer de la residencia de todo empleado público que esté sujeto a ella por disposición de las leyes" (6º); "conocer de todos los asuntos contenciosos pertenecientes al Real Patronato" (7º); "conocer de los recursos de fuerza de todos los tribunales eclesiásticos superiores de la Corte" (8º); "conocer de los recursos de nulidad, que se interpongan contra las

[6] Se indica que "si llegare el caso en que sea necesario hacer efectiva la responsabilidad de este Supremo Tribunal, las Cortes, previa la formalidad establecida en el artículo 228, procederán a nombrar para este fin un Tribunal compuesto de nueve jueces, que serán elegidos por suerte de un número doble".

sentencias dadas en última instancia para el preciso efecto de reponer el proceso, devolviéndolo, y hacer efectiva la responsabilidad de que trata el artículo 254 (9º);[7] "oír las dudas de los demás tribunales sobre la inteligencia de alguna ley, y consultar sobre ellas al Rey con los fundamentos que hubiere, para que promueva la conveniente declaración en las Cortes" (10º), y "examinar las listas de las causas civiles y criminales, que deben remitirle las audiencias, para promover la pronta administración de justicia, pasar copia de ellas para el mismo efecto al Gobierno, y disponer su publicación por medio de la imprenta" (11º).

En el Título VI "Del Gobierno Interior de las Provincias y de los Pueblos", se indica que "para el gobierno interior de los pueblos habrá ayuntamientos compuestos de Alcalde o alcaldes, los regidores y el Procurador Síndico, y presididos por el Jefe Político donde lo hubiere, y en su defecto, por el Alcalde o el primer nombrado entre éstos, si hubiere dos" (art. 309); que "se pondrá Ayuntamiento en los pueblos que no le tengan y en que convenga le haya, no pudiendo dejar de haberle en los que por sí o con su Comarca lleguen a mil almas, y también se les señalará término correspondiente" (art. 310); que "los alcaldes, regidores y procuradores síndicos se nombrarán por elección en los pueblos, cesando los regidores y demás que sirvan oficios perpetuos en los ayuntamientos, cualquiera que sea su título y denominación" (art. 312); que "todos los años en el mes de diciembre se reunirán los ciudadanos de cada pueblo, para elegir a pluralidad de votos, con proporción a su vecindario, determinado número de electores, que residan en el mismo pueblo y estén en el ejercicio de los derechos de ciudadano" (art. 313); que "los alcaldes se mudarán todos los años, los regidores por mitad cada año, y lo mismo los procuradores síndicos donde haya dos: si hubiere solo uno se mudará todos los años" (art. 315), y que "habrá un Secretario en todo Ayuntamiento, elegido por éste a pluralidad absoluta de votos, y dotado de los fondos del común" (art. 320).

En el artículo 321 se indica que estará a cargo de los ayuntamientos: "la Policía de Salubridad y Comodidad" (1º); "auxiliar al Alcalde en todo lo que pertenezca a la seguridad de las personas y bienes de los vecinos, y a la conservación del orden público" (2º); "la administración e inversión de los caudales de propios y arbitrios conforme a las leyes y reglamentos, con el cargo de nombrar depositario bajo responsabilidad de los que le nombran" (3º); "hacer el repartimiento y recaudación de las contribuciones y remitirlas a la Tesorería respectiva" (4º); "cuidar de todas las

[7] Se indica que "por lo relativo a Ultramar, de estos recursos se conocerá en las audiencias, en la forma que se dirá en su lugar".

escuelas de primeras letras, y de los demás establecimientos que se paguen de los fondos del común" (5º); "cuidar de los hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos de beneficencia, bajo las reglas que se prescriban" (6º); "cuidar de la construcción y reparación de los caminos, calzadas, puentes y cárceles, de los montes y plantíos del común, y de todas las obras públicas de necesidad, utilidad y ornato" (7º); "formar las ordenanzas municipales del pueblo, y presentarlas a las Cortes para su aprobación por medio de la Diputación Provincial, que las acompañará con su informe" (8º), y "promover la agricultura, la industria y el comercio según la localidad y circunstancias de los pueblos, y cuanto les sea útil y beneficioso" (9º).

Se indica que el "gobierno político de las provincias residirá en el Jefe Superior, nombrado por el Rey en cada una de ellas" (art. 324); que en "cada Provincia habrá una Diputación llamada Provincial, para promover su prosperidad, presidida por el Jefe Superior" (art. 325); que "se compondrá esta Diputación del Presidente, del Intendente y de siete individuos elegidos en la forma que se dirá, sin perjuicio de que las Cortes en lo sucesivo varíen este número como lo crean conveniente, o lo exijan las circunstancias, hecha que sea la nueva división de provincias" (art. 326); que "la Diputación Provincial se renovará cada dos años por mitad, saliendo la primera vez el mayor número, y la segunda el menor, y así sucesivamente" (art. 327); que "la elección de estos individuos se hará por los electores de partido al otro día de haber nombrado a los diputados de la Corte, por el mismo orden con que éstos se nombran" (art. 328), y que "al mismo tiempo y en la misma forma se elegirán tres suplentes para cada Diputación" (art. 329).

Se indica que "para ser individuo de la Diputación Provincial se requerirá ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinte y cinco años, natural o vecino de la Provincia con residencia a lo menos de siete años, y que tenga lo suficiente para mantenerse con decencia: y no podrá serlo ninguno de los empleados de nombramiento del Rey" (art. 330); que "para que una misma persona pueda ser elegida segunda vez, deberá haber pasado a lo menos el tiempo de cuatro años después de haber cesado en sus funciones" (art. 331); que "cuando el Jefe Superior de la Provincia no pudiere presidir la Diputación, la presidirá el Intendente, y en su defecto el Vocal que fuere primer nombrado" (art. 332); que "la Diputación nombrará un Secretario, dotado de los fondos públicos de la Provincia" (art. 333), y que "tendrá la Diputación en cada año a lo más noventa días de sesiones, distribuidas en las épocas que más convenga"(art. 334).

Se precisa que “si alguna Diputación abusare de sus facultades, podrá el Rey suspender a los vocales que la componen, dando parte a las Cortes de esta disposición y de los motivos de ella para la determinación que corresponda: durante la suspensión entrarán en funciones los suplentes” (art. 336), y que “todos los individuos de los ayuntamientos y de las diputaciones de provincia, al entrar en el ejercicio de sus funciones, prestarán juramento, aquéllos en manos del Jefe Político, donde le hubiere, o en su defecto, del Alcalde que fuere primer nombrado, y éstos en las del Jefe Superior de la Provincia, de guardar la Constitución Política de la Monarquía Española, observar las leyes, ser fieles al Rey, y cumplir religiosamente las obligaciones de su cargo” (art. 337).

En el artículo 335 se indica que las diputaciones provinciales tenían como facultades las de: “intervenir y aprobar el repartimiento hecho a los pueblos de las contribuciones que hubieren cabido a la Provincia” (1º); “velar sobre la buena inversión de los fondos públicos de los pueblos y examinar sus cuentas, para que con su visto bueno recaiga la aprobación superior, cuidando de que en todo se observen las leyes y reglamentos” (2º); “cuidar de que se establezcan ayuntamientos donde corresponda los haya” (3º); proponer al Gobierno los arbitrios que crean más convenientes para la ejecución de obras nuevas de utilidad común de la Provincia o la reparación de las antiguas, “a fin de obtener el correspondiente permiso de las Cortes” (4º); “promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados, y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos” (5º); “dar parte al Gobierno de los abusos que noten en la administración de las rentas públicas” (6º); “formar el censo y la estadística de las provincias” (7º); “cuidar de que los establecimientos piadosos y de beneficencia llenen su respectivo objeto, proponiendo al Gobierno las reglas que estimen conducentes para la reforma de los abusos que observaren” (8º); “dar parte a las Cortes de las infracciones de la Constitución que se noten en la Provincia” (9º), y velar “sobre la economía, orden y progresos de las misiones para la conversión de los indios infieles, cuyos encargados les darán razón de sus operaciones en este ramo, para que se eviten los abusos: todo lo que las diputaciones pondrán en noticia del Gobierno” (10º).

En el Título VII “De las Contribuciones”, se indica que “las Cortes establecerán o confirmarán anualmente las contribuciones, sean directas o indirectas, generales, provinciales o municipales, subsistiendo las antiguas, hasta que se publique su derogación o la imposición de otras” (art. 338); que “las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio

alguno" (art. 339); que "las contribuciones serán proporcionadas a los gastos que se decreten por las Cortes para el servicio público en todos los ramos" (art. 340); que "habrá una Tesorería General para toda la Nación, a la que tocará disponer de todos los productos de cualquiera renta destinada al servicio del Estado" (art. 345); que "habrá en cada Provincia una Tesorería, en la que entrarán todos los caudales que en ella se recauden para el Erario Público" (art. 346);[8] que "para el examen de todas las cuentas de caudales públicos habrá una Contaduría Mayor de Cuentas, que se organizará por una ley especial" (art. 350); que "a cuenta de la Tesorería General, que comprehenderá el rendimiento anual de todas las contribuciones y rentas, y su inversión, luego que reciba la aprobación final de las Cortes, se imprimirá, publicará y circulará a las diputaciones de provincia y a los ayuntamientos" (art. 351), y que "no habrá aduanas sino en los puertos de mar y en las fronteras; bien que esta disposición no tendrá efecto hasta que las Cortes lo determinen" (art. 354).

En el Título VIII "De la Fuerza Militar Nacional", se especifica que "habrá una Fuerza Militar Nacional Permanente, de tierra y de mar, para la defensa exterior del Estado y la conservación del orden interior" (art. 356); que "ningún español podrá excusarse del Servicio Militar, cuando y en la forma que fuere llamado por la Ley" (art. 361); que "habrá en cada Provincia cuerpos de milicias nacionales, compuestos de habitantes de cada una de ellas, con proporción a su población y circunstancias" (art. 362); que "se arreglarán por una ordenanza particular el modo de su formación, su número y especial constitución en todos sus ramos" (art. 363); que "el servicio de estas milicias no será continuo, y sólo tendrá lugar cuando las circunstancias lo requieran" (art. 364), y que "en caso necesario podrá el Rey disponer de esta Fuerza dentro de la respectiva Provincia, pero no podrá emplearla fuera de ella sin otorgamiento de las Cortes" (art. 365).

En el Título IX "De la Instrucción Pública", se indica que "en todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el Catecismo de la Religión Católica, que comprehenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles" (art 366); que "se arreglará y creará el número competente de universidades y de otros establecimientos de instrucción, que se juzguen convenientes para la enseñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes" (art. 367); que "el Plan General de Enseñanza será uniforme en todo el Reino, debiendo explicarse la Constitución

[8] Se indica que "estas tesorerías estarán en correspondencia con la general, a cuya disposición tendrán todos sus fondos".

Política de la Monarquía en todas las universidades y establecimientos literarios, donde se enseñen las Ciencias Eclesiásticas y Políticas" (art. 368), y que "todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes" (art. 371).

En el Título X "De la Observancia de la Constitución y Modo de Proceder para Hacer Variaciones en Ella", se indica que "las Cortes en sus primeras sesiones tomarán en consideración las infracciones de la Constitución, que se les hubieren hecho presentes, para poner el conveniente remedio y hacer efectiva la responsabilidad de los que hubieren contravenido a ella" (art. 372); que "todo español tiene derecho a representar a las Cortes o al Rey para reclamar la observancia de la Constitución" (art. 373); que "toda persona que ejerza cargo público, civil, militar o eclesiástico, prestará juramento, al tomar posesión de su destino, de guardar la Constitución, ser fiel al Rey y desempeñar debidamente su encargo" (art. 374); que "hasta pasados ocho años después de hallarse puesta en práctica la Constitución en todas sus partes, no se podrá proponer alteración, adición ni reforma en ninguno de sus artículos" (art. 375), y que "para hacer cualquier alteración, adición o reforma en la Constitución será necesario que la Diputación que haya de decretarla definitivamente, venga autorizada con poderes especiales para este objeto" (art. 376).

Cabe señalar, que en "el nuevo sistema de gobierno que implantaba la Constitución de 1812 no se incluía un Virrey. El Jefe Político era el único funcionario ejecutivo de toda la Provincia o Intendencia en que la Diputación Provincial tenía jurisdicción y era directamente responsable ante el Ministro de Asuntos de Ultramar, que residía en España. El Jefe Político de la Ciudad de México, que en efecto remplazó al Virrey, carecía de jurisdicción sobre los jefes políticos de Guadalajara, Mérida, San Luis Potosí, Monterrey y Durango. Por otra parte, cada Provincia gozaba de una independencia completa con respecto a los demás" (Benson, 1994: 30).

Con la expedición de la Constitución de Cádiz "se autorizaron para México seis diputaciones provinciales: dos en la Nueva España –una en la Capital (de las provincias o intendencias de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala) y otra en San Luis Potosí (de las Provincias Internas o intendencias de San Luis Potosí y Guanajuato)--; una en Guadalajara, de la Nueva Galicia y Zacatecas; una en Mérida, de las provincias de Yucatán, Tabasco y Campeche; una en Monterrey, de las Provincias Internas de Oriente (Nuevo León,

Coahuila, Nuevo Santander y Texas); una en Durango, de las Provincias Internas de Occidente (Chihuahua, Sonora, Sinaloa y las Californias)" (Benson, 1994: 27).

El 18 de mayo las Cortes determinaron "que los empleos no sean servidos por sustitutos" (Dublan I, 1876. Decreto del 18 de mayo de 1812: 380).

El 23 de mayo las Cortes establecieron que "cualquier pueblo que no tenga Ayuntamiento, y cuya población no llegue a mil almas, y que por sus particulares circunstancias de agricultura, industria o población considere que debe ser Ayuntamiento, lo hará presente a la Diputación de la Provincia, para que en virtud de su informe se prevea lo conveniente por el Gobierno", y que "los pueblos que no se hallen con estas circunstancias, seguirán agregados a los ayuntamientos a los que han estado hasta aquí, mientras que la mejora de su estado político no exija otra providencia; agregándose al más inmediato en su Provincia los que se formaren nuevamente, y los despoblados con jurisdicción" (Dublan I 1876. Decreto del 23 de mayo de 1812: 380).

Las Cortes expidieron la "Instrucción conforme a la cual deberían celebrarse en las provincias de Ultramar las elecciones de diputados de Cortes para las ordinarias del año próximo de 1813", en la cual se mandaban "formar juntas preparatorias en: 1) México, Capital de la Nueva España; 2) Guadalajara, Capital de la Nueva Galicia; 3) Mérida, Capital de Yucatán; 4) Guatemala, Capital de la Provincia del mismo nombre; 5) Monterrey, Capital de Nuevo León –una de las cuatro Provincias Internas de Oriente--, y 6) Durango, Capital de Nueva Vizcaya –una de las Provincias Internas de Occidente--. Cada Junta se compondría del Jefe Político, el Arzobispo, Obispo o quien hiciese sus veces, el Intendente si lo hubiere, el Alcalde más antiguo, el Regidor Decano, el Síndico Procurador y dos hombres de buena reputación, vecinos de la misma Provincia, nombrados por las personas antedichas" (Benson, 1994: 33).

La reunión de la Junta Preparatoria se efectuaría sin demora y sin admitir excusa ni dilación alguna por parte de las personas que habrían de componerla. Teniendo en cuenta los censos de poblaciones más auténticos entre los últimamente levantados o, a falta de ellos, haciendo el cómputo de la población por los medios más expeditos y exactos que fuese posible y con arreglo a la base de un Diputado por cada setenta mil habitantes, la Junta designaría a los diputados a las Cortes, propietarios y suplentes, que correspondieran a su jurisdicción. Con el objeto de facilitar las elecciones, cada Junta Preparatoria haría, para este solo efecto, la división más cómoda del territorio de

su jurisdicción en provincias, y en cada una de ellas designaría la Ciudad donde se habrían de reunir los electores de los partidos para elegir a los diputados a las Cortes.

Cada Junta Preparatoria señalaría también a cada una de sus respectivas provincias el número de diputados del cupo principal que proporcionalmente correspondiera a su población. Si los partidos de una Provincia no hubiesen sido demarcados con anterioridad, la Junta Preparatoria cuidaría de señalarlos, pero, si ya hubiese hecho, se atendería a la división existente, fijando a cada Partido, en uno u otros casos, el número de electores que le correspondieran según la Constitución. Además, las juntas preparatorias resolverían breve y sumariamente todas las dudas que se suscitasen antes de comenzar las elecciones, y lo que resolviesen se ejecutaría sin recurso; pero las juntas no deberían interferir en manera alguna una vez que las elecciones se iniciaran en las parroquias, partidos o en la Provincia en general.

Al día siguiente de la designación de los diputados a las Cortes, éstos deberían ser nombrados como electos a la Diputación Provincial. En Ultramar, las diputaciones provinciales deberían establecerse en cada una de las provincias expresamente designadas en el artículo 10 de la Constitución,[9] más una adicional en la Nueva España, la de San Luis Potosí, a la que se agregaba la de Guanajuato. Hasta que se hiciese en Ultramar la nueva división de las provincias, no se establecerían diputaciones provinciales en todas las que eligieran diputados a las Cortes" (Benson, 1994: 33).

El 21 de septiembre se emprendieron las primeras medidas de secularización en los gobiernos locales, al determinar las Cortes "que los eclesiásticos seculares que se hallen en el ejercicio de los derechos de ciudadano, tengan voz activa y puedan dar su voto en las elecciones de los ayuntamientos constitucionales; pero no podrán ser nombrados ni elegidos para ningún oficio del Ayuntamiento ni Consejo" (Dublan I, 1876. Decreto del 21 de septiembre de 1812: 383).

En 9 de octubre las Cortes dispusieron que hasta en tanto se hiciera la división del territorio español, "habrá una Audiencia[10] en cada una de las provincias de la

[9] Se indicaba que el territorio español comprendía "en la América Septentrional, Nueva España con la Nueva-Galicia y Península de Yucatán, Guatemala, Provincias Internas de Oriente, Provincias Internas de Occidente, Isla de Cuba con las dos Floridas, la parte española de la Isla de Santo Domingo, y la Isla de Puerto Rico, con las demás adyacentes á éstas y al continente en uno y otro mar".

[10] La Real Academia Española define a la Audiencia como un "Tribunal de justicia colegiado y que entiende en los pleitos o en las causas de determinado territorio".

Monarquía que las han tenido hasta esta época", siendo una de ellas la de la Provincia de México, la cual tendría "un Regente, doce ministros y dos fiscales; y constarán de dos salas civiles y una Sala para lo Criminal, compuesta de cuatro ministros cada una" (Dublan I, 1876. Decreto del 9 de octubre de 1812: 384).

El 10 de noviembre las Cortes ratificaron "que ni la Constitución concede voto en los ayuntamientos a los jefes políticos, ni pueden dejarlo de tenerlo, según ella, los alcaldes y los procuradores síndicos" (Dublan I, 1876. Decreto del 10 de noviembre de 1812: 397).

El 11 de noviembre "Francisco Xavier Venegas, en su calidad de Jefe Político de la Nueva España, convocó a la Junta Electoral, la cual redactó las instrucciones necesarias para las elecciones de la Nueva España y las firmó el 14 de noviembre". En dichas instrucciones "los electores de las provincias recibieron la orden de reunirse en la Capital de cada una de ellas" (Benson, 1994: 42).

"En cuanto a la Diputación Provincial de la Ciudad de México con jurisdicción sobre las otras provincias, a la que se llamaría en adelante Diputación Provincial de la Nueva España, la Junta resolvió que, en vista de que las provincias eran siete (México, Puebla, Valladolid, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz y San Luis Potosí), incluyendo las adicionales de Tlaxcala y Querétaro, cada una elegiría un Diputado, mientras que México, Puebla y Oaxaca elegirían, además, un Suplente cada una.

La Constitución de 1812 prescribió detalladamente el método que se aplicaría para realizar esas elecciones: serían indirectas, por lo que los ciudadanos de las parroquias debían escoger electores parroquiales que, juntándose con los otros electores parroquiales, debían de elegir a su vez electores de partidos; éstos, en fin, debían reunirse en la Capital de cada Provincia para nombrar a los diputados a Cortes y a la Diputación Provincial.

Las elecciones parroquiales en la Ciudad de México tuvieron lugar el 29 de noviembre de 1812. En su Bando Oficial del 27 de noviembre de 1812, la Junta Preparatoria fijó el 1º de febrero de 1813 como fecha de reunión en esa Ciudad a los electores de partido de la Provincia de México para elegir diputados a las Cortes.

Según el artículo 328 de la Constitución, el Diputado Provincial por la Provincia de México debía ser electo el 2 de febrero de 1813; pero no fue así, porque

inmediatamente hubo objeciones contra las elecciones parroquiales realizadas el 29 de noviembre anterior. Por consiguiente, no se dio ningún paso para reunir a los electores parroquiales mientras Venegas estuvo a la cabeza del mando en la Nueva España" (Benson, 1994: 43).

El 22 de febrero de **1813** las Cortes al abolir la Inquisición dejaron expeditas las facultades de los obispos y sus vicarios para conocer las causas de fe, con arreglo a los sagrados cánones y derecho común, y a la de los jueces seculares para declarar e imponer a los herejes las penas que señalen las leyes. Se estableció que "todo español tiene acción para acusar del delito de herejía ante el Tribunal Eclesiástico", y que "el Rey tomará todas las medidas convenientes para que no se introduzcan en el Reino por las aduanas marítimas y fronterizas libros ni escritos prohibidos, o que sean contrarios a la Religión" (Dublan I, 1876. Decreto del 22 de febrero de 1813: 399).

Se declararon nacionales los bienes que fueron de la Inquisición, por lo que el Gobierno determinó que "sin crear para ello nuevas oficinas, encargará a los intendentes de las provincias donde haya habido establecido Tribunal de la Inquisición, y en las que no hubiere Intendente al empleado principal de la Hacienda Pública, que ocupen y tomen posesión, a nombre de la Nación, de los bienes expresados y demás efectos". Cabe señalar, que el Jefe Político de la Provincia también era conocido como Intendente, que la ocupación de los bienes de la Inquisición debía efectuarse con la intervención de las diputaciones provinciales mediante inventario, que todos los empleados y dependientes tendrían "los sueldos y asignaciones que antes de la extinción hubieren gozado", y que quedaba "el cuidado de la administración a las mismas personas encargadas de ella por el Tribunal de la Inquisición, y sin alterar en nada los precios de los arrendamientos de tierras y edificios que estuvieren hechos, ni lanzar de ellos a los arrendatarios o inquilinos, siempre que satisfagan el precio estipulado, y cumplan las condiciones de sus contratos" (Dublan I, 1876. Decreto del 22 de febrero de 1813: 402).

El 4 de marzo el Conde de Calderón Félix María Calleja del Rey asumió el cargo de Jefe Superior Político de la Provincia de la Nueva España,[11] "cuando los insurgentes tenían todavía la fuerza suficiente como para dominar virtualmente toda la Provincia de Oaxaca, hostilizar de manera parcial la mayoría de las provincias centrales y hasta infiltrarse a menudo en los suburbios de la misma Ciudad de México. Por eso Calleja,

[11] Biografía de Félix María Calleja del Rey (Wikipedia, 2013. Félix María Calleja del Rey).

en un esfuerzo por apaciguar a los descontentos y a las facciones irresolutas de los realistas, resolvió restablecer la vigencia de la Constitución de 1812 y dar efectividad a los decretos de las Cortes" (Benson, 1994: 43).

El 24 de marzo las Cortes expidieron las "Reglas para que se hiciera efectiva la responsabilidad de los servidores públicos", en las que se estableció que "son prevaricadores los jueces que a sabiendas juzgan contra derecho por afecto o por desafecto hacia alguno de los litigantes u otras personas", y que "el Magistrado o Juez de cualquiera clase que incurra en este delito, será privado de su empleo, e inhabilitado perpetuamente para obtener oficio ni cargo alguno, y pagará a la parte agraviada todas las costas y perjuicios si cometiese la prevaricación en alguna causa criminal, sufrirá además, la misma pena que injustamente hizo sufrir al procesado". Se indicaba en cuanto a los demás "empleados públicos de cualquier clase, que como tales y a sabiendas abusen de su oficio para perjudicar a la causa pública o a los particulares, son también prevaricadores, y se les castigará con la destitución de su empleo, inhabilitación perpetua para obtener cargo alguno, y resarcimiento de todos los perjuicios, quedando, además, sujetos a cualquiera otra pena mayor que les esté impuesta por las leyes especiales de su ramo" (Dublan I, 1876. Decreto del 24 de marzo de 1813: 403).

El 20 de abril la Junta Preparatoria Electoral "resolvió ordenar a sus respectivos intendentes de las provincias de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, México y San Luis Potosí, así como a los gobernadores de Tlaxcala y Querétaro, que prosiguieran y terminaran sin demora las elecciones de diputados a Cortes y a la Diputación Provincial. Los diputados a Cortes deberían dirigirse inmediatamente a Veracruz, donde se embarcarían para España, mientras que los representantes de la Diputación Provincial de la Nueva España deberían presentarse en la Ciudad de México en un plazo de dos meses.

Como todavía no llegaba ninguna respuesta sobre las elecciones de la Provincia de Oaxaca, que estaba completamente en poder de los insurgentes, Calleja citó el 23 de abril de 1813 a otra reunión de la Junta Preparatoria en la que se decidió que, a falta del Diputado de Oaxaca, la Provincia de México elegiría dos representantes a la Diputación debido a su población que era más numerosa, mientras que además de un Diputado Propietario, Michoacán elegiría a un Suplente. De este modo, se aseguraría que la Diputación tuviera un número completo de representantes, esto es, siete diputados propietarios y tres suplentes" (Benson, 1994: 44).

El 23 de junio las Cortes expidieron la “Instrucción para el Gobierno Económico Político de las Provincias”, la cual constó de capítulos referentes a: las obligaciones de los ayuntamientos, a las obligaciones y cargos de las diputaciones provinciales y a los jefes políticos (Dublan I, 1876. Decreto del 23 de junio de 1813: 413).

En el capítulo referente a las obligaciones y cargos de las diputaciones provinciales, se indica que “siendo el cargo de las diputaciones provinciales cuidar del establecimiento de ayuntamientos en los pueblos donde no le haya… deberán tomar razón exacta del vecindario de cada pueblo donde haya de establecerse Ayuntamiento” (art. I); que “luego que se comunique a cada Provincia el repartimiento hecho por las Cortes, de las contribuciones que deba pagar cada una, cuidará el Intendente, con su Contaduría, de hacer el justo repartimiento del cupo que corresponda a cada pueblo; le pasará a la Diputación Permanente para que ésta la intervenga y apruebe, si le halla equitativo; y el intendente la circulará a los pueblos y cuidará de su ejecución” (art. II); que “toda queja o reclamación que tengan los pueblos sobre agravios en el repartimiento del cupo de contribuciones que les haya cabido, se dirigirá por medio del Jefe Político a la misma Diputación Provincial” (art. III); que “tendrá la Diputación Provincial un Secretario nombrado por ella”, y “removido con anuencia del Gobierno” (art. IV); que la Diputación Provincial “hará formar por la misma Contaduría un finiquito general comprensivo en las cuentas de todos los pueblos de la Provincia, y le remitirá cada año al Gobierno para su conocimiento y efectos que puedan convenir” (art. V); que podrá la Diputación “conceder al Ayuntamiento la facultad de disponer de la cantidad que solicite del fondo de propios y arbitrios, con tal que no exceda del duplo de las que le esté señalada para gastos extraordinarios y alterables; pero si excediere, se solicitará por medio del Jefe Político la aprobación del Gobierno, acompañando a la solicitud el informe de la Diputación” (art. VI); que “las cuentas de pósitos, mientras éstos subsistan, serán examinadas y glosadas por las contadurías de los propios y arbitrios” (art. VII); que “cuando ocurriere que los arbitrios establecidos para la construcción de obras nuevas o reparación de las antiguas de utilidad común de la Provincia, no alcancen a cubrir los gastos, la Diputación Provincial, para proveer de fondos, procederá con el método y en los términos que previene la Constitución” (art. VIII); que “estará a cargo de la Diputación Provincial velar sobre la conservación de las obras públicas y establecimientos de beneficencia de común utilidad de la Provincia y promover, haciéndolo presente al Gobierno, la construcción de nuevas obras, la formación de cualquier establecimiento beneficioso de general utilidad, y muy señaladamente la navegación interior de la misma Provincia, donde hubiere proporción” (art. IX); que “el fondo que usará la Diputación Provincial para la

reparación de obras públicas de la Provincia, o construcción de las nuevas y demás gastos de ella, será el sobrante de propios y arbitrios de la misma, después de satisfechas las necesidades de los pueblos" (art. X); que "la Diputación Provincial auxiliará al Jefe Político cuando ocurriere en algún pueblo de la Provincia cualquier enfermedad contagiosa o epidémica" (art. XI); que "velará la Diputación sobre el cumplimiento de lo que está prevenido a los ayuntamientos acerca del establecimiento de escuelas de primeras letras e instrucción de la juventud" (art. XXII); que "cada Diputación Provincial cuidará de formar el censo y la estadística de su Provincia con la mayor exactitud" (art. XIII); que "para fomentar la agricultura, la industria, las artes, y el comercio, la Diputación Provincial presentará al Gobierno los planes y proyectos que le parezcan oportunos" (art. XIV); que la Diputación Provincial "deberá recurrir a las Cortes o al Gobierno por la reparación de los abusos de que tenga noticia, presentándoles datos suficientes y bien calificados, sin que con pretexto de estos encargos pueda entrometerse en las funciones de los empleos públicos" (art. XV); que "cuidarán las diputaciones de Ultramar de que los habitantes dispersos en los valles y montes, en los parajes en que esto ocurra, se reduzcan a vivir en poblado" (art. XVI); que las diputaciones provinciales "dirigirán todas sus comunicaciones y escritos por conducto del Jefe Político su Presidente" (art. XVII), y que "las diputaciones provinciales tendrán el tratamiento de excelencia" (art. XVIII).

El 4 de julio de acuerdo con lo establecido en la instrucción del 9 de abril se efectuaron las elecciones parroquiales. "Los electores parroquiales de la Ciudad de México designados en esa fecha se reunieron el 11 de julio y nombraron electores de partido; estos últimos, en unión de los demás electores de partido de la Provincia de México, eligieron diputados a las Cortes el 18 de julio y provinciales al día siguiente. La Provincia de México eligió como diputados propietarios al Doctor José Miguel Guridi y Alcocer y a José María Fagoaga y, como Suplente, a José Antonio del Christi y Conde" (Benson, 1994: 45).

"Para el 1º de agosto, las provincias de Puebla, Querétaro, México y Tlaxcala habían elegido a sus representantes a la Diputación Provincial de la Nueva España,[12] y reconocido la imposibilidad de efectuar la elección en Oaxaca. Esta última Provincia y la de Michoacán, a la sazón casi totalmente dominada también por los insurgentes, se vieron imposibilitadas a realizar las elecciones; por otra parte, no se ha encontrado

[12] En Puebla se había nombrado como Diputado a José Mariano Marín, en Querétaro a Pedro Acevedo y Calderón, en Tlaxcala a Bernardo González Pérez de Angulo.

ninguna prueba documental de que las elecciones se hayan efectuado en Veracruz en el año de 1813" (Benson, 1994: 45).

El 11 de agosto las Cortes dieron a conocer varias reglas para el gobierno de las diputaciones provinciales y ayuntamientos de los pueblos, en las que se indicaba que "las personas que por reglamento substituyeran a los intendentes de sus destinos, harán las veces de éstos en las diputaciones provinciales; pero no podrán presidirlas", y que "los que ejerzan cargos concejiles pueden ser elegidos diputados a las Cortes o individuos de la Diputación Provincial; pero en el hecho mismo de tomar posesión de sus nuevos cargos quedarán vacantes los que antes obtenían, entendiéndose así en la Península y en Ultramar luego que emprendan el viaje a sus destinos" (Dublan I, 1876. Decreto del 11 de agosto de 1813: 424).

"El año de 1813 terminó sin ver la instalación de la Diputación Provincial de la Nueva España, aunque se continuaron las diligencias para ello. La Provincia de Tlaxcala dio aviso el 18 de mayo de **1814** "de que había elegido como su Diputado al Licenciado José Daza y Artazo, Fiscal de la Audiencia de México y miembro anterior del Ayuntamiento de Tlaxcala. El 15 de marzo de 1814, la de Veracruz nombró al Doctor Antonio Manuel Couto. Cumpliendo con la Constitución, el 16 de marzo de 1814, la Provincia de México eligió como nuevos miembros propietarios de la Diputación a José Ángel Gazano y Juan Bautista Lobo, junto con el Licenciado Ignacio García Illueca como Suplente. Así, para fines de mayo de 1814, habían sido nombrados seis de los siete diputados propietarios y dos suplentes: Guridi y Alcocer y Fagoaga por México, Marín por Puebla, Acevedo y Calderón por Querétaro, Daza y Artazo por Tlaxcala y Couto por Veracruz, con Christi y Conde como suplentes por México y Tomás Rodríguez Pontón como Suplente por Puebla.

Entonces surgió la cuestión de si podría integrarse la Diputación Provincial con unos diputados elegidos para los años 1813 a 1814 y otros para el bienio 1815 a 1816. En una reunión de la Junta Preparatoria celebrada el 18 de abril, se resolvió finalmente que, si la Diputación se instalaba antes del 1º de junio de 1814, debería componerse de los miembros ya elegidos, pero que, en todo caso, en dicha fecha, el Cuerpo debería ser renovado con los diputados recién electos.

La Diputación no quedó constituida el 1º de junio ni aún el 7 de julio, día en que Félix María Calleja citó para otra reunión de la Junta Preparatoria, a fin de resolver si la instalación podría tener lugar sin la representación de la Intendencia de Michoacán. Se

resolvió que la Diputación debía ser instalada de inmediato con los cinco diputados entonces presentes en la Ciudad de México –-dos propietarios y un Suplente por México y un Propietario por Querétaro y otro por Tlaxcala— y que debían enviarse comunicaciones a los diputados propietarios y suplentes ausentes, instruyéndolos para que se trasladasen a la Ciudad de México. Una vez que los diputados propietarios hubiesen llegado, los suplentes y el Segundo Diputado por México debían retirarse.

En un Bando fechado el 11 de junio de 1814, Calleja citó a los cinco diputados ya presentes a la Ciudad de México y al Intendente, Ramón Gutiérrez del Mazo, para que comparecieren en el Palacio de Gobierno el 13 de julio, a fin de prestar juramento como miembros de la Diputación Provincial de la Nueva España. También se enviaron instrucciones a los gobernadores e intendentes de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Michoacán, con las que se daba aviso de que la Diputación sería instalada inmediatamente y de que los diputados por aquellas provincias debían ponerse en marcha para la Ciudad de México, a fin de tomar posesión de sus cargos" (Benson, 1994: 47).

Capítulo 2
Diputación Provincial de la Nueva España de 1814

La Diputación Provincial de la Nueva España de 1814 que operó del 13 de julio al 5 de octubre de 1814 se integró con siete vocales propietarios y tres vocales suplentes nombrados por los electores de partido de siete provincias, el Intendente de la Provincia de México, Ramón Gutiérrez del Mazo y el Jefe Político de la Nueva España, Félix María Calleja, quien era su Presidente. Los vocales propietarios eran: José Ángel Gazano y Juan Bautista por México, Francisco Pablo Vázquez por Puebla, Pedro Acevedo Calderón por Querétaro, José Daza y Artazo por Tlaxcala y Antonio Manuel Couto y Ibea por Veracruz; y como vocales suplentes: Ignacio García Illueca por México y Juan Nepomuceno de Otero por Puebla (Benson, 1994: 232).

El 13 de julio de 1814 se integró la Diputación Permanente de la Nueva España integró con siete vocales propietarios y tres vocales suplentes nombrados por los electores de partido de siete provincias, el Intendente de la Provincia de México, Ramón Gutiérrez del Mazo y el Jefe Político de la Nueva España, Félix María Calleja, quien era su Presidente (Herrejón, 2007: 11). Los vocales propietarios eran: José Ángel Gazano y Juan Bautista por México, Francisco Pablo Vázquez por Puebla, Pedro Acevedo Calderón por Querétaro, José Daza y Artazo por Tlaxcala y Antonio Manuel Couto y Ibea por Veracruz; sin tenerse pruebas de la elección de los vocales de Michoacán y Oaxaca y sí de los vocales suplentes: Ignacio García Illueca por México y Juan Nepomuceno de Otero por Puebla, quienes cubrieron las vacantes de los vocales propietarios (Benson, 1994: 232).

La Diputación Provincial al constituirse tenía jurisdicción sobre “las provincias de México, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Querétaro, sin Guanajuato, que correspondió a San Luis Potosí” (Herrejón, 2007: 11).

El 18 de julio “después de anunciar que la Diputación Provincial de la Nueva España se reuniría en primera sesión aquel día y de dar los nombres de los miembros, el Diario de México continuaba: el establecimiento de la Diputación Provincial es uno de los grandes bienes que la augusta Constitución Española ha dictado en favor de los pueblos, que por medio de sus representantes la han sancionado de conformidad con la Ley Suprema” (Benson 1994: 48).

“En su primera reunión, celebrada el 18 de julio de 1814 (en el Palacio de Gobierno), la Diputación Provincial de la Nueva España nombró como su Secretario a José María Martínez del Campo, pero no ha podido comprobarse si la Diputación ejecutó alguna otra de sus prerrogativas, porque ni en la Ciudad de México ni en la Ciudad de Toluca se han encontrado actas de las sesiones que la Diputación Provincial de la Nueva España pudo haber efectuado durante este periodo. Es probable que nunca hubiese llevado a cabo otra sesión, porque antes de que transcurriera un mes, el 11 de agosto, se recibió en México el Real Decreto que derogaba la Constitución de 1812 y todas las actas de las Cortes desde 1810 hasta 1814.

Es posible que la Diputación no haya sido disuelta de inmediato, ya que, el 18 de agosto, Félix María Calleja expidió un Bando en el que aseguraba que, para no turbar la administración política y judicial del Reino, no se haría cambio gubernativo alguno mientras no se recibieran nuevas instrucciones del Rey. Si no fue disuelto el recién constituido Cuerpo Provincial, debió gozar de una existencia pasiva hasta el 5 de octubre de 1814, cuando el Diario de México publicó un Decreto Real que mandaba que las diputaciones provinciales de América debían cesar en sus funciones y que los gobernadores de las respectivas jurisdicciones se hiciesen cargo de sus archivos” (Benson, 1984: 49).

La Diputación Provincial de la Nueva España de 1814 que operó del 13 de julio al 5 de octubre de 1814 se integró con siete vocales propietarios y siete vocales suplentes nombrados por electores de partido de provincias, el Jefe Político de la Nueva España, el Intendente de la Provincia de México y el Secretario de la Diputación. No expidió decretos (Benson y Herejón).

Capítulo 3
Suspensión del Orden Constitucional (1814-1820)

El 20 de enero de **1815** el Rey de España al detectar que muchos jefes y empleados abandonaban la ocupación de sus trabajos para dedicarse a promover el curso de pleitos, instancias, recursos y otras solicitudes determinó que “en lo sucesivo ninguno de los citados empleados, de cualquier clase y condición que sean, se sustraigan de modo alguno de las peculiares a sus destinos; que no tomen a su cuidado las indicadas solicitudes bajo ningún pretexto respecto a deber ocuparse solo de llenar su principal instituto, y a que dichos encargos deben desempeñarse por los procuradores de mis tribunales y personas autorizadas al intento; y en el caso de que alguno contraviniere a ésta mi soberana resolución, por el mismo hecho lo privó de su destino y me reservó imponerle las demás penas convenientes a su desobediencia” (Dublan I, 1876. Decreto del 20 de enero de 1815: 457).

El 16 de junio de **1816** se expidió la Real Orden, por la que se dispuso que “no se allanen las oficinas de cuentas y razón, debiéndose dar entera fe y crédito a las certificaciones que dieren los respectivos jefes de ellas, a no ser que la premura de los hechos no permita se manejen estos encargos como corresponde y está mandado” (Dublan I, 1876. Orden del 16 de junio de 1816: 483).

El 20 de septiembre el Conde del Venadito Juan Ruiz de Apodaca y Eliza asumió el cargo de Virrey y Jefe Superior Político de la Nueva España, el cual ofreció el indulto a los insurrectos. Cabe señalar, que con esta medida, “millares de insurgentes aceptaron el perdón, y tan sólo Vicente Guerrero en el sur y Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo en Veracruz perseveraron en su rebeldía contra la Corona” (Wikipedia, 2011. Juan Ruiz de Apodaca y Eliza).

El 17 de enero de **1817** Ramón Gutiérrez del Mazo, en su carácter de Intendente de la Capital y Provincia de México y Superintendente Juez Conservador de los Propios y Rentas, expidió los certificados de “la elección de Gobernador, alcaldes y demás oficiales de la República” de los pueblos, que en este caso se refería a San Miguel Xonacapa del Partido de Ixmiquilpan. En dichos certificados se instruía a los electos a que “cuidaran que los demás naturales sean tratados y asistan a la doctrina cristiana y divinos oficios, evitando las embriagueces y demás pecados públicos, castigando a los trasgresores” (Certificado del 17 de enero de 1817. BJMLM: vol. 8, exp. 16).

El 13 de abril de **1818** la Corona Española dispuso que los empleados que se substrajeran del conducto de sus jefes en los recursos que instruyan, perderían un mes de sueldo en la primera vez (Dublan I, 1876. Orden del 13 de abril de 1818: 503).

El 28 de abril la Corona prescribió "las reglas que han de observarse para la más expedita presentación, examen y aprobación de la fianza de todos los empleados en rentas reales" (Dublan I, 1876. Orden del 28 de abril de 1818: 503).

El 18 de junio de **1819** la Corona previno que las viudas e hijos de los empleados que tomaran partido contrario al Gobierno y sufrieran la pena de este delito, no se les concedería el derecho de Pensión de Montepío (Dublan I, 1876. Orden del 18 de junio de 1819: 508).

El 17 de diciembre la Corona declaró "que no hay fuero ni privilegio que exima de responder ante los jueces de hacienda, cuando se demanden ante ellos intereses del Erario" (Dublan I, 1876. Orden del 17 de diciembre de 1819: 509).

El 9 de marzo de **1820** el Rey restableció la Constitución de la Monarquía Española (Herrejón, 2007: 12). Con dicho restablecimiento los virreinatos como el de la Nueva España fueron sustituidos por provincias gobernadas por jefes políticos superiores (Wikipedia, 2011. Juan O´Donojú).

El 20 de marzo la Corona declaró que "a los jueces de primera instancia les corresponde tomar conocimiento en los asuntos judiciales de la Hacienda Pública" (Dublan I, 1876. Orden del 20 de marzo de 1820: 511).

El 20 de abril el Ministerio de Gobernación determinó "que mientras se establecen las contadurías principales de provincia, corresponde a los administradores generales de aduanas, de contribución y de estancadas, y a los tesoreros principales, por el orden que van nombrados, el desempeño interino de los negocios gubernativos de las intendencias y subdelegaciones en las capitales, y a los administradores y depositarios respectivamente en los partidos" (Dublan I, 1876. Circular del 20 de abril de 1820: 514).

El 21 de abril la Corona dispuso que "ninguno disfrute dos sueldos por distintos empleos, ni pensiones, ni ayudas de costa sobre el Erario" (Dublan I, 1876. Orden del 21 de abril de 1820: 515).

El 22 de abril la Corona ordenó “que de todas las vacantes de empleos de hacienda se dé aviso en los periódicos de la Provincia” (Dublan I, 1876. Orden del 22 de abril de 1820: 515).

El 10 de mayo la Corona ratificó que “las contribuciones se repartirán entre todos los españoles, con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno” (Dublan I, 1876. Orden del 10 de mayo de 1820: 518).

El 4 de junio el Ministerio de Gobernación determinó “que no cabe juicio de conciliación en la cobranza de las contribuciones o créditos de la Hacienda Pública” (Dublan I, 1876. Circular del 4 de junio de 1820: 519).

Capítulo 4
Diputación Provincial de la Nueva España de 1820

La Diputación Provincial de la Nueva España de 1820 que operó del 20 de julio al 26 de septiembre de 1820 se integró con siete vocales propietarios y tres vocales suplentes nombrados por electores de partido de provincia en 1813 y 1814, el Intendente de la Provincia de México, Ramón Gutiérrez del Mazo y el Jefe Superior de la Nueva España, Juan Ruiz de Apodaca, quien era su Presidente. Los vocales propietarios y suplentes eran: Pedro de Azevedo por Querétaro, Juan Bautista Lobo por México, José María Arteaga por Veracruz, José Julián Daza por Tlaxcala y Huejotzingo, José Ignacio García Illueca por México, Francisco Pablo Vázquez por Puebla y José Gazano por México y José María Couto (Suplente) por México (Herrejón, 2007: 12).

El 20 de julio de 1820 se instaló en el Salón Principal del Palacio de la Ciudad de México la Diputación Provincial de la Nueva España con la asistencia del "Virrey y Capitán General Conde del Venadito (Juan Ruiz de Apodaca), como Jefe Político Superior y su Presidente, y los señores Intendente de la Provincia Sr. Ramón Gutiérrez del Mazo, y vocales: coronel Sr. Pedro de Azevedo Diputado por Querétaro, Sr. Juan Bautista Lobo, Diputado por México, Sr. Don. José María (Arteaga) como Diputado por Veracruz, y Lic. Don José Julián Daza, Diputado por Tlaxcala y Huejotzingo". En esta reunión se dijo "que para completo de las mismas personas que compusieron esta Diputación en el año de 1814 faltaban el Sr. Diputado por México Canónigo Plenipotenciario Don José Ángel Gazano impedido de asistir por sus enfermedades: el Sr. Diputado por Puebla Don Francisco Pablo Vázquez, y el Sr. Suplente por México Sargento Mayor y Lic. Don José María Couto ausentes de esta Capital" (Herrejón, 2007: 12).[13]

El 29 de julio se presentó un antecedente de la participación ciudadana y de los diputados en un órgano de gobierno cuando la Diputación Provincial instaló la Junta Superior de Sanidad con "el Coronel Don Pedro Azebedo, en calidad de individuo Vocal de esta Excelentísima Diputación; por vecinos de esta Corte: el Excelentísimo Señor Conde de la Cortina, Caballero Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, el Señor Conde de las Heras Soto, el Señor Coronel Don Lorenzo Guardamino y Don Lucas Alamán, y por facultativos: el Doctor y Maestro Don José García Jove, Doctor

[13] Esta Diputación Provincial a diferencia de la que se constituyó en 1814 ya no contó con diputados de las provincias de Oaxaca y Michoacán.

Don Manuel Orbe, ambos protomédicos, Doctor Don José Serrano y Don José Salazar" (Herrejón, 2007. Acta del 29 de julio de 1820: 40).

El 11 de septiembre las Cortes previnieron que los jueces de primera instancia sólo podían ejercer la Abogacía en defensa de sus propias causas (Dublan I, 1876. Decreto del 11 de septiembre de 1820: 527).

Las Cortes determinaron que los jefes políticos, alcaldes y ayuntamientos constitucionales debían "velar muy eficazmente, y bajo su responsabilidad, acerca de los que no tienen empleo, oficio o modo de vivir conocido, los cuales están suspensos por la Constitución de los derechos ciudadanos" (Dublan I, 1876. Decreto del 11 de septiembre de 1820: 528).

El 18 de septiembre "una vez terminada la elección de diputados a las Cortes, los electores de partido, reunidos en las capitales de las provincias de México, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Querétaro y Tlaxcala, procedieron a nombrar un Diputado para la Diputación Provincial de la Nueva España. México, Puebla y Oaxaca nombrarían también un Suplente cada una" (Herrejón, 2007: 12).

El 26 de septiembre fue la última de las 21 sesiones que efectuó la Diputación Provincial (Herrejón, 2007. Acta del 26 de septiembre de 1820: 86).

La Diputación Provincial de la Nueva España (1820-1821) que operó del 30 de septiembre de 1820 al 8 de octubre 1821 se integró con siete vocales propietarios y siete vocales suplentes nombrados por electores de partido de provincia, el Jefe Político de la Nueva España y el Intendente de la Provincia de México (Actas).

Capítulo 5
Diputación Provincial de la Nueva España (1820-1821)

La Diputación Provincial de la Nueva España (1820-1821) que operó del 30 de septiembre de 1820 al 8 de octubre 1821 se integró con siete vocales propietarios y tres vocales suplentes nombrados por electores de partido de provincia, el Intendente de la Provincia de México, Ramón Gutiérrez del Mazo y el Jefe Político de la Nueva España, Juan Ruiz de Apodaca, quien era su Presidente. Los vocales propietarios y suplentes eran: Miguel Guridi y Alcocer por Tlaxcala, José María Fagoaga por México, Juan Wenceslao Barquera por Querétaro, Juan Bautista Lobo por Veracruz, Francisco Mimiaga por Oaxaca, Patricio Furlong por Puebla y Juan Pastor Morales por Valladolid de Michoacán. Ignacio García Illueca suplió las ausencias del Vocal Patricio Furlong y no se nombró Vocal para suplir las ausencias de Juan José Pastor Morales (Herrejón, 2007: 12).[14]

El 30 de septiembre de 1820 sesionó por primera vez la Diputación Provincial de la Nueva España con el Jefe Político de la Nueva España, Juan Ruiz de Apodaca; el Intendente de la Provincia de México, Ramón Gutiérrez del Mazo, y los vocales: Miguel Guridi y Alcocer, José María Fagoaga, Juan Wenceslao Barquera, Juan Bautista Lobo, Francisco Mimiaga, Patricio Furlong, Juan Pastor e Ignacio García Illueca.[15]

El 13 de enero de **1821** la Diputación Provincial de la Nueva España tomó nota de la instalación de la Diputación de la Provincia de Puebla con 220 pueblos que hasta esa fecha formaban parte de la Nueva España, con lo que la Diputación de la Nueva España dejó de tener jurisdicción sobre las provincias de: Puebla, Oaxaca, Veracruz y Tlaxcala (Herrejón, 2007. Acta del 13 de enero de 1821: 185).

El 24 de febrero Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala (Secretaría de Gobernación, 2010), en el cual se indicó que la religión será la Católica “sin tolerancia de otra alguna” (art. 1º); que la Nueva España “es independiente de la antigua, y de toda otra potencia aun de nuestro continente” (art. 2º); que “su gobierno será monarquía moderada, con arreglo a la Constitución peculiar y adaptable del Reino”

[14] José Manuel de la Sierra era el Secretario de la Diputación Provincial. Fue suplido por enfermedad por Juan Manuel Riesgo del 30 de enero al 3 de marzo de 1821 y del 16 de junio al 14 de septiembre de ese año (Herrejón, 2009: 13).
[15] Sesionaba “generalmente en el Palacio Nacional, dentro del Salón Principal, martes y sábados, a partir de las 10:30 de la mañana” (Herrejón, 2007: 13).

(art. 3º); que “será su Emperador el Señor D. Fernando 7°… u otro individuo de casa reinante, que estime más conveniente el Congreso” (art. 5º); que “ínterin las Cortes se reúnen habrá una Junta que tendrá por objeto tal reunión, y hacer que se cumpla con el Plan en toda su extensión” (art. 5º); que “dicha Junta, que se denominará Gubernativa, debe componerse de los vocales que habla la carta oficial del Excelentísimo Señor Virrey” (6º); que “este Gobierno será sostenido por el Ejército de las Tres Garantías” (art. 9º); que “las Cortes resolverán la continuación de la Junta o si debe sustituirla una Regencia, ínterin llega la persona que deba coronarse” (art. 10); que “las Cortes establecerán en seguida la Constitución del Imperio Mexicano” (art. 11); que todos los habitantes de la Nueva España, “sin distinción alguna, de europeos, africanos, ni indios, son ciudadanos de esta Monarquía, con opción a todo empleo, según su mérito y virtudes” (art. 12); que “las personas de todo ciudadano y sus propiedades, serán respetadas y protegidas por el Gobierno” (art. 13); que “el clero secular y regular será conservado en todos sus fueros y preminencias” (art. 14); que “la Junta cuidará de que todos los ramos del Estado queden sin alteración alguna, y todos los empleos políticos, eclesiásticos, civiles, y militares, en el estado mismo en que existen en el día” (art. 15); que “los empleos se concederán al verdadero mérito, a virtud de informes de los respectivos jefes y en nombre de la Nación provisionalmente” (art. 20); que “ínterin las Cortes se establecen se procederá en los delitos con total arreglo a la Constitución Española” (art. 21); que en el delito “de conspiración contra la independencia se procederá a prisión sin pasar a otra cosa, hasta que las Cortes decidan la pena al mayor de los delitos después de lesa majestad divina” (art. 22); que “se vigilará sobre los que intenten fomentar la desunión, y se tomarán como conspiradores contra la Independencia” (art. 23), y que “la Junta prescribirá las reglas justas para las elecciones y señalará el tiempo necesario para ellas, y para la apertura del Congreso” (art. 24).

El 26 de febrero la Diputación Provincial de la Nueva España aprobó el Reglamento de su Secretaría (Herrejón, 1876. Acta del 26 de febrero de 1821: 256), en donde precisó que “en el Palacio se destinarán las piezas necesarias para la Secretaría y Archivo”; que esta Oficina “abrirá todos los días de trabajo desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde y de cuatro a seis de ésta” (art. 1º); que le “servirán un Secretario, tres oficiales, tres escribientes, los meritorios que proponga el Secretario ser convenientes, un Archivo, un Portero y un Ordenanza (Guardia) dotados todos suficientemente a juicio de la Diputación” (art. 2º); que “pertenecerán a la Mesa del Oficial Mayor los negocios de la Primera Comisión; a la del Segundo los de la Comisión Segunda, y a la del Tercero los de la Comisión Tercera” (art. 3º); que “los

asuntos que no parezca pertenecer a comisión alguna, o bien toquen a varias, los aplicará el Secretario a la Mesa que estime más oportuna, según lo más o menos recargado de ellas, atendiendo también a los asuntos y a los oficiales que juzgue más convenientes" (art. 5º); que "ningún recado saldrá de la Secretaría si no para las sesiones de la Diputación, y para las comisiones los expedientes y lo que conduzca a su despacho"; que "a todos los señores diputados se franqueará lo que necesiten ver en la misma Secretaría, sin llevarlo a sus casas, si no es con licencia de la Diputación, excepto el expediente que se mandare circular" (art. 6º), y que el Secretario sería nombrado a pluralidad de votos por la Diputación (art. 9º).

En el artículo 7º se indica que "a más de la Constitución, decretos, órdenes, bandos, diarios de cortes, a que debe circunscribirse la Diputación, todo lo cual constará por índice, habrá en la Secretaría los libros siguientes: Para las actas públicas. Para las secretas. Para los votos especiales que se salven. Para índice general o inventario de los expedientes que haya en la Oficina, el cual puede distribuirse por provincias, guardando en cada una el orden alfabético de los lugares, o bien cronológico de los mismos expedientes, si pareciere más acomodado. Para conocimiento de los expedientes, papeles y recados que salgan fuera de la Secretaría. Un cuaderno o diario de entradas en que con expresión de la fecha se asiente inmediatamente razón de cuanto se presenta por orden en que se vaya recibiendo".

Entre las obligaciones que tenía el Secretario estaban las de: "asistir a todas las sesiones, llevando las órdenes y recados concernientes a los asuntos que hayan de tratarse y el cuaderno diario de entradas; asentar en cada sesión los puntos que se le den de las resoluciones, y extender en el mismo día el borrador del acta, para que no se disipen las especies que haya oído, concluyéndola en el día siguiente si su demasiada extensión lo exige así" (art. 10º). También debía "contestar el recibo que pidan los señores jefes políticos de las provincias y ayuntamientos de los pliegos remitidos a la Diputación; extender los informes, órdenes y contestaciones que resultan de los acuerdos, llevándolos a la firma del Excelentísimo Señor Presidente; hacer poner en los expedientes originales la copia del acuerdo que les corresponde, autorizándolo con media firma y expresando al margen o pie los señores que votaron, y hacer poner y remitir las esquelas citatorias para las sesiones extraordinarias y las asistencias a las funciones públicas" (art. 16º).

El 18 de abril la Diputación Provincial previno a todos los ayuntamientos entre otras cosas, que pudiendo haber un abono gravoso y excusable en que muchas instancias a

las propias corporaciones vengan con la firma del letrado y que no deben nombrar apoderados sin conocimiento de la Diputación (Circular del 18 de abril de 1821. BJMLM: vol. 6, exp. 151).

El 28 de abril la Diputación Provincial de la Nueva España "acordó que por oficio circular dirigido a los señores intendentes, para que lo comuniquen a los ayuntamientos, se les prevenga que no siendo contenciosos los asuntos que se resuelven en esta Diputación, los ocursos que se hagan de ella no necesitan firma de letrado", y que "el oficio sea también para que se haga entender a los ayuntamientos que no se les pasará en las cuentas ninguna cantidad por gastos de apoderados, a menos que para su nombramiento haya procedido la aprobación de esta Diputación Provincial, la cual lo concederá con conocimiento y calificación de la causa o fines que se propone el Ayuntamiento para nombrarlo" (Herrejón, 2007. Acta del 28 de abril de 1821: 318).

El 15 de mayo la Diputación Provincial instruyó "a los jefes políticos para que en los pueblos en que sus ayuntamientos no tengan absolutamente fondos, siga la costumbre en cuanto a maestros de escuela a pagarles de los fondos de comunidades" (Circular del 15 de mayo de 1821. BJMLM: vol. 6, exp. 165).

El 26 de junio la Diputación Provincial de la Nueva España le recriminó al Virrey por usurpar sus funciones, al no consultarla para la emisión de disposiciones sobre leva y reclutamiento o remplazo para el Ejército (Herrejón, 2007. Acta del 26 de junio de 1821: 359).

El 6 de julio el Jefe Político de la Nueva España, Juan Ruiz de Apodaca informó que entregaba "libremente el mando militar y político de estos reinos a petición respetuosa que me han hecho los señores oficiales y tropas expedicionarias, por convenir así al mejor servicio de la Nación, en el Señor Mariscal del Campo Don Francisco Novella" (Herrejón, 2007. Acta del 6 de julio de 1821: 365).

El 8 de julio Pedro Francisco Novella Azabal Pérez y Sicardo asumió el cargo de Jefe Superior Político de la Provincia de la Nueva España, después de una serie de desavenencias con la Diputación Provincial (Herrejón, 2007. Acta del 14 de julio de 1821: 371).

El 3 de agosto Juan O ´Donojú al arribar al Puerto de Veracruz asumió el cargo de Jefe Superior Político de la Nueva España (Wikipedia, 2011. Juan O´Donojú).

El 24 de agosto Agustín de Iturbide y Juan O´Donojú suscribieron los Tratados de Córdoba (Secretaría de Gobernación, 2010), en donde se indicó que: "esta América se reconocerá por Nación soberana e independiente, y se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano"; (art. 1); que "el Gobierno del Imperio será monárquico constitucional moderado" (art. 2); que será llamado a reinar en el Imperio Mexicano Fernando Séptimo, "y por renuncia o no admisión de éste, el que las Cortes del Imperio designaren" (art. 3); que "el Emperador fijará su Corte en México que será la Capital del Imperio" (art. 4); que "se nombrarán dos comisionados por el Excelentísimo Señor O'Donojú, los que pasarán a la Corte de España a poner en las reales manos del Señor D. Fernando VII copia de este Tratado" (art. 5); que "se nombrará inmediatamente conforme al espíritu del Plan de Iguala, una Junta compuesta de los primeros hombres del Imperio por sus virtudes, por sus destinos, por sus fortunas, representación y concepto" (art. 6); que "la Junta de que trata el artículo anterior se llamará Junta Provisional Gubernativa" (art. 7); que "será individuo de la Junta Provisional de Gobierno el Teniente General D. Juan O'Donojú, en consideración a la conveniencia de que una persona de su clase tenga una parte activa e inmediata en el Gobierno" (art. 8); que "la Junta Provisional de Gobierno tendrá un Presidente nombrado por ella misma, y cuya elección recaerá en uno de los individuos de su seno, o fuera de él" (art. 9); que "el primer paso de la Junta Provisional de Gobierno, será hacer un manifiesto al público de su instalación, y motivos que la reunieron" (art. 10); que "la Junta Provisional de Gobierno nombrará en seguida de la elección de su Presidente una Regencia compuesta de tres personas de su seno o fuera de él, en quien resida el Poder Ejecutivo y que gobierne en nombre del Monarca, hasta que éste empuñe el cetro del Imperio" (art. 11); que "instalada la Junta Provisional, gobernará interinamente conforme a las leyes vigentes en todo lo que no se oponga al Plan de Iguala, y mientras las Cortes formen la Constitución del Estado" (art. 12); que "la Regencia inmediatamente después de nombrada procederá a la convocación de Cortes conforme al método que determine la Junta Provisional de Gobierno" (art. 13); que "el Poder Ejecutivo reside en la Regencia, el Legislativo en las Cortes; pero como ha de mediar algún tiempo antes que éstas se reúnan, para que ambos no recaigan en una misma autoridad, ejercerá la Junta el Poder Legislativo" (art. 14); que "toda persona que pertenece a una sociedad, alterado el sistema de gobierno, o pasando el país a poder de otro Príncipe, queda en el estado de la libertad natural para trasladarse con su fortuna adonde le convenga" (art. 15); que "no tendrá lugar la

anterior alternativa respecto de los empleados públicos, o militares que notoriamente son desafectos a la independencia mexicana" (art. 16), y que "siendo un obstáculo a la realización de este Tratado la ocupación de la Capital por las tropas de la Península… D. Juan O'Donojú se ofrece a emplear su autoridad, para que dichas tropas verifiquen su salida sin efusión de sangre, y por una capitulación honrosa" (art. 17).

El 31 de agosto la Diputación Provincial de la Nueva España después de la asistencia de dos de sus representantes a una reunión convocada por el Jefe Superior Político con las corporaciones civiles, eclesiásticas y militares, aceptó que el Virrey Juan O´Donojú pactara la independencia del País con Agustín de Iturbide (Herrejón, 2007. Acta 31 de agosto de 1821: 383).

El 14 de septiembre en sesión presidida por el Mariscal del Campo Pedro Francisco Novella Azabal Pérez y Sicardo y el Honorable Ayuntamiento de la Ciudad de México, se "manifestó haber visto por sí y quedado absolutamente satisfecho por los despachos originales, de que el excelentísimo Señor Don Juan O´Donojú es Capitán General y Jefe Político Superior de estas provincias nombrado por el Rey, en cuya virtud expuso que lo reconocía, y a la Excelentísima Diputación Provincial y Excelentísimo Ayuntamiento dijeron que debía ser reconocido y lo reconocieron solemnemente" (Herrejón, 2007. Acta del 14 de septiembre de 1821: 387).

El 17 de septiembre Ramón Gutiérrez del Mazo informó que con fecha de ayer el Rey le había dirigido un decreto, en el que se indicaba "haber nombrado Capitán General de la N.E (Nueva España) con los mismos goces y distinciones de los virreyes y gobernadores al Teniente General D. Juan O´Donojú, y conviniendo al mejor servicio del Estado que se conserve por ahora en aquel país unido el mando político y militar, he tenido a bien nombrar al expresado D. Juan O'Donojú para que desempeñe el cargo de Jefe Político Superior de N.E., con los honores, preminencias y facultades que le corresponden por este empleo con arreglo a la Constitución, decretos e instrucciones de las Cortes y las leyes de Indias, en cuanto no estén en oposición con lo determinado por aquellas, prestando en el Ayuntamiento de la Capital el juramento de guardar y hacer guardar la Constitución, ser fiel a mi real persona y observar las leyes; y respecto del sueldo que se habrá de disfrutar como tal Jefe Político, hasta en tanto que oyéndose a la Diputación Provincial de México, resuelvan las Cortes el que le corresponde, no tendrá por ahora más de aquel que se le asigna por el de Capitán General en los términos que se refiere el título de nombramiento de dicho destino"

(Aviso del 17 de septiembre de 1821. AHEM. Colección Nueva España: vol. 29, exp. 2).

El 25 de septiembre fue la última sesión de la Diputación Provincial de la Nueva España (Herrejón, 2007: 392).

Esta Diputación desde el restablecimiento de la Constitución Española tuvo 102 sesiones en donde se presentaron "alrededor de 1,250 asuntos para la consideración de la Diputación; pocos de ellos repetidos y muchos de ellos desdoblados en diversos aspectos" (Herrejón, 2007: 13).

El 28 de septiembre Agustín de Iturbide nombró una Junta Provisional Gubernativa con 38 individuos.[16]

Agustín de Iturbide, Juan O'Donojú y sus partidarios suscribieron el Acta de la Independencia del Imperio Mexicano (Secretaría de Gobernación, 2010), en la cual se indicó que la naciente Nación se constituiría con arreglo a las bases establecidas en el Plan de Iguala y en los Tratados de Córdoba.

La Junta Provisional Gubernativa eligió a los integrantes de la Regencia que debía fungir como órgano ejecutivo. La Presidencia de la misma se asignó a Agustín de Iturbide como Jefe del Ejército Trigarante; también participaron como miembros Juan O´Donojú, último Jefe Político español;[17] Manuel de la Bárcena, Sacerdote y Filósofo; José Isidro Yáñez, ex Miembro de la Audiencia; y Manuel Velázquez de León, ex Secretario Virreinal (Anna, 1991: 49).

El 8 de octubre Agustín de Iturbide al instituir las capitanías generales de provincia, nombró como gobernadores a: Anastasio Bustamante para las Provincias Internas de Oriente y Occidente; a Pedro Celestino Negrete para Nueva Galicia, Zacatecas y San Luis Potosí; a Manuel de la Sota Riva para México, Querétaro, Valladolid y Guanajuato, y a Vicente Guerrero para Tlapa, Chilapa, Tixtla, Ajuchitlán, Ometepec, Tecpan, Jamiltepec y Teposcolula (Wikipedia, 2011. Agustín de Iturbide).

[16] La Presidencia de la Junta Provisional Gubernativa que fungía como órgano legislativo inicialmente recayó en Agustín de Iturbide y posteriormente en el Obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez (Wikipedia, 2011. Agustín de Iturbide).

[17] Al fallecer el 8 de octubre Juan O´Donojú ocupó su cargo el Obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez, por lo que la Presidencia de la Junta Provisional Gubernativa recayó en José Miguel Guridi y Alcocer (Wikipedia, 2010. Agustín de Iturbide).

La Diputación Provincial de la Nueva España (1820-1821) que operó del 30 de septiembre de 1820 al 8 de octubre 1821 se integró con siete vocales propietarios y siete vocales suplentes nombrados por electores de partido de provincias, el Jefe Político de la Nueva España y el Intendente de la Provincia de México (Actas).

Capítulo 6
Diputación Provincial de México (1821-1822)

La Diputación Provincial de México (1821-1822) que operó del 9 de octubre de 1821 al 23 de febrero de 1822 se integró con siete vocales propietarios y tres vocales suplentes nombrados por electores de partido de provincia y por el Intendente de la Provincia de México, Ramón Gutiérrez del Mazo, que fungía como su Presidente, el cual posteriormente fue sustituido por Manuel de la Sota y Riva.[18] Sus siete vocales propietarios eran: Pedro Acevedo, Pedro Pablo Vélez, José María Fernández de Arteaga, Mariano Primo de Rivera, José Ignacio Espinosa, Ignacio Mimiaga y Juan Wenceslao Barquera (Noriega, 2007. Acta del 9 de octubre de 1821: 59).

El 9 de octubre de 1821 sesionó por primera vez la Diputación Provincial de México, en la cual además de invitarse a los diputados a asistir al entierro de Don Juan de O´Donojú se dio a conocer el nombramiento de los diputados: Pedro Acevedo, Pedro Pablo Vélez, José María Artega, Mariano Primo de Rivera y José Ignacio Espinosa. Continuaron como miembros de dicha Diputación los diputados: Ignacio Mimiaga y Juan Wenceslao Barquera y el Intendente de la Provincia de México, Ramón Gutiérrez del Mazo, que fungía como su Presidente (Noriega, 2007. Acta del 9 de octubre de 1821: 59).

El 25 de octubre en la Ciudad de México, el Intendente y Jefe Político de la Provincia, Ramón Gutiérrez del Mazo, junto con sus oficiales dependientes, José María Quintana, Secretario, Manuel Corona, Oficial Mayor y Alexandro Santa Cruz, reconocieron en un acto formal la independencia del País y juraron obedecer los decretos de la Suprema Junta Gubernativa, y "las ganancias proclamadas en Iguala por el Ejército del Imperio Mexicano, con su Primer Jefe, tratados en la Villa de Córdoba y desempeñar fielmente vuestro servicio a la Nación" (Acta del 25 de octubre de 1821. AHEM. Colección Intendencia de México. Ca24/E/4/1).

El 17 de noviembre la Regencia convocó a elecciones de diputados propietarios y suplentes para conformar el Congreso Constituyente Mexicano, correspondiéndole a la Intendencia de México en función de sus 43 partidos, 28 diputados propietarios y cuatro suplentes. Dicha convocatoria contemplaba la renovación de las diputaciones provinciales y, por lo tanto, reconocía la existencia jurídica de las Provincias Internas

[18] Noriega, 2007. Acta del 9 de febrero de 1822: 153.

de Oriente con: Nuevo León, Nuevo Santander, Coahuila y Texas; las Provincias Internas de Occidente con: Durango, Arizpe y Nuevo México; las Californias con: la Antigua o Baja y la Nueva o Alta; y las intendencias de México, Guadalajara, Puebla, Veracruz, Mérida, Oaxaca, Guanajuato, Valladolid, San Luis Potosí, Zacatecas y Tlaxcala (Decreto del 17 de noviembre de 1821. AHEM. Colección Imperio Mexicano: vol. 42, exp. 2).[19]

El 27 de noviembre la Regencia al convocar a la elección de diputados al Congreso Mexicano, dispuso que las diputaciones provinciales debían continuar en el ejercicio de sus funciones, que se debían establecer nuevas diputaciones en las intendencias que aún no las tuvieran, que el futuro Congreso designaría las demás diputaciones que pudiesen considerarse necesarias para el bienestar del País, que los miembros de las diputaciones provinciales ya establecidas debían ser removidos por completo en el periodo de elecciones, que los miembros de cada Diputación recién creada debían ser ciudadanos de la misma Provincia, y que la elección de estas diputaciones tendría lugar en la Capital de la Provincia respectiva al día siguiente de la elección de los diputados al Congreso (Benson, 1994. Convocatoria del 27 de noviembre de 1821: 95).

Se indicaba que el día 27 de diciembre "el nuevo Ayuntamiento elegirá para elector de partido, de entre sus individuos, uno que sobre las circunstancias de integridad, buen nombre, instrucción en su giro y adhesión a la independencia, haya hecho servicios a la Nación, y el que el 14 de enero del año inmediato de 1822 estará precisamente en la Cabecera del respectivo Partido, a fin de nombrar elector de provincia en unión de los demás electores de su clase y el Ayuntamiento de la misma Cabecera, el que presidirá su Alcalde: El que elijan puede ser de dentro o fuera del Cuerpo.

Los electores de provincia se reunirán en la Capital de ella, precisamente el día 28 de enero para elegir con los demás, y su Ayuntamiento, presidido por el Jefe Político, si lo hubiere, y en su defecto, por el Alcalde de la primera nominación, los diputados del Congreso que le correspondan, lo que se expresará en la convocatoria, teniendo muy presente que en esas personas exige la razón, concurran más particularmente la buena conducta, instrucción y afecto a la independencia, acreditados con hechos positivos, anteriores o posteriores a su ejecución" (Benson, 1994. Convocatoria del 27 de noviembre de 1821: 95).

[19] Con el reconocimiento jurídico de la Intendencia de Michoacán dejó de formar parte de la Diputación Provincial de México los diputados representantes de dicha demarcación.

La Diputación Provincial de México al analizar el expediente formado sobre alcaldes de barrio, acordó "que de preferencia se remita al Señor Jefe Político para que active con el Ayuntamiento Constitucional un establecimiento tan interesante, encargándole, que si es posible, se sustituya el nombre de prefectos de cuartel u otro que no recuerde a los ciudadanos la odiosidad que algunos alcaldes de barrio indujeron en el anterior sistema de policía con su arbitrariedad e insolencia, y que a los que se pongan en los barrios extramuros o de los suburbios se les dé facultad de nombrar celadores entre sus vecinos de más confianza y que todos y en todos se sujeten a los alcaldes constitucionales o al Jefe Político para los partes ejecutivos que ocurran en sus barrios" (Noriega, 2007. Acta del 27 de noviembre de 1821: 80).

El 11 de enero de **1822** la Diputación Provincial dirigió un oficio a los alcaldes constitucionales de los ayuntamientos cabeza de Partido, "para que de aquí en adelante se abstengan unos y otros de toda etiqueta, rivalidad o motivo de discordia y competencia con los subdelegados, con quienes deben llevar la más perfecta armonía, limitándose los ayuntamientos y alcaldes constitucionales a sus facultades respectivas: bien entendidos de que cualquiera individuo, que perturbe (lo que no se espera) las atribuciones del otro, a más del desagrado que causará a la Diputación, y aún a la Soberana Junta Gubernativa, se hará merecedor, de que se tomen contra él muy severas providencias. Y para excusar los defectos o pretextos de la ignorancia, acordó asimismo la Diputación, que todos los ayuntamientos tengan precisamente ejemplares de la Constitución, del arreglo de los tribunales; y de la Instrucción para el Gobierno Económico-Político de las Provincias, cuyos documentos los instruirán con claridad en las facultades propias, y en las de los subdelegados, jueces de primera instancia" (Acuerdo del 11 de enero de 1822. BJMLM: vol. 8, exp. 15).

Se presume que hasta el 8 de febrero fungió como Intendente de la Provincia de México Ramón Gutiérrez del Mazo (Noriega, 2007. Acta del 8 de febrero de 1822: 129), toda vez que al día siguiente se leyó en la Diputación Provincial un "oficio del Excelentísimo Señor Capitán General y Jefe Político Superior Don Manuel de la Sota Riva, en que inserta otro del Serenísimo Señor Generalísimo Almirante, previniendo que para establecer la Sociedad Económica Mexicana de Amigos del País, concurran esta Diputación y el Ayuntamiento a la Sala de Regencia del Palacio Nacional el 22 del corriente, y que cada una de las dos corporaciones nombre a pluralidad de votos un individuo de su seno para socio nato de ese Patriótico Establecimiento" (Noriega, 2007. Acta del 9 de febrero de 1822: 153).

El 23 de febrero la Diputación Provincial de México tuvo su última sesión con los diputados que habían entrado en funciones el 9 de octubre de 1821 (Noriega, 2007. Acta del 23 de febrero de 1822: 155).

El 24 de febrero se instaló el Primer Congreso Constituyente del México independiente en el Templo del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de la Ciudad de México, con lo que se disolvió la Junta Provisional Gubernativa, la cual de acuerdo con el artículo 12 de los Tratados de Córdoba, debía fungir como cuerpo legislativo y órgano auxiliar y consultivo de la Regencia, lo que a decir de sus integrantes, fue una de las causas que embarazaron su actuación, "no porque la Regencia no haya estado siempre animada de los más vivos deseos del acierto, ni porque haya habido rivalidad en ambos cuerpos, sino porque la naturaleza misma de los poderes que depositaban una y otra, lleva consigo la diversidad de ideas y cierta contraposición en las resoluciones" (Cámara de Diputados I, 1985. Manifiesto del 24 de febrero de 1822: 5).

Fueron electos como Diputados por la Provincia de México del Primer Congreso Constituyente Mexicano: José Mariano Aranda, Francisco Barrera Carragal, Vicente Carbajal, Nicolás Campero, Manuel Carrasco, Manuel Cotero, Juan José de Acha, Juan de la Serna Echarte, Juan Antonio de Riba, José Ignacio Espinosa, José María Fagoaga, Antonio Eduardo Galicia, José Goroztieta, Juan Horbegozo, Cayetano Ibarra, Martín Inclán, José María Iturralde, Francisco María Lombardo, Miguel Muñoz, Melchor Muzquiz, José Ignacio Nájera, Joaquín Obregón, Pablo Obregón, José Hipólito Odoardo, Francisco Ortega, José Agustín Paz, Joaquín Román, Francisco Manuel Sánchez de Tagle, Manuel Tejada y José Mariano Zardaneta y Llorente (Acta del 24 de febrero de 1822 del Primer Congreso Constituyente Mexicano).

El 1 de marzo el Congreso Constituyente Mexicano decretó como días de festividad nacional: el 24 de febrero en honor de la propuesta al Gobierno Antiguo del Plan de Iguala; el 2 de marzo, en alusión a la Jura del Ejército Trigarante en aquel pueblo, y el 16 y 27 de septiembre, en remembranza al Primer Grito de Libertad en el Pueblo de Dolores y a la ocupación de la Capital por todo el Ejército Nacional Mexicano (Dublan I, 1876. Decreto del 1 de marzo de 1822: 599).

La Diputación Provincial de México (1821-1822) que operó del 9 de octubre de 1821 al 23 de febrero de 1822 se integró con siete vocales propietarios y tres vocales suplentes nombrados por electores de partido de provincia y el Intendente de la Provincia de México. No expidió decretos (Actas).

Capítulo 7
Diputación de la Intendencia de México (1822-1823)

La Diputación de la Intendencia de México (1822-1823) que operó del 5 de marzo de 1822 al 18 de septiembre de 1823 se integró con siete vocales propietarios y tres vocales suplentes nombrados por electores de partido de provincia y el Jefe Político de la Intendencia de México, Anastasio Bustamante (Noriega, 2007. Acta del 5 de marzo de 1822: 157), el cual posteriormente fue sustituido por: Luis Quintanar (Acuerdo del 2 de abril de 1822. AHEM. Colección Imperio Mexicano: vol. 45, exp. 1), José Antonio Andrade (Gobierno de la Provincia de México, 1822. Circular del 23 de septiembre de 1822: 1), Ramón Gutiérrez del Mazo (Noriega, 2007. Acta del 3 de abril de 1823: 460) y Francisco Molinos del Campo (Decreto del 16 de abril de 1823. AHEM. L.L.D.F: vol. 1, exp. 1). Los vocales propietarios y suplentes en funciones eran: Florentino Conejo, José María Luis Mora, Benito José Guerra, Luis Quintanar Mariscal de Campo (Noriega, 2007. Acta del 5 de marzo de 1822: 157), Conde Francisco Javier de la Casa de Heras (Noriega, 2010. Acta del 8 de marzo de 1822: 158), Mariano Tamariz, (Noriega, 2010. Acta del 12 de marzo de 1822: 159), Antonio Icaza (Noriega, 2010. Acta del 19 de abril de 1822: 190), José Alejo Alegría y José Vicente Sánchez (Noriega, 2007. Acta del 21 de junio de 1822: 232).[20]

El 5 de marzo de 1822 se instaló la Diputación en la Intendencia de México a convocatoria del Mariscal de Campo Anastasio Bustamante, quien era Capitán de las Provincias Internas y encargado interinamente del mando militar y político de dicha Intendencia. Los vocales que tomaron posesión ese día fueron los señores: Florentino Conejo, José María Luis Mora, Benito José Guerra y Luis Quintanar Mariscal de Campo (Noriega, 2007. Acta del 5 de marzo de 1822: 157).

El 8 de marzo acudió a la Diputación de la Intendencia a rendir su protesta de ley como su Vocal el Conde Francisco Javier de la Casa de Heras (Noriega, 2007. Acta del 8 de marzo de 1822: 158).

El 9 de marzo la Diputación Provincial nombró como vocales de la Junta Superior de Sanidad a los vocales de dicha Diputación José María Luis Mora y Benito José Guerra (Acuerdo del 9 de marzo de 1822. BJMLM: vol. 10, exp. 199).

[20] Los vocales: José María Luis Mora, Benito José Guerra y Mariano Tamariz, posteriormente integraron el Congreso Constituyente del Estado de México de 1824.

El 12 de marzo Mariano Tamariz acudió a la Diputación de la Intendencia a rendir su protesta de ley como Vocal (Noriega, 2007. Acta del 12 de marzo de 1822: 159).

A partir de ese día las actas de la Diputación de la Intendencia que también se conocía con el nombre de la Diputación Provincial, ya no fueron rubricadas por el Jefe Político de la Provincia (Noriega, 2007. Acta del 12 de marzo de 1822: 162).[21]

El 30 de marzo el Congreso Constituyente Mexicano resolvió que "las diputaciones provinciales y ayuntamientos, celebren sus sesiones públicamente, a menos que el asunto, a juicio de las mismas corporaciones, exija secreto" (Circular del 1 de abril de 1822. BJMLM: vol. 8, exp. 42).

El 1 de abril la Secretaría de Relaciones Interiores y Exteriores del Supremo Gobierno, dispuso que "con el objeto de que se forme la estadística general del Imperio", "se cumpla ejecutivamente por las diputaciones provinciales nuevamente creadas, el decreto de 7 de enero último que circuló la Regencia al efecto, excitando a las diputaciones provinciales y ayuntamientos para que a la brevedad posible se dediquen a tan importante trabajo, advirtiéndoles debe ser éste el objeto primario de sus atenciones" (Circular del 1 de abril de 1822. BJMLM: vol. 8, exp. 42).

El 2 de abril se dio a conocer una circular, en la que se indicaba que "teniendo en consideración la Regencia del Imperio las razones que le expuso V.A.S. para que marche a posesionarse del mando de las Provincias Internas que le está confiado al Exmo. Sr. D. Anastasio Bustamante, ha resuelto dicho Consejo que los empleos de Capitán General y Jefe Superior Político de esta Provincia, que interinamente está desempeñando dicho General; por enfermedad del propietario, se encargue de ellos, en los mismos términos, el Sr. Mariscal de Campo D. Luis Quintanar" (Acuerdo del 2 de abril de 1822. AHEM. Colección Imperio Mexicano: vol. 45, exp. 1).

El 11 de abril el Congreso Constituyente Mexicano dispuso en su Reglamento, que se repartieran ejemplares del periódico intitulado Actas del Congreso Constituyente "a cada uno de los señores diputados, a la Regencia, a los secretarios del despacho, y a los que a juicio de éstos sean necesarios para los capitanes generales, jefes políticos e intendentes", así como "diez ejemplares a las diputaciones provinciales con destino a

[21] Con la ausencia del Jefe Político a las sesiones de dicha Diputación se fortaleció la separación de los incipientes poderes Legislativo y Ejecutivo, toda vez que el Jefe Político tardó poco más de cinco meses para asistir de nuevo a una sesión (Noriega, 2007. Acta del 16 de agosto de 1822: 277).

los ayuntamientos, que por lo tanto se suscriban, encargándoles exciten a todos los de su comprensión para que lo verifiquen, avisando al Congreso que el número en lo de adelante sea necesario al efecto" (Reglamento del 11 de abril de 1822. BJMLM: vol. 9, exp. 98).

El 12 de abril la Diputación de la Intendencia instruyó al Jefe Político para que se "sirva expedir orden circular a los subdelegados y ayuntamientos de esta Provincia, para que unos y otros se arreglen a su tenor, mientras las Cortes no determinen otra cosa, a fin de evitar el desorden que se nota generalmente en los sucedimientos (sic) de los alcaldes constitucionales y sobre que diariamente dirigen quejas y consultas a esta Diputación, recomendando a su excelencia la urgencia y necesidad de esta medida, para que tenga a bien mandarla llevar a efecto lo más pronto posible" (Noriega, 2007. Acta del 12 de abril de 1822: 183).

El 15 de abril la Regencia ordenó a las diputaciones provinciales, auxiliar "a sus diputados con lo necesario a juicio de las mismas, para los gastos de ida y vuelta", y que se abonara "a cada Diputado la cantidad de tres mil pesos anuales, durante el tiempo de las sesiones". De igual manera, dispuso que "los empleados civiles y militares, cuyo sueldo no ascienda a tres mil pesos, recibirán de las diputaciones en completo esa cantidad", y que "los eclesiásticos, cuyas rentas son eventuales, cobrarán también el deficiente, siempre que con relación documentada conste que no llegan a las cantidades de las dietas" (Decreto del 15 de abril de 1822. BJMLM: vol. 9, exp. 84).

El 18 de abril el Congreso Constituyente Mexicano, dispuso que "en el día festivo inmediato se reunirán los vecinos de sus parroquias, asistiendo el Ayuntamiento en el pueblo donde hubiese una, y distribuyéndose el Jefe Político, los alcaldes y los regidores donde hubiere más, al tiempo de la Misa Mayor, en la que el Párroco o quien lo represente hará una breve exhortación correspondiente al objeto, y concluida la Misa se prestará juramento por todos los vecinos y el clero donde lo haya", sobre el reconocimiento a "la Soberanía de la Nación Mexicana representada por su Congreso Constituyente", y a "obedecer y cumplir las leyes y decretos que dimanen del mismo Congreso" (Decreto del 18 de abril de 1822. AHEM. Colección Intendencia de México: Ca25/E2/2004).

El 19 de abril Antonio Icaza acudió a la Diputación de la Intendencia a rendir su protesta de ley como su Vocal (Noriega, 2007. Acta del 19 de abril de 1822: 190).

Luis Quintanar remitió un oficio a la Diputación de la Intendencia, en el cual insertaba "una orden del Supremo Consejo de la Regencia, sobre que en el día precisamente se coloquen las Armas del Imperio en los parajes públicos, o al menos se quiten las de la Monarquía Española" (Noriega, 2007. Acta del 19 de abril de 1822: 191).

El Congreso Constituyente Mexicano resolvió "que todo funcionario público que recibiendo algún decreto u orden, dentro de tercero día, no lo cumpla en la parte que le toca, quede por solo este hecho privado del destino que tenía" (Dublan I, 1876. Decreto del 19 de abril de 1822: 612).

El 21 de mayo Agustín de Iturbide fue proclamado Emperador de México, una vez que se conoció un inserto en la Gaceta de Madrid del 13 y 14 de febrero último, en el que las Cortes de España habían "declarado nulos los Tratados de Córdoba, y que por lo mismo, es llegado el caso de que no obligue su cumplimiento a la Nación Mexicana, quedando ésta en la libertad que el artículo tercero de dicho Tratado concede al Soberano Congreso Constituyente de este Imperio, para nombrar Emperador por la renuncia o no admisión de los allí llamados" (Decreto del 21 de mayo de 1822. AHEM. Colección Imperio Mexicano: vol. 45, exp. 5).

El 31 de mayo la Diputación de la Intendencia acordó ante la inasistencia a sus sesiones del Jefe Político, convocar a su Suplente, que de acuerdo al artículo primero de la Ordenanza de Intendentes correspondía al Contador Decano del Tribunal de Cuentas, que era Alejo Alegría (Noriega, 2007. Acta del 31 de mayo de 1822: 226).

El 15 de junio el Congreso Constituyente Mexicano acordó "que con la observancia del artículo 17, Capítulo 2 de la Instrucción para el Gobierno Económico y Político de las Provincias, dada por las Cortes extraordinarias de España, puede evitarse a los fondos de Provincia y de los pueblos los gastos que no deben lastar de portes en la correspondencia de oficio, ha tenido a bien acordar que los ayuntamientos y diputaciones provinciales se comuniquen con el Gobierno y éste con ellas por medio de los jefes políticos, exceptuando los casos en que tengan dichos cuerpos que representar contra éstos al Gobierno" (Decreto del 15 de junio de 1822. AHEM. Colección Imperio Mexicano: vol. 42, exp. 8).

El 21 de junio acudieron a la Diputación de la Intendencia a rendir su protesta de ley como sus vocales: José Alejo Alegría y José Vicente Sánchez (Noriega, 2007. Acta del 21 de junio de 1822: 232).

El 28 de junio la Diputación de la Intendencia aprobó el Reglamento para el Gobierno Interior de la Junta Superior de Sanidad (Noriega, 2007. Acta del 28 de junio de 1822: 243).[22]

El 10 de julio el Congreso Constituyente Mexicano expidió la "Instrucción a que deben arreglarse los ayuntamientos de las ciudades, villas, y pueblos de la Provincia de México, para erigir y cobrar a los abastecedores o vendedores en el expendio libre de carnes, dos reales por cabeza de ganado mayor, sin distinción, otros dos reales por cada cerdo, un real por cada carnero, y medio real por cada chivo, a favor del Fondo que se va a establecer, para satisfacer sus dietas a los señores diputados del Congreso Soberano, nombrados por la misma Provincia de México, y para los gastos del Desagüe de Huehuetoca" (Decreto del 10 de julio de 1822. BJMLM: vol. 9, exp. 84).

El 21 de julio la Diputación de la Intendencia al tratar lo referente a las vacunas, acordó "proponer al Superior Gobierno que el método más seguro de propagarla es el de comunicarla de unos niños a otros, a cuyo efecto, convendrá que se encargue especialmente a los ayuntamientos cabeza de partido, que inmediatamente formen su Junta de Sanidad los que no la tengan, siendo una de sus primeras atenciones la propagación de la vacuna, pagando al profesor o profesores, y otros gastos relativos, de los fondos municipales, como lo hace el Ayuntamiento de esta Corte, por ser de beneficio público" (Noriega, 2007. Acta del 21 de julio de 1822: 233).

La Diputación de la Intendencia conoció el decreto del Congreso Constituyente Mexicano, referente a un préstamo por 400 mil pesos (Noriega, 2007. Acta del 21 de julio de 1822: 233).

La Diputación de la Intendencia tomó conocimiento sobre el cese de la providencia que prohibió la provisión de las plazas vacantes (Noriega, 2007. Acta del 21 de julio de 1822: 233).

El 6 de agosto la Diputación de la Intendencia tomó conocimiento de la erección de la Diputación Provincial de Tlaxcala, con lo que se concretó la separación de esta Provincia de la de México (Noriega, 2007. Acta del 6 de agosto de 1822: 273).

[22] En el acta no aparece el texto de dicho Reglamento, por lo que se desconocen las partes del mismo.

El 16 de agosto el Jefe Político por última vez presidió una sesión de la Diputación de la Intendencia, con lo que se fortaleció la separación de los incipientes poderes Legislativo y Ejecutivo (Noriega, 2007. Acta del 16 de agosto de 1822: 277).

El 20 de agosto el Congreso Constituyente Mexicano, resolvió "que se estreche por el Gobierno a las diputaciones provinciales para que luego que reciban esta orden ingresen por medio de sus tesorerías a las del Congreso las dietas que corresponden a sus diputados, con arreglo al decreto de 15 de abril último, y el viático que debe servirles para su regreso, a razón de cuatro pesos por legua desde el pueblo de su residencia hasta esta Capital, cuya regla debe observarse en el que se les ministró para venida, y en la inteligencia de que las monedas que se remitan han de ser corrientes en esta Corte; pero en las provincias donde las diputaciones provinciales no tengan Tesorería se hará el entero a la del Congreso por las cajas nacionales de las mismas, sin preferir el pago de los sueldos de los empleados, pues en caso de no ser bastantes los caudales para satisfacer completamente a unos y a otros, se hará un prorrateo de los suplementos que por este método se hagan a la Tesorería del Congreso, para que en su tiempo sean reintegrados por las respectivas diputaciones provinciales, apercibiéndose a los funcionarios, de que se hará efectiva su responsabilidad por demora o falta de cumplimiento de esta soberana disposición" (Oficio del 20 de agosto de 1822. BJMLM: vol. 9, exp. 84).

El 31 de agosto, en atención al oficio antes señalado, la Diputación de la Intendencia constituyó su Tesorería, la cual tenía entre sus objetivos: recabar de los ayuntamientos los recursos necesarios para proveer las dietas de los diputados al Congreso Constituyente Mexicano y los gastos generados por el Desagüe de Huehuetoca, la Secretaría de la Diputación Provincial y la Junta Superior de Sanidad (Estado general de ingresos y egresos del 31 de 1822. BJMLM: vol. 16, exp. 81).

El 23 de septiembre el Emperador Agustín de Iturbide, nombró a José Antonio Andrade como Capitán General y Jefe Político de la Provincia de México (Gobierno de la Provincia de México, 1822. Circular del 23 de septiembre de 1822: 1).

El 24 de octubre la Diputación de la Intendencia conoció el informe sobre la instalación de la Diputación Provincial de Querétaro, con lo que se oficializó la separación de los partidos de: Querétaro, San Juan del Río y Cadereita de la Provincia de México (Noriega, 2007. Acta del 24 de octubre de 1822: 323).

El 22 de noviembre Agustín de Iturbide instaló la Junta Nacional Instituyente, después disolver el Congreso Constituyente Mexicano (Cámara de Diputados I, 1985. Discurso del 22 de noviembre de 1822: 11).

El 14 de diciembre la Secretaría de la Diputación de la Intendencia emitió un acuerdo, en el que se indicaba que los ayuntamientos sin dar lugar a nueva interpelación debían remitir información sobre la Pensión de Carnes referente a la "libranza segura, o por medio de persona de toda su confianza, cuanto hubiere colectado hasta la fecha, mes, sea poco o mucho, informando con especificación, claridad, y distinción, cuanto es lo que cierta o prudentemente debe rendir la pensión en ese periodo, así en la Cabecera, como en cada pueblo subalterno, de modo que se pueda formar para adelante, un cómputo, o cálculo racional, que exija las providencias sucesivas; quedando advertidos los ayuntamientos, de que por la extinción del Congreso, (que tal vez habrá influido a las omisiones) no se ha suspendido, ni aún debido aminorar la pensión, pues las dietas se satisfacen a los señores diputados que componen la Junta Nacional Instituyente, y a mayor abundamiento tiene los otros tres destinos, que claramente explica la orden de 22 de julio, inserta en el Bando: esto es, para la recomendable obra del Desagüe de Huehuetoca, para gastos de la Secretaría de la Diputación Provincial y para los de la Junta Superior de Sanidad" (Circular del 14 de diciembre de 1822. BJMLM: vol. 9, exp. 123).

El 20 de enero de **1823** la Diputación de la Intendencia sesionó por primera vez "en el edificio perteneciente antes a la extinguida Inquisición" (Noriega, 2007. Acta del 20 de enero de 1823: 391).

El 1 de febrero Antonio López de Santa Anna expidió el Plan de Casamata, en el que se pedía que se instalara el Congreso a la mayor brevedad posible, por estar inconcuso y que la soberanía residía esencialmente en la Nación. Se consideraba "que entre los señores diputados que formaron el extinguido Congreso, hubo algunos que por sus ideas liberales y firmeza de carácter se hicieron acreedores al aprecio público, al paso que otros no correspondieron debidamente a la confianza que en ellos se depositó, tendrán las provincias la libre facultad de reelegir a los primeros y sustituir a los segundos con sujetos más idóneos para el desempeño de sus arduas obligaciones" (Secretaría de Gobernación, 2010).

El 21 de febrero la Diputación de la Intendencia ante la circulación del papel intitulado "Oiga el público verdades que el autor no tiene miedo", acordó por unanimidad de

votos “representar al Excelentísimo Jefe Político con energía los males que la circulación del Papel podría acarrear, y pedirle, como responsable de la tranquilidad pública que cooperase a que el Papel y su autor fueran condenados con toda celeridad compatible con las determinaciones de las leyes, y el último recibiera la pena que éstas le señalan, para que sirviera de escarmiento a los pocos que pudieran pensar del mismo modo que el autor, y de tranquilizar al numeroso resto del vecindario, y que se dirijan oficios al Ayuntamiento y Fiscal de Imprenta con los mismos objetos” (Noriega, 2007. Acta del 21 de febrero de 1823: 431).

El 23 de febrero la Junta Nacional Instituyente expidió el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano (Secretaría de Gobernación, 2010), en donde se ratificó que “el Poder Legislativo reside ahora en la Junta Nacional Instituyente” (art. 25); que “el Poder Ejecutivo reside exclusivamente en el Emperador, como Jefe Supremo del Estado” (art. 29); que el Emperador nombrará “una Regencia de uno a tres individuos de su alta confianza, igual número de suplentes” (art. 34); que “subsistirá el actual Consejo de Estado en la forma, y con el número de individuos que lo estableció el Congreso” (art. 41), y que “los intendentes en las provincias, son exclusivamente los jefes de la Hacienda Pública, que dirigirán conforme a las ordenanzas y reglamentos vigentes, y se entenderán directa e indirectamente con el Ministro de Hacienda (art. 81).

Por lo que respecta al orden local, se estableció que en “cada Capital de Provincia, habrá un Jefe Superior Político nombrado por el Emperador” (art. 44); que reside “en el Jefe Político la autoridad superior de la Provincia, que la ejercerá conforme a las leyes, instrucciones y reglamentos vigentes” (art. 45); que “permanecerán las diputaciones provinciales con las atribuciones que hoy tienen, y que seguirán desempeñando con arreglo a la instrucción de 23 de junio de 1813” (art. 46); que “se comunicarán con los ayuntamientos y pueblos del Distrito de su inspección, y con el Gobierno Supremo, necesariamente por conducto de su respectivo Jefe Político, excepto los casos en que tengan que dirigir contra el mismo alguna queja fundada” (art. 87); que “ayudarán a los jefes políticos, cuan eficazmente puedan, en el cumplimiento de las obligaciones que se les han impuesto… y también a los intendentes en lo que respectivamente puedan auxiliarlos” (art. 88), y que no omitirán diligencia “para formar y remitir cuanto antes al Gobierno Supremo el censo y estadística de su Distrito”; “para extirpar la ociosidad y promover la instrucción, ocupación y moral pública” (art. 89), y “para formar de acuerdo con el Jefe Político, y enviar al Gobierno Supremo para su aprobación planes juiciosos, según los cuales, pueda hacerse efectivo en plena propiedad, entre los

ciudadanos indígenas y entre los beneméritos, industriosos, el repartimiento de tierras comunes o realengas, salvo los ejidos precisos a cada población" (art. 90).

El 7 de marzo Agustín de Iturbide reinstaló el Congreso General de la Nación (Cámara de Diputados I, 1985. Discurso del 7 de marzo de 1823: 12).

El 19 de marzo Agustín de Iturbide abdicó al cargo de Emperador de México (Noriega, 2007. Acta del 17 de abril de 1823: 479).

El 29 de marzo el Supremo Gobierno nombró a Ramón Gutiérrez del Mazo como Jefe Político de la Provincia de México (Noriega, 2007. Acta del 3 de abril de 1823: 460).

El 31 de marzo el Congreso Constituyente Mexicano depositó el Poder Ejecutivo de la República en un triunvirato integrado por: Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete (Dublan I, 1876. Decreto del 31 de marzo de 1823: 633).

El 17 de abril se dio a conocer en la Diputación de la Intendencia una instrucción del Supremo Gobierno a los intendentes, en las que se les pedía que avisaran: "qué impuestos generales y particulares recaudan en sus provincias, cuánto es su producto, deducido de su quinquenio; qué número de empleados hay pagados por la Hacienda Pública, y cuáles son sus destinos y dotaciones; qué empleos hay vacantes y cuáles suplidos interinamente; qué tropas mantiene la Provincia, cuáles son las salidas fijas de la Tesorería y cuál es el sobrante o deficiente que debe resultar cada mes, con lo demás que les dicte su celo para el mejor arreglo de la Hacienda Pública, y encargando ahora que el Soberano Congreso que las diputaciones provinciales se encarguen de intervenir en su cumplimiento" (Noriega, 2007. Acta del 17 de abril de 1823: 478).

El Jefe Político pidió apoyo a la Diputación de la Intendencia, a efecto de remitir al Supremo Poder Ejecutivo la información que solicitó sobre "qué establecimientos de amparo y de beneficencia existen en la Provincia, con una razón de los fondos de su subsistencia, modo de ministrarlos, personas que se socorren, inversión de rentas y otras noticias y luces necesarias para formar un Plan General de Beneficencia que ha de presentarse al Soberano Congreso" (Noriega, 2007. Acta del 17 de abril de 1823: 507).

El 28 de abril ya con Francisco Molinos del Campo como Jefe Superior Político Interino de la Provincia de México, se dio a conocer un decreto del Congreso Constituyente Mexicano, por el que se determinó que los "establecimientos públicos, oficinas, y a todo lo que antes llevaba el nombre de Imperial, se sustituya por el de Nacional" (Decreto del 16 de abril de 1823. AHEM. L.L.D.F: vol. 1, exp. 1).

El 5 de mayo el Congreso Constituyente Mexicano señaló "al Jefe Superior Político Interino de esta Provincia el sueldo de cuatro mil pesos anuales" (Dublan I, 1876. Decreto del 5 de mayo de 1823: 648).

El 22 de mayo el Supremo Gobierno les pidió a las Diputaciones Provinciales que le hicieran saber "las personas beneméritas que haya en esa Provincia en cualquier línea, ya sea por sus servicios a favor de la Patria, ya por su literatura e instrucción en aquellos ramos que puedan contribuir a la lustración pública, o por algún otro principio que los haga acreedores a la consideración del Gobierno y capaces de desempeñar sus confianzas con utilidad" (Circular del 22 de mayo de 1823. BJMLM: vol. 11, exp. 177).

El 5 de junio la Diputación de la Intendencia conoció la noticia sobre la instalación de la Diputación Provincial de Valladolid (Noriega, 2007. Acta del 5 de junio de 1823: 525).

El 9 de junio el Jefe Político al acudir a la Diputación de la Intendencia, les pidió a sus integrantes que se volviera a examinar la instrucción sobre los puntos de la estadística al considerar que se hallaban "dificultades insuperables por parte de los pueblos para su cumplimiento, pues componiéndose los 400 y tantos ayuntamientos de la Provincia de gente poco civilizadas e instruidas, creía que ni los 390 podrían desempeñar tan delicado encargo en los términos que se les prevenía, porque además de su poca ilustración carecían de los instrumentos para las medidas de tierras, aguas, etc., cuyas noticias se les pedían, y que los consideraba en el caso de un hombre, que abrumado de atención y de los objetos a que tenía que atender, nada hacía y los abandonaba todos, cuando si éstos fuesen proporcionados a sus alcances y posibilidad los desempeñarían en el todo o en la mayor parte que le fuese posible" (Noriega, 2007. Acta del 9 de junio de 1823: 529).

El 17 de junio el Congreso Constituyente Mexicano expidió la "Ley de Elecciones, a que deben acomodarse las provincias de la Nación para nombrar a los diputados que

han de componer el futuro Congreso Constituyente" (Decreto del 17 de junio de 1823. BJMLM: vol. 12, exp. 98). Se indicaba que "para la elección de diputados se celebrarán juntas primarias, secundarias y de provincia" (art. 12), que serán precedidas de rogación pública en las catedrales y parroquias, implorando el auxilio Divino para su acierto" (art. 13); que las elecciones se celebrarían en las Provincias de Guatemala en caso de que sigan unidas a México (art. 10) y en las provincias de California Alta, California Baja, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guadalajara, León (Nuevo Reino de), México, México Nuevo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Santander, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Texas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas (art. 9), y que al "día siguiente al de la elección de diputados al Congreso, la misma Junta Electoral renovará a las diputaciones provinciales en su totalidad, pudiendo reelegir a los individuos que actualmente las componen" (art. 78).

El proceso de elección de diputados al Congreso General y a la Diputación Provincial iniciaba en las juntas primarias o municipales, las cuales debían celebrarse en toda población que llegase a quinientas personas el domingo 3 de agosto, debiendo ser "presididas por el Jefe Político o el que haga sus veces, y si se divide la población en departamentos, la Junta de uno se presidirá por el Jefe Político o el Alcalde, y las otras por los demás alcaldes y regidores, según el orden de su nombramiento" (art. 23).

Quince días después de celebradas las elecciones primarias se debían de integrar las juntas secundarias o de partido, las cuales se componían: "de los electores primarios congregados en las cabeceras de los partidos, a fin de nombrar electores que en las capitales de Provincia han de elegir a los diputados" (art. 40). Se indicaba que las juntas secundarias serían presididas por el Jefe Político o Alcalde Primero de la Cabecera de Partido (art. 45), y que "por cada veinte electores primarios de los que se nombraron en todos los pueblos del Partido, se elegirá uno secundario" (art. 42).

A los 22 días de efectuadas las elecciones secundarias debían integrarse las juntas de provincia, las cuales se compondrían: "de los electores secundarios de toda ella, congregados en la Capital, a fin de nombrar diputados" (art. 56). Se indicaba que estas juntas serían "presididas por el Jefe Político, o por quien haga sus veces" (art. 58); que los electores nombrarían "a los diputados de uno en uno, diciendo al Secretario en voz baja el nombre de cada persona, y el Secretario a presencia del elector lo escribía en una lista" (art. 63), y que después de la elección "de diputados propietarios para el Congreso, se procederá a la de suplentes por el mismo método, y su número será en cada Provincia, el tercio de el de propietario" (art. 65).

El 28 de junio el Congreso Constituyente Mexicano dispuso “que todo individuo de cualquiera clase, sexo o edad que tenga renta, sueldo, salario, giro o industria personal, contribuirá al Estado anualmente con la utilidad o percepción que corresponde a tres días en el año”. Para tal efecto, los ayuntamientos debían “publicar listas de los contribuyentes y cuota de sus contribuciones (por manzanas en los lugares populosos) las que fijarán en las esquinas, y circularán en los papeles públicos, para que el que advierta que alguno ha ocultado o disminuido su ganancia diaria, pueda advertirlo al Comisionado y éste al Ayuntamiento, quien deberá manifestarle al interesado su falta, y persuadirle que la enmiende” (Decreto 95 del 28 de junio de 1823. BJMLM: vol. 14, exp. 223).

El Supremo Gobierno al reglamentar este decreto, ordenó que “los ayuntamientos darán cuenta en fin de semana a los jefes políticos y éstos al Gobierno en México, y a los intendentes en las otras provincias, de lo que hayan hecho o adelantado”, y que “ambos jefes con las diputaciones provinciales, resolverán las dudas que puedan ofrecerse a los ayuntamientos para que no se interrumpan ni se retarden las operaciones de que están encargados por la ley, y sin perjuicio de consultar al Gobierno las que consideren dignas de su conocimiento y determinaciones para efectos ulteriores” (Reglamento del decreto 95 del 28 de junio de 1823. BJMLM: vol. 14, exp. 223).

El 11 de julio el Congreso Constituyente Mexicano al ampliar las facultades de las diputaciones provinciales, convino que éstas: “velarán escrupulosamente sobre el manejo y administración de los caudales públicos de su Provincia respectiva, pudiendo suspender a los empleados del Ramo de Hacienda, cuando adviertan que abusan o no cumplen con sus deberes, dando cuenta inmediatamente al Supremo Poder Ejecutivo”. Las diputaciones también estaban obligadas a: presentar “al Supremo Poder Ejecutivo las ternas de todos los empleos de su respectiva Provincia, del orden político, de hacienda y de judicatura, excepto las audiencias, jefaturas políticas, y las secretarías de éstos” (Decreto del 11 de julio de 1823. BJMLM: vol. 14, exp. 230).

El 14 de julio la Diputación de la Intendencia nombró a dos juntas de beneficencia que debían de cuidar el Hospicio de Pobres (Noriega, 2007. Acta del 14 de julio de 1823: 559).

La Diputación de la Intendencia emitió la convocatoria para la elección de 20 diputados propietarios y seis suplentes para el nuevo Congreso Constituyente Mexicano, cuya

división distrital debía calcularse en “1´134,034 habitantes, que es el censo a que se arreglaron las elecciones de diputados para los años de 1820 y 1821”, a los cuales se debían restar “89,827 almas de Querétaro y su jurisdicción, y 20,827 de la de Cadereyta según los padrones del año de 1783” (Noriega, 2007. Acta del 14 de julio de 1823: 559).

El 22 de julio la Diputación Provincial instruyó “a los Jefes de Rentas para que informen el estado en que se hayan las mejoras que sean susceptibles, los empleos que pueden suprimirse y los que deben conservarse” (Circular del 22 de julio de 1823. BJMLM: vol. 15, exp. 24).

El 23 de julio el Jefe Superior Político Interno de la Provincia de México publicó las bases para las elecciones al Soberano Congreso Constituyente Mexicano que debía instalarse el 31 de octubre de 1823 (Bando del 23 de julio de 1823. BJMLM: vol. 12, exp. 98).

El 6 de agosto la Diputación Provincial instruyó a los Jefes de Rentas para que le “remitan un tanto de sus ordenanzas y circulares que hayan recibido antes y que se les comunique en lo sucesivo” (Circular del 6 de agosto 1823. BJMLM: vol. 12, exp. 104).

El 7 de agosto la “Primera Comisión de la Diputación de la Intendencia dio cuenta con el informe que ha extendido sobre los ramos de la administración pública que están a cargo de esta Diputación, en cumplimiento de la orden del Ministro de Relaciones que insertó el Excelentísimo Señor Jefe Político para que el primero pueda formar su memoria y dar noticias al futuro Congreso” (Noriega, 2007. Acta del 7 de agosto de 1823: 590).

El 16 de agosto la Diputación de la Intendencia conoció un comunicado de la Diputación Provincial de Querétaro, en la que daba a conocer su proclama para adoptar el sistema republicano federalizado (Noriega, 2007. Acta del 16 de agosto de 1823: 592).

El 29 de agosto la Diputación de la Intendencia acordó publicar noticias de sus sesiones en los periódicos El Sol o El Águila (Noriega, 2007. Acta del 29 de agosto de 1823: 610).

El 2 de septiembre el Supremo Gobierno instruyó al Jefe Superior Político y a la Diputación Provincial para que ministrara la vacuna contra la viruela (Circular del 2 de septiembre de1823. BJMLM: vol. 12, exp. 86).

El 18 de septiembre se efectuó la última sesión de la Diputación de la Intendencia, con los diputados que habían entrado en funciones el 5 de marzo de 1822 (Noriega, 2007. Acta del 18 de septiembre de 1823: 631).

La Diputación de la Intendencia de México (1822-1823) que operó del 5 de marzo de 1822 al 18 de septiembre de 1823 se integró con siete vocales propietarios y siete vocales suplentes nombrados por electores de partido de provincia y el Jefe Político de la Intendencia de México. No expidió decretos (Actas).

Capítulo 8
Diputación de la Provincia de México (1823-1824)

La Diputación de la Provincia de México (1823-1824) que operó del 23 de septiembre de 1823 al 1 de marzo de 1824 se integró con siete vocales propietarios y tres vocales suplentes nombrados por electores de partido de provincia y el Jefe Político de la Provincia de México, Francisco Molinos del Campo, que era su Presidente (Decreto del 16 de abril de 1823. AHEM. L.L.D.F: vol. 1, exp. 1), el cual posteriormente fue sustituido por Melchor Múzquiz (Noriega, 2007. Acta del 9 de diciembre de 1823: 738). Los vocales propietarios y suplentes eran: Benito José Guerra, Antonio Velasco de la Torre, José Alejo Alegría, José Francisco Guerra, Pedro Martínez de Castro, José Ignacio Álvarez, Ignacio Echardía, Pedro Verdugo, José María Ballesteros y Calvo (Noriega, 2007. Acta del 23 de septiembre de 1823: 634).

El 23 de septiembre de 1823 al instalarse la Diputación de la Provincia de México con el Jefe Político de la Provincia de México, Francisco Molinos del Campo y los vocales nombrados por electores secundarios en junta de provincia, “se dio cuenta con una proposición del Señor Vocal más antiguo, don Benito Guerra, sobre que las comisiones que deben despachar por turno todos los asuntos de comunes atribuciones y de las nuevas facultades sean cuatro, y que se compongan la Primera de los señores Guerra (Don Benito) y Velasco; la Segunda de los señores Alegría y Doctor Guerra; la Tercera de los señores Martínez de Castro y Álvarez, y la Cuarta de los señores Echardía y Verdugo, lo que se acordó con dicha propuesta”. A dicha sesión también asistieron los vocales suplentes: Calvo y Ballesteros, quienes al igual que los anteriores señores rindieron su protesta de ley (Noriega, 2007. Acta del 23 de septiembre de 1823: 634).

El 30 de octubre el Primer Congreso Constituyente Mexicano tiene su última sesión en el Templo del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de la Ciudad de México (Acta del 30 de octubre de 1823 del Segundo Congreso Constituyente Mexicano).

El 7 de noviembre se instala el Segundo Congreso Constituyente Mexicano en el Templo del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de la Ciudad de México. Por la Provincia de México fueron electos como Diputados: Epigmenio de la Piedra, Antonio de Gama y Córdova, José Ignacio González Caralmuro, José Francisco de Barreda, Felipe Sierra, Carlos María de Bustamante, José Hernández Chico Condarco, José Ignacio Espinosa, José Agustín Paz, Luis Cortázar, Luciano Castorena, Francisco

Patiño y Domínguez, Juan Manuel Assorrey, Francisco María Lombardo, José Cirilo Gómez Anaya, Bernardo González Angulo, José María de Bustamante (Acta del 7 de noviembre de 1823 del Segundo Congreso Constituyente Mexicano).

El 10 de noviembre la Diputación Provincial al extender una felicitación al Congreso Constituyente Mexicano por su instalación se congratuló "por la dicha inexplicable con que nuestra venturosa suerte la ha reunido, al fin y después de vencer todo género de obstáculos y dificultades con que los enemigos exteriores e interiores del Estado han querido frustrar tan feliz y placentero acontecimiento (Manifiesto del 10 de noviembre de 1823. BJMLM: vol. 14, exp. 210).

El 15 de noviembre la Diputación solicitó auxilios económicos a la población, a efecto de contribuir al socorro de la Benemérita Guarnición de la Plaza de Veracruz, la cual había sido hostigada por las tropas españolas atrincheradas en San Juan de Ulúa (Bando del 15 de noviembre de 1823. BJMLM: vol. 21, exp. 339).

El 19 de noviembre la Diputación Provincial tomó conocimiento de un comunicado del Supremo Gobierno donde se pedía la recluta mediante la leva de 450 hombres para completar el Ejército Nacional (Circular del 19 de noviembre de 1823. BJMLM: vol. 14, exp. 190).

El 8 de diciembre el Supremo Gobierno nombró a Melchor Múzquiz Jefe Superior Político de la Provincia de México al exonerar de dicho cargo a Francisco Molinos del Campo (Circular del 10 de diciembre de 1823. BJMLM: vol. 14, exp. 234).

El 9 de diciembre Melchor Múzquiz rindió su protesta como Jefe Político de la Provincia de México ante la Diputación Provincial, la cual "acordó pasar oficio al Señor Don Francisco Molinos para que con motivo de haber cesado en las funciones de Jefe Político devuelva a esta Diputación las inscripciones para los monumentos que habrán de erigirse en memoria de los héroes de la Patria, el testamento de Hernán Cortés y el expediente sobre la Comisión Secreta de que se encargó relativa al Hospital de San Juan de Dios de Toluca" (Noriega, 2007. Acta del 9 de diciembre de 1823: 738).

El 20 de diciembre el Segundo Congreso Constituyente Mexicano expide la Providencia por la que se "aprobó que fuesen Estados el de Guanajuato, el de México y el de Michoacán. Con la expedición de esta disposición la Provincia de México

adquiere el nombre de Estado de México (Acta del 20 de diciembre de 1823 del Segundo Congreso Constituyente Mexicano).

El 21 de diciembre el Segundo Congreso Constituyente Mexicano expide la Providencia por la que se aprobó que fuesen Estados el de Puebla de los Ángeles y Querétaro (Acta del 21 de diciembre de 1823 del Segundo Congreso Constituyente Mexicano).

El 22 de diciembre el Segundo Congreso Constituyente Mexicano expide la Providencia por la que se aprobó que fuesen Estados el de San Luis Potosí y Veracruz (Acta del 22 de diciembre de 1823 del Segundo Congreso Constituyente Mexicano).

El 8 de enero de **1824** el Congreso Constituyente Mexicano expidió la "Ley para establecer las legislaturas constituyentes particulares, en las provincias que han sido declaradas estados de la Federación Mexicana, y que no las tienen establecidas" (Decreto del 8 de enero de 1824. AHEM: G.G.G. vol. 1, exp. 12). En ella se dispuso que los estados de "Guanajuato, México, Michoacán, Puebla de los Ángeles, Querétaro, San Luis Potosí, y Veracruz, procederán a establecer sus respectivas legislaturas, que se compondrán por esta vez al menos de once individuos, y a lo más de veinte y uno en clase de propietarios; y en la de suplentes no serán menos de cuatro, ni más de siete" (art. 1), y que "a este fin se observará la Ley de Convocatoria de 17 de junio de 1823, en lo relativo a juntas primarias, secundarias, y de provincia, celebrándose éstas en los días, que abreviando los plazos en cuanto sea posible, fijarán los jefes políticos previo acuerdo de las diputaciones provinciales, si estuvieran actualmente reunidas, y no estándolo, de los ayuntamientos de las capitales" (art. 2).

Se indicó que "para ser elegido Diputado de los congresos de los estados, se requiere ser ciudadano que esté en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinte y cinco años y vecino del que lo nombra, con residencia de cinco años. También los naturales de un Estado podrán ser elegidos para él para su Legislatura, aunque estén avecindados en otro, pero quedando éstos en libertad de admitir o no el nombramiento" (art. 6), y que "no pueden ser elegidos para individuos de las legislaturas de los estados los del Poder Ejecutivo, los secretarios de despacho, los diputados del actual Congreso, ni los individuos comprendidos en el artículo 73 de la convocatoria última citada" (art. 7).[23]

[23] Ningún empleado público nombrado por el Gobierno.

El 10 de enero el Supremo Poder Ejecutivo resolvió prohibir “todas las juntas o reuniones de cualquiera clase que no estén autorizadas por la ley, y los que contraviniendo a este decreto las formen aún que sean invitados a ellas, sean paisanos, eclesiásticos o militares, como que cometen un crimen, serán castigados severa e irremisiblemente según las leyes respectivas”, y que “igualmente se prohíbe, que las corporaciones y autoridades, cuyas atribuciones están marcadas por la ley, se reúnan en un solo cuerpo a deliberar para hacer representaciones o tomar resoluciones que están fuera del círculo de sus facultades” (Acuerdo del 10 de enero de 1824. AHEM: G.G.G. vol. 1, exp. 11).

El 13 de enero Melchor Múzquiz mandó publicar un decreto de la Diputación Provincial, en el que se especificaba que después de efectuarse las juntas primarias, secundarias y de provincia, “los citados electores secundarios, reunidos el día 15 de febrero, elegirán veinte y un diputados propietarios y siete suplentes para el Congreso del Estado de México” (Decreto del 13 de enero de 1824. AHEM: G.G.G. vol. 1, exp. 18).

El 26 de enero el Congreso Constituyente Mexicano determinó que sería “libre de porte la correspondencia dirigida por los secretarios de despacho a las autoridades civiles, eclesiásticas, comandantes, y jefes de oficina”; “la que por los jefes políticos se dirige a los alcaldes primeros de su Provincia, y de éstos a los jefes políticos: la de los alcaldes primeros de cabeza de Partido a los primeros de los pueblos del mismo, y de éstos a aquéllos sobre servicio público: lo que se avisará en la cubierta con el sello de la Secretaría de los jefes políticos o de la Diputación Provincial, y en la de los alcaldes certificándolo bajo su firma”. “También se franqueará la de los comandantes generales a comandantes subalternos en asuntos de oficio por el sello de las comandancias, y la de éstos a aquéllos por su certificación firmada”; “se franqueará también la de los jefes políticos y comandantes generales entre sí sobre servicio público, con el sello de sus secretarías”, y la dirigida de las secretarías del despacho, o por los jefes políticos y comandantes militares a personas particulares, no se franqueará por solo sello, si además no se certifica ser de oficio por los oficiales mayores de las secretarías del despacho, o por los secretarios de los jefes políticos, o de las diputaciones provinciales” (Decreto del 26 de enero de 1824. AHEM: G.G.G. vol.2, exp. 1).

El 31 de enero el Congreso Constituyente Mexicano expidió el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, la cual constó de apartados referentes a: la forma de gobierno y religión, a la división de poderes, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Poder

Judicial, al gobierno particular de los estados, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a las prevenciones generales (Secretaría de Gobernación, 2010).

En el apartado referente a la forma de gobierno y religión, se señala que "la Nación Mexicana se compone de las provincias comprendidas en el territorio del Virreinato llamado antes Nueva España, en el que se decía Capitanía General de Yucatán, y en el de las comandancias generales de Provincias Internas de Oriente y Occidente" (art. 1º); que "la Nación Mexicana es libre e independiente para siempre de España y de cualquiera otra potencia; y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona" (art. 2º); que "la soberanía reside radical y esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece exclusivamente a ésta el derecho de adoptar y establecer por medio de sus representantes la forma de gobierno, y demás leyes fundamentales que le parezca más conveniente para su conservación y mayor prosperidad, modificándolas o variándolas, según crea convenirle más" (art. 3º); que "la religión de la Nación Mexicana es y será perpetuamente la Católica, Apostólica, Romana", y "la Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra" (art 4º); que la "Nación adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal" (art. 5); que sus "partes integrantes son estados independientes, libres, y soberanos, en lo que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior, según se detalla en esta Acta y en la Constitución General" (art. 6), y que "en la Constitución se podrá aumentar el número de los estados comprendidos en el artículo anterior, y modificarlos según se conozca ser más conforme a la felicidad de los pueblos" (art. 8º).

En el artículo 7 se estableció que los estados de la Federación por ahora eran: "el de Guanajuato; el Interno de Occidente, compuesto de las provincias de Sonora y Sinaloa; el Interno de Oriente, compuesto de las provincias de Coahuila, Nuevo León, y los de Texas; el Interno del Norte, compuesto de las provincias de Chihuahua, Durango y Nuevo México; el de México,[24] el de Michoacán, el de Oaxaca, el de Puebla de los Ángeles, el de Querétaro; el de San Luis Potosí, el del Nuevo Santander que se llamará de las Tamaulipas, el de Tabasco, el de Tlaxcala, el de Veracruz, el de Jalisco,

[24] El Estado de México se constituyó el 31 de enero de 1824 en el territorio que conformaba la Provincia de México, la cual se integraba con los partidos de: Acapulco, Chilapa, Tixtla, Zacatula, Cuernavaca, Cuautla, Huejutla, Metzitlán, Yahualica, Chalco, Coatepec Chalco, Coyoacán, Cuautitlán, Ecatepec, Mexicaltzingo, México, Tacuba, Teotihuacán, Texcoco, Xochimilco, Zumpango, Taxco, Temascaltepec, Tetela del Río, Zacualpan, Lerma, Malinalco, Metepec, Tenango del Valle, Toluca, Ixtlahuaca, Tula, Actopan, Huichapan, Tetepango, Jilotepec, Ixmiquilpan, Zimapán, Apan, Otumba, Pachuca, Tulancingo y Zempoala (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 18 del 7 de agosto de 1824: 20).

el de Yucatán, el de los Zacatecas, las Californias y el Partido de Colima (sin el Pueblo de Tonila, que seguirá unido a Jalisco) serán por ahora territorios de la Federación, sujetos inmediatamente a los Supremos Poderes de ella".

En el apartado referente a la división de poderes, se indica que "el Poder Supremo de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial: y jamás podrán reunirse dos o más de éstos en una corporación o persona, ni depositarse el Legislativo en un individuo" (art. 9º).

En el apartado referente al Poder Legislativo de la Federación, se indica que "el Poder Legislativo de la Federación residirá en una Cámara de Diputados y en un Senado, que compondrán el Congreso General" (art. 10); que "los individuos de la Cámara de Diputados y del Senado serán nombrados por los ciudadanos de los estados en la forma que prevenga la Constitución" (art. 11); que "la base para nombrar los representantes de la Cámara de Diputados, será la población", y que "cada Estado nombrará dos senadores, según prescriba la Constitución" (art. 12), y que "en la Constitución se fijarán otras atribuciones generales, especiales y económicas del Congreso de la Federación, y modo de desempeñarlas, como también las prerrogativas de este cuerpo y de sus individuos" (art. 14).

En el artículo 13 se indica que "pertenece exclusivamente al Congreso General dar leyes y decretos": "para sostener la independencia nacional y proveer a la conservación y seguridad de la Nación en sus relaciones exteriores" (I); "para conservar la paz y el orden público en el interior de la Federación, y promover su ilustración y prosperidad general" (II); "para mantener la independencia de los estados entre sí" (III); "para proteger y arreglar la libertad de imprenta en toda la Federación" (IV); "para conservar la unión federal de los estados, arreglar definitivamente sus límites, y terminar sus diferencias" (V); "para sostener la igualdad proporcional de obligaciones y derechos que los estados tienen ante la ley" (VI); "para admitir nuevos estados a la Unión Federal o territorios incorporándolos en la Nación" (VII); "para fijar cada año los gastos generales de la Nación en vista de los presupuestos que le presentará el Poder Ejecutivo" (VIII); "para establecer las contribuciones necesarias a cubrir los gastos generales de la República, determinar su inversión, y tomar cuenta de ella al Poder Ejecutivo" (IX); "para arreglar el comercio con las naciones extranjeras, y entre los diferentes estados de la Federación y tribus de los indios" (X); "para contraer deudas sobre el crédito de la República, y designar garantías para cubrirlas" (XI); "para reconocer la deuda pública de la Nación, y señalar medios de consolidarla" (XII); "para

declarar la guerra en vista de los datos que le presente el Poder Ejecutivo" (XIII); "para conceder patentes de corso, y declarar buenas o malas las presas de mar y tierra" (XIV); "para designar y organizar la fuerza armada de mar y tierra, fijando el cupo respectivo a cada Estado" (XV); "para organizar, armar, y disciplinar la Milicia de los estados, reservando a cada uno el nombramiento respectivo de oficiales, y la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por el Congreso General" (XVI); "para aprobar los tratados de paz, de alianza, de amistad, de Federación, de neutralidad armada, y cualquier otro que celebre el Poder Ejecutivo" (XVII); "para arreglar y uniformar el peso, valor, tipo, ley y denominación de las monedas en todos los estados de la Federación, y adoptar un sistema general de pesos y medidas" (XVIII); "para conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la Federación" (XIX), y "para habilitar toda clase de puertos" (XX).

En el apartado referente al Poder Ejecutivo Federal, se indica que "el Supremo Poder Ejecutivo se depositará por la Constitución en el individuo o individuos que ésta señale: serán residentes y naturales de cualquiera de los estados o territorios de la Federación" (art. 15), y que "todos los decretos y órdenes del Supremo Poder Ejecutivo, deberán ir firmados del Secretario del Ramo a que el asunto corresponda; y sin este requisito no serán obedecidos" (art. 17).

En el artículo 16 se indica que las atribuciones del Poder Ejecutivo a más de otras que se fijarán en la Constitución, son las de: "poner en ejecución las leyes dirigidas a consolidar la integridad de la Federación, y a sostener su independencia en lo exterior y su unión y libertad en lo interior" (I); "nombrar y remover libremente los secretarios del despacho" (II); "cuidar de la recaudación, y decretar la distribución de las contribuciones generales con arreglo a las leyes" (III); "nombrar los empleados de las oficinas generales de hacienda según la Constitución y las leyes" (IV); "declarar la guerra, previo decreto de aprobación del Congreso General; y no estando éste reunido, del modo que designe la Constitución" (V); "disponer de la fuerza permanente de mar y tierra, y de la Milicia activa para la defensa exterior, y seguridad interior de la Federación" (VI); "disponer de la Milicia Local, para los mismos objetos; aunque para usar de ella fuera de sus respectivos estados, obtendrá previo consentimiento del Congreso General, quien calificará la fuerza necesaria" (VII); "nombrar los empleados del Ejército, Milicia Activa y Armada, con arreglo a ordenanzas, leyes vigentes, y a lo que disponga la Constitución" (VIII); "dar retiros, conceder licencias, y arreglar las pensiones de los militares de que habla la atribución anterior conforme a las leyes" (IX); "nombrar los enviados diplomáticos y cónsules con aprobación del Senado, y

entretanto éste se establece, del Congreso actual" (X); "dirigir las negociaciones diplomáticas, celebrar tratados de paz, amistad, alianza, federación, tregua, neutralidad armada, comercio y otros; mas para prestar o negar su ratificación a cualquiera de ellos, deberá preceder la aprobación del Congreso General" (XI); "cuidar de que la justicia se administre pronta y cumplidamente por los tribunales generales, y de que sus sentencias sean ejecutadas según la ley" (XII); "publicar, circular, y hacer guardar, la Constitución General y las leyes; pudiendo por una sola vez, objetar sobre éstas cuando le parezca conveniente dentro de diez días, suspendiendo su ejecución hasta la resolución del Congreso" (XIII); "dar decretos y órdenes para el mejor cumplimiento de la Constitución y leyes generales" (XIV), y "suspender de los empleos hasta tres meses, y privar hasta de la mitad de sus sueldos, por el mismo tiempo, a los empleados de la Federación infractores de las órdenes y decretos: y en los casos que crea deber formarse causa a tales empleados, pasará los antecedentes de la materia al Tribunal respectivo" (XV).

En el apartado referente al Poder Judicial Federal, se indica que "todo hombre, que habite en el territorio de la Federación, tiene derecho a que se le administre pronta, completa, e imparcialmente justicia; y con este objeto la Federación deposita el ejercicio del Poder Judicial en una Corte Suprema de Justicia, y en los tribunales que se establecerán en cada Estado; reservándose demarcar en la Constitución las facultades de esa Suprema Corte" (art. 18), y que "ningún hombre será juzgado, en los estados o territorios de la Federación sino por leyes dadas y tribunales establecidos antes del acto, por el cual se le juzgue. En consecuencia, quedan para siempre prohibidos todo juicio por comisión especial, y toda ley retroactiva" (art. 19).

En el apartado referente al gobierno particular de los estados, se indica que el "gobierno de cada Estado se dividirá para su ejercicio, en los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y nunca podrán reunirse dos o más de ellos en una corporación o persona, ni el Legislativo depositarse en un individuo" (art. 20).

En el apartado referente al Poder Legislativo de los estados, se indica que el "Poder Legislativo de cada Estado residirá en un Congreso compuesto del número de individuos, que determinarán sus constituciones particulares, electos popularmente y amovibles en el tiempo y modo que ellas dispongan" (art. 21).

En el apartado referente al Poder Ejecutivo de los estados, se indica que el “ejercicio del Poder Ejecutivo de cada Estado no se confiará sino por determinado tiempo, que fijará su respectiva Constitución” (art. 22).

En el apartado referente al Poder Judicial de los estados, se indica que el “Poder Judicial de cada Estado se ejercerá por los tribunales que establezca su Constitución” (art. 23).

En el aparatado referente a las prevenciones generales, se indica que las “constituciones de los estados no podrán oponerse a esta Acta ni a lo que establezca la Constitución General: por tanto, no podrán sancionarse hasta la publicación de esta última” (art. 24); que “las legislaturas de los estados podrán organizar provisionalmente su Gobierno Interior, y entretanto lo verifican, se observarán las leyes vigentes” (art. 25); que “ningún criminal de un Estado tendrá asilo en otro; antes bien, será entregado inmediatamente a la autoridad que le reclame” (art. 26); que “ningún Estado establecerá sin consentimiento del Congreso General derecho alguno de tonelaje ni tendrá tropas ni navíos de guerra en tiempo de paz” (art. 27); que “ningún Estado sin consentimiento del Congreso General, impondrá contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones, mientras la ley no regule cómo deban hacerlo” (art. 28); que “ningún Estado entrará en transacción o contrato con otro, o con potencia extranjera, ni se empeñará en guerra, sino en caso de actual invasión, o en tan inminente peligro que no admita dilaciones” (art. 29); que “la Nación está obligada a proteger por leyes sabias y justas los derechos del hombre y del ciudadano” (art. 30); que “todo habitante de la Federación tiene libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación anterior, a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad de las leyes” (art. 31); que “el Congreso de cada Estado remitirá anualmente al General de la Federación nota circunstanciada y comprensiva: de los ingresos y egresos de todas las tesorerías que haya en sus respectivos distritos, con relación del origen de unos y otros, de los ramos de industria, agricultura, mercantil y fabril, indicando sus progresos o decadencia con las causas que los producen; de los nuevos ramos que puedan plantearse, con los medios de alcanzarlos; y de su respectiva población”; que “todas las deudas contraídas antes de la adopción de esta Acta se reconocen por la Federación, a reserva de su liquidación y clasificación, según las reglas que el Congreso General establezca” (art. 33); que “la Constitución General y esta Acta garantizan a los estados de la Federación la forma de gobierno adoptada en la presente Ley; y cada Estado queda también comprometido a sostener a toda costa la Unión Federal” (art. 34); que

“esta Acta sólo podrá variarse en el tiempo y términos que prescriba la Constitución General” (art. 35), y que “la ejecución de esta Acta se somete bajo la más estrecha responsabilidad al Supremo Poder Ejecutivo, quien desde su publicación se arreglará a ella en todo” (art. 36).

El 1 de febrero el Congreso Constituyente Mexicano dispuso que “el Supremo Poder Ejecutivo determinara que la publicación del Acta Constitutiva se haga del modo más solemne en todos los estados y pueblos de la Federación”, y que “todas las autoridades civiles, militares, eclesiásticas, y los individuos de cualquier corporación, los empleados de oficinas, jefes de Milicia, oficialidad y tropa prestarán el juramento de su observancia”. Para el cumplimiento de esta disposición el Supremo Poder Ejecutivo dispuso que “el Bando para la publicación será nacional, con la solemnidad que ha sido costumbre en actos de esta clase, yendo a la cabeza el Comandante General, cuatro regidores, dos alcaldes, igual número de individuos de la Diputación Provincial presididos todos por el Jefe Político, y la comitiva bajo de masas, con uno de los escribanos que se llamaban de gobierno (Decreto del 1 de febrero de 1824. AHEM: G.G.G. vol. 2, exp. 2).

El 28 de febrero la Diputación Provincial acordó el ceremonial a seguir en la instalación del Congreso Constituyente del Estado de México a efectuarse el 2 de marzo a las nueve de la mañana, el cual consistió en: el canto solemne de un Te Deum en la Catedral, en el juramento de los diputados electos en la Sala Capitular del Ayuntamiento de la Ciudad de México y en la elección del Presidente, Vicepresidente y de dos secretarios. Se dispuso que “para el ceremonial de la Iglesia, como para que se solemnice la instalación del Congreso con tres repiques generales, y otras tantas salvas de artillería, que se harán al empezar el Te Deum, al concluirse, y en el acto de la instalación, el excelentísimo Señor Jefe Político Superior tomará las disposiciones conducentes, poniéndose de acuerdo con el Cabildo Eclesiástico, con el Comandante General de la Provincia, con el Ayuntamiento y demás autoridades que le parezcan, expidiendo los avisos al público, citaciones, y demás órdenes que estime correspondientes” (Acuerdo del 28 de febrero de 1824. AHEM: G.G.G. vol. 2, exp. 7).

La Diputación de la Provincia de México (1823-1824) que operó del 23 de septiembre de 1823 al 1 de marzo de 1824 se integró con siete vocales propietarios y siete vocales suplentes nombrados por electores secundarios en junta de provincia y el Jefe Político de la Provincia de México. Expidió un decreto (Índice).

Parte II
Congresos de la Primera República Federal (1824-1835)

En este apartado se presentan las acciones más relevantes que adoptó el Congreso del Estado de México en los primeros once años de su vida institucional, sin dejar de lado el entorno local y nacional en el que se desenvolvió.

En el periodo comprendido entre el 2 de marzo de 1824 y el 5 de octubre de 1835 operaron el Congreso Constituyente en dos etapas y seis congresos constitucionales, con la inclusión de dos lapsos en que se suspendió el orden constitucional.

Los ocho congresos que operaron en el Estado de México en este periodo son los siguientes:

1.- El Congreso Constituyente (1824-1827) que operó del 2 de marzo de 1824 al 1 de marzo de 1827.

2.- El Primer Congreso Constitucional (1827-1829) que operó del 2 de marzo de 1827 al 1 de marzo de 1829.

3.- El Segundo Congreso Constitucional (1829-1830) que operó del 2 de marzo de 1829 al 1 de marzo de 1830.

4.- El Congreso Constituyente (1830) que operó del 8 de marzo al 14 de agosto de 1830.

5.- El Primer Congreso Constitucional (1830-1831) que operó del 15 de agosto de 1830 al 1 de marzo de 1831.

6.- El Segundo Congreso Constitucional (1831-1832) que operó del 2 de marzo de 1831 al 16 de octubre de 1832.

7.- El Tercer Congreso Constitucional (1833-1834) que operó del 17 de febrero de 1833 al 23 de agosto de 1834.

8.- El Cuarto Congreso Constitucional (1834-1835) que operó del 25 de agosto de 1834 al 5 de octubre de 1835.

Capítulo 1
Congreso Constituyente (1824-1827)

El Congreso Constituyente (1824-1827) que operó del 2 de marzo de 1824 al 1 de marzo de 1827 lo integraron 21 diputados electos en junta de provincia. Los diputados propietarios y suplentes en funciones eran: José Francisco Guerra, Benito José Guerra, Manuel Cotero, Pedro Martínez de Castro, Manuel Villaverde, José Domingo Lazo de la Vega, Alonso Fernández, Manuel de Cortázar, Francisco de las Piedras, Antonio de Castro (Suplente),[25] José Ignacio Nájera, Baltazar Pérez, Mariano Tamariz, Ignacio Mendoza, José Calixto Vidal (Suplente),[26] Joaquín Villa, José de Jáuregui, José Nicolás de Oláez (Suplente),[27] José María Luis Mora (Poder Legislativo I, 2001. Constitución Política del 14 de febrero de 1827: 105), Antonio Velasco de la Torre, Mariano Casela, Pedro Valdovinos, Francisco Moctezuma y José Figueroa (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 5 de mayo de 1824: 7).

El 2 de marzo de 1824 conforme al protocolo establecido por la Diputación Provincial, los "diputados del Congreso del Estado, los individuos de la Diputación Provincial con el Secretario, los del Ayuntamiento de esta Corte reunidos en la Sala Capitular de este Cuerpo, de regreso de la Santa Iglesia Catedral, donde se cantó un solemne Te Deum, se procedió por el Secretario de la Diputación Provincial a recibir a los señores diputados el juramento ante el Jefe Superior Político (Melchor Múzquiz) bajo la fórmula siguiente: Juráis a Dios haberos bien y fielmente el encargo que el Estado os ha encomendado, mirando en todo por el bien y prosperidad del mismo Estado, guardar y cumplir el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, y haciéndola igualmente guardar y cumplir a todas las autoridades, corporaciones e individuos del Estado, y lo mismo en cuanto a la Constitución General de la Federación Mexicana que forme el Congreso Constituyente. Y habiendo contestado todos afirmativamente, se procedió por escrutinio secreto a la elección del Presidente, Vicepresidente y Secretario, y fueron nombrados para Presidente el Ciudadano José Francisco Guerra, para Vicepresidente el Ciudadano José Ignacio Nájera, y para secretarios (propietarios) los ciudadanos José Figueroa y Joaquín Villa. Concluidas las elecciones, se retiraron el Jefe Superior Político, la Excelentísima Diputación Provincial y el Excelentísimo Ayuntamiento, quedando el Congreso instalado y en sesión" (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 2 de marzo de 1824: 3).

[25] El 25 de octubre de 1824 cubrió la vacante que dejó el Diputado Francisco Moctezuma.
[26] El 10 de febrero de 1827 cubrió la vacante que dejó el Diputado Mariano Casela, tras su fallecimiento.
[27] El 26 de enero de 1825 cubrió la vacante que dejó el Diputado José Figueroa.

Los diputados que rindieron su protesta de ley eran: José Francisco Guerra, Benito José Guerra, Manuel Cotero, José Domingo Lazo de la Vega, Alonso Fernández, Manuel de Cortázar, Francisco de las Piedras, José Ignacio de Nájera, Ignacio Mendoza, Joaquín Villa, José María Luis Mora, Antonio Velasco de la Torre, Mariano Casela, Francisco Moctezuma y José Figueroa (Poder Legislativo I, 1827. Actas del 3, 11 y 16 de marzo de 1824: 7, 39 y 54).[28]

El Congreso dispuso "que entre tanto organiza el Gobierno Provisional y nombra Gobernador", continúe en el ejercicio de sus funciones el Jefe Político Melchor Múzquiz (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 1 del 2 de marzo de 1824: 5).

El Congreso (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 2 del 2 de marzo de 1824: 5) al establecer las bases para la organización provisional del Gobierno Interior del Estado de México, dispuso "estar instalado legítimamente y en plenitud de ejercer sus funciones" (art. 1º); que "los diputados son inviolables por sus opiniones y dictámenes, y en razón de sus causas y demandas se observará lo mismo que está determinado para los miembros de la Representación Nacional" (art. 2º); que "siendo la forma de su gobierno republicana, representativa, popular; y debiéndose dividirse aquel en los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, reside el primero en el Congreso" (art. 3), y "que ejerciéndolo, organizará el gobierno interior: formará la Constitución Particular del Estado, luego que la General de la Nación esté sancionada y publicada: dictará asimismo, las leyes que exija su mayor bien y felicidad: establecerá todo lo concerniente al sistema de su Hacienda, y hará lo demás que no le está prohibido por el Acta Constitutiva" (art. 4º).

En cuanto a las otras instancias de gobierno, determinó que el "Poder Ejecutivo se ejercerá interinamente por una persona, con el título de Gobernador del Estado, nombrado por este Congreso" (art. 5º); que para "el mejor desempeño de sus funciones le nombrará el mismo Congreso un Consejo compuesto de un Teniente, el que hará las veces de Gobernador en los casos de muerte, renuncia o remoción, y de otras cuatro personas" (art. 6º); que "sus facultades en el Estado serán las ordinarias que ejerce actualmente el Supremo Poder Ejecutivo en toda la Federación, y no se le reservan exclusivamente en la Acta Constitutiva" (art. 7º); que "el Poder Judicial del Estado reside, por ahora, en las autoridades que actualmente lo ejercen" (art. 8º); que "el Tribunal de la Audiencia, en las causas civiles y criminales del territorio del Estado,

[28] El Congreso integró la Mesa Directiva del mes de marzo de su primer año de gestión.

continuará también por ahora en el uso de las facultades que hoy tiene" (art.9º); que "los ayuntamientos y demás corporaciones, autoridades, tanto civiles como militares y eclesiásticas, continuarán desempeñando las funciones que les están encomendadas, arreglándose en todo a las leyes vigentes" (art. 10); que "por principio universal e incontestable queda establecido que, los habitantes del Estado no podrán ser gravados sino en la proporción que lo fuesen los de los otros estados" (art. 11), y que "este decreto se comunicará a todas las autoridades y corporaciones del Estado, para que se proceda a su circulación y observancia" (art. 12).

El Congreso determinó el modo de encabezar sus decretos, los cuales debía publicar el Gobernador (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 3 del 2 de marzo de 1824: 7).

El Congreso acordó que "el Reglamento Interior del Congreso Nacional sirviese en lo adaptable y provisionalmente para el Congreso del Estado". Para tal efecto, se dijo que "se pasase a una Comisión que debía nombrarse, dicho Reglamento, para modificarlo según las circunstancias" (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 2 de marzo de 1824: 6).

El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Mexicano se integraba con capítulos referentes: al lugar de las sesiones, al Presidente y Vicepresidente, a los secretarios, a los diputados, a las sesiones, a las comisiones, a las proposiciones y discusiones, a las votaciones, a los decretos, al modo de exigir la responsabilidad a los secretarios del despacho, al ceremonial con el que deberá ser recibido el Poder Ejecutivo en el Congreso, al orden y gobierno interior del Palacio del Congreso, a la Secretaría del Congreso, a la Guardia del Congreso y a la Tesorería del Congreso (Dublan I, 1876. Decreto del 25 de abril de 1823: 635).

El Congreso acordó que se comunicara mediante un oficio su instalación al Congreso General y al Supremo Poder Ejecutivo de la Federación (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 2 de marzo de 1824: 3).

El 3 de marzo los diputados aprobaron las comisiones del Congreso. La de Policía y Peticiones quedó integrada por el Dr. Guerra, Figueroa y Villa, Mendoza, Velasco, Casela y Tamariz; la de Constitución por el Dr. Guerra, Jáuregui, Nájera, Mora y Fernández; la de Justicia, Negocios Eclesiásticos y Legislación por Cortázar, Martínez de Castro, Nájera y Casela; la de Gobernación por el Lic. Guerra, Mora, Lazo y Cortázar; la de Industria por Velasco, Cotero, Valdovinos, Mendoza y Tamariz; la de

Hacienda por el Lic. Guerra, Nájera y Jáuregui; la de Milicias por Moctezuma, Fernández y Figueroa; y la de Instrucción Pública por el Dr. Guerra, Villa, Villaverde y Piedras" (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 3 de marzo de 1824: 7).

El Congreso integró una comisión especial para que modificara "conforme a las circunstancias el Reglamento Interior del Congreso Nacional. Dicha Comisión se integró con los diputados: Alonso Fernández, Manuel Cotero y Mariano Casela (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 3 de marzo de 1824: 8).

El 4 de marzo el Congreso nombró al Brigadier Manuel Gómez Pedraza como Gobernador, a Melchor Múzquiz como Teniente Gobernador y como consejeros a: José Alejo Alegría, José Francisco Nava, Mariano Esteva y Pedro Verdugo (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 5 del 4 de marzo de 1824: 7).

El Congreso acordó (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 6 del 4 de marzo de 1824: 8) que "todos los empleados, autoridades, corporaciones propias del Estado, así civiles como militares y eclesiásticas, prestarán juramento de obediencia a este Congreso Constituyente, y reconocerán como legítimas a las autoridades que de él dimanen" (art. 1º); que "el Gobernador del Estado, su Teniente, los miembros del Consejo y el Tesorero General prestarán el juramento de obediencia al Congreso en el Salón de sus Sesiones, verificándolo los dos primeros bajo la fórmula especial aprobada al efecto" (art. 4º); que "el Gobernador de la Mitra, los jefes de oficinas y corporaciones de esta Capital, y los prelados de las religiones, lo harán ante el Gobernador del Estado; los foráneos ante el Alcalde, y los subalternos de éstos, ante sus jefes respectivos" (art. 5º); que "en todas las ciudades, villas y pueblos del Estado se hará dicho juramento ante el respectivo Ayuntamiento en el modo que éste prevenga, quien lo prestará ante el Alcalde después de haber recibido el de éste" (art. 6º); que "el clero secular jurará ante el Gobernador de la Mitra, verificándolo los demás regulares ante sus respectivos prelados" (art. 7º); que "los jefes, oficiales y tropas de la Milicia del Estado prestarán el juramento al frente de sus banderas" (art. 8º); que "todos los juramentos deberán hacerse en público" (art. 9º), y que "se pasará constancia de todos los actos al Gobernador del Estado, quien lo hará a la Secretaría de este Congreso" (art. 10º).

Se indicaba que la fórmula bajo la cual deberán prestar juramento el Gobernador y su Jefe Político será la siguiente: "¿Reconocéis la soberanía e independencia del Estado de México en orden a su gobierno interior, representado por su Congreso

Constituyente, elegido con arreglo a la Acta Constitutiva y Ley de Convocatoria? Sí reconozco. ¿Juráis observar[29] las leyes y decretos que de él se emanen? Sí juro. Si así lo hiciereis, Dios os lo premie, y si no el Estado os lo demande" (art. 2º).

Melchor Múzquiz acudió al Congreso a rendir su protesta de ley como Teniente Gobernador y Encargado del Poder Ejecutivo, al no asumir el cargo de Gobernador Manuel Gómez Pedraza. En aquella ocasión el Teniente Gobernador después de jurar su encargo se sentó "a la derecha del Señor Presidente del Congreso, quien lo arengó brevemente recordándole los buenos servicios que había hecho en todo tiempo a la Patria, con especialidad al Estado de México, por quien había sido Diputado, gloriándose de que toda la Federación y particularmente el Estado, encontrarían en él un apoyo firme. El Señor Múzquiz contestó que aunque cortas, había dado algunas pruebas de amor a la Patria, y que en adelante se esforzaría a dar otras para corresponder a la alta confianza que se había dado en su persona: que aunque por su nacimiento no pertenece a este Estado sino a otro de la Federación, con todo, sacrificaría por él su existencia, cumpliría y haría cumplir las leyes y sostendría al Congreso" (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 4 de marzo de 1824: 15).

El 5 de marzo el Congreso dispuso que "se harán rogaciones públicas por tres días en todas las iglesias del Estado, a fin de implorar del Ser Supremo, le comunique sus luces para el acierto de sus deliberaciones" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 4 del 5 de marzo de 1824: 7).

El Congreso dispuso que se hiciera una "manifestación a los Supremos Poderes de los sentimientos que animan a este Congreso para sostener las autoridades nacionales, y cumplir exactamente las leyes y disposiciones que son el resorte de ellas en la esfera de sus atribuciones", y la proposición para que se "dirija un manifiesto al Estado instruyéndole de la conducta que piensa observar el Congreso, sacrificándose por su bien, sin desviarse en su marcha de la franqueza y de la justicia que deben caracterizar sus disposiciones, y sosteniendo con firmeza el respeto que se debe tanto a las mismas autoridades del Estado, como a las supremas de la Nación" (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 5 de marzo de 1824: 21).

El 8 de marzo el Congreso aprobó la Orden Provisional que Deberá Observar la Guardia del Congreso del Estado de México (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 8 de

[29] En el artículo 3º se indicaba que "las autoridades después de la palabra, observar, añadirán en la fórmula las palabras, y hacer observar".

marzo de 1824: 28), en la cual se indicó que: “la Guardia se compondrá de un Oficial, de un Sargento, dos cabos y nueve soldados” (art.1º); que “no habrá más Centinela por ahora que el de la entrada del edificio en el Cuerpo de Guardia” (art. 2º); que “al Soberano Congreso General y al Supremo Poder Ejecutivo se harán los honores acostumbrados: al Congreso del Estado y sus diputaciones que vayan o vengan de oficio se harán los que están prevenidos para el Congreso General y sus diputaciones” (art. 3º); “a ninguna otra persona se harán honores” (art. 4º); “cuidará que no se agolpen pelotones de gente para entrar al edificio, y de que no se reúnan ni se mantengan en sus inmediaciones tropa armada, sin previo conocimiento del objeto de su reunión, que se avisará al Señor Presidente” (art. 5º); “dará parte al Señor Presidente de toda novedad que ocurra digna de su noticia” (art. 6º); “le dará asimismo, por escrito antes de abrirse la sesión, de todas las ordinarias y extraordinarias que hayan ocurrido en las veinte y cuatro horas anteriores” (art. 7º); “el Oficial entrante y el saliente avisarán de su relevo, solicitando al Señor Presidente el permiso como es de estilo” (art. 8º), y “dependiendo esta Guardia solo del Presidente del Congreso, no será visitada por el Jefe de día ni por las rondas de la Plaza” (art. 9º).

El 9 de marzo el Congreso determinó que “el tratamiento del Gobernador, tanto de palabra como por escrito, será de excelencia”, que “el del Teniente será el mismo cuando haga las veces de Gobernador” (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 7 del 9 de marzo de 1824: 9).

El Congreso General concedió “amnistía a los habitantes de la República, sobre la responsabilidad que de cualquier modo puedan haber contraído en la manifestación de sus opiniones políticas; comprendiéndose en ella aún aquellos que se hallen sentenciados” (Dublan I, 1876. Decreto del 9 de marzo de 1824: 704).

El 10 de marzo el Congreso dispuso que “para dictar leyes y decretos que exigen imperiosamente las circunstancias, es necesario tener conocimiento de éstas, y al efecto de tomarlo sobre la demora en los castigos de delincuentes famosos que excitan la expectación pública, pido se diga al Gobernador que tomando los informes convenientes del giro y estado de las causas graves de ladrones y asesinos, lo ponga todo en noticia de este Congreso” (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 10 de marzo de 1824: 36).

El 11 de marzo el Congreso al dividir el Partido de Huichapan en dos, determinó que esta jurisdicción quede “con los pueblos de Tecozautla, Tasquillo, Alfayucan, Nopala y

Chapantongo: y Jilotepec, con la Villa del Carbón, Chapa de Mota, Acambay, Aculco, San Andrés Timilpa, y San Juan Acajuchitlán" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 8 del 11 de marzo de 1824: 9).

Pedro Valdovinos rindió su protesta de ley como Diputado (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 11 de marzo de 1824: 39).

El 12 de marzo el Congreso (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 12 de marzo de 1824: 43) a Iniciativa del Diputado José María Luis Mora acordó excitar "al Gobernador para que con la brevedad posible se proceda a hacer los reparos indispensables de las obras del Desagüe" (art. 1º); para que "mande formar y examinar su presupuesto con consulta del Consejo, de la cantidad necesaria para el efecto" (art. 2º), y para que "a este fin solicite al Ministerio de Hacienda se le entreguen los productos del impuesto sobre las carnes que se cobra en los alcabalatorios, el producto de la del vino, por ser esta renta inconcusamente del Estado" (art. 3º).

El 13 de marzo el Congreso acordó que su "Presidente tendrá el tratamiento de excelencia" y "los secretarios de señoría" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 9 del 13 de marzo de 1824: 10).

El Congreso dispuso que "la Secretaría que era de la Diputación Provincial (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 10 del 13 de marzo de 1824: 10) lo será en adelante del Congreso del Estado" (art. 1º); que "los diputados secretarios son los jefes de la Secretaría de este Congreso, con las facultades que están detalladas para los del General, en su Reglamento Interior" (art. 3º); que "la Tesorería que fue de la Diputación Provincial, continuará provisionalmente en el mismo orden que hasta aquí, y se denominará Tesorería Provisional del Estado de México" (art. 5º), y que "el Tesorero actual presentará un estado circunstanciado de los fondos y caudales con que se halla la Tesorería, expresando los ingresos y gastos que tiene la oficina, y el estado particular de cada uno de los ramos y depósitos que están a su cuidado, y además, una noticia circunstanciada de la buena o mala administración que tengan actualmente los ramos, expresando los abusos que advierta y proponiendo los medios de remediarlos" (art. 6º).

El Congreso dispuso que cuando se hable por escrito o por palabra con este Congreso se comience con el vocablo "Honorable",[30] en virtud de que a decir del Diputado Benito Guerra: "todas las corporaciones habían dado al Congreso de este Estado el título de Honorable, y sería en cierta manera desairarlas si no se adoptaba este título, cuya significación por otro lado, equivale a respetable y digno de honor y veneración, y últimamente este Congreso no debía singularizarse entre los demás, rehusándose a los que los otros han admitido" (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 13 de marzo de 1824: 50).

El 16 de marzo rindieron su protesta de ley como diputados del Congreso: Mariano Tamariz, Baltazar Pérez y Manuel Villaverde (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 16 de marzo de 1824: 54).

El Congreso determinó que se hiciera una indicación al Soberano Congreso, a fin de que se sirva mandar poner a disposición de este Congreso el expediente sobre el Reglamento de Bienes de Comunidad y Arbitrios para Fondos de los Ayuntamientos (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 16 de marzo de 1824: 54).

El 17 de marzo el Congreso estableció el depósito legal de publicaciones oficiales, al determinar que se le pasase "un ejemplar de todos los papeles públicos para su Librería" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 11 del 17 de marzo de 1824: 11).

El 18 de marzo el Congreso aprobó una proposición dirigida a los diputados del Congreso General nombrados por el Estado de México (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 18 de marzo de 1824: 63), para indicarles que en sus deliberaciones "se sostendrá la integridad del territorio de México" (art. 1º); "la suma claridad en la división de los puntos de gobierno y de rentas" (art. 2º); "la total independencia respecto de las autoridades supremas en la administración de sus rentas particulares" (art. 3º); "la subordinación de las tropas que basten a mantener el orden mientras se hallen en el Distrito del Estado, a su Gobernador, y que por conducto de éste reciban las órdenes correspondientes" a cierta dependencia (art. 4º); "se promoverá la formación de un Distrito para la residencia de los Supremos Poderes, obligándose al Estado de México, como desde luego se obliga a compensar por su parte los perjuicios que resienta el Estado en que se forme dicho Distrito" (art. 5º); y que "si entendieren que por algún motivo puede dilatarse la asignación de rentas a los estados, promuevan se apliquen

[30] En la proposición original se proponía identificar al Congreso como "Señor", que era el título que empleaban otros congresos del País.

desde luego al de México, sin perjuicio de las providencias que en lo sucesivo pueda tomar el Congreso General en la materia, el producto de la alcabala sobre el ramo de pulques" (art. 6º).

El 22 de marzo el Congreso aprobó la integración de "una comisión especial que informe de la división y señalamiento de las rentas generales de la Federación y de las particulares de cada Estado. Dicha comisión se integró con los diputados: José Guerra, José María Luis Mora, José de Jáuregui y José Ignacio de Nájera (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 22 de marzo de 1824: 74).

El Congreso integró a la Comisión Especial de Reglamento a los diputados: José Domingo Lazo de la Vega y Pedro Martínez de Castro. En dicha Comisión participaba el Diputado Alfonso Fernández (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 22 de marzo de 1824: 74).

El 23 de marzo el Congreso acordó que se integrara una comisión de su seno, para analizar una proposición que se estaba discutiendo en el Congreso General, para otorgarle facultades extraordinarias al Supremo Poder Ejecutivo. Dicha comisión se integró con los diputados: José María Luis Mora, Joaquín Villa, José Ignacio de Nájera y José de Jáuregui (Acta de la sesión secreta del 23 de marzo de 1824. BJMLM: Colección de Actas).

El 26 de marzo el Congreso acordó que "no dé el Gobernador los partes ordinarios sobre la tranquilidad pública que le exige el Supremo Poder Ejecutivo", y que "se prevenga al Gobernador, mande suspender al Rector del Colegio de San Ildefonso la orden sobre la variación del traje de los colegiales" (Acta de la sesión secreta del 26 de marzo de 1824. BJMLM: Colección de Actas).

El 1 de abril el Congreso con el propósito de limar las diferencias suscitadas con el Poder Ejecutivo a raíz de la expedición de las proposiciones aprobadas el 26 de marzo, acordó que "no está en el caso de hacer variación alguna en las proposiciones que tiene dictadas", y "que esta resolución se comunique al Gobernador para su inteligencia y gobierno" (Acta de la sesión secreta del 1 de abril de 1824. BJMLM: Colección de Actas).

El 2 de abril el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de abril de su primer año de gestión, presidida por el Diputado José Ignacio Nájera. Nombró como

Vicepresidente al Diputado José de Jáuregui y como Secretario Propietario al Diputado Pedro Valdovinos (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 2 de abril de 1824: 103).

El Congreso tomó conocimiento de un oficio que le dirigió el Teniente Gobernador, en el que "avisa que el Supremo Poder Ejecutivo se ha servido disponer que al Congreso Constituyente de México se franquee el edificio de la Inquisición. Para atender dicho asunto el Presidente nombró una comisión integrada por los diputados: José de Jáuregui, Ignacio Mendoza y Joaquín Villa (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 2 de abril de 1824: 103).

El Presidente del Congreso nombró a los integrantes de una comisión especial que debía fijar las dietas de los diputados y los sueldos del Gobernador y de los consejeros. Dicha comisión se integró con los diputados: José María Luis Mora, Mariano Tamariz, Pedro Martínez de Castro y José de Jáuregui (Acta de la sesión secreta del 2 de abril de 1824. BJMLM: Colección de Actas).

El 3 de abril el Congreso acordó que "se excite al Gobierno para que exija a quien corresponda el exacto cumplimiento de la Ley que Abolió la Distinción de Castas (Proposición del 3 de abril de 1824. BJMLM: vol. 21, exp. 352).

El 8 de abril el Congreso determinó (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 8 de abril de 1824: 120) que "los diputados de este Congreso disfrutarán tres mil pesos anuales en clase de dietas en los términos que están concedidos por el Bando del 26 de abril a los diputados del Congreso General" (art. 1º); que "el Gobernador tendrá cinco mil pesos de sueldo y el Teniente Gobernador disfrutará de los mismos cuando ejerciera las funciones de Gobernador" (art. 2º); que "el Teniente Gobernador tendrá tres mil quinientos pesos" (art. 3º); que "a cada uno de los consejeros se abonarán en clase de gratificación dos mil pesos" (art. 4º), y que "todos los sueldos deberán pagarse mensualmente por la Tesorería Provisional del Estado" (art. 5º).

El Presidente del Congreso nombró una comisión para que resolviera lo conducente sobre la renuncia del Gobernador Manuel Gómez Pedraza, la cual se integró con los diputados: Benito José Guerra, José de Jáuregui y José Domingo Lazo de la Vega (Acta de la sesión secreta del 8 de abril de 1824. BJMLM: Colección de Actas).

El 10 de abril el Congreso por primera vez en su historia contempló en sus decretos los considerandos,[31] pues en aquella ocasión al iniciar la promoción del fomento de las actividades productivas, determinó que "será libre la fabricación de cerveza en el territorio del Estado" "en vista de la instancia de Justino Tuaillón, sobre que se le declare la propiedad de introductor de la fabricación de cerveza, con arreglo a la Ley de 2 de octubre de 1820" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 12 del 10 de abril de 1824: 11).

El 12 de abril el Congreso acordó suspender "por poco tiempo la resolución para admitir o no la renuncia que dictó el Señor Gómez Pedraza" al cargo de Gobernador (Acta de la sesión secreta del 12 de abril de 1824. BJMLM: Colección de Actas).

El 13 de abril el Congreso al aprobar el protocolo que debía observarse en las ceremonias públicas, determinó que "después del Gobernador y su Consejo presidirá el Ayuntamiento en todas las funciones cívicas y religiosas" (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 13 de abril de 1824: 150).

El Congreso dispuso que "las dietas corrientes de los actuales diputados al Congreso General, se pagarán por la Tesorería General, a la que se le dará el aviso correspondiente" (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 13 de abril de 1824: 150).

El 23 de abril el Congreso propuso (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 23 de abril de 1824: 170) "que se invite al Colegio de Abogados y a la Compañía Lancasteriana, para que establezcan academias de principios de legislación, y de economía política" (art. 1º); que "la Academia de Jurisprudencia Teórico Práctica concluya la reforma de sus estatutos en los que se prevenga que haya lecciones de Derecho Público, Principios de Legislación y Economía Política" (art. 2º), y que "se pasen estas prevenciones al Gobernador para su exacto cumplimiento y que participe las resultas" (art. 3º).

El 27 de abril el Congreso dispuso que "los alcaldes de los ayuntamientos están facultados para hacer efectivas las multas impuestas por los reglamentos de policía y bandos de buen gobierno que estén vigentes, cualquiera que sea su cuantía" (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 27 de abril de 1824: 187).

[31] Esta disposición fue temporal, pues el uso de los considerandos no se instituyó en el Siglo XIX.

El 4 de mayo el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de mayo de su primer año de gestión, presidida por el Diputado José María de Jáuregui. Nombró como Vicepresidente al Diputado Mariano Tamariz, como Secretario Propietario al Diputado Alonso Fernández y como Secretario Suplente al Diputado Baltazar Pérez (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 4 de mayo de 1824: 206).

El 5 de mayo el Congreso aprobó la integración de sus comisiones. La de Constitución se integró con el Doctor Guerra, el Doctor Mora, Jáuregui, Fernández y Casela; la de Justicia, Negocios Eclesiásticos y Legislación con Martínez de Castro, Tamariz, Fernández y Mora; la de Gobernación con el Licenciado Guerra, Lazo, Cortázar y Figueroa; la de Industria con Velasco, Cotero, Mendoza, Tamariz y Casela; la de Minería con Lazo, Cotero y Moctezuma; la de Hacienda con el Licenciado Guerra, Nájera Jáuregui, Martínez de Castro y Velasco; la de Milicia con Piedras, Moctezuma, Figueroa y Pérez; la de Instrucción Pública con el Doctor Guerra, Casela, Villa y Jáuregui; la de Corrección de Estilo con Villa, Villaverde, Pérez y el Doctor Guerra; la de Policía con el Presidente, secretarios y Mendoza; y la de Peticiones con el Secretario más antiguo, Villaverde y Lazo (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 5 de mayo de 1824: 216).[32]

El Congreso dispuso "que todos los asuntos que quedaron pendientes de resolución de la Diputación Provincial se pasen al Gobernador del Estado" (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 5 de mayo de 1824: 217).

El 6 de mayo el Congreso determinó que "por conducto del Gobernador se solicite al Soberano Congreso se sirva conceder al Estado el goce de los productos del pulque y del viento, para pagar a las autoridades de nueva creación y a los jueces de letras de los partidos, y para hacer los gastos más precisos de la Administración" (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 6 de mayo de 1824: 226).

El 7 de mayo el Congreso dispuso que "se reserva exclusivamente la impresión de sus actas originales y de la colección de sus decretos; no pudiendo en consecuencia hacerse impresión de ellos, o reimprimirse sin su permiso" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 13 del 7 de mayo de 1824: 11).

[32] En dicha acta aparecen por primera vez los nombres de los diputados: Antonio Velasco de la Torre, Mariano Casela, Pedro Valdovinos, Francisco Moctezuma y José Figueroa, los cuales no llegaron a suscribir la Constitución Política de 1827.

El Congreso General declaró estados de la Federación a Nuevo León y Coahuila con Texas (Dublan I, 1876. Decreto del 7 de mayo de 1824: 706).

El 8 de mayo el Congreso determinó que la Secretaría del Gobernador la integrarían siete oficiales, ocho escribientes, un Archivero, un Oficial de Archivo, un Portero y un Mozo de Oficio. Determinó que el Secretario ganaría 2,500 pesos, y que "el Encargado de cada Sección se entienda directamente con el Secretario, quedando en consecuencia, suprimidas las denominaciones y funciones de Oficial Mayor" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 14 del 8 de mayo de 1824: 12).

El 11 de mayo el Congreso acordó que la Tesorería cubriera mensualmente las dietas de los diputados (Acta de la sesión secreta del 11 de mayo de 1824. BJMLM: Colección de Actas).

El 14 de mayo el Congreso dispuso "que se excite el celo del Gobierno para que lleve a debido efecto la Ley de las Cortes Españolas, en que se liberta a los llamados indios del servicio personal" (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 14 de mayo de 1824: 287).

El 19 de mayo el Congreso dispuso "que el Gobernador pueda presentar dentro de diez días al Congreso las observaciones que a calificación de su Consejo puedan servir para la mayor claridad de las leyes, decretos y resoluciones que se le remitan para su publicación, suspendiendo ésta entre tanto que el Congreso toma aquellas en consideración" (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 19 de mayo de 1824: 313).

El 22 de mayo el Presidente del Congreso nombró a los integrantes de una comisión especial, que trataría lo referente "a la queja elevada por el Ciudadano Arévalo contra el Gobernador del Estado". Esta comisión se integró con los diputados: Pedro Martínez de Castro, José Domingo Lazo de la Vega, Ignacio Mendoza, Manuel Villaverde, Alonso Fernández y Mariano Casela (Acta de la sesión secreta del 22 de mayo de 1824. BJMLM: Colección de Actas).

El Congreso General declaró Estado de la Federación a Durango (Dublan I, 1876. Decreto del 22 de mayo de 1824: 708).

El 25 de mayo el Congreso General determinó que entre tanto se forma la Ordenanza de la Milicia Activa llamada antes Provincial suplirá la ordenanza que actualmente rige" (Decreto del 25 de mayo de 1824. BJMLM: vol. 20, exp. 311).

El 26 de mayo el Congreso General reconoció la independencia de las Provincias Unidas del Centro de América (Decreto del 26 de mayo de 1824. AHEM: L.L.D.F. vol. 1, exp. 23).

El Congreso General dispuso que “el Gobierno tomara todas las providencias que estime convenientes para poner en absoluta libertad a la Provincia de Chiapas” (Dublan I, 1876. Decreto del 26 de mayo de 1824: 708).

El 1 de junio el Congreso le indicó “al Gobernador estar en sus facultades el nombramiento de los comisionados” de la Milicia Nacional para pacificar al Estado (Acta de la sesión secreta del 1 de junio de 1824. BJMLM: Colección de Actas).

El Presidente del Congreso nombró a los integrantes de una comisión, que debía consultar “las medidas que estén en las facultades del Congreso para la tranquilidad del Estado” (Acta de la sesión secreta del 1 de junio de 1824. BJMLM: Colección de Actas).

El 2 de junio el Congreso nombró como Presidente de la Mesa Directiva del mes de junio de su primer año de gestión al Diputado Mariano Tamariz y como Vicepresidente al Diputado José Figueroa (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 2 de junio de 1824: 378).

El 9 de junio el Congreso dispuso “que en el Salón del Congreso de este Estado se coloquen con decoro las actas de independencia y constitutiva” (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 9 de junio de 1824: 415).

El 10 de junio el Congreso resolvió “que los señores secretarios pueden valerse de uno de los dependientes de la Secretaría para que pongan en limpio las actas secretas” (Acta de la sesión secreta del 10 de junio de 1824. BJMLM: Colección de Actas).

El 18 de junio el Congreso aprobó el último artículo del Reglamento Interior para el Congreso del Estado de México, el cual constó de capítulos referentes: al lugar de las sesiones, a la elección de oficios, al Presidente, al Vicepresidente, a los secretarios, a los diputados, al modo de procederse en las causas criminales de los diputados, a las sesiones públicas, a las sesiones secretas, a las comisiones, a las proposiciones y discusiones, a las votaciones, a los decretos, al orden y gobierno interior del Palacio

del Congreso y a la Secretaría del Congreso (Poder Legislativo, 1824. Reglamento del 18 de junio de 1824).[33]

En el Capítulo I "Del Lugar de las Sesiones", se señala que "el lugar para las sesiones del Congreso será el que el mismo destinare al efecto, que se llamará Palacio del Congreso del Estado" (art. 1); que "designado que sea, cuidará la Comisión de Policía conforme, al encargo que ya tiene, de preparar convenientemente el salón o pieza más cómoda y decorosa para la celebración de las sesiones, proveyéndola de los muebles y utensilios necesarios" (art. 2); que "dispondrá asimismo, con la proporción que el local ofrezca, que se destinen dos o tres piezas para la Secretaría y Archivo, una para la Librería, las precisas para la Tesorería, reservando dos a lo menos de las más inmediatas al Salón de Sesiones para desahogo de los señores diputados, y para despacho de las comisiones" (art. 3); que "se pondrán bancas y asientos cuantos pudiera haber fuera del recinto que ocupa el Congreso, para que los concurrentes extraños puedan asistir y oír las discusiones con la posible comodidad" (art. 9), y que "se proporcionará el local conveniente para los redactores y taquígrafos" (art. 10).

En el Capítulo II sobre las "Elecciones de Oficios", se indica que "cada mes a la fecha en que se hubiere instalado el Congreso, o el día siguiente si aquel fuere festivo, leída y aprobada la acta de la sesión anterior, se procederá a la renovación de los oficios" (art. 11); que "a este efecto se elegirán por escrutinio secreto y a pluralidad absoluta de votos, el nuevo Presidente, el Vicepresidente, un Secretario Propietario, y un Suplente, que comenzarán desde luego a desempeñar sus respectivas funciones; cesando en el acto los del mes anterior" (art. 12); que "nadie podrá ser continuado por reelección en el oficio que ejerce, ni ser elegido para el mismo en los tres meses siguientes" (art. 13); que "verificada que sea la elección, se pasará noticias de ella al Gobernador para que la publique y circule" (art. 14), y que "después de la misma, se dará por el Secretario que ha quedado de más antiguo, una lista de los negocios que se hallen pendientes en las respectivas comisiones, para inteligencia del nuevo Presidente" (art. 15).

En el Capítulo III "Del Presidente", se señala que "el Presidente ejercerá en el Congreso las funciones de Juez entre sus individuos, terminando las contiendas que se suscitaren, durante las sesiones, y de agente suyo, estableciendo y fijando las cuestiones de que se ocupe" (art. 16); "abrirá y cerrará las sesiones a las horas que se

[33] Copia fotostática solicitada a "The Bancroft Library, University of California".

establece este Reglamento, cuidará de mantener el orden, y de que se observe silencio y compostura; volverá a la cuestión al que se extraviare en la palabra, y la concederá a los que la pidieren para que usen de ella cuando les toque por el orden con que la hayan pedido" (art. 17); "podrá citar a sesión extraordinaria, que no esté acordada anteriormente por el Congreso, si un asunto imprevisto lo exigiere" (art. 20), y "ordenará el trámite que deba darse a las proposiciones y negocios con que se dé cuenta al Congreso, señalará día para las discusiones de proyectos de ley y dictámenes de comisiones, y dirigirá la expresión de gracias o las demostraciones de aprecio a las corporaciones, o individuos cuando corresponda" (art. 21).

En el Capítulo IV "Del Vicepresidente", se indica que "el Vicepresidente ejercerá todas las facultades del Presidente en sus faltas, y en defectos de ambos hará de Presidente el menos antiguo de los que lo hayan sido entre los que estén presentes" (art. 23), y que "el Vicepresidente o el que haga sus veces (conforme al artículo anterior) cuidará de que el Presidente o el que ocupe su lugar, guarde el orden debido cuando tome parte en la discusión, y lo llamará a él si se extraviare" (art. 24).

En el Capítulo V "De los Secretarios", se señala que "habrá dos secretarios propietarios, y un Suplente" (art. 25); que "los primeros entre sí, y con el tercero en su caso, alternarán por semanas en la dada cuenta al Congreso con la acta del día anterior, por la que se dará principio a la sesión, con las comunicaciones del Gobernador y correspondencia pública, con los dictámenes de comisiones que no quiera leer por sí alguno de sus miembros, y con las proposiciones de los diputados, expresando cuáles son de primera, y cuáles de segunda lectura" (art. 26); que "entre tanto, el otro Secretario asentará con la posible concisión, exactitud y claridad los puntos de la discusión, trámites de proposiciones e informes, y la resolución que se dé a los negocios" (art. 27); que "deberá comprender el acta una relación clara y sencilla de cuanto se hubiere tratado y resuelto en la última sesión, evitándose toda calificación sobre lo que hubieren expuesto los diputados" (art, 29); que "será obligación de los secretarios cuidar de que aprobada la minuta de la acta, se copie en el libro destinado al efecto, donde la firmarán con el Presidente" (art. 30); que "autorizarán las órdenes y decretos del Congreso para comunicarlas al Gobierno" (art. 31); que "extenderán las actas de las sesiones secretas, las firmarán con el Presidente luego que estén aprobadas, y las archivarán en un lugar seguro y de reserva" (art. 32), y que "el Secretario menos antiguo acompañado del Suplente, saldrá a recibir a los nuevos diputados cuando se presenten a jurar; y con otros dos más que designará el

Presidente recibirán asimismo, al Gobernador del Estado, y lo dejarán en su salida hasta una proporcionada distancia de la puerta del Salón" (art. 33).

En el Capítulo VI "De los Diputados", se señala que "los diputados asistirán con puntualidad a todas las sesiones, a menos que se los impida una justa causa, de que darán aviso al Presidente" (art. 34); que "guardarán en las sesiones la compostura, silencio y moderación correspondientes a la dignidad del Congreso y del Estado que representan" (art. 35); que "usarán de la palabra, habiéndola antes pedido, cuando les llegare su turno, en cuyo acto principalmente observarán el orden debido, evitando toda personalidad o palabra mal sonante, como también el divagarse de la materia que esté tratándose, y obedeciendo al Presidente cuando por sí o excitado por algún Diputado, los llamare a la observancia del Reglamento" (art. 36); que "cuando el motivo que impide al Diputado la asistencia diaria a las sesiones pudiere durar más de ocho días, lo expondrá así al Congreso, para que si lo calificare justo, le conceda el permiso por los días precisos" (art. 37); que "no se concederán licencias a tres diputados en un mismo tiempo, ni por más de un mes" (art. 38); que "no habrá preferencia de asientos entre los diputados" (art. 39), y que "cuando uno o más diputados se presentaren por primera vez al Congreso, harán el juramento prescrito, pasando luego a ocupar sus sillas" (art. 40).

En el Capítulo VII "Del Modo de Procederse en las Causas Criminales de los Diputados", se señala que "tomada en consideración por el Congreso en sesión secreta la denuncia, queja o acusación contra algún Diputado, con lo que éste en el acto exponga, se pasará a una Comisión Especial, y oído su dictamen por segunda vez al acusado, procederá el Congreso a declarar si ha o no lugar a la formación de causa" (art. 44); que "si la declaración fuere afirmativa y grave la materia de la acusación, quedará desde luego detenido el acusado, designándose al efecto, dentro del edificio del Congreso si pudiere ser, una habitación cómoda y la competente custodia" (art. 45); que "a continuación se procederá a elegir a pluralidad absoluta de votos, y de entre los diputados presentes, el Juez que lo ha de ser de derecho, y un Fiscal a quien se entregará el expediente para que a la mayor brevedad formalice la acusación, avisando al Congreso cuando la haya concluido" (art. 46); que "se pasará al acusado lista de los jurados, para que dentro del término perentorio de veinte y cuatro horas pueda recusar a alguno o a todos ellos, sin obligación de expresar la causa de recusación" (art. 48); que "pasarán enseguida al lugar que para esto esté destinado, y oyendo la acusación el Fiscal, y las defensas del reo, que podrá hacer por sí, o su nombre el letrado o persona que elija, quedarán los jurados a solas para

conferenciar sobre el asunto, y acto continuo calificarán el hecho" (art. 51); que "el Jurado se compondrá de cinco miembros, cuatro de los cuales será preciso que condenen para que el reo no se le tenga por absuelto" (art. 52); que "el Presidente del Jurado, que lo será el primer nombrado, entregará al Juez de derecho la calificación puesta por escrito, y firmada por todos los que hayan compuesto el jury, después que la hayan leído en alta voz" (art. 54); que "siendo la calificación absolutoria, en el mismo acto dispondrá el Juez que se ponga en libertad al acusado; más si fuere condenatoria, procederá a pronunciar la sentencia, y a aplicar al reo la pena correspondiente" (art. 55), y que "un Tribunal de tres individuos diputados todos, si aún los hubiere expeditos, conocerá en grado de apelación, en los casos que salva la declaración del hecho pueda interponerse conforme a las leyes" (art. 58).

En el Capítulo VIII "De las Sesiones Públicas", se señala que "habrá sesión pública todos los días que no sean festivos, pudiendo haberla también en éstos cuando el Congreso lo acordare" (art. 61); que "se abrirán las sesiones en punto de las diez, para lo que, y leer el acta, como también las proposiciones y dictámenes de primera lectura, será suficiente el número de siete diputados presentes"; que "bastarán nueve (diputados) para dar cuenta con la correspondencia, enterarse de ella y darle trámite, acordar lo conveniente para la instrucción, o substanciación de los expedientes que se presentaren de nuevo, y discutir en lo general todo proyecto; más para declarar que ha lugar a su votación, entrar a la discusión particular de sus artículos, y tomar otras resoluciones que aquí no están expresadas, será precisa la concurrencia de la mayoría absoluta de los diputados" (art. 62); que "en materias de mucha gravedad a juicio del Congreso, no podrá deliberarse con menos de las dos terceras partes de sus miembros" (art. 63); que "durarán las sesiones hasta la una, a menos que estando pendiente alguna discusión importante, resuelva el Congreso que se prorrogue por otra hora y no más, sino cuando se declare a pluralidad absoluta de los diputados presentes, que la sesión sea permanente" (art. 64); que "los espectadores conservarán el mayor respeto, silencio y compostura, sin tomar parte alguna en las discusiones por demostraciones de ningún género" (art. 67); que "los que contraviniesen de cualquier modo a lo prevenido en el artículo precedente, serán despedidos del Salón en el mismo acto, y siendo mayor la falta, se tomará con ellos la providencia a que haya lugar hasta su detención bajo la competente custodia" (art. 68), y que "si fuere demasiado el rumor o desorden, deberá el Presidente levantar la sesión, pudiendo continuarla en secreto" (art. 69).

En el Capítulo IX “De las Sesiones Secretas”, se señala que se realizarán “las sesiones secretas ordinarias los lunes y jueves de todas las semanas, y para su principio la hora de las doce en que se levantará la sesión pública” (art. 70); que “en otros días podrá haberlas extraordinarias; más se observará que sean las muy precisas, y sólo para tratarse de negocios tan urgentes, que en lo absoluto no puedan diferirse para los días designados en el artículo anterior” (art. 71); que “se dará cuenta en estas sesiones con los asuntos o negocios que a calificación del Presidente y secretarios exijan reserva por su naturaleza, por ser contra alguna autoridad o por el estilo poco respetuoso en que esté concebido, si consta de algún escrito” (art. 72), y que “se verán también en ella los negocios que el Gobierno del Estado, los Supremos Poderes remitan al Congreso con la nota de reservados, y aquellos para que se pida el secreto por algún Diputado” (art. 73).

En el Capítulo X “De las Comisiones”, se señala que “para facilitar el curso y despacho de los negocios, se nombrarán comisiones particulares que los examinen e instruyan hasta ponerlos en estado de resolución” (art. 75); que “al efecto se entregarán de ellos sus respectivos secretarios, quienes podrán también pedir los antecedentes o conexos que obren en la Secretaría del Congreso, y por medio de los secretarios de éste, los que se hallen en otras oficinas, como sean de aquellos que puedan ministrárseles sin gravamen particular ni de causa pública” (art. 76); que “con vista de todo extenderán su dictamen, en el cual después de referir cuanto sea conducente para la clara inteligencia de la materia, propondrán la resolución que en su concepto deba tomarse, reduciéndola por último a proposiciones simples que puedan sujetarse a votación” (art. 77); que “para el despacho ordinario se nombrarán comisiones permanentes y especiales” y que “las primeras serán de Constitución, de Justicia, Negocios Eclesiásticos y Legislación, de Gobernación, de Hacienda, de Instrucción Pública, de Comercio, Agricultura, Minería e Industria, de Milicias, de Policía y Peticiones, de Corrección de Estilo y de Poderes. Las segundas serán las que exijan la calidad de los negocios que ocurran” (art. 78); que “el Presidente del Congreso designará el número de individuos de que haya de componerse cada Comisión, y con los secretarios elegirá las personas”, y que “la elección se hará pública en la primera sesión” (art. 79); que “todos los miembros de una Comisión firmarán el dictamen que ésta extendiere: el que discordare fundará su voto particular, indicando la resolución que juzgare conveniente” (art.80); que “cualquiera Diputado puede asistir sin voto a las discusiones de las comisiones que quiera” (art. 81); que “la Comisión de Policía, tendrá exclusivamente el encargo y superintendencia de la redacción de las actas y decretos, y de su impresión con la de los informes y proyectos de ley, y cualquiera otros escritos que el Congreso

acordare que se impriman, haciendo los ajustes y contratas más convenientes y equitativas que presentará a la aprobación del Congreso" (art. 82), y que "nombrará cada Comisión de entre sus individuos un Secretario que será responsable por los documentos y expedientes que se le pasen, firmando previamente el conocimiento en la Secretaría" (art. 84).

En el Capítulo XI "De las Proposiciones y Discusiones", se señala que "todo Diputado tiene facultad para presentar proposiciones que deberá hacer por escrito, pudiendo fundarlas por este medio, o exponer si quisiere de palabra lo que le parezca en su apoyo" (art. 85); que "leída la proposición en dos diferentes sesiones, con intervalo de dos días a lo menos, se preguntará si se admite a discusión, sin que para esto se permita hablar a otro Diputado que a su autor"; que "admitida, se remitirá a la Comisión a que corresponda; pero si el negocio fuere urgente, calificándolo así el Congreso, la segunda lectura se hará en la sesión más inmediata, encargándose a la Comisión el más pronto despacho" (art. 86); que "en asuntos de poca importancia que no puedan producir resolución que sea ley, decreto o disposición trascendental a todo el Estado, o a parte considerable de él, podrán hacerse proposiciones para que desde luego se discutan y resuelvan, pareciéndole conveniente al Congreso, quien declarará previamente si la que se propone es del momento" (art. 88); que "entre la primera lectura y la discusión de un dictamen se guardará el intervalo de dos días por lo menos" (art. 90); que "desde que se señale día para la discusión hasta el fin de ésta, podrán los diputados pedir la palabra para hablar sobre ella" (art. 91); que "en la discusión sobre proyecto de decreto, o resolución general, se tratará primero del proyecto en su totalidad, y en este estado declarado que sea suficientemente discutido, se preguntará si ha o no lugar a la votación, y habiéndolo, se entrará a las discusiones de sus artículos en particular", y que "no habiendo lugar a la votación, el Congreso declarará si se desecha de todo el proyecto, o vuelve a la Comisión para que lo reforme según lo hubiere manifestado en la discusión" (art. 93); que "los dictámenes que no contengan proyecto de decreto o medida general, y se hallen redactados en artículos, no se discutirán en su totalidad, sino en cada uno de ellos" (art. 94); que "hasta pasados tres meses no se podrá tratar de proposiciones que hayan sido desechadas por el Congreso, ni se admitirán después de este tiempo, si no estuvieren suscritas por tres diputados a lo menos" (art. 102), y que "aprobado por el Congreso un proyecto de ley, decreto o proposición, no podrá darse resolución a la adición o declaración que se proponga a alguno de sus artículos, sin que primero vuelva a la Comisión que ha entendido en el negocio y se oiga su informe, a menos que se declare del momento" (art. 104).

En el Capítulo XII “De las Votaciones”, se señala que “las votaciones pueden hacerse de tres modos: 1º.- Por el acto de levantarse los que aprueban, y quedarse sentados los que reprueban. 2º.- Por la expresión individual de si o no. 3º.- Por escrutinio” (art. 105); que “la votación sobre asuntos discutidos se hará por regla general del primer modo, a no ser que se pida por tres diputados que sea nominal, en cuyo caso decidirá el Congreso si lo ha de ser o no” (art. 106); que “los empates en las votaciones sobre proyectos de ley y demás resoluciones que pertenecen al Congreso, se decidirán repitiéndose la votación en la misma sesión: si aún resultare empatada se abrirá de nuevo la discusión” (art. 114); que “cuando el Gobernador usando de la facultad que le está concedida, pidiere la revisión de alguna ley o decreto, se necesitará para su confirmación que sufraguen por ella las dos terceras partes de los que concurran a la votación” (art. 115), y que “ningún Diputado presente al acto mismo de la votación, podrá bajo de ningún pretexto excusarse de votar; así como no deberá votar ni estar presente el que tenga interés personal en el asunto que se trate, sino que saldrá del Salón mientras se realice la votación” (art. 116).

En el Capítulo XIII “De los Decretos”, se indica que “la Constitución del Estado determinará lo conveniente sobre la fórmula y el modo de expedir y remitir los decretos del Congreso. Entre tanto, se seguirá el estilo adoptado, o el que se determinare a tiempo de aprobarse las minutas” (art. 119).

En el Capítulo XIV “Del Orden y Gobierno Interior del Palacio del Congreso”, se señala que “la Comisión de Policía compuesta del Presidente y secretarios, cuidará del orden y gobierno interior del Palacio del Congreso y de la observancia de las ceremonias y formalidades que prescribe este Reglamento” (art. 210); que “cuidará también de dirigir las obras y reparos que convenga hacer para la conservación y seguridad de aquel edificio” (art. 121); que “todos los subalternos y dependientes del Congreso estarán bajo las órdenes de esta Comisión en el ejercicio de sus funciones, excepto la Secretaría en la de su instituto” (art. 122), y que “si se cometiere algún exceso o delito dentro del edificio del Congreso, pertenecerá a esta Comisión detener a la persona o personas que aparezcan culpadas, poniéndolas dentro del mismo bajo la competente custodia, y practicar las diligencias necesarias para la averiguación del hecho, en cuyo caso, si resultaren motivos suficientes para proceder, se entregarán en el tiempo de 24 horas al Juez competente, y ejecutado que sea, dará cuenta al Congreso” (art. 123).

En el Capítulo XV “De la Secretaría del Congreso”, se señala que “los diputados secretarios son jefes de la Secretaría del Congreso” (art. 124); que “un Reglamento

Particular arreglará esta Oficina, cuidándose entre tanto, que se informe de que haya el número suficiente de oficiales y escribientes, no solo para el bueno y pronto despacho de los negocios, sino para proveer a las comisiones de los amanuenses de que necesitaren, a fin de que no se entorpezca el desempeño de sus encargos" (art. 125); que "habrá un Archivero, cuyas obligaciones con las de los demás oficiales y subalternos de la Secretaría, su número, clase y sueldos se señalarán en el Reglamento Especial de esta Oficina" (art. 126), y que "todos serán nombrados por el Congreso a propuesta de los secretarios" (art. 127).

El 23 de junio el Congreso dispuso que "se nombrara una comisión fuera del Congreso a la que se encargara la formación de un proyecto de Código Penal y de Procedimientos Criminales" (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 23 de junio de 1824: 466).

El 25 de junio el Congreso (Poder Legislativo I, 1827. Acta del 25 de junio de 1824: 472) al reglamentar el funcionamiento de la Comisión que formaría el proyecto de Código Penal y de Procedimientos Criminales, dispuso que "se le encargara un ensayo de jurados para el conocimiento comunes, procurando restringir sus facultades todo lo posible y fijar esta clase de juicios en los lugares de mayor ilustración" (art. 2º); "se oficiará por esta Secretaría al Consejo, Audiencia, Cabildo Eclesiástico, Universidad, Ayuntamiento, Colegio de Abogados, Sociedad Lancasteriana, y Academia de Jurisprudencia, para que nombren dos de sus individuos a fin de formar la Comisión" (art. 3º); "luego que dichas corporaciones hayan hecho este nombramiento avisarán al Gobernador del estado de las personas en quienes haya recaído y éste lo pondrá en noticia al Congreso" (art. 4º), y "el Gobernador proporcionará el local para las sesiones de la Comisión" (art. 5º).

El Congreso (Proposición del 25 de junio de 1824. BJMLM: vol. 16, exp. 56) en atención a una Iniciativa del Diputado José María Luis Mora,[34] dispuso "que se prevenga a los ayuntamientos a formar sus respectivas ordenanzas y a presentarlas al Congreso para su aprobación" (art. 1); "que para facilitarles estos trabajos se les circule de oficio el proyecto y la comisión expresa, aumentando, y perfeccionando por su autor, y haciéndose por el mismo la nueva edición a que está pronto" (art. 2); y que "para la ejecución de esta medida se encargue la Comisión de Policía tratar sobre el asunto con dicho autor, procurando en el gasto la economía posible (art. 3).

[34] Anexó a su iniciativa el "Proyecto de las Ordenanzas Municipales de los Pueblos" inserto en el número 14 de *El Ambigú Municipal de la Nueva España.*

El 30 de junio el Congreso determinó que “los cursos de la Universidad del Estado en todas las facultades, con arreglo a la costumbre actual, durarán seis meses y un día”, que “éstos se podrán hacer todos seguidos sin necesidad de atravesar la matrícula”, que “los pasantes juristas podrán dar principio a su práctica luego que hayan concluido, los estudios respectivos, sin necesidad de graduarse”, que “acreditarán haber concluido los cursos con certificación del Secretario de la Universidad, a quien por darla percibirá cuatro reales”, y que “para recibirse de abogados presentarán el título de Bachiller que las leyes exigen” (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 15 del 30 de junio de 1824: 13).

El 2 de julio el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de julio de su primer año de gestión, presidida por el Diputado Mariano Casela. Nombró como Vicepresidente al Diputado José Domingo Lazo de la Vega, como Secretario Propietario al Diputado Manuel Cortázar y como Secretario Suplente al Diputado Manuel Cotero (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 2 de julio de 1824: 6).

El Congreso General determinó “que los congresos de los estados pueden dispensar toda clase de leyes que no sean el resorte general de la Federación” (Decreto del 2 de julio de 1824. AHEM: L.L.D.F. vol. 1, exp. 8).

El 6 de julio el Congreso General erigió el Estado de Chihuahua y declaró a Nuevo México Territorio de la Federación (Decreto del 6 de julio de 1824: AHEM: L.L.D.F. vol. 1, exp. 11).

El 13 de julio el Congreso General incorporó a la Federación el Hospital del Divino Salvador, que atendía a mujeres dementes en la Ciudad de México (Decreto del 13 de julio de 1824: AHEM: L.L.D.F. vol. 1, exp. 14).

El Congreso General dispuso que quedaba “para siempre prohibido en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, el comercio y el tráfico de esclavos, procedentes de cualquier potencia, y bajo cualquier bandera” (Decreto del 13 de julio de 1824. AHEM: vol. 4, exp. 12).

El 17 de julio el Gobernador dio a conocer las disposiciones que emitió para el cobro de un peaje en la Garita de Santa Úrsula que conducía al Puerto de Acapulco (Bando del Ejecutivo del 17 de julio de 1824. AHEM: vol. 35, exp. 184).

El 27 de julio el Gobernador dio a conocer las disposiciones que buscaban reordenar el tránsito de los coches en la Alameda Central de la Ciudad de México (Bando del Ejecutivo del 27 de julio de 1824. AHEM: L.L.B. vol. 1, exp. 2).

El 31 de julio el Congreso expidió la convocatoria por la que determinó que "al Estado de México corresponde nombrar, para la Cámara de Representantes del Congreso General, trece diputados propietarios y cuatro suplentes", que "las calidades que dichos diputados deberán tener, son las que constan en el decreto de 13 de julio del presente año" (expedido por el Congreso Constituyente de la Federación), que "para la elección de diputados se celebrarán juntas primarias, secundarias y del Estado", que "serán precedidas de rogaciones públicas en la Catedral y parroquias, implorando el auxilio Divino para su acierto", y que "los diputados del Congreso Constituyente de este Estado no podrán ser electos para electores primarios ni secundarios" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 16 del 31 de julio de 1824: 13).[35]

El Congreso dispuso que al Diputado Francisco Moctezuma no se cubrieran sus dietas por haber aceptado un empleo de la Federación y que al Diputado Antonio Velasco de la Torre si se le concedieran, pues el Congreso solo le había otorgado una licencia de un mes para separarse de su cargo (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 31 de julio de 1824: 160).

El 2 de agosto el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de agosto de su primer año de gestión, presidida por el Diputado José Figueroa. Nombró como Vicepresidente al Diputado Manuel Cotero, como Secretario Propietario al Diputado Joaquín Villa y como Secretario Suplente al Diputado Francisco de las Piedras (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 2 de agosto de 1824: 162).

El 4 de agosto el Congreso General dispuso que pertenecen a las rentas generales de la Federación los derechos de importación y exportación, el derecho de internación del quince por ciento, la renta de tabaco y pólvora, la alcabala que paga el tabaco en los países de su cosecha, la renta de correos, la de Lotería, la de las salinas, la de los territorios de la Federación, y "los bienes nacionales en los que se comprenden los de la Inquisición y temporalidades, y cualesquiera otras fincas rústicas y urbanas que pertenecieren en lo de adelante a la Hacienda Pública". Se estableció que las rentas que no estuvieran asignadas en dicho decreto correspondían a los estados y que

[35] Dicha ley constó de apartados referentes a: las juntas primarias, a las juntas secundarias o de partido y a la Junta del Estado.

éstos debían entregar a la Federación un contingente de 3´136,875 pesos, de los cuales 975,000 pesos correspondían al Estado de México (Decreto del Congreso General del 4 de agosto de 1824. BJMLM: vol. 17, exp. 120).

El 7 de agosto el Congreso expidió la Ley Orgánica Provisional para el Arreglo del Gobierno Interior del Estado de México, la cual constó de apartados referentes: al Estado, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Cuerpo Consultivo (Consejo), al Poder Judicial, a los prefectos, a los subprefectos, a los ayuntamientos, a la Hacienda y a la Regla General (observancia de las leyes) (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 18 del 7 de agosto de 1824: 20).

En el Capítulo I "Del Estado", se indica que "el Estado de México es parte integrante de la Federación Mexicana" (art. 1º); que "es independiente, libre y soberano en lo que exclusivamente toca a su administración y gobierno interior" (art. 2º); que "el territorio del Estado se compone de los partidos que comprendía la Provincia de su nombre al tiempo de sancionarse la Federación" (art. 3º); que "la forma de su gobierno es republicana representativa y popular" (art. 4º); que "la religión del Estado es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, con exclusión del ejercicio de cualquiera otra" (art. 5º); que el Gobierno deberá "hacer que se cumplan las leyes del Congreso General en orden a conservar la pureza de la religión, es un deber del Estado" (art. 6º), y que "el Gobierno del Estado para su ejercicio se divide en los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y jamás podrán reunirse dos o más de éstos en una corporación o persona, ni depositarse el Legislativo en un individuo" (art. 7º).

En el Capítulo II del "Poder Legislativo", se indica que "el Poder Legislativo del Estado reside en este Congreso" (art. 8º); que "en todos los negocios graves a juicio del Congreso, y en los que objetare el Gobernador, no podrá deliberarse con menos de las dos terceras partes de sus miembros" (art. 10), y que "la ley contra que objetare el Gobernador, no podrá confirmarse con menos de las dos terceras partes de los votos" (art. 11).

En el artículo 9º se indica que pertenece exclusivamente al Congreso del Estado: "formar su Constitución Peculiar con arreglo a la General de la Federación" (I); "dictar leyes para el gobierno interior del Estado, interpretarlas y derogarlas" (II); "nombrar al Gobernador, su Teniente, consejeros, ministros del Supremo Tribunal Superior de Justicia y Tesorero General" (III); "fijar los gastos del Estado, y establecer para cubrir las contribuciones que juzgue necesarias, determinando su cuota, duración y modo de

recaudarlas" (IV); "examinar y aprobar las cuentas de inversión de los caudales del Estado" (V); "decretar la creación, reforma o supresión de las oficinas, plazas de hacienda o judicatura, propias del Estado" (VI); "ordenar el establecimiento o supresión de los cuerpos municipales, dando reglas para su organización y determinando su territorio, el de los partidos y distritos" (VII); "aprobar los arbitrios para las obras públicas de utilidad común, propuestas por conducto del Gobernador" (VIII); "aprobar los reglamentos generales para la policía y sanidad del Estado" (IX); "dar leyes para promover la ilustración y prosperidad del Estado" (X); "declarar en su caso, que ha lugar a la formación de causa contra el Gobernador, su Teniente, Consejo del Estado, Supremo Tribunal de Justicia y Tesorero General" (XI), y "ejercer todas las facultades de un cuerpo legislativo, en todo aquello que no le prohíba la Acta Constitutiva o la Constitución Federal" (XII).

En el Capítulo III del "Poder Ejecutivo", se indica que "el Poder Ejecutivo se ejercerá interinamente por una sola persona con el título de Gobernador" (art. 12); que el Gobernador "deberá consultar al Consejo en todos los asuntos graves gubernativos, y en aquellos de que haya de resultar regla general de buen gobierno" (art. 14); que el Gobernador "para el despacho de los negocios de todos los ramos, tendrá un solo Secretario de Gobierno, que nombrará y renovará a su arbitrio" (art. 15); que el Gobernador "pasará cada seis meses al Congreso una nota relativa a los particulares que contiene el artículo 32[36] de la Acta Constitutiva de la Federación" (art. 16); que "el Teniente suplirá las faltas del Gobernador en los casos de muerte, renuncia, remoción o enfermedad grave; resolviendo el Congreso en los demás que puedan ocurrir" (art. 17); que "el Gobernador y su Teniente deberán ser ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, nacidos en el territorio de la Federación, mayores de 30 años, y de la conveniente aptitud" (art. 18); que "uno y otro en su caso, serán responsables por todos los actos de su Administración" (art. 19), y que "un Consejero llevará la voz del Gobierno en el caso de los artículos precedentes y cuando el Congreso lo estime necesario, asistiendo solamente a la discusión" (art. 20).

En el artículo 13 se indica que las facultades del Gobernador son las de: "cumplir y hacer cumplir las leyes del Estado y de la Federación, dando previamente conocimiento de estas últimas al Congreso del mismo Estado" (I); "dar los decretos y

[36] Este artículo señala que: "el Congreso de cada Estado remitirá anualmente al General de la Federación nota circunstanciada y comprensiva: de los ingresos y egresos de todas las tesorerías que haya en sus respectivos distritos, con relación del origen de unos y otros, de los ramos de industria, agricultura, mercantil y fabril, indicando sus progresos o decadencia con las causas que los producen; de los nuevos ramos que puedan plantearse, con los medios de alcanzarlos; y de su respectiva población".

hacer los reglamentos necesarios para su ejecución" (II); "cuidar de la tranquilidad y el orden público en lo interior del Estado" (III); "nombrar, de acuerdo con el Consejo, los magistrados de la Audiencia y demás plazas de la Judicatura y empleados civiles y de hacienda propios del Estado" (IV); "ejercer la exclusiva, oído el Consejo, en la provisión aún interina de piezas eclesiásticas del Estado, con arreglo a la forma que se prescriba" (V); "cuidar de que la justicia se administre por los tribunales del Estado pronta y cumplidamente, y de que se ejecuten las sentencias" (VI);[37] "objetar por una sola vez, de acuerdo con el Cuerpo Consultivo, sobre las leyes no constitucionales que dicte el Congreso del Estado, en el preciso término de diez días, suspendiendo entre tanto su ejecución" (VII); "hacer al Congreso las propuestas de leyes y reformas que crea conducentes a la felicidad del Estado, oído el dictamen del Consejo" (VIII); "suspender, oído el Consejo, de los empleos hasta por tres meses, y privar hasta de la mitad de sus sueldos por el mismo tiempo a los empleados del Estado, y en los casos que crea deber formársele causa, pasará los antecedentes de la materia al Tribunal respectivo" (IX), y "cuidar de la instrucción de la Milicia Local conforme a la disciplina prescrita por el Congreso General, y de que se use de ella según la ley de su institución" (X).

En el Capítulo IV del "Cuerpo Consultivo", se indica que "habrá un Consejo compuesto de un Teniente Gobernador y otros cuatro individuos" (art. 21); que "el Consejo dará dictamen al Gobernador en todos aquellos asuntos en que la ley impone a éste la obligación de pedirlo; e igualmente en todos los demás en que el mismo Gobernador tenga a bien oírle para el mejor acierto" (art. 22), y "le pondrá también las medidas y providencias que le ocurran y juzgue más eficaces, conforme al sistema actual y leyes vigentes, para el aumento de la población, fomento de la industria, instrucción general, conservación del orden y tranquilidad pública" (art. 23).

En el Capítulo V del "Poder Judicial", se indica que "el Poder Judicial se ejercerá por los tribunales de justicia establecidos, o que en adelante se establezcan" (art. 24); que "los alcaldes constitucionales continuarán, por ahora, ejerciendo la jurisdicción que les conceden las leyes" (art. 25); que "habrá lo menos un Juez Letrado en cada Partido, que conozca en primera instancia de las causas comunes que en él ocurran" (art. 26); que "la Audiencia del Estado constará de seis magistrados y un Fiscal" (art. 27); que "las atribuciones de la Audiencia y jueces de letras serán, por ahora, las que les designan las leyes vigentes" (art. 28); que "habrá en la Capital del Estado un Tribunal

[37] Se indica que "por esta inspección no podrá ingerirse directa ni indirectamente en el examen de las causas pendientes, ni disponer en manera alguna de las personas de los reos en las criminales".

Supremo llamado de Justicia, compuesto por seis ministros y un Fiscal" (art. 29); que este Tribunal "oirá las dudas de los tribunales sobre la inteligencia de alguna ley, y consultará con ella al Gobernador con los fundamentos que hubiere, para que promueva la conveniente aclaración del Congreso" (art. 31); que "examinará las listas de las causas civiles y criminales fenecidas en el territorio del Estado, pasando copia de ellas al Gobernador y haciendo que se publiquen por la prensa" (art. 32); que "se arreglarán el Supremo Tribunal y la Audiencia en cuanto al orden de proceder, a lo prevenido para las audiencias menores en la Ley de Tribunales del 9 de octubre de 1812" (art. 33); que "el Congreso se reserva establecer en lo sucesivo el juicio por jurados, si lo hallare conveniente" (art. 34), y que "los jueces y magistrados no podrán ser separados de sus destinos, sino por causa legalmente probada y sentenciada, ni suspendidos sino por acusación legalmente intentada" (art. 35).

En el artículo 30 se establecen como facultades del Tribunal Supremo de Justicia, las de: "dirimir las competencias que se susciten entre la Audiencia y los tribunales especiales del Estado, o entre éstos y los jueces subalternos de la Audiencia" (I); "procesar al Gobernador y consejeros, cuando el Congreso declare haber lugar a la formación de cauda" (II); "conocer en todas las causas de separación y suspensión de los consejeros del Estado y magistrados de la Audiencia" (III); "en las causas criminales del Gobernador, consejeros del Estado y ministros de la Audiencia (IV); "en todas las causas criminales que se promoviesen contra los individuos de este Supremo Tribunal" (V); "en la residencia de todo empleado público que esté sujeto a ella según las leyes" (VI), y "en los recursos de nulidad contra la sentencia dada en última instancia, solamente para el efecto de reponer el proceso, devolviéndolo, y hacer efectiva la responsabilidad en que incurran los magistrados por la falta de observancia de las leyes que arreglan el proceso en lo civil y criminal" (VII).

En el Capítulo VI de los "Prefectos", se indica que "el territorio del Estado se divide en ocho distritos" (art. 36);[38] que "en cada una de estas secciones habrá un Prefecto llamado de Distrito, que ejercerá las facultades gubernativas y económicas que se designan en esta ley" (art. 37); que "para serlo se requiere ser ciudadano en el

[38] El territorio del Estado se dividía en los distritos: de Acapulco (partidos de: Acapulco, Chilapa, Tixtla y Zacatula), Cuernavaca (partidos de: Cuernavaca y Cuautla), Huejutla (partidos de: Huejutla, Metzitlán y Yahualica), México (partidos de: Chalco, Coatepec Chalco, Coyoacán, Cuautitlán, Ecatepec, Mexicaltzingo, México, Tacuba, Teotihuacán, Texcoco, Xochimilco y Zumpango), Taxco (partidos de: Taxco, Temascaltepec, Tetela del Río y Zacualpan), Toluca (partidos de: Lerma, Malinalco, Metepec, Tenango del Valle, Toluca e Ixtlahuaca), Tula (partidos de: Actopan, Huichapan, Tetepango, Tula, Jilotepec, Ixmiquilpan y Zimapán) y Tulancingo (partidos de: Apan, Otumba, Pachuca, Tulancingo y Zempoala).

ejercicio de sus derechos, nacido en el territorio de la Federación, mayor de treinta años y de la conviviente aptitud" (art. 38); que el Prefecto "visitará las subprefecturas de su Distrito una vez a lo menos cada año" (art. 40); que "dará parte al Gobierno de los abusos que note en la Administración de Justicia, y de las rentas públicas" (art. 41); que "dará asimismo, al Congreso del Estado con datos justificados, de las infracciones que advierta en su Distrito, de la Acta Constitutiva y de esta ley" (art. 42), y que "estará a sus órdenes la Milicia Local del Distrito, conforme a su Reglamento" (art. 43).

En el artículo 39 se señalan como facultades de los prefectos las de: "cuidar en su Distrito de la tranquilidad pública, del buen orden, de la seguridad de las personas y bienes de sus habitantes, con entera sujeción al Gobernador del Estado" (I); "cuidar el cumplimiento de las leyes y órdenes del Gobierno, y en general, de todo lo que lo concierne al Ramo de Policía" (II); "hacer que los ayuntamientos del Distrito llenen las obligaciones que les imponen las leyes, que no se excedan de sus facultades, ni se distraigan de su instituto" (III); "velar que en los pueblos se erijan escuelas de primeras letras, y otros establecimientos de instrucción pública y de beneficencia, donde pudiere haberlos" (IV); "desempeñar en el Ramo de Hacienda, las funciones gubernativas y económicas que en las leyes prevengan" (V); "velar sobre la buena inversión de los fondos públicos de los pueblos del Distrito, y del arreglo y buena administración de los bienes de comunidad" (VI); "examinar las cuentas de ambos ramos, y remitirlas, con su informe para la glosa y aprobación al Gobierno" (VII); "formar el censo y la estadística del territorio, y remitir cada tres meses al Gobernador una nota compresiva de lo que la expresa el artículo 32 de la Acta Constitutiva" (VIII); "cuidar de que los subprefectos visiten, a lo menos cada semestre, a todos los ayuntamientos de los respectivos partidos, sin gravamen de los pueblos" (IX); "suspender con causa justificada a alguno o algunos de los miembros de los ayuntamientos de su Distrito, dando cuenta inmediatamente al Gobernador, con el expediente respectivo" (X); "proponer al Gobernador los arbitrios que crea más convenientes para la ejecución de las obras nuevas de utilidad común que se ofrezcan en su Distrito, o para reparación de las antiguas" (XI); "nombrar para la recaudación de estos arbitrios un depositario que lleve las cuentas correspondientes, remitiéndolas al Gobierno para que sean aprobadas, previa la glosa de la Contaduría General de Propios y Arbitrios" (XII); "conceder o negar a los menores la licencia para casarse" (XIII); "mandar se hagan en su presencia, si puede ser, por personas inteligentes los exámenes para maestros y maestras de escuelas de primeras letras, y cuidar de que en los pueblos se hagan en presencia de los subprefectos, o los alcaldes de los ayuntamientos, dándoles gratis el correspondiente título" (XVI); "cuidar muy particularmente de que se reduzcan a vivir

en poblado los habitantes del Distrito dispersos en los campos, para que constituidos en sociedad, puedan recibir la educación religiosa y civil correspondiente" (XV); "arreglar en los pueblos gubernativamente el repartimiento de tierras comunes" (XVI); "imponer gubernativamente multas de uno a cien pesos a los que desobedezcan y falten al respeto, o perturben de otra manera el orden público, y exigir del mismo modo, todas las establecidas por las leyes de policía y bandos de buen gobierno vigentes, cualquiera que sea su cuantía" (VII); "imponer correccionalmente hasta quince días de obras públicas o un mes de arresto o de hospital" (XVIII); "requerir del Comandante Militar el auxilio que necesiten para conservar y restablecer la tranquilidad de las poblaciones y seguridad de los caminos" (XIX); expedir órdenes "en el caso de que el bien público y seguridad del Distrito exija el arresto de alguna persona" (XX), y "conocer en los recursos o dudas que ocurran sobre elecciones de oficios de ayuntamientos las que decidirán gubernativamente y por vía de instructiva sin pleito ni contienda de juicio" (XXI).

En el Capítulo VII de los "Subprefectos", se indica que "en cada cabecera de Partido, menos en la de Distrito, habrá un funcionario con el título de Subprefecto, nombrado por el Prefecto respectivo, con aprobación del Gobernador" (art. 48); que "para ser Subprefecto se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años y propietario de alguna finca, capital o ramo de la industria, que baste de tenerle decentemente" (art. 52); que "los subprefectos desempeñarán su encargo sin sueldo, cuya duración será de dos años, pudiendo ser reelegidos por una vez" (art. 53); que "los recursos que ocurran sobre elecciones para oficios de ayuntamientos, se remitirán para su decisión por el Subprefecto, con su informe, al Prefecto" (art. 60); que "en todo asunto de gobierno y policía, ocurrirán los particulares con sus solicitudes a los subprefectos, y no se admitirá en ninguna oficina, recurso ni exposición que no venga remitida e informada por el correspondiente conducto, a no ser en el caso de queja arriba expresada" (art. 64); que "los prefectos publicarán y circularán las órdenes e instrucciones oportunas a los subprefectos y éstos a los ayuntamientos" (art. 65), y que "los subprefectos podrán presidir sin voto los ayuntamientos de sus respectivos partidos" (art. 66).

En el Capítulo VIII de los "Ayuntamientos", se indica que "los ayuntamientos se arreglarán por ahora, a las leyes, decretos y órdenes prescritas para su gobierno político-económico, y desempeño de sus atribuciones" (art. 67).

En el Capítulo IX de la "Hacienda", se indica que "se establecerá una Tesorería General que se llamará del Estado, en la que entrarán todos los caudales que en él se recauden para sus gastos particulares" (art. 68); que "se establecerá igualmente una Contaduría para el examen y glosa de las cuentas del Estado" (art. 69), y que "una instrucción particular organizará estas oficinas, de manera que sirvan para los fines de su instituto" (art. 70).

En el Capítulo X de la "Regla General", se indica que "todas las autoridades del Estado cumplirán y observarán respectivamente las leyes vigentes, en lo que no se opongan a la Acta Constitutiva de la República, Representativa y Federal, a esta Ley Orgánica Provisional, y a las leyes que fuere estableciendo el Congreso del Estado, según lo vayan exigiendo las ulteriores circunstancias" (art. 71).

El Congreso determinó (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 17 del 7 de agosto de 1824: 19) que "en todas las ciudades, villas y pueblos del Estado, se publicará con toda la solemnidad que sea posible la Ley Orgánica Provisional para el Arreglo de su Gobierno Interior" (art. 1º); que "todas las autoridades civiles y eclesiásticas, los jefes, oficiales y tropa de la Milicia Nacional, los empleados de oficinas y demás corporaciones propias del Estado, prestarán en público juramento de observar la Ley Orgánica Provisional" (art. 2º), y que "el Gobernador del Estado formará el Reglamento para que la publicación de la Ley Orgánica se haga del modo más solemne en todo el territorio del Estado, pasando a la Secretaría de este Congreso los documentos oficiales de haberse dado cumplimiento a este decreto" (art. 9º).

El 15 de agosto el Congreso a iniciativa del Diputado José María Luis Mora "declaró que se hagan al Gobernador en la Catedral el día de mañana los mismos honores que al Supremo Poder Ejecutivo cuando asiste a las funciones de la Iglesia" (Proposición del 15 de agosto de 1824. BJMLM: vol. 16, exp. 133).[39]

El 16 de agosto después de que los diputados y el Teniente Gobernador prestaron el juramento de obediencia a la Ley Orgánica Provisional, Melchor Múzquiz manifestó que "el juramento de obediencia que el Gobierno acaba de prestar a la Ley Orgánica Provisional, sancionada por el Congreso por la sabiduría y circunscripción que lo distingue, es un testimonio de la sumisión y el respeto con que ha visto y verá siempre las leyes; y una lección eficaz para que el pueblo se persuada de que la exacta

[39] Esta Proposición se hizo con motivo del Juramento de Obediencia a la Ley Orgánica Provisional.

observancia de aquellas, es solamente lo que puede hacer la felicidad de este Estado y de toda la Nación. Ella en el día consiste principalmente en la conservación de la tranquilidad pública y en la cesación de las convulsiones interiores: para conseguirla, el Gobierno usará de la acción expedita y enérgica que ha puesto en sus manos la Ley Orgánica, respetando siempre los derechos del hombre en sociedad" (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 16 de agosto de 1824: 189).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado José Figueroa, señaló que "el Estado de México reconoce en su actual Gobernador uno de los más firmes apoyos para el sostén de sus libertades, y este Congreso íntimamente persuadido de verdad tan segura se complace de haberlo escogido para tan alto puesto. Tiene visto que los Poderes del Estado animados de un mismo espíritu obran de concierto en todos sus actos respectivos, y por tan luminosos principios se promete acabar con acierto la sublime empresa de construir al Estado" (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 16 de agosto de 1824: 190).

El 25 de agosto el Diputado Antonio Velasco de la Torre se reincorporó al seno del Congreso, no obstante a que aún presentaba problemas de salud (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 25 de agosto de 1824: 233).

El Congreso General aprobó el contingente de hombres para el reemplazo del Ejército que pondrían los estados a disposición del Supremo Gobierno. De los 16,213 hombres que se necesitaban para cubrir las bajas de la Fuerza Permanente: 3,704 correspondían al Estado de México, 2,137 a Puebla, 1,849 a Jalisco, 1,709 a Yucatán, 1,709 a Oaxaca, 1,424 a Guanajuato, 1,139 a Michoacán, 713 a Zacatecas, 512 a San Luis, 512 a Querétaro, 370 a Durango, 199 a Tlaxcala, 170 a Tabasco y 70 a Colima (Decreto del 25 de agosto de 1824. AHEM: L.L.D.F. vol. 1, exp. 25).

El 1 de septiembre el Congreso otorgó su voto para Presidente de la República a favor de Nicolás Bravo, con quince votos contra cinco que sacó Guadalupe Victoria, y para Vicepresidente a José Joaquín de Herrera, con quince votos contra cinco que obtuvo Guadalupe Victoria (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 1 de septiembre de 1824: 260).

El Congreso nombró a Francisco Molinos del Campo e Ignacio Espinosa como senadores del Estado (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 1 de septiembre de 1824: 260).

El 2 de septiembre el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de septiembre de su primer año de gestión, presidida por el Diputado José Domingo Lazo de la Vega. Nombró como Vicepresidente al Diputado Pedro Martínez de Castro, como Secretario Propietario al Diputado Baltazar Pérez y como Secretario Suplente al Diputado Ignacio Mendoza (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 2 de septiembre de 1824: 264).

El Congreso le otorgó al Diputado José Figueroa una licencia por un mes para separarse de su cargo, con el propósito de restablecer su salud (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 2 de septiembre de 1824: 264).

El Congreso dispuso que se llamara al Gobernador a sesión secreta, a fin de tratar sobre las medidas prontas y enérgicas que debían tomarse con motivo de los atroces asesinatos que se habían cometido en contra de unos extranjeros (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 2 de septiembre de 1824: 265).

El 9 de septiembre el Congreso nombró "para ministros del Supremo Tribunal de Justicia a los Sres. D. Jacobo Villaurrutia, D. Manuel de Campo Rivas, D. Juan José Flores Alatorre, D. José Domingo Rus, D. José Francisco Nava, D. Ignacio Alva, y para Fiscal a D. Tomás Salgado" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 19 del 9 de septiembre de 1824: 30).

El Congreso integró una comisión especial de su seno, para que en conjunción con el Gobierno se tomaran las medidas necesarias "para que el delincuente tema ser sorprendido en su crimen y que sufra pronta e irremediablemente el castigo que merezca por sus delitos". Dicha Comisión la integraron los diputados: Manuel de Cortázar, José María Luis Mora y Pedro Martínez de Castro (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 9 de septiembre de 1824: 281).

El 10 de septiembre el Congreso (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 10 de septiembre de 1824: 286) dispuso establecer "en la Ciudad de México una Escuela de Obstetricia" (art. 1º); que "en ella se darán los conocimientos de teórica y práctica del arte y las nociones necesarias de Anatomía y Fisiología" (art. 2º); que "deberán cursar por esta Escuela por el espacio de un año todas las mujeres que quieran ejercer el arte de partear" (art. 3º); que "pasado un año de establecida esta Escuela no se admitirán a examen los pasantes de Medicina o Cirugía que no presenten certificación de haberla cursado en un año" (art. 4º); que "pasados dos años de establecida la Escuela solamente podrán asistir a las parteras los profesores de Medicina y Cirugía, y las

mujeres que hayan cursado esta Escuela y obtenido la correspondiente aprobación" (art. 5º), y que "la dirección y cátedra de esta Escuela se dará por rigurosa oposición a un Profesor de Cirugía" (art. 8º).[40]

El 11 de septiembre el Congreso aceptó la renuncia de Manuel Gómez Pedraza como Gobernador del Estado (Acta de la sesión secreta del 11 de septiembre de 1824. BJMLM: Colección de Actas).[41]

El 14 de septiembre el Congreso estableció las bases "sobre el modo con el que el Gobernador del Estado debe ejercer la exclusiva en la provisión de piezas eclesiásticas" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 20 del 14 de septiembre de 1824: 31).

El 15 de septiembre el Congreso (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 15 de septiembre de 1824: 304) dispuso que "los gastos de las visitas que hagan los prefectos en desempeño de su obligación, se incluirán en la asignación de los tres mil pesos de dotación de las prefecturas" (art. 1º); que "se den a los prefectos las casas que se llamaban reales o consistoriales que hubiera en el lugar de su residencia" (art. 2º), y que "los prefectos tendrán franca toda la correspondencia" (art. 3º).

El 17 de septiembre el Congreso al admitir la renuncia de Manuel Gómez Pedraza como Gobernador, designó en su lugar por escrutinio secreto a Melchor Múzquiz (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 21 del 17 de septiembre de 1824: 32), con catorce votos contra tres que obtuvo el general Vicente Guerrero (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 17 de septiembre de 1824: 308).

El Congreso le concedió "al Pueblo de Tixtla el título de Ciudad Guerrero" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 22 del 17 de septiembre de 1824: 32).

Melchor Múzquiz al rendir su protesta de ley ante los diputados, "manifestó su gratitud al Congreso por la elección que había hecho de su persona para Gobernador, protestando sacrificarse en obsequio de las leyes y del Estado a cuyo frente lo colocó el voto del Congreso" (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 17 de septiembre de 1824: 308).

[40] Los artículos 9, 10, 11, 13 y 14 fueron aprobados el 11 de septiembre de 1824 (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 11 de septiembre de 1824: 290).
[41] Dicho Señor nunca rindió su protesta de ley, por lo que el Gobierno del Estado fue asumido por el Teniente Gobernador Melchor Múzquiz.

El 18 de septiembre el Congreso determinó (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 23 del 18 de septiembre de 1824: 32) que "los ministros del Tribunal Superior de Justicia y su Fiscal, disfrutaran tres mil quinientos pesos mensuales" (art. 1º), "los ministros de Audiencia, incluso el Fiscal, tendrán tres mil pesos" (art. 2º), "los jueces de partido gozarán de mil quinientos pesos y los derechos que les señale el arancel para su sueldo, y para dotar los subalternos precisos de sus juzgados" (art. 3º), y "los prefectos por su dotación, para las de sus secretarías y para gasto de las visitas que hagan en el desempeño de sus funciones, disfrutarán de tres mil pesos" (art. 4º).[42]

El 20 de septiembre el Congreso dispuso que "ninguna autoridad del Estado mandará recoger en ningún caso otros libros que los que hayan sido prohibidos nominalmente, con arreglo al art. 2º de la Ley de 22 de febrero de 1813, la Real Cédula del 16 de junio de 1768, y la Real Orden de 5 de septiembre de 1820". También determinó que "el Gobernador y las demás autoridades del Estado, bajo la más estrecha responsabilidad, reprimirán las agresiones que notaren sobre este punto" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 24 del 20 de septiembre de 1824: 33).

El 21 de septiembre el Congreso General cesó a "los intendentes, ministros de cajas principales y foráneas y todos los empleados en rentas que no se han reservado a la Federación", y creó la figura de comisarios, que "serán en el Estado, estados y territorios de su demarcación, jefes superiores de todos los ramos de hacienda, crédito público y guerra". También determinó que "los gobiernos de los estados a que pertenecieren los pueblos exentos del pago de derechos sobre efectos extranjeros, justificarán a satisfacción del Gobierno General el consumo que de dichos efectos se hiciere en ellos, a fin de que sean reintegrados de su importe (Decreto del 21 de septiembre de 1824. BJMLM: vol. 17, exp. 120).

El 22 de septiembre el Congreso nombró a Vicente Villada como Tesorero del Estado (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 22 de septiembre de 1824: 326).

El 23 de septiembre el Congreso al establecer las reglas para designar el número de reemplazos del Ejército Permanente, determinó que el Gobernador debía exigir a "los prefectos el número de individuos que le asignen a cada Distrito, cuidando en que esta asignación no perjudicará a la agricultura, minería y artes". Se estableció que "los prefectos repartirán el cupo asignado por el Gobernador entre los partidos de sus

[42] Este artículo se aprobó en la sesión del 27 de agosto (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 27 de agosto de 1824: 252).

respectivos distritos", y que "los ayuntamientos auxiliados de la Fuerza Armada, si fuera necesario, procederán a efectuar las levas hasta completar el número de hombres que se les haya pedido" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 25 del 23 de septiembre de 1824: 37).

El Congreso nombró a Francisco Sánchez de Tagle como Teniente Gobernador (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 23 de septiembre de 1824: 332).

El 25 de septiembre el Congreso determinó que "los alcaldes de los ayuntamientos pueden imponer y exigir las multas que los prefectos, arreglándose en todo a lo que la Ley Orgánica previene sobre este punto a estos funcionarios" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 26 del 25 de septiembre de 1824: 38).

El 1 de octubre el Congreso determinó que "el tratamiento de los prefectos en lo de oficio tanto de palabra como por escrito, será de señoría" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 27 del 1 de octubre de 1824: 38).

El 2 de octubre el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de octubre de su primer año de gestión, presidida por el Diputado Pedro Martínez de Castro. Nombró como Vicepresidente al Diputado José Francisco Guerra, como Secretario Propietario al Diputado Benito José Guerra y como Secretario Suplente al Diputado Antonio Velasco de la Torre y como Secretario Suplente al Diputado Antonio Velasco de la Torre (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 2 de octubre de 1824: 355).

El Congreso General proclamó a los generales Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo como Presidente y Vicepresidente de la República (Decreto del 2 de octubre de 1824. AHEM: G.G.G. vol. 4, exp. 1).[43]

El 4 de octubre el Congreso General expidió la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos (Secretaría de Gobernación, 2010), en la cual se dispuso que "la Nación Mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal" (art. 4º); que "las partes de esta Federación son los estados y territorios siguientes: el Estado de las Chiapas, el de Chihuahua, el de Coahuila y Texas, el de Durango, el de Guanajuato, el de México, el de Michoacán, el de Nuevo León, el de

[43] Organizaron su Administración de acuerdo con el Reglamento para el Gobierno Interior y Exterior de las Secretarías de Estado y del Despacho Universal del 8 de noviembre de 1821, en donde se establecieron las secretarías de: Relaciones Exteriores e Interiores, la de Justicia y Negocios Eclesiásticos, la de Guerra y Marina y la de Hacienda.

Oaxaca, el de Puebla de los Ángeles, el de Querétaro, el de San Luis Potosí, el de Sonora y Sinaloa, el de Tabasco, el de las Tamaulipas, el de Veracruz, el de Jalisco, el de Yucatán y el de los Zacatecas: el Territorio de la Alta California, el de la Baja California, el de Colima, y el de Santa Fe de Nuevo México. Una Ley Constitucional fijará el carácter de Tlaxcala" (art. 5º), y que "se divide el Supremo Poder de la Federación para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial" (art. 6º).

En el Título 3º "Del Poder Legislativo", se indica que "se deposita el Poder Legislativo de la Federación en un Congreso General" que "se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores" (art. 7º); que "la Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos en su totalidad cada dos años por los ciudadanos de los estados" (art. 8º); que "en todos los estados y territorios de la Federación se hará el nombramiento de diputados el primer domingo de octubre próximo anterior a su renovación, debiendo ser la elección indirecta" (art. 16), y que "el Senado se compondrá de dos senadores de cada Estado elegidos a mayoría absoluta de votos por sus legislaturas, y renovados por mitad de dos en dos años" (art. 25).

En el artículo 38 se indica que "cualquiera de las dos cámaras podrá conocer en calidad de Gran Jurado sobre las acusaciones… del Presidente de la Federación, por delitos de traición contra la independencia nacional, o la forma establecida de gobierno, y por cohecho o soborno, cometidos durante el tiempo de su empleo" (1º); "del mismo Presidente por actos dirigidos manifiestamente a impedir que se hagan las elecciones de Presidente, senadores y diputados, o a que éstos se presenten a servir sus destinos en las épocas señaladas en esta Constitución, o a impedir a las cámaras el uso de cualquiera de las facultades que les atribuye la misma" (2º); "de los individuos de la Corte Suprema de Justicia y de los secretarios del despacho, por cualquiera delitos cometidos durante el tiempo de sus empleos" (3º), y "de los gobernadores de los estados, por infracciones de la Constitución Federal, leyes de la Unión, u órdenes del Presidente de la Federación, que no sean manifiestamente contrarias a la Constitución y leyes generales de la Unión, y también por la publicación de leyes o decretos de las legislaturas de sus respectivos estados, contrarias a la misma Constitución y leyes" (art. 4º).

En el artículo 50 se establecen como facultades exclusivas del Congreso General las de: "promover la ilustración, asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras; estableciendo colegios de marina, artillería e ingenieros; erigiendo uno o más establecimientos en que se enseñen las ciencias

naturales y exactas, políticas y morales, nobles artes y lenguas; sin perjudicar la libertad que tienen las legislaturas para el arreglo de la educación pública en sus respectivos estados" (1ª); "fomentar la prosperidad general, decretando la apertura de caminos y canales, o su mejora, sin impedir a los estados la apertura o mejora de los suyos; estableciendo postas y correos, y asegurando por tiempo limitado a los inventores, perfeccionadores o introductores de algún ramo en industria derechos exclusivos por sus respectivos inventos, perfecciones o nuevas introducciones" (2ª); "proteger y arreglar la libertad política de imprenta, de modo que jamás se pueda suspender su ejercicio, y mucho menos abolirse en ninguno de los estados ni territorios de la federación" (3ª); "admitir nuevos estados a la Unión Federal, o territorios, incorporándolos en la Nación" (4ª); "arreglar definitivamente los límites de los estados, terminando sus diferencias cuando no hayan convenido entre sí sobre la demarcación de sus respectivos distritos" (5ª); "erigir los territorios en estados, o agregarlos a los existentes" (6ª); "unir dos o más estados a petición de sus legislaturas, para que formen uno solo, o erigir otro de nuevo dentro de los límites de los que ya existen, con aprobación de las tres cuartas partes de los miembros presentes de ambas cámaras, y ratificación de igual número de las legislaturas de los demás estados de la Federación" (7ª); "fijar los gastos generales, establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos, arreglar su recaudación, determinar su inversión, y tomar anualmente cuentas al Gobierno" (8ª); "contraer deudas sobre el crédito de la Federación, y designar garantías para cubrirlas" (9ª); "reconocer la deuda nacional, y señalar medios para consolidarla y amortizarla" (10ª); "arreglar el comercio con las naciones extranjeras, y entre los diferentes estados de la Federación y tribus de los indios" (11ª); "dar instrucciones para celebrar concordatos con la Silla Apostólica, aprobarlos para su ratificación, y arreglar el ejercicio del Patronato en toda la Federación" (12ª); "aprobar los tratados de paz, de alianza, de amistad, de federación, de neutralidad armada, y cualquiera otros que celebre el Presidente de los Estados Unidos con potencias extranjeras" (13ª); "habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas y designar su ubicación" (14ª); "determinar y uniformar el peso, ley, valor, tipo y denominación de las monedas en todos los estados de la Federación, y adoptar un sistema general de pesos y medidas" (15ª); "decretar la guerra en vista de los datos que le presente el Presidente de los Estados Unidos" (16ª); "dar reglas para conceder patentes de corso, y para declarar buenas o malas las presas de mar y tierra" (17ª); "designar la fuerza armada de mar y tierra, fijar el contingente de hombres respectivo a cada Estado, y dar ordenanzas y reglamentos para su organización y servicio" (18ª); "formar reglamentos para organizar, armar y disciplinar la Milicia Local de los estados, reservando a cada uno el nombramiento respectivo de oficiales y la

facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos" (19ª); "conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la Federación" (20ª); "permitir o no la estación de escuadras de otra potencia por más de un mes en los puertos mexicanos" (21ª); "permitir o no la salida de tropas nacionales fuera de los límites de la República" (22ª); "crear o suprimir empleos públicos de la Federación, señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones, retiros y pensiones" (23ª); "conceder premios y recompensas a las corporaciones o personas que hayan hecho grandes servicios a la República, y decretar honores públicos a la memoria póstuma de los grandes hombres" (24ª); "conceder amnistías o indultos por delitos, cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación, en los casos y previos los requisitos que previenen las leyes (25ª); "establecer una regla general de naturalización" (26ª); "dar leyes uniformes en todos los estados sobre bancarrotas" (27ª); "elegir un lugar que sirva de residencia a los Supremos Poderes de la Federación, y ejercer en su Distrito las atribuciones de Poder Legislativo de un Estado" (28ª); "variar esta residencia cuando lo juzgue necesario" (29ª); "dar leyes y decretos para el arreglo de la administración interior de los territorios" (30ª), y "dictar todas las leyes y decretos que sean conducentes, para llenar los objetos de que habla el artículo 49,[44] sin mezclarse en la administración interior de los estados" (31ª).

En el Título 4º "Del Supremo Poder Ejecutivo de la Federación", se indica que "se deposita el Supremo Poder Ejecutivo de la Federación en un solo individuo, que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos" (art. 74); que "habrá también un Vicepresidente en quien recaerán en caso de imposibilidad física o moral del Presidente, todas las facultades y prerrogativas de éste" (art. 75); que "el día 1º de septiembre del año próximo anterior a aquel en que deba el nuevo Presidente entrar en el ejercicio de sus atribuciones, la Legislatura de cada Estado elegirá a mayoría absoluta de votos dos individuos, de los cuales uno por lo menos no será vecino del Estado que elije" (art. 79); que "concluida la votación, remitirán las legislaturas al Presidente del Consejo de Gobierno en pliego certificado testimonio de la Acta de la Elección, para que le dé el curso que prevenga el Reglamento del Consejo" (art. 80); que "el 6 de enero próximo se abrirán y leerán en presencia de las cámaras reunidas los testimonios de que habla el artículo anterior, si se hubieren recibido los de las tres

[44] Este artículo señala que "las leyes y decretos que emanen del Congreso General tendrán por objeto: 1º. Sostener la independencia nacional, y proveer a la conservación y seguridad de la Nación en sus relaciones exteriores. 2º. Conservar la Unión Federal de los estados, y la paz y el orden público en lo interior de la Federación. 3º. Mantener la independencia de los estados entre sí en lo respectivo a su gobierno interior, según la Acta Constitutiva y esta Constitución. 4º. Sostener la igualdad proporcional en obligaciones y derechos que los estados tienen ante la ley".

cuartas partes de las legislaturas de los estados" (art. 81); que "concluida la lectura de los testimonios, se retirarán los senadores, y una Comisión nombrada por la Cámara de Diputados, y compuesta de uno por cada Estado de los que tengan representantes presentes, los revisará y dará cuenta con su resultado" (art. 82); que "enseguida la Cámara procederá a calificar las elecciones y a la enumeración de los votos" (art. 83), y que "el que reuniere la mayoría absoluta de los votos de las legislaturas será el Presidente" (art. 84).

Se señala que "durante el receso del Congreso General, habrá un Consejo de Gobierno, compuesto de la mitad de los individuos del Senado, uno por cada Estado" (art. 113); que "para el despacho de los negocios del Gobierno de la República habrá el número de secretarios que establezca el Congreso General por una ley" (art. 117), y que "todos los reglamentos, decretos y órdenes del Presidente deberán ir firmados por el Secretario del despacho del ramo a que el asunto corresponda, según su reglamento, y sin este requisito no serán obedecidos" (art. 118).

En el Título 5º "Del Poder Judicial de la Federación", se indica que "el Poder Judicial de la Federación residirá en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito, y en los juzgados de distrito" (art. 123); que "la Corte Suprema de Justicia se compondrá de once ministros distribuidos en tres salas, y de un Fiscal, pudiendo el Congreso General aumentar o disminuir su número si lo juzgare conveniente" (art. 124); que "la elección de los individuos de la Corte Suprema de Justicia será en un mismo día por las legislaturas de los estados a mayoría absoluta de votos" (art. 127); que "concluidas las elecciones, cada Legislatura remitirá al Presidente del Consejo de Gobierno una lista certificada de los doce individuos electos, con distinción del que lo haya sido para Fiscal" (art. 128); que "el Presidente del Consejo luego que haya recibido las listas, por lo menos de las tres cuartas partes de las legislaturas, les dará el curso que se prevenga en el Reglamento del Consejo" (art. 129); que "en el día señalado por el Congreso se abrirán y leerán las expresadas listas a presencia de las cámaras reunidas, retirándose enseguida los senadores" (art. 130); que "acto continuo la Cámara de Diputados nombrará por mayoría absoluta de votos una Comisión que deberá componerse de un Diputado por cada Estado, que tuviere representantes presentes, a la que se pasarán las listas, para que revisándolas den cuenta con su resultado, procediendo la Cámara a calificar las elecciones, y a la enumeración de los votos" (art. 131), y que "el individuo o individuos que reuniesen más de la mitad de los votos computados por el número total de las legislaturas, y no por el de sus miembros

respectivos, se tendrán desde luego por nombrados, sin más que declararlo así la Cámara de Diputados" (art. 132).

En el Título 6º "De los Estados de la Federación", se indica que "el gobierno de cada Estado se dividirá para su ejercicio en los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo, y Judicial; y nunca podrán reunirse dos más de ellos en una corporación o persona, ni el Legislativo depositarse en un solo individuo" (art. 157); que "el Poder Legislativo de cada Estado residirá en una Legislatura compuesta del número de individuos que determinarán sus constituciones particulares, electos popularmente, y amovibles en el tiempo y modo que ellas dispongan" (art. 158); que "la persona o personas a quienes los estados confiaren su Poder Ejecutivo, no podrá ejercerlo sino por determinado tiempo que fijará su Constitución respectiva" (art. 159), y que "el Poder Judicial de cada Estado se ejercerá por los tribunales que establezca o designe la Constitución, y todas las causas civiles o criminales que pertenezcan al conocimiento de estos tribunales serán fenecidas en ellos hasta su última instancia y ejecución de la última sentencia" (art. 160).

En el artículo 161 se precisó que cada uno de los estados tiene la obligación: de "organizar su gobierno y administración interior sin oponerse a esta Constitución ni al Acta Constitutiva" (1ª); de "publicar por medio de sus gobernadores su respectiva Constitución, leyes y decretos" (2ª); de "guardar y hacer guardar la Constitución y leyes generales de la Unión, y los tratados hechos o que en adelante se hicieren por la Autoridad Suprema de la Federación, con alguna potencia extranjera" (3ª); de "proteger a sus habitantes en el uso de la libertad que tienen de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación anterior a la publicación; cuidando siempre de que se observen las leyes generales de la materia" (4ª); de "entregar inmediatamente los criminales de otros estados a la autoridad que los reclame" (5ª); de "entregar los fugitivos de otros estados a las personas que justamente los reclamen, o compelerlos de otro modo a la satisfacción de la parte interesada" (6ª); de "contribuir para consolidar y amortizar las deudas reconocidas por el Congreso General" (7ª); de "remitir anualmente a cada una de las cámaras del Congreso General nota circunstanciada y comprensiva de los ingresos y egresos de todas las tesorerías que haya en sus respectivos distritos, con relación del origen de unos y otros; del estado en que se hallen los ramos de industria agrícola, mercantil y fabril; de los nuevos ramos de industria que puedan introducirse y fomentarse, con expresión de los medios para conseguirlo; y de su respectiva población y modo de protegerla o aumentarla" (8ª), y de "remitir a las dos cámaras y

en sus recesos, al Consejo de Gobierno, y también al Supremo Poder Ejecutivo copia autorizada de sus constituciones, leyes y decretos" (9ª).

En el artículo 162 se estableció que ningún Estado podrá: establecer "sin el consentimiento del Congreso General derecho alguno de tonelaje ni otro alguno de puerto" (1º); imponer "sin consentimiento del Congreso General contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones, mientras la ley no regule cómo deban hacerlo" (2º); tener "en ningún tiempo tropa permanente ni buques de guerra sin el consentimiento del Congreso General" (3º); entrar "en transacción con alguna potencia extranjera, ni declararle guerra, debiendo resistirle en caso de actual invasión, o en tan inminente peligro que no admita demora; dando inmediatamente cuenta en estos casos al Presidente de la República" (4º), y entrar "en transacción o contrato con otros estados de la Federación, sin el consentimiento previo del Congreso General, o su aprobación posterior, si la transacción fuere sobre arreglo de límites" (5º).

En el Título 7º "De la Observancia, Interpretación y Reforma de la Constitución y Acta Constitutiva", se señala que "todo funcionario público sin excepción de clase alguna, antes de tomar posesión de su destino deberá prestar juramento de guardar esta Constitución y la Acta Constitutiva" (art. 163); que "sólo el Congreso General podrá resolver las dudas que ocurran sobre inteligencia de los artículos de esta Constitución y de la Acta Constitutiva" (art. 165); que "las legislaturas de los estados podrán hacer observaciones, según les parezca conveniente, sobre determinados artículos de esta Constitución y de la Acta Constitutiva, pero el Congreso General no las tomará en consideración sino precisamente el año de 1830" (art. 166); que "el Congreso en este año se limitará a calificar las observaciones que merezcan sujetarse a la deliberación del Congreso siguiente, y esta declaración se comunicará al Presidente, quien la publicará y circulará sin poder hacer observaciones" (art. 167), y que "jamás se podrán reformar los artículos de esta Constitución y de la Acta Constitutiva que establecen la libertad e independencia de la Nación Mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta, y división de los Poderes Supremos de la Federación, y de los estados" (art. 171).

El 9 de octubre el Congreso determinó que "el Gobernador del Estado el 16 del corriente procederá a recibir las rentas del mismo Estado, con arreglo a los decretos del Soberano Congreso y del Supremo Poder Ejecutivo, sin hacer variación en su recaudación de dichas rentas; y consultando con el Consejo todas las dudas urgentes

que puedan ofrecerse" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 28 del 9 de octubre de 1824: 39).

El 10 de octubre Guadalupe Victoria al rendir su protesta de ley ante el Congreso Constituyente como Presidente de Estados Unidos Mexicanos señaló que "la nave del Estado habrá de surcar un mar tempestuoso y difícil; que la vigilancia y las fuerzas del piloto no alcanzan a contener el ímpetu de los vientos: que existen averías en el casco y el norte es desconocido. Peligros no faltan, complicadas son las circunstancias y solo el poder del Regulador de los destinos, la ciencia y la previsión de los representantes del pueblo conducirán esta nave al puerto de la felicidad" Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 1985. Discurso del 10 de octubre de 1824: 22).

El 11 de octubre el Congreso integró una comisión de su seno para que arreglara el acto solemne del juramento a la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha Comisión la integraron los diputados: José María Luis Mora, José Ignacio de Nájera y Manuel de Cortázar (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 11 de octubre de 1824: 379).

El 12 de octubre el Congreso determinó que "el 17 del corriente prestarán el juramento a la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos el Congreso, Gobierno y Consejo del Estado, y las demás autoridades de esta Capital"; que "el domingo inmediato al día en que se reciba la Constitución en las municipalidades del Estado, lo prestarán todas las autoridades del mismo Estado existentes en ella, bajo la fórmula prescrita para el efecto por el decreto del Congreso General"; y que "el domingo siguiente a aquel de que hablan los artículos anteriores, lo prestará el pueblo en la forma últimamente acostumbrada" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 29 del 12 de octubre de 1824: 39).

En dicho decreto se indicó que "el Congreso del Estado se reunirá a las ocho de la mañana del día 17, y después de leída la Constitución prestará su Presidente el juramento ante el Congreso, y el Congreso en manos del Presidente"; que "en seguida entrará el Gobernador con el Consejo, y prestará el primero dicho juramento ante el Congreso en el solio; el Teniente lo prestará en el asiento más inmediato al solio, y los consejeros en la Mesa"; que "concluido este acto, entrará el Tesorero General del Estado, y prestará el juramento en la Mesa", y que "el Gobernador se retirará con el Consejo, y pasará inmediatamente al Salón de éste a recibir el juramento de todas las

autoridades del Estado, que lo prestaron a la Ley Orgánica Provisional, y además el de los jefes de sus oficinas de rentas, que en aquella época pertenecían a la Federación".

El 16 de octubre el Congreso dispuso que "el Gobernador determine por sí las solicitudes sobre dispensa de práctica de Jurisprudencia a que pueden aspirar los pasantes juristas" (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 16 de octubre de 1824: 406).

El 17 de octubre después de que se leyó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se efectuó el juramento de obediencia de la misma por parte de los diputados. En virtud de que el Gobernador Melchor Múzquiz estaba enfermo, se dispuso que "estando funcionando el día de hoy el Teniente por enfermedad del primero, pido se le hagan los mismos honores que a éste" (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 17 de octubre de 1824: 413).

El Teniente Gobernador Francisco Sánchez de Tagle, después de prestar el juramento a la Constitución Federal, señaló que "este preciso Código en que la sabiduría y el patriotismo de los beneméritos representantes de la Nación ha consignado la gloria de ésta y su felicidad futura y a cuya observancia nos hemos hoy comprometido con solemne y el más sagrado vínculo, afianzó para siempre nuestra venturosa independencia. Sin temor de equivocarse así lo cree el Gobierno del Estado Libre de México y por lo mismo, no sólo ve un deber, sino que cifra su gloria en hacerla observar hasta sus ápices, lisonjeándose desde ahora y prometiéndose de la ilustración de los dignos miembros de este Honorable Congreso que para colmo, de ventura guardará la Constitución Particular del Estado con la General de la Federación" (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 17 de octubre de 1824: 413).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Pedro Martínez de Castro, afirmó que "se han echado ya los cimientos de nuestra felicidad y desde el momento que se publicó la Constitución Federal, quedó escrito en el libro del tiempo el nombre augusto de la grande y generosa Nación Mexicana, para quien será siempre grato y siempre memorable el fausto día en que recibió el Código de las Leyes que afianzan su independencia y libertad. Reconozcamos en tan próspero suceso los beneficios que nos ha dispensado el Supremo Legislador, y congratulémonos al ver cumplido el voto de los pueblos del Anáhuac aún más allá de sus esperanzas" (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 17 de octubre de 1824: 413).

Con motivo de la promulgación de la Constitución Federal, Melchor Múzquiz suscribió un manifiesto, en el cual se comprometió a "que el precioso Código que hoy me manda entregaros nuestro augusto Congreso, no será para vosotros un libro mudo o destinado solamente al entretenimiento de especulaciones inútiles; sino que identificando todas sus instituciones con vuestros sentimientos y costumbres, haréis de su observancia una necesidad imperiosa de inaccesible a los embates, el tiempo y las pérfidas sugestiones de los fautores de la tiranía, haga eterna la dicha y prosperidad de nuestra Patria" (Manifiesto del 17 de octubre de 1824. AHEM: G.G.G. vol. 4, exp. 7).

El 19 de octubre el Congreso integró una comisión de su seno para que atendiera lo referente a "una proposición que se presentó en el Congreso General, a fin de que México se declare Ciudad Federal"; y que por lo tanto, "este Congreso no se ocupe de otro asunto hasta tomar la resolución correspondiente". Dicha Comisión se integró con los diputados: José Francisco Guerra, José María Luis Mora, José de Jáuregui, Alonso Fernández y José Figueroa (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 19 de octubre de 1824: 418).

El 22 de octubre ante la inminente segregación territorial de la Ciudad de México, el Congreso dispuso que "se encargue muy particularmente a los diputados de México al Congreso General la más enérgica y firme oposición a la pretendida desmembración que les dicte la notoria justicia de esta causa, sus luces y amor al mismo bien del Estado" (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 22 de octubre de 1824: 432).

El 25 de octubre el Diputado Suplente Antonio de Castro rindió su protesta como Diputado del Congreso, para cubrir la vacante que por licencia dejó el Diputado Francisco Moctezuma (Poder Legislativo II, 1827. Acta del 25 de octubre de 1824: 439).

El 30 de octubre el Congreso ante una propuesta que hizo el Gobernador "para que sólo se diese a los individuos de este Congreso media paga lo mismo que a los demás empleados del Estado, acordó que se le previniera al Gobernador "que de las cantidades existentes en la Tesorería se tome rebajándola del contingente, la que quedó debiendo el Ministro de Hacienda de dietas a los señores diputados, y se prorrogue entre ellos, en atención en que todos los empleados del Estado están pagados hasta la primera quincena de este mes, y a los diputados se están debiendo

ésas, y cuatro meses" (Acta de la sesión secreta del 30 de octubre de 1824. BJMLM: Colección de Actas).

El 1 de noviembre el Congreso eligió como individuos que debían componer la Suprema Corte de Justicia de la Nación a: José Ignacio Espinosa, Mariano Marín, Francisco Lombardo, Tomás Salgado, Manuel del Campo y Riva, José Sotero Castañeda, Juan José Flores Alatorre, José Isidoro Yáñez, José Ignacio Berazueta, Ignacio Olloqui, Juan Nepomuceno Navarrete, Manuel de la Peña y Peña y a José Espinosa de los Monteros como Fiscal (Poder Legislativo III, 1827. Acta del 1 de noviembre de 1824: 3).

El 3 de noviembre el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de noviembre de su primer año de gestión, presidida por el Diputado Manuel Cotero. Nombró como Vicepresidente al Diputado Francisco de las Piedras, como Secretario Propietario al Diputado Antonio de Castro y como Secretario Suplente al Diputado Mariano Casela (Poder Legislativo III, 1827. Acta del 3 de noviembre de 1824: 4).

El 5 de noviembre el Congreso acordó "que la oposición última que el Congreso ha hecho al General de la Federación sobre que no se lleve a efecto el acuerdo, por el que se declara a México Ciudad Federal, se mande a los congresos de los estados"; "que se les indique a éstos el peligro en que se halla la Federación, si tal medida se lleva a efecto, y el interés que deben tomar todos los congresos en el sostenimiento del sistema", y "que se le remitan al Gobernador del Estado los ejemplares de la referida exposición que sean necesarios para que los remita a los prefectos, y éstos los pasarán a sus respectivos ayuntamientos" (Acta de la sesión secreta del 5 de noviembre de 1824. BJMLM: Colección de Actas).

El 11 de noviembre el Congreso dispuso que "mientras este Congreso toma la resolución definitiva que estime conveniente, continuará el Tribunal del Consulado en el ejercicio de sus funciones, por lo respectivo a este Estado" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 30 del 11 de noviembre de 1824: 41).

El Congreso aprobó una exposición al Congreso General, "relativa a manifestar que México no puede ser Ciudad Federal por los inconvenientes que se presentan en el proyecto" (Poder Legislativo III, 1827. Acta del 11 de noviembre de 1824: 45).

El Congreso General determinó que “los gobernadores de los estados deberán publicar para su cumplimiento las leyes y decretos del Congreso General, a más tardar, al tercero día de haberlos recibido, sin necesidad del pase a las legislaturas” (Decreto del 11 de noviembre de 1824. AHEM: L.L.D.F. vol. 2, exp. 7).

El 12 de noviembre el Congreso libró “una orden al Gobernador para que prevenga a los prefectos se suspendan las elecciones de ayuntamientos hasta la publicación de la ley en la materia, continuando los que ahora existen” (Poder Legislativo III, 1827. Acta del 12 de noviembre de 1824: 100).

El 18 de noviembre el Congreso General dispuso que el lugar de residencia de los Supremos Poderes de la Federación sería la Ciudad de México, que su Distrito sería “el comprendido en un círculo, cuyo centro sea la Plaza Mayor de esta Ciudad, y su radio de dos leguas”, que el gobierno político y económico de dicho Distrito quedaba bajo la jurisdicción del Gobierno General, y que éste “y el Gobernador del Estado de México, nombrarán cada uno un perito para que entre ambos marquen y señalen los términos del Distrito” (Decreto del 18 de noviembre de 1824. AHEM: L.L.D.F. vol. 2, exp. 10).

El 19 de noviembre el Congreso General dispuso que el Gobierno Federal proveerá de tabacos labrados a los estados que lo soliciten (Decreto del 19 de noviembre de 1824. BJMLM: vol. 19, exp. 255).

El 22 de noviembre el Estado de México se vio privado de su fábrica de cigarros cuando el Congreso General dispuso que “para proveer al consumo de la Capital, y de los territorios de la Federación, subsistirá por cuenta de la misma, la fábrica de puros, cigarros y polvo de esta Ciudad” (Decreto del 22 de noviembre de 1824. BJMLM: vol. 19, exp. 264).

El Congreso acordó que “después de darse cuenta en la sesión pública del día siguiente con el decreto de la Ciudad Federal, hiciere el Señor Presidente (del Congreso) la protesta (a dicha erección) acordada para que quedase inserta en el acta, publicándose de esta manera y omitiéndose toda otra gestión para que se hiciera pública” (Acta de la sesión secreta del 22 de noviembre de 1824. BJMLM: Colección de Actas).

El Congreso General determinó “que el tercio de la contribución directa que estaba pendiente al entregarse a los Estados sus rentas será de la pertinencia de éstos (Decreto del 22 de noviembre de 1824. BJMLM: vol.19. exp. 207).

El 24 de noviembre el Congreso General declaró a Tlaxcala Territorio de la Federación (Decreto del 24 de noviembre de 1824. L.L.D.F. vol. 2, exp. 11).

El 2 de diciembre el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de diciembre de su primer año de gestión, presidida por el Diputado Manuel Villaverde. Nombró como Vicepresidente al Diputado Pedro Valdovinos, como Secretario Propietario al Diputado Joaquín Villa y como Secretario Suplente al Diputado Mariano Tamariz (Poder Legislativo III, 1827. Acta del 2 de diciembre de 1824: 151).

El 4 de diciembre el Congreso General dispuso que las fiestas religiosas nacionales se reducirán a los días jueves y viernes santo, Corpus y festividad de Guadalupe el 12 diciembre y las cívicas “únicamente los días 16 de septiembre y 4 de octubre, aniversario del Primer Grito de Independencia y de la sanción de la Constitución” (Decreto del 4 de diciembre de 1924. BJMLM: vol. 19, exp. 257).

El 9 de diciembre el Congreso acordó “que se prevenga al Gobernador fije la cantidad que ha de abonarse a los señores diputados mensualmente para el pago de sus dietas atrasadas” (Acta de la sesión secreta del 9 de diciembre de 1824. BJMLM: Colección de Actas).

El 13 de diciembre el Congreso le concedió el título de Villa al Pueblo de Huichapan (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 31 del 13 de diciembre de 1824: 41).

El 16 de diciembre el Congreso dispuso que el Gobernador es el Jefe Supremo de la Hacienda del Estado, que en la Entidad habrá una Tesorería General y una Contaduría, que los “puntos económicos y gubernativos pertenecientes al Ramo de la Hacienda, serán consultados por el Gobernador con el Consejo del mismo Estado”, y que “ningún sueldo de los que se asignen provisionalmente a las plazas de rentas del Estado, podrá exceder de tres mil quinientos pesos” (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 32 del 16 de diciembre de 1824: 42).

El 22 de diciembre el Congreso General dispuso que “los estados podrán imponer el tres por ciento de derecho de consumo a los efectos extranjeros sobre los aforos

hechos en las aduanas marítimas al tiempo de su introducción" (Decreto del 22 de diciembre de 1824. BJMLM: vol. 22, exp. 10).

El Congreso General determinó que mientras el Congreso General "no dicte las leyes por las que arregle el ejercicio del patronato no se hará variación en los Estados en puntos concernientes a las rentas eclesiásticas (Decreto del 22 de diciembre de 1824. BJMLM: vol.19. exp. 207).

El 23 de diciembre el Congreso le negó al Diputado Pedro Martínez de Castro una licencia para separarse definitivamente de su cargo, con el propósito de ocupar el cargo de Ministro en la Corte de Justicia del Estado de Oaxaca (Acta de la sesión secreta del 23 de diciembre de 1824. BJMLM: Colección de Actas).

El 3 de enero de **1825** el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de enero de su primer año de gestión, presidida por el Diputado Alonso Fernández. Nombró como Vicepresidente al Diputado Benito Guerra, como Secretario Propietario al Diputado Mariano Tamariz y como Secretario Suplente al Diputado José Ignacio Nájera (Poder Legislativo III, 1827. Acta del 3 de enero de 1825: 263).

El 14 de enero el Congreso dispuso el cobro del derecho de un tres por ciento impuesto a los efectos extranjeros de acuerdo con instrucción dada por el Congreso General (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 33 del 14 de enero de 1825: 43).

El 15 de enero el Congreso dispuso que "se diga al Gobernador disponga se anuncie al público por los periódicos que se está ya en el caso de proveer las judicaturas de letras de todos los partidos del Estado, a excepción de las pocas que están provistas, para que ocurriendo los aspirantes y calificándose su actitud y méritos se provean dichas plazas en conocido beneficio de la causa pública" (Poder Legislativo III, 1827. Acta del 15 de enero de 1825: 319).

El 17 de enero el Congreso acordó que el "Ayuntamiento de Pachuca cobrara un grano más sobre los dos que se cobraba para sus fondos, por cada arroba de pulque que consuma aquel vecindario" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 34 del 17 de enero de 1825: 43).

El 20 de enero el Congreso acordó adquirir una imprenta, cuyos trabajos serían coordinados por la Comisión de Policía (Acta de la sesión secreta del 20 de enero de 1825. BJMLM: Colección de Actas).

El 21 de enero el Congreso acordó que se llamara al Suplente del Diputado José Figueroa, en virtud de que el Gobierno Federal le había encomendado una comisión al servicio de la República. También acordó que se llamara al Suplente del Diputado Francisco Moctezuma (Poder Legislativo III, 1827. Acta del 21 de enero de 1825: 319).

El 26 de enero el Diputado Suplente José Nicolás de Oláez rindió su protesta de ley como Diputado del Congreso (Poder Legislativo III, 1827. Acta del 26 de enero de 1825: 362).

El 29 de enero el Congreso "declaró Partido separado de Cuernavaca a todo el que fue territorio del Tenientazgo de Jonacatepec, quedando sujeto a la Prefectura de Cuernavaca (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 35 del 29 de enero de 1825: 44).

El 31 de enero se integró a las sesiones del Congreso el Consejero Francisco Manuel Sánchez de Tagle como representante del Gobierno, para atender las observaciones que se hizo a la minuta de ley para la organización de los ayuntamientos (Poder Legislativo III, 1827. Acta del 31 de enero de 1825: 380).

El 3 de febrero el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de febrero de su primer año de gestión, presidida por el Diputado Benito Guerra. Nombró como Vicepresidente al Diputado Manuel Villaverde, como Secretario Propietario al Diputado Francisco de las Piedras y como Secretario Suplente al Diputado Baltazar Pérez (Poder Legislativo III, 1827. Acta del 3 de febrero de 1825: 409).

El 9 de febrero el Congreso expidió la Ley para la Organización de los Ayuntamientos del Estado de México, la cual constaba de apartados referentes a: las bases para la formación de los ayuntamientos, a las calidades de los alcaldes, síndicos y regidores, al número de individuos de que han de componerse, a los electores de los ayuntamientos, a la elección de ayuntamientos, a las facultades de los alcaldes en los términos de sus municipalidades, a las facultades de los ayuntamientos, a los empleados de los ayuntamientos y a los fondos municipales (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 36 del 9 de febrero de 1825: 44).

En esta ley se indicaba que “no podrá haber ayuntamiento sino en los pueblos que por sí o su comarca lleguen a cuatro mil almas” (art. 1º); que “los pueblos de un mismo Partido que no tuvieren este número, se reunirán entre sí hasta completarlo para formar el Ayuntamiento” (art. 2º); que “el Ayuntamiento que se formase por esta reunión de pueblos, se situará en el lugar más conveniente a juicio del Prefecto”; (art. 3º); que “los pueblos que no tengan el número prefijado en esta Ley, y que a juicio del Prefecto no convenga que se reúnan a otros para completarlo, se agregarán al Ayuntamiento más indicado” (art. 4º), y que “los prefectos procederán al establecimiento de los ayuntamientos con arreglo a los artículos precedente, formando sobre cada uno de ellos expediente instructivo, y auxiliándose para graduar la población con los padrones de las parroquias” (art. 5º).

El 16 de febrero el Congreso declaró que “al Gobernador del Estado pertenece exclusivamente nombrar a los funcionarios que habla la facultad 4ª del artículo 13 de la Ley Orgánica Provisional”; es decir, nombrar a “los magistrados de la Audiencia y demás plazas de la Judicatura y empleados civiles y de Hacienda, propios del Estado” (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 37 del 16 de febrero de 1825: 54).

El 21 de febrero el Congreso nombró como Consejero del Estado al Señor José María Cabrera (Poder Legislativo III, 1827. Acta del 21 de febrero de 1825: 517).

El 22 de febrero el Congreso nombró a José Ignacio Berazueta como Ministro del Supremo Tribunal de Justicia (Poder Legislativo III, 1827. Acta del 22 de febrero de 1825: 525).

El 23 de febrero acudió al Congreso José María Cabrera para rendir su protesta de ley como Consejero del Estado (Poder Legislativo III, 1827. Acta del 23 de febrero de 1825: 530).

El 2 de marzo el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de marzo de su segundo año de gestión, presidida por el Diputado Manuel de Cortázar. Nombró como Vicepresidente al Diputado José Nicolás de Oláez, como Secretario Propietario al Diputado José de Jáuregui y como Secretario Suplente al Diputado José María Luis Mora (Poder Legislativo IV, 1827. Acta del 2 de marzo de 1825: 10).

El 3 de marzo el Congreso suspendió "el derecho del cobro del derecho de pulperías[45] en los partidos que se exija" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 38 del 3 de marzo de 1825: 54).

El 4 de marzo el Congreso nombró a Ignacio Olloqui como Fiscal del Supremo Tribunal de Justicia, ante la renuncia que presentó a dicho cargo Tomás Salgado (Poder Legislativo IV, 1827. Acta del 4 de marzo de 1825: 20).

El Congreso General determinó que "la elección de Diputado o Senador para el Congreso General preferirá a la que recaiga en un mismo individuo para miembro de la Legislatura de algún Estado" (Decreto del 4 de marzo de 1825. BJMLM: vol. 22, exp. 65).

El 9 de marzo el Congreso dispuso que "se dé orden al Gobernador para que la Audiencia del Estado forme su Reglamento a la mayor brevedad y lo presente a este Congreso para su aprobación (Proposición del 9 de marzo de 1825. BJMLM: vol. 22, exp. 44).

El 10 de marzo el Congreso por primera vez en su historia expidió un decreto por el que indultó las penas a un preso. En él se indicó que "se indulta sin ejemplar al reo Pascual Ramos de la pena capital, que debía sufrir el día de mañana, conmutándosele en otra consigna, por la autoridad que designará el Congreso" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 39 del 10 de marzo de 1825: 54).

El 20 de marzo el Congreso por primera vez en su historia emitió una felicitación, al pedir que "se felicite al Gobierno Supremo de la Federación por el reconocimiento de nuestra independencia por la Gran Bretaña", y pidió de igual manera, "se diga al Gobernador que a nombre del Estado de México cumplimente al representante de la Gran Bretaña por el reconocimiento que su Gobierno ha hecho a nuestra independencia" (Poder Legislativo IV, 1827. Acta del 20 de marzo de 1825: 48).

El 21 de marzo el Congreso dispuso "que es de aprobarse el proyecto de la composición del Puente de Churubusco bajo el presupuesto que se ha formado", y "que lo que falte del gasto total de la obra, invertidas en ellas las cantidades que han ofrecido los vecinos de Coyoacán y Ayuntamiento de esta Capital, se tome del fondo

[45] Las pulperías eran establecimientos comerciales típicos en donde se vendían toda clase de artículos como comida, bebidas, velas, carbón, remedios y telas.

existente del peaje destinado para la composición del Camino a Acapulco" (Poder Legislativo IV, 1827. Acta del 21 de marzo de 1825: 78).

El 26 de marzo el Congreso por primera vez en su historia expidió un decreto por el que concedió una feria a una población, el cual correspondió a la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, que fue designada con ese nombre, en honor a la familia Bravo que participó en la independencia (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 40 del 26 de marzo de 1825: 55).

El 28 de marzo acudieron al Congreso a rendir su protesta de ley los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia: Jacobo Villaurrutia, Manuel de Campo Rivas, Juan José Flores Alatorre, José Domingo Rus, José Francisco Nava, Ignacio Alva y José Ignacio Berazueta y el Fiscal Ignacio Olloqui (Poder Legislativo IV, 1827. Acta del 28 de marzo de 1825: 101).

El Congreso nombró a José María Puchet como Consejero del Gobierno del Estado (Poder Legislativo IV, 1827. Acta del 28 de marzo de 1825: 101).

El 6 de abril el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de abril de su segundo año de gestión, presidida por el Diputado Joaquín Villa. Nombró como su Vicepresidente al Diputado José María Luis Mora, como Secretario Propietario al Diputado Alonso Fernández y como Secretario Suplente al Diputado Francisco Moctezuma (Poder Legislativo IV, 1827. Acta del 6 de abril de 1825: 107).

El 7 de abril el Congreso acordó "que se admita al Supremo Tribunal de Justicia a felicitar al Congreso, recibiéndolo en la forma que se hizo a su invitación, y tomando asiento sus individuos entre los señores diputados" (Acta de la sesión secreta del 7 de abril de 1825. BJMLM: Colección de Actas).

El 8 de abril el Congreso arregló la división territorial de la Entidad, con "el objeto de que los partidos del mismo Estado tengan la debida consideración política, que sólo puede dar la población reunida, industria y riqueza". Se determinó la extinción de "los partidos de Coyoacán, Coatepec, Chalco, Lerma, Mexicaltzingo, Metepec, Otumba, San Cristóbal Ecatepec, Tepepango, Xochimilco y Zempoala"; se formó en el Distrito de México un Partido "de los de Coyoacán, Mexicaltzingo y Xochimilco, que se denominará San Agustín de las Cuevas"; que el Partido de San Juan Teotihuacán "se compondrá del territorio que tiene actualmente y del que pertenecía a los partidos de

Otumba y San Cristóbal Ecatepec"; que "se agregará al Partido de Pachuca el territorio que componía el de Zempoala"; que al Partido de Toluca se reunirán "los territorios de que se componían los de Lerma y Metepec"; que "el territorio del Partido de Tetepango se dividirá entre los partidos de Actopan, Ixmiquilpan, Pachuca, Tula y Zumpango", y que "en el Distrito de Taxco se dividirá el Partido de Temascaltepec en tres, que se denominarán Temascaltepec, Tejupilco y Sultepec" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 41 del 8 de abril de 1825: 55).

El 9 de abril José María Puchet acudió al Congreso a rendir su protesta de ley como Consejero del Gobierno del Estado (Poder Legislativo IV, 1827. Acta del 9 de abril de 1825: 120).

El 11 de abril el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia al acudir al Congreso, señaló que "unión y separación parecen cosas incompatibles, pero así como las fuerzas centrifugas forman el equilibrio de una máquina bien bordada por las leyes de la estática, así también por los principios elementales de la legislación puede conseguirse un buen sistema de gobierno, en que distribuidos los tres atributos cardinales de la soberanía que el pueblo no puede ejercer por sí mismo, se auxilian mutuamente, cooperando todos en un propio fin, sin que los roces de un contacto entorpezcan los movimientos de la máquina política" (Poder Legislativo IV, 1827. Acta del 11 de abril de 1825: 124).

El 16 de abril el Congreso (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 42 del 16 de abril de 1825: 57) determinó que "en todas las cabeceras de partido habrá dos veces al año certámenes públicos de primeras letras, con asistencia de la autoridad política, del Ayuntamiento y del Cura Párroco" (art. 1º); que "en estos certámenes deberán presentar, para ser examinados en los ramos de leer, escribir y contar, a todos sus discípulos de escuelas de la Cabecera y de los pueblos poco distantes, y serán admitidos también los niños que vivan lejos, si quieren presentarlos sus padres" (art. 2º); que "se faculta al Gobierno para que se confieran de la Hacienda Pública cuatro pesos al niño más aprovechado en leer, ocho pesos al que mejor escribiere y doce al más instruido en contar" (art. 3º), y que "también se faculta, para que de los fondos del Ayuntamiento respectivo, designe una moderada gratificación al maestro o maestro de los discípulos, que hubieren sido premiados" (art. 4º).

El 20 de abril el Congreso expidió el Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de México, el cual incluía apartados referentes: al Tribunal y sus funciones, al

Decano Presidente, al Ministro Semanero, al Ministro Fiscal, a los secretarios, a la distribución de los negocios para dar cuenta entre los ministros y los secretarios y al Portero (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 43 del 20 de abril de 1825: 58).

En este reglamento se señaló que el "Tribunal se compondrá de dos salas de tres ministros cada una, guardando el orden que les dé su nombramiento y presidiendo sus respectivos decanos, y a las dos el que lo sea de todo el cuerpo" (art. 1º); que "el Tribunal tendrá en cuerpo el tratamiento de excelencia y los ministros de señoría oficialmente, y ninguno podrá tener otra comisión o empleo" (art. 2º); que "la asistencia del Tribunal será todo el año desde las diez hasta la una de la tarde, aumentándose este tiempo cuando lo requiera la necesidad, excepto tan solo los días que fueran de rigurosa guarda, llamados comúnmente de dos cruces, o de cruz o de estrella o de fiestas nacionales" (art. 3º), y que "cada año el primer día útil de enero se abrirá el Tribunal, leyéndose lo relativo a la Administración de Justica de la Ley Constitucional del Estado y demás que estén vigentes, y este Reglamento, con la asistencia precisa de todos sus dependientes, para el debido recuerdo de sus respectivas obligaciones" (art. 5º).

El 21 de abril el Congreso determinó que "el Supremo Tribunal Superior de Justicia conocerá de los negocios del Estado, que están pendientes en grado de segunda suplicación" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 44 del 21 de abril de 1825: 66).

El 25 de abril el Congreso aprobó una proposición dirigida al Congreso de la Unión, en la que previno "que se determine previamente por una ley lo que debe practicarse en caso de que una de las cámaras estime que los decretos de una Legislatura tocan en las atribuciones del Congreso General de la Federación, para que se determinen estos puntos con el decoro debido del Congreso General, y sin el agravio de la soberanía de los estados" (Poder Legislativo IV, 1827. Acta del 25 de abril de 1825: 165).

El 2 de mayo el Congreso integró la Mesa Directiva integró del mes de mayo de su segundo año de gestión, presidida por el Diputado Antonio Velasco de la Torre. Nombró como Secretario Propietario al Diputado Ignacio Mendoza y como Secretario Suplente al Diputado Manuel de Cortázar (Poder Legislativo IV, 1827. Acta del 2 de mayo de 1825: 137).[46]

[46] En el acta no se hace referencia al nombramiento del Vicepresidente del Congreso.

El 4 de mayo Melchor Múzquiz emitió una providencia, por la que se instruyó a los prefectos y subprefectos a cuidar que "ningún Alcalde o el que ejerza sus funciones por imposibilidad física o moral de aquel a quien por lo mismo corresponda conocer de los juicios verbales y de conciliación, deberá exigir cantidad alguna a las partes sea cual fuere la clase y proporciones de éstas" (Bando del Ejecutivo del 4 de mayo de 1825. AHEM: L.L.C.E. vol. 1, exp. 4).

El 14 de mayo el Congreso determinó que "en las faltas que ocurran de ministros para el despacho de los negocios de la Audiencia, serán suplidos por abogados nombrados por el Tribunal de Justicia", y que "al efecto formará éste al principio de cada año una lista de aquellos que estime de más aptitud y probidad para tal Ministerio" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 45 del 14 de mayo de 1825: 66).

El 17 de mayo el Congreso dispuso que se hiciera una "proposición a la Cámara de Representantes, para que no se proceda a discutir el dictamen pendiente sobre el Distrito Federal, sin que al mismo tiempo se presente el dictamen que consulte el arreglo del contingente" (Poder Legislativo IV, 1827. Acta del 17 de mayo de 1825: 247).

El 18 de mayo el Congreso dispuso "que se haga a la Cámara del Senado la proposición que estaba hecha a la de Representantes, a efecto de que se revoque el acuerdo del Congreso General Constituyente sobre el Distrito Federal" (Poder Legislativo IV, 1827. Acta del 18 de mayo de 1825: 253).

El 31 de mayo el Consejo del Estado dio a conocer la "Instrucción que servirá de norma a los ayuntamientos para la formación de las ordenanzas municipales", en donde se dispuso que "cada uno de los ayuntamientos nombrará inmediatamente una Comisión compuesta del Síndico o síndicos donde hubiere dos, el Regidor Decano y de otro de los regidores elegido por votación"; que "a esta Comisión se agregarán dos o tres individuos de fuera del Ayuntamiento nombrados a pluralidad de votos de éste, y escogidos entre los vecinos más ilustrados y de mayor probidad"; que "esta Comisión así compuesta, se llamará de Ordenanzas, y se dedicará a su formación, de toda preferencia y con todo empeño, siendo por supuesto libre para tomar luces y aconsejarse con quien le parezca"; que "conforme la Comisión concluya un título lo presentará al Ayuntamiento para que lo discuta en cabildos extraordinarios artículo por artículo, modificando, añadiendo y aprobando según le parezca", y que "a estos cabildos extraordinarios convendrá asistan los subprefectos o sus tenientes en los

lugares donde residan para que ayuden con sus luces" (Instrucciones del Ejecutivo del 31 de mayo de 1825. BJMLM: vol. 42, exp. 112).

El 3 de junio el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de junio de su segundo año de gestión, presidida por el Diputado José María Luis Mora. Nombró como Vicepresidente al Diputado Joaquín Villa, como Secretario Propietario al Diputado Manuel de Cortázar y como Secretario Suplente al Diputado Manuel Cotero (Poder Legislativo IV, 1827. Acta del 3 de junio de 1825: 301).

El 15 de junio el Congreso ordenó que se abriera "camino en el territorio del Estado para el rumbo de la Tierra Adentro", que "para su formación y composición se establecerá un peaje", que "el Gobernador formará el presupuesto del costo de esta obra, y propondrá al Congreso, oído el Consejo, la cantidad que debe imponerse a los carruajes, bestias y ganados que transiten el camino", y que "esta obra se llevará a efecto por contrata, que se celebrará con algún particular o compañía" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 46 del 15 de junio de 1825: 67).

El 1 de julio el Congreso estableció la Casa de Moneda por contrata con algún particular o compañía (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 47 del 1 de julio de 1825: 68).

El 2 de julio el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de julio de su segundo año de gestión, presidida por el Diputado Pedro Valdovinos. Nombró como Vicepresidente al Diputado Baltazar Pérez, como Secretario Propietario al Diputado Antonio Velasco de la Torre y como Secretario Suplente al Diputado Manuel Villaverde (Poder Legislativo V, 1827. Acta del 2 de julio de 1825: 10).

El 6 de julio el Congreso pidió "que se prevenga al Gobierno los informes correspondientes sobre si se ha verificado o no dicho pago (sobre la venta de bienes muebles e inmuebles situados en la Hacienda Ojo de Agua de San Cristóbal) y dé cuenta al Congreso de lo que de ello recibiese (Proposición del 6 de julio de 1825. BJMLM: vol. 22, exp. 14).

El 18 de julio el Congreso acordó que la dotación del Portero de la Secretaría del Gobernador fuera de 300 pesos anuales (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 48 del 18 de julio de 1825: 68).

El Congreso dispuso que el Pueblo de Tlalnepantla fuera la Cabecera del Partido que antes se denominaba Tacuba (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 49 del 18 de julio de 1825: 69).

El 27 de julio el Congreso al ordenar al Gobierno circular "el Manifiesto de este Congreso sobre la Encíclica de su Santidad a todas las corporaciones y autoridades del Estado", dispuso que "se dará un premio de doscientos pesos al autor de la mejor disertación, que se presentare sobre esta cuestión: ¿dentro de qué límites debe contenerse la autoridad Pontificia, en orden al ejercicio de la potestad espiritual, y como está ejercida en toda su plenitud, en nada perjudica a la soberanía e independencia de los nacionales?" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 50 del 27 de julio de 1825: 69).

El 31 de julio los integrantes de la Comisión de Constitución del Congreso pidieron que su "proyecto de decreto para la Administración de Justicia en el Estado de México" fuera remitido "a los tribunales de Justicia y Audiencia, al Colegio de Abogados y a la Academia de Jurisprudencia, a fin de que hagan sobre el mismo decreto las observaciones que estimen conveniente". Cabe indicar que este proyecto de ley constaba de tres títulos, en los cuales se sentarían las bases de la administración y se arreglaría el orden de proceder en lo civil y en lo criminal (Proyecto de decreto del 31 de julio de 1825. BJMLM: vol. 25, exp. 199).

El 2 de agosto el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de agosto de su segundo año de gestión, presidida por el Diputado Francisco de las Piedras. Nombró al Diputado Ignacio Mendoza como Vicepresidente, al Diputado Manuel Villaverde como Secretario Propietario y al Diputado José Ignacio Nájera como Secretario Suplente (Poder Legislativo V, 1827. Acta del 2 de agosto de 1825: 167).

El 22 de agosto el Congreso dispuso que quedaban "resumidas en los alcaldes primeros y síndicos de las municipalidades del Estado, o en los que hagan sus veces, las atribuciones que para los sorteos demarcaba a las justicias de los partidos el Reglamento, mandado observar para la formación de los cuerpos de la Milicia Activa" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 51 del 22 de agosto de 1825: 70).

El 2 de septiembre el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de septiembre de su segundo año de gestión, presidida por el Diputado Pedro Martínez de Castro. Nombró como Vicepresidente al Diputado Benito José Guerra, como Secretario Propietario al

Diputado José Ignacio Nájera y como Secretario Suplente al Diputado Pedro Valdovinos (Poder Legislativo V, 1827. Acta del 2 de septiembre de 1825: 230).

El 5 de septiembre el Congreso determinó que “en los tribunales y juzgados del Estado, ninguno puede ser Abogado directa ni indirectamente en causa alguna, en que fuere Juez o Fiscal su padre, hermano, cuñado, hijo, yerno o suegro, so pena de sesenta pesos de multa” (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 52 del 5 de septiembre de 1825: 71).

El 7 de septiembre el Congreso autorizó “al Gobierno para que de los fondos del Estado disponga de la cantidad de veinte mil pesos, que distribuirá entre los pueblos de los distritos, para contener los progresos de la epidemia del sarampión y socorrer a los contagiados que los necesiten” (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 53 del 7 de septiembre de 1825: 71).

El 13 de septiembre el Congreso acordó que el Gobernador felicitara personalmente o por escrito al Presidente de la República, con motivo de aniversario de la independencia nacional (Acta de la sesión secreta del 13 de septiembre de 1825. BJMLM: Colección de Actas).

El 14 de septiembre el Congreso ordenó al Gobierno implementar un Fondo de Rescate de Platas “de cuarenta mil pesos al Mineral de Taxco, de veinte mil en el de Temascaltepec, de igual cantidad en el de Pachuca y de quince mil el de Zimapán” (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 54 del 14 de septiembre de 1825: 72).

El 24 de septiembre el Congreso expidió el decreto sobre el arreglo de la Secretaría del Congreso del Estado de México, el cual constó de apartados referentes a: los jefes de la Secretaría y plazas que se compone, al Oficial Primero y sus obligaciones, al Oficial Segundo, al Redactor, al Archivero, a los escribientes, a los porteros y a las previsiones generales (Poder Legislativo, 2001. Decreto 55 del 24 de septiembre de 1825: 72).

En dicho decreto se dispuso que “los jefes de la Secretaría del Congreso son los señores secretarios, y sus funciones las que constan en su Reglamento Interior” (art. 1º); que “las plazas de la Secretaría son: Oficial Primero, Oficial Segundo, Redactor, Archivero y por ahora cuatro escribientes” (art. 2º); que “el Congreso nombrará y removerá a su arbitrio a los oficiales y escribientes” (art. 3º); que “no podrá el

Archivero ministrar, si no es a la Secretaría y comisiones y por orden escrita de los señores secretarios, documento alguno de los que tiene bajo su responsabilidad" (art. 11, frac. IX); "que la Oficina deberá abrirse a las ocho de la mañana y cerrarse a las dos de la tarde" (art. 20); que "por la tarde deberá quedar de guardia uno de los dependientes de la Secretaría, Oficial o Escribiente, para lo que se ofreciere" (art. 21), y que "deberá estar abierta la Secretaría cuando hubiere sesión extraordinaria o lo exijan los trabajos de la misma Secretaría" (art. 22).

El 2 de octubre el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de octubre de su segundo año de gestión, presidida por el Diputado Baltazar Pérez. Nombró como Vicepresidente al Diputado José de Jáuregui, como Secretario Propietario al Diputado Pedro Valdovinos y como Secretario Suplente al Diputado José María Luis Mora (Poder Legislativo V, 1827. Acta del 2 de octubre de 1825: 388).

El 3 de octubre el Congreso expidió el decreto sobre el arreglo de la Hacienda Pública del Estado de México, la cual constó de apartados referentes a: las bases generales del Sistema de Hacienda del Estado de México, a las obligaciones y facultades del Gobernador, a las facultades y obligaciones del Consejo, a los administradores generales de distrito, a la intervención de las autoridades políticas en la administración de las rentas, a las bases generales de la Tesorería General y Contaduría General del Estado y a los departamentos de: Rentas Unidas, de Pólizas y Tomas de Razón, de Municipalidades, de Comunes y de Archivos (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 56 del 3 de octubre de 1825: 75).

En este decreto se indicó que "el Gobernador es el Jefe Supremo de la Hacienda del Estado" (art. 1º); que los puntos contenciosos de dicho ramo corresponden en primera instancia a los jueces de letras en las cabeceras de los partidos y en apelación a los tribunales de segunda instancia (art. 2º); que "se establecerá en la Capital del Estado una Tesorería General y una Contaduría" (art. 3º); que "en las cabeceras de distrito habrá un Administrador de Rentas Unidas" (art. 4º); y que "ningún empleado de rentas podrá disfrutar sueldos que excedan de tres mil pesos" (art. 5º). Se incluyeron las obligaciones y facultades del Gobernador y del Consejo en esta materia, al igual que las del Administrador de Rentas Unidas en cada Distrito; se precisaron los mecanismos de la intervención de las autoridades políticas en la administración de rentas, las bases generales de la Tesorería General y de la Contaduría General del Estado, la cual debía integrarse con los departamentos de: Rentas Unidas, de Pólizas y Tomas de Razón, de Municipalidades, de Comunes y de Archivo.

El 13 de octubre el Congreso por primera vez en su historia otorgó una dispensa para ejercer derechos civiles, al disponer que al joven "Mariano Riva Palacio, se le habilita de edad para que pueda administrar los bienes que tenga en el Estado, cesándole en cuanto a éstos el beneficio de restitución" (Poder Legislativo V, 1827. Acta del 13 de octubre de 1825: 451).

El 14 de octubre el Congreso nombró una comisión de su seno para que dictaminara sobre la designación que hizo el Presidente de la República del Senador del Estado de México, Francisco Molinos del Campo, como Gobernador del Distrito Federal. Dicha comisión se integró con los diputados: Benito Guerra, José de Jáuregui y Manuel Villaverde (Poder Legislativo V, 1827. Acta del 14 de octubre de 1825: 451).

El 31 de octubre el Congreso aprobó una proposición dirigida al Senado de la República, en la que manifestó que "no toca al Congreso General si los extranjeros no nacionalizados, han de poder o no adquirir bienes raíces en los estados" (Poder Legislativo V, 1827. Acta del 31 de octubre de 1825: 551).[47]

El 3 de noviembre el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de noviembre de su segundo año de gestión, presidida por el Diputado José Nicolás de Oláez. Nombró como Vicepresidente al Diputado Ignacio Mendoza, como Secretario Propietario al Diputado Manuel Cotero y como Secretario Suplente al Diputado Manuel de Cortázar (Poder Legislativo VI, 1827. Acta del 3 de noviembre de 1825: 3).

El Congreso determinó el "cese en las administraciones de rentas del Estado, la práctica de exigir precisamente en depósito en los extractores de aguardiente de caña los derechos del valor de las guías que se expidan" (Poder Legislativo VI, 1827. Acta del 3 de noviembre de 1825: 6).

El 24 de noviembre el Congreso dispuso que "el Gobierno del Estado felicite por escrito al de la Federación a nombre de este Congreso por la rendición del Castillo de Ulúa" (Poder Legislativo VI, 1827. Acta del 24 de noviembre de 1825: 112).

El 25 de noviembre por orden del Gobernador del Estado se imprimió la obra intitulada Ensayo de una Memoria Estadística del Distrito de Tulancingo, la cual constó de

[47] El 25 de septiembre se presentó la proposición "de la comisión especialmente encargada de examinar el punto, sobre si es perjudicial al Estado y aún a toda la Federación, la prohibición de que los extranjeros adquieran bienes raíces" (Poder Legislativo V, 1827. Acta del 25 de octubre de 1825: 517).

apartados referentes a: topografía, aguas, clima, reino mineral, reino vegetal, reino animal, población, agricultura, industria, comercio, instrucción pública, rentas del Distrito, Milicia Cívica y ramos de industria planteables (Memoria del 25 de noviembre de 1825. BJMLM: vol.26, exp. 4).

El 28 de noviembre el Congreso autorizó el levantamiento de "un monumento a la memoria del General Don José María Morelos, en el sitio del Pueblo de San Cristóbal Ecatepec, donde fue sacrificado por el Gobierno Español". Para tal efecto, dispuso que en dicho "monumento se pondrá la mejor de las inscripciones que presenten, en idioma latino con la traducción al castellano, los literatos invitados al efecto por el Gobierno", el cual de "acuerdo con el Consejo, nombrará los jueces que han de calificar la inscripción que haya de ponerse" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 57 del 28 de noviembre de 1825: 83).

El 2 de diciembre el Congreso integró la Mesa Directiva, del mes de diciembre de su segundo año de gestión, presidida por el Diputado Ignacio Mendoza. Nombró como Vicepresidente al Diputado José Ignacio Nájera, como Secretario Propietario al Diputado Joaquín de Villa y como Secretario Suplente al Diputado Baltazar de Pérez (Poder Legislativo VI, 1827. Acta del 2 de diciembre de 1825: 112).

El 9 de diciembre el Congreso determinó "que es ya llegado el caso de que la comisión respectiva forme y presente el proyecto de Constitución del Estado y el Congreso lo discuta y sancione" (Poder Legislativo VI, 1827. Acta del 9 de diciembre de 1825: 183).

El Congreso dispuso "que a efecto de que se prevean los saludables efectos que deben resultar de la ley sancionada por este Congreso para la organización de la Hacienda, se prevea al Gobierno que a la mayor brevedad lleve a debido efecto y haga que se cumpla en todas sus partes en todos los distritos del Estado, exceptuando el de México por lo relativo a la administración del Distrito mientras esté pendiente el negocio sobre el Distrito Federal" (Poder Legislativo VI, 1827. Acta del 9 de diciembre de 1825: 184).

El 13 de diciembre el Congreso tomó conocimiento de "una exposición del Ayuntamiento de Xochimilco, ofreciendo este lugar para residencia del Gobierno del Estado, la cual se contestó haberse recibido con agrado" (Poder Legislativo VI, 1827. Acta del 13 de diciembre de 1825: 201).

El 16 de diciembre el Congreso dispuso (Poder Legislativo VI, 1827. Acta del 16 de diciembre de 1825: 227) “que se prevenga al Gobierno para que el próximo enero se presente a dar cuenta del modo que la ley previene, y por medio de una Memoria de la Administración de todos los ramos que son a su cargo desde el 2 de marzo de 1824” (art.1); “que en ella se especifique determinadamente los productos de las rentas del Estado y de la inversión que se les ha dado: el estado en que se recibió el Gobierno Político, y las mejoras o atrasos que haya tenido: el estado en que se recibieron los tribunales y los atrasos o adelantos que hayan sufrido, con lo demás relativo a la Administración de Justicia” (art. 2º), y que el Gobierno se encargue igualmente de dicha Memoria de presentar al Congreso el Presupuesto de Gastos, y los medios que ocurran para cubrirlo (art. 3).

El 2 de enero de **1826** el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de enero de su segundo año de gestión, presidida por el Diputado José María de Jáuregui. Nombró como Vicepresidente al Diputado José Domingo Lazo de la Vega, como Secretario Propietario al Diputado Alonso Fernández y como Secretario Suplente al Diputado José Nicolás de Oláez (Poder Legislativo VI, 1827. Acta del 2 de enero de 1826: 329).

El 3 de enero el Congreso acordó exhortar a la Cámara de Senadores para que imprima y publique el “Dictamen de las Comisiones Eclesiásticas y de Relaciones sobre las instrucciones que deben darse a nuestro enviado a Roma” (Proposición del 3 de enero de 1826. BJMLM: vol.27, exp. 30).

El 4 de enero el Congreso pidió “que las plazas vacantes de la Audiencia que desempeñen por interinos nombrados por el Gobierno, a quienes deba cesar luego que se publique y ejecute la Ley, por la que queda extinguido este Tribunal” (Poder Legislativo VI, 1827. Acta del 4 de enero de 1826: 365).

Se presentó en el Congreso el proyecto de Ley para el Arreglo de Procedimiento Criminal en el Estado Libre de México, que constó de títulos referentes: a las disposiciones generales (bases para la Administración de Justicia en lo criminal y acción criminal y personas a quienes corresponde), al procedimiento por culpas y delitos leves (culpas y delitos sujetos a este procedimiento y personas que en él intervienen, preparación del juicio, celebración del juicio y audiencia y su ejecución), al procedimiento en negocios graves (delitos sobre los que debe formarse sumaria, competencia de los jueces por el conocimiento de los delitos graves, modo de proceder de los delitos in fraganti y reputados como tales y modo de proceder en los

delitos que no son in fraganti, prosecución del sumario, examen de los testigos, comparecencia, prisión y arresto de los delincuentes, declaraciones de los reos, fianzas de calumnia, libertad y soltura de los reos bajo fianza, embargo de bienes, casos en los que puede ser allanada, fiscales y sus funciones) y al procedimiento en delitos graves (tribunales que han de conocer de estos delitos, calificación del hecho, calidades que han de tener los jurados, personas que han de componer el Jurado, formación del Jurado, instalación del Jurado Mayor, celebración del juicio en el Jurado, conferencia, deliberación y votación, publicación de la providencia del Jurado Mayor y cumplimiento de la resolución del Jurado Mayor) (Poder Legislativo VI, 1827. Acta del 4 de enero de 1826: 366).[48]

El 14 de enero el Congreso estableció que los "empleados del Estado no pueden tener al mismo tiempo empleo o comisión con sueldo que sea de la provisión de los Supremos Poderes Federales, y los que admitieren éstos, se entiende por el mismo hecho que han renunciado al Estado" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 58 del 14 de enero de 1826: 83).

Este decreto se formuló en el razonamiento de que "si alguna vez conviene a la Federación tener empleados o comisionados con gratificación o sueldo a los funcionarios de los estados; en los intereses de los estados no puede hallarse que sus funcionarios reúnan en sus personas aquellos destinos y comisiones que perjudicarían ciertamente la independencia del Estado, y producirían una complicación en la responsabilidad del individuo" (Iniciativa del decreto 58 del 14 de enero de 1826. BJMLM vol. 27 exp. 28).

El 17 de enero el Congreso le aceptó la renuncia a José Cabera como Consejero del Estado (Poder Legislativo VI, 1827. Acta del 17 de enero de 1826: 366).

El 18 de enero el Congreso le concedió "a la Ciudad de Guerrero una feria anual, cuya duración de los ocho días que designe el Gobierno" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 59 del 18 de enero de 1826: 84).

[48] Se tiene conocimiento que el Gobierno devolvió esta Ley con observaciones (Poder Legislativo I, 1828. Proposición del 19 de mayo de 1827: 589). En la sesión del 20 de enero se presentó la parte complementaria de este proyecto a partir del capítulo referente a la "Prosecución del Sumario" del Título III "Procedimiento en Negocios Graves" (Poder Legislativo VI, 1827. Acta del 20 de enero de 1826: 578); y en la sesión del 18 de abril se presentó el Título IV "Del Procedimiento en Delitos Graves (Poder Legislativo VII, 1827. Proposición del 18 de abril de 1826: 184).

El 21 de enero el Gobernador Melchor Múzquiz envió una proposición al Congreso, a efecto de que en la instrucción de la niñez se enseñara el "Catecismo Universal, preceptos morales y examen de lo mismo" del francés Lamus Lembertz (Comunicado del Ejecutivo del 21 de enero de 1826. BJMLM: vol. 27, exp. 22).

El 23 de enero el Congreso le concedió al Diputado Antonio Velasco de la Torre una licencia para separarse de su cargo mientras estuviere enfermo (Poder Legislativo VI, 1827. Acta del 23 de enero de 1826: 645).

El Congreso General dispuso que "a las fiestas nacionales religiosas, que designa la Ley del 27 de noviembre de 1824, se agrega la del Mártir Mexicano San Felipe de Jesús el día 5 de febrero (Decreto del 23 de enero de 1826. BJMLM: vol. 28, exp.100).

El 25 de enero el Congreso tomó conocimiento de un oficio del Ayuntamiento de Toluca, "sobre que se elija aquella Ciudad como Capital del Estado" (Poder Legislativo VI, 1827. Acta del 25 de enero de 1826: 659).

El 28 de enero el Congreso determinó que "los electores de los ayuntamientos elegirán anualmente, para los pueblos que designe el Prefecto, un Alcalde Conciliador que sepa leer y escribir". Para tal efecto, "los prefectos, previo informe de los subprefectos y ayuntamientos respectivos, designarán los pueblos donde se deban poner alcaldes conciliadores, por haber quedado sin Ayuntamiento y estar distantes de los que los tengan" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 60 del 28 de enero de 1826: 84).

El 3 de febrero el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de febrero de su segundo año de gestión, presidida por el Diputado Benito José Guerra. Nombró como Vicepresidente al Diputado Joaquín Villa, como Secretario Propietario al Diputado Manuel de Cortázar y como Secretario Suplente al Diputado Manuel Villaverde (Poder Legislativo VI, 1827. Acta del 3 de febrero de 1826: 764).

El 5 de febrero el Gobernador les remitió a los legisladores 23 ejemplares del Ensayo de una Memoria Estadística del Distrito de Tulancingo, la cual fue impresa por orden del Gobernador en 1825 (Oficio del Ejecutivo del 5 de febrero de 1826. BJMLM: vol. 26, exp. 4).

El 14 de febrero el Congreso nombró una comisión de su seno para investigar las causas por las que la factoría de tabacos labrados no surtía las cantidades requeridas

al Estado. Dicha Comisión se integró con los diputados: Mariano Tamariz, Pedro Martínez de Castro y José Nicolás de Oláez (Poder Legislativo VI, 1827. Acta del 14 de febrero de 1826: 764).

El Congreso le pidió al Gobernador que reúna al Partido de Toluca los de Metepec y Lerma (Proposición del 14 de febrero de 1826. BJMLM: vol. 30 Bis, exp. 218).

El 15 de febrero se presentó en el Salón de Sesiones del Congreso el "Sr. (José María) Puchet, Comisionado del Gobierno para leer la Memoria de que trata el decreto del 16 de diciembre del año pasado" (Poder Legislativo VI, 1827. Acta del 15 de febrero de 1826: 841).

En dicha Memoria Melchor Múzquiz señaló que las primeras medidas de su Gobierno fueron la creación de una Secretaría, el ponerse en contacto con las poblaciones más remotas, el brindar atención a los establecimientos de beneficencia, la construcción de una presa de mampostería en la Prefectura de Tula, el establecimiento de una Academia de Medicina Práctica,[49] la reanimación de la Administración de Justicia con la creación del Supremo Tribunal, el apoyo otorgado a la Milicia Nacional y la integración de la estadística con el apoyo de los prefectos, pues consideraba que "nadie ignora que la estadística es la clave de la Ciencia del Gobierno, porque: ¿cómo podrán dictarse providencias acomodadas al carácter de los ciudadanos si se carece de la noticia del número a que asciende la población; en qué cantidad y bajo qué climas está reunida, cuáles son sus inclinaciones y placeres favoritos, cuáles sus necesidades, cuál es el grado de su ilustración, cuáles son las producciones naturales del terreno que ocupa, y cuáles finalmente, sus principales recursos en minería, agricultura y comercio?" (Gobierno del Estado de México, Memoria, 1826: 8).

Bajo esa premisa en el Ramo de Gobierno se describía: la situación y extensión del territorio, su superficie, división, población,[50] agricultura, industria, minas, comercio, gobierno, ayuntamientos, fondos públicos, repartimientos de tierras, baldíos, seguridad pública, pasaportes, bagajes, instrucción pública, vacuna, enfermedades epidémicas, consulado, caminos y puentes, desagüe, obras públicas de utilidad y ornato, cárceles, nacionales, ocurrencias notables y Secretaría. También se presentaban aspectos

[49] Melchor Múzquiz señalaba que "por la separación del Distrito Federal, no hay otros establecimientos de este ramo en el Estado, que las escuelas de primeras letras".
[50]Se indicaba que el Estado de México tenía una población de 834,588 habitantes y una superficie de 5,142 leguas cuadradas.

sobre justicia y guerra, en donde resaltaban las acciones sobre la Milicia Activa y la Milicia Permanente.

Cabe señalar, que en aquella época el Estado de México lo constituían ocho prefecturas, 35 partidos y 180 ayuntamientos. La Prefectura de Acapulco la integraban los partidos de: Chilapa,[51] Acapulco,[52] Tixtla[53] y Tecpan;[54] la Prefectura de Huejutla la integraban los partidos de: Zacualtipán,[55] Huejutla[56] y Yahualica;[57] la Prefectura de Cuernavaca la integraban los partidos de: Cuernavaca,[58] Cuautla[59] y Jonacatepec;[60] la Prefectura de México la integraban los partidos de: Chalco,[61] San Agustín de las Cuevas,[62] Cuautitlán,[63] Zumpango,[64] Texcoco,[65] Tlalnepantla[66] y Teotihuacán;[67] la Prefectura de Taxco la integraban los partidos de: Ajuchitlán,[68] Taxco,[69] Temascaltepec,[70] Tejupilco,[71] Sultepec[72] y Zacualpan;[73] la Prefectura de Toluca la

[51] El Partido de Chilapa lo integraban los ayuntamientos de: Chilapa, Quechultenango, Zitlala, Ahuacuacingo y Atenango del Río.
[52] El Partido de Acapulco lo integraban los ayuntamientos de: Acapulco y San Marcos.
[53] El Partido de Tixtla lo integraban los ayuntamientos de: Tixtla, Chilpancingo, Zumpango del Río y Apango.
[54] El Partido de Tecpan lo integraban los ayuntamientos de: Zacatula y Tecpan.
[55] El Partido de Zacualtipán lo integraban los ayuntamientos de: Zacualtipán, Mextitlán, Zozoquipa, Mixquititlán, Tlahuelompa, Tianguistenco, Molango, Lolotla, Tlanchinol, San Felipe, Tepehuacán, Chapulhuacán, San Lorenzo y Chichicaztle.
[56] El Partido de Huejutla lo integraban los ayuntamientos de: Huejutla, San Pedro, Jaltocán e Ixcatlán.
[57] El Partido de Yahualica lo integraban los ayuntamientos de: Yahualica, Huautla, Santa Catarina, Huazalingo, Calnali y Xochicoatlán.
[58] El Partido de Cuernavaca lo integraban los ayuntamientos de: Cuernavaca, Jiutepec, Tlalquiltenango, Ixtla, Yautepec, Xochitepec, Tepoztlán, Tlaltizapán, Miacatlán y Tetecala.
[59] El Partido de Cuautla lo integraban los ayuntamientos de: Cuautla, Zacualpan y Ocuiluco.
[60] El Partido de Jonacatepec lo integraban los ayuntamientos de: Jonacatepec, Oaxtepec, Ayacaniztla, Juntetelen y Tepalcingo.
[61] El Partido de Chalco lo integraban los ayuntamientos de: Chalco, Tlalmanalco, Ameca, Totolapa, Clayacapa, Ozumba, Juchitepec, Tenango, Ayotzingo, Tláhuac e Ixtapaluca.
[62] El Partido de San Agustín de las Cuevas lo integraban los ayuntamientos de: San Agustín de las Cuevas (Tlalpan), Xochimilco, Tuyehualco, Milpa Alta, Coyoacán y San Ángel.
[63] El Partido de Cuautitlán lo integraban los ayuntamientos de: Cuautitlán, Tepotzotlán, Teoloyucan y Huehuetoca.
[64] El Partido de Zumpango lo integraban los ayuntamientos de: Zumpango, Tequixquiac, Nextlalpan y Hueypoxtla.
[65] El Partido de Texcoco lo integraban los ayuntamientos de: Texcoco, Atenco, Chiautla, Acolman, Papalotla, Calpulalpan y San Vicente Chicoloapan.
[66] El Partido de Tlalnepantla lo integraban los ayuntamientos de: Tlalnepantla, Tultitlán, Azcapotzalco, Jilotzingo, Huixquilucan y Naucalpan.
[67] El Partido de Teotihuacán lo integraban los ayuntamientos de: Teotihuacán, Temascalapa, Otumba, Axapusco, Ecatepec y Tecámac.
[68] El Partido de Ajuchitlán lo integraban los ayuntamientos de: Ajuchitlán, Cutzamala y Tetela del Río.
[69] El Partido de Taxco con los Ayuntamientos de Taxco, Iguala, Tepecoacuilco y Huitzuco.
[70] El Partido de Temascaltepec con los ayuntamientos de: Mineral de Temascaltepec, San Francisco del Valle de Temascaltepec (Valle de Bravo) y San Martín Otzoloapan.
[71] El Partido de Tejupilco lo integraban los ayuntamientos de: Tejupilco, Ixtapan, Ocotepec y San Lucas.
[72] El Partido de Sultepec lo integraban los ayuntamientos de: Sultepec y Amatepec.
[73] El Partido de Zacualpan lo integraban los ayuntamientos de: Zacualpan, Coatepec de Harinas, Ixtapan de la Sal, Ixcateopan y Teloloapan.

integraban los partidos de: Ixtlahuaca,[74] Toluca,[75] Tenango del Valle[76] y Tenancingo;[77] la Prefectura de Tula la integraban los partidos de: Actopan,[78] Huichapan,[79] Tula,[80] Jilotepec[81] y Zimapán;[82] y la Prefectura de Tulancingo la integraban los partidos de: Tulancingo,[83] Pachuca[84] y Apan.[85]

El Gobernador al referirse a la Hacienda, advirtió "que desde la instalación del Congreso hasta el 16 de octubre de 1824 en que se recibieron en la Tesorería de lo que fue de la Diputación Provincial y estuvo sujeta al mismo Congreso, no siendo responsable el Gobierno a la administración de dichos caudales, sino es de una parte muy corta que por sobrantes entraron a la Tesorería General luego de que se formó". Aquí se describía información sobre: la alcabala permanente, la alcabala eventual, el derecho de consumo, pulques, el dos por ciento de moneda, pulperías, desagüe, impuesto para milicias, tabacos, papel sellado, contribución directa, pensión de carnes, derechos impuestos al oro y plata pasta, fondos de rescate, gallos, multas, emolumentos de oficina, Montepío, chancillería, media anata secular, Tesorería, Contaduría, gastos generales, crédito activo, crédito pasivo y presupuesto.

Como parte anexa estaban: el estado que manifiestan los pueblos donde hay ayuntamientos en virtud de la Ley del 9 de febrero de 1825,[86] el estado que manifiesta la fuerza de que se compone la Milicia Cívica, el estado que manifiesta el número de expedientes que han girado las diversas secciones a la Secretaría del Gobierno, el

[74] El Partido de Ixtlahuaca lo integraban los ayuntamientos de: Ixtlahuaca, Atlacomulco, Xonacatlán, Jiquipilco, San Felipe del Obraje (del Progreso), Temascalcingo y Temoaya.
[75] El Partido de Toluca lo integraban los ayuntamientos de: Toluca, Almoloya, Asunción Malacatepec (Donato Guerra), Lerma, Metepec, Amanalco, San José Malacatepec (Villa de Allende), San Bartolomé Otzolotepec y Zinacantepec.
[76] El Partido de Tenango del Valle lo integraban los ayuntamientos: de Tenango del Valle, Calimaya, Santiago Tianguistenco y San Martín Ocoyoacac.
[77] El Partido de Tenancingo lo integraban los ayuntamientos de: Tenancingo, Joquicingo, Malinalco y Tecualoya.
[78] El Partido de Actopan lo integraban los ayuntamientos de: Actopan, Yototepec, San Salvador, Arenal, Mixquiahuala e Ixcuicuitlapilco.
[79] El Partido de Huichapan lo integraban los ayuntamientos de: Huichapan, Tecozautla, Alfajayucan, Nopala y Tasquillo.
[80] El Partido de Tula lo integraban los ayuntamientos de: Tula, Tepeji del Río, Atitalaquia, San Pedro Tazcoapan y Tetepango.
[81] El Partido de Jilotepec lo integraban los ayuntamientos de: Jilotepec, Aculco, Chapa de Mota y Villa del Carbón.
[82] El Partido de Zimapán lo integraban los ayuntamientos: de Zimapán y Xacala.
[83] El Partido de Tulancingo lo integraban los ayuntamientos de: Tulancingo, Ajochitlán, Huascazaloya, Tutoltepec, Tenango y Atotonilco el Grande.
[84] El Partido de Pachuca lo integraban los ayuntamientos de: Pachuca, Mineral del Monte, Tizayuca y Zempoala.
[85] El Partido de Apan lo integraban los ayuntamientos de: Apan y Tepeapulco.
[86] Relación de pueblos con la expresión de las prefecturas y Cabecera de Partido a que estaban sujetos.

estado que manifiesta el número en asuntos que el Gobernador ha pasado al Consejo,[87] el estado que manifiestan los productos totales y gastos y líquidos del Gobierno, el resumen de los ingresos de todos los ramos que forman la Hacienda del Estado, la liquidación provisional del contingente vencido por el Estado en el primer año de su administración de rentas, la razón de los valores del crédito activo y pasivo, los presupuestos a erogarse, el estado que manifiesta el número de presos y el estado que manifiesta el cupo de hombres que se asignó a las ocho prefecturas.

En el anexo correspondiente al "Presupuesto de los gastos que deben erogarse en el ramo de Gobierno del año 1826", se contempló por concepto de sueldos y gastos una suma de 76,008.00 pesos, de los cuales 5,000.00 eran para el Gobernador, 3,500.00 para el Teniente Gobernador, 8,000.00 para cuatro consejeros de a 2,000.00 pesos cada uno, 2,500.00 para el Secretario, 1,400.00 para el Oficial Primero, 1,300.00 para el Oficial Segundo, 1,200.00 para el Oficial Tercero, 1,100.00 para el Oficial Cuarto, 1,000.00 para el Oficial Quinto, 900.00 para el Oficial Sexto, 800.00 para el Oficial Séptimo, 700.00 para el Archivero, 400.00 para el Oficial del Archivero, 1,600.00 para cuatro escribientes de a 400.00 pesos cada uno, 1,460.00 para cuatro escribientes de a 365 pesos cada uno, un Portero 300.00, un Mozo de Oficio 200.00, 6,400.00 de gastos de escritorio y extraordinarios del Gobierno, 24,000.00 para ocho prefectos de a 3,000.00 pesos cada uno, 12,600.00 para 36 subprefectos de a 350.00 pesos cada uno y 1,728.00 para premios de certámenes.

Por lo que hace a los otros dos poderes, en el Poder Judicial se fijaron 3,500.00 pesos para cada uno de los seis ministros y el Fiscal del Tribunal Superior de Justicia, en tanto que en la Audiencia 3,000.00 para sus seis ministros y un Fiscal. En el Poder Legislativo se presupuestaron 3,000.00 pesos para cada uno de los 21 diputados y 8,259.00 para los sueldos de la Secretaría.

El 16 de febrero al concluir la lectura de la Memoria en el Congreso, el "Presidente previno que se imprimiera la citada Memoria, y pasase a las comisiones de Hacienda y Gobernación" (Poder Legislativo VI, 1827. Acta del 16 de febrero de 1826: 841).

El 17 de febrero el Congreso dirigió una proposición al Senado, para que "cesen las facultades extraordinarias con que el decreto del 23 de septiembre de 1824 revistió al

[87] Los asuntos turnados se agrupaban en los ramos de: Hacienda, Gobierno, Justicia, Guerra y Beneficencia.

Presidente de la Federación" (Poder Legislativo VI, 1827. Acta del 17 de febrero de 1826: 844).

El 18 de febrero el Congreso aprobó una proposición dirigida a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la que pedía que se "aclaren los artículos 20 y 21 del decreto número 70 del Congreso General Constituyente", con el propósito de disipar las dudas relacionadas "a los derechos (de alcabalas) que se han cobrado a los efectos nacionales introducidos al Estado, que después se han extraído a otra parte" (Poder Legislativo VI, 1827. Acta del 18 de febrero de 1826: 852).

El 2 de marzo el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de marzo de su tercer año de gestión, presidida por el Diputado José Ignacio Nájera. Nombró como Vicepresidente al Diputado Benito José Guerra, como Secretario Propietario al Diputado Pedro Martínez de Castro y como Secretario Suplente al Diputado José María Luis Mora (Poder Legislativo VII, 1827. Acta del 2 de marzo de 1826: 7).

El 9 de marzo el Congreso dispuso que se "previniera al Gobierno del Estado presentara lo conveniente al de la Federación, para que se remediara sin dilación la falta de pólvora de minas y de tabacos en los almacenes generales, y que de las resultas se diera cuenta al Congreso" (Poder Legislativo VII, 1827. Acta del 9 de marzo de 1826: 35).

El Congreso le pidió al Supremo Tribunal de Justicia que forme el arancel de las Secretarías de dicho Tribunal (Proposición del 9 de marzo de 1826. BJMLM: vol. 25, exp.191).

El 17 de marzo el Presidente de la República al prohibir la concesión de grados militares dispuso que "no podrán concederse empleos militares a las personas que no hayan seguido la carrera de las armas" (Decreto del 17 de marzo de 1826. BJMLM: vol. 27, exp.33).

El 18 de marzo el Congreso tomó conocimiento de la proposición de la Comisión de Constitución referente a la primera parte del proyecto de Constitución Política del Estado, la cual hacía alusión a: las disposiciones generales, al Poder Legislativo, al Gobierno del Estado y al gobierno político y administración interior de los pueblos. A dicho proyecto le faltaba "lo perteneciente a la Hacienda, Administración de Justicia,

instrucción pública y reforma a la Constitución" (Poder Legislativo VII, 1827. Acta del 18 de marzo de 1826: 85).

El 20 de marzo el Congreso dirigió tres proposiciones a la Cámara de Senadores, en las que le indicaba "que no se proceda a deliberar sobre el punto pendiente del Distrito Federal sin oír previamente el voto de las legislaturas de los demás estados, y sin que al mismo tiempo se presente el dictamen que consulte el modo de arreglar el ejercicio de los derechos políticos de los habitantes del Distrito, la indemnización que se ha de dar al Estado por su Capital, y el señalamiento del contingente"; "que se restituya con la brevedad posible al Estado de México su Capital y territorio anexo que se había destinado para el Distrito Federal", y "que se cite al Senador por México D. Francisco Molinos del Campo, para que concurra a la discusión de este negocio" (Poder Legislativo VII, 1827. Acta del 20 de marzo de 1826: 90).

El 1 de abril el Congreso acordó "que a lo menos, mientras se resuelve constitucionalmente el modo con que han de ejercer los derechos políticos en toda su plenitud los habitantes del territorio tomado para el Distrito Federal, queden unidos al Estado de México en orden al ejercicio de sus derechos" (Acta de la sesión secreta del 1 de abril de 1826. BJMLM: Colección de Actas).

El 4 de abril el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de abril de su tercer año de gestión, presidida por el Diputado Alonso Fernández. Nombró como Vicepresidente al Diputado Mariano Tamariz, como Secretario Propietario al Diputado Baltazar Pérez y como Secretario Suplente al Diputado Pedro Martínez de Castro (Poder Legislativo VII, 1827. Acta del 4 de abril de 1826: 110).

El 5 de abril el Congreso determinó que "los pueblos de la doctrina de San Bartolomé Otzolotepec, nombradas Haizizilapa, Tlalmimilolpan y Xochicuatla y las dos haciendas de la misma doctrina San Nicolás y Santa Catarina queden unidas al Partido de Toluca" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 61 del 5 de abril de 1826: 85).

El 6 de abril el Congreso autorizó "al Gobernador para que invierta de los fondos del Estado doce mil pesos en la compra de armas para la Milicia Local, con calidad de reintegro para los ayuntamientos en que se distribuyan, cuando tengan fondos" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 62 del 6 de abril de 1826: 85).

El 11 de abril el Congreso determinó que "los abogados de cualquier punto de la República están habilitados para ejercer sus funciones sin necesidad de matrícula en el Colegio de Abogados" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 63 del 11 de abril de 1826: 85).

El Congreso tomó conocimiento de la proposición de la Comisión de Constitución referente a la segunda parte del proyecto de Constitución Política del Estado, la cual incluía los apartados concernientes a: la Hacienda, Administración de Justicia, instrucción pública y reforma a la Constitución (Poder Legislativo VII, 1827. Acta del 11 de abril de 1826: 143).[88]

El 13 de abril el Congreso dispuso que "al Escribiente de la Secretaría del Congreso D. Vicente Orráez se le continuara la dotación de 750.00 pesos que obtenía por su plaza de Archivero, quedando obligado por este aumento de sueldo a desempeñar las funciones de Redactor, Archivero y las respectivas de los otros oficiales cuando falten con legítima causa" (Poder Legislativo VII, 1827. Acta del 13 de abril de 1826: 171).

El Congreso acordó que se "suspenda todo pago al Gobierno General incluso el del contingente, hasta la liquidación de cuentas", y que "por el correo próximo se manden cesar todos los pagos que se hacían en las administraciones foráneas por cuenta del Gobierno General" (Acta de la sesión secreta del 13 de abril de 1826. BJMLM: Colección de Actas).

El 14 de abril el Congreso dispuso que "se extienda un manifiesto al Estado, que detalle las operaciones de esta Legislatura en orden al asunto sobre el Distrito Federal, y que por apéndice lleve adjuntos todos los documentos relativos al objeto" (Poder Legislativo VII, 1827. Acta del 14 de abril de 1826: 173).

El Congreso determinó que se nombrase "una comisión que tomando instrucción del Gobierno, dictamine sobre los puntos que han quedado pendientes, con motivo de lo últimamente determinado sobre el Distrito Federal (Poder Legislativo VII, 1827. Acta del 14 de abril de 1826: 174).

El 18 de abril el Congreso General dispuso que los pueblos cortados por la línea de demarcación de que habla la Ley del 18 de noviembre de 1824, "pertenecerán al

[88] Se incluyó en el acta el texto completo del proyecto de Constitución Política.

territorio del Estado de México si la mayor parte de su actual población quedase fuera del círculo distrital" (Decreto del 18 de abril de 1826. AHEM: L.L.D.F. vol. 3, exp. 9).

El Congreso General acordó que "el Desagüe de México con todo lo acceso a él, se administrará por ahora, y costeará por el Gobierno General", y que "se nombrarán por el Gobierno General y el del Estado de México, dos individuos que reconociendo el canal, y todo lo acceso a él, formen un expediente en el que pongan en claro las utilidades que el Distrito y el Estado de México reportan en su conservación" (Decreto del 18 de abril de 1826. AHEM: G.G.G. vol. 5, exp.43).

El 19 de abril en sesión secreta el Congreso dispuso que "por el correo próximo se manden cesar todos los pagos que se hacían en las administraciones foráneas por cuenta del Gobierno Federal", ya que "por ahora el Estado no está en el caso de poder satisfacer las pensiones foráneas, que el Ministro de Hacienda solicita" (Poder Legislativo VII, 1827. Acta del 9 de mayo de 1826: 289).

El 20 de abril el Congreso inició el análisis del Reglamento que formó el Gobierno para la ejecución de la Ley que Arregló la Hacienda del Estado, el cual constó de capítulos referentes a: la extensión de las administraciones, a las rentas y a la recaudación (Poder Legislativo VII, 1827. Acta del 20 de abril de 1826: 196).[89]

El 24 de abril el Congreso dividió el Partido de Zacualtipán en el Pueblo del mismo nombre y en el de Metzitlán. Determinó que el Partido Metzitlán se compusiera de las doctrinas del mismo Pueblo y de las de: Zoquipa, San Agustín Mezquititlán, San Lorenzo Ixtacoyoc, Chichicaxtla, Chapuluapan, Barranca de Totonicapa y Santa Mónica, y el Partido de Zacualtipán con los pueblos de: Zacualtipán, Tianguistenco, Molango, Lolotla, Tepehuacán y La Vicaria de Tlacolutla con sus respectivas doctrinas y que el Pueblo de Tlanchichinol con sus respectivas doctrinas se agregara al Partido de Huejutla (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 64 del 24 de abril de 1826: 86).

El Congreso General dispuso que en el presente año los estados sólo pagarían la mitad del contingente que se les había asignado (Decreto del 24 de abril de 1826. BJMLM: vol. 27, exp. 70).

[89] No se publicó en la Colección de Decretos. En la sesión del 21 de abril inició el análisis del capítulo referente a la recaudación (Poder Legislativo VII, 1827. Proposición del 21 de abril de 1826: 211).

El 25 de abril el Congreso General dispuso que “no se recibirán en los puertos de la República a los españoles o súbditos del Gobierno Español, sea cual fuera su procedencia y pasaporte mientras dure la guerra con España” (Decreto del 25 de abril de 1826. BJMLM: vol. 27, exp. 40).

El 2 de mayo el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de mayo de su tercer año de gestión, presidida por el Diputado José Domingo Lazo de la Vega. Nombró como Vicepresidente al Diputado José Nicolás de Oláez, como Secretario Propietario al Diputado Benito José Guerra y como Secretario Suplente al Diputado Antonio Velasco de la Torre (Poder Legislativo VII, 1827. Acta del 2 de mayo de 1826: 261).

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión determinó que “quedan extinguidos para siempre los títulos de Conde, Marqués, Caballero y todos los de igual naturaleza cualquiera que sea su origen (Decreto del 2 de mayo de 1826. BJMLM: vol. 27, exp.64).

El 5 de mayo el Congreso tomó conocimiento de un oficio remitido por el Ayuntamiento de Tulancingo, para que se eligiera aquel punto como Capital del Estado (Poder Legislativo VII, 1827. Acta del 5 de mayo de 1826: 263).

El 9 de mayo el Congreso aprobó el nombramiento que hizo el Gobierno del Estado del Diputado José María Luis Mora, para “que a consecuencia del decreto del 18 del mes pasado, reconozca el Canal del Desagüe (Poder Legislativo VII, 1827. Acta del 9 de mayo de 1826: 286).

El 10 de mayo el Congreso General suprimió los empleos de comisarios de artillería (Decreto del 10 de mayo de 1826. BJMLM: vol. 27, exp. 57).

El Congreso General dispuso que “no toca al Gobierno (Federal) la dirección de las rifas pequeñas que se hacen en los estados” (Decreto del 10 de mayo de 1826. BJMLM: vol. 30 Bis, exp. 238).

El 11 de mayo la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, determinó que “los Estados Unidos Mexicanos, no oirán jamás proposición alguna de España ni de otra potencia de su nombre si no está fundada en el reconocimiento absoluto de su Independencia bajo la forma actual de su Gobierno” (Decreto del 11 de mayo de 1826. BJMLM: vol. 27, exp.65).

El 18 de mayo el Congreso General determinó que por siete años quedaba “libre del derecho de alcabala el papel elaborado en las fábricas establecidas a su importación a los estados, Distrito Federal y territorios; y el que se elaborare en las que se establezcan dentro de dos años, gozará de la misma exención desde el día que se pongan en giro” (Decreto del 18 de mayo de 1826. BJMLM: vol. 27, exp. 53).

El 20 de mayo la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dispuso “que ningún ladrón será aplicado al servicio de las armas durante el tiempo de condena (Decreto del 20 de mayo de 1826. BJMLM: vol. 27, exp.83).

El 30 de mayo el Congreso nombró a José Ignacio Espinosa como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, ante el fallecimiento del Magistrado José Francisco Nava (Poder Legislativo VII, 1827. Acta del 30 de mayo de 1826: 398).

El 2 de junio el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de junio de su tercer año de gestión, presidida por el Diputado Joaquín Villa. Nombró como Vicepresidente al Diputado Manuel Cotero, como Secretario Propietario al Diputado Antonio Castro y como Secretario Suplente al Diputado Ignacio Mendoza (Poder Legislativo VII, 1827. Acta del 2 de junio de 1826: 405).

El Congreso pidió que “se prevenga al Gobernador, encargue estrechísimamente a los prefectos, vigilen sobre los abusos que noten en orden a la exacción de derechos parroquiales”. Dicha proposición se originó como reacción a una nota publicada en el número 10882 del periódico “El Sol”, en donde “se refiere un atentado que cometió el Alcalde de Santiago Tianguistenco el día 18 de abril en la persona de un indígena, a quien azotó públicamente en la Plaza del Tianguis, y sacó a la vergüenza, con infracción notoria a las leyes” (Poder Legislativo VII, 1827. Acta del 2 de junio de 1826: 410).

El 5 de junio el Congreso inició el análisis del proyecto de Constitución Política del Estado (Poder Legislativo VII, 1827. Acta del 5 de junio de 1826: 423).

El Presidente de la República dispuso que “todo extranjero antes de desembarcar en cualquier puerto de los Estados Unidos Mexicanos, producirá declaración formal, en que manifieste su nombre, edad, estado y naturaleza, el punto de su procedencia y el de su destino, objeto de su viaje, personas a quienes viene recomendado, su profesión y medios de subsistencia” (Decreto del 5 de junio de 1826. BJMLM: vol. 27, exp.96).

El 6 de junio la Comisión de Corrección de Estilo presentó las correcciones y adiciones a la proposición de Ley de Administración de Justicia en lo Civil (Poder Legislativo VII, 1827. Acta del 6 de junio de 1826: 440).[90]

El 7 de junio el Congreso estableció que para ser Abogado se requería: "haber estudiado Jurisprudencia en alguno de los colegios de la República, por el tiempo que sus constituciones dictaminan"; "haber además, practicado en Estudio de Abogado conocido", y "haber sido examinado y aprobado por el Supremo Tribunal de Justicia" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 65 del 7 de junio de 1826: 86).

El 16 de junio el Congreso dispuso que "los soldados del Ejército retirados están exentos de la Milicia Cívica, y de los tres reales que prefija el Reglamento Vigente a los exentos que no sean eclesiásticos o jornaleros" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 66 del 16 de junio de 1826: 87).

El 19 de junio el Congreso determinó que "los oidores y Juez Fiscal propietarios serán preferidos a todos los demás, en el nombramiento de jueces de distrito y de tercera instancia" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 67 del 19 de junio de 1826: 87).

El 20 de junio el Congreso autorizó al "Gobierno para hacer los gastos necesarios en la pronta propagación del fluido vacuno en los pueblos del Estado" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 68 del 20 de junio de 1826: 88).

El 21 de junio el Congreso determinó que "el Gobierno entregará al Ayuntamiento de México todos los bienes cuyas cargas deben cumplirse en México, y retendrá aquellos cuyas cargas deben cumplirse en el Estado" (Poder Legislativo VII, 1827. Acta del 21 de junio de 1826: 515).

El 26 de junio el Congreso determinó que con base en título librado por la Audiencia Puerto Príncipe "se dé por habilitado a Don José María Heredia para ejercer la Abogacía" (Poder Legislativo VII, 1827. Acta del 26 de junio de 1826: 543).

El 3 de julio el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de julio de su tercer año de gestión, presidida por el Diputado Francisco de las Piedras. Nombró como Vicepresidente al Diputado José Ignacio Nájera, como Secretario Propietario al

[90] Se tiene conocimiento que el Gobierno devolvió esta ley con observaciones (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 19 de mayo de 1827: 589).

Diputado Pedro Martínez de Castro y como Secretario Suplente al Diputado José Francisco Guerra (Poder Legislativo VIII, 1827. Acta del 3 de julio de 1826: 13).

El 8 de julio el Congreso dispuso que "se contribuirá con doscientos pesos de las rentas del Estado a la impresión de 'La Historia de la Conquista de México y Otros Reinos y Provincias', que escribió D. Domingo de S. Antón Muñón y Chimalpáin" (Poder Legislativo VIII, 1827. Acta del 8 de julio de 1826: 53).

El 12 de julio el Congreso le otorgó al Diputado José María Luis Mora una licencia por tres meses para separarse de su cargo, con el propósito de restablecer su salud (Poder Legislativo VIII, 1827. Acta del 12 de julio de 1826: 78).

El 15 de julio el Diputado José María Luis Mora se reincorporó a los trabajos del Congreso (Poder Legislativo VIII, 1827. Acta del 15 de julio de 1826: 105).

El 22 de julio el Congreso dispuso que "los eclesiásticos que pasen de 50 años no deben pagar los tres reales de la contribución del Reglamento de la Milicia Cívica" (Poder Legislativo VIII, 1827. Acta del 22 de julio de 1826: 150).

El 28 de julio el Congreso dispuso (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 69 del 28 de julio de 1826: 88) que "estaría por ahora a cargo del Gobernador del Estado lo económico y gubernativo del Ramo de Minería" (art. 1º); que "continuarán las diputaciones territoriales de los minerales del Estado, ejerciendo con entera sujeción al Gobierno las facultades económicas, que hasta ahora han ejercido" (art. 2º); que "los jueces de letras conocerán de en primera instancia de lo contencioso de minería, oyendo el dictamen de la respectiva Diputación Territorial" (art. 3º); que "los jueces de apelación conocerán de las segundas instancias, oyendo el dictamen de las personas nombradas una por cada parte" (art. 3º), y que "el Tribunal en tercera instancia conocerá en este grado de los asuntos que ocurran, oyendo el dictamen de las personas nombradas por las partes, si éstas quisieren nombrarlas" (art. 6º).

El 1 de agosto el Congreso integró una comisión especial para conocer las ocurrencias que se habían presentado en la Capital del Estado de Yucatán. Dicha Comisión la integraron los diputados: José María Luis Mora, José Ignacio de Nájera y José Nicolás de Oláez (Poder Legislativo VIII, 1827. Acta del 1 de agosto de 1826: 166).

El 2 de agosto el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de agosto de su tercer año de gestión, presidida por el Diputado Baltazar Pérez. Nombró como Vicepresidente al Diputado José Francisco Guerra, como Secretario Propietario al Diputado Manuel Villaverde y como Secretario Suplente al Diputado José Ignacio Nájera (Poder Legislativo VIII, 1827. Acta del 2 de agosto de 1826: 195).

El Congreso dispuso que "a los jornaleros que no hayan satisfecho los años anteriores al presente la contribución directa se les exima del pago de las cantidades correspondientes a dichos años (Proposición del 2 de agosto de 1826. BJMLM: vol. 30 Bis, exp. 241).

El 4 de agosto el Congreso dispensó "del pago de la contribución directa correspondiente a los años anteriores, a los jornaleros que no lo hayan hecho hasta el último tercio vencido antes de la publicación del presente decreto" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 70 del 4 de agosto de 1826: 89).

El 16 de agosto el Congreso dispuso que quedaban "fuera de la patria potestad los hombres a los veinticinco años, y las mujeres a los veintitrés cumplidos" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 71 del 16 de agosto de 1826: 89).

El Congreso expidió el decreto sobre las elecciones que se verificarían en las municipalidades y partidos para elegir a los diputados al Congreso General en el bienio 1827-1828 y al Congreso Constitucional del Estado de México (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 72 del 16 de agosto de 1826: 90),[91] en el que se señaló: que "las elecciones de diputados al Congreso General, y al Constitucional del Estado, se harán por unos mismos electores" (art. 1º); que "habrá al efecto juntas de municipalidad, de partido y una general en todo del Estado" (art. 2º); que "en las juntas de municipalidad se elegirán electores de partido" (art. 3º); que "en las juntas de partido se elegirán electores para la Junta General" (art. 4º), y que "en la Junta General se nombrarán diputados para ambos congresos" (art. 5º).

En el apartado referente a las juntas municipales, se estableció que "las juntas de municipalidad se celebrarán por esta vez, el día que determine el Gobierno, y serán presididas por el Alcalde respectivo" (art. 12); "que la Junta Municipal se dividirá en tantas secciones cuantas tenga por conveniente el Ayuntamiento, en consideración a

[91] Este decreto constó de apartados referentes a: las juntas municipales y a las juntas de partido.

la distancia a que se hallan los pueblos de la Cabecera" (art. 13); que "las secciones de fuera de la Cabecera serán presididas por el Alcalde Conciliador, si lo hubiere; y en su defecto, por el vecino que el Ayuntamiento nombrare" (art. 14); que "no podrán votar en las secciones sino los vecinos de ellas" (art. 19); "que en cada una de estas secciones se votará el número total de electores que corresponda a la Municipalidad" (art. 20), y que "la base para fijar el número de electores de partido, es la población respectiva a cada Municipalidad" (art. 21).

En el apartado referente a las juntas de partido, se estableció que "las juntas de partido se compondrán de electores de partido, congregados en las cabeceras respectivas, a fin de nombrar electores para la Junta General del Estado" (art. 35); que "estas juntas se celebrarán, por esta vez, el día que designe el Gobierno" (art. 36); que "todo Partido, cualquiera que sea su número de electores nombrados por sus municipalidades, elegirá a lo menos un elector para la Junta General" (art. 37), y que "las juntas de partido serán presididas por el Alcalde Primero de la Cabecera, quien recibirá y hará notar en el libro destinado para las actas de la Junta, las credenciales de los electores de partido" (art. 38).

El 23 de agosto el Congreso expidió el decreto sobre las elecciones a efectuarse en la Junta General del Estado para designar disputados al Congreso General y al Congreso Constitucional del Estado de México (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 73 del 23 de agosto de 1826: 94), en el cual se señaló que "para ser Diputado al Congreso del Estado, se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos y mayor de veinticinco años" (art. 2º), y que "no podrán ser diputados al Congreso del Estado: primero, los que hayan sido nombrados el día anterior para el Congreso General: segundo, los senadores que deban empezar o continuar en su encargo los años siguientes: tercero, los obispos, gobernadores de las mitras y los vicarios generales: cuarto, los comandantes generales que ejerzan jurisdicción en el Estado: quinto, el Gobernador, su Teniente, el Tesorero General y los administradores de Rentas de Distrito" (art. 3º).

En dicho decreto se estableció un apartado referente a las juntas generales del Estado, en donde se precisó que "la Junta General del Estado se compondrá de los electores de partido, que se congregaran, a fin de nombrar diputados, en el lugar que por esta vez designe el Gobierno del Estado" (art. 4º); que "esta Junta será presidida por el Alcalde del lugar en donde se celebre, a quien se presentarán los electores con su credencial, para que se asienten sus nombres en el libro destinado a las actas de la

Junta" (art. 5º); que "los electores nombrarán para la Cámara de Diputados doce propietarios y cuatro suplentes" (art. 10); que "la elección se hará de uno en uno por escrutinio secreto, mediante cédulas" (art. 11); que "la Junta Electoral remitirá, por conducto de su Presidente al Consejo de Gobierno, testimonio en forma de acta de la elección en pliego certificado, y participará a los electores su nombramiento, por medio de un oficio que les servirá de credencial" (art. 14); que una ley destinará el número de diputados propietarios y suplentes, que deban elegirse para la Primera Legislatura Constitucional del Estado" (art. 15), y que "la misma Junta Electoral remitirá, por conducto de su Presidente, lista de los electos para ambos congresos al Gobernador del Estado, quien hará se publique y remita un ejemplar a cada uno de los pueblos del Estado" (art. 16).

El 26 de agosto el Congreso determinó que "los individuos que fueron realistas, y los saldados de tropas urbanas ya extinguidas, que no tengan cédula de retiro por el Gobierno Federal, no están comprendidos entre los soldados retirados de que habla la Ley del 16 de junio de este año" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 74 del 26 de agosto de 1826: 97).

El 29 de agosto el Congreso determinó que "la inteligencia del artículo 22 de la Ley del 16 de agosto de este año es, que por cada cuatro mil habitantes, o por una fracción de más de dos mil, se elegirán tres electores de partido" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 75 del 29 de agosto de 1826: 98).

El 31 de agosto el Congreso le concedió al Diputado Antonio Velasco de la Torre una licencia para separarse de su cargo por un mes (Poder Legislativo VIII, 1827. Acta del 31 de agosto de 1826: 396).

El 1 de septiembre el Congreso determinó que en octubre los electores de la Junta General del Estado debían de elegir veintiún diputados propietarios y siete suplentes para el Primer Congreso Constitucional (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 76 del 1 de septiembre de 1826: 97).

El Congreso nombró a José Agustín Paz como Senador de la República por parte del Estado (Poder Legislativo VIII, 1827. Acta del 1 de septiembre de 1826: 402).

El 2 de septiembre el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de septiembre de su tercer año de gestión, presidida por el Diputado Benito José Guerra. Nombró como

Vicepresidente al Diputado Pedro Martínez de Castro, como Secretario Propietario al Diputado José de Jáuregui y como Secretario Suplente al Diputado Joaquín Villa (Poder Legislativo VIII, 1827. Acta del 2 de septiembre de 1826: 409).

El 25 de septiembre el Congreso determinó que “no podrán nombrarse diputados al Congreso del Estado a los empleados civiles y de Hacienda, que tengan título o formal despacho del Gobierno de la Federación” (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 77 del 25 de septiembre de 1826: 98).

El Congreso le concedió “a la Villa de Chilapa una feria anual por seis días”, y facultó al Gobernador para determinar el día en que deba comenzar (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 78 del 25 de septiembre de 1826: 98).

El 2 de octubre el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de octubre de su tercer año de gestión, presidida por el Diputado Pedro Martínez de Castro. Nombró como Vicepresidente al Diputado Manuel Villaverde, como Secretario Propietario al Diputado Joaquín Villa y como Secretario Suplente al Diputado Manuel de Cortázar (Poder Legislativo VIII, 1827. Acta del 2 de octubre de 1826: 620).

El 5 de octubre el Congreso le otorgó al Diputado Mariano Tamariz una licencia por dos meses para separarse de su cargo (Poder Legislativo VIII, 1827. Acta del 5 de octubre de 1826: 634).

El 6 de octubre el Congreso nombró a Melchor Múzquiz como Gobernador Constitucional, a Francisco Manuel Sánchez de Tagle como Teniente Gobernador y a José María Puchet como Primer Consejero, a Mariano Esteva como Segundo Consejero, a Pedro Verdugo como Tercer Consejero y a Manuel Rosales como Cuarto Consejero (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 79 del 6 de octubre de 1826: 98).

El Congreso dispuso que “los electores de los ayuntamientos, después de elegir a los alcaldes conciliadores, de quienes habla el artículo 1 de la Ley del 28 de enero de este año de 1826, elegirán otros tantos suplentes que hagan las veces en los casos de ausencia o enfermedad”, y que “en estos casos de enfermedad o ausencia del Propietario en lo que resta de este año, se intentarán las conciliaciones que ocurran ante el Alcalde del Ayuntamiento del lugar más inmediato” (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 80 del 6 de octubre de 1826: 99).

El Congreso formó una comisión especial para estudiar las irregularidades que se habían presentado en las elecciones de los diputados al Primer Congreso Constitucional. Dicha comisión la integraron los diputados: José María Luis Mora, Pedro Martínez de Castro, Alonso Fernández, Francisco de las Piedras y José Domingo Lazo de la Vega (Poder Legislativo VIII, 1827. Acta del 6 de octubre de 1826: 641).

El 16 de octubre el Congreso facultó al Gobierno "para que de los fondos comunes del Estado tome la cantidad de quince mil ciento cincuenta pesos, para la construcción o compostura de las cárceles de: Chilapa, Tixtla, Zacatula, Jonacatepec, Cuautla, Yahualica, Tejupilco, Ajuchitlán, Zacualpan, Taxco, Ixtlahuaca, Toluca, Tenango, Tula, Zimapán, Ixmiquilpan, Jiliotepec, Huichapan y Actopan" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 81 del 16 de octubre de 1826: 99).

El Congreso General dispuso que "habrá en Acapulco una compañía de infantería permanente, otra en San Blas, otra en Tampico, otra en la Isla del Carmen, dos en Bacalar y dos en Tabasco" (Decreto del 16 de octubre de 1826. BJMLM: vol. 30, exp. 219).

El 3 de noviembre el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de noviembre de su tercer año de gestión, presidida por el Diputado Manuel Villaverde. Nombró como Vicepresidente al Diputado Pedro Martínez de Castro, como Secretario Propietario al Diputado Alonso Fernández y como Secretario Suplente al Diputado Manuel Cotero (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 3 de noviembre de 1826: 3).

El 4 de noviembre el Congreso tomó conocimiento del dictamen de "las infracciones de ley cometidas por la Junta Electoral. Las primeras son relativas, al examen y calificación de las credenciales; las segundas, a la instalación y modo de proceder en la elección; y las terceras, en orden a la viabilidad de los electos" (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 4 de noviembre de 1826: 11).

El 8 de noviembre el Congreso aprobó una moción, para que se excitara al Gobernador para que investigara los bárbaros castigos que se usaban en el Obraje de San Ángel (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 8 de noviembre de 1826: 33).

El 22 de noviembre el Congreso declaró (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 82 del 22 de noviembre de 1826: 100) "nulas y sin ningún valor ni efecto todas las operaciones

de la Junta General celebrada en Toluca, para la elección de diputados al Primer Congreso Constitucional del Estado" (art. 1º), por lo que dispuso que "se repetirán las elecciones para nombrar diputados al Primer Congreso Constitucional del Estado, comenzando desde las primarias, y haciéndose en el modo y forma que la ley determine" (art. 2).

El Congreso le otorgó al Diputado José Nicolás de Oláez una licencia por un mes para separarse de su cargo, con el propósito de restablecer su salud (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 22 de noviembre de 1826: 146).

El 23 de noviembre el Congreso dispuso que "se dará en arrendamiento la imprenta al que hiciera la mejor postura, bajo la calidad que se llevará al lugar en que se establezca el Congreso", y que "el Gobierno rematará la imprenta en el mejor postor, y dará cuenta al Gobierno para su aprobación" (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 23 de noviembre de 1826: 151).

El Congreso acordó que se imprimieran "los documentos del expediente relativo a elecciones, que den luz en la materia y que se faculte a la comisión que entendió en este asunto para designar cuáles son éstos" (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 23 de noviembre de 1826: 151).[92]

El 24 de noviembre el Congreso instruyó al Gobierno, para que oyendo al Consejo exponga "lo que le parezca, en cuanto al lugar que pueda designarse, para residencia de los Supremos Poderes del Estado" (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 24 de noviembre de 1826: 155).

El 28 de noviembre el Congreso determinó que el Pueblo de Santa Fe se agregara al Partido de San Agustín de las Cuevas (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 83 del 28 de noviembre de 1826: 100).

El 1 de diciembre el Congreso secundando al Congreso de Veracruz, dispuso que se hiciera una iniciativa "al Congreso General de la Federación, en orden a que se indemnice del monto de la alcabala terrestre, prohibida por el decreto del 10 de mayo

[92] Véase el libro intitulado: "Documentos importantes tomados del expediente instruido a consecuencia de la representación que varios electores a la Junta General del Estado hicieron a su Congreso Constituyente pidiendo se anulen las elecciones verificadas en Toluca".

de este año, al Estado o estados que la cobrasen" (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 1 de diciembre de 1826: 185).

El 2 de diciembre el Congreso integró la Mesa Directiva del mes de diciembre de su tercer año de gestión, presidida por el Diputado Manuel Cotero. Nombró como Vicepresidente al Diputado Baltazar Pérez, como Secretario Propietario al Diputado José Ignacio Nájera y como Secretario Suplente al Diputado Ignacio Mendoza (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 2 de diciembre de 1826: 191).

El 14 de diciembre la Comisión de Gobernación del Senado de la República expidió un dictamen "relativo al decreto de 22 de noviembre pasado, sobre nulidad de elecciones para diputados del Congreso del Estado de México". En dicho dictamen se indicó que "el Supremo Gobierno por su Secretaría de Relaciones, dirigió a la Cámara un decreto del Honorable Congreso del Estado de México, reducido a anular las elecciones habidas para diputados del referido Estado, y como el Gobierno no expresa cuál sea el designio con que remite esos documentos, ha tenido la Comisión que encargarse en primer lugar de las razones que obstan o justifican el conocimiento del Senado en una materia que parece peculiar del Estado" (Dictamen del 14 de diciembre de 1826. BJMLM: vol. 28, exp. 108).

El 16 de diciembre el Congreso dispuso que "los libros que han de servir para el próximo año de 1847 en todas las administraciones de alcabalas, que no son receptorías, se firmen y rubriquen por el individuo del Consejo que designe el Gobernador" (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 16 de diciembre de 1826: 265).

El 18 de diciembre el Congreso le concedió al Diputado Antonio Velasco de la Torre una licencia por 20 días para separarse de su cargo, con el propósito de restablecer su salud (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 18 de diciembre de 1826: 273).

El 19 de diciembre el Congreso dispuso "que el Gobernador en cumplimiento de la parte 8ª, del artículo 161 de la Constitución Federal, remita a las cámaras del Congreso General la Memoria que presentó al Congreso del Estado en febrero de este año" (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 19 de diciembre de 1826: 277).[93]

[93] En la parte 8ª del artículo 161 se indica que cada uno de los estados tiene la obligación "de remitir anualmente a cada una de las cámaras del Congreso General nota circunstanciada y comprensiva de los ingresos y egresos de todas las tesorerías que haya en sus respectivos Distritos, con relación del origen de unos y otros; del estado en que se hallen los ramos de industria agrícola, mercantil y fabril; de los nuevos

El 20 de diciembre el Congreso tomó conocimiento del dictamen, por el que se dispuso que “para el día 15 del próximo enero estarán el Congreso, el Gobernador y el Consejo de Estado con sus respectivas secretarías, en la Ciudad de Toluca”, y que “los tribunales y demás oficinas saldrán de esta Ciudad (de México) en el tiempo, modo y forma que lo determine la autoridad competente” (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 20 de diciembre de 1826: 281).

El 23 de diciembre se aprobó el dictamen por el que se eligió a la Ciudad de Texcoco como Capital del Estado, por ocho votos a favor y siete en contra. Por Texcoco votaron los diputados: Alonso Fernández, Ignacio Mendoza, José de Jáuregui, Baltazar Pérez, Antonio de Castro, José María Luis Mora, Manuel de Cortázar y Manuel Cotero, y por Toluca los diputados: José Ignacio de Nájera, Joaquín Villa, Pedro Martínez de Castro, José Domingo Lazo de la Vega, José Nicolás de Oláez, Benito José Guerra y José Francisco Guerra (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 20 de diciembre de 1826: 303).

El Congreso le concedió permiso al Diputado José Nicolás de Oláez para separarse de su cargo, con el propósito de asumir la plaza de Juez de Distrito (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 23 de diciembre de 1826: 294).

El 30 de diciembre el Congreso exhortó al Senado de la República para que “no se pase a la Cámara de Diputados el acuerdo del Senado, que declara inconstitucional el decreto de este Congreso, sobre nulidad de las elecciones practicadas en Toluca, sin haberlo antes revisado”, y “que se avise por la misma Cámara del Senado el citado acuerdo, y teniéndose a la vista el expediente y discusión que motivó la declaración de nulidad, lo revoque” (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 30 de diciembre de 1826: 316).

El 4 de enero de **1827** el Congreso (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 84 del 4 de enero de 1827: 100) dispuso que “para el día 1º de febrero estarán en la Ciudad de Texcoco, que se designa para la residencia de los Supremos Poderes del Estado, el Congreso, el Gobernador y su Consejo, el Tribunal Supremo de Justicia, la Audiencia, la Tesorería y Contaduría General, con sus respectivas oficinas” (art. 1º); que “a cada uno de los individuos que hayan de trasladarse, y disfruten de dos mil pesos para arriba, se les ministrarán en clase de auxilio para su establecimiento y viaje, una

ramos de industria que puedan introducirse y fomentarse, con expresión de los medios para conseguirlo; y de su respectiva población y modo de protegerla o aumentarla”.

cantidad igual a la cuarta parte de su sueldo anual" (art. 7º); que "a los que disfruten menos de dos mil pesos, se les ministrará con el mismo objeto una cantidad igual a la tercera parte de su sueldo" (art. 8º); que "a los diputados solo se les asistirá con 250 pesos a cada uno" (art. 9º); que "deberá estar concluida la discusión (de la Constitución) del Estado, precisamente para el día último de enero" (art. 10), y que "la sanción y promulgación de dicha Constitución, se hará precisamente en Texcoco".[94]

El 8 de enero el Congreso aprobó "secundar la proposición de la de Puebla a la Cámara de Diputados, para que no se apruebe el acuerdo del Senado, sobre el derecho de nulidad de las elecciones de diputados al Congreso Constitucional de este Estado de México" (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 8 de enero de 1827: 332).

El señor Manuel Rosales acudió al Congreso a rendir su protesta de ley como Consejero del Estado (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 8 de enero de 1827: 335).

El Congreso acordó "que la comisión que entendió en la composición del edificio que ocupa este Congreso, se encargue de poner en estado de servicio el que ha de ocupar en la Ciudad de Texcoco, auxiliándose al efecto por el Gobierno" (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 8 de enero de 1827: 334).

El 11 de enero el Congreso dispuso "abolir el derecho de pulpería[95] mandado suspender en el decreto del 3 de marzo de 1825" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 85 del 11 de enero de 1827: 102).

El Congreso al extinguir el Tribunal del Consulado, determinó "que los juzgados ordinarios conocerán de los negocios que antes pertenecían a aquel Tribunal" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 86 del 11 de enero de 1827: 102).

El Congreso prorrogó la licencia que le concedió al Diputado Antonio Velasco de la Torre para separarse de su cargo, con el propósito de restablecer su salud (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 11 de enero de 1827: 345).

[94] En la sesión del 23 de diciembre de 1826 se designó a la Ciudad de Texcoco Capital del Estado por ocho votos a favor y siete que obtuvo la Ciudad de Toluca (Poder Legislativo XI, 1827. Acta del 23 de diciembre de 1826: 303).
[95] La pulpería de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, es una "tienda donde se venden diferentes géneros para el abasto".

El 13 de enero el Congreso aprobó una iniciativa de decreto al Congreso de la Unión, por la que determinó que "siempre que la Legislatura de algún Estado haga observaciones sobre algún proyecto de ley presentado a las cámaras, declarándolo como anticonstitucional, no se tendrá por aprobado, sino con las dos terceras partes de votos de cada Cámara" (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 13 de enero de 1827: 364).

El 19 de enero se resolvió el problema post electoral surgido a finales del año anterior, cuando el Senado de la República determinó que "no debe tener efecto el decreto número ochenta y tres de veinte y cinco de noviembre dado por la Asamblea Constituyente del Estado de México" (Decreto del 19 de enero de 1827. BJMLM: vol. 37, exp. 258), con lo que se eliminaban los obstáculos para instalar el Primer Congreso Constituyente, al reconocerse a los diputados electos.

El 20 de enero el Congreso determinó que se "contribúyase con las rentas del Estado al Lic. D. Carlos María Bustamante, para la impresión de su memoria titulada: Texcoco en los Últimos Reinados de sus Antiguos Reyes", o sea, relación tomada de los manuscritos inéditos de Boturini; redactados por el Lic. D. Mariano Veytia (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 20 de enero de 1827: 424).[96]

El 26 de enero el Congreso tomó conocimiento de un oficio, en el que se indicó que sería desocupada la Iglesia de San Juan de Dios de Texcoco, para ser sede del Congreso (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 26 de enero de 1827: 458).

El 27 de enero el Congreso determinó que "los licores se conducirán en el Estado con solo pase, cuando su valor no llegue a cien pesos" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 87 del 27 de enero de 1827: 102).

El Congreso pidió que se "participe a los Supremos Poderes de la Unión, la salida de los del Estado a la Ciudad de Texcoco, y que se verifique lo mismo con los demás estados" (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 27 de enero de 1827: 473).

El Congreso dispuso que "la imprenta se entregue al Gobierno para que la conserve en esta Ciudad (México) o la traslade a Texcoco, relevando a la comisión de esta responsabilidad" (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 27 de enero de 1827: 476).

[96] Esta obra se puede consultar en los archivos de Google.

El 29 de enero el Congreso tuvo su última sesión pública en la Ciudad de México (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 29 de enero de 1827: 477).

El 6 de febrero el Congreso tuvo su primera sesión pública en la Ciudad de Texcoco (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 6 de febrero de 1827: 476).

El Congreso integró la Mesa Directiva del mes de febrero de su tercer año de gestión, presidida por el Diputado José María Luis Mora. Nombró como Vicepresidente al Diputado José Francisco Guerra, como Secretario Propietario al Diputado José de Jáuregui y como Secretario Suplente al Diputado José Nicolás de Oláez (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 6 de febrero de 1827: 476).[97]

El Congreso acordó no elegir otro Secretario Propietario para cubrir la ausencia del Diputado Pedro Valdovinos, a quien se le había concedido una licencia por un mes para separarse de su cargo, con el propósito de restablecer su salud (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 6 de febrero de 1827: 476).

El Congreso al tomar conocimiento del fallecimiento del Diputado Mariano Casela, dispuso que se llamara al Diputado Suplente (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 6 de febrero de 1827: 484).

El 7 de febrero el Congreso dispuso que Bernardo Couto tomara “en arrendamiento la imprenta del Congreso del Estado, pagando por ella un rédito del cinco por ciento anual sobre el valor total que manifiestan la factura y cuenta remitidas al Gobierno por el mismo Congreso”, y que “en las impresiones que se hagan al Estado, se bajará un cinco por ciento sobre sus valores corrientes” (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 7 de febrero de 1827: 498).

El 10 de febrero el Señor José Calixto Vidal rindió su protesta de ley como Diputado del Congreso (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 10 de febrero de 1827: 509).

El 14 de febrero el Congreso autorizó “al Gobierno para que de los fondos del Estado invierta siete mil pesos, en la apertura de un canal de comunicación de la Laguna con esta Ciudad de Texcoco (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 88 del 14 de febrero de 1827: 105).

[97] En las actas de enero de 1827 no se registra la renovación de oficios correspondiente a ese mes.

Se suscribió en el Congreso la Constitución Política del Estado Libre de México por los diputados: José Francisco Guerra, Benito José Guerra, Manuel Cotero, Pedro Martínez de Castro, Manuel Villaverde, José Domingo Lazo de la Vega, Alonso Fernández, Manuel de Cortázar, Francisco de las Piedras, Antonio de Castro, José Ignacio de Nájera, Baltazar Pérez, Mariano Tamariz, Ignacio Mendoza, José Calixto Vidal, Joaquín Villa, José de Jáuregui, José Nicolás de Oláez y José María Luis Mora (Poder Legislativo I, 2001. Constitución del 14 de febrero de 1827: 105).[98]

La Constitución consta de títulos referentes a: las disposiciones generales (del Estado, su territorio, religión y forma de gobierno, a los naturales y ciudadanos del Estado y a los derechos de los ciudadanos y de los habitantes del Estado), al Poder Legislativo (Congreso, atribuciones del Congreso, a las leyes, a la reunión, receso y renovación del Congreso, a los diputados y a las elecciones de los diputados), al Poder Ejecutivo (Gobierno del Estado[99] y gobierno político y administración de los pueblos),[100] al Poder Judicial (bases generales para la Administración de Justicia, a la administración de justicia en lo civil, a la administración de justicia en lo criminal y a los tribunales), a la Hacienda Pública (Hacienda Pública, Tesorería General del Estado y Contaduría General del Estado), a la instrucción pública, y a la Constitución (observancia de la Constitución y reformas a la Constitución).

En el Capítulo I "Del Estado, su Territorio, Religión y Forma de Gobierno", se indica que "el Estado de México es parte integrante de la Federación Mexicana" (art. 1º); que "es libre, independiente y soberano, en lo que exclusivamente toca a su administración y gobierno interior" (art. 2º); que "está sujeto a los Poderes Generales, en todos y solo aquellos puntos que la Constitución Federal ha fijado como atribuciones de dichos Poderes" (art. 3º); que "el territorio del Estado es el comprendido en los distritos de Acapulco, Cuernavaca, Huejutla, México, Taxco, Toluca, Tula y Tulancingo" (art. 4º); que "la Ciudad de Texcoco es la Cabecera del Distrito de México, y la Residencia de los Supremos Poderes del Estado" (art. 5º); que "en el Estado nadie nace esclavo, ni se permite su introducción" (art. 6º); que "en el Estado no se reconoce título ni

[98] El Congreso Constituyente también lo integraron los diputados: Antonio Velasco de la Torre (gozaba de permiso temporal), Mariano Casela (falleció y en su lugar en 1827 fue nombrado el Diputado Suplente José Calixto Vidal), Pedro Valdovinos (gozaba de permiso temporal), Francisco Moctezuma (en su lugar en 1824 fue designado el Diputado Suplente Antonio de Castro), y José Figueroa (en su lugar en 1825 fue designado el Diputado Suplente José Nicolás de Oláez).

[99] Incluye capítulos referentes a: las personas que lo desempeñan, al Gobernador, a las facultades y obligaciones del Gobernador, a las restricciones del Gobernador, a la responsabilidad del Gobernador, al Secretario de Gobierno y al Consejo de Estado.

[100] Incluye capítulos referentes a: las autoridades por quienes se ha de desempeñar, a los prefectos, a los subprefectos y a los ayuntamientos.

distintivo alguno de nobleza, ni se admite fundación de vinculaciones de sangre, ni empleo hereditario, ni más méritos que los servicios personales" (art. 7º); que "toda ocupación honesta es honrosa en el Estado" (art. 8º); que "quedan prohibidas en el Estado, para lo sucesivo, las adquisiciones de bienes raíces por manos muertas" (art. 9º); que "el Estado es dueño de todos los bienes muebles e inmuebles que estén vacantes en su territorio, y de todos los que dejaren los que mueran intestados sin herederos" (art. 10); que "ninguna autoridad, cuyo nombramiento parta de otros Poderes que los del Estado, podrá ejercer en él mando ni jurisdicción sin el conocimiento de su Gobierno" (art. 11); que "no lo necesitan las autoridades, que por la Constitución Federal pueden ejercer su jurisdicción sobre los súbditos de Estado" (art. 12); que "la religión del Estado es y será perpetuamente la Católica, Apostólica, Romana, con exclusión del ejercicio de cualquier otra" (art. 13); que "el Estado fijará y costeará todos los gastos necesarios para la conservación del culto" (art. 14); que "la forma del gobierno del Estado es republicana representativa popular" (art. 15), y que "el Gobierno del Estado para su ejercicio se divide en los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y jamás podrán reunirse dos o más de éstos en una corporación o persona, ni depositarse el Legislativo en un individuo" (art. 16).

En el Capítulo II "De los Naturales y Ciudadanos del Estado", se indica que "es natural del Estado el que tenga las calidades que al efecto exija la Ley" (art. 17); que es ciudadano del Estado: "el natural en la comprensión de su territorio", "el natural o naturalizado en cualquier punto de la República Mexicana, y vecino del Estado", y "el que obtenga del Congreso del Estado carta de ciudadanía" (art. 18); que es vecino del Estado: "el que tenga un año de residencia en él con algún arte, industria o profesión", y "el que sea dueño de alguna propiedad raíz en el Estado, valiosa al menos en 6,000 pesos, y cuente de poseerla un año o más" (art. 19); que "la vecindad no se pierde por comisiones del Gobierno General o del Estado fuera de su territorio" (art. 20); que tienen suspensos los derechos de ciudadano: "el procesado criminalmente", "el que por Juez competente está entredicho de administrar sus bienes", "el deudor quebrado o deudor a los caudales públicos", "el vago o mal entretenido", "el sirviente doméstico", "el que está sujeto a la patria potestad", y "los eclesiásticos regulares" (art. 21); que pierde el derecho de ciudadanía: "el que se naturaliza fuera del territorio de la República Mexicana", y "el que por sentencia ejecutoriada es condenado a presidio, cárcel u obras públicas, por más de dos años" (art. 22), y que "solamente el Cuerpo Legislativo puede rehabilitar en los derechos de ciudadano al que los perdió" (art. 23).

En el Capítulo III “De los Derechos de los Ciudadanos y de los Habitantes del Estado”, se indica que “los derechos de los ciudadanos del Estado consisten en la facultad de elegir y ser electos” (art. 24); que “a ningún habitante del Estado podrá exigirse contribución, pensión ni servicio alguno, que no esté dispuesto con anterioridad por la ley” (art. 25); que “a ninguno podrá imponerse pena alguna sin su previa audiencia” (art. 26), y que “ninguno podrá ser reconvenido ni castigado en ningún tiempo por meras opiniones” (art. 27).

En el Título II del “Poder Legislativo” en el Capítulo I “Del Congreso”, se indica que “el Poder Legislativo del Estado reside en su Congreso” (art. 28); que “éste constará de una sola Cámara compuesta de diputados elegidos indirecta y popularmente” (art. 29); que “el número de diputados propietarios que compongan el Congreso del Estado, estará con su población en, razón de uno por cada cincuenta mil almas o por una fracción que pase de veinte y cinco mil” (art. 30), y que “aunque la población por esta porción no dé veinte y un diputados, el Congreso se compondrá siempre de este número” (art. 31).

En el artículo 32 que integra el Capítulo II “De las Atribuciones del Congreso”, se indica que las atribuciones del Congreso son: las de “dictar leyes para la administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, aclararlas, reformarlas o derogarlas” (1ª); “resolver y declarar, en caso de duda, si en algún acuerdo suyo es ley, decreto o simple providencia económica” (2ª); “examinar y calificar la legitimidad de la instalación y de los actos de la Junta General Electoral de Diputados al Congreso del Estado” (3ª); “calificar las elecciones de los diputados para admitirlos o no en el seno del Congreso” (4ª); “elegir senadores al Congreso General, sufragar para la elección del Presidente, Vicepresidente e individuos de la Suprema Corte de Justicia de la República, con arreglo a lo prevenido en la Constitución Federal” (5ª); “nombrar al Gobernador, su Teniente, consejeros, miembros del Tribunal Superior de Justicia y Tesorero General del Estado” (6ª); “declarar en su caso, que ha lugar a la formación de causa contra los diputados, el Gobernador, su Teniente, consejeros del Estado y ministros del Supremo Tribunal de Justicia” (7ª); “conocer de los delitos de oficio cometidos por los diputados, e imponerles por ellos las penas que correspondan” (8ª); “fijar anualmente los gastos del Estado, y establecer para cubrir las contribuciones necesarias, determinando su cuota, duración y modo de recaudarlas” (9ª); “examinar y calificar cada año la cuenta general de inversión de los caudales del Estado” (10ª); “decretar la creación, reforma o supresión de las oficinas, plazas de hacienda y judicatura” (11ª); “ordenar el establecimiento o supresión de los

cuerpos municipales y dar reglas para su organización" (12ª); "hacer la división del territorio, determinando el que corresponde a los distritos, partidos o municipalidades" (13ª); "aprobar los arbitrios para las obras públicas de utilidad común" (14ª); "sistemar la educación pública en todos sus ramos" (15ª); "arreglar el modo de llenar los cuerpos y contingentes de hombres, que debe dar el Estado para el servicio de la Milicia Activa y remplazos del Ejército Permanente" (16ª); "proteger la libertad política de la imprenta" (17ª); "conceder cartas de ciudadanía y de naturaleza a los extranjeros, arreglándose en estas últimas a la ley que dicte el Congreso de la Unión" (18ª), y "dictar leyes sobre todos aquellos puntos, que no se hayan reservado expresamente a los Poderes Generales, por la Acta Constitutiva o la Constitución Federal" (19ª).

En el Capítulo III "De las Leyes", se indica que "tienen iniciativa de ley los diputados, el Gobernador, y en el orden judicial el Tribunal Supremo de Justicia" (art. 33); que "las iniciativas de los diputados sufrirán dos lecturas con el intervalo de tres días entre una y otra" (art. 34); que "si después de ésta el Congreso las admite a discusión, se pasarán desde luego a la comisión respectiva" (art. 35); que "las iniciativas del Gobernador y del Tribunal Supremo de Justicia se pasarán desde luego a la comisión respectiva" (art. 36); que "ningún proyecto de ley o decreto podrá acordarse sin que sobre él haya dado su dictamen la comisión y sin que éste haya sufrido dos lecturas con intervalo de cinco días entre una y otra" (art. 37); que "ningún proyecto de ley se discutirá ni votará no estando presentes las dos terceras partes del número total de diputados" (art. 38); que "los proyectos de ley se acordarán por mayoría absoluta de los diputados presentes" (art. 39); que "para la derogación, reforma, aclaración o interpretación de las leyes y decretos, se observarán los mismos requisitos que para su formación" (art. 40); que "las leyes y decretos se comunicarán al Gobierno firmados por el Presidente y el Secretario del Congreso" (art. 41); que "si el Gobernador hiciere observaciones en contra, se pasarán sin otro trámite a la comisión respectiva, de cuyo dictamen se le remitirá copia con aviso del día en que haya de discutirse" (art. 42); que "para la discusión podrá nombrar uno o dos individuos del Consejo que lleven su voz" (art. 43); "que en caso de hacerse observaciones o de resultar nuevamente aprobados los acuerdos, se pondrán desde luego en su ejecución" (art. 44); "que contra ningún acuerdo del Congreso podrá hacer observaciones el Gobernador sin oír antes al Consejo" (art. 45); que "la ley contra que objetare de acuerdo con el Consejo, no podrá confirmarse con menos de las dos terceras partes de los votos de los diputados presentes" (art. 46), y que "si en el día en que deban cerrarse las sesiones, aún no se hubiere cumplido el término concedido al Gobernador para hacer observaciones e

indicare tener que hacerlas, podrán prolongarse por los días necesarios para la resolución del punto pendiente sin ocuparse el Congreso de otra cosa" (art. 47).

En el Capítulo IV "De la Reunión, Receso y Renovación del Congreso", se indica que "el Congreso se reunirá dos veces al año" (art. 49); que "las primeras sesiones darán principio el 2 de marzo, y terminarán el 2 de junio", y que "las segundas empezarán el 15 de agosto y se cerrarán el 16 de octubre" (art. 50); que "se reunirá en sesiones extraordinarias, si lo convocare la Diputación Permanente, de acuerdo con el Gobierno" (art. 51); que "para el tiempo de su receso nombrará una Diputación Permanente, compuesta de cinco de sus miembros, que elegirá tres días antes de cerrar sus sesiones ordinarias" (art. 52); que "elegirá también el mismo día, un Suplente para el caso de que muera o se inhabilite alguno de sus cinco propietarios" (art. 53); que "los nombrados para componer la Diputación Permanente en las sesiones últimas antes de la renovación del Congreso, serán precisamente de los que estén al concluir de diputados" (art. 54); que "el primer nombrado será el Presidente de la Diputación", que "por su falta lo será el que le sigue, según el orden de nombramientos, y el último nombrado será el Secretario" (art. 55); que "las funciones de esta Diputación durarán todo el tiempo del receso del Congreso, y en el año próximo a la renovación de los diputados, hasta el último acto de las juntas preparatorias del Congreso siguiente" (art. 56); que "el Congreso en sesiones extraordinarias se ocupará exclusivamente del objeto u objetos comprendidos en su convocatoria", y que "las cerrará aunque no haya evacuado su comisión antes del día de la apertura de las ordinarias, reservando a éstas la conclusión de los asuntos pendientes" (art. 58); que "el lugar de las sesiones del Congreso será el designado para la residencia de los Supremos Poderes del Estado, y no podrá trasladarse a otro punto, sin que para ello estén de acuerdo las tres cuartas partes de los diputados que lo componen" (art. 59); que "el Congreso se renovará parcialmente cada dos años, saliendo en el bienio de 829 los diez últimamente nombrados, y en los bienios sucesivos los más antiguos" (art. 60); que "los diputados nuevamente electos, presentarán sus credenciales a la Secretaría del Congreso para dar cuentas con ellas en la Primera Junta Preparatoria" (art. 61); que "ésta se tendrá ocho días antes de la apertura de las sesiones" (art. 62); que "cuatro días después se tendrá la segunda, en la que se calificarán los nuevos poderes y se elegirán el Presidente, Vicepresidente y secretarios para el Congreso" (art. 63); que "en cualquier número que se reúnan los diputados, están facultados para compeler a los ausentes a que vengan a las sesiones" (art. 64), y que "las sesiones del Congreso, ordinarias y extraordinarias, se

abrirán con la asistencia del Gobierno y con las formalidades que prescribe su Reglamento Interior" (art. 65).

En el artículo 57 se establecieron como facultades de la Diputación Permanente las de: "velar sobre la observancia de la Constitución y de las leyes, formando expedientes sobre cualquier incidente que haya notado, relativo a estos objetos, para dar cuenta al Congreso en sus próximas sesiones" (1ª); "convocar a sesiones extraordinarias, de acuerdo con el Gobierno" (2ª); "en caso de muerte o inhabilidad de alguno o algunos de los diputados propietarios, llamar al Suplente o suplentes que se sigan, para llenar esta falta en las siguientes sesiones" (3ª); "presidir y deliberar en las juntas preparatorias a la renovación del Congreso hasta que nombren su Presidente y secretarios"; "conceder o negar al Gobernador la licencia de que habla el artículo 136" (4ª), y "suspender a los funcionarios de que habla la facultad séptima del artículo 32 de este título,[101] que en el tiempo del receso cometieron delitos atroces, dándose cuenta al Congreso en el primer día de las próximas sesiones" (6ª).

En el Capítulo V "De los Diputados", se indica que "ningún ciudadano podrá excusarse de Diputado, sino en el caso de reelección inmediata, avisando si fuere posible, a la Junta Electoral, a efecto de que nombre otro antes de disolverse" (art. 66); que "ninguna autoridad podrá reconvenir a los diputados en ningún tiempo por sus votaciones en el Congreso" (art. 67); que "los diputados al entrar en el ejercicio de sus funciones, prestarán juramento de guardar y hacer guardar esta Constitución, la Federal, el Acta Constitutiva, y de cumplir fielmente con las obligaciones de su encargo" (art. 69); y que "las dietas de los diputados se fijarán cada cuatro años" (art. 70).

En el artículo 68 se indica que los diputados no podrán: "ser demandados ni ejecutados civilmente por deudas en el tiempo de las sesiones ordinarias y extraordinarias" (1ª); "ser enjuiciados por delitos comunes, sin que preceda declaración del Congreso de haber lugar a la formación de causa" (2ª); "comparecer civil ni criminalmente sino ante el Tribunal compuesto de individuos del Congreso, con arreglo a lo que previene su Reglamento Interior" (3ª), ni "pretender ni admitir para sí, ni solicitar para otro pensión o empleo del Gobierno General o del Estado, a no ser que el destino sea de ascenso por rigurosa escala" (4ª).

[101] El Congreso tenía como atribución: declarar que ha lugar a la formación de causa contra los diputados, el Gobernador, su Teniente, consejeros del Estado y ministros del Supremo Tribunal de Justicia.

En el Capítulo VI “De las Elecciones de Diputados”, se indica que “las elecciones de diputados al Congreso del Estado se harán por los mismos electores y en el mismo mes que las de los diputados al Congreso General” (art. 71); que “habrá juntas municipales, de partido y una en general de todo el Estado” (art. 72); que “en las primeras se elegirán electores primarios, en las segundas se elegirán electores secundarios, y la última nombrará diputados para ambos congresos” (art. 73); que “solo podrán votar en estas juntas los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y vecinos del Estado, y únicamente podrán ser electos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, que sean mayores de veinticinco años” (art. 74); que “nadie puede votarse a sí mismo, bajo pena de perder el derecho de votar y ser votado, por esta sola vez” (art. 75); que “ninguno de los elegidos podrá excusarse por motivo alguno de estos encargos, si no es del de Diputado en el caso de reelección inmediata” (art. 76); que “todas estas juntas se celebrarán en público, no habrá guardia en ellas, y ninguno de los concurrentes se presentará con armas” (art. 77); que “a los elegidos se les participará su nombramiento por medio de un oficio firmado por el Presidente, Secretario y escrutadores, que le servirá de credencial” (art. 84); que “concluido el acto de los nombramientos, inmediatamente se disolverán las juntas y será nulo cualquier acto en que se mezclen” (art. 85); que “las juntas municipales se tendrán el primer domingo de agosto en cada una de las municipalidades, divididas éstas en tantas sesiones cuantos fueren los electores primarios, que correspondan a toda la Municipalidad” (art. 86), y que “las juntas electorales de partido se tendrán en las cabeceras de éstos el domingo último de agosto, y serán presididas por los subprefectos, y en la Cabecera del Distrito por el Prefecto” (art. 96).

En cuanto a la elección de los diputados, se indica que “la Junta General del Estado se tendrá en el lugar de la residencia de sus Poderes Supremos el domingo 1º de octubre, y el día siguiente”; que “el primer día se elegirán diputados al Congreso General, y el segundo los que correspondan al Congreso del Estado” (art. 106); que “será presidida esta Junta por el Gobernador del Estado” (art. 107); que “concurrirán en ella a votar diputados para ambos congresos, los electores secundarios nombrados en las juntas de partido de todo el Estado, cuyos nombramientos hayan sido aprobados en las juntas preparatorias” (art. 108); que “la elección de diputados, que según la convocatoria corresponda para ambos congresos, se hará de uno en uno por escrutinio secreto mediante cédulas” (art. 110); que “en cada votación será electo diputado el que reuniere la mayoría absoluta de los votos” (art. 111); que “si en ninguno concurriese esta mayoría, entrarán a segundo escrutinio los dos en quienes haya recaído el mayor número y quedará electo el que la obtenga” (art. 112); que “la

suerte decidirá cualquiera empate que pueda haber, ya en el primer escrutinio para proceder al segundo, ya en el segundo para decidir de la elección" (art. 113); que "el testimonio en forma de el acta de elección de diputados al Congreso General, que previene el artículo 17 de la Constitución Federal, se remitirá por el Presidente de la Junta General del Estado al del Consejo de Gobierno" (art. 114); que "la copia de las actas de las juntas preparatorias y de la elección de diputados al Congreso del Estado se remitirá al Presidente de su Congreso" (art. 115); que "en las mismas juntas se elegirán diputados suplentes para ambos congresos, y su número será el de uno por cada tres propietarios o por una fracción que llegue a dos" (art. 116); que "el número de suplentes al Congreso del Estado, que se elegirá en cada bienio, será el que corresponda por la regla del artículo anterior al número total de los propietarios que componen al Congreso" (art. 117); que "para ser elegido Diputado al Congreso General, no se requieren más calidades que las prescritas por la Constitución Federal" (art. 118), y que "para serlo al Congreso del Estado, se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos y mayor de veinticinco años" (art. 119).

En el artículo 120 se indica que no podrán ser diputados al Congreso del Estado: "los que hayan sido nombrados el día anterior para el Congreso General" (1º); "los senadores que deban empezar o continuar en su cargo los años siguientes" (2º); "los obispos, gobernadores de las mitras, y vicarios generales" (3º); "los comandantes generales que ejerzan jurisdicción en el Estado" (4º); "el Gobernador, su Teniente, el Tesorero General y los administradores de rentas de Distrito" (5º), y "los electores a la Junta General" (6º).

En el Título III del "Poder Ejecutivo", en la Parte Primera "Del Gobierno del Estado", en sus capítulos I y II, se indica que "el Gobierno del Estado se desempeñará por un Gobernador y un Consejo" (art. 121); que "para ser Gobernador del Estado se requiere, ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de treinta y cinco años, nacido dentro del territorio de la Federación y del estado secular" (art. 122); que no puede ser Gobernador del Estado "el empleado civil o de hacienda con título o formal despacho del Gobierno Federal", "el que lo sea en la misma clase, y en los mismos términos por la autoridad eclesiástica", y "el Senador o Diputado del Congreso General" (art. 23); que "el Gobernador del Estado durará en el ejercicio de sus funciones cuatro años y podrá ser reelegido inmediatamente, una vez si sufragare a su reelección dos terceras partes de votos" (art. 124); que "la elección del Gobernador se hará por el Congreso, en votación nominal y en sesión permanente, el día 1º de octubre" (art. 125); que "quedará nombrado el que reúna más de la mitad de los votos"

(art. 126); que “si no resultare esta mayoría absoluta en el primer escrutinio, se repetirá éste entre los dos que reunieren mayor número” (art. 127); que “si más de dos reunieren la mayoría respectiva la suerte decidirá entre los que obtuvieren igual número de votos quienes deben entrar en el segundo escrutinio, y la misma suerte decidirá también de la elección si en la votación segunda hubiere empate” (art. 128); que “el Gobernador dará principio a sus funciones el día 12 de marzo del año inmediato a su elección” (art. 129); que “prestará juramento ante el Congreso de guardar y hacer guardar la Constitución, la Federal y el Acta Constitutiva, y de cumplir fiel y legalmente las obligaciones de su encargo” (art. 130); que “terminado el tiempo de su gobierno no podrá continuar en el ejercicio de sus funciones ni por un día solo” (art. 131); que “si el día 12 de marzo no se presentare el Gobernador nuevamente electo a prestar el juramento, entrará a funcionar el Teniente Gobernador; y por su defecto el Consejero Secular más antiguo” (art. 132), y que “si vacaren las plazas de Gobernador, su Teniente o consejeros, se nombrarán individuos que las sirvan por el tiempo que le faltare a aquel cuyo lugar van a ocupar” (art. 133).

En el artículo 134 inserto en el Capítulo III de las “Facultades y Obligaciones del Gobernador”, se indica que el Gobernador tiene facultades para: “nombrar, de acuerdo con el Consejo, todas las plazas de judicatura, civiles y de hacienda del Estado, cuyo nombramiento no esté prevenido de otro modo por alguna ley” (1ª); “ejercer la exclusiva, oído el Consejo, en todas las provisiones de piezas eclesiásticas del Estado, cualquiera que sea su clase, naturaleza, denominación o duración” (2ª); “hacer iniciativas de ley, oído antes el dictamen del Consejo” (3ª); “nombrar y destituir libremente a su Secretario de Gobierno” (4ª); “suspender y remover a los empleados del Estado, sobre quienes la Ley le diere esta facultad” (5ª); “hacer gracia de la pena capital a los delincuentes condenados a ella, que no fueren homicidas” (6ª); “pedir a la Diputación Permanente que convoque a sesiones extraordinarias o negar su consentimiento, procediendo en ambas cosas de acuerdo con el Consejo” (7ª), y “objetar por una sola vez, oído del dictamen del Consejo, sobre los acuerdos no constitucionales que dicte el Congreso del Estado, en el preciso término de diez día útiles, suspendiendo entre tanto su ejecución” (8ª).

En el artículo 135 se establecieron como obligaciones del Gobernador las de: “cumplir y hacer cumplir las leyes del Estado y de la Federación a todas las personas y corporaciones, inclusas las juntas electorales” (1ª); “dar conocimiento de las leyes de la Federación, antes de publicarlas, al Congreso del Estado si estuviere reunido” (2ª); “dictar los decretos y formar los reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes”

(3ª); “cuidar de la tranquilidad y del orden público en lo interior del Estado” (4ª); “cuidar de que la justicia se administre por los tribunales del Estado pronta y cumplidamente, y de que se ejecuten las sentencias” (5ª); “cuidar de la instrucción de la Milicia Local conforme a la disciplina prescrita por el Congreso General, y velar para que no se use de ella si no según la ley de su institución” (6ª); “promover la ilustración y prosperidad del Estado en todos sus ramos” (7ª); “pasar cada seis meses al Congreso una nota relativa a los particulares que confiere el artículo 32[102] de la Acta Constitutiva” (8ª), y “dar cuenta anualmente al Congreso en la apertura de las sesiones de marzo, por medio de una memoria, del estado en que se hallan todos los ramos de la administración pública, y adelantamientos o mejoras de que son susceptibles” (9ª).

En el artículo 136 inserto en el Capítulo IV de las “Restricciones del Gobernador”, se indica que el Gobernador no podrá: “salir del territorio del Estado durante su encargo, sin expresa licencia del Congreso si estuviere reunido, o de la Diputación Permanente en tiempo de receso” (1º); “ingerirse directa ni indirectamente en el examen de las causas pendientes” (2º); “disponer en manera alguna de las personas de los reos en lo criminal” (3º); “decretar la prisión de ninguna persona, ni privarla de su libertad, sino cuando el bien y seguridad del Estado lo exijan, y aun entonces, deberá ponerla libre o entregarla a disposición del Juez competente, en el preciso término de sesenta horas” (4º); “ocupar la propiedad de ninguna persona, ni perturbarle la posesión, uso o aprovechamiento de ella, si no en el caso de una absoluta e indispensable necesidad, calificada por el Consejo, y previa la indemnización correspondiente a satisfacción de la parte” (5º), e “impedir que las elecciones populares se celebren en los días fijados por la Constitución, o que el Congreso tenga sus sesiones en las épocas designadas constitucionalmente” (6º).

En el Capítulo V de la “Responsabilidad del Gobernador”, se indica que “el Gobernador no podrá ser demando civil ni criminalmente por delitos comunes, hasta concluido el tiempo de su gobierno” (art. 137); que “el Gobernador podrá ser demandado criminalmente, aún en el tiempo de su gobierno, por los delitos comunes atroces, y por los cometidos en el desempeño de su cargo” (art.138); que “nunca podrá enjuiciarse al Gobernador durante su gobierno, sin previa declaración del Congreso de haber lugar a formación de causa” (art. 139), y que “pasado un año de su

[102] Este artículo señala que: “el Congreso de cada Estado remitirá anualmente al General de la Federación nota circunstanciada y comprensiva: de los ingresos y egresos de todas las tesorerías que haya en sus respectivos distritos, con relación del origen de unos y otros, de los ramos de industria, agricultura, mercantil y fabril, indicando sus progresos o decadencia con las causas que los producen; de los nuevos ramos que puedan plantearse, con los medios de alcanzarlos; y de su respectiva población”.

gobierno, no podrá ser reconvenido el Gobernador por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones" (art. 140).

En el Capítulo VI "Del Secretario de Gobierno", se indica que "para el despacho de los negocios de gobierno tendrá el Gobernador un Secretario" (art. 141), y que "todos los decretos, reglamentos y órdenes generales del Gobernador deberán ir firmados por el Secretario del Despacho, sin cuyo requisito no se obedecerán" (art. 142).

En el Capítulo VII "Del Consejo de Estado", se indica que "el Consejo de Estado se compondrá del Teniente Gobernador y cuatro consejeros" (art. 143); que "para ser Teniente Gobernador se requieren las mismas calidades que para ser Gobernador" (art. 144); que "entre la elección del Gobernador y su Teniente habrá dos años de diferencia" (art. 145); que "la duración del Teniente Gobernador será de cuatro años" (art. 146); que sus obligaciones son las de: "sustituir las faltas del Gobernador, asistir al Consejo, y presidirlo cuando no asista el Gobernador" (art. 147); que "el Consejo se renovará por mitad cada dos años, saliendo el primer bienio los últimos nombrados, y en los bienios sucesivos los más antiguos" (art. 148), y que "el Teniente Gobernador y los consejeros, serán elegidos el día 1° de octubre, por el mismo orden y en los mismos términos que el Gobernador: entrarán a funcionar el día 12 de marzo del año inmediato al de su elección: podrán ser reelectos indefinidamente, y prestarán, en su ingreso al ejercicio de sus funciones, el mismo juramento que el Gobernador" (art. 149).

En el artículo 151 se establecen como obligaciones del Consejo las de: "dar dictamen motivado y por escrito al Gobernador, en todos aquellos asuntos en que la ley impone a éste la obligación de pedirlo" (1ª); "darle en todos aquellos asuntos en que el mismo Gobernador tenga a bien oírlo" (2ª); "proponerle las medidas o providencias que le ocurran y juzgue más eficaces para el aumento de la población, de la industria, instrucción general y conservación del orden y tranquilidad pública" (3ª), y "velar sobre la observancia de las leyes, avisando al Gobernador o al Congreso en su caso, todo lo que juzgue necesita de remedio" (4ª).

En la Parte Segunda del Título Tercero intitulada "Gobierno Político y Administración de los Pueblos", se indica que "la administración interior de los pueblos está a cargo de los prefectos, subprefectos y ayuntamientos" (art. 152); que "en cada Cabecera de Distrito habrá un funcionario con el título de Prefecto, a cuyo cargo estará el gobierno político" (art. 153); que "en cada Cabecera de Partido, menos en la del Distrito, habrá

un funcionario con el título de Subprefecto, nombrado por el Prefecto respectivo, con aprobación del Gobernador" (art. 156); que "en todo pueblo que por sí o su comarca tuviera cuatro mil o más habitantes, habrá Ayuntamiento" (art. 159); que "lo habrá también en las cabeceras de los partidos aunque no cuenten cuatro mil habitantes, y en los demás lugares en que el Congreso juzgare conveniente establecerlo, por aproximarse al número expresado el de sus habitantes, o por otras justas causas" (art. 160); que "el Ayuntamiento se compondrá de Alcalde o alcaldes, de Síndico o síndicos, y de regidores nombrados por elección de vecinos de la Municipalidad, mediante electores" (art. 161); que "los alcaldes de los ayuntamientos se renovarán en su totalidad anualmente" (art. 165); que "los regidores y síndicos, donde hubiere dos, se renovarán por mitad, saliendo en cada año lo más antiguos" (art. 166); que "nadie podrá excusarse de estos cargos, si no es en el caso de reelección inmediata o de causa justa, a juicio del Prefecto respectivo" (art. 167), y que "las personas electas para los oficios de Ayuntamiento, entrarán a ejercerlos el día 1° de enero" (art. 168).

En el artículo 155 se indica que las funciones de los prefectos serán las de: "cuidar en su Distrito de la tranquilidad pública, del buen orden, de la seguridad de las personas y bienes de sus habitantes, con entera sujeción al Gobernador" (1ª); "cuidar del cumplimiento de las leyes y órdenes del Gobierno, y en general de todo lo concerniente al Ramo de la Policía" (2ª); "hacer que los ayuntamientos de su Distrito llenen las obligaciones que les imponen las leyes" (3ª); "velar sobre que en los pueblos hayan escuelas de primeras letras, y otros establecimientos de instrucción pública y beneficencia, donde pudiere haberlos" (4ª); "velar así mismo, sobre la buena inversión de los fondos públicos de los pueblos, y del arreglo y buena administración de los bienes de comunidad" (5ª); "formar el censo y la estadística del territorio del Distrito" (6ª); "conceder o negar a los menores la licencia para casarse, en los casos y términos que lo practicaban los presidentes de las chancillerías por decreto del 3 de abril de 803" (7ª), y "arreglar en los pueblos gubernativamente el repartimiento de tierras comunes conforme a las leyes de la materia, entretanto que sobre este punto se da una Ley General (8ª).[103]

En el artículo 169 se indica que corresponde a los alcaldes de Ayuntamiento: "ejercer el oficio de conciliadores en la forma y casos en que la ley exige la conciliación previa" (1º); "conocer por juicio verbal de las demandas civiles hasta cierta cuantía, y de las criminales sobre injurias y faltas leves que no merezcan más pena que alguna

[103] El artículo 158 indica que las funciones de los subprefectos "serán en la extensión del Partido las mismas que señala a los prefectos en la del Distrito el artículo 155, a excepción de la sexta y séptima".

reprensión o corrección ligera" (2º); "dictar lo conveniente sobre asuntos civiles, mientras no se hacen contenciosos, y en éstos únicamente las providencias urgentísimas que no den lugar a ocurrir al Juez de Primera Instancia" (3º), y "poner en ejecución las medidas generales de buen gobierno que haya acordado el Ayuntamiento, entre los límites de sus atribuciones" (4º).

En el artículo 170 se indica que las obligaciones de los ayuntamientos son las de: "cuidar de la Policía de Salubridad y Comodidad en su Municipalidad respectiva" (1ª); "acordar las medidas de buen gobierno para asegurar las personas y bienes de sus habitantes" (2ª); "auxiliar y proteger las que se dirijan a la educación, y a generalizar la enseñanza de primeras letras y la instrucción pública" (3ª); "remover los obstáculos que se opongan a los progresos de la industria, agricultura y comercio" (4ª); "conservar las obras públicas de utilidad común, de recreo y ornato" (5ª); "administrar cuidadosamente los fondos municipales, e invertirlos conforme a sus facultades" (6ª); "dar cuenta anualmente al Prefecto del Distrito de su monto y distribución" (7ª), y "auxiliar a los alcaldes en orden a la ejecución de las leyes, reglamentos de policía y acuerdos del mismo Ayuntamiento" (8ª).

En el Capítulo I sobre las "Bases Generales para la Administración de Justicia" del Título IV del "Poder Judicial", se indica que "la facultad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales, pertenecen exclusivamente al Poder Judicial" (171); que "ni el Congreso ni el Gobierno pueden avocar a si causas pendientes" (172); que "ni el Congreso ni el Gobierno, ni los tribunales podrán abrir los juicios fenecidos" (173); que "se tendrán por tales los que hayan pasado por todos sus trámites y recursos de cualquiera clase y naturaleza que sean" (art. 174); que "las leyes que señalan el orden y formalidades del proceso, serán uniformes en todos los tribunales, y ninguna autoridad podrá dispensarlas" (art. 175); que "ningún Tribunal podrá suspender la ejecución de las leyes, ni hacer reglamentos para la Administración de Justicia" (art. 176); que "los habitantes del Estado de México, en causas pertenecientes al mismo Estado, deberán ser exclusivamente juzgados por el Tribunal competente, determinado con anterioridad por la ley" (art. 177); que "todo Tribunal Civil, Criminal o Eclesiástico, que haya de juzgar a los súbditos del Estado, deberá residir dentro del mismo, para que sus sentencias tengan efecto en él" (art. 178); que "cualquiera falta a las leyes que arreglen el proceso en lo civil y criminal, hace personalmente responsables a los jueces de derecho que la cometieren" (art. 179); que "el soborno, cohecho y prevaricación de los jueces producen acción popular contra ellos" (180), y que "los jueces no podrán ser separados de sus destinos sino por causa legalmente

probada y sentenciada, ni suspensos sino por acusación legalmente intentada" (art. 181).

En el Capítulo V "De los Tribunales", se indica que "habrá un Juez Letrado en la Cabecera de cada Partido, que conozca en primera instancia de las causas que en él ocurran" (art. 210); que "habrá en cada Cabecera de Distrito un Juez Letrado, que conozca en segunda instancia de las causas que ocurran en el Distrito, oyendo el dictamen de los asociados nombrados por cada una de las partes" (art. 211); que "en el lugar de la residencia de los Supremos Poderes habrá un Juez Letrado, que conozca en tercera instancia de las causas de todo el Estado, oyendo el dictamen de asociados si las partes quieren nombrarlos" (art. 212); que "en el mismo lugar residirá un Supremo Tribunal de Justicia, compuesto de seis ministros letrados y de un Fiscal, dividido en dos salas" (art. 213), y que "la provisión y remoción de los individuos de este Cuerpo se hará según se previene en esta Constitución" (art. 214).

En el artículo 215 se indica que toca al Supremo Tribunal de Justicia conocer: "de las causas criminales del Gobernador en los casos que puede ser demandado conforme al artículo 138" (1º); "de las causas civiles y criminales del Teniente Gobernador, consejeros del Estado, secretarios de gobierno, prefectos y jueces de primera, segunda y tercera instancia" (2º); que "de todos los recursos de nulidad en asuntos ejecutoriados, que se interpongan de los tribunales del Estado para el preciso efecto de reponer el proceso, devolviéndolo y haciendo efectiva la responsabilidad de los jueces" (3º); "de las quejas y reclamaciones de los jueces a quienes se hayan condenado a sufrir las penas de responsabilidad, al efecto únicamente de declararlos libres de las referidas penas" (4º); "de todas las causas de separación y suspensión de los consejeros del Estado y jueces de primera, segunda y tercera instancia" (5º); "de todas las competencias que se susciten entre los tribunales del Estado" (6º); "de los recursos de fuerza que se interpongan de los tribunales eclesiásticos del mismo Estado" (7º); "de las competencias que se formen entre las autoridades del Estado y las de la Federación, para el efecto de que no se empeñen las que carezcan de fundamentos, y se sostengan por el contrario, con su apoyo las que fueron fundadas" (8º); "de las causas de nuevos diezmos" (9º), y "de las diferencias que se susciten sobre pactos o negociaciones que celebre el Gobierno, por sí o sus agentes, con individuos o corporaciones del Estado" (10º).

En el artículo 216 se indica que "para juzgar a los individuos de este Supremo Tribunal, elegirá el Congreso, en el primer mes de las sesiones de marzo de cada

bienio, veinticuatro individuos que no sean del Congreso. De éstos sacarán por suerte un Fiscal y un número de jueces igual a aquel de que conste la Primera Sala del Tribunal, y cuando fuere necesario procederá el Congreso, y en su receso la Diputación Permanente, a sacar del mismo modo los jueces de las otras salas".

En el artículo 217 se indica que "para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia se requiere: ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, letrado mayor de treinta y cinco años, haber sido Juez a lo menos por cuatro años, Consejero del Estado por el tiempo que designa la Constitución o diputados en los congresos del Estado o de la Federación".

En el Capítulo I "De la Hacienda Pública" del Título V, se indica que "la Hacienda Pública del Estado se formará de las contribuciones que el Congreso decretare y de los demás bienes que le pertenezcan" (art. 218); que "las contribuciones se decretarán todos los años en las sesiones de marzo" (art. 219); que "no podrán decretarse otras que las precisas para cubrir el presupuesto que el Gobierno presentare" (art. 220); que "las decretadas por el Congreso en el año anterior, cesarán, sin otro requisito, el día 2 de junio del año siguiente" (art. 221), y "el Congreso, para acordar las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto de los gastos del Gobierno, deberá ocuparse de preferencia en examinarlo en las sesiones de marzo, y en las mismas examinará también la inversión de las del año próximamente anterior" (art. 222).

En el Capítulo II de la "Tesorería General del Estado", se indica que "en el lugar de la residencia de los Supremos Poderes habrá una Tesorería General, en la que entrarán real o virtualmente todos los caudales del Estado" (art. 223), y que "el Tesorero no podrá hacer otros pagos, que los que están detallados por las leyes y reglamentos en calidad de fijos y periódicos, los que acordare extraordinariamente el Congreso, y los que estén dentro de la cantidad que se concede al Gobierno para gastos extraordinarios" (art. 224).

En el Capítulo III de la "Contaduría General del Estado", se indica que "en el lugar de la residencia de los Supremos Poderes habrá una Contaduría General del Estado" (art. 225); que "en ella se glosarán todas las cuentas de los caudales públicos en todos sus ramos" (art. 226), y que "intervendrá, con arreglo a las leyes, en los ingresos y egresos de caudales de la Tesorería General" (art. 227).

En el Título VI de la “Instrucción Pública”, se indica que “en el lugar de la residencia de los Supremos Poderes habrá un Instituto Literario, para la enseñanza de todos los ramos de la instrucción pública” (art. 228), y que “habrá a lo menos en cada Municipalidad una escuela de primeras letras, en que se enseñará a leer, escribir, las cuatro reglas de aritmética, el Catecismo Religioso y el Político” (art. 229).

En el Título VII “De la Constitución”, se indica que “todos los habitantes del Estado están obligados, bajo responsabilidad, a observar la Constitución en todas sus partes” (art. 230); que “el Congreso no podrá en ningún caso dispensarles la observancia de cualquiera de sus artículos” (art. 231); que “las proposiciones que tengan por objeto la reforma de esta Constitución, deberán estar suscritas por cinco diputados” (art. 232); que “el Congreso no podrá tomarlas en consideración hasta el año de 1830” (art. 233); que “en este año se limitará únicamente a declarar si las proposiciones merecen sujetarse a discusión, y hará que se publiquen, si las calificaren admisibles las dos terceras partes de los diputados presentes, reservando su deliberación al Congreso siguiente” (art. 234); que “el Congreso del año 1831, en su Primera Reunión Ordinaria, deliberará sobre las proposiciones que hubieren sido admitidas por el anterior, y siendo aprobadas por las dos terceras partes, se publicarán” (art. 235); que “las proposiciones de reforma que no fueren admitidas por el Congreso, no podrán repetirse en la misma Legislatura” (art. 236), y que “las reformas que se propongan en los años siguientes al de 1830, se tomarán en consideración por el Congreso en el segundo año de cada bienio, y si se calificaren admisibles, según lo prevenido en los artículos anteriores, se publicará esta resolución para que el Congreso siguiente se ocupe de ellas” (art. 237).

El Congreso dispuso que la Constitución Política del Estado Libre de México “se publicará solemnemente en esta Ciudad (de Texcoco) el día 26 del corriente”; que “en ese día la jurarán el Congreso, el Gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia, y el Tesorero General”; que “al día siguiente prestarán el juramento ante el Gobernador acompañado de su Consejo, el Prefecto, los ministros de la Audiencia, el Juez Eclesiástico, el Cura Párroco del lugar, el Guardián de San Francisco, y los jefes de las oficinas generales”; que “el Gobernador circulará a la posible brevedad a todos los pueblos y autoridades del Estado la Constitución, acompañando un reglamento para el modo y solemnidad con que debe publicarse”, y que “en todos los pueblos del Estado se hará el juramento de la Constitución el domingo siguiente al día en que se reciba” (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 89 del 14 de febrero de 1827: 130).

El 15 de febrero el Congreso expidió la Ley de Elecciones para Diputados al Congreso General y al Congreso Constitucional del Estado de México (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 90 del 15 de febrero de 1827: 130),[104] en la cual se estableció que: "las elecciones de diputados al Congreso General y al Particular del Estado se harán por unos mismos electores" (art. 1º); que "al efecto habrá juntas municipales, de partido y una general del Estado" (art. 2º); que "las juntas municipales elegirán electores primarios" (art. 3º); que "las juntas de partido elegirán electores secundarios" (art. 4º)"; que "la Junta General del Estado elegirá diputados para ambos congresos" (art. 5º); que "el número de electores primarios será proporcional a la población de las municipalidades, nombrándose en cada una de éstas tres electores por cada cuatro mil habitantes, o por una fracción de este número que exceda de dos mil" (art. 6º); que "cada sección de la Municipalidad elegirá un elector primario" (art. 21); que "solo podrán elegir y ser elegidos los ciudadanos del Estado" (art. 22); que "las juntas electorales de partido se celebrarán en su respectiva Cabecera, y serán presididas por los prefectos de los partidos de su residencia y en los demás por los subprefectos" (art. 28); que "el Gobernador presidirá la Junta General en el lugar designado para la residencia de los Supremos Poderes del Estado" (art. 29); que "todas las juntas electorales se celebrarán en público: no habrá guardia en ellas, no podrá presentarse con armas ninguno de los concurrentes" (art. 30), y que "nadie puede por motivo alguno excusarse del cargo de elector" (art. 35).

El Congreso autorizó al Gobierno a construir las cárceles de: Cuautitlán, Tlalnepantla, Zacualtipán y Zumpango (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 91 del 15 de febrero de 1827: 139).

El 16 de febrero el Congreso dispuso que "la contribución directa aplicada ya a los ayuntamientos, se invertirá de preferencia en el establecimiento, mejora y arreglo de escuelas", que "el sobrante, si lo hubiere, se aplicará a las demás necesidades de los pueblos, con aprobación del Prefecto respectivo", y que "el Gobierno arreglará el modo de recaudar esta contribución" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 92 del 16 de febrero de 1827: 139).

El 20 de febrero el Congreso dispuso que se habilitaran dos de sus miembros para que funcionasen de secretarios, toda vez que sus titulares habían ido a prestar juramento al Supremo Tribunal de la Guerra y Marina. Para tal efecto, fueron

[104] Esta Ley consta de apartados referentes a: las bases y reglas generales, a las juntas municipales, a las juntas de partido y a la Junta General del Estado.

designados “los individuos que han funcionado últimamente de secretarios” (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 20 de febrero de 1827: 546).

El 21 de febrero el Congreso determinó (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 93 del 21 de febrero de 1827: 139) que “la tarde del 23 del presente mes tendrán la primera Junta Preparatoria los diputados nombrados para componer el Primer Congreso Constitucional, reuniéndose a efecto en el Salón de Sesiones de esta Ciudad” (art. 1); que “el Congreso Constituyente elegirá antes un Presidente y dos secretarios, de entre los individuos que lo componen, para que asistan a la Junta hasta que los nuevamente electos elijan de su seno un Presidente y dos secretarios” (art. 2); que “luego que éstos tomen sus asientos, se retirarán los nombrados por el Congreso Constituyente, acompañados hasta la puerta del Salón de cuatro individuos de la Junta y ésta se declarará instalada” (art. 3), y “acto continuo se procederá a nombrar dos comisiones, cada una de tres individuos, que examinen las actas de elección y las credenciales que les fueren presentadas, dividiéndose éstas en las dos comisiones, con la prevención de no entregarse a ninguna de ellas las credenciales de los individuos que las componen” (art. 4).

Se determinó que “a los cuatro días de esta Junta se tendrá la Segunda Preparatoria por la tarde, en la que se tomarán en consideración los informes de las comisiones sobre cada una de las credenciales sucesivamente, concurriendo todos los miembros de la Junta hasta el acto de declararse, que la proposición con que concluye el dictamen se halla en estado de votar” (art. 5); que “el día primero de marzo por la tarde, reunidos los nuevos diputados en el Salón del Congreso, prestarán el juramento de guardar la Constitución del Estado, la Federal y el Acta Constitutiva, y de cumplir fielmente con las obligaciones de su encargo; procederán después a nombrar Presidente, Vicepresidente y secretarios, en los términos prevenidos en el Reglamento Interior, y tomando sus asientos los elegidos anunciará el Presidente, que el Congreso Constitucional queda instalado” (art. 8); que “enseguida se nombrará una Comisión, compuesta de uno de los secretarios y de cinco diputados, que pase a participar al Gobernador la instalación del nuevo Congreso, y a su vuelta se levantará la sesión” (art. 9); que “el día siguiente por la mañana se reunirán los diputados por la mañana para el solo acto de apertura de las sesiones, al que asistirá el Gobernador acompañado del Consejo” (art. 9), y que “luego que se haya retirado el Gobernador , el Presidente anunciará la apertura de las sesiones diciendo en voz alta: el Congreso Constitucional del Estado de México abre sus sesiones hoy 2 de marzo de 1827” (art. 10).

El 22 de febrero el Congreso determinó que en el Pueblo de Zinguilucan del Distrito de Tulancingo se estableciera un Ayuntamiento (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 94 del 22 de febrero de 1827: 141).

El 24 de febrero el Congreso otorgó por primera vez una carta de ciudadano del Estado, que fue a favor del Señor Cirilo Gómez Anaya (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 24 de febrero de 1827: 564).

El 25 de febrero el Gobernador Melchor Múzquiz, al prestar el juramento de la Constitución en el Congreso, señaló que "el Gobierno que acaba de presenciar la obligación solemne con que los Poderes del Estado han sellado el cumplimiento de la Ley Fundamental, no puede menos de expresar la satisfacción con que ha visto este acto, que va a fijar la suerte del mismo, incluyendo en la común de la República. Nada más justo ni conveniente que de un modo fijo y duradero; y nada más conforme a los deseos del Gobierno que ver sus atribuciones señaladas con precisión y claridad firme: firme en sus principios de dar a cada uno lo que la ley le concede, se complace de haber de ante mano respetado y concedido a los ciudadanos todo aquello que la Ley Orgánica había prevenido" (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 25 de febrero de 1827: 574).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado José María Luis Mora, señaló que "no puede lisonjearse este Congreso de que la Constitución que ha dictado sea la obra más perfecta que pueda haber salido de manos de los hombres. Sus obras por su naturaleza misma están llenas de defectos, y particularmente las de esta clase que sólo se pueden corregir de algún modo con el tiempo y la experiencia. Empero, tiene la mayor satisfacción de haber hecho cuanto está de su parte por fijar los destinos del Estado de una manera digna de él; y aunque no haya por tanto, conseguido su objeto, se lisonjea no obstante, de haber puesto todos los medios que a este fin ha creído más adecuados" (Poder Legislativo IX, 1827. Acta del 25 de febrero de 1827: 575).

El 27 de febrero el Congreso dispuso que "el sueldo de cada uno de los secretarios del Supremo Tribunal de Justicia será de dos mil pesos anuales, el de los oficiales primeros de mil, el de los oficiales segundos de seiscientos sesenta y seis, el de los escribientes de quinientos y lo mismo el de los porteros" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 95 del 27 de febrero de 1827: 141).

El 28 de febrero se presentó el primer antecedente de una empresa paraestatal en la Entidad, ya que en ese día el Congreso al expedir su último decreto, autorizó al Gobernador a establecer una fábrica de puros y cigarros en la Ciudad de Texcoco con cargo al Erario Público (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 96 del 28 de febrero de 1827: 142).

El Congreso Constituyente (1824-1827) que operó del 2 de marzo de 1824 al 1 de marzo de 1827 se integró con 21 diputados nombrados por electores secundarios en junta de provincia. Expidió 96 decretos, su Reglamento Interior y la Constitución Política del Estado entre el 2 de marzo de 1824 y el 28 de febrero de 1827 (Poder Legislativo I, 2001. Índice de decretos: 195-202).

Capítulo 2
Primer Congreso Constitucional (1827-1829)

El Primer Congreso Constitucional (1827-1829) que operó del 2 de marzo de 1827 al 1 de marzo de 1829 lo integraron 21 diputados nombrados por electores secundarios en la Junta General del Estado. Los diputados propietarios y suplente en funciones eran: Román García, José María Velázquez de León, Luciano Castorena, Agustín Vallarta, José María Franco, Vicente Sánchez Barquera, Pedro de la Portilla, Epigmenio de la Piedra, Rafael Anaya, Antonio del Río, Agustín Escudero, Félix Lope de Vergara, Antonio María Cardona, Mariano Campos, José María Ruano Calvo, José Rodrigo Castelazo (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 23 de febrero de 1827: 12), Manuel Rodríguez de la Madrid (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 1 de marzo de 1827: 36), José María Cardoso, José Antonio Magos (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 27 de marzo de 1827: 194), José Sierra (Suplente) (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 20 de abril de 1827: 293),[105] José Ignacio González Caraalmuro (Suplente) (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 1 de mayo de 1827: 413)[106] y Pablo Galeana (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 19 de mayo de 1827: 589).

El 23 de febrero de 1827 se efectuó la Primera Junta de Instalación del Primer Congreso Constitucional bajo la conducción de una Comisión nombrada por el Congreso Constituyente[107] y la asistencia catorce diputados electos[108] (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 23 de febrero de 1827: 2).

El Congreso reunido en Junta integró la Mesa Directiva de sus juntas de instalación, presidida por el Diputado Electo Pedro de la Portilla. Nombró como como secretarios a los diputados electos: José María Ruano Campo y José María Franco (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 23 de febrero de 1827: 3).

El Congreso reunido en Junta integró las comisiones de poderes que se encargaría de la revisión de las cartas credenciales de los diputados presididas por los diputados electos: Pedro Escudero y José María Velázquez de León (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 23 de febrero de 1827: 3).

---

[105] Era suplente del Diputado Vicente Sánchez Barquera.
[106] En su calidad de Diputado Suplente ocupó la curul que dejó vacante el Diputado Manuel Rodríguez de la Madrid, el cual fue exonerado de su cargo por el Congreso el 16 de marzo de 1827 (Poder Legislativo I, 1828. Proposición del 16 de marzo de 1827: 141).
[107] Dicha Comisión la integraban los diputados: José de Jáuregui, José Nicolás de Oláez y José Calixto Vidal.
[108] En el acta no se señala el nombre de los diputados electos que asistieron a dicha junta.

El 27 de febrero en la Segunda Junta Preparatoria para la Instalación del Congreso se aprobaron las cartas credenciales de los diputados: Román García, José María Velázquez de León, Luciano Castorena, Agustín Vallarta, José María Franco, Vicente Sánchez Barquera, Pedro de la Portilla, Epigmenio de la Piedra, Rafael Anaya, Antonio del Río, Agustín Escudero, Félix Lope de Vergara, Antonio María Cardona, Mariano Campos, José María Ruano Campo y José Rodrigo Castelazo (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 27 de febrero de 1827: 12).

El 1 de marzo el Congreso reunido en Junta aprobó la credencial del Diputado Manuel Rodríguez de la Madrid (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 1 de marzo de 1827: 36).

El Congreso reunido en Junta prestó juramento a los diputados: Román García, José María Velázquez de León, Luciano Castorena, Agustín Vallarta, José María Franco, Vicente Sánchez Barquera, Pedro de la Portilla, Epigmenio de la Piedra, Rafael Anaya, Antonio del Río, Agustín Escudero, Félix Lope de Vergara, Antonio María Cardona, Mariano Campos, José María Ruano Campo, José Rodrigo Castelazo y Manuel Rodríguez de la Madrid (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 1 de marzo de 1827: 36).

El Congreso reunido en Junta integró la Mesa Directiva del primer mes de su Primer Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado Electo José María Velázquez de León y la Vicepresidencia del Diputado Electo Pedro de la Portilla. Nombró como secretarios propietarios a los diputados electos: Román García y José María Franco y como Secretario Suplente al Diputado Electo Vicente Sánchez Barquera(Poder Legislativo I, 1828. Acta del 1 de marzo de 1827: 36).

El Presidente del Congreso, Diputado Pedro de la Portilla, efectuó la declaratoria de instalación del Primer Congreso Constitucional (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 1 de marzo de 1827: 36).

El 2 de marzo el Gobernador Melchor Múzquiz, al acudir a la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, indicó que es necesario “que el legislador sisteme (sic) por una parte la educación de la juventud, y que por otra dé completa organización al Ramo Judicial, y proceda a la formación de códigos” y que “estando creído el mismo Gobierno de que para cumplir su responsabilidad en todo tiempo, y satisfacer la obligación que tiene de procurar el aumento de las rentas, debe no perdonar ocasión de manifestar los defectos que afectan a una ley, en un concepto

perjudicial" (Acta del 2 de marzo de 1827. BJMLM. Colección de Actas: vol. 12, foja 47).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado José María Velázquez de León, señaló que "el Estado Libre, Independiente y Soberano de México ve hoy instalado su Primer Congreso Constitucional", que "desde este día comenzará su marcha conforme al Código que le ha dictado el Constituyente", que "el pueblo mexicano agradece este don a los dignos representantes a quienes confió tamaño empresa", y que "el dilatado tiempo de tres años en que sus luces, su meditación y discusiones se han empleado en la formación de aquel Código, hace esperar que sea el compendio más sabio de política" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 2 de marzo de 1827: 42).

El 3 de marzo el Congreso integró sus comisiones permanentes. La de Puntos Constitucionales con los diputados: Román García, Luciano Castorena y Vicente Sánchez Barquera; la de Justicia, Negocios Eclesiásticos y Legislación con los diputados: Epigmenio de la Piedra, Agustín Escudero, Agustín Vallarta y Pedro de la Portilla; la de Gobernación con los diputados: Félix Lope de Vergara, Agustín Escudero, Román García y Vallarta; la de Hacienda con los diputados: José María Ruano Calvo, José María Franco, Antonio del Río y José Rodrigo Castelazo; la de Instrucción Pública con los diputados: Rafael Anaya, Manuel Rodríguez de la Madrid y Antonio María Cardona; la de Comercio, Agricultura, Minería e Industria con los diputados: José Rodrigo Castelazo, Antonio del Río, Pedro de la Portilla y Mariano Campos; la de Milicias con los diputados: Manuel Rodríguez de la Madrid, Luciano Cardona y Vicente Sánchez Barquera; la de Policía y Peticiones con los diputados: Félix Lope de Vergara, Rafael Anaya y Mariano Campos; la de Corrección de Estilo y Poderes con los diputados: Castorena, Escudero, Franco y Barquera; y la de Policía Interior con el Presidente del Congreso y sus secretarios (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 3 de marzo de 1827: 44).

El Congreso acordó dar "parte a los Poderes Generales, y a las legislaturas de los demás estados de haberse ya instalado este Congreso" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 3 de marzo de 1827: 44).

El Congreso ante el encarcelamiento de un diputado electo propuso que se "oficiase al Gobierno para que tome las providencias más eficaces a efecto de que el Diputado Ciudadano José Sierra comparezca a desempeñar su encargo, previniéndosele de

que si se opusiere por alguna autoridad, inconveniente que lo estorbe, la requiera para que de toda preferencia instruya con justificación de las causas" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 3 de marzo de 1827: 46).

El 5 de marzo el Congreso dispuso que "conforme al decreto 93 del Congreso Constituyente, artículo 12, se llamen a los señores diputados que falten" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 5 de marzo de 1827: 52).

El Congreso pidió que "al participar a los Supremos Poderes de la Federación la instalación de este Congreso, se le den particularidades gracias por haber salvado al Estado de la anarquía que lo amenazaba si se lleva a efecto el decreto de la nulidad de las elecciones (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 5 de marzo de 1827: 53).

El Congreso determinó que "la Comisión de Policía tomara las medidas convenientes, a fin de que en el Correo de la Federación se inserten las actas de este Honorable Congreso" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 5 de marzo de 1827: 56).

El Congreso dispuso que "el Gobierno mande con su debido informe a esta Honorable Asamblea las ordenanzas municipales de los pueblos, que ya estén formadas", y "que haga se concluyan lo más pronto posible las de las municipalidades que no las hayan formado, tomando al efecto las medidas que estén en sus facultades y fueran necesarias" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 5 de marzo de 1827: 58).

El 6 de marzo el Congreso acordó que "se prohíba entrar con armas a la sesión, aún al individuo más condecorado" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 6 de marzo de 1827: 65).

"Se presentó en el Salón el Sr. (Pedro) Verdugo, individuo del Congreso, Comisionado por el Gobierno para leer la Memoria, que de facto leyó, retirándose luego que concluyó su lectura" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 7 de marzo de 1827: 70).

En la Memoria Melchor Múzquiz indicó que las rentas se encontraban en estado decadente "por la Ley que destinó a la Federación los rendimientos del que hoy se llama Distrito Federal", que el Gobierno General agregó dos o tres pueblos a dicho Distrito, que no se había podido determinar el número de la población exacta del Estado y que era necesario que el Congreso le aprobara una iniciativa que presentó, a efecto de que se "destinase la contribución directa de los gastos precisos de los

ayuntamientos […], pues las municipalidades podrán contar con lo necesario para el fomento de la educación pública, para la mejora de la Policía, y para el pago de sus más precisos dependientes" (Gobierno del Estado de México, Memoria, 1827: 2).

La Memoria incluyó un "estado que manifiesta los productos de los ramos que hay en las tesorerías foráneas (ubicadas en Temascaltepec, Pachuca y Zimapán) y los gastos de administración, el Presupuesto de Hacienda", "una noticia por mayor de los trabajos que ha tenido el Supremo Tribunal de Justicia", la razón de conventos y religiosos que existían en el Estado y el Presupuesto del Poder Legislativo, en el que se fijaron 3,000 pesos anuales para cada uno de los 21 diputados y 365 para el Portero, en tanto que en la Secretaría se establecieron las percepciones del Primer Oficial en 1,500, las del Segundo Oficial y las del Redactor en 1,200, las del Archivero en 1,000, las del Escribiente en 750, las de cuatro escribientes titulares a 500 cada uno, las de dos escribientes supernumerarios a 500 y las de un Portero a 264, fijándose 800 para gastos de oficina y 6,000 para las impresiones.

El Congreso dispuso que se nombrara "una comisión especial de cinco individuos, que haga el análisis de la Memoria que se acaba de leer, y de la anterior a que se hace referencia en ésta". Dicha Comisión se integró con los diputados: Epigmenio de la Piedra, Luciano Castorena, José María Franco, Agustín Escudero y José Rodríguez Castelazo (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 7 de marzo de 1827: 72).

El 8 de marzo el Congreso dispuso que la Memoria de Gobierno fuera impresa, "tanto para la instrucción de los señores diputados, como para la de los demás individuos del Estado, que querrán imponerse en la actual situación de los ramos de la administración pública" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 8 de marzo de 1827: 85).

El Congreso al aceptar la renuncia del Gobernador Constitucional Melchor Múzquiz designó en su lugar al Ciudadano Lorenzo de Zavala (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 1 del 8 de marzo de 1827: 1), mediante el voto nominal de "los señores García, Franco, Portilla, del Río, Escudero, Vallarta, Campos, Cardona, Barquera, Piedras y Presidente. Los señores Ruano, Castelazo, Anaya, Castorena y de Lope Vergara, sufragaron por el Ciudadano General Vicente Guerrero" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 8 de marzo de 1827: 92).

El 9 de marzo el Congreso dispuso que "se abonarán a cada uno de los señores diputados, en clase de viático, cuatro pesos por cada legua de las que haya del lugar

de su residencia a la de los Supremos Poderes del Estado" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 2 del 9 de marzo de 1827: 1).

El Congreso después de otorgarle un permiso al Gobernador Constitucional Melchor Múzquiz para trasladarse al Distrito Federal, determinó que debía permanecer como Titular del Poder Ejecutivo un Consejero de Estado, de acuerdo con lo prevenido en la Constitución Política (Acta del 9 de marzo de 1827. BJMLM. Colección de Actas: vol. 12, foja 99).[109]

El 10 de marzo el Congreso dispuso que "la Secretaría oficiará al nuevo Gobernador, avisándole que el lunes 20 del corriente, a las once de la mañana, se presentará sin ningún acompañamiento, en el Salón de este Congreso a prestar el juramento que le prescribe el artículo 30 de la Constitución del Estado"; que "asimismo, oficiará al Consejero más antiguo, actualmente Encargado del Gobierno, para que con los demás consejeros se anticipen a tomar asiento en el Salón para esperar en él al Gobernador"; que una Comisión, que nombrará el Presidente, de tres diputados y el Secretario más antiguo saldrá a recibirle a la puerta del Salón y lo conducirá a la Mesa hacia el lado derecho del Presidente, donde ya prevenidos los útiles necesarios, prestará el juramento"; que "concluido este acto, subirán el Presidente, el Gobernador y secretarios a ocupar cada uno las sillas que les correspondan"; que "si el Gobernador dirigiere la palabra al Congreso, su Presidente le contestará en términos breves y generales", y que "una Comisión de cuatro individuos, nombrados previamente, y el Primer Secretario, saldrán a acompañarlo hasta la puerta del Salón, y de ella los dos primeros nombrados con el mismo Secretario, continuarán acompañándole hasta la Iglesia Parroquial", en donde "se recibirá al Gobernador con la fórmula y solemnidades ya establecidas, entonándose un solemne Te Deum, a que se contraerá este acto religioso" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 3 del 10 de marzo de 1827: 1).

El Consejero Mariano Esteva asumió la Titularidad del Poder Ejecutivo, tal como se constató en el Bando por el que publicó el decreto número 3 del Congreso (Decreto 3 del 10 de marzo de 1827 BJMLM: vol. 33, exp. 97).

El 12 de marzo Lorenzo de Zavala al acudir al Congreso a prestar el juramento de ley como Gobernador del Estado, les indicó a los diputados que "el ejemplo de vuestras virtudes, y la senda que enseñan vuestras luces y vuestro patriotismo, serán mucha

[109] De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147 de la Constitución Política del Estado, la falta del Gobernador debió ser cubierta por el Teniente Gobernador Joaquín Lebrija.

parte en los aciertos de mi Gobierno; la ley será mi única regla, y el beneficio de los pueblos el único objeto de mis votos. Todos observan nuestra marcha y tienen puestos los ojos sobre nuestra conducta: muchas necesidades tiene el Estado, y muchos elementos de riqueza; pero nuestra Patria perece de hambre en medio de la opulencia. De vuestras manos depende en gran parte el bienestar de un millón de habitantes, y el Gobernador no omitirá ningún paso que pueda servir para cooperar a tan interesantes tareas" (Acta del 12 de marzo de 1827. BJMLM. Colección de Actas: vol. 12, foja 117).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado José María Velázquez de León, indicó que "esta Honorable Asamblea ha oído con agrado el discurso que acaba de pronunciar el Primer Gobernador Constitucional del Estado Libre de México", que "el Poder Ejecutivo identificado en un todo con los sentimientos que animan al Legislativo y Judicial, comienza desde hoy a manifestar al pueblo mexicano la senda que lo conducirá a la inmortalidad, si como hasta aquí, se consagra al fiel y escrupuloso cumplimiento de la Ley" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 12 de marzo de 1827: 114).

El 13 de marzo el Congreso aceptó la renuncia como consejeros del Estado de los señores: Mariano Esteva, Pedro Verdugo, José María Puchet y Manuel Rosales (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 13 de marzo de 1827: 122).

El 14 de marzo el Congreso nombró como consejeros del Estado a los señores: Juan Wenceslao Barquera, José Nicolás de Oláez, José Ramírez y José Zárate (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 4 del 14 de marzo de 1827: 2).

El Congreso les concedió carta de ciudadanía del Estado a los señores: Juan Wenceslao de la Barquera y a José Nicolás de Oláez (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 14 de marzo de 1827: 134).

El 16 de marzo el Congreso exoneró del cargo de Diputado al Ciudadano Manuel Rodríguez de la Madrid, ante el deterioro de su salud, por lo que acordó que el Gobernador llamara al Primer Diputado Suplente, para que llenara las funciones de su encargo (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 16 de marzo de 1827: 141).

El 17 de marzo el Congreso dispuso que "el Gobierno dictara las providencias convenientes para que los tesoreros de las juntas llamadas patrióticas, establecidas

por el Gobierno Español en las cabeceras de partido, presenten en el perentorio término de un mes las cuentas justificadas de los caudales que entraron en su poder, exhibiendo en el acto el alcance que en su contra resultare" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 5 del 17 de marzo de 1827: 3).

El 22 de marzo el Congreso les prohibió a los consejeros del Estado ejercer oficios de Abogado o Procurador en los tribunales (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 6 del 22 de marzo de 1827: 3).

El Congreso General determinó que en las memorias que cada año que presenten los Secretarios de Despacho se "propondrán todas las leyes que en concepto del Gobierno deban dictaminarse, tanto para corregir los males que hayan notado en su respectivo ramo, como para promover las mejoras que el mismo crea convenientes" (Decreto del 22 de marzo de 1827. BJMLM: vol. 34, exp. 138).

El 24 de marzo el Congreso aceptó la renuncia de José Nicolás de Oláez como Consejero del Estado (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 24 de marzo de 1827: 177).

El 26 de marzo el Congreso designó a los 24 individuos que debían juzgar a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 216 de la Constitución Política.[110] Dichos miembros eran: José María Jáuregui, José Nicolás de Oláez, Juan Wenceslao Barquera, Antonio Barquera, José María Esquivel, Mariano Buenabad, José Ignacio Sotomayor, Manuel Martínez de Liévano, Mariano de Jesús Campos, Francisco Pérez Palacios, Juan Manuel Revilla, Juan Ignacio Dávila, Miguel Arriaga, José Ávila Sandoval, Manuel Escobar, Vicente Urueta, Andrés Millán, Félix Guevara, Manuel Ortiz, Mariano Herrera, Ignacio Sarmina, José María Saavedra y Rafael de la Vara; designándose en la Primera Sala del Tribunal a Félix Guevara, José María Jáuregui y Manuel Martínez de Liévano y Vicente Urueta como Fiscal (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 8 del 26 de marzo de 1827: 4).

El 27 de marzo el Congreso inició la secularización de los bienes eclesiásticos al declarar "pertenecientes al Estado de México, todos los bienes que poseen en el mismo los hospicios destinados para los Misioneros Filipinos", por lo que "los que

[110] Dicho artículo indica que: "para juzgar a los individuos del Supremo Tribunal elegirá el Congreso en el primer mes de sesiones de marzo de cada bienio veinte y cuatro individuos que no sean del Congreso. De éstos sacarán por suerte un Fiscal y un número de jueces igual a aquel de que conste la Primera Sala del Tribunal y cuando fuere necesario procederá el Congreso y en su receso la Diputación Permanente, a sacar del mismo modo los jueces de las otras salas".

adquirieran algunos en fraude de esta denominación, los perderán irremisiblemente, y las autoridades a que toque, velarán exactamente su cumplimiento" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 7 del 27 de marzo de 1827: 3).

El Congreso aprobó los nombramientos como diputados de: José María Cardoso y José Antonio Magos, los cuales posteriormente rindieron su protesta de ley (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 27 de marzo de 1827: 194).

El Congreso determinó que "los Supremos Poderes se deben trasladar provisionalmente al punto que convenga cuanto antes, luego que el Congreso lo designe"; que "el Gobierno informará con la brevedad posible sobre los lugares del Estado que se hallen con la aptitud y elementos necesarios para trasladarse los Supremos Poderes, consultando a la comodidad de la traslación, economía de los gastos y seguridad de los intereses del Estado", y que "de ninguna manera se entiende que por este decreto se reforma, se revoca, ni se invalida la resolución del artículo 5º de la Constitución", que indica a la Ciudad de Texcoco como la Capital del Estado (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 27 de marzo de 1827: 204).

El 28 de marzo el Congreso le concedió la carta de ciudadanía del Estado al Señor Ginés Quintanilla (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 28 de marzo de 1827: 204).

El 29 de marzo el Congreso aprobó hacer "una iniciativa al Congreso General para que, se sirva declarar igual libertad de derechos al chile, frijol y maíz, en el Distrito y territorios de la Federación" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 29 de marzo de 1827: 220).

El 30 de marzo el Congreso declaró libres de todo derecho nacional una serie de artículos de viento como eran: los aventadores, la arenilla, los ayates, las habas, el carbón, la leña, el maíz, los lazos, las mantas, los hilos y las frutas (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 9 del 30 de marzo de 1827: 4).

El Congreso dispuso que "el Gobernador cesara de publicar por sí mismo los bandos"; que "el Gobernador usará de firma entera en la correspondencia con el Supremo Gobierno de la Federación, con el Congreso de este Estado y con los gobiernos de los

demás estados", "y con el Supremo Tribunal de Justicia";[111] que "pondrá igualmente firma entera en todas las leyes y decretos que circulare a los prefectos"; que "en la correspondencia de las autoridades de inferior rango del Estado, usará la media firma", y que "en los proveídos y decretos de trámite, usará de simple rúbrica" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 30 de marzo de 1827: 225).

El 31 de marzo el Congreso determinó que se agregara al Partido de Tenancingo al Pueblo de San Simón Abajo, perteneciente al Partido de Tenango (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 10 del 31 de marzo de 1827: 6).

El 2 de abril el Congreso dispuso "que los prefectos interinos de los distritos en que no haya propietarios, percibirán los tres mil pesos de sueldo señalados en la ley", y que "tendrán dos mil pesos para sí y todos los gastos de los prefectos interinos que nombre el Gobierno por enfermedad, licencia o suspensión de los propietarios, y a éstos se les abonarán los mil restantes" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 11 del 2 de abril de 1827: 6).

El Congreso integró su Mesa Directiva del segundo mes de su Primer Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado Epigmenio de la Piedra y la Vicepresidencia del Diputado Mariano Campos. Nombró para todo el periodo ordinario de sesiones como Secretario Propietario al Diputado Antonio María Cardona y como Secretario Suplente al diputado José Rodrigo Castelazo (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 2 de abril de 1827: 234).

El Congreso tomó conocimiento del informe que presentó el Diputado José María Franco sobre los trabajos que había realizado la Secretaría del Congreso en el mes de marzo (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 2 de abril de 1827: 234).

El Congreso dispuso que "se diga al Gobierno que todos los ejemplares que sobren de la Constitución del Estado, después de circulados los correspondientes a quienes toque, se pasen a la Tesorería General del Estado para su venta, los que se darán al costo que halla tenido la impresión" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 2 de abril de 1827: 241).

[111] Esta adición se efectuó en la sesión del 6 de abril (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 6 de abril de 1827: 269).

El Congreso determinó que “el actual Gobernador en el tiempo que resta hasta el 15 de octubre de este año, podrá disponer para objetos de utilidad común, de 2,500.00 pesos, además de la cantidad que con relación a los mismos objetos dejó existentes su antecesor” (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 2 de abril de 1827: 242).

El Congreso determinó que “el Gobierno remitirá a este Congreso para su examen y calificación, la cuenta de los gastos hechos por el Ciudadano Coronel Melchor Múzquiz, desde el 16 de octubre último, hasta su separación del mismo Gobierno” (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 2 de abril de 1827: 242).

El 5 de abril el Congreso facultó “al Gobierno para que de los fondos del Estado invierta hasta la cantidad de cuatro mil pesos en la conclusión del camino que lleva de esta Ciudad (Texcoco) a Veracruz” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 12 del 5 de abril de 1827: 7).

El Congreso al autorizar la providencia que había dictado el Gobierno para que “se verificase el cobro y entero en la Tesorería General del Estado de las cantidades remitidas en libranzas por las administraciones foráneas”, facultó “al Gobierno para que provisionalmente arregle el mismo cobro y entero, dando cuenta al Congreso para su aprobación,” y que “el Gobierno al hacer el anterior arreglo, hará la debida distinción de aquellos administradores que de su cuenta y riesgo deben verificar sus enteros en la Tesorería del Estado” (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 5 de abril de 1827: 260).

El Congreso al exonerar “del cargo de Diputado (Suplente) de este Congreso al Ciudadano Martín Rodríguez García", dispuso que el Gobierno cuidara de llamar al Tercer Suplente nombrado, para que venga a llenar los deberes de su comisión” (Acta de la sesión secreta del 5 de abril de 1827. BJMLM: Colección de Actas).[112]

El 6 de abril el Congreso dispuso que “el tres por cien que se cobra de derechos de consumo a los efectos extranjeros se adeudará solo por una vez en el Estado” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 13 del 6 de abril de 1827: 7).

El Congreso nombró una comisión especial de su seno para tratar lo referente a la residencia provisional de los Supremos Poderes del Estado. Dicha Comisión se integró

[112] En el acta se indica que no se llamó al Segundo Diputado Suplente, por estar imposibilitado.

con los diputados: José María Ruano, José María Velázquez de León y Félix Lope de Vergara (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 6 de abril de 1827: 265).

El 7 de abril el Congreso autorizó “al Gobierno para que pueda gastar, si lo juzgare necesario, hasta la cantidad de dos mil pesos en la seguridad del Tesoro del Estado” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 14 del 7 de abril de 1827: 7).

El Señor Mariano Guerra Manzanares acudió al Congreso a rendir su protesta de ley como Consejero del Estado (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 7 de abril de 1827: 271).

El Congreso dispuso que quedaban “libres de los derechos de alcabala en los minerales del Estado, los artículos que consume la minería en el laboratorio de las minas y beneficio de metales” (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 7 de abril de 1827: 275).

El 18 de abril el Congreso dispuso que “el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, conocerá de todos los negocios de su territorio que estén pendientes de cualquier recurso ordinario o extraordinario interpuesto para la Corte de España” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 15 del 18 de abril de 1827: 8).

El Congreso concedió “a la Municipalidad de Ixmiquilpan el arbitrio que ha propuesto de la pensión en los puestos de su mercado, con la precisa calidad de que él sea el único de plaza que se cobre” (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 18 de abril de 1827: 255).

El 19 de abril el Congreso alentó la participación de especialistas en las grandes decisiones, cuando autorizó “al Gobierno para que invite a los economistas de la República Mexicana para la formación de un Plan de Hacienda, adaptable a las circunstancias y Constitución del Estado, que deberán presentar al Congreso”, el cual “con vista de los proyectos que se presenten, nombrará una Comisión de su seno o fuera de él para la calificación”. Se determinó que “el autor del proyecto que se aprobare, será premiado con la cantidad de quinientos pesos; disponiendo el Gobierno que de los fondos del Estado se den doscientos pesos, y recogiendo de los individuos de este Congreso, que así lo han ofrecido, lo restante para el completo de la cantidad asignada” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 16 del 19 de abril de 1827: 8).

El Congreso dispuso que “redúzcase el Ayuntamiento de Tecpan a su vecindario y al de Atoyac” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 17 del 19 de abril de 1827: 8).

El Congreso tomó conocimiento de las exposiciones de los ayuntamientos de: Metepec, Calimaya, Tenancingo, Amanalco, la Asunción y San José Malacatepec, en donde pedían que se trasladen los Supremos Poderes a la Ciudad de Toluca (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 19 de abril de 1827: 288).

El Redactor del Congreso rindió su protesta de ley ante el Pleno, con el propósito de que participara en las sesiones secretas de este Órgano (Acta de la sesión secreta del 19 de abril de 1827. BJMLM: Colección de Actas).

El Congreso aprobó el nombramiento del Diputado José Sierra, el cual estaba pendiente de prestar su juramento (Acta de la sesión secreta del 19 de abril de 1827. BJMLM: Colección de Actas).

El 20 de abril el Congreso dispuso que “los tribunales del Estado actuarán por ahora en todas las causas y gestiones de los ayuntamientos del mismo, como lo han hecho hasta ahora aquí en las llamadas de oficios” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 18 del 20 de abril de 1827: 9).

El Señor José Sierra rindió su protesta de ley como Diputado del Congreso (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 20 de abril de 1827: 293).

El 21 de abril el Congreso General determinó que “se permite la introducción del Aguardiente Ginebra con calidad de acreditar su legalidad con factura de la fábrica de su procedencia” (Decreto del 21 de abril de 1827. BJMLM: vol. 35, exp. 216).

El 23 de abril el Congreso determinó que “las autoridades a quienes corresponda, cuidarán que ningún extranjero, entre los cuales deben contarse los españoles introducidos en la República después de jurada la independencia de México, y los capitulados que subrepticiamente se quedaron ejerzan acto alguno de ciudadanía” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 20 del 23 de abril de 1827: 10).

El Congreso tomó conocimiento de las exposiciones de los ayuntamientos de Temascaltepec del Valle y Tejupilco, en donde pedían que se trasladasen los

Supremos Poderes a la Ciudad de Toluca (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 23 de abril de 1827: 317).

El 24 de abril el Congreso aprobó las disposiciones que presentó el Gobierno para dar cumplimiento a lo expuesto en su decreto 7 del 22 de marzo referente a la adjudicación de los hospicios destinados para las misiones de las Filipinas, en las cuales se indicaba que el Gobierno mandaría "formar por los respectivos prefectos, inventario exacto de todos los bienes muebles, sembraduras y semovientes"; que "se mandarán entregar bajo una fianza de seis mil pesos, a las personas que designe el Gobierno", y que se asignarán "a estas personas el cinco por ciento correspondiente a las cantidades que respectivamente entren en su poder" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 24 de abril de 1827: 326).

El 25 de abril el Congreso autorizó al Gobierno a "catear las casas donde se sospechara con fundamento que hay armas ocultas", lo que implicaba que "ningún español o americano, capitulado, ni los dependientes de unos y otros residentes en el Estado, podrán portar armas de ninguna clase sin conocimiento del Gobernador, quien reglamentará el modo de dar las licencias, expresando en éstas el número y clase de aquellas que a cada individuo se conceda" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 19 del 25 de abril de 1827: 9).

El Congreso General determinó que "se declara libre la explotación y venta del azufre y salitre" (Decreto del 25 de abril de 1827. BJMLM: vol. 35, exp. 214).

El 26 de abril el Congreso autorizó al Pueblo de Huehuetla de la Prefectura de Tulancingo a constituir un Ayuntamiento (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 21 del 26 de abril de 1827: 10).

El Congreso declaró "provisionales todos los empleos que el Congreso y el Gobierno del Estado tenían dados, hasta el día que se sancionó la Constitución del mismo" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 22 del 26 de abril de 1827: 10).

El Congreso dispuso que "los administradores de los bienes que pertenecían a las misiones de Filipinas, disfrutarán del cinco por ciento del producto líquido de los frutos que ya estén cosechados o próximos a cosecharse, y la cuarta parte de la utilidad líquida de los productos que resulten en el tiempo de su manejo" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 25 del 26 de abril de 1827: 11).

El Congreso autorizó al Gobernador Lorenzo de Zavala una licencia por un día para pasar a la Ciudad de México, con el propósito de atender asuntos públicos (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 26 de abril de 1827: 344).[113]

El Congreso recibió la protesta de ley de Juan Wenceslao Barquera como Consejero del Estado (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 26 de abril de 1827: 344).

El 27 de abril el Congreso autorizó al Gobierno "para convenir con el de la Federación, sobre el arreglo del peaje del Camino de Toluca" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 24 del 27 de abril de 1827: 11).

El Congreso excitó "al Gobierno para que exija de quien corresponda el exacto cumplimiento de la Ley que abolió la extinción de castas" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 27 de abril de 1827: 344).

El Congreso dispuso que "el Gobierno pedirá al Supremo Tribunal de Justicia forme la planta de jueces de 2ª instancia, que con arreglo a la Constitución deben situarse en los distritos; del número y clase de agentes subalternos, y del presupuesto de sueldos que unos y otros deben disfrutar con los demás gastos que deben erogarse, y verificado esto lo remita todo al Congreso para que en su vista resuelva lo conveniente", "entretanto continuará el Tribunal de la Audiencia ejerciendo sus atribuciones" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 27 de abril de 1827: 362).

El 28 de abril el Congreso instruyó al Gobierno para que "formara a la mayor brevedad el presupuesto que sea necesario, para la formación de la estadística y de un plano topográfico del Estado" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 26 del 28 de abril de 1827: 11).

El Congreso nombró como Teniente Gobernador a Manuel Reyes Veramendi (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 27 del 28 de abril de 1827: 12).

El Congreso prohibió "absolutamente en todos los puntos del Estado, las diversiones de toros, bajo cualquiera pretexto o denominación que sea" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 28 del 28 de abril de 1827: 12).

[113] De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147 de la Constitución Política del Estado, la falta del Gobernador debió ser cubierta por el Teniente Gobernador Francisco Manuel Sánchez de Tagle.

El Congreso inició el análisis del dictamen para "variar provisionalmente la residencia de los Poderes, mientras Texcoco no se halle en la actitud que exigen la política y las necesidades de los pueblos para llevar adelante el carácter de Capital del Primer Estado de la República Mexicana en falta de la que le es propia" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 28 de abril de 1827: 362).

El Congreso dispuso que "los Supremos Poderes del Estado, se trasladaran provisionalmente al Pueblo de San Agustín de las Cuevas, el día 15 de junio del corriente año" (1º); que "el Gobierno cuidará de la traslación y establecimiento de los tribunales y oficinas, como también de la seguridad del Tesoro bajo su responsabilidad" (2º); que "para llenar estos objetos, usará el Hospital de los padres misioneros de Asia y del edificio o edificios de los particulares que juzgue absolutamente necesarios, previo contrato con los poseedores de las fincas" (3º) (Acta de la sesión del 28 de abril de 1827. BJMLM. Colección de Actas: vol. 12, foja 380).

El 30 de abril el Congreso dispuso que "se aplicara a los fondos de las municipalidades del Estado la pensión de carnes, establecida por el Congreso General Constituyente, el 26 de junio de 1822" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 23 del 30 de abril de 1827: 11).[114]

El 1 de mayo el Congreso aprobó "el nombramiento de Diputado a este Congreso hecho en el Ciudadano Licenciado José Ignacio González Caraalmuro" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 1 de mayo de 1827: 413).[115]

El 2 de mayo el Congreso determinó que en el Pueblo de Papalotla se instalara un Ayuntamiento separado del de Tepetlaoxtoc (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 29 del 2 de mayo de 1827: 13).

El Congreso dispuso que "en el Estado se continuará en el papel sellado el uso del Escudo de Armas" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 30 del 2 de mayo de 1827: 13).

El Congreso integró la Mesa Directiva del tercer mes de su Primer Periodo Ordinario de Sesiones bajo la presidencia del Diputado Pedro de la Portilla y la Vicepresidencia

[114] Se destinaba al Desagüe y al pago de las dietas de los diputados federales.
[115] En su calidad de Diputado Suplente ocupó la curul que debía ocupar Manuel Rodríguez de la Madrid, quien el 16 de marzo de 1827 fue exonerado de dicho cargo (Poder Legislativo I, 1828. Proposición del 16 de marzo de 1827: 141).

del Diputado Luciano Castorena. Nombró como Secretario Propietario al Diputado José María Velázquez (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 2 de mayo de 1827: 428).

El Congreso tomó conocimiento del informe de los trabajos realizados por la Secretaría del Congreso en el mes de abril que presentó el Diputado Antonio María Cardona (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 2 de mayo de 1827: 429).

El Congreso dispuso que "el Gobierno publicará las leyes y decretos bajo la fórmula prescrita en la Constitución, por conducto de su Secretario", y que "en las comunicaciones oficiales con las autoridades todas de la Federación, usará de firma entera o media firma, según ellas lo usaren con este Gobierno; con los secretarios de este Honorable Congreso y Supremo Tribunal de Justicia, usará la firma entera; de media firma con las demás autoridades del Estado, y de simple rúbrica en todos los demás asuntos" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 2 de mayo de 1827: 437).

El 3 de mayo el Congreso erigió "en Pueblo la Ranchería de Santo Tomás Ixcatepec, de la jurisdicción de Zacualpan", "bajo la denominación de Santa María de Guadalupe Xochicalco" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 31 del 3 de mayo de 1827: 13).

El 4 de mayo el Presidente del Congreso nombró al Diputado José Ignacio González Caraalmuro individuo de las comisiones de Instrucción Pública, Corrección de Estilo y Gobernación (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 4 de mayo de 1827: 446).

El Congreso dispuso que "serán puestos en libertad todos los actualmente procesados y que estén en prisión, menos los reos de lesa majestad divina, incendios, salteos o robos en cuadrilla" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 32 del 4 de mayo de 1827: 13).

El 5 de mayo el Congreso determinó que "lo decretado por el Congreso con relación al establecimiento de la fábrica de tabacos en la Ciudad de Texcoco, llévese a efecto a la brevedad posible" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 5 de mayo de 1827: 465).

El 7 de mayo el Congreso determinó "que en el Pueblo de San Agustín de las Cuevas se tome en arrendamiento un edificio el más a propósito, para el establecimiento de una fábrica de tabacos" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 7 de mayo de 1827: 469).

El 8 de mayo el Congreso aprobó "una iniciativa de decreto al Congreso de la Unión, para que se suspenda la discusión del dictamen de las comisiones de Gobernación y

Hacienda unidas, sobre el decreto 7 de esta Legislatura,[116] hasta que exponga a las cámaras los fundamentos que tuvo para darle", y "que se encargue una comisión de hacer dicha exposición a la brevedad posible". Dicha Comisión Especial se integró con los diputados: Agustín Escudero, Epigmenio de la Piedra y José María Velázquez (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 8 de mayo de 1827: 486).[117]

El 9 de mayo el Congreso (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 9 de mayo de 1827: 503) facultó al "Gobernador para que conceda licencia al Teniente Gobernador y consejeros previo conocimiento de causa" (art. 1º), y que "cuando la causa porque haya de separarse el Teniente Gobernador o individuos del Consejo exija más tiempo del prevenido en el artículo anterior, ocurrirá al Congreso y en su receso a la Diputación Permanente" (art. 2º).

El Congreso determinó que "las cartas que se dieren de ciudadanía se comunicarán al Gobierno en forma de decreto" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 9 de mayo de 1827: 504).

El 10 de mayo el Congreso General determinó que "ningún individuo que sea español por nacimiento podrá ejercer cargo, ni empleo alguno de nombramiento de los Poderes Generales en cualquier ramo de la Administración Pública, Civil y Militar hasta que España reconozca la Independencia de la Nación" (Decreto del 10 de mayo de 1827. BJMLM: vol. 35, exp. 213).

El 11 de mayo el Congreso dispuso que se hiciera "una iniciativa a las cámaras (del Congreso de la Unión), para que se suspenda la discusión del dictamen sobre el arreglo de la libertad de imprenta" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 11 de mayo de 1827: 528).

El Congreso determinó que "el día que se dé segunda lectura a un dictamen, se señalará por el Señor Presidente día para la discusión, no pudiendo ser éste antes del tercero, y procurando dar la preferencia a los asuntos que según su importancia o urgencia lo merezcan" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 11 de mayo de 1827: 531).

[116] En este decreto "se declaran pertenecientes al Estado de México, todos los bienes que poseen en el mismo los hospicios destinados para las misiones de Filipinas".
[117] En la sesión del 11 de mayo se dio a conocer la exposición de motivos que se encargó a la comisión especial (Poder Legislativo I, 1828. Exposición del 1 de mayo de 1827: 516).

El 12 de mayo el Congreso determinó que le tocaba “exclusivamente al Supremo Tribunal de Justicia, conocer de todas las causas civiles y criminales contra los jueces de primera, segunda y tercera instancia, o cualquiera otro Tribunal” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 33 del 12 de mayo de 1827: 15).

Acudió al Congreso el Señor José Zárate, a rendir su protesta de ley como Consejero del Estado (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 12 de mayo de 1827: 534).

El 14 de mayo el Congreso le concedió al Diputado Agustín Escudero “un permiso por el tiempo que falta de sesiones, para estar en la Ciudad Federal, a donde fue a atender varios asuntos interesantes al Estado” (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 14 de mayo de 1827: 538).

El 15 de mayo el Congreso declaró Ciudadano del Estado al Coronel Antonio Aldama (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 34 del 15 de mayo de 1827: 15).

Acudió al Congreso el Señor Manuel Reyes Veramendi a rendir su protesta de ley como Teniente Gobernador (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 15 de mayo de 1827: 546).

El Congreso integró una comisión especial de su seno, para presentar una protesta enérgica al Congreso de la Unión, para que no se aprueben las reformas a la Ley de Libertad de Imprenta. Dicha comisión se integró con los diputados: Epigmenio de la Piedra, José María Franco y José Antonio Magos (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 15 de mayo de 1827: 553).

El 17 de mayo el Congreso (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 17 de mayo de 1827: 568) dispuso que se invitara “a los sabios de la República Mexicana para la formación de los códigos civil, criminal y de procedimientos en el Estado de México, conforme a su constitución y circunstancias” (art. 1º); que “los individuos que formaren dichos códigos, los podrán presentar en la Secretaría de este Honorable Congreso hasta el 31 de agosto de 1828; remitiéndolos con el nombre sellado y cerrado del autor, el que no se abrirá hasta después de la calificación que se haga de dichos códigos” (art. 2º); que “el Honorable Congreso nombrará una comisión de cinco individuos que harán la calificación de las obras, y a los autores de las tres que fueren preferidas se premiará con cien onzas de oro por cada una” (art. 3º); que “estas cantidades se tomarán del Erario del Estado, y lo mismo las necesarias para la impresión de los códigos

premiados, y los otros que a juicio de los jueces merecieren la luz pública; y sólo los nombres de los autores de éstos y los primeros se publicarán" (art. 4º); "el día 16 de septiembre de 1828, en sesión pública dirá el Secretario más antiguo el nombre del autor o autores de los códigos premiados, y si les fuere posible se presentarán a recibir de mano del Presidente de esta Honorable Asamblea y a nombre del Estado unas balanzas, una espada, el libro de la ley; para cuyos símbolos ofrecen los individuos de la Comisión de Justicia trescientos pesos" (5º), y que "los pliegos que contengan los nombres de los autores de los códigos que no fueren premiados, se devolverán cerrados y juntamente sus obras por el mismo conducto que las hubieren presentado" (art. 6º).

El Congreso exhortó "al Gobierno para que según lo decretado el 20 de julio de 826 por el Congreso Constituyente, se ponga en práctica la pronta propagación del fluido vacuno en los pueblos del Estado de México", y para "que el mismo Gobierno invite al Cabildo de México para que excite al celo de los párrocos por medio de una circular para que ellos por sí, o independientemente de los ayuntamientos, procuren el transporte y propagación del mismo fluido en sus feligresías por los arbitrios que estén a su alcance" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 17 de mayo de 1827: 574).

El 18 de mayo el Congreso acordó que se nombrase "una comisión especial para que reglamente las operaciones de la Diputación Permanente, y diga al mismo tiempo si los diputados pueden retirarse durante el receso del lugar de las sesiones, y en cualquier caso si ha de encargarse algún trabajo" (Acta de la sesión secreta del 18 de mayo de 1827. BJMLM: Colección de Actas).

El Presidente del Congreso nombró como integrantes de la comisión especial que estudiaría lo concerniente a las operaciones de la Diputación Permanente a los diputados: José Ignacio González Caraalmuro, Epigmenio de la Piedra y José María Ruano Calvo (Acta de la sesión secreta del 18 de mayo de 1827. BJMLM: Colección de Actas).

El 19 de mayo el Congreso autorizó al Gobierno a establecer una garita para el cobro de peaje en el paraje de Cerro Gordo en el Camino a Acapulco (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 35 del 19 de mayo de 1827: 16).

El Congreso aprobó el nombramiento de Pablo Galeana como Diputado integrante del Congreso (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 19 de mayo de 1827: 589).

El Diputado Pablo Galeana rindió su protesta de ley ante el Pleno (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 19 de mayo de 1827: 589).

El Congreso dispuso “que antes que se publique el decreto en que se invita a los sabios para la formación de los códigos, se informe a este Congreso sobre los trabajos del Constituyente en orden a la Administración de Justicia por la comisión en cuyo poder se halla la ley que devolvió el Gobierno con sus observaciones sobre la materia” (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 19 de mayo de 1827: 589).

El 22 de mayo el Congreso determinó que la “Comisión de Caligrafía cuidara de que el Plan de Caligrafía, dedicado por el niño D. Manuel León al Honorable Congreso, acomodado en un marco correspondiente con vidriera, se coloque en la Galería con una orla que lleve la siguiente inscripción: Premiado con cien pesos. Decreto del Primer Congreso Constitucional del Estado de México, en Texcoco, a 25 de abril de 1827”; y que “el mismo Gobierno tomará las providencias necesarias, a fin de que el Preceptor Ciudadano Rafael Sánchez Contreras, se traslade al lugar de residencia de los Supremos Poderes, para establecer una Escuela Normal” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 36 del 22 de mayo de 1827: 15).

El Congreso aprobó “la providencia que tomó el Gobierno el 7 de abril último, relativa al establecimiento provisional de un Guarda a Caballo, que cuide los cargamentos que se introduzcan en la Aduana de Acapulco por la Garita de México” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 37 del 22 de mayo de 1827: 16).

El Congreso dispuso que “los ayuntamientos que son y fueron pertenecientes al Estado, quedan libres de la responsabilidad en que estaban por leyes vigentes de contribuir por el 4 por 100 de sus propios y arbitrios, y el 2 por 100 de los bienes que se llamaron de comunidad”; que “desde la publicación de este decreto, en lo sucesivo sólo pagarán, sin distinción de cuotas, el 3 por 100 del líquido sobrante de sus fondos que le resulte anualmente”, y que “los fondos que se formen de las cantidades expresadas, se invertirán precisamente en establecimientos de beneficencia común, según lo acuerde el Congreso” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 38 del 22 de mayo de 1827: 16).

El Congreso autorizó al Gobierno la adquisición de libros de ciencias y artes “para establecer dos bibliotecas, una en el lugar de residencia de los Supremos Poderes del

Estado, y otra en el más populoso" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 39 del 22 de mayo de 1827: 16).

El Congreso declaró Ciudadano del Estado a Francisco Ruano (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 40 del 22 de mayo de 1827: 17).

El Congreso determinó que "para cubrir los gastos del Estado, se cobrarán los mismos impuestos y contribuciones, cuyos productos han formado en el año anterior la Hacienda del Estado, excepto aquellos que por ley hayan quedado derogados" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 41 del 22 de mayo de 1827: 18).

El 23 de mayo el Congreso dispuso que su Presidente debía "nombrar una comisión que haya de dictaminar sobre los sujetos que deban formar el catálogo de los libros que deben encargarse a Europa para las librerías (bibliotecas) del Estado" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 23 de mayo de 1827: 636).

El 25 de mayo el Congreso admitió "la renuncia que el Ciudadano Lic. Ignacio Sotomayor hace del nombramiento que en su persona se hizo para uno de los veinte y cuatro individuos que han de juzgar a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 25 de mayo de 1827: 648).

El Congreso dispuso que "se prevenga al Gobierno remita al Congreso un estado semanario, que manifieste las existencias de caudales disponibles que resulten hasta el día de la fecha del estado de corte de caja", y que "luego que se reciban estos estados se pasen por la Secretaría de este Congreso a la Comisión de Hacienda, por ser la que más los necesita" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 25 de mayo de 1827: 650).

El 26 de mayo el Congreso determinó que "la contribución directa pertenece a los ayuntamientos desde el 7 de marzo último, en que se publicó el decreto número 94 del Congreso Constituyente, cuyos artículos quedan vigentes" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 42 del 26 de mayo de 1827: 18).

El Congreso dispuso que "cesará en el Estado el cobro que se hacía en algunas aduanas, de la pensión para las obras del Desagüe de Huehuetoca" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 43 del 26 de mayo de 1827: 19).

El Congreso le “concedió al Pueblo de Tenancingo una feria anual, cuya duración será de diez días, que se contarán siempre desde el domingo anterior a la de carnestolendas” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 44 del 26 de mayo de 1827: 19).

El Congreso dispuso que el establecimiento de la Casa de Moneda se llevara a efecto por cuenta de los fondos del Estado (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 45 del 26 de mayo de 1827: 20).

El Congreso reglamentó “el orden que deben observar sobre la percepción de sueldos de los individuos del territorio del Estado que pasen de un empleo a otro, y los que lo verifiquen de otros estados al mismo” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 46 del 26 de mayo de 1827: 20).

El Congreso facultó “al Gobierno para que supla al Ayuntamiento de S. Miguel Acambay la cantidad de 1,415 pesos que solicita para conducir el agua dentro de la población, caucionando el reintegro con las seguridades necesarias”, y que “el Gobierno cuidará de que la obra que para ese fin se construya, sea sólida y duradera” (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 26 de mayo de 1827: 670).

El 27 de mayo el Congreso dispuso que “la ley de premios expedida el 16 de abril del año de 1825 por el Congreso Constituyente, se hace extensiva al Ramo de Educación Religiosa, asignando un premio de diez pesos al niño que en los certámenes públicos se presente más adelantado en la inteligencia de la doctrina cristiana” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 47 del 27 de mayo de 1827: 20).

El 29 de mayo el Congreso declaró Ciudadano del Estado a José Serrano (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 48 del 29 de mayo de 1827: 20).

El Congreso al reglamentar la operación de la Diputación Permanente (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 29 de mayo de 1827: 693), dispuso que “los diputados que no fueren nombrados a la Diputación Permanente, pueden retirarse del lugar de las sesiones, avisando en la Secretaría de aquel a donde lo hicieren” (art. 1º); que “los que formen la Diputación Permanente, no podrán separarse de aquel en que residan los Supremos Poderes del Estado” (art. 2º); que “tendrán sesiones ordinarias y públicas en el lugar conveniente, los martes y viernes de diez a doce de la mañana” (art. 3º); que “en dichas sesiones se ocuparán de preferencia en los asuntos que demarca la Constitución” (art. 4º); que “se dedicará también a trabajar en este receso y

en clase de comisión a las reformas o adiciones, que juzgue conveniente o necesarias al Reglamento, las que se presentarán al Congreso en las primeras sesiones ordinarias, para su examen y aprobación" (art. 5º); que "cuidarán de que los oficiales y dependientes de la Secretaría desempeñen sus obligaciones, y de que esta Oficina y su Archivo se pongan en total arreglo" (art. 6º); que "harán las veces de Comisión de Policía, y como tal proveerán el Edificio del Congreso de los muebles y útiles necesarios, y harán las reformas y mejoras que estimen convenientes, presentando la cuenta respectiva en las primeras sesiones" (art. 7º), y que "en la apertura de las sesiones ordinarias y extraordinarias su Presidente y Secretario presidirán la elección de estos oficios" (art. 8º).

El 30 de mayo el Congreso instruyó al Ejecutivo para que estableciera "un resguardo provisional de la renta del tabaco, compuesto de un Visitador, un Teniente y ocho guardias" nombrados por el Gobernador (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 49 del 30 de mayo de 1827: 21).

El Congreso integró la Diputación Permanente de su Primer Receso, presidida por el Diputado Epigmenio de la Piedra. Nombró como Secretario al Diputado José María Franco, como miembros a los diputados: José María Velázquez de León, Antonio del Río y Pablo Galeana y como Suplente al Diputado Pedro de la Portilla (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 30 de mayo de 1827: 712).

El 31 de mayo el Congreso autorizó al Gobierno a invertir 25,000 pesos en la compra de armas para la Milicia Cívica (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 50 del 31 de mayo de 1827: 21).

El Congreso cesó "en la Ciudad de Acapulco el cobro de un peso a cada carga de jabón, otro a cada barril de licores, cinco reales a cada carga de azúcar, y cuatro reales a la harina, que como derechos municipales se están cobrando" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 51 del 31 de mayo de 1827: 22).

El Congreso acordó que ningún Diputado está autorizado para promover ante las autoridades respectivas "los intereses del Estado fuera de esta Honorable Asamblea, y sin consentimiento y aprobación" (Acta de la sesión secreta del 31 de mayo de 1827. BJMLM: Colección de Actas).

El 1 de junio el Congreso dispuso que “el Gobernador de acuerdo con su Consejo, podrá pedir a quien corresponda la separación del tiempo que fuere necesario, de los eclesiásticos españoles seculares o regulares, de sus destinos o beneficios, y aún separarlos del territorio del Estado, si así lo estimare conducente a la tranquilidad pública” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 52 del 1 de junio de 1827: 22).

El Congreso prohibió “sepultar cadáveres en los templos del Estado, así como en los panteones o bóvedas destinadas a ese fin en ellos o en edificios contiguos”, instruyendo a los ayuntamientos para que nombren “de su seno o fuera de él, una comisión que en cada pueblo elija, de acuerdo con el respectivo cura, un lugar para cementerio, fuera de poblado, opuesto al viento dominante, de la extensión competente, y si es posible capaz de sembrar en él plantas que lo hagan saludable” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 53 del 1 de junio de 1827: 22).

El Congreso dispuso que “se agregará al papel sellado para recibos y libranzas, la media firma del Tesorero General” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 56 del 1 de junio de 1827: 24).

El Congreso aprobó una iniciativa de decreto al Congreso de la Unión, para que éste aclarara “si quiso comprender a los militares retirados en la contribución directa” (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 1 de junio de 1827: 732).

El Congreso nombró a los integrantes de la comisión que debía de formar el catálogo de los libros que debían encargarse por conducto del Gobierno a Europa para las bibliotecas del Estado. Dicha Comisión se integraría con Lorenzo de Zavala, Gobernador del Estado; Jacobo Villa Urrutia, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; Juan Wenceslao Barquera, Primer Consejero del Estado; Vicente Güido de Güido, Diputado al Congreso de la Unión; y Epigmenio de la Piedra, Diputado del Congreso del Estado (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 1 de junio de 1827: 734).

El 2 de junio el Congreso facultó a “los ayuntamientos del Estado, para que sin desatender por ello a los preferentes y sagrados objetos a que están destinados sus fondos, puedan suscribirse al periódico en que se insertarán las actas de este Congreso” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 54 del 2 de junio de 1827: 23).

El Congreso dispuso que cada una de las fábricas de puros y cigarros tuvieran un Administrador, Interventor, Maestro Mayor y Oficial nombrados por el Gobierno en

forma provisional, el cual debía cuidar “de que se formen las ordenanzas que hayan de regir las fábricas de puros y cigarros, y las pasará al Congreso para su aprobación, haciendo que ínterin que esto se verifica, se observen las que rigen en las fábricas del Distrito Federal, en cuanto no se opongan a nuestras instituciones” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 55 del 2 de junio de 1827: 24).

El Congreso acordó efectuar su Primer Periodo Extraordinario de Sesiones el 1 de agosto, con el propósito de elegir “al individuo que ha de llenar la vacante que hay en la Suprema Corte de Justicia” (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 2 de junio de 1827: 743).

El Congreso tomó conocimiento del informe que presentó su Secretaría sobre las actividades realizadas en el Primer Periodo Ordinario de Sesiones (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 2 de junio de 1827: 743).

El Gobernador Lorenzo de Zavala, al acudir a la clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, informó que estaba en construcción el Camino a Cuernavaca, que propuso iniciativas para hacer transitable el Camino a Toluca y construir un canal en el sur del Valle de México, que la Milicia Cívica recibió mejoras considerables, que el Gobierno del Estado se había inconformado con el de la Federación ante la aplicación errónea del decreto relativo a los empleos de los españoles, que el Tesoro había recibido algunos aumentos con la vigilancia y cuidado del Gobierno y de los empleados respectivos, que se había establecido en San Agustín de las Cuevas una escuela para niños y otra para niñas que podrían servir de modelo a los demás pueblos, que en algunas cabeceras de Partido se estaban construyendo cárceles, que la Administración de Justicia aún estaba sumida en infinidad de trámites y contradicción de códigos, que en el Estado imperaba la paz y que el Gobierno había iniciado un análisis sobre la situación de las municipalidades, encontrándose que en “muchos pueblos sólo pueden ser mandados para comenzarlos a acostumbrar a tomar parte de las funciones públicas, y a reunirse a ejercer el augusto acto de elegir a sus mandatarios” (Discurso del 2 de junio de 1827. AHEM: L.L.D.E. vol. 1, exp. 7).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Pedro de la Portilla, indicó que “noventa días son los momentos precisos que esta Honorable Asamblea ha aprovechado para aliviar en parte las necesidades del Estado; tiempo corto pero bien aprovechado ha dado resultados de obras grandes; muchas cosas se

han hecho en el Estado; otras se encuentran comenzadas, y en proyecto varias que tendrán verificativo en las próximas sesiones" (Poder Legislativo I, 1828. Acta del 2 de junio de 1827: 754).

Se instaló la Diputación Permanente del Primer Periodo de Receso del Congreso, bajo la Presidencia del Diputado Epigmenio de la Piedra (Acta del 2 de junio de 1827. BJMLM: Colección de Actas vol. 14, foja 1).

El 5 de junio la Diputación Permanente acordó concederle al Gobernador Lorenzo de Zavala "la licencia que solicita para que pueda durante el receso (del Congreso), pasar a México cuantas veces sea necesario, a asuntos de utilidad común y particulares, avisando cuando lo verifique" (Acta del 5 de junio de 1827. BJMLM: Colección de Actas vol. 14, foja 2).

La Diputación Permanente acordó que los individuos que la integraban quedaban "en actitud de poderse retirar el viernes próximo ocho del actual después de levantada la sesión del mismo día", y "que el día quince del presente según previene el acuerdo del Congreso, se tendrá sesión en el Pueblo de San Agustín de las Cuevas" (Acta del 5 de junio de 1827. BJMLM: Colección de Actas vol. 14, foja 4).

El 8 de junio la Diputación Permanente tomó conocimiento de un comunicado del Gobernador Lorenzo de Zavala, "en el que avisa que hoy pasa a México, y deja Encargado del Gobierno al Señor Consejero Wenceslao Barquera" (Acta del 8 de junio de 1827. BJMLM: Colección de Actas vol. 14, foja 6).

El 19 de junio la Diputación Permanente al aprobar las "Reglas para el Arreglo del Archivo de la Secretaría del Congreso", dispuso que "el Oficial Primero además de las obligaciones que le impone el Reglamento, hará durante el actual receso, el despacho de todo lo que ocurra, poniendo los borradores de las órdenes, oficios y demás que se ofrezca, y hará se pongan en limpio por quien corresponda" (Acta del 19 de junio de 1827. BJMLM: Colección de Actas vol. 14, foja 7).

El 26 de junio la Diputación Permanente tomó conocimiento de un oficio del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el que se comunicaba el fallecimiento de su Ministro, el Señor Ignacio Berezueta (Acta del 26 de junio de 1827. BJMLM: Colección de Actas vol. 14, foja 17).

El 10 de julio la Diputación Permanente le concedió una licencia por quince días para separarse de su cargo a su Presidente, Diputado Epigmenio de la Piedra (Acta del 10 de julio de 1827. BJMLM: Colección de Actas vol. 14, foja 26).

El 17 de julio el Diputado José María Velázquez de León asumió interinamente la Presidencia de la Diputación Permanente y se incorporó a la misma el Diputado Pedro de la Portilla, para cubrir la licencia del Diputado Epigmenio de la Piedra (Acta del 17 de julio de 1827. BJMLM: Colección de Actas vol. 14, foja 27).

La Diputación Permanente tomó conocimiento de un oficio del Gobernador Lorenzo de Zavala, en el que participaba "haber dispuesto marchar a la Ciudad de Toluca, dejando Encargado del Gobierno al individuo que señala la Ley" (Acta del 17 de julio de 1827. BJMLM: Colección de Actas vol. 14, foja 27).[118]

El 1 de agosto el Congreso abrió su Primer Periodo Extraordinario de Sesiones bajo la conducción del Presidente de la Diputación Permanente, Diputado Epigmenio de la Piedra (Poder Legislativo II, 1828. Acta del 1 de agosto de 1827: 1).

El Congreso reunido en Junta integró la Mesa Directiva de su Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, presidida por el Diputado Félix Lope de Vergara. Nombró como Vicepresidente al Diputado Agustín Escudero, como secretarios propietarios a los diputados: José María Ruano Calvo y Vicente Sánchez Barquera y como Secretario Suplente al Diputado Agustín Vallarta (Poder Legislativo II, 1828. Acta del 1 de agosto de 1827: 4).

El Congreso eligió como individuo que había de ocupar la vacante en el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación al Ciudadano Tomás Salgado (Poder Legislativo II, 1828. Acta del 1 de agosto de 1827: 5).

El Presidente del Congreso, Diputado Félix Lope de Vergara, levantó la sesión del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones en la Ciudad de Texcoco (Poder Legislativo II, 1828. Acta del 1 de agosto de 1827: 6).

El 15 de agosto el Congreso reunido en Junta en el Salón Provisional del Pueblo de San Agustín de las Cuevas integró la Mesa Directiva del primer mes de su Segundo

[118] De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147 de la Constitución Política del Estado, la falta del Gobernador debió ser cubierta por el Teniente Gobernador Manuel Reyes Veramendi.

Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado José María Ruano Calvo y la Vicepresidencia del Diputado Rafael Anaya. Nombró como secretarios propietarios a los diputados: Vicente Sánchez Barquera y Epigmenio de la Piedra y como Secretario Suplente al Diputado Pablo Galeana (Poder Legislativo II, 1828. Acta del 15 de agosto de 1827: 6).

El Gobernador Lorenzo de Zavala, al acudir a la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, señaló que el traslado de las oficinas del Gobierno a San Agustín de las Cuevas no había sido un obstáculo para que se diese impulso rápido al cumplimiento de los decretos referentes a la Fábrica de Puros y Cigarros de Texcoco y a la Casa de Moneda, que el Ejecutivo había emprendido aquellas obras que eran de absoluta necesidad, que uno de los asuntos más urgentes que debía llenar la atención del Congreso era el establecimiento del Instituto Literario tal como se señalaba en la Constitución, que ante la falta de ríos navegables el Gobierno debía dirigir su atención a la construcción y mantenimiento de los caminos carreteros, y que "la organización de los tribunales reclama enérgica y urgentemente leyes que arreglen y pongan en armonía con el sistema este ramo de la Administración" (Gobierno del Estado de México, 1827. Discurso: 3).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado José María Ruano Calvo, indicó que "la presente Legislatura sin perder nada de cuanto útil pudo hacer en sus primeras sesiones, las cerró satisfactoriamente, retirándose los señores diputados con una conciencia tranquila, a no descansar, sino a cerciorarse más y más en las necesidades de los pueblos del Estado para remediarlas en la ocasión que ha llegado" (Poder Legislativo II, 1828. Acta del 15 de agosto de 1827: 14).

El 16 de agosto el Congreso tomó conocimiento del informe de las actividades que realizó la Diputación Permanente en el Primer Receso del Congreso (Poder Legislativo II, 1828. Acta del 16 de agosto de 1827: 15).

El 18 de agosto el Congreso acordó "designar la cantidad que crea necesaria para la celebridad del glorioso grito de independencia dado en el Pueblo de Dolores" (Poder Legislativo II, 1828. Acta del 18 de agosto de 1827: 40).

El 20 de agosto el Congreso acordó que al Diputado José Ignacio González Caraalmuro se le permita "suspender su venida (a la Asamblea) por un mes, contado

desde el día de la apertura de las sesiones" (Acta de la sesión secreta del 20 de agosto de 1827. BJMLM: Colección de Actas).

El 21 de agosto el Congreso le concedió una licencia al Diputado Mariano Campos para que se separara temporalmente de su cargo, con el propósito de restablecer su salud (Poder Legislativo II, 1828. Acta del 21 de agosto de 1827: 51).

El 23 de agosto el Congreso dispuso que quedaban libres del derecho de alcabala en los minerales las bestias que se ocupan en: los malacates, rastras y molinos de moler metales, cebada, centrada y demás ligas que resultan de las fundiciones de metales, cueros de res al pelo, greta, madeja de lechuguilla para calabrotes, magistral, palillo, plomo, paja de todas clases y cebo; quedando también "libres del tres por ciento del consumo en los minerales, el acero, azogue y hierro" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 57 del 23 de agosto de 1827: 24).

El Congreso le concedió al Diputado José Rodrigo Castelazo una licencia por quince días para separarse de su cargo, con el propósito de fungir como Conciliador en una controversia suscitada entre los trabajadores y administradores de las minas del Mineral del Monte (Poder Legislativo II, 1828. Acta del 23 de agosto de 1827: 69).

El 27 de agosto el Congreso aprobó la "iniciativa al Congreso General, para que dicte algunas medidas para cuando las legislaturas hagan observación a alguna ley por anticonstitucional (Poder Legislativo II, 1828. Acta del 27 de agosto de 1827: 95).

El 29 de agosto el Congreso designó como ministros del Supremo Tribunal de Justicia a: José Domingo Ruz, Vicente Güido de Güido, Juan Wenceslao Barquera, José María Rosas, Pedro Jove y Francisco Ruano Calvo y como Fiscal a José María Torres Cataño (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 58 del 29 de agosto de 1827: 25).

El 31 de agosto el Congreso determinó que "no se llevarán derechos por el Supremo Tribunal de Justicia en ningún caso"; que "lo que produzca la condenación de costas, regulada según los aranceles de la Audiencia, se cobrará con el mayor escrúpulo, e ingresará a la Tesorería General del Estado", y que "se prohíbe estrechamente a los ministros de dicho Tribunal y a sus dependientes, recibir de los litigantes regalos o recompensas, bajo ningún pretexto" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 59 del 31 de agosto de 1827: 25).

El Congreso ordenó al Gobernador publicar las leyes y decretos del Congreso de la Unión (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 60 del 31 de agosto de 1827: 25).

El Congreso nombró a Vicente José Villada como Tesorero General del Estado (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 61 del 31 de agosto de 1827: 26).

El Congreso determinó que "los diputados y empleados por comisión, pagaran la contribución directa en las respectivas municipalidades en donde sean vecinos", y que "a los demás empleados no se les deducirá de su sueldo al satisfacerlos, sino que se les cobrará en los mismos términos que expresa la Ley para todos los demás ciudadanos" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 63 del 31 de agosto de 1827: 26).

El 1 de septiembre acudieron al Congreso a rendir su protesta de ley como ministros del Supremo Tribunal de Justicia: José Domingo Ruz, Vicente Güido de Güido, Juan Wenceslao Barquera, José María Rosas, Pedro Jove y Francisco Ruano Calvo y como Fiscal a José María Torres Cataño (Poder Legislativo II, 1828. Acta del 1 de septiembre de 1827: 115).

El 6 de septiembre el Congreso acordó ratificar "al Ciudadano Juan Daza en su destino de Primer Oficial" de la Secretaría del Congreso (Acta de la sesión secreta del 6 de septiembre de 1827. BJMLM: Colección de Actas).

El 7 de septiembre el Congreso acordó que se "librase por el Gobierno del Estado a favor del Lic. Ciudadano Carlos María Bustamante, trescientos pesos con que se le ayuda por esta Legislatura para la continuación del Cuadro Histórico de Nuestra Independencia" (Poder Legislativo II, 1828. Acta del 7 de septiembre de 1827: 169).

El 9 de septiembre el Congreso declaró vigente "la circular expedida por la Dirección General de Aduanas el 31 de diciembre de 1804, sobre el pago del 6 por 100 del derecho de alcabala permanente, por la venta de magueyes" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 62 del 9 de septiembre de 1827: 26).

El 10 de septiembre el Congreso facultó "al Gobierno para que aplique a Manuel Valero la gracia del indulto según lo estime conveniente" (Acta de la sesión secreta del 10 de septiembre de 1827. BJMLM: Colección de Actas).

El 11 de septiembre el Congreso General creó la Junta de Peajes de los Caminos que administraba el Consulado de México (Dublan II, 1876. Ley del 11 de septiembre de 1827: 17).

El Congreso declaró Ciudadano del Estado a Francisco Argandar (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 64 del 11 de septiembre de 1827: 27).

El 13 de septiembre el Congreso dispuso que se "imprimase por cuenta de los gastos de este Congreso el dictamen dado por la Comisión de Legislación sobre los españoles" (Poder Legislativo II, 1828. Acta del 13 de septiembre de 1827: 185).

El Congreso aprobó una "iniciativa al Congreso General para que dé las bases sobre cartas de ciudadanía" (Poder Legislativo II, 1828. Acta del 13 de septiembre de 1827: 187).

El 15 de septiembre el Congreso dispuso que a los individuos que "obtengan empleos en el Estado, solo se les podrán anticipar, en clase de viático, una cantidad que no exceda de dos mesadas de paga, con arreglo al sueldo que vayan a disfrutar", que "para su reintegro se les descontará la tercera parte del sueldo, desde el día que tomen posesión del destino", y que "el Gobernador, bajo su responsabilidad, cuidará de que se les exija además de fiador, que en caso de muerte, suspensión o renuncia de agraciado, cubra por éste lo que quede debiendo a la Hacienda del Estado" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 82 del 15 de septiembre de 1827: 44).

El Congreso al acordar "absolver al Segundo Diputado Suplente C. Lic. José María Figueroa de cualquier cargo que pudiera resultarle por la declaración que produjo sobre las elecciones de Toluca", dispuso que este personaje podía "ser llamado en tercer lugar como ha estado hasta aquí, después de que fue acordada por el Congreso la dimisión del Sr. Don Martín Rodríguez García" (Acta de la sesión secreta del 15 de septiembre de 1827. BJMLM: Colección de Actas).[119]

El Congreso integró la Mesa Directiva del segundo mes de su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado José María Franco y la Vicepresidencia del Diputado José María Cardoso. Nombró como Secretario

[119] Con esta resolución el Congreso acordó que José Ignacio González Caraalmuro siguiera ocupando la curul que el 1 de mayo de 1827 le había asignado como diputado suplente, toda vez que en ese tiempo aún no resolvía la acusación en contra del segundo diputado suplente José María Figueroa.

Propietario al Diputado José María Velázquez de León y como Secretario Suplente al Diputado Luciano Castorena (Poder Legislativo II, 1828. Acta del 15 de septiembre de 1827: 194).

El 18 de septiembre el Congreso le concedió al Gobernador una "licencia por doce horas para pasar a la Ciudad Federal a varios asuntos del servicio y particulares" (Poder Legislativo II, 1828. Acta del 18 de septiembre de 1827: 204).[120]

El 20 de septiembre el Congreso determinó que "se divida en dos el Partido de Zacualpan, uno compuesto de los curatos de Teloloapan, Ixcateopan, Acapetlayahua, Apaxtla, Coatepec Costales y Alahixtlán, cuya Cabecera será el primero y el otro del resto de este Partido, continuando su Cabecera en Zacualpan" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 65 del 20 de septiembre de 1827: 27).

El 21 de septiembre el Congreso declaró vigente la circular de la extinta Dirección General de Aduanas del 18 de mayo de 1798, "para el cobro del derecho de amortización, en los casos que se adeude, sin contrariar el artículo 9 de la Constitución del mismo Estado" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 66 del 21 de septiembre de 1827: 28).

El Congreso dispuso que la Comisión de Policía cuide "de los dos planos de calografía, dedicados por los niños D. Manuel de León y D. Antonio López al Honorable Congreso, acomodados en un marco con vidriera, se coloquen en la Galería, con una Orta en cada uno, que lleve la siguiente inscripción: Premiados con cien pesos. Decreto del Primer Congreso Constitucional del Estado de México, en San Agustín de las Cuevas, a 21 de septiembre de 1827" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 67 del 21 de septiembre de 1827: 28).

El 24 de septiembre el Congreso acordó que "siempre que el Gobernador haya de salir del territorio del Estado, pida por escrito la licencia a esta Honorable Asamblea" (Acta de la sesión secreta del 24 de septiembre de 1827. BJMLM: Colección de Actas).

El 25 de septiembre el Congreso elevó al Pueblo de San Agustín de las Cuevas a la categoría de Ciudad con el nombre de Tlalpan (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 68 del 25 de septiembre de 1827: 29).

[120] De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147 de la Constitución Política del Estado, la falta del Gobernador debió ser cubierta por el Teniente Gobernador Manuel Reyes Veramendi.

El 28 de septiembre el Congreso declaró ciudadanos del Estado a: Alejandro Humboldt y Alejandro Bonpland (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 69 del 28 de septiembre de 1827: 29).

El Congreso nombró a Francisco Argandar Consejero de Gobierno, en lugar de Juan Wenceslao Barquera (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 81 del 28 de septiembre de 1827: 44).

El 3 de octubre el Congreso al reglamentar las penas que debían imponerse a los contrabandistas de tabaco, dispuso que "todo empleado o funcionario público que de cualquiera manera hiciere o permitiere el contrabando, será privado del destino, sin que pueda obtener otro en el Estado" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 70 del 3 de octubre de 1827: 29).

El 4 de octubre el Congreso autorizó "al Gobierno para que parcialmente invierta la cantidad de veinte mil pesos a la compra de instrumentos, sueldos de comisionados y demás gastos necesarios, para la formación de la estadística y carta geográfica del Estado", nombrándose "para la dirección de tan importante obra, al Ciudadano Tomás Ramón del Moral, y a su propuesta el Gobernador los individuos facultativos que hayan de asociarse en su expedición" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 71 del 4 de octubre de 1827: 30).

El 5 de octubre el Presidente del Congreso nombró a los integrantes de una comisión especial, para resolver lo conducente a una acusación que presentó el Señor Luis Varela contra el Diputado Antonio del Río. Dicha comisión se integró con los diputados: José María Cardoso, Pedro de la Portilla y Epigmenio de la Piedra (Acta de la sesión secreta del 5 de octubre de 1827. BJMLM: Colección de Actas).

El 6 de octubre el Congreso expidió las reglas para que salieran del territorio del Estado los españoles que no probaran que habían capitulado al aprobarse los Tratados de Córdoba, "los que después de dichos tratados permanecieron aún con las armas contra la independencia", y "los españoles y naturales de cualquier punto sujetos a la dominación española" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 72 del 6 de octubre de 1827: 31).

El 8 de octubre el Congreso declaró Ciudadano del Estado a Alejandro Bauzán (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 73 del 8 de octubre de 1827: 32).

El Congreso declaró Ciudadano del Estado a Antonio Robles (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 74 del 8 de octubre de 1827: 33).

El Congreso declaró Ciudadano del Estado a Ramón Ceruti (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 75 del 8 de octubre de 1827: 33).

El 10 de octubre el Congreso acordó la creación de "una plaza de Conserje que cuide del Palacio donde residan los Poderes del Estado" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 76 del 8 de octubre de 1827: 33).

El 11 de octubre el Congreso con el propósito de hacer economías en sus gastos, dispuso que "los individuos que en lo sucesivo obtengan de este Congreso alguna resolución que produzca decreto, del que resulte beneficio particular, costearán los gastos de impresión" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 77 del 11 de octubre de 1827: 33).

El Congreso acordó que la Tesorería General del Estado pagará los sueldos que aún se debían a los empleados del Consulado (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 78 del 11 de octubre de 1827: 34).

El Congreso indultó "a Narciso Careaga del tiempo que pueda faltarle para cumplir su condena" (Poder Legislativo II, 1828. Acta del 11 de octubre de 1827: 448).

El 12 de octubre el Congreso declaró "al Barrio de Paintla Pueblo formal, y desde ahora separado del de Atzala, al que estuvo en un tiempo unido" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 79 del 12 de octubre de 1827: 34).

El Congreso expidió el Reglamento Interior para la Secretaría del Gobierno del Estado de México, el cual incluía las atribuciones del Secretario, del Oficial Mayor, de los tres oficiales de mesa, del Jefe del Departamento de Hacienda, del Oficial apoderado y encargado de gastos, del Oficial de Partes, de los escribientes, del Archivero, del Portero y del Mozo de Oficio (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 80 del 12 de octubre de 1827: 34).[121]

[121] Constaba de apartados referentes a: los empleados y sus dotaciones, a las reglas generales, al Secretario, al Oficial Mayor, a los oficiales de mesa, al jefe del Departamento de Hacienda, al Oficial Apoderado y encargado de gastos, al Oficial de Partes, a los escribientes, al Archivero, al Portero y Mozo del Edificio y a la Prevención General.

En el reglamento se precisaba que la Secretaría se constituiría por tres departamentos atendidos por los oficiales de mesa, que el primero se denominaría de Gobierno y constaría de dos secciones, ocupándose la Primera de todo lo relativo al gobierno político, económico y municipal, correos, estadística, repartimiento de tierras y Secretaría; en tanto que la segunda despacharía los asuntos de la Milicia Cívica y los dirigidos a promover y fomentar la instrucción y riqueza pública en beneficio común o particular de los pueblos. De los otros dos departamentos uno atendía los asuntos de justicia y negocios eclesiásticos, los de la Milicia Activa y todo lo que tenía relación con el Ejército Permanente; en tanto que el Departamento de Hacienda constaba de tres secciones, dedicándose la Primera a los decimales y todo lo concerniente a pedidos y liquidaciones de labrados y del contingente; la Segunda a los ramos de aduanas, tabacos y papel sellado; en tanto que la Tercera debía hacer la inspección de la Tesorería General con todos sus ramos anexos, los fondos de rescate y la Contaduría.

El Gobernador presentó al Congreso el Reglamento de la Casa de Moneda del Estado Libre de México que formó, en el cual en forma numérica y concisa se señalaron los procedimientos a seguir por sus subalternos y las dotaciones anuales que éstos tenían. Fue así, como al Director General se le asignaron $3,000.00, al Contador $1,800.00, al Tesorero $2,000.00, al Director de Labores $2,800.00, al Juez de Balanza $1,500.00, al Ensayador Primero $1,000.00, al Guarda Cuño $1,200.00, al Grabador Primero $2,000.00 y al Perito de Tierras $1,000.00 (Reglamento del Ejecutivo del 12 de octubre de 1827. BJMLM: vol.29, exp. 59).

El 13 de octubre el Congreso nombró como Consejero del Gobierno a Francisco Argándar, en sustitución del Señor Vicente Sánchez Barquera (Poder Legislativo II, 1828. Acta del 13 de octubre de 1827: 470).

El Congreso integró la Diputación Permanente de su Segundo Receso, presidida por el Diputado José María Velázquez de León. Nombró como Secretario al Diputado José Antonio Magos, como miembros a los diputados: Antonio del Río, José María Franco y José María Ruano Calvo, y como Suplente al Diputado José Sierra (Poder Legislativo II, 1828. Acta del 13 de octubre de 1827: 470).

El 16 de octubre el Congreso determinó que hasta que se cumpla lo dispuesto en la Constitución, “la Audiencia quedará reducida a conocer de los negocios de segunda y tercera instancia”, y que el Supremo Tribunal de Justicia “ejercerá por ahora las que la

Audiencia ha tenido hasta aquí, y no sean concernientes a las causas" antes señaladas (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 83 del 16 de octubre de 1827: 45).

El Congreso dispuso que "bastaba la concurrencia de tres ministros para que el Tribunal de Audiencia determine los asuntos que le correspondan haciendo sentencia la unidad de dos votos contra uno" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 84 del 16 de octubre de 1827: 45).

El Congreso facultó al Ejecutivo del Estado para que le entregara a la Municipalidad de Mixquiahuala mil pesos en calidad de reintegro para la construcción de un puente (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 85 del 16 de octubre de 1827: 46).

El Congreso dispuso "que en igualdad de circunstancias se preferirán en la provisión de los destinos o empleos, a los naturales y vecinos del Estado, respecto a los que no lo sean" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 86 del 16 de octubre de 1827: 46).

El Congreso dispuso que salieran "del territorio del Estado, dentro del término que el Gobierno designare, todos los religiosos españoles residentes en él" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 87 del 16 de octubre de 1827: 47).

El Congreso declaró Ciudadano del Estado a Andrés Conaro (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 88 del 16 de octubre de 1827: 47).

El Congreso tomó conocimiento de la reconciliación que tuvo el Diputado Antonio del Río con el Señor Luis Varela, por lo que ya no hubo lugar a seguir el procedimiento que había instruido en contra de dicho Diputado (Acta de la sesión secreta del 16 de octubre de 1827. BJMLM: Colección de Actas).

El Gobernador Lorenzo de Zavala, al acudir a la clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, señaló que el Ejecutivo había asumido una actitud conciliatoria entre los contendientes de la revolución del sur, que una fiebre maligna se había extendido en la Prefectura de Tula, que "Tlalpan, Huejutla, Toluca y Pachuca tienen escuelas que caminan rápidamente a su perfección", que al aprobarse el Plan del Establecimiento Literario el Ejecutivo "deberá dar existencia moral al grande, rico y heroico Estado de México", que "se trabaja con ardor, constancia y economía en la conclusión de la Casa de Moneda", que en la Fábrica de Puros y Cigarros de Texcoco "se cuentan ya con ochocientos operarios que indemnizan a

aquella Ciudad de la pérdida pasada", que se continuaba "trabajando en los caminos de Cuernavaca y Apan", que aún no concluía "la obra del Palacio que deberá destinarse a las augustas ocupaciones del Congreso, del Ejecutivo y de los tribunales superiores", y que la Ley de Cementerios no había "tenido todos los efectos que se propuso el legislador, porque ni ha sido posible adquirir los fondos necesarios en las pequeñas poblaciones, ni es perjudicial enterrar en los lugares que están cerca de los templos, que por lo regular gozan de todas las ventajas que los cementerios fuera de poblado" (Poder Legislativo II, 1828. Acta del 16 de octubre de 1827: 521).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado José María Franco, señaló que "un campo sembrado de malezas y de espinas cual aparece al próvido agricultor la heredad abandonada, es el símil más adecuado de los que se ofreció al Congreso al dar principio a sus segundas tareas anuales. Constitución, leyes, orden, regularidad y sistema, pronosticaban los más abundantes y sazonados frutos de la Independencia; empero los sobresaltos, las ansiedades y zozobras en que fluctuaba el bajel del Estado, presentaban muy de cerca al ojo menos previsor aquellas terribles consecuencias que produce la crisis peligrosa de oscilación y desconfianza" (Poder Legislativo II, 1828. Acta del 16 de octubre de 1827: 526).

Se instaló la Diputación Permanente del Segundo Receso del Congreso, bajo la Presidencia del Diputado José María Velázquez de León (Acta del 16 de octubre de 1827. BJMLM: Colección de Actas vol. 15, foja 1).

La Diputación Permanente le otorgó una licencia al Gobernador Lorenzo de Zavala para pasar al Distrito Federal (Acta del 16 de octubre de 1827. BJMLM: Colección de Actas vol. 15, foja 1).[122]

El 26 de octubre la Diputación Permanente le otorgó una licencia por 48 horas al Gobernador Lorenzo de Zavala, para pasar al Distrito Federal (Acta del 26 de octubre de 1827. BJMLM: colección de Actas vol. 15, foja 8).[123]

La Diputación Permanente acordó una serie de medidas tendientes a abatir los rezagos que se tenían en el registro en limpio de las actas del Congreso (Acta del 26 de octubre de 1827. BJMLM: Colección de Actas vol. 15, foja 8).

[122] De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147 de la Constitución Política del Estado, la falta del Gobernador debió ser cubierta por el Teniente Gobernador Manuel Reyes Veramendi.
[123] De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147 de la Constitución Política del Estado, la falta del Gobernador debió ser cubierta por el Teniente Gobernador Manuel Reyes Veramendi.

El 9 de noviembre la Diputación Permanente le otorgó al Gobernador Lorenzo de Zavala una "licencia para pasar al Distrito Federal por cuatro días a varios asuntos del servicio y particulares" (Acta del 9 de noviembre de 1827. BJMLM: Colección de Actas vol. 15, foja 12).[124]

El 20 de noviembre la Diputación Permanente acordó otorgarle una licencia por un mes al Consejero Mariano Guerra Manzanares, con el propósito de restablecer su salud (Acta del 20 de noviembre de 1827. BJMLM: Colección de Actas vol. 15, foja 15).

La Diputación Permanente acordó que "informe el Gobierno qué número de españoles han salido de Cuernavaca en cumplimiento del decreto número setenta y dos, y los que han salido de esta Ciudad" (Tlalpan); "por qué no se ha cumplido el decreto número ochenta y siete sobre expulsión de religiosos españoles de los que residen en Pachuca, en Toluca y el Desierto", y "por qué a los españoles Don Pedro González del Lino y Don José Baridón, Contador y Oficial Mayor de Diezmos, separados de sus empleos conforme a la Ley en la materia, disfrutan de todo su sueldo, y no de la mitad de él como la misma ley previene" (Acta del 20 de noviembre de 1827. BJMLM: Colección de Actas vol. 15, foja 18).[125]

El 23 de noviembre la Diputación Permanente nombró una comisión de su seno para que consultara con el Gobierno todo lo conducente con el cumplimiento de los decretos de expulsión de españoles. Dicha comisión la integraron los diputados: José María Ruano Calvo y José Antonio Magos (Acta del 23 de noviembre de 1827. BJMLM: Colección de Actas vol. 15, foja 24).

El 11 de diciembre la Diputación Permanente le otorgó una licencia por seis días al Gobernador Lorenzo de Zavala, para pasar a la Ciudad de México (Acta del 11 de diciembre de 1827. BJMLM: Colección de Actas vol. 15, foja 100).[126]

La Diputación Permanente convocó al Congreso a su Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones a iniciar el 2 de enero próximo, en el cual se tratarían, entre otros objetos,

[124] De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147 de la Constitución Política del Estado, la falta del Gobernador debió ser cubierta por el Teniente Gobernador Manuel Reyes Veramendi.
[125] El 27 de noviembre de 1827 la Diputación Permanente aprobó por segunda ocasión la proposición aquí enunciada (Proposición del 27 de noviembre de 1827. BJMLM: vol. 15, foja 35).
[126] De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147 de la Constitución Política del Estado, la falta del Gobernador debió ser cubierta por el Teniente Gobernador Manuel Reyes Veramendi.

los de: “verificar el análisis de la Memoria y cuentas que haya pendientes del anterior Gobernador”, “sistemar (sic) la Administración de Justicia, resolver sobre los gastos de todas las nuevas obras pendientes en esta Ciudad (Talpan)”, “tratar los asuntos pendientes de hacienda e instrucción pública”, y “aclarar lo conducente sobre la expulsión de los españoles en el Estado” (Convocatoria del 11 de diciembre de 1827. BJMLM: vol. 33, exp. 87).

El 13 de diciembre la Diputación Permanente en sesión extraordinaria pidió al Gobierno que se le informare sobre “los movimientos (a causa de la aplicación de la ley de expulsión de españoles) que se han advertido en esta Ciudad (Tlalpan) y sus inmediaciones, manteniéndole que la Diputación se mantendrá reunida en sesión permanente extraordinaria, hasta en tanto dé las noticias que se le piden” (Acta del 13 de diciembre de 1827. BJMLM: Colección de Actas vol. 15, foja 104).

La Diputación Permanente a solicitud del Gobierno, determinó que el Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso iniciara el 20 del actual y no el 2 de enero próximo, por exigirlo las actuales circunstancias políticas (Poder Legislativo II, 2001. Convocatoria del 13 de diciembre de 1827: 48).

El 14 de diciembre la Diputación Permanente al reconocer la infracción del Gobernador a los decretos sobre expulsión de españoles, dispuso que se pasase dicho “expediente al depósito para dar cuenta al Honorable Congreso en su próxima reunión a sesiones extraordinarias, para que si lo tuviera a bien, tome en consideración la falta de observancia de los decretos números 72 y 87 que la comisión ha advertido al examinar el citado expediente” (Acta del 14 de diciembre de 1827. BJMLM: Colección de Actas vol. 15, foja 111).

El 20 de diciembre el Congreso reunido en Junta integró la Mesa Directiva de su Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, presidida por el Diputado José Ignacio González Caraalmuro. Nombró como Vicepresidente al Diputado Mariano Campos, como secretarios propietarios a los diputados: Antonio María Cardona y Luciano Castorena y como Secretario Suplente al Diputado José Sierra (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 20 de diciembre de 1827: 1).

El Gobernador Lorenzo de Zavala, al acudir a la apertura del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso, les indicó a los diputados que “sucesos sumamente desagradables y de funesta trascendencia han obligado al Gobierno y

Diputación Permanente a reuniros antes de la época que se había pensado. Al acudir a buscar remedios a los males que afligen al Estado, os encontráis con una fuerza armada dentro del mismo, que lejos de proponerse sostener las leyes, intenta darlas a las legislaturas de la Unión, y obligaros a ser el conducto de sus comunicaciones: y como los cuerpos legislativos sin libertad son considerados en el despacho común como no existentes, parece que el acto solemne de dar principio a vuestras augustas funciones debía ser el mismo tiempo de cerrarlas. Sin embargo, la presunción de que el exaltado entusiasmo de los armados, cederá a la presencia de los legisladores, y la de que las medidas que éstos tomarán con el tino y prudencia de que han dado pruebas, bastarán para calmarlos, da esperanzas al Ejecutivo de que no será infructuosa esta convocatoria anticipada" (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 20 de diciembre de 1827: 1).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado José Ignacio González Caraalmuro, indicó que "el Soberano Congreso y el Estado de México se hallan plenamente satisfechos de la sabia y prudente conducta que en días tan críticos y verdaderamente peligrosos ha observado el Gobierno. La conclusión y el término que han tenido unos movimientos que pudieran haber atraído muy graves consecuencias, da a conocer de un modo inequívoco la cordura con que se ha conducido. Este Congreso, y los miembros que lo componen en particular, se ocuparán de la felicidad pública, a cuyo objeto no puede menos que aspirar el patriotismo que a cada uno de ellos anima, procurando corresponder así a la confianza y satisfacer las esperanzas del Gobierno y de todo el Estado, que no serán frustradas" (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 20 de diciembre de 1827: 1).

El Congreso General expidió la Ley de Expulsión de los Españoles, la cual disponía que el Presidente en Consejo de Ministros y previo informe del Gobernador del Estado respectivo, exceptuaría de salir del territorio de la República a los españoles "que hayan prestado servicios distinguidos a la independencia y hayan acreditado su afección a nuestras instituciones, a los hijos de éstos que no hayan desmentido la conducta patriótica de sus padres, y residan en el territorio de la República, y a los profesores de alguna ciencia o arte, industria útil en ella que no sean sospechosos al mismo Gobierno". También podrían ser exceptuados los "casados con mexicana que hagan vida marital", "los que tengan hijos que no sean españoles", "los que sean mayores de sesenta años", y "los que estén impedidos físicamente con impedimento perpetuo" (Decreto del 20 de diciembre de 1827. BJMLM: vol. 42, exp. 211).

El 21 de diciembre el Congreso tomó conocimiento de los trabajos realizados por la Diputación Permanente desde el 16 de octubre de 1827 (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 21 de diciembre de 1827: 7).

El Presidente del Congreso nombró a los integrantes de una comisión especial que se encargaría de estudiar una proposición del Gobernador, "para disponer hasta la cantidad de diez mil pesos que se exigen para disolverse los pronunciados por la expulsión de los españoles". Dicha comisión la integraron los diputados: José María Ruano Calvo, Rafael Anaya y Román García (Acta de la sesión secreta del 21 de diciembre de 1827. BJMLM: Colección de Actas).

El 24 de diciembre el Congreso le otorgó una licencia al Gobernador Lorenzo de Zavala para separarse de su cargo por doce días, para ir al Distrito Federal (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 24 de diciembre de 1827: 15).[127]

El 29 de diciembre el Congreso General dispuso que "todo mexicano está obligado a concurrir a la defensa de la Patria, cuando sea llamado por la Ley"; que "la Milicia Nacional Local estará sujeta respectivamente a los gobernadores de los estados y al Presidente de la República", y se compondrá de la Infantería, la Artillería y la Caballería; y que dicha Milicia "está obligada a sostener la independencia nacional y la Constitución de la República, y escoltar los reos y los caudales públicos de la Federación en donde no haya tropa permanente o activa sobre las armas, hasta el punto inmediato donde hubiere guarnición. Con respecto a los estados, al Distrito, y los territorios desempeñará la Milicia Cívica las obligaciones que les prescriban sus respectivas legislaturas" (Decreto del 29 de diciembre de 1827. AHEM: G.G.G. vol. 8, exp. 32).

El 4 de enero de **1828** el Congreso pidió que se hiciera "una expresión al Gobierno General que este Congreso hará cuanto penda de él para sofocar el movimiento revolucionario de Montaño" (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 4 de enero de 1828: 42).

El 5 de enero el Congreso designó a Joaquín Lebrija Teniente Gobernador, ante la renuncia que le presentó Manuel Reyes Veramendi (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 89 del 5 de enero de 1828: 48).

[127] De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147 de la Constitución Política del Estado, la falta del Gobernador debió ser cubierta por el Teniente Gobernador Manuel Reyes Veramendi.

El Congreso ante la presencia de un movimiento revolucionario en el país, dispuso que "la Milicia Nacional del Estado se mantendrá sobre las armas en sus respectivos pueblos, ínterin duren las actuales circunstancias", y que "el Gobernador cuidará de que con la misma brevedad se provea de las municiones necesarias a las compañías cívicas que estén sobre las armas en el Estado, con calidad de reintegro por las respectivas municipalidades (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 90 del 5 de enero de 1828: 49).

El Teniente Gobernador Joaquín Lebrija acudió al Congreso a rendir su protesta de ley (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 5 de enero de 1828: 47).

Ante la emergencia provocada por los revolucionarios, el Congreso pidió "que mientras no se acordare otra cosa por el Congreso no se separe de esta Ciudad ninguno de los empleados o funcionarios del Estado que en ella le sirven" (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 5 de enero de 1828: 47).

El Congreso acordó "que dos individuos de la Comisión de Milicia de esta Honorable Asamblea, de acuerdo con el Gobierno, pase a reconocer el armamento y municiones que existen en Depósito en esta Ciudad para que le informe con la debida exactitud el estado en que se encuentre y sirva de conocimiento al Congreso". Los miembros de dicha comisión eran los diputados: José María Velázquez de León y Antonio María Cardona (Acta de la sesión secreta del 5 de enero de 1828. BJMLM: Colección de Actas).

El Congreso resolvió que el Gobierno cumplía con su deber al hacer que "los milicianos defiendan sus propios hogares gratuitamente", y que el Gobernador debía de cuidar "que la Milicia Cívica de Chalco, y toda la del Estado según le pueda ir exigiendo la necesidad, le respete así en orden a los jefes que la han de dirigir, como a los movimientos que le haya de tener" (Acta de la segunda sesión secreta del 5 de enero de 1828. BJMLM: Colección de Actas).

El 7 de enero el Congreso acordó no prorrogarle la licencia que le concedió la Diputación Permanente al Consejero Mariano Guerra Manzanares para separarse de su cargo (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 7 de enero de 1828: 54).

El 8 de enero el Congreso pasó a la Comisión de Peticiones la iniciativa que presentó el Ciudadano "Anastasio Robles, presentando un proyecto de ley para el quinto de

moneda y demás metales de oro y plata" (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 8 de enero de 1828: 58).

El Congreso al acordar "la suspensión de obras y de sueldos a los empleados que no ha creado el Congreso", dispuso que "el Gobierno informara al Congreso la autorización a virtud de la cual haya entendido que está facultado para crear plazas, y señalar sueldos, a fin de que se expida la correspondiente aclaración si se necesita", y a que "para la sesión inmediata ministrara al Congreso una noticia en que conste lo que ha gastado en la obra de la Casa de Moneda" (Acta de la sesión secreta del 8 de enero de 1828. BJMLM: Colección de Actas).[128]

El 10 de enero el Congreso pidió "que se conteste a la Legislatura de Veracruz que la de México ha visto con la mayor indignación, horror y desprecio, su iniciativa secundando el faccioso y revolucionario Plan de Montaño" (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 10 de enero de 1828: 64).

El 14 de enero el Congreso acordó emitir una proclama al Pueblo del Estado, en el que manifestaba su opinión en torno al Plan de Montaño (Acta de la sesión secreta del 14 de enero de 1828. BJMLM: Colección de Actas).

El 15 de enero el Congreso le otorgó una licencia al Gobernador Lorenzo de Zavala para separarse de su cargo por un día, a efecto de pasar "al Distrito de la Federación, para ponerse de acuerdo con el Presidente de la República en orden a las medidas que exige el levantamiento de Acapulco" (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 15 de enero de 1828: 85).

El Teniente Gobernador Joaquín Lebrija asumió la Titularidad del Poder Ejecutivo, en virtud del permiso que le otorgó el Congreso al Gobernador para pasar al Distrito Federal (Carta del 15 de enero de 1828. BJMLM: vol.43, exp. 181).

El 16 de enero el Congreso admitió "al Ciudadano Mariano Guerra Manzanares la dimisión que hace del cargo de Consejero" (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 16 de enero de 1828: 94).

[128] En la sesión del 10 de enero el Gobernador presentó "un informe sobre las plazas que ha creado para llevar a efecto el establecimiento de la Casa de Moneda del Estado" (Acta de la sesión secreta del 10 de enero de 1828. BJMLM: Colección de Actas).

El 18 de enero el Congreso designó como Consejero del Estado a Manuel Martínez de Liébano, en sustitución de Mariano Guerra Manzanares (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 18 de enero de 1828: 94).

El Congreso dispuso que se nombraran "dos individuos de esta Asamblea, que reuniendo a las demás disposiciones necesarias la del influjo y conocimiento en el rumbo del sur, y poniéndose de acuerdo con el Gobierno, vaya a mediar y promover la tranquilidad por el expresado rumbo" (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 18 de enero de 1828: 112).

El Congreso dispuso que "el Gobernador informe rastreando hasta su origen, que fundamentos ha tenido el ciudadano Br. N. Aguilera, para decir que uno de los motivos en el sur, ha sido resentimientos con su Legislatura" (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 18 de enero de 1828: 115).

El 19 de enero el Congreso eligió a los integrantes de la comisión de diputados que irían a Acapulco a investigar las razones del levantamiento armado. Dicha comisión la integraron los diputados: Pablo Galeana y José María Franco (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 19 de enero de 1828: 119).

El 21 de enero el Congreso integró la Mesa Directiva del segundo mes de su Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, presidida por el Diputado Agustín Escudero. Nombró como Vicepresidente al Diputado Vicente Sánchez Barquera, como Secretario Propietario al Diputado José María Velázquez de León y como Secretario Suplente al Diputado Román García (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 21 de enero de 1828: 127).

El 22 de enero el Congreso acordó que "por conducto de la Secretaría se felicite al Benemérito General Guerrero por el triunfo conseguido en Tulancingo contra los facciosos" encabezados por Montaño (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 22 de enero de 1828: 137).

El 24 de enero el Congreso acordó que "se conteste a la Legislatura de Veracruz, que la de México queda íntimamente persuadida de la sabiduría, honradez y patriotismo que caracterizan a aquella, por la retracción del error en que insidió, secundando en su iniciativa al Congreso General, el revolucionario Plan de Montaño; y que se congratula con ella, porque este procedimiento estrechará más firme y perpetuamente los

vínculos de fraternidad y unión que en lo de adelante deben singularizarlas" (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 24 de enero de 1828: 149).

El 30 de enero el Congreso tomó conocimiento del oficio que suscribieron los diputados José María Franco y Pablo Galeana, en donde manifestaron que "dan parte de estar ya puestos a disposición del Gobierno General los pronunciados en Acapulco, por lo que parece concluido el objeto de su misión" (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 30 de enero de 1828: 198).[129]

El Congreso le otorgó una licencia al Gobernador, para pasar al Distrito Federal a sacarse una muela (Acta de la sesión secreta del 30 de enero de 1828. BJMLM: Colección de Actas).[130]

El Congreso facultó "por solo esta vez al Gobierno para que cambie los libramientos que concentra la Casa de Moneda de México tiene, hasta por la pérdida total de 1,890 pesos" (Acta de la sesión secreta del 30 de enero de 1828. BJMLM: Colección de Actas).

El 31 de enero el Congreso dispuso que "la dotación de la plaza de Redactor de este Congreso, se aumenta hasta la cantidad de mil seiscientos pesos anuales, sin otra gratificación, los que se le abonarán desde la fecha de este decreto" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 91 del 31 de enero de 1828: 50).

El Presidente del Congreso designó a los integrantes de la comisión especial que debía formar los estatutos y reglamentos del Instituto Literario. Dicha Comisión la integraron los diputados: José Ignacio González Caraalmuro, Félix Lope de Vergara, Luciano Castorena, Vicente Sánchez Barquera y Epigmenio de la Piedra (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 31 de enero de 1828: 205).

El Congreso acordó "suspender las exhibiciones que de la Tesorería se hacen a todos aquellos empleados cuyas dotaciones no haya aprobado expresamente el Congreso". Dispuso que el "Congreso se reservó la facultad de señalar la época en que deban nombrarse los empleados que halla de tener el establecimiento de la Casa de Moneda, previo el examen y aprobación de las ordenanzas que mandó formar deban

[129] En el acta de la sesión del 7 de febrero de 1828 se insertó el informe de los diputados comisionados a Acapulco (Poder Legislativo III, 1827. Acta del 7 de febrero de 1828: 213).
[130] De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147 de la Constitución Política del Estado, la falta del Gobernador debió ser cubierta por el Teniente Gobernador Joaquín Lebrija.

nombrarse"; que "el Gobierno recogerá los títulos que ya tiene expedidos a los individuos de que habla la proposición anterior, haciendo otro tanto con todos los que se hallen en su caso cualquiera que sea la oficina donde sirvan"; que "las cantidades que por vía de sueldos han percibido ya los que se nombraron empleados en la Casa de Moneda del Estado, se comprenderán en la cuenta general que rinda el Gobierno en el caso de que habla el artículo segundo del decreto número 49[131] de esta Legislatura, expresándose entonces cuáles hayan sido los trabajos que han desempeñado, para la calificación entonces de estos gastos", y que "el Gobierno al abreviar el cumplimiento de la primera proposición, remitirá al Congreso una noticia exacta de todas las exhibiciones que se suspenden, explicando el origen de las que no tengan relación con la Casa de Moneda" (Acta de la sesión secreta del 31 de enero de 1828. BJMLM: Colección de Actas).

El 1 de febrero el Congreso ratificó su decisión de reservarse "la época en que previo el examen y aprobación de las ordenanzas que mandó formar, deben nombrarse los empleados que haya de tener el establecimiento de la Casa de Moneda" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 92 del 1 de febrero de 1828: 50).

El Congreso acordó que se "librase orden por el Gobierno a la Tesorería para que cuando halla numerario de donde hacerlo, anticipe al Diputado Don Antonio del Río a cuenta de sus dietas (de un año y medio) cuatro mil quinientos pesos que solicita, abonando los doscientos cincuenta pesos mensuales que ofrece" (Acta de la sesión secreta del 1 de febrero de 1828. BJMLM: Colección de Actas).

El 4 de febrero el Congreso acordó que no había "lugar a la indemnización que pide el Gobierno en gastos erogados por las partidas de ciudadanos armados con el objeto de pedir la Ley de Expulsión de los Españoles", y que "el Gobierno cuidará que se cumpla la Ley sobre Asonadas, que es tan urgente en las circunstancias" (Acta de la sesión secreta del 4 de febrero de 1828. BJMLM: Colección de Actas).

El 6 de febrero el Congreso concedió "una total amnistía a todos los súbditos del Estado que hayan tomado parte en los movimientos sobre la expulsión de españoles, con respecto al conocimiento de los tribunales del Estado, y sin perjuicio de tercero" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 93 del 6 de febrero de 1828: 50).

[131] Este decreto se refiere al establecimiento del resguardo provisional de la renta del tabaco. En el artículo segundo se indicaba que "el Visitador disfrutará de mil pesos anual, el Tesorero ochocientos, y cada uno de los guardas seiscientos pesos".

El 7 de febrero el Presidente del Congreso nombró a los integrantes de la comisión especial que estudiaría lo referente a las erogaciones que el Gobierno había hecho sin autorización del Congreso. Dicha comisión se integró con los diputados: Félix Lope de Vergara, José María Velázquez de León y Luciano Castorena (Acta de la sesión secreta del 7 de febrero de 1828. BJMLM: Colección de Actas).

El 11 de febrero el Congreso dispuso que "el Gobierno arreglara lo prevenido en el artículo 5º del decreto del Congreso de la Unión, del 20 de diciembre último, para la excepción de los religiosos españoles, que conforme al decreto número 87, dictado por esta Asamblea, deben salir del Estado" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 94 del 11 de febrero de 1828: 51).

El 13 de febrero el Congreso le otorgó una licencia al Gobernador para separarse de su cargo, con el propósito de "ir al Distrito Federal a asistir a la celebridad del aniversario del cumpleaños de Washington" (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 13 de febrero de 1828: 205).[132]

El Congreso le otorgó una licencia para separarse de su cargo por un mes al Diputado José Sierra (Acta de la sesión secreta del 13 de febrero de 1828. BJMLM: Colección de Actas).

El 14 de febrero el Congreso admitió "al Ciudadano Manuel Martínez de Liébano, la dimisión que hace del cargo de Consejero" (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 14 de febrero de 1828: 224).

El Congreso aceptó que se pasara a la Comisión de Justicia la Ley para el Arreglo de la Administración de Justicia que elaboró el Congreso Constituyente, con el propósito de que se reformara y se hicieran "las observaciones del Gobierno que hay pendientes acerca de ella" (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 14 de febrero de 1828: 224).

El 16 de febrero el Congreso acordó que se imprimiera el dictamen de la Comisión de Análisis de las Memorias de los Años de 26 y 27 que presentó el ex Gobernador Melchor Múzquiz (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 16 de febrero de 1828: 229).

[132] De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147 de la Constitución Política del Estado, la falta del Gobernador debió ser cubierta por el Teniente Gobernador Joaquín Lebrija.

El dictamen antes señalado se integró por 37 artículos, en donde se señalaba que “el año económico será el que corre desde 16 de octubre hasta 15 de octubre siguiente”; que “el Gobierno cuidará de que los ayuntamientos que han sido morosos en remitir las ordenanzas municipales, lo verifiquen con la posible brevedad”; que “el Gobierno cuidará que se remita a las prefecturas la noticia exacta y oportuna de escuelas de primeras letras y niños educandos que haya en ellas, como también el sistema y método de su instrucción”; que “el Gobierno pedirá a quien corresponda, el informe exacto y justificado de los gastos que se hicieron en la propagación y conservación del fluido vacuno de los años 26”, y que “el Gobierno pedirá a la Contaduría exponga la razón de haberse comprendido por duplicado la mitad del mes de octubre de 25 en los estados de ambas memorias, relativas a papel sellado; como también el que la misma Contaduría especifique los gastos erogados en la conducción y demás del propio efecto con la debida clasificación de los hechos por el Distrito, y de los invertidos en las administraciones del Estado” (Poder Legislativo, Dictamen, 1828).[133]

El 18 de febrero el Congreso al fundar el Instituto Literario en acatamiento al mandato constitucional, dispuso que éste contara con un Rector, un Director de la Escuela Lancasteriana para Niños, una Directora de la Escuela Lancasteriana para Niñas y catedráticos de: Teología, Derecho Constitucional Público, Economía Política, Filosofía, Matemáticas, Gramática Latina y Castellana, Idioma Mexicano e Idioma Francés. Se establecía que “de cada una de las prefecturas del Estado, vendrán tres niños al Instituto Literario, para cuyo sostén se ministrarán de los fondos públicos 300 pesos anuales por cada uno, para alimentos, vestidos, libros y utensilios” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 95 del 18 de febrero de 1828: 50).

El Congreso acordó desechar la acusación que obraba en contra del Gobernador, por haber creado empleos y emprendido obras que no estaban autorizados en el Presupuesto (Acta de la sesión secreta del 18 de febrero de 1828. BJMLM: Colección de Actas).

El 19 de febrero el Congreso nombró a Francisco Peláez como Consejero del Gobierno en el lugar que ocupaba Mariano Guerra Manzanares (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 96 del 19 de febrero de 1828: 54).

[133] El proceso de aprobación de los artículos que comprende este dictamen inició en la sesión del 11 de marzo de 1828 (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 12 de marzo de 1828: 44).

El consejero Francisco Peláez acudió al Congreso a rendir su protesta de ley (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 19 de febrero de 1828: 235).

El 20 de febrero el Gobernador Lorenzo de Zavala, al acudir a la clausura del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso, señaló que "el término feliz de los movimientos revolucionarios a mediados de enero restituyendo la paz al Estado, os permitió entrar en los negocios que señalaba la convocatoria. El examen de la Memoria de mi digno sucesor hecho por la Comisión y presentado ya al Congreso, es un documento de la sabiduría de éste, y la honradez de aquel. Sólo este análisis ha sido bastante para ocupar las tareas del Congreso dignamente" (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 20 de febrero de 1828: 241).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Agustín Escudero, indicó que "en testimonio de esta verdad recordemos las asiduas tareas de los señores diputados, por el resultado de sus deliberaciones, y se verá que no han omitido cosa alguna, trabajando incesantemente en el exacto arreglo de los ramos de que se han ocupado. Los negocios para que fueron convocadas estas sesiones extraordinarias, han sido unos terminados completamente, y otros adelantados en gran parte, y si no se pudieron concluir como se apetecía, ha sido tanto por que algunas revoluciones han trastornado en estos días la paz interior del Estado que para acallarlas necesitó el Congreso dedicarse exclusivamente a adoptar las medidas oportunas que debía tomar, como porque la dificultad y número de aquellos, no le dieron lugar a expedición en tiempo del de las sesiones que hoy se cierran" (Poder Legislativo III, 1828. Acta del 20 de febrero de 1828: 241).

El 2 de marzo el Congreso reunido en Junta integró la Mesa Directiva del primer mes de su Tercer Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado Luciano Castorena y la Vicepresidencia del Diputado Antonio del Río. Nombró como secretarios propietarios a los diputados: Román García y José Rodrigo Castelazo y como Secretario Suplente al Diputado Agustín Vallarta (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 2 de marzo de 1828: 1).

El Gobernador Lorenzo de Zavala, al acudir a la apertura del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, señaló que habían iniciado los trabajos estadísticos, que el Estado se mantenía en la mayor tranquilidad, que la Casa de Moneda había acuñado las primeras monedas, que "los pueblos en lo general viven satisfechos de su Gobierno", y que éstos por su conducto le pedían al Congreso que expidiera "leyes

sabias y acomodadas a sus circunstancias que sustituyan al caos horrendo de una legislación civil y criminal, un código conforme a los progresos de la civilización del mundo ilustrado" (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 2 de marzo de 1828: 2).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Luciano Castorena, señaló que "al comenzar esta Asamblea en el presente año sus tareas ordinarias, no puede menos que manifestar al Gobierno y a todo el Estado a quien representa, las disposiciones en que se halla de procurar la elevación y engrandecimiento público por cuantos medios estén a su alcance. Pruebas sin duda ha dado ya inequívocas de sus miras, aún en la más pequeña de sus operaciones, no son otras que la felicidad de la mayor parte de los ciudadanos, y para llevar adelante este objeto hace hoy presente que se encargará de todos los puntos de que acaba de hablar el Gobierno" (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 2 de marzo de 1828: 4).

El 3 de marzo el Congreso hizo "a las cámaras de la Unión una iniciativa contraída a que no se apruebe el contenido de la proposición que se le ha presentado por el Señor Martínez Zurita sobre amnistía por la revolución de Montaño", y para "que se instruya a los diputados y senadores por este Estado, sobre que la opinión de su Legislatura es contraria a dicha proposición del Señor Martínez Zurita" (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 3 de marzo de 1828: 6).

El 5 de marzo el Congreso aprobó enviar una iniciativa al Congreso General, a efecto de "que determine lo correspondiente sobre si pertenecen al Estado varios pueblos cortados por la línea del Distrito Federal" (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 5 de marzo de 1828: 24).

El 12 de marzo el Congreso le indicó "al Gobernador que se ha visto con agrado la providencia que tomó para impedir que los caudales pertenecientes a las rentas decimales se entreguen en México por los colectores y que igualmente se le autoriza, mientras la Asamblea toma en consideración este negocio, para dictar las medidas que crea conducentes, a fin de contener los ataques que se intentan dar por el Gobierno Federal al Estado de México" (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 12 de marzo de 1828: 55).

El 13 de marzo el Teniente Gobernador Joaquín Lebrija, acudió al Congreso a leer la primera parte de la Memoria de Gobierno (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 13 de marzo de 1828: 66), en cuyo texto el Gobernador señaló que "muy difíciles y arduas

circunstancias han rodeado al Gobierno durante el periodo de su primer año constitucional. Encargado de fundar una Ciudad para los habitantes que lleva consigo un Gobierno establecido; de construir edificios para los establecimientos públicos, teniendo que combatir contra los obstáculos que ponen a cada paso la falta de recursos de todo género, y más que todo, la maledicencia, la ignorancia y el espíritu de partido; apenas se puede concebir como hemos podido llegar al punto en que nos hallamos: con una Casa de Moneda en ejercicio: una fábrica de puros y cigarros en acción: edificios de las oficinas y tribunales, concluidos unos y al concluirse otros, y un pueblo convertido en ciudad por el aparato que representa" (Poder Legislativo, Memoria, 1828: 1).

Lorenzo de Zavala señaló que los recursos económicos no alcanzaron para instalar adecuadamente los edificios del Gobierno en la Ciudad de Texcoco, que el Estado a pesar de ser "grande y poderoso por los elementos de riqueza que posee, se vio repentinamente sin Capital; es decir, sin los edificios y recursos que ofrece una grande población, en la que se encuentran aquellos medios de subsistir de que necesitan los grandes cuerpos morales que se alimentan de las discusiones públicas, y se aprovechan de sus resultados. Lanzados de la inmensa Capital que era anteriormente el asiento de sus Supremos Poderes, los individuos que lo componían han hallado obstáculos casi insuperables en su establecimiento".

Indicó que se había nombrado al "responsable de levantar la estadística del Estado, que la población del mismo ascendía a 982,418 habitantes, que en materia agrícola, mercantil y fabril no se reportaban avances significativos, que no se había podido concluir la reparación de las cárceles, que continuaban los trabajos para erigir el monumento a Morelos en Ecatepec, que habían iniciado las tareas para establecer un Museo, que se había establecido una Sociedad Patriótica en Toluca, que la educación de primeras letras se daba en 1,059 escuelas a 40,960 niños y 1,786 niñas, que se había establecido una Academia de Dibujo y que había sido arreglada la Secretaría de Gobierno en virtud de la iniciativa que para ello hizo el Congreso, fundándola en lo crecido de sus labores y la escasez de oficiales".

Entre los anexos de esta Memoria estaban: las noticias de las minas de oro y plata existentes en el Estado, el número de fusiles distribuidos para la Milicia Cívica y el estado de la fuerza que se compone, el estado que manifiesta los gastos causados en los labrados de la Fábrica de Texcoco, la razón de los consumos, valores, gastos y líquido que produjo el ramo de papel sellado y el estado de los ingresos y egresos

habidos en la Tesorería General del 16 de octubre de 1826 al 11 de marzo de 1827, el cual presentaba un superávit de 229,858 pesos.

El Congreso autorizó a su Mesa Directiva "para poder variar las comisiones en el número de sus individuos" (Acta de la sesión secreta del 13 de marzo de 1828. BJMLM: Colección de Actas).

El 14 de marzo luego que concluyó la lectura de la Memoria presentada por el Gobierno, el Congreso acordó que se imprimiese (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 14 de marzo de 1828: 67).

El 15 de marzo el Congreso le otorgó al Gobernador Lorenzo de Zavala "una licencia por cuatro días para pasar al Distrito Federal viniendo diariamente al despacho" (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 15 de marzo de 1828: 67), "con el objeto de arreglar varios asuntos interesantes al servicio, y más particularmente el de la Cuarta Episcopal" (Carta del 15 de marzo de 1828. BJMLM: vol. 41, exp. 111).[134]

El 18 de marzo el Congreso dispuso que el Gobierno les manifestara a los prelados diocesanos para que "a lo menos todos los días domingos y festividades de gran solemnidad, instruyendo con discursos edificativos a los fieles que les están encomendados, según su capacidad y la de sus ovejas, enseñándoles lo que es necesario que todos sepan para conseguir la salvación eterna, anunciándoles con brevedad y claridad los vicios que deben huir, y las virtudes que deben practicar; y al mismo tiempo excitándolos oportunamente y religiosamente a la sujeción a las leyes, obediencia y respeto debido a las autoridades y adhesión y amor al sistema de gobierno que felizmente nos rige" (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 18 de marzo de 1828: 82).

El 20 de marzo el Congreso dispuso que "el interventor de que habla el art. 1º del arancel general, que para las aduanas marítimas y de la frontera de la República Mexicana se sirvió decretar su Congreso General, lo será en el Puerto de Acapulco, perteneciente al territorio del Estado, el Administrador de la Aduana del mismo nombre" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 97 del 20 de marzo de 1828: 55).

[134] De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147 de la Constitución Política del Estado, la falta del Gobernador debió ser cubierta por el Teniente Gobernador Joaquín Lebrija.

El 22 de marzo el Congreso ordenó al "Gobierno dictara las providencias que estime necesarias, para que las oficinas de la Contaduría y Tesorería de Diezmos, se trasladen antes de treinta días al lugar que dentro del territorio del Estado estime el Gobierno más conveniente" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 98 del 22 de marzo de 1828: 55).

El Congreso acordó reducir a dos las cuatro plazas de porteros del Tribunal, quedando con el cargo de procuradores de pobres (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 107 del 22 de marzo de 1828: 65).

El 27 de marzo el Congreso le autorizó al Gobernador Lorenzo de Zavala una licencia para separarse de su cargo, con el propósito de "pasar al Distrito Federal a sacarse una muela" (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 27 de marzo de 1828: 118), tal como lo manifestó en la carta que presentó al Congreso (Carta del 27 de marzo de 1828. BJMLM: vol. 41, exp. 111).[135]

El 29 de marzo el Congreso determinó que "el Gobierno computará el año económico desde el 16 de octubre hasta el 15 del mismo mes del año siguiente" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 99 del 29 de marzo de 1828: 55).

El Congreso autorizó al "Gobernador para que pueda invertir 2,000 pesos más en la conclusión del Camino de Veracruz por Calpulalpan, sobre los cuatro que lleva gastados (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 106 del 29 de marzo de 1828: 64).

El Congreso dispuso dirigir "a la Cámara de Representantes una iniciativa secundando a la de la Honorable Legislatura de Guanajuato, a fin de que se deseche la proposición que pide que se graven las platas con el dos y medio por ciento en su amonedación" (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 29 de marzo de 1828: 126).

El 9 de abril el Congreso integró la Mesa Directiva del segundo mes de su Tercer Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado José María Velázquez de León y la Vicepresidencia del Diputado Rafael Anaya. Nombró como Secretario Propietario al Diputado José María Franco y como Secretario Suplente al Diputado Antonio María Cardona (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 9 de abril de 1828: 128).

[135] De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147 de la Constitución Política del Estado, la falta del Gobernador debió ser cubierta por el Teniente Gobernador Joaquín Lebrija.

El Congreso le pidió al Gobernador "una noticia detallada de la fuerza efectiva de que se compone actualmente la Milicia Cívica de Infantería y Caballería del Estado, con expresión de armamento, fornituras, municiones, y demás útiles con que cuenta, especificándose la fuerza que haya en cada uno de los pueblos, partidos y prefecturas a que corresponda dicha Milicia; así como también el número de fusiles, carabinas, pistolas, sables, espadas, municiones y carruajes que existan en los almacenes de la Ciudad" (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 9 de abril de 1828: 131).

El 12 de abril el Congreso expidió por primera vez un decreto referente a la dispensa de estudios, con lo que se suplió la autorización de dichos trámites a la aprobación de una proposición. En aquella ocasión dispuso que "se dispensa, por las particulares circunstancias que concurren en el ciudadano Joaquín Ruiz de Olloqui, el requisito de haber estudiado en algún colegio por el tiempo que determinen sus constituciones, para recibirse de abogado" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 100 del 12 de abril de 1828: 56).

El 14 de abril el Congreso General dispuso que "todo extranjero que haya residido dentro de los límites de los Estados Unidos Mexicanos por el espacio de dos años continuos, podrá pedir carta de naturaleza". Para la instrumentación de dicha medida se facultó a los gobernadores de los estados y a los jefes políticos del Distrito y territorios de la Federación a expedir la carta de naturalización previa presentación del interesado con un año de anticipación al "Ayuntamiento del lugar en que reside, haciendo manifestación del designio que tiene de establecerse en el País" (Decreto del 14 de abril de 1828. AHEM: L.L.D.F. vol. 5, exp. 28).

El 24 de abril el Congreso le concedió al Gobernador Lorenzo de Zavala una licencia para separarse de su cargo por cuatro días para pasar al Distrito Federal (Acta de la sesión secreta del 24 de abril de 1828. BJMLM: Colección de Actas).[136]

El 26 de abril el Congreso al aprobar una iniciativa al Congreso General para que no se centralizaran los diezmos, dispuso que "esta iniciativa se imprimiera, para que remitiera a las otras legislaturas y a los diputados y senadores por el Estado en el Congreso General" (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 26 de abril de 1828: 270).

[136] De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147 de la Constitución Política del Estado, la falta del Gobernador debió ser cubierta por el Teniente Gobernador Joaquín Lebrija.

El 28 de abril el Congreso acordó “que dentro de ocho días se traslade el Congreso y Secretaría (para devolver al Ciudadano Manuel Rodríguez la casa que ahora ocupa esta Asamblea) a las piezas del Hospicio que a juicio de la Comisión de Policía Interior estuvieren en mejor disposición para el efecto, ínterin se concluyen las que le están asignadas” (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 28 de abril de 1828: 273).

El Congreso acordó que “ninguno de los edificios y piezas destinadas al servicio del Estado incluso las del Instituto Literario, pueda ocuparse en los días de concurrencia, de la próxima Pascua con otro objeto que es el de su destino” (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 28 de abril de 1828: 273).

El Congreso propuso que “el Gobierno del Estado revoque la orden que comunicó a los prefectos del mismo para que los colectores de diezmos hagan sus enteros en la Tesorería General”, y para “que se suspendan los efectos del decreto número 98 que previno la traslación de la Contaduría de los Diezmos al territorio del Estado, hasta que el Congreso resuelva lo conveniente en la representación del Cabildo Eclesiástico que solicita la derogación de dicho decreto” (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 28 de abril de 1828: 274).

El 30 de abril el Congreso pidió que se “excite la actividad y celo del Gobierno, a fin de que se tomen las medidas más eficaces para que a la mayor brevedad satisfagan a la Hacienda del Estado todos los que fueren deudores de plazos cumplidos, el total de las cantidades que estuvieren debiendo, sean cuales fueren, poniéndoles un término perentorio que no exceda de un año, comenzando a contárseles desde que se apruebe esta proposición” (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 30 de abril de 1828: 292).

El 2 de mayo el Congreso al sesionar por última vez en la casa del Ciudadano Manuel Rodríguez integró la Mesa Directiva del tercer mes de su Tercer Periodo Ordinario bajo la Presidencia del Diputado Félix Lope de Vergara y la Vicepresidencia del Diputado José Sierra. Nombró como Secretario Propietario al Diputado Agustín Vallarta y como Secretario Suplente al Diputado José Ignacio González Caraalmuro (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 2 de mayo de 1828: 313).

El Congreso le concedió “licencia al Impresor Ciudadano Mariano Galván Rivera, para que bajo su responsabilidad, pueda incluir con las de los demás estados de la

República la Constitución del de México, en la edición que a su costa se propone hacer de todas" (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 2 de mayo de 1828: 319).

El Congreso dispuso que "a la mayor posible brevedad remita el Gobierno a este Congreso una relación circunstanciada de las cantidades que ingresaron el mes de abril último en la Tesorería del Estado, y otra de todas y cada una de las partidas de su egreso, con expresión del día en que hayan salido, de las personas y causas por que se les hayan enterado", la cual debía publicarse "por la prensa, teniendo por encabezamiento la exposición que precede a estas proposiciones, y los términos en que éstas queden, aprobadas que sean por el Congreso" (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 2 de mayo de 1828: 327).

El Congreso dispuso que a "los administradores y receptores de aduanas se les abonarán por ahora para sí y todos gastos, el tres por ciento sobre las cantidades que cada uno recaudare por sí en sus respectivos territorios, por el derecho de elaboración que se impone al aguardiente de caña", y que "de las cantidades que los receptores recauden y enteraren en las aduanas de las cabeceras de partido, se abonarán además los administradores el uno por 100 sobre las mismas cantidades" (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 2 de mayo de 1828: 333).

El 7 de mayo el Congreso al sesionar por primera vez en el Hospicio de Tlalpan, dispuso "que por conducto del Gobernador se manifieste al Ciudadano Manuel Rodríguez, que esta Honorable Asamblea conservará en su aprecio el servicio que ha hecho (al facilitar su casa para la instalación de su Asamblea), que está dispuesta a indemnizarle de cualquier perjuicio que haya resentido, sin dejar por esto de considerarse como un digno Ciudadano del Estado de México" (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 7 de mayo de 1828: 355).

El Congreso aprobó el decreto de impuestos a la caña, aguardiente y maguey, en el cual se estableció que quedaban libres de los derechos de alcabala: el algodón y todos sus tejidos y manufacturas, los de lino, lana y seda, el aguardiente de caña, el azúcar, la miel de caña, la panocha y el piloncillo de todas clases, siempre y cuando estos productos fueran elaborados en el territorio del Estado (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 101 del 7 de mayo de 1828: 56).

El 8 de mayo el Congreso le otorgó una licencia para separarse de su cargo por quince días al Diputado Agustín Escudero (Acta de la sesión secreta del 8 de mayo de 1828. BJMLM: Colección de Actas).

El 9 de mayo el Gobernador expidió la parte reglamentaria del decreto número 101 del 7 de mayo de 1828, para facilitar el cobro de los impuestos a la caña, al aguardiente y al maguey (Poder Legislativo II, 2001. Decreto del Ejecutivo del 9 de mayo de 1828: 59).

El 12 de mayo el Congreso declaró Ciudadano del Estado a Carlos Sartorio (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 109 del 12 de mayo de 1828: 65).

El Congreso acordó que se imprimiera un proyecto de Ley sobre el Arreglo de la Milicia Nacional del Estado que sería presentado al Congreso de la Unión (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 12 de mayo de 1828: 395 y proyecto del 12 de mayo de 1828. BJMLM: vol. 44, exp. 225).[137]

El 13 de mayo el Congreso autorizó a la Diputación Permanente del Estado de Chihuahua la reimpresión de la Constitución Política del Estado (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 13 de mayo de 1828: 409).

El Congreso le concedió al Diputado Mariano Campos una licencia para separarse de su cargo por los días que restaban del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones (Acta de la sesión secreta del 13 de mayo de 1828. BJMLM: Colección de Actas).

El 14 de mayo el Congreso General facultó al Gobierno de la República “para poner sobre las armas toda la Milicia Activa que juzgue necesaria, como igualmente para disponer de la Cívica en el número que crea conveniente, pudiéndola sacar fuera de sus respectivos estados, distritos o territorios” (Dublan II, 1876. Decreto del 14 de mayo de 1828: 73).

El 16 de mayo el Congreso restituyó “la Residencia del Ayuntamiento de la Municipalidad de Santa Fe en los altos de Tacubaya, situada actualmente en

[137] El 21 de mayo de 1828 el Congreso inició el proceso de aprobación de esta iniciativa (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 21 de mayo de 1828: 469).

Cuajimalpa, el Pueblo de aquel nombre, como lo fue desde su origen" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 102 del 16 de mayo de 1828: 61).

El Congreso estableció las reglas para la integración de la Sección de Gran Jurado que debía determinar si ha o no lugar para la formación de causa contra los diputados, el Gobernador, su Teniente, consejeros del Estado y ministros del Supremo Tribunal de Justicia. Dicha Sección debía integrarse "por esta vez en el primer día después de publicado este decreto y en lo sucesivo anualmente en los primeros días de las sesiones de marzo" a partir de una lista de doce diputados que propondría una Comisión Especial, para que mediante una insaculación "se sacaran por suerte seis individuos que formarán la Sección de Gran Jurado, haciendo el primero de Presidente y el último de Secretario, sin voto en la Sección" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 103 del 16 de mayo de 1828: 62).

El Congreso declaró que no necesitaban indulto "los reos sentenciados por los tribunales de este Estado, al servicio de la armada nacional, y hechos prisioneros en el Bergantín Guerrero" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 104 del 16 de mayo de 1828: 64).

El Congreso le concedió la carta de ciudadanía del Estado a Marcos Bartaní (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 105 del 16 de mayo de 1828: 64).

El Congreso dispuso que "se manifieste al Congreso General y al Gobierno de la Federación las buenas disposiciones de la Legislatura de México para auxiliarle en el orden de la independencia con cuantos recursos tiene en su mano, ya con los brazos de sus ciudadanos, como con los arbitrios con que cuenta" (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 16 de mayo de 1828: 429).

El 19 de mayo el Congreso autorizó "al Gobernador para que pueda invertir 2,000 pesos más en la conclusión del Camino de Veracruz por Calpulalpan sobre los 4,000 que lleva gastados, sujetos a las cuentas y aprobación que para éstos sancionó el decreto de este Congreso, del 5 de abril del año próximo pasado" (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 19 de mayo de 1828: 448).

El 20 de mayo el Congreso expidió el decreto que fijó las contribuciones que han de formar la Hacienda del Estado y sus gastos ordinarios en el año que habría de contarse del 2 de junio de 1828 al 2 de junio de 1829, en el cual se estableció que el

Estado tendría ingresos por concepto de: alcabalas, consumo de efectos extranjeros, impuesto a la moneda, renta del tabaco, papel sellado, derechos de ensaye y de metales preciosos, bienes vacantes y mostrencos, multas, media anata secular y eclesiástica, peajes, temporalidades, derechos de amortización, dos reales por tonelaje de buques extranjeros, nuevos diezmos, noveno y nuevo decimal, pensión a la Mitra de México, vacantes mayores y menores, espolios, oficios vendibles y renunciables, elaboración de la moneda y derechos accesorios y rentas de gallos (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 114 del 20 de mayo de 1828: 67).[138]

En cuanto a los egresos en el Poder Legislativo, se fijaron $3,000.00 para las dietas de cada uno de los 21 diputados, $1,600.00 para el Redactor, $1,500.00 para el Oficial Mayor, $1,200.00 para el Segundo Oficial, $1,000.00 para el Archivero, $365.00 para un Portero, $750.00 para dos escribientes, $500.00 para cuatro escribientes, $264.00 para el Portero de la Secretaría, $800.00 para gastos de oficina, $6,000.00 para impresiones y $5,000.00 para habilitar los muebles necesarios al Salón de Sesiones del Congreso, su Secretaría, Archivo y Sala de Comisiones.

Por lo que respecta al Poder Judicial se fijaron 43,500.00 para los seis ministros y el Fiscal, en tanto que en el Poder Ejecutivo se determinó que el Gobernador percibiera $5,000.00 al año, el Teniente Gobernador $3,500.00, cada uno de los cuatro consejeros $2,000.00, el Secretario del Gobernador $2,500.00, el Oficial Mayor $1,800.00, cada uno de los ocho prefectos $3,000.00 y cada uno de los 30 subprefectos $350.00; además se establecían $18,176.00 para el Instituto Literario, $12,000.00 para la formación de la estadística, $9,000.00 para la compra de libros, $200,000.00 como fondos de la Casa de Moneda, $12,000.00 para la Milicia Activa, $13,839.00 para las cárceles, $12,750.00 para los sueldos de la Contaduría General y $9,200.00 para los sueldos de la Tesorería General.

El Congreso acordó que el Estado de México debía contribuir con 80 mil pesos al Gobierno Federal (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 20 de mayo de 1828: 450).

El 21 de mayo el Congreso aprobó una exposición dirigida a los Supremos Poderes de la Federación, en donde manifestó que ante la inminente invasión de las tropas españolas le ofrecía “los muchos recursos con que cuenta este Estado; anunciándole que se apresura a organizar su Milicia Activa, y que dentro de breve tiempo tendrá

[138] Este decreto constaba de apartados referentes: al Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al resumen general.

sobre las armas ocho o diez mil defensores de la libertad, resueltos a recibir la muerte primero que obedecer a un déspota, sin contar con doscientos mil hombres, por lo menos, que en caso necesario se apostarán a sostener nuestras sagradas instituciones. Igualmente ha tomado ya esta Legislatura las medidas más oportunas para aumentar sus tesoros, y todo, todo contribuirá al sostén de nuestra cara independencia; pues cuando se conciba está en peligro, no hay consideración, ni habrá otro sentimiento ni deseo que el de libertad o muerte" (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 21 de mayo de 1828: 484).

El 22 de mayo el Congreso abolió el derecho del cinco por ciento que se cobraba a la extracción de plomo de mineral (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 108 del 22 de mayo de 1828: 65).

El Congreso determinó que hasta el 20 de septiembre de 1827 estuvo vigente la gracia concedida por la Junta Superior de Hacienda de México para el pago del derecho de amortización a las donaciones para el primer dote o primera fundación de cualquier obra pía (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 110 del 22 de mayo de 1828: 66).

El Congreso declaró ciudadanos del Estado a: Gustavo Adolpho y a Cristiano María Stein (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 111 del 22 de mayo de 1828: 66).

El Congreso declaró Ciudadano del Estado a Santiago Smith Wilcocks (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 112 del 22 de mayo de 1828: 66).

El Congreso dispuso que "los alcaldes de las cabeceras de partido del Estado, que sean llamados… para encargarse de los juzgados de primera instancia por hallarse éstos vacantes, gozarán desde la fecha de publicación de este decreto, la mitad del sueldo de dichas plazas", y que "igual asignación disfrutaran en los casos de enfermedad, licencia o suspensión de los jueces letrados, abonándose a éstos la otra mitad" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 113 del 22 de mayo de 1828: 66).

El 23 de mayo el Congreso al aprobar el traslado de la imprenta que indebidamente se había enviado a la Ciudad Federal, dispuso que el Diputado José María Franco se encargara de su dirección y que en dicho establecimiento "se imprimirán primeramente todos los papeles oficiales de los tres Supremos Poderes del Estado" (Acta de la sesión secreta del 23 de mayo de 1828. BJMLM: Colección de Actas).

El 24 de mayo el Congreso acordó abonarle al Secretario del Gobernador una cantidad que no exceda de 500 pesos para el pago de la casa en que viva (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 115 del 24 de mayo de 1828: 71).

El Congreso dispuso que "la moneda que circule en lo interior del Estado, sin la guía que acredite haber pagado el dos por ciento del derecho de extracción, sólo satisfará esta cuota, y como única pena el tres por ciento" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 116 del 24 de mayo de 1828: 71).

El Congreso facultó al "Gobernador para que sólo a los empleados que en propiedad sirvan destino fijo en el Estado, pueda anticipar una cantidad que no exceda a la paga de dos meses de sueldo anual que disfruten" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 117 del 24 de mayo de 1828: 71).

El Congreso declaró Ciudadano del Estado a José Hernández Chico, quien fungía como senador del Estado (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 118 del 24 de mayo de 1828: 72).

El 30 de mayo el Congreso integró la Diputación Permanente de su Tercer Receso, presidida por el Diputado Epigmenio de la Piedra. Nombró como Secretario al Diputado Luciano Castorena, como miembros a los diputados: Vicente Sánchez Barquera, José Sierra y José María Ruano Calvo, y como Suplente al Diputado Rafael Anaya (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 30 de mayo de 1828: 487).

El Congreso dispuso dirigir a las cámaras del Congreso General una iniciativa, "para que no tenga efecto la ley que permita la extracción de platas en pasta de la República", y para que "se excite a las otras legislaturas hermanas, para que la secunden" (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 30 de mayo de 1828: 487).

El Congreso acordó que "la Junta Inspectora procederá oportunamente a nombrar de su seno una sección de cinco individuos que arregle, organice y vigile provisionalmente al Instituto Literario, en cuanto fuere posible con el decreto de su instalación" (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 30 de mayo de 1828: 490).

El 1 de junio el Congreso acordó que el Portero de la Tesorería General del Estado tuviera un sueldo de 300 pesos anuales (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 119 del 1 de junio de 1828: 72).

El Congreso autorizó la apertura del Camino de Chalco a Cuautla, con la asignación de una cuota de peaje (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 120 del 1 de junio de 1828: 72).

El Congreso aprobó “el restablecimiento del peaje que se hallaba establecido en el Puente de Tecozantla, que para su composición ha solicitado el Ayuntamiento de la misma localidad” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 121 del 1 de junio de 1828: 74).

El 2 de junio el Gobernador Lorenzo de Zavala, al acudir a la clausura del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, señaló que al decretarse la creación del Instituto Literario los jóvenes llamados por la ley “han principiado a llegar de los distritos respectivos”, que “el Estado se mantiene en la mayor tranquilidad”, que se conservaba la “mejor armonía con los demás estados y el Gobierno de la Unión”, y que el Gobierno “se ha dedicado con constancia a dar cumplimiento a las leyes, y movimiento a cuanto lo necesita y alcanzan sus facultades: los caminos continúan componiéndose: los edificios públicos de esta Ciudad están al concluirse: las oficinas y poderes se hallan en el nuevo Capitolio, levantado sobre los escombros de un edificio que anteriormente tenía objetos más piadosos, puede ser, pero no tan útiles y análogos a los progresos de las luces” (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 2 de junio de 1828: 638).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Félix Lope de Vergara, indicó que “nunca pudiera ser más lisonjera para los legisladores del Estado de México, cuya voz tengo el honor de llevar esta vez; nunca pudiera ser más halagüeña la brillante perspectiva que acaba de trazar el Ejecutivo, que cuando están bien penetrados de los que serán llevadas con puntual y debido cumplimiento hasta su último término, las providencias y medidas que han tomado para formar y consolidar el bienestar de los habitantes del Estado” (Poder Legislativo IV, 1828. Acta del 2 de junio de 1828: 638).

Se instaló la Diputación Permanente del Tercer Periodo de Receso del Congreso, bajo la Presidencia del Diputado Epigmenio de la Piedra (Acta del 2 de junio de 1828. BJMLM: Colección de Actas vol. 20, foja 1).

El 5 de junio la Diputación Permanente acordó convocar “a los señores diputados del Honorable Congreso del Estado a sesiones extraordinarias para tratar del decreto de convocatoria de las próximas elecciones, de la conclusión de la Ley Reglamentaria de

la Milicia Local y del Reglamento de la Casa de Moneda", así como de "la Ley de Responsabilidades que está pendiente, pues entre tanto pueden quedar impunes los delitos de los funcionarios", y a "tomar en consideración las observaciones del Gobierno a otro reglamento sobre el modo de declarar, si ha o no lugar a la formación de causa cuando sea acusado el Gobernador" (Acta del 5 de junio de 1828. BJMLM: Colección de Actas vol. 20, foja 3).

El 11 de junio la Diputación Permanente ante una serie de observaciones que hizo el Gobierno, determinó convocar al Congreso a un periodo extraordinario para el 20 de ese mes, para tratar lo referente: con "el arreglo de la Milicia Local", la "convocatoria para las próximas elecciones" y "las observaciones que hizo el Gobierno al decreto sobre el modo de proceder contra los primeros funcionarios del Estado en los delitos que cometan" (Acta del 11 de junio de 1828. BJMLM: Colección de Actas vol. 20, foja 11).

El 14 de junio a solicitud del Gobierno, la Diputación Permanente acordó que no se convocara al Congreso al periodo de sesiones para el 20 de ese mes, sino el día 7 de julio (Acta del 14 de junio de 1828. BJMLM: Colección de Actas vol. 20, foja 15).

El 4 de julio la Diputación Permanente acordó reservar el expediente por el que pretendía convocar al Congreso a un periodo extraordinario de sesiones (Acta del 4 de julio de 1828. BJMLM: Colección de Actas vol. 20, foja 55).

El 15 de agosto el Congreso reunido en Junta integró a la Mesa Directiva del primer mes de su Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado Vicente Sánchez Barquera y la Vicepresidencia del Diputado Epigmenio de la Piedra. Nombró como secretarios propietarios a los diputados: Félix Lope de Vergara y José María Velázquez de León y como Secretario Suplente al Diputado José María Ruano Calvo (Poder Legislativo V, 1828. Acta del 15 de agosto de 1828: 1).

El Gobernador Lorenzo de Zavala, al acudir a la apertura del Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, señaló que "para evitar los fraudes que fácilmente podrían hacerle, el Ejecutivo ha reglamentado la Ley de Extracción de Platas dada por el Congreso de la Unión con fecha de 19 de julio último", y que "el Gobierno tiene el sentimiento de anunciaros que el decreto número 101 sobre contribuciones, primer ensayo entre nosotros en esta materia dedicada, no ha tenido los felices resultados que se creyeron. A excepción de las administraciones de Cuernavaca, Cuautla y Apan

que ha habido una mitad más de lo que antes rendían, los productos de las rentas han quedado reducidos a un tercio, y lo más sensible es que ha ocasionado quejas y murmuraciones que el Gobierno ha contenido dentro de los límites a que deben sujetarse los reclamos legales de los ciudadanos, esperando las reformas convenientes del Legislativo" (Acta del 15 de agosto de 1828: BJMLM. Colección de Actas: vol. 18, foja 3).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Vicente Sánchez Barquera, señaló que "grandes son a la verdad los trabajos que para cumplir con sus deberes tiene esta Asamblea: ora los que se consideren dejó pendientes, ora los que de nuevo va a emprender. No dejará de hacerse cargo de todos aquellos objetos de utilidad pública que el Gobierno le recomienda; y no olvidará que para llevar al cabo la gloriosa obra de la regeneración política del Estado que representa, si es absolutamente necesario construir y edificar, no menos es indispensable sostener y afianzar el brillante edificio de las libertades públicas" (Poder Legislativo V, 1828. Acta del 15 de agosto de 1828: 5).

El 18 de agosto el Congreso le otorgó la carta de Ciudadano del Estado al Señor Severiano Quesada (Poder Legislativo V, 1828. Acta del 18 de agosto de 1828: 11).

El 21 de agosto el Congreso determinó que mientras se forma la Junta General de Vacunación "el Gobernador con su Consejo, suplirán las funciones de esta Junta, consultando en las dudas facultativas con los profesores de Medicina que merecieron su concepto", y que el Gobernador hará efectiva la responsabilidad en que incurran los presidentes de las juntas principales de vacunación pública y los prefectos en las subalternas cuando se compruebe sumariamente haberse perdido el fluido vacuno por omisión (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 122 del 21 de agosto de 1828: 74).

El Gobernador expidió el "Reglamento que debe observarse para asegurar en lo posible el cobro de los derechos que en el Estado de México deben exigirse al oro y plata pasta que se extraigan de los minerales de su territorio por cualquier Puerto de la República, en uso del permiso concedido por el Congreso de la Unión en decreto de 19 de julio último". Se indicaba que "cualquiera cantidad de oro y plata que se extraiga de las minas que se hallen en el territorio del Estado, será presentada a la Tesorería de Rescates situada en el mismo paraje de su extracción, o en el más inmediato, como previenen las leyes 9, 10, y 11 del título 10, libro 8º de las recopiladas para estas

Américas, bajo las penas que las mismas imponen a los contraventores" (Reglamento del Ejecutivo del 21 de agosto de 1828. BJMLM: vol. 47, exp. 339).[139]

El 30 de agosto en vísperas de las elecciones presidenciales, el Gobernador Lorenzo de Zavala dirigió una carta al Presidente de la República, Guadalupe Victoria, en la que con el mayor sentimiento manifestaba "que abusándose del nombre del Gobierno, se han situado en esta Capital del Estado tropas del Ejército Permanente, cuando el principal cuidado de un gobierno libre debe ser el que sus elecciones se hagan con la mayor libertad posible. ¿Qué dirá la Nación cuando sepa que el Congreso del Estado de México, es obsediado (sic) de soldados en el momento de la elección del Presidente y Vicepresidente de la República, y cuando el Ministro de la Guerra es uno de los candidatos?" (Carta del Ejecutivo del 30 de agosto de 1828. BJMLM: vol. 47, exp. 329).

El 1 de septiembre el Congreso emitió su voto a favor de Vicente Guerrero como Presidente de la República, del Gobernador Lorenzo de Zavala como Vicepresidente y de José María Gallegos como Senador del Estado ante el Congreso General (Poder Legislativo V, 1828. Acta del 1 de septiembre de 1828: 78).

Se efectuaron las elecciones presidenciales en las legislaturas de los estados, las cuales favorecieron el triunfo de Manuel Gómez Pedraza sobre Vicente Guerrero por once votos contra nueve (Dublan II, 1876. Decreto del 12 de enero de 1829: 90).
El 3 de septiembre el Congreso le concedió la carta de ciudadano del Estado al español Manuel Segura (Poder Legislativo V, 1828. Acta del 3 de septiembre de 1828: 86).

El 9 de septiembre el Gobernador presentó una acusación en el Congreso en contra de su Presidente (Diputado Vicente Sánchez Barquera), al enterarse que éste había solicitado el auxilio de la fuerza armada para la sesión en que debía votarse la elección de Presidente y Vicepresidente de la República. Lorenzo de Zavala argumentaba dicha acusación ciñendo al inculpado el "haber quebrantado la Constitución Federal y la del Estado, atacando la soberanía de éste, y usurpando al Gobierno sus facultades constitucionales: de haber oprimido calumniosamente al Ejecutivo, e injuriado mi persona, hechos que si quedan impunes, nadie podrá responder de la subsistencia del sistema, y la Legislatura, el Gobierno y el Estado

[139] No se publicó en la Colección de Decretos.

entero se verán envueltos muy pronto en un trastorno y ruinas universales" (Acusación del 9 de septiembre de 1828. BJMLM: vol. 47, exp. 329).

La Mesa Directiva del Congreso nombró a los integrantes que debían estudiar la acusación que el Gobernador había hecho a su Presidente, diputado Vicente Sánchez Barquera. Dicha comisión se integró con los diputados: José María Cardoso, José María Franco y Agustín Vallarta (Acta de la sesión secreta del 9 de septiembre de 1828. BJMLM: Colección de Actas).

El 12 de septiembre el Congreso acordó que al Ayuntamiento de Juchitepec "se le franqueen tres mil pesos, para la conclusión de un jagüey[140] que está haciendo para abastecer de agua a aquel vecindario" (Poder Legislativo V, 1828. Acta del 12 de septiembre de 1828: 127).

El 15 de septiembre el Congreso integró la Mesa Directiva del segundo mes de su Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado Epigmenio de la Piedra y la Vicepresisdncia del Diputado Pablo Galeana. Nombró como Secretario Propietario al Diputado José María Ruano Calvo y como Secretario Suplente al Diputado Pedro de la Portilla (Poder Legislativo V, 1828. Acta del 15 de septiembre de 1828: 136).

El 17 de septiembre el Congreso General declaró al General Vicente Guerrero fuera de la ley, a quien lo exhortaba a deponer las armas a cambio de ser indultado de la pena capital (Decreto del 17 de septiembre de 1828. BJMLM: vol. 45, exp. 265).

El 19 de septiembre los partidarios de Vicente Guerrero se levantaron en armas en la Acordada, a instancias del General Antonio López de Santa Anna, quien lejos de pronunciarse por la expulsión de los españoles buscaba "destruir las legislaturas compuestas de tunantes, vengar las víctimas de Tulancingo y dar él solo la Ley a la Nación" (Circular del 19 de septiembre de 1828: BJMLM: vol. 45, exp. 262).

El Congreso ante tales acontecimientos acordó "dirigir un manifiesto a sus pueblos, sobre los movimientos y plan del General Antonio López de Santa Anna", a quien el

[140] El Diccionario de la Lengua Española define a jagüey como "balsa, pozo o zanja llena de agua, ya artificialmente, ya por filtraciones naturales del terreno".

Congreso General lo había declarado “fuera de la ley, en el caso de que no rinda las armas” (Poder Legislativo V, 1828. Acta del 19 de septiembre de 1828: 149).[141]

El 20 de septiembre el Congreso le otorgó al Consejero Francisco Argándar una licencia por tres meses para separarse de su cargo, con el propósito de restablecer su salud en la Ciudad Federal (Poder Legislativo V, 1828. Acta del 20 de septiembre de 1828: 155).

El 22 de septiembre el Congreso acordó que “ha lugar a la formación de causa al Señor Diputado Don Vicente Sánchez Barquera, por haber usado de facultades que no tenía, pidiendo tropas al Gobierno General, entrando en contestaciones en él, sin consentimiento del Congreso, y haber usurpado al Gobierno del Estado la facultad 4ª del artículo 135, que da la Constitución”; que en consecuencia, el Congreso, conforme al artículo 32, facultad 8ª, que le concede la Constitución del Estado, le aplicará la pena a que por un delito, se haya hecho acreedor”; que “en cuanto a la queja de injurias del Gobernador, se intentará el medio de la conciliación ante el Juez nombrado por el Congreso”, y que “este expediente se entregará al Fiscal de la causa, que con el Juez de derecho, deben nombrarse para los efectos convenientes” (Acta de la sesión secreta del 22 de septiembre de 1828. BJMLM: Colección de Actas).

El Congreso nombró a los integrantes del Gran Jurado que calificaría la actuación del Diputado Vicente Sánchez Barquera, por pedir la presencia de tropas federales en el Recinto Legislativo. Como Juez fue designado el Diputado Agustín Escudero, como Fiscal el Diputado Pedro de la Portilla y como Juez Conciliador el Diputado Félix Lope de Vergara (Acta de la sesión secreta del 22 de septiembre de 1828. BJMLM: Colección de Actas).

El 27 de septiembre el Congreso acordó hacer “una iniciativa a las cámaras (del Congreso General), para que no se concedan al Presidente de la República las facultades extraordinarias que ha pedido” (Poder Legislativo V, 1828. Acta del 27 de septiembre de 1828: 203).

El 30 de septiembre el Congreso al convocar a la Junta General para que el 5 de octubre nombrara diez diputados propietarios y siete suplentes a la siguiente Legislatura que se sumarían a once diputados reelectos (Poder Legislativo II, 2001.

[141] El 25 de septiembre de 1828 fue aprobado el manifiesto aludido en dicha proposición (Poder Legislativo V, 1828. Proposición del 20 de septiembre de 1828: 194).

Decreto 123 del 30 de septiembre de 1828: 75), dispuso que “para que los agraciados con carta de naturaleza o ciudadanía puedan ser elegidos diputados al Congreso del Estado, es necesario que tengan una propiedad en el mismo, valiosa al menos en seis mil pesos, y que cuenten cuatro años de poseerla” (art 1); que “los individuos que carezcan de esa cualidad, deberán residir en el Estado por lo menos un año, con algún arte, industria y profesión “(art. 2), y que “pierde en el mismo hecho los derechos de tal, el que se separe de su territorio por un año o más, y solo podrá ser rehabilitado, el que a juicio del Congreso haya tenido causa justa para separarse” (art. 3).

El Congreso nombró a los integrantes del Juri que debían juzgar la actuación del Diputado Vicente Sánchez Barquera. El Juri se integró con los diputados: Rafael Anaya, Pablo Galeana, Román García, José Sierra y José María Cardoso (Acta de la primera sesión secreta del 30 de septiembre de 1828. BJMLM: Colección de Actas).

Rindieron su protesta de ley ante el Pleno los integrantes del Juri que debían juzgar la actuación del Diputado Vicente Sánchez Barquera (Acta de la segunda sesión secreta del 30 de septiembre de 1828. BJMLM: Colección de Actas).

El 1 de octubre el Congreso nombró al General Isidoro Montes de Oca como Teniente Gobernador ante la renuncia de Joaquín Lebrija y como consejeros a: José María Gil y Calzada y José Gómez Benítez (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 124 del 1 de octubre de 1828: 76).

El 4 de octubre el Congreso General dispuso que se prorrateara “la cantidad de seiscientos mil pesos para gastos de guerra entre los estados de la Federación”, tocándole al Estado de México la cantidad de cien mil pesos (Decreto del 4 de octubre de 1828. BJMLM: vol. 41, exp. 124).

El 6 de octubre el Congreso tomó conocimiento de un oficio del Gobernador, insertando el acuerdo de la Cámara de Senadores del Congreso General que “declara haber lugar a la formación de causa contra el mismo Gobernador Ciudadano Lorenzo de Zavala, quien avisa igualmente dejar encargado del Gobierno a su Teniente” (Poder Legislativo V, 1828. Acta del 6 de octubre de 1828: 233).

El Congreso acordó en sesión secreta que se llamase “al Gobernador del Estado Ciudadano Lorenzo de Zavala, para oírlo en Gran Comisión, sin perjuicio de las

disposiciones supremas" (Poder Legislativo V, 1828. Acta del 6 de octubre de 1828: 240).[142]

El 7 de octubre el Teniente Gobernador Isidoro Montes de Oca dirigió un oficio al Congreso, en el cual indicaba que el Gobernador le había encargado "el Gobierno por haber declarado el Senado de la Federación que ha lugar a que se le forme causa" (Acta del 7 de octubre de 1828. BJMLM. Colección Actas: vol. 18).

El 11 de octubre el Congreso reunido en Jurado absolvió al Diputado Vicente Sánchez Barquera de los cargos que se le habían hecho, por usar facultades que no tenía (Acta de la sesión secreta del 11 de octubre de 1828. BJMLM: Colección de Actas).

El 13 de octubre el Congreso integró la Diputación Permanente de su Cuarto Receso, presidida por el Diputado Pedro de la Portilla. Nombró como Secretario al Diputado José Rodrigo Castelazo, como miembros a los diputados: José Antonio Magos, Rafael Anaya y Vicente Sánchez Barquera y como Suplente al Diputado José Sierra (Poder Legislativo V, 1828. Acta del 13 de octubre de 1828: 259).

El 14 de octubre el Congreso dispuso que "para la instrucción y resolución en tercera instancia, de las causas civiles y criminales que se inician en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se formará una Tercera Sala, compuesta de tres jueces y un Fiscal", los cuales serán electos por el Poder Legislativo (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 125 del 14 de octubre de 1828: 76).

El Congreso General dispuso que entre tanto se concluye definitivamente el Reglamento de Imprenta, "las denuncias de los escritos se presentarán, o remitirán a uno de los alcaldes constitucionales de las capitales de los estados, Distrito y territorios, para que éste convoque a la mayor brevedad a los jurados que deben calificarlos", y que "servirán para jurados en su respectivo caso todos los ciudadanos mexicanos por nacimiento, que estando en el ejercicio de sus derechos, y sabiendo leer y escribir tengan un capital de cuatro mil pesos para arriba, o una industria, u oficio que les produzca cuatrocientos pesos anuales en los territorios, mil en el Distrito, y de seiscientos para arriba a juicio de las legislaturas, en los estados" (Decreto del 14 de octubre de 1828. BJMLM: vol. 43, exp. 202).

[142] La reunión no se efectuó, al argumentarse que el Gobernador no se hallaba en su casa.

El 15 de octubre el Congreso expidió el Reglamento para la Secretaría del Consejo del Estado de México, el cual constaba de apartados referentes a: la Oficina de Redacción y a su Jefe, a los interventores, al Redactor, a los taquígrafos, a las obligaciones de la Oficina en tiempo de receso y a la interpretación de las actas (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 126 del 15 de octubre de 1828: 76).

El Congreso facultó "al Gobernador del Estado para que sin pérdida positiva del Estado disponga que de la existencia de tabacos labrados que hay en la fábrica de la Ciudad de Texcoco, se entreguen a la Federación los cien mil pesos que señala al mismo Estado el Congreso de la Unión en el decreto de 4 del corriente procurando que esta cantidad sea realizada antes del término prefijado por la citada Ley" (Poder Legislativo V, 1828. Acta del 15 de octubre de 1828: 279).

El 16 de octubre el Congreso indicó que los doce individuos nombrados para la instrucción y resolución en tercera instancia de las causas civiles y criminales que se inician en el Supremo Tribunal Superior de Justicia eran: Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, Ignacio Soto, José María Zamorano, Mariano Ortiz Montellano, Mariano Esteva, Manuel Noriega, Benito José Guerra, Pedro Galindo, Manuel Rosales, Juan Nepomuceno Zeleata, José María García Figueroa y José María Gallegos (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 127 del 16 de octubre de 1828: 82).

El Congreso dispuso que para ser funcionario o empleado en el Estado, "a más de las cualidades que respectivamente exigen las leyes vigentes, se requiere ser natural del Estado, o haber residido en él un año por lo menos, con algún arte, industria o profesión" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 128 del 16 de octubre de 1828: 82).

El Teniente Gobernador Isidoro Montes de Oca, al acudir a la clausura del Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, señaló "que nadie ignora los desagradables sucesos que han puesto bajo mi dirección los negocios del Ejecutivo, y ni ellos son por su propio peso expresiones a mis débiles fuerzas, menos podría ni aún aproximarme al término de la expectación pública si me faltara el único apoyo con que puedo contar en circunstancias tan facciosas, en que el Gobierno se encuentra sin Hacienda y rodeado de muy graves atenciones, necesitando a cada paso consultar al Oráculo Constitucional de la Opinión, y marchas con una firmeza y seguridad extraordinarias, cuando los gobiernos apenas parece que tienen piso seguro en circunstancias tumultuosas" (Poder Legislativo V, 1828. Acta del 16 de octubre de 1828: 287).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Epigmenio de la Piedra, señaló que “los representantes del Estado de México convencidos de la necesidad de prorrogar sus tareas en atención a las imperiosas razones y críticas circunstancias que acaba de exponer el Ejecutivo, continuarían gustosos en el penoso y difícil ejercicio de sus altas atribuciones si la Ley se los permitiese; pero la más sagrada de todas, la Constitución misma se los impide, y siempre prontos de ser los primeros a dar a los pueblos ejemplo de sumisión y respeto a su Sagrada Carta; hoy se ven precisados a cerrar sus sesiones ordinarias, llevando sus ánimos agitados de contrarios afectos” (Poder Legislativo V, 1828. Acta del 16 de octubre de 1828: 288).

Se instaló la Diputación Permanente del Cuarto Periodo de Receso del Congreso, bajo la Presidencia del Diputado Pedro de la Portilla (Acta del 16 de octubre de 1828. BJMLM: Colección de Actas vol. 21, foja 1).

El 25 de octubre el Congreso General dispuso que “se renueva la prohibición de toda reunión clandestina, que por regla o instituciones determinadas, forme cuerpo o colegio, y haga profesión de secreto” (Decreto del 25 de octubre de 1828. BJMLM: vol. 44, exp. 253).

El 11 de noviembre la Diputación Permanente acordó que se “pidiese al Gobierno del Estado una copia de las contestaciones que haya tenido con el de la Federación, relativas a la prisión que en Toluca se ha hecho de varios funcionarios del Estado, como el Juez de Letras y Administrador” (Acta del 11 de noviembre de 1828. BJMLM: Colección de Actas vol. 21, foja 21).

El 18 de noviembre la Diputación Permanente al acordar otorgarle una licencia por un mes al Diputado Vicente Sánchez Barquera para separarse de su cargo, determinó llamar a sus sesiones a su Suplente, Diputado José Sierra (Acta del 18 de noviembre de 1828. BJMLM: Colección de Actas vol. 21, foja 29).

El 29 de noviembre la Diputación Permanente acordó pedirle al Teniente Gobernador informes “sobre el objeto que haya tenido hasta la fecha el acuerdo del Honorable Congreso del Estado, dado el quince del pasado octubre, sobre la salida del Estado de los españoles comprendidos en las leyes de expulsión”, y sobre el estado que “mantiene la tranquilidad pública en la Ciudad de Toluca, alterada a pretexto de celebrar la publicación de la Ley que prohibió las reuniones clandestinas, si se han infringido algunas leyes atacando a las autoridades políticas de aquel punto, y si se

han dictado providencias para reprimir los desórdenes" (Acta del 29 de noviembre de 1828. BJMLM: Colección de Actas vol. 21, foja 38).

El 16 de diciembre la Diputación Permanente tomó conocimiento de un oficio del Teniente Gobernador Isidoro Montes de Oca, por el que por enfermedad encargó el Gobierno al Consejero José Ramírez (Acta del 16 de diciembre de 1828. BJMLM: Colección de Actas vol. 18, foja 42).

El 19 de diciembre la Diputación Permanente acordó pedir informes al Gobierno sobre "si excelentísimo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se hallaba con su Consejo de Ministros, ejerciendo con entera libertad sus facultades conforme a la Constitución y leyes generales"; sobre "si del mismo modo lo están las cámaras del Congreso de la Unión y Suprema Corte de Justicia"; "si es positivo que los extranjeros tomaron parte en los últimos sucesos de México haciendo fuego a los americanos", y "si en el Estado se halla restablecido el orden, y las reuniones armadas reconocen al Gobierno" (Acta del 19 de diciembre de 1828. BJMLM: Colección de Actas vol. 18, foja 47).

El 12 de enero de **1829** luego de que la Cámara de Diputados del Congreso General de la República calificara "de insubsistente y de ningún efecto la elección que recayó en el General Manuel Gómez Pedraza para Presidente o Vicepresidente de la República Mexicana", procedió a la realización de una nueva elección, en la cual "resultó electo Presidente el Ciudadano Benemérito de la Patria General de División Vicente Guerrero, por la totalidad de quince votos de estados que tienen representantes presentes, y Vicepresidente el Ciudadano General de División Anastasio Bustamante, por la mayoría absoluta de trece votos de estados" (Decreto del 12 de enero de 1829. BJMLM: vol.52, exp. 261).[143]

El 16 de enero la Diputación Permanente le otorgó una licencia al Diputado Vicente Sánchez Barquera para separarse de su cargo "para curarse, por el tiempo que su convalecencia y delicadeza lo permitan" (Acta del 16 de enero de 1829. BJMLM: Colección de Actas vol. 18, foja 60).

El 20 de enero Lorenzo de Zavala al reasumir la Gubernatura del Estado, señaló "que al presentarme de nuevo en la escena política después de la persecución atroz que

[143] En dicha ocasión el Estado de México votó por Vicente Guerrero y Lorenzo de Zavala. El ex Gobernador Melchor Múzquiz recibió los votos de los estados de Puebla y Chiapas.

suscitó contra mí un Partido que nunca perdona agravios supuestos o verdaderos, creo deber a mi reputación ultrajada por los enemigos en la exaltación de las pasiones presentar un cuadro de los principales sucesos ocurridos antes del 6 de octubre último en que el Ejecutivo de la Federación envío una escolta de setenta hombres para conducirme a México, como se podía hacer con un facineroso, vilipendiando en mi persona el Supremo Poder del Ejecutivo del Estado de México, interrumpiendo las augustas funciones que ejercía en el más solemne y respetable acto, cual es el de las elecciones que presidía, y la relación circunstanciada de los que siguieron a aquel día en que el atropellamiento de un Gobierno inocuo me obligó a tomar el partido de fugarme, como de los motivos que me han determinado a obrar del modo que lo he hecho, tomando un partido a que me impelió la fuerza de las circunstancias, y el poderoso estímulo de sacudir el doble yugo impuesto a la Patria y a mí personalmente" (Gobierno del Estado de México, 1829. Manifiesto: 3).

El 28 de enero la Diputación Permanente acordó que se llamase a su seno al Diputado Suplente José Ramírez, para cubrir la ausencia del Diputado Epigmenio de la Piedra (Acta del 28 de enero de 1829. BJMLM: Colección de Actas vol. 18, foja 67).[144]

El Primer Congreso Constitucional (1827-1829) que operó del 2 de marzo de 1827 al 1 de marzo de 1829 se integró con 21 diputados nombrados por electores secundarios en la Junta General del Estado. Realizó cuatro periodos ordinarios y dos periodos extraordinarios de sesiones y expidió 128 decretos entre el 8 de marzo de 1827 y el 16 de octubre de 1828 (Poder Legislativo II, 2001. Índice de decretos: 623-636).

[144] El referido Diputado nunca se incorporó a las sesiones de la Diputación Permanente.

Capítulo 3
Segundo Congreso Constitucional (1829-1830)

El Segundo Congreso Constitucional (1829-1830) que operó del 2 de marzo de 1829 al 1 de marzo de 1830 lo integraron 21 diputados nombrados por electores secundarios en la Junta General del Estado. Los diputados propietarios eran: Román García, José María Franco, Antonio del Río, Luciano Castorena, José Antonio Magos (Poder Legislativo I, 1829. Acta del 22 de febrero de 1829: 5), Manuel Díez de Bonilla, José Ramón Malo, Pablo Galeana, Mariano Arizcorreta, Pedro de la Portilla, Antonio María Cardona, Juan Rodríguez Sotomayor, Rafael Sánchez Contreras, José Rafael González Arratia, José Ramírez (Poder Legislativo I, 1829. Acta del 26 de febrero de 1829: 20), Agustín Vallarta (Poder Legislativo I, 1829. Acta del 22 de febrero de 1829: 21), José María Cardoso (Poder Legislativo I, 1829. Acta del 3 de marzo de 1829: 27), Atanasio Saavedra, Mariano Campos, Agustín Escudero (Poder Legislativo I, 1829. Acta del 5 de marzo de 1829: 33), José María Velázquez de León (Poder Legislativo, 1829. Acta del 18 de marzo de 1829: 100), Joaquín Bars (Suplente) (Poder Legislativo, 1829. Acta del 9 de abril de 1829: 198)[145] y Rafael Villagrán (Suplente) (Acta del 8 de octubre de 1829. BJMLM: Colección de Actas vol. 23, foja 176).[146]

El 22 de febrero de 1829 se realizó la Primera Junta Preparatoria del Segundo Congreso Constitucional, bajo la conducción del Presidente de la Diputación Permanente, Diputado Pedro de la Portilla y la asistencia de catorce diputados electos[147] (Poder Legislativo, 1829. Acta del 22 de febrero de 1829: 5).

El Congreso reunido en Junta nombró como integrantes de la Comisión de Poderes a los diputados electos: Román García, José María Franco y Antonio del Río (Poder Legislativo, 1829. Acta del 22 de febrero de 1829: 5).

El 26 de febrero el Congreso reunido en Junta aprobó las cartas credenciales de los diputados: Manuel Díez de Bonilla, José Ramón Malo, Pablo Galeana, Mariano Arizcorreta, Pedro de la Portilla, Antonio María Cardona, Juan Rodríguez Sotomayor,

[145] El Diputado Suplente Joaquín Bars cubrió la vacante que dejó el Diputado José María Franco, el cual el 10 de marzo de 1829 fue designado Tesorero General del Estado (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 129 del 10 de marzo de 1829: 83).
[146] El Diputado Suplente Rafael Villagrán cubrió la vacante que dejó por fallecimiento el Diputado José María Velázquez de León.
[147] En el acta no se precisa el nombre de los diputados electos que asistieron a la Junta.

Rafael Sánchez Contreras, José Rafael González Arratia y José Ramírez (Poder Legislativo, 1829. Acta del 26 de febrero de 1829: 20).

En el Congreso reunido en Junta rindieron su protesta de ley los diputados electos: José Ramón Malo, Pablo Galeana, Mariano Arizcorreta, Pedro de la Portilla, Antonio María Cardona, Juan Rodríguez Sotomayor, Rafael Sánchez Contreras, José Rafael González Arratia y José Ramírez (Poder Legislativo, 1829. Acta del 26 de febrero de 1829: 20).

El Congreso reunido en Junta integró la Mesa Directiva del primer mes de su Primer Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado Electo Román García y la Vicepresidencia del Diputado Electo Antonio del Río. Nombró como secretarios propietarios a los diputados electos: José María Franco y José Ramón Malo y como Secretario Suplente al Diputado Suplente Agustín Vallarta Franco y José Ramón Malo y como Secretario Suplente al Diputado Agustín Vallarta (Poder Legislativo, 1829. Acta del 26 de febrero de 1829: 21).

El Presidente del Congreso, Diputado Román García, declaró instalado el Segundo Congreso Constitucional (Poder Legislativo, 1829. Acta del 26 de febrero de 1829: 22).

El 2 de marzo el Ciudadano Manuel Díez de Bonilla acudió al Congreso a rendir su protesta como Diputado (Poder Legislativo, 1829. Acta del 2 de marzo de 1829: 22).

El Gobernador Lorenzo de Zavala, al acudir a la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, instó a los señores diputados a destruir “todo lo que la antigua legislación tiene de incompatible con el nuevo orden de cosas: substituid a las leyes coloniales, otras que tengan relación con el sistema político que hemos adoptado: refundid la sociedad, sobre los moldes de una sociedad vecina cuyo orden de cosas ha sido nuestro modelo: a la tímida política, a las mezquinas arterias, a la misteriosa conducta del Gobierno anterior, substitúyansele la noble franqueza, la buena fe y la energía en las resoluciones” (Poder Legislativo, 1829. Acta del 2 de marzo de 1829: 22).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Román García, señaló que “el Primer Jefe del Ejecutivo atrozmente perseguido y vilmente calumniado ha vuelto ya honrosamente a ocupar el asiento que le dispensa nuestra Constitución, osadamente atajada en aquellos aciagos días, por algunos americanos. Restablecido

el orden ha desaparecido todo ese aparato de espanto y de terror, en fuerza de las vivas luces de la razón, como se va huyendo la noche a presencia del astro del día" (Poder Legislativo, 1829. Acta del 2 de marzo de 1829: 26).

El 3 de marzo los ciudadanos Agustín Vallarta y José María Cardoso rindieron su protesta de ley como diputados del Congreso (Poder Legislativo, 1829. Acta del 3 de marzo de 1829: 27).

El 4 de marzo el Señor José Rafael González Arratia rindió su protesta de ley como Diputado del Congreso (Poder Legislativo, 1829. Acta del 4 de marzo de 1829: 29).

El Congreso acordó emitir una felicitación al General Vicente Guerrero, "por haber salido electo Segundo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos" (Poder Legislativo, 1829. Acta del 4 de marzo de 1829: 30).

El 5 de marzo el Congreso le otorgó una licencia para separarse de su cargo por veinte días al Diputado Manuel Díez de Bonilla (Poder Legislativo, 1829. Acta del 5 de marzo de 1829: 32).

El Congreso admitió la renuncia de Vicente José Villada como Tesorero General del Estado (Poder Legislativo, 1829. Acta del 5 de marzo de 1829: 32).

El Congreso acordó que en las actas de sus sesiones, "se anote al fin de cada sesión el nombre de los señores que hayan asistido y los motivos que hayan obligado a los ausentes para no concurrir" (Poder Legislativo, 1829. Acta del 5 de marzo de 1829: 33).[148]

El 9 de marzo el Presidente del Congreso nombró una comisión especial para examinar las ordenanzas municipales. Dicha Comisión se integró con los diputados: Manuel Díez de Bonilla, José Rafael González Arratia, Agustín Escudero y José Ramírez (Poder Legislativo, 1829. Acta del 9 de marzo de 1829: 46).

[148] En dicha acta se registraron los nombres de los diputados: Atanasio Saavedra, Mariano Campos y Agustín Escudero, que no aparecían en las actas anteriores (Poder Legislativo I, 1829. Acta del 5 de marzo de 1829: 33).

El 10 de marzo el Congreso nombró al Diputado José María Franco como Tesorero General del Estado (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 129 del 10 de marzo de 1829: 83).

El Congreso aceptó la renuncia de José María Gil como Consejero del Gobierno (Poder Legislativo, 1829. Acta del 10 de marzo de 1829: 52).

El 12 de marzo el Congreso nombró a José Ignacio Soto como Consejero del Gobierno (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 130 del 12 de marzo de 1829: 83).

El Congreso designó como individuos que debían de juzgar a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia durante el bienio de la Segunda Legislatura Constitucional a: José María Jáuregui, José Nicolás de Oláez, Juan Manuel Revilla, Juan Ignacio Dávila, José María Sandoval, Vicente Urueta, Manuel Ignacio Ortiz, José María Saavedra, José Manuel González Arratia, Joaquín Noriega, Miguel Macedo y Villanueva, Joaquín Valdés, Ignacio González Arratia, José María Benítez, José Osorio, Urbano Fonseca, Joaquín de la Sancha, José María Inclán, Ignacio Martínez, Manuel Rivera, Manuel Lozano, Luis Gonzaga Vieyra, José Rodrigo Castelazo y Gregorio Cardona, y en la Primera Sala como Presidente a Manuel Lozano, como magistrados: a José María Saavedra y Luis Gonzaga Vieyra y como Fiscal a Juan Ignacio Dávila (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 131 del 12 de marzo de 1829: 84).

El Ciudadano José Gómez Benítez acudió al Congreso a rendir su protesta de ley como Consejero del Estado (Poder Legislativo, 1829. Acta del 12 de marzo de 1829: 62).

El Congreso dispuso que “el Ayuntamiento de Acapulco satisfará de preferencia de sus fondos municipales, después de hacer los de los gastos de las escuelas, las hospitalidades que venzan los reos enfermos de notoria insolvencia” (Poder Legislativo, 1829. Acta del 12 de marzo de 1829: 64).

El Congreso autorizó “a la Comisión de Policía, para habilitar el Archivo de estantes y útiles necesarios” (Acta de la sesión secreta del 12 de marzo de 1829. BJMLM: Colección de Actas).

El 13 de marzo acudió al Congreso a rendir su protesta de ley como Consejero del Gobierno el Ciudadano José Ignacio Soto (Poder Legislativo, 1829. Acta del 13 de marzo de 1829: 81).

El Congreso acordó concederle una "licencia al Gobernador para que pueda pasar a la Ciudad Federal de México, en el periodo de las presentes sesiones, cuando lo tenga por conveniente" (Poder Legislativo, 1829. Acta del 13 de marzo de 1829: 85).

El 16 de marzo el Congreso declaró Ciudadano del Estado al Señor Severiano Quezada (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 132 del 16 de marzo de 1829: 84).

El 17 de marzo el Congreso acordó que "el Secretario del Gobernador no debe leer la Memoria Anual, ante el Honorable Congreso", y que "en consecuencia, la leerá uno de los individuos del Consejo" (Poder Legislativo, 1829. Acta del 17 de marzo de 1829: 94).

El Congreso acordó que se dieran "las gracias por conducto del Gobierno al Ciudadano Antonio María Hierro, por el proyecto económico que trabajó con el objeto de aumentar las rentas del Estado" (Poder Legislativo, 1829. Acta del 17 de marzo de 1829: 93).

El 18 de marzo el Congreso recibió la protesta de ley del Diputado José María Franco como Tesorero del Estado y de José María Velázquez de León como Diputado del Congreso (Poder Legislativo, 1829. Acta del 18 de marzo de 1829: 100).

El 20 de marzo el Consejero Francisco Peláez acudió al Congreso, a dar lectura a "la Memoria que el Gobernador presentó de todos los ramos de la administración en el año económico en 15 de octubre del año de 827, y finalizó en 16 del mismo de 28" (Poder Legislativo, 1829. Acta del 20 de marzo de 1829: 103).[149]

En su Memoria de Gobierno el Gobernador Lorenzo de Zavala, señaló que el "Gobierno cree que para dar cumplimiento al artículo de la Constitución que prescribe dar anualmente cuenta al Congreso por medio de una memoria del estado en que se hallen todos los ramos de la administración pública y adelantos o mejoras de que son

[149] La lectura de la Memoria continuó en las sesiones del 21, 24 y 26 de marzo (Poder Legislativo, 1829. Acta del 21 de marzo de 1829: 106; Poder Legislativo, 1829. Acta del 24 de marzo de 1829: 123; y Poder Legislativo, 1829. Acta del 26 de marzo de 1829: 127).

susceptibles, no puede omitir la relación de sucesos principales que han influido en sus diversas fases y combinaciones". Por ello, refirió que "la situación del Estado de México, su población y sus riquezas, le dan un poderoso influjo en la dirección de los negocios públicos que afectan a toda la Confederación, y se puede decir que su ejemplo es de una grande importancia en la resolución de los graves asuntos que se presentan" (Gobierno del Estado de México, Memoria, 1829: 7).

Al reseñar los logros de su Administración, señaló que el Estado conservó "la mejor armonía con los de los otros de la Federación", que se produjeron adelantos significativos en la integración de la estadística estatal, que la falta de conocimientos de la población "causará muchos embarazos para el repartimiento de las contribuciones", que aún subsistía el desarreglo de los fondos municipales, que se habían presentado algunos inconvenientes que afectaban la seguridad pública, que habían iniciado los trabajos para la conformación del Museo y la Biblioteca del Estado, y que el "Instituto Literario recibió un golpe terrible con el decreto número 95 de 18 de febrero del año próximo pasado, que estableció cátedras de las que se llamaron ciencias en los siglos de la obscuridad, y despotismo monacal, olvidando las que han enseñado al hombre sus derechos, y el modo de gobernarse".

En dicha Memoria resaltan los anexos referentes: al estado de los ingresos y egresos habidos en la Tesorería General, al estado que manifiesta los efectos que han entrado y salido de los almacenes generales, al reporte del dinero acuñado en la Casa de Moneda del Estado, a la razón de los créditos activo y pasivo y al estado que manifiesta los eclesiásticos regulares que residían en las diócesis de Puebla y Michoacán pertenecientes al Estado.

El Congreso acordó que "se llamase al Señor Diputado Suplente, que debía sustituir al señor (José María) Franco" (Acta de la sesión secreta del 20 de marzo de 1829. BJMLM: Colección de Actas).

El 24 de marzo el Congreso pidió que "se excite el celo del Teniente Gobernador para que se presente lo más pronto posible a cumplir con su encargo por la notoria falta que en él se hace" (Poder Legislativo, 1829. Acta del 24 de marzo de 1829: 123).

El 26 de marzo el Congreso acordó que la Secretaría del Congreso "se suscriba, a los periódicos de la Capital de la Federación, que crea convenientes" (Acta de la sesión secreta del 26 de marzo de 1829. BJMLM: Colección de Actas).

El 28 de marzo el Congreso dispuso que “el Gobierno cuidará de que se lleve a efecto el establecimiento de las juntas principales y subalternas de vacunación, que previenen los artículos 2º y 3º del Reglamento del 8 de noviembre de 824”, y que “el Gobierno cada mes informará sobre el resultado del cumplimiento del decreto del 21 de agosto del año anterior” (Poder Legislativo, 1829. Acta del 28 de marzo de 1829: 139).

El 31 de marzo el Congreso declaró Ciudadano del Estado al Señor Jorge Fisher (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 133 del 31 de marzo de 1829: 84).

El Congreso declaró Ciudadano del Estado al Señor Fernando Shuchardtl (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 134 del 31 de marzo de 1829: 85).

El 1 de abril el General Vicente Guerrero asumió la Presidencia de la República (Discurso del 1 de abril de 1829. AHEM: G.G.G. vol. 15, exp. 28).

El 2 de abril el Congreso integró la Mesa Directiva del segundo mes de su Primer Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado Atanasio Saavedra y la Vicepresidencia del Diputado Antonio María Cardona. Nombró como Secretario Propietario al Diputado Rafael Sánchez Contreras y como Secretario Suplente al Diputado José Rafael González Arratia (Poder Legislativo, 1829. Acta del 2 de abril de 1829: 152).

El 3 de abril el Congreso determinó que los jueces de primera instancia de los partidos de Acapulco, Tecpan y Tejupilco disfrutaran un sueldo de dos mil pesos anuales (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 135 del 3 de abril de 1829: 85).

El 4 de abril el Congreso determinó que el Pueblo de Cuautla de Amilpas se denominará en lo sucesivo Ciudad Heroica de Morelos (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 136 del 4 de abril de 1829: 85).

El 6 de abril el Congreso le concedió la carta de Ciudadano del Estado al Señor José Turot (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 137 del 6 de abril de 1829: 85).

El Congreso acordó que “por conducto del Gobierno se remitirá el plano calográfico a la Sección de la Junta Inspectora del Instituto Literario, con recomendación del mérito de sus autores, para que haga de él el uso que estime conveniente”; que “por el

mismo conducto se despachara orden al Prefecto de Huejutla, para que de los fondos de la Hacienda del Estado se saquen 30 pesos y se repartan con igualdad a presencia del Ayuntamiento entre los cinco autores expresados en el dictamen" (Poder Legislativo, 1829. Acta del 6 de abril de 1829: 178).

El 7 de abril el Congreso expidió el Reglamento para el Establecimiento de la Oficina de Redacción en el Congreso del Estado de México (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 138 del 7 de abril de 1829: 86),[150] en el cual dispuso que "esta Oficina se compondrá de un Jefe, dos interventores, un Redactor, dos taquígrafos y dos escribientes" (art. 1); que "el Jefe y los interventores serán individuos de la Comisión de Policía Exterior, y las funciones del primero, las que el Reglamento Interior del Congreso señala a los secretarios del mismo, respecto de la Secretaría" (art. 3), y que "el nombramiento de los demás empleados lo hará el Congreso, a propuesta de la Comisión de Policía Exterior" (art. 3).

En dicho reglamento se estableció que la Oficina de Redacción se dedicará en los días en que no haya sesiones, en tiempo de receso, a formar un índice de las materias que se hayan tratado en las sesiones anteriores, para hacer más fácil el manejo de los tomos de los diarios (art. 19); que "la impresión de éstos se hará del mismo modo que hasta aquí se ha hecho de las actas" (art. 20); que "los tomos de los diarios llevarán además al fin de cada uno, el índice de las materias que se hayan tratado en las sesiones que en ellos se contienen" (art. 21); que "se repartirán gratuitamente a los ayuntamientos, a los tribunales y oficinas del Estado; quedando de reserva en el Archivo un número competente para los diputados, a quienes se dará un ejemplar de su colección a su ingreso a esta Asamblea, y para su venta, que será siempre al costo" (art. 22).

El 9 de abril el Congreso aprobó la credencial del Diputado Suplente Joaquín Bars, el cual posteriormente rindió su protesta de ley (Poder Legislativo, 1829. Acta del 9 de abril de 1829: 179).[151]

[150] Este Reglamento constó de títulos referentes: a la Oficina del Redactor y su jefe, a los interventores, al redactor, a los taquígrafos y a las obligaciones de la oficina en tiempo de receso y a la impresión de las actas.

[151] El Diputado Suplente Joaquín Bars cubrió la vacante que dejó el Diputado José María Franco, el cual el 10 de marzo de 1829 fue designado Tesorero General del Estado (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 129 del 10 de marzo de 1829: 83).

El Congreso acordó que “el Gobierno oficiará directamente por extraordinario violento, al General (Isidoro) Montes de Oca, previniéndole de orden del Congreso, se ponga en marcha para esta Ciudad, cuatro días, lo más, después de recibido este oficio, para desempeñar sus funciones (de Teniente Gobernador) si no tuviere causa legal que se lo impida, o por el mismo conducto remita su renuncia, en caso de no poderlo verificar”, y que “el Congreso procederá a nuevo nombramiento, si no tuviese efecto en cualquiera de las prevenciones anteriores” (Acta de la sesión secreta del 9 de abril de 1829. BJMLM: Colección de Actas).

El 10 de abril el Congreso acordó que a “los diputados que perciban sueldo, renta o pensión determinada por cualquiera de los gobiernos de la República, sólo se les pagará por la Tesorería lo que les falte hasta el completo de los 30 pesos que tienen asignados”, y que “los eclesiásticos cuyas rentas sean constantes, cobrarán también el mismo deficiente, si lo hubiere, comprobando por relación documentada que no llega a la cantidad de las dietas” (Poder Legislativo, 1829. Acta del 10 de abril de 1829: 217).

El Congreso acordó que se imprimiera la Memoria de Gobierno que presentó el Gobernador Lorenzo de Zavala (Poder Legislativo, 1829. Acta del 10 de abril de 1829: 222).

El 18 de abril el Gobernador Lorenzo de Zavala, ante una invitación que le hizo el Presidente de la República, pidió al Congreso “que se le conceda licencia, o si es necesario se dispense al mismo Gobernador del decreto número 57 del Congreso Constituyente, para que pueda pasar al despacho del Ministerio de Hacienda, sin dejar vacante con mi ausencia el Gobierno”. En tal virtud, el Congreso le otorgó la licencia correspondiente al Gobernador (Poder Legislativo, 1829. Acta del 18 de abril de 1829: 226).[152]

El 23 de abril el Congreso le concedió la carta de ciudadano al Señor Juan Zelaeta (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 139 del 23 de abril de 1829: 89).

El Congreso facultó “al Gobierno para que invierta mil quinientos pesos en la conclusión de la obra de la Biblioteca de la Capital Provisional” (Poder Legislativo, 1829. Acta del 23 de abril de 1829: 237).

[152] Ante la falta de protesta del Teniente Gobernador Isidoro Montes de Oca se hizo cargo de la Titularidad del Poder Ejecutivo el Consejero José Ignacio Sotomayor.

El 25 de abril el Congreso le otorgó una licencia al encargado del Poder Ejecutivo, Consejero José Ignacio Sotomayor, para que pasara por unos días a la Ciudad de México (Poder Legislativo, 1829. Acta del 25 de abril de 1829: 263).

El 27 de abril el Congreso acordó que se "excitase el celo del Gobierno a fin de que con arreglo a las leyes vigentes, caucionen su responsabilidad los que administren caudales del Estado, separándose de sus destinos a los que no lo verifiquen dentro de un mes" (Poder Legislativo, 1829. Acta del 27 de abril de 1829: 274).

El Congreso dispuso que "el Gobierno suspendiera el apoyo de las cantidades que se ministren por cuenta de la Federación, a todos sus empleados y pensionistas, residentes en el Estado, siempre que el día 1º de cada mes no se reintegrasen a la Tesorería las que por esta razón se hubieren suplido en el anterior". En tal virtud, se hizo cargo del Despacho del Poder Ejecutivo el Teniente Gobernador Joaquín Lebrija (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 141 del 27 de abril de 1829: 90).

El Congreso acordó que se dirigiera una iniciativa a "las cámaras de la Unión, reducida a que se restituya al Estado de México su antigua Capital, nombrándose para su instrumentación una comisión especial" (Poder Legislativo, 1829. Acta del 27 de abril de 1829: 277).

El Presidente del Congreso integró la comisión especial para que integrara una iniciativa al Congreso de la Unión, para que se le restituyera al Estado su antigua Capital con los diputados: Mariano Arizcorreta, Agustín Escudero y José Rafael González Arratia (Poder Legislativo, 1829. Acta del 27 de abril de 1829: 277).

El 28 de abril el Congreso determinó que los presidentes de las juntas de vacunación eran responsables de "hacer conducir el fluido en su caso a las juntas subalternas y costa del Alcalde y Subprefecto del Partido, y a las juntas principales a la del Prefecto y Juez de Letras de la Cabecera de Partido donde resultare comprobado sumariamente haberse perdido por su omisión" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 140 del 28 de abril de 1829: 89).

El Congreso nombró como integrantes de la Sección de Gran Jurado a los diputados: Antonio María Castorena, Agustín Vallarta, Rafael Sánchez Contreras, Joaquín Bars y Mariano Campos (Poder Legislativo, 1829. Acta del 28 de abril de 1829: 285).

El 30 de abril el Congreso acordó que se prevenga “al Gobierno que los sujetos que tengan a su cargo administración de caudales públicos, caucionen de nuevo su responsabilidad, siempre y cuando las fianzas con las que las hayan verificado estén otorgadas por españoles que deban salir de la República por la Ley de Expulsión” (Poder Legislativo, 1829. Acta del 30 de abril de 1829: 301).

El 1 de mayo el Congreso expidió el Reglamento de la Milicia Cívica del Estado de México, el cual incluyó apartados referentes: a la formación y fuerza de la Milicia, a los exentos del servicio, a las obligaciones de la Milicia, al nombramiento de oficiales, al Inspector, a las prerrogativas, a las penas, a la instrucción, al armamento, a las insignias, divisas y uniformes, a las municiones, fornituras, caballos y monturas, al juramento, a los fondos y a las reglas generales (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 142 del 1 de mayo de 1829: 90).

El 2 de mayo el Congreso integró la Mesa Directiva del tercer mes de su Primer Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado Antonio María Castorena y la Vicepresidencia del Diputado Juan Rodríguez Sotomayor. Nombró como Secretario Propietario al Diputado Pedro de la Portilla y como Secretario Suplente al Diputado José Ramírez (Poder Legislativo, 1829. Acta del 2 de mayo de 1829: 303).

El Congreso acordó que “el Gobierno conforme a sus atribuciones, tomara cuantas medidas crea conveniente para restablecer la tranquilidad en el Distrito de Cuernavaca, sostener las autoridades de la Ciudad Heroica de Morelos, y hacer que los reos fugados de la Cárcel sean reducidos a prisión” (Poder Legislativo, 1829. Acta del 2 de mayo de 1829: 305).

El 5 de mayo el Congreso hizo “extensiva al Señor (Consejero Encargado del Poder Ejecutivo) Sotomayor (José Ignacio), la licencia que se concedió al Seño Zavala, para que durante su encargo en el presente periodo de las sesiones pueda pasar a México” (Poder Legislativo, 1829. Acta del 5 de mayo de 1829: 306).

El 6 de mayo el Congreso al crear la plaza de Cobrador de Libranzas, determinó que el “nombramiento de este empleado lo hará el Gobernador, a propuesta del Tesorero General, quien reglamentará el modo de verificar la recaudación”. Se determinó que “se llevará un libro especial en la Tesorería para este empleado, en el que se cargará el valor de las libranzas que recibiere, y datarán las cantidades que por él entregare,

las cuales firmará en ambos casos para salvar la responsabilidad del Tesorero" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 143 del 6 de mayo de 1829: 107).

El 7 de mayo el Congreso determinó que "todo propietario de tierras que por más de diez años haya permanecido hasta aquí fuera del territorio de la República por solo su voluntad, pagara anualmente el uno y medio por ciento sobre el valor líquido de las mismas", y que "estarán sujetos a esta contribución los demás propietarios que habiendo salido de la República […] no volvieren a ella después de cuatro años" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 144 del 7 de mayo de 1829: 109).

El 8 de mayo el Congreso aprobó los primeros artículos de la Ordenanza del Ayuntamiento de Tula (Poder Legislativo, 1829. Acta del 8 de mayo de 1829: 357).

El 9 de mayo el Congreso acordó que "el Gobierno no tomara al de la Federación por ningún motivo ni pretexto tabaco en rama ni labrado, entretanto no resuelva el Congreso lo conveniente respecto a su renta" (Poder Legislativo, 1829. Acta del 9 de mayo de 1829: 368).

El Congreso le concedió al reo José Diego el indulto de la pena capital (Poder Legislativo, 1829. Acta del 9 de mayo de 1829: 369).

El 11 de mayo el Congreso acordó que se "llevase adelante la gracia concedida al reo José Diego, por el que se le dispensó de la pena de la vida" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 145 del 11 de mayo de 1829: 110).

El Congreso dispuso que caerían "en pena de comiso todos los tabacos en rama y labrados que vengan a expenderse al Estado, procedentes de la Fábrica del Distrito y Territorios de la Federación, aunque caminen con guías, pases o certificados" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 146 del 11 de mayo de 1829: 110).

El Congreso aprobó una iniciativa de decreto al Congreso de la Unión, tendiente a derogar "el decreto expedido el 18 de noviembre de 1824 por el General Constituyente en el que se declara la Ciudad de México lugar de residencia de los Supremos Poderes de la Federación, y mandar en consecuencia se restituya al Estado de su nombre su antigua Capital", en el entendido de que la Legislatura no pretendía "que los Supremos Poderes de la Federación salgan de México a residir a otro lugar; porque no juzga ni puede juzgar incompatible su residencia con la del Estado en uno

mismo, pudiéndose evitar, como ya se ha dicho, el que se susciten nuevas diferencias, reglamentando sus asistencias o tomando otras medidas, que en su caso podrán ambos acordar entre sí" (Iniciativa del 11 de mayo de 1829. BJMLM: vol. 43, exp. 12).

El Congreso aprobó los primeros artículos del Reglamento Interior de la Secretaría del Congreso (Poder Legislativo, 1829. Acta del 11 de mayo de 1829: 386).

El 12 de mayo el Congreso dispuso que la Secretaría dirigiera "un ejemplar de la iniciativa (para que se le restituyera al Estado su antigua Capital) a cada uno de los señores diputados que en la Cámara del Congreso General representan el Estado de México, haciendo lo mismo con los señores que en el Senado tienen el mismo objeto" (Poder Legislativo, 1829. Acta del 12 de mayo de 1829: 392).

El 13 de mayo el Congreso acordó que se devolviera a la comisión todo el proyecto del Reglamento Interior de la Secretaría del Congreso (Poder Legislativo, 1829. Acta del 13 de mayo de 1829: 416).

El Congreso acordó suspender la discusión de los artículos de la Ordenanza del Ayuntamiento de Tula y de las demás ordenanzas "que se hallen en estado de discutirse hasta que una comisión especial presente unas bases generales a que se arreglarán las municipalidades, quedando sólo por discutirse la parte de propios y arbitrios que a cada una fueran convenientes" (Poder Legislativo, 1829. Acta del 13 de mayo de 1829: 423).

El 15 de mayo el Congreso determinó que "el Gobierno dispondrá que los administradores de alcabalas se encarguen provisionalmente de los palenques en su respectivo Partido, cobrando a los jugadores por sí o por medio de sus receptores y guardias, la cuota que está establecida, y entregando su producto en la Tesorería General. Igualmente prevendrá a los jueces de letras convoquen postores por medio de rotulones y de los periódicos para el arrendamiento de los palenques de su Partido, cuyos remates verificarán bajo las reglas que han establecido las leyes" (Poder Legislativo, 1829. Acta del 15 de mayo de 1829: 467).

El 18 de mayo el Congreso por primera vez otorgó una beca a jóvenes para que continuaran sus estudios. En aquella ocasión dispuso que "los jóvenes Pedro Salas, Manuel Fernández, Manuel Durán, Victoriano Orihuela, Rafael García y Bernabé García, que con el título de agraciados por el Gobierno en este Colegio, continuarán

en lo sucesivo hasta la conclusión de su Carrera Literaria en el mismo, con la dotación de doce pesos y medio mensuales para sus alimentos" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 147 del 18 de mayo de 1829: 111).

El Congreso nombró a dos escribientes que debían cubrir las vacantes existentes en su Secretaría (Acta de la sesión secreta del 18 de mayo de 1829. BJMLM: Colección de Actas).

El 21 de mayo el Congreso aprobó "el gasto de cinco mil dos pesos, dos y medio granos, para la conclusión de las obras y formación de las nuevas oficinas de la Casa de Moneda" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 148 del 21 de mayo de 1829: 111).

El 22 de mayo el Congreso dispuso que "se nombrara un Gobernador Interino que supla las ausencias del Propietario, por el tiempo que fuere de necesidad" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 149 del 22 de mayo de 1829: 111).

El Congreso le otorgó al Señor Simón Portes la carta de ciudadano del Estado (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 150 del 22 de mayo de 1829: 112).

El Congreso al derogar el decreto 101 en lo relativo a la contribución de pulques, determinó que el "Gobierno reglamentará la percepción de este impuesto, no pasando del diez por ciento el tanto que asignare por su recaudación"; que "el pulque fino y otomí que se consuma en el territorio del Estado, pagará por derecho de renta seis granos cada arroba, y cuatro la de gordo y tlachique", y que "todo el que saliere del territorio del Estado, pagará tres granos por arroba" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 151 del 22 de mayo de 1829: 112).

El Congreso nombró a Félix María Aburto como Inspector General de la Milicia Cívica del Estado (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 153 del 22 de mayo de 1829: 113).

El Congreso General estableció "por un año en toda la extensión de la República una contribución del cinco por ciento anual sobre las rentas de cualquier naturaleza", exceptuándose de dicha disposición "las rentas que pertenecen a la Hacienda Pública de los estados" (Dublan II, 1876. Ley del 22 de mayo de 1829: 110).

El Congreso General dispuso "proveer cuanto antes en propiedad todos los curatos y sacristías mayores de la República, con arreglo a los cánones y costumbres de las

iglesias". Se acordó que "para cada Parroquia presentará el respectivo Diocesano al Gobernador del Estado donde esté situada la Iglesia Parroquial, los eclesiásticos que ha de tomar en consideración para proveerla (los que nunca serán menos de cinco), y el Gobernador podrá excluir los que no sean adeptos, dejando al menos dos para que pueda hacerse libre provisión" (Decreto del 22 de mayo de 1829. BJMLM: vol. 53, exp. 279).

El 23 de mayo el Congreso determinó que "todos los empleos cuyo nombramiento parta de alguno de los tres poderes del Estado, se declaran ser propiedad de los individuos que los tienen, y ninguno podrá ser separado del suyo sin previa justificación de causa". Se exceptuaban "de esta regla los empleados que por leyes posteriores al decreto citado (Decreto 22 del 26 de abril de 1827), se hallen con el carácter de provisionales" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 152 del 23 de mayo de 1829: 112).

El Congreso General determinó que "la siembra y expendio de tabaco será libre por parte del Gobierno Federal desde fin de diciembre de 1830" y que "los estados podrán continuar o abolir el estanco" (Decreto del 23 de mayo de 1829. BJMLM: vol. 49, exp. 105).

El 25 de mayo el Congreso acordó que "el Presidente y uno de los secretarios del Congreso, y en su receso, los que funcionen de tales en la Diputación Permanente, harán corte de caja de los expresados fondos, cada mes, y siempre que lo crean necesario", y que "el préstamo que haya de hacerse a los dependientes de la Secretaría, que exceda de diez pesos, se hará por el Congreso, y en su receso por la Diputación Permanente, y el que no llegue a esa cantidad, con el conocimiento de los secretarios del primero, o del Presidente y Secretario de la segunda, cuyo comprobante llevará, el visto bueno de los indicados jefes" (Acta de la sesión secreta del 25 de mayo de 1829. BJMLM: Colección de Actas).

El 26 de mayo el Congreso aprobó el Presupuesto de Gastos del Estado de México para el Año Económico del 2 de junio de 1829 al 2 de junio de 1830, en el cual se mantuvieron las dietas anuales de los diputados en $3,000.00, las del Redactor pasaron de $1,500.00 a $1,600.00 y las del Oficial Mayor pasaron de $1,200.00 a $1,500. Se incorporaron las plazas de subalternos de la Oficina de Redacción y se incluyeron 732 pesos de viáticos para los señores diputados (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 154 del 26 de mayo de 1829: 113).

Se mantuvieron vigentes las contribuciones referentes a: alcabalas, consumo de efectos extranjeros, impuesto a la moneda, renta del tabaco, papel sellado, derechos de ensaye y de metales preciosos, bienes vacantes y mostrencos, multas, media anata secular y eclesiástica, peajes, temporalidades, derechos de amortización, dos reales por tonelaje de buques extranjeros, nuevos diezmos, noveno y nuevo decimal, pensión a la Mitra de México, vacantes mayores y menores, espolios, oficios vendibles y renunciables, elaboración de la moneda y derechos accesorios y rentas de gallos.

El 27 de mayo el Congreso expidió el Reglamento de la Tesorería General del Estado de México, el cual estaba integrado por los apartados referentes: a los empleados y sus dotaciones, a las reglas generales, al Tesorero, a los oficiales primero, segundo y tercero, al Oficial Apoderado y Encargado de Gastos, a los escribientes, al Cajero Pagador, al Contador de Moneda, al Guarda de Almacenes, al Portero y a las prevenciones generales (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 155 del 27 de mayo de 1829: 117).

El Congreso revocó "el acuerdo del once de abril próximo pasado, relativo al descuento de dietas que tienen algunos señores diputados, que disfrutan sueldos, rentas o pensiones" (Acta de la sesión secreta del 27 de mayo de 1829. BJMLM: Colección de Actas).

El 29 de mayo el Congreso acordó que "se cumplirá lo acordado sobre descuento de sueldo a los dependientes de esta Secretaría que falten, sin previa licencia de los secretarios, jefes de la oficina"; que "para faltar a ésta sus dependientes, deberá ser con la licencia de los dos secretarios del Congreso, y en su receso, del Presidente y Secretario de la Diputación Permanente, los que no la darán a más de dos individuos en un mismo tiempo, ni por más de quince días", y que "cuando la falta de los dependientes haya de pasar de este término, lo expondrán al Congreso, o a la Diputación Permanente para su resolución" (Acta de la sesión secreta del 29 de mayo de 1829. BJMLM: Colección de Actas).

El Congreso acordó que "se suspendiere, hasta las sesiones inmediatas, el nombramiento de los escribientes y taquígrafos de la Oficina de Redacción, en atención a que se han presentado para el desempeño de la redacción, taquígrafos sujetos que sean hijos del Estado, y en cuya práctica tenga la Comisión una entera confianza". Para facilitar dicha proposición se acordó "que se invitase por los periódicos a los taquígrafos, para que si querían solicitasen las plazas de que se

acaba de hablar" (Acta de la sesión secreta del 29 de mayo de 1829. BJMLM: Colección de Actas).

El 30 de mayo el Congreso acordó crear la plaza de Escribano de Diligencias (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 156 del 30 de mayo de 1829: 125).

El Congreso autorizó la creación de las plazas de ordenanzas de a caballo en la Secretaría del Gobernador y en la Prefectura de México (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 157 del 30 de mayo de 1829: 125).

Acudió al Congreso el Ciudadano Félix María Aburto a rendir su protesta de ley como Inspector General de la Milicia Cívica del Estado (Poder Legislativo, 1829. Acta del 30 de mayo de 1829: 639).

El Congreso integró a la Diputación Permanente de su Primer Receso, presidida por el Diputado Luciano Castorena. Nombró como Secretario al Diputado Manuel Díez de Bonilla, como miembros a los diputados: Agustín Vallarta y José María Velázquez y como Suplente al Diputado José Ramón Malo (Poder Legislativo, 1829. Acta del 30 de mayo de 1829: 640).

El 1 de junio el Congreso decidió devolverle al Gobierno Federal la renta del tabaco con la consiguiente extinción de la Fábrica de Puros y Cigarros de Texcoco (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 158 del 1 de junio de 1829: 125).

El Congreso le concedió la ciudadanía del Estado al Señor Enrique Pomier (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 159 del 1 de junio de 1829: 126).

El Congreso al crear "la plaza de Bibliotecario para la Biblioteca de esta Ciudad", dispuso que "una Comisión compuesta de dos individuos de este Honorable Congreso, que se nombrará inmediatamente, se encargará del cuidado de este establecimiento, formando el Reglamento correspondiente, que presentará para su aprobación", y que "la Comisión encargada hará el nombramiento del Bibliotecario, a cuya inspección estará sujeto" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 160 del 1 de junio de 1829: 127).

El Congreso suspendió el sueldo del Gobernador ante la licencia retirada a éste (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 161 del 1 de junio de 1829: 127).

El Congreso dispuso que “el cuerpo de mineros del Mineral del Oro, se sustraiga de la inspección de la Diputación de Tlalpujahua, del Estado de Valladolid, y se sujete a la que esté más inmediata en el Estado de México, a que corresponde a dicho Mineral” (Poder Legislativo, 1829. Acta del 1 de mayo de 1829: 652).

El 2 de junio el Congreso nombró como Teniente Gobernador a Joaquín Lebrija, ante la renuncia que a dicho cargo presentó el General Isidoro Montes de Oca (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 162 del 2 de junio de 1829: 127).

El Congreso designó a los diputados Antonio María Castorena y Manuel Díez de Bonilla como integrantes de la comisión especial que arreglaría la Biblioteca del Estado (Poder Legislativo I, 1829. Actas. Acta del 2 de junio de 1829: 671).

El Congreso dispuso que “ningún diputado mientras dure su encargo podrá admitir ningún empleo o comisión alguna en la Milicia Cívica (Poder Legislativo I, 1829. Acta del 2 de junio de 1829: 672).

El Ciudadano Joaquín Lebrija acudió al Congreso a rendir su protesta de ley como Teniente Gobernador y Encargado del Poder Ejecutivo (Poder Legislativo I, 1829. Actas. Acta del 2 de junio de 1829: 673).

El Teniente Gobernador Joaquín Lebrija, al acudir a la clausura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Congreso, indicó que “en el momento mismo en que la elección que habéis hecho de mi persona para Teniente Gobernador me llaman al ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado, tengo que presentarme en esta Honorable Asamblea, para el acto constitucional de cerrar sus sesiones ordinarias. Enteramente desprevenido para esta solemnidad, y sorprendido por vuestra elección, sólo os suplico aceptéis de mi gratitud y sincera protesta de que todas mis facultades se dedicarán a corresponder vuestra honrosa confianza” (Poder Legislativo I, 1829. Actas. Acta del 2 de junio de 1829: 673).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Luciano Castorena, señaló que “los ciudadanos diputados al retirarnos hoy de este augusto Santuario de las Leyes, partimos como siempre dispuestos a continuar las tareas legislativas al llamado legal, y con la idea consolatoria de que el funcionario en quien se ha depositado el segundo de los tres supremos poderes, obrará con toda fuerza, energía y actividad que le exijan sus deberes: seguros por lo mismo de que pasado el

corto receso, encontraremos en el segundo periodo, intacto el sagrado depósito: lo que sin duda inflamará más nuestros pechos por el bien de los pueblos y nos hará dar todo el lleno al voto de los republicanos, y con el que nos hemos ligado; este voto es, sacrificarnos en las dulces aras de la Patria, digna de mejor suerte y de todos nuestros desvelos" (Poder Legislativo I, 1829. Actas. Acta del 2 de junio de 1829: 673).

Se instaló la Diputación Permanente del Primer Periodo de Receso del Congreso, bajo la Presidencia del Diputado Luciano Castorena (Acta del 2 de junio de 1829. BJMLM. Colección de Actas: vol. 25, foja 1).

El 5 de junio la Diputación Permanente acordó otorgarle un permiso al Teniente Gobernador Joaquín Lebrija para que pasara "al Distrito Federal por los tres días de Pascua" (Acta del 5 de junio de 1829. BJMLM. Colección de Actas: vol. 25, foja 2).

El 12 de junio la Diputación Permanente acordó imprimir íntegras las actas del 2 de junio y de ese día en un periódico de la Ciudad de México, en respuesta a "una exposición que hicieron los señores Escudero, García y Arizcorreta, en que protestan de nulidad contra la elección de Joaquín Lebrija para Teniente Gobernador del Estado; incitando a esta Diputación para que inserte este negocio entre los de la convocatoria a las sesiones extraordinarias si las hubiere" (Acta del 12 de junio de 1829. BJMLM. Colección de Actas: vol. 25, foja 11).

El 16 de junio la Diputación Permanente acordó que "por conducto del Gobierno, se pregunte a la Federación los motivos circunstanciados que tiene para no admitir la devolución de la renta del tabaco en los términos que el Congreso ha decretado" (Acta del 16 de junio de 1829. BJMLM. Colección de Actas: vol. 25, foja 11).

El 23 de junio el Teniente Gobernador Joaquín Lebrija emitió una proclama, en la que indicaba que "me acaba de comunicar el Ejecutivo de la Unión la noticia de que el día 25 del presente saldrá de La Habana una expedición española, bien armada y equipada, que según avisos seguros debe atacarnos por la Península de Yucatán". Ante tal situación, exhorto a los habitantes del Estado a no desalentarse y a seguir los pasos del caudillo del sur, del Presidente de la República, que "ha dado tantos ejemplos de valor, y que siempre se ha sacrificado por la independencia" (Comunicado del Ejecutivo del 23 de junio de 1829. BJMLM: vol. 51, exp. 217).

El 10 de julio la Diputación Permanente convocó al Congreso a su Primer Periodo Extraordinario de Sesiones para el 25 del corriente, en el cual debían de tratarse los puntos relativos: a la perfecta organización de la Milicia Cívica, a los actos económicos y constitucionales que a juicio del Congreso no debían diferirse a las sesiones ordinarias, al arreglo del Ramo de Hacienda del Ejecutivo y de su contribución directa federal, y a todas las medidas que juzgara "a propósito para sostener la independencia, la forma federal, y el orden interior del Estado" (Poder Legislativo II, 2001. Convocatoria del 10 de julio de 1829: 128).

El 11 de julio la Diputación Permanente acordó dirigir al Presidente de la República una manifestación ante la invasión española a nuestro País, para expresarle "las disposiciones en que se halla el Estado para sostener a toda costa su independencia y la forma de gobierno bajo la cual está constituido" (Acta del 11 de julio de 1829. BJMLM. Colección de Actas: vol. 25, foja 25).

El 25 de julio el Congreso reunido en Junta integró la Mesa Directiva de su Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, presidida por el Diputado José María Velázquez de León. Nombró como Vicepresidente al Diputado Pedro de la Portilla, como secretarios propietarios a los diputados: Antonio María Cardona y Manuel Díez de Bonilla y como Secretario Suplente al Diputado Atanasio Saavedra (Acta del 25 de julio de 1829: BJMLM. Colección de Actas: vol. 22, foja 1).

El Teniente Gobernador Joaquín Lebrija, al acudir a la apertura del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso, señaló que "nada ha perturbado la tranquilidad del Estado", que "quedan satisfechos los sueldos de todos" incluyendo los suministros de recursos al Instituto Literario y a la Casa de Moneda, que el Ejecutivo presentará oportunamente las indicaciones que juzgara convenientes para el perfeccionamiento de la organización de la Milicia Cívica, y que "los ciudadanos han votado, en cumplimiento de la Ley y de las excitaciones del Ejecutivo a alistarse a la Milicia Cívica con aquella alegre prontitud que manifiesta el gusto con que desempeñan una grata obligación" (Acta del 25 de julio de 1829. BJMLM. Colección de Actas: vol. 22, 2).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado José María Velázquez de León, indicó que si "bien han podido los espíritus inquietos equivocar los principios y derramar por algunos días la amargura y el llanto entre los generosos mexicanos, podrán momentáneamente haberse complacido de vez de linchar al

enemigo contra el amigo, el hermano contra el hermano, y al padre contra el hijo" (Acta del 25 de julio de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 22, foja 5).

El 28 de julio el Congreso le pidió al Gobierno que le informara "con la exactitud posible cuánto ha producido el corte de plantas de caña, por le cobro de la pensión que resta", y cuáles eran los inconvenientes que presentaban los administradores de rentas para su cobro" (Acta del 28 de julio de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 22, foja 9).

El 29 de julio el Congreso acordó dirigir una excitativa al Vicepresidente de la República, "contraída a que se libre un pasaporte al Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos del Norte" (Acta del 29 de julio de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 22, foja 12).

El 31 de julio el Congreso le pidió al Gobierno que le informara el número de efectivos que integraban en cada Municipio la Milicia Cívica (Acta del 31 de julio de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 22, foja 19).

El 3 de agosto el Congreso dispuso que el Gobierno cuidara que se fabricaran las fornituras que eran necesarias para habilitar a los integrantes de la Milicia Cívica (Acta del 3 de agosto de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 22, foja 19).

El 4 de agosto el Congreso facultó "al Gobernador para que gaste cuanto sea preciso en el previsto arreglo de la Milicia Cívica, hasta poner en estado de salir a campaña la fuerza numeraria para resistir la invasión española"; para que "preste al Gobierno General, cuantos auxilios estén en la posibilidad del Estado, con calidad de reintegro"; para que "en caso de que las medidas tomadas por el Gobierno General, no fueren suficientes para contener al enemigo, desplegará por su parte, las que sean necesarias, para defender la independencia y soberanía del Estado, dando aviso al Congreso"; que "si las rentas no fuesen suficientes para los gastos que tenga necesidad de erogar, podrá empeñarlas para proporcionarse recursos, procurando la mayor economía posible en los gastos y el menor quebranto en el empeño, dando cuenta en todo a la Legislatura", y que "estas facultades cesarán, tan luego como el Congreso lo determine" (Acta del 4 de agosto de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 22, foja 25).

El 5 de agosto el Congreso le otorgó la ciudadanía del Estado a Juan Nepomuceno Rodríguez (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 166 del 5 de agosto de 1829: 129).

El 7 de agosto el Congreso autorizó al Teniente Gobernador Joaquín Lebrija "para pasar al Distrito Federal a asuntos del servicio siempre que lo justifique conveniente, mientras duren las actuales circunstancias, ofreciendo que será por el tiempo muy preciso para que no se atrase el despacho de los negocios públicos" (Acta del 7 de agosto de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 22, foja 35).

El Congreso aceptó "la dedicación que el Rector de San Juan de Letrán le hace de un acto de Jurisprudencia, que sustentará uno de sus alumnos". Para tal efecto, dispuso que "el Teniente Gobernador señalará dos ciudadanos del Estado para que a su nombre se impriman las esquelas de convites, y asistan a la función literaria", y que "el Rector del referido Colegio informará al Congreso de la conducta y demás circunstancias del actuante, manifestándole al primero por conducto del Gobierno el mismo agrado con que se ha recibido su dedicación" (Acta del 7 de agosto de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 22, foja 37).

El 8 de agosto el Congreso expidió un manifiesto a la Nación ante la inminente invasión de las tropas españolas, en el que indicaba que "una fuerza enemiga se presenta ya en nuestras costas, y vuestros representantes han volado a ocupar las sillas que les destinaron vuestros votos: porque émulos de vuestro patriotismo, quieren ser partícipes de vuestros triunfos, porque fieles a sus juramentos, jamás abandonarán el sagrado depósito que una vez confiasteis a su cuidado", y "si los peligros crecen, vuestros diputados morirán también a vuestro lado, porque no quieren sobrevivir a la servidumbre de su Patria; más desde ahora os prometen los triunfos más gloriosos si sabéis combinar la pericia y el valor con la prudencia, la moderación y la justicia" (Manifiesto del 8 de agosto de 1829. BJMLM: vol. 48, exp. 44).

El 9 de agosto el Congreso aprobó la integración de una comisión especial de su seno, con el propósito de que "atienda y presente a la aprobación del Congreso, una proclama a todos los habitantes del Estado, para excitar su patriotismo contra la expedición española". Dicha comisión se integró con los diputados: José Ramón Malo y Atanasio Saavedra (Acta del 9 de agosto de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 22, foja 32).

El 10 de agosto Joaquín Lebrija, Teniente Gobernador dio a conocer una Proclama dirigida a los habitantes del Estado para que se alisten a la Milicia Nacional a efecto de combatir a las Tropas Españolas (Manifiesto del 10 de agosto de 1829. BJMLM: vol. 51, exp. 204).

El 11 de agosto el Congreso dispuso "que por conducto del Gobierno se excite a la mayor brevedad a los respectivos diocesanos, a fin de que dispongan que en las iglesias del Estado se hagan rogaciones públicas por tres días, para implorar del Ser Supremo el feliz éxito de nuestras armas contra el invasor de la independencia y libertad de la Nación Mexicana" (Acta del 11 de agosto de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 22, foja 54).

El 12 de agosto el Congreso dispuso que no pagarían "contribución de exentos en la Milicia Cívica del Estado, aquellos individuos que no hayan cumplido diez y ocho años de edad, y los notoriamente insolventes que pasen de cincuenta" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 163 del 12 de agosto de 1829: 128).

El Congreso dispuso que las renuncias de los jefes y oficiales de la Milicia Cívica se elevaran al Gobernador por el Inspector con el respectivo informe (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 164 del 12 de agosto de 1829: 129).

El Congreso exhortó al Gobierno para que diera pleno cumplimiento a los decretos 19,[153] 20[154] y 72[155] del Congreso del Estado y a la Ley General de Expulsión de los Españoles, cuidando que "ningún habitante o vecino del Estado tenga más armas que las precisas a su defensa individual, no permitiendo el acopio de ellas a los particulares, sino para el comercio público, haciendo responsable del abuso que se haga de ellas a los vendedores" (Bando del 12 de agosto de 1829. AHEM: G.G.G. vol. 18, exp. 10).

El Teniente Gobernador Joaquín Lebrija, al acudir a la clausura del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso, indicó que se estaban cumpliendo las leyes relativas a la expulsión de los españoles, que se había "prevenido a los prefectos y administradores de rentas acudan con cuantos auxilios se les indiquen para sostener

[153] Prohibía a los norteamericanos y españoles portar armas.
[154] Preveía a las autoridades que cuidaran que los extranjeros y españoles no ejercieran acto alguno de ciudadanía.
[155] Disponía que los españoles capitulados y venidos después del año de 1821 que no tuvieran requisitos legales debían salir del País.

la guerra, sin necesidad de otra orden", y que "tenía la satisfacción de indicaros que sus rentas por lo que parece hasta ahora, se hallan en un pie ventajoso, y alcanzando una cantidad considerable contra la Federación" (Acta del 12 de agosto de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 22, foja 60).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado José María Velázquez de León, indicó que los individuos que componen esta Asamblea, se retiran de este Salón después de haber hecho cuanto estaba en sus facultades para dar cumplimiento al importante objeto con que fueron convocados: el análisis que de sus operaciones ha hecho al Ejecutivo, acredita muy satisfactoriamente esta verdad; más no por eso se van a entregar al ocio que en tiempos menos infelices pudieran gozar; antes bien, van a preparar en el corto receso de cuarenta y ocho horas, los materiales que deben servir para las deliberaciones del Congreso en las inmediatas sesiones ordinarias" (Acta del 12 de agosto de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 22, foja 62).

El 15 de agosto el Congreso reunido en Junta integró la Mesa Directiva del primer mes de su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado José Ramón Malo y la Vicepresidencia del Diputado José María Cardoso. Nombró como secretarios propietarios a los diputados: Atanasio Saavedra y José María Velázquez de León y como Secretario Suplente al Diputado Juan Rodríguez Sotomayor (Acta del 15 de agosto de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 23, foja 2).

El Teniente Gobernador Joaquín Lebrija, al acudir a la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, aseveró que "el enemigo a esta hora deberá estar sufriendo el castigo de su audacia, por los valientes hijos de éste y otros estados", que el Ejecutivo recomendaba a los diputados "el pronto y puntual arreglo de la Administración de Justicia en el Estado", y que ante "la funesta controversia que se observa en el Estado de Sonora y Sinaloa, producida por la reñida cuestión de dividirse, es un objeto de la más pronta resolución, para evitar el que en punto alguno haya divergencia entre mexicanos. El Ejecutivo desea que esta Legislatura emita un voto en el particular, a fin de contribuir con él a conservar la indestructible unión de todas las partes integrantes de la República" (Acta del 15 de agosto de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 23, foja 2).

En respuesta a dicho mensaje el Presidente del Congreso, Diputado José Ramón Malo, señaló que esta Asamblea, "que en las sesiones extraordinarias que acaban de

pasar dictó cuantas medidas creyó capaces en lo posible, para contener y escarmentar al enemigo, y que tiene la mayor confianza en el uso que hará de las facultades concedidas al Ejecutivo que infatigable y enérgico rige a los pueblos, va con toda calma a ocuparse en el arreglo de los interesantes ramos que forman la Hacienda y la Administración del Estado; dedicados sus miembros a dejar las sillas y volar a la campaña en los momentos de mayor riesgo, o morir en ellos si las circunstancias los ponen en ese caso" (Acta del 15 de agosto de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 23, foja 4).

El 17 de agosto el Congreso General impuso un préstamo forzoso a los estados de la República por 2´818,113 pesos, de los cuales le correspondían al Estado de México la cantidad de 266,667 pesos, que debía pagar "cada año los intereses y la tercera parte de los capitales de su préstamo, mientras se le asigna contingente" (Decreto del 17 de agosto de 1829. BJMLM: vol. 48, exp. 3).

El 18 de agosto el Congreso acordó que la Comisión de Milicia presentara una iniciativa al Congreso de la Unión, para que reformara "el artículo 9 de la Ley General del 29 de diciembre de 1827, en la parte que dispone que las compañías de infantería que no pasen de cuatro queden en clase de sueltas, y lo propio en las de caballería que no lleguen a tres escuadrones, queden en la misma clase de sueltas, y lo mismo si fuese una sola compañía" (Acta del 18 de agosto de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 23, foja 14).

El 19 de agosto el Congreso acordó que "la contribución de exentos de la Milicia Cívica, se pagará por los diputados no exentos, en el lugar de la residencia de los Poderes" (Acta del 19 de agosto de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 23, foja 16).

El 20 de agosto el Congreso le concedió al Diputado José Ramírez una licencia por doce días para separarse de su cargo, con el fin de restablecer su salud (Acta del 20 de agosto de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 23, foja 19).

El Congreso dispuso que "durante el tiempo de las sesiones ordinarias y extraordinarias de esta Asamblea todos los diputados residirán en la Ciudad, a menos que causa justificada a satisfacción del Congreso se los impida" (Acta del 20 de agosto de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 23, foja 23).

El Congreso acordó hacer extensiva a los diputados y senadores del Congreso de la Unión por el Estado de México “una exposición a las cámaras, para que no se apruebe el artículo 9º del proyecto de arbitrios, por ser injusto y sumamente gravoso al Estado” (Acta de la sesión secreta del 20 de agosto de 1829. BJMLM: Colección de Actas).

El 21 de agosto el Congreso acordó hacer una iniciativa al Congreso “General de la Federación, sobre que se liberte al Estado de la carga que trata de imponérsele en el repartimiento de las cantidades de préstamo forzoso, que se ha aprobado en la Cámara de Diputados” (Acta de la sesión secreta del 21 de agosto de 1829. BJMLM: Colección de Actas).

El 22 de agosto el Congreso General dispuso que “los estados podrán imponer un dos por ciento de derecho de consumo a los efectos extranjeros a más del tres para que están facultados” (Dublan II, 1876. Ley del 22 de agosto de 1829: 151).

El 25 de agosto el Congreso acordó crear “una plaza de relojero en el lugar donde reside exigiéndole al referido Rodríguez los costos prevenidos para el despacho de carta de ciudadano” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 169 del 25 de agosto de 1829: 130).

El Congreso aprobó una iniciativa dirigida al Congreso de la Unión, “para que no se aplique el artículo 12 del proyecto de ley sancionado por la de Representantes, en que se grava al Estado en sus intereses y capitales” (Acta del 25 de agosto de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 23, foja 24).

El 29 de agosto el Congreso le concedió la carta de ciudadano del Estado a Joaquín Velázquez de León (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 165 del 29 de agosto de 1829: 129).

El 31 de agosto el Congreso dispuso que “por conducto del Gobierno se pida al Supremo Tribunal de Justicia y a la Excelentísima Audiencia del Estado, propongan al Congreso las reformas que más exijan los procedimientos civiles y criminales” (Acta del 31 de agosto de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 23, foja 48).

El 1 de septiembre el Congreso le otorgó una licencia por 30 días para separarse de su cargo al Diputado Pedro de la Portilla, para que se restableciera de su salud (Acta del 1 de septiembre de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 23, foja 51).

El Congreso le otorgó una licencia por dos meses para separarse de su cargo al Diputado José Rafael González Arratia, para que se restableciera de su salud (Acta del 1 de septiembre de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 23, foja 52).

El 2 de septiembre el Congreso General dispuso que "se ocuparán por la Federación las propiedades de cualquiera naturaleza que sean, de todas las personas que las tienen en la República y residen en país enemigo" (Decreto del 2 de septiembre de 1829. AHEM: G.G.G. vol. 7, exp. 23).

El 3 de septiembre el Congreso acordó "que se devuelva el descuento, que se hizo de sus dietas a los señores diputados, por acuerdo del 11 de abril, revocado el 18 de mayo próximo pasado", por ser beneficiarios de sueldos, rentas o pensiones (Acta de la sesión secreta del 3 de septiembre de 1829. BJMLM: Colección de Actas).[156]

El Presidente de la República al reglamentar el decreto por el que dispuso que la Federación ocupara las propiedades de las personas que vivieran en país enemigo, dispuso que "los comisarios ocurrirán a los gobernadores de los estados para que éstos les franqueen las noticias y los auxilios en los casos necesarios", y que "se nombrarán tres comisionados, uno por los gobernadores de los estados, otro por el Comisario General, y otro por el Comandante Militar para que organicen y verifiquen la recaudación, llevando al efecto un libro en el que firmarán las entradas" (Reglamento del 3 de septiembre de 1829. BJMLM: vol. 54, exp. 324).

El 4 de septiembre el Congreso acordó que "la Comisión Primera de Hacienda extenderá en el acto, una iniciativa, al Excelentísimo Señor Presidente de la República, para que se sirva revocar el artículo 3º de la Ley en que se previene la ocupación de las fincas de las temporalidades que disfrutan los estados, por la Federación, exponiendo lo necesario e injusto de esta medida, en circunstancias que el Estado se halla franqueando tan generosamente sus ventas", y que "el Gobierno suspenderá todo procedimiento en virtud del expresado decreto, hasta la resolución de este Congreso, tomando todas las providencias necesarias, para evitar toda extracción, y para poner a cubierto las fincas, de toda violencia o atentado" (Acta de la sesión secreta del 4 de septiembre de 1829. BJMLM: Colección de Actas).

[156] No se localizó en las actas el acuerdo del 11 de abril y el que se señala que fue el 18 de mayo se aprobó el día 27 de dicho mes.

El Presidente de la República en uso de sus facultades extra constitucionales, expidió un decreto, en el que dispuso que a juicio de los gobiernos de los estados, del Distrito y de los territorios, se castigará a "los autores, editores e impresores, de los escritos que directa o indirectamente protejan las miras de cualquiera invasor de la República, o que auxilien algún cambio del sistema federal adoptado, o ataquen calumniosamente a los Supremos Poderes de la Federación, o de los estados" (Decreto del 4 de septiembre de 1829. BJMLM: vol. 52, exp. 237).

El Presidente de la República dispuso la organización de una rifa de algunas fincas nacionales rústicas y urbanas para hacerse de fondos públicos, correspondiéndole al Estado de México la venta de mil 300 billetes, con un monto de trece mil pesos (Dublan II, 1876. Decreto del 4 de septiembre de 1829: 156).

El 5 de septiembre el Congreso acordó nombrar una comisión de su seno, para que pusiera en manos del Presidente de la República la excitativa que había aprobado, para que se sirviera revocar el artículo 3º de la Ley que prevenía la ocupación de las fincas de las temporalidades que disfrutaban los estados (Acta de la sesión secreta del 5 de septiembre de 1829. BJMLM: Colección de Actas).

El Congreso dispuso "que el Gobierno redoble sus esfuerzos en orden a la conservación de la tranquilidad pública en el interior del Estado, encargando a las respectivas autoridades vigilen la conducta de los individuos sospechosos a favor de la invasión y dominación de los españoles, desplegando en consecuencia, todos los resortes de las leyes vigentes contra los traidores de la República"; que "por conducto de los respectivos diocesanos, haga que la Pastoral del Honorable Cabildo, últimamente expedida contra la invasión española, no sólo se lea una vez, según estilo, en las misas solemnes, sino cuantas se juzguen oportunas, haciendo sobre ella los eclesiásticos, particularmente los párrocos, las exhortaciones conducentes a la conservación de la independencia y libertad mexicanas", y que "así mismo, hará el Gobierno, que por todos los medios posibles, se planteen y fomenten en los pueblos, las escuelas primarias, cuidando de sus mejores progresos" (Acta de la sesión secreta del 5 de septiembre de 1829. BJMLM: Colección de Actas).

El Presidente del Congreso nombró a los integrantes de la comisión que le entregaría al Presidente de la República la excitativa para que no se ocuparan las fincas de temporalidades. Dicha comisión se integró con los diputados: Rafael Sánchez

Contreras y Luciano Castorena (Acta de la sesión secreta del 5 de septiembre de 1829. BJMLM: Colección de Actas).

El 11 de septiembre el Congreso dispuso que “se cobrara en las aduanas del Estado el dos por ciento de derecho de consumo a los efectos extranjeros, a más del tres, y en los mismos términos en que se halla establecido” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 167 del 11 de septiembre de 1829: 129).

El Congreso acordó que “se excite el celo del Gobierno del Estado, para que pida al de la Federación, evite que los jefes expedicionarios, impongan en los pueblos del Estado contribuciones que no estén determinadas por la Ley, sino que ocurran por lo necesario, a los administradores, o subcomisarios, dando el recibo de estilo”, y que “manifieste al Señor Presidente de la República, los préstamos ilegales que ha exigido en Huejutla el General Velázquez, y la demora con que practica su marcha, para que tome las providencias oportunas” (Acta de la sesión secreta del 11 de septiembre de 1829. BJMLM: Colección de Actas).

Joaquín Lebrija, Teniente Gobernador dio a conocer una Proclama del Ejército de Operaciones comandado por el General Antonio López de Santa Anna sobre la capitulación de las Tropas Españolas en el Puerto de Tampico (Proclama del 11 de septiembre de 1829. BJMLM: vol. 51, exp. 187).

El 15 de septiembre el Congreso integró la Mesa Directiva del segundo mes de su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado Manuel Díez de Bonilla y la Vicepresidencia del Diputado Atanasio Saavedra. Nombró como Secretario Propietario al Diputado Luciano Castorena y como Secretario Suplente al Diputado Rafael Sánchez Contreras (Acta del 15 de septiembre de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 23, foja 80).

El Ejecutivo Federal cesó los comisarios generales en la recaudación del Fondo de Minería (Decreto del 15 de septiembre de 1829. BJMLM: vol. 49, exp.102).

El Ejecutivo Federal creó el Fondo de Arbitrios, “para atender los gastos de la guerra contra los españoles y demás que exigen las circunstancias extraordinarias” (Decreto del 15 de septiembre de 1829. BJMLM: vol. 49, exp.101).

El Presidente de la República dispuso que “queda abolida la esclavitud en la República” (Decreto del 15 de septiembre de 1829. BJMLM: vol. 47, exp. 18).

El 17 de septiembre el Congreso acordó que la comisión nombrada para visitar al Diputado José María Velázquez de León, “conforme al artículo 43 del Reglamento Interior del Congreso, le facilitará los recursos que necesite para su curación, quedando sujeto este Señor, a lo que sobre estos auxilios resuelva la Asamblea como regla general, debiéndose incluir en estas cantidades, los cien pesos ya acordados” (Acta de la sesión secreta del 17 de septiembre de 1829. BJMLM: Colección de Actas).

El 22 de septiembre el Congreso declaró “pensionistas del Estado a los empleados del tabaco, cuyas plazas fueron creadas después de la entrega de las rentas”, y que “los empleados serán preferidos en igualdad de circunstancias en los destinos vacantes” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 168 del 22 de septiembre de 1829: 130).

El Teniente Gobernador Joaquín Lebrija, comunicó a los habitantes del Estado, que “con el más ardiente júbilo os anuncio que la guerra nacional ha terminado felizmente por el esfuerzo y constancia de nuestros valientes campeones, en cuyos pechos se ha estrellado la presuntuosa audacia de los españoles, que ya prometían volvernos al yugo que irrevocablemente rompimos” (Comunicado del 22 de septiembre de 1829. AHEM: G.G.G. vol. 18, exp. 26).

El 23 de septiembre el Congreso autorizó “a la Comisión de Biblioteca, para que de acuerdo con el Gobierno pueda vender el segundo ejemplar de las obras existentes en la Biblioteca”, y para destinar “cuatro mil pesos para comprar más obras para la Biblioteca, en los que se incluirán los dos mil y más que restan de los nueve destinados al propio fin, y el producto de las vendidas” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 175 del 23 de septiembre de 1829: 133).

El 24 de septiembre el Congreso aprobó la división en dos del Estado de Occidente, formando uno Sonora y otro Sinaloa, conforme con lo acordado por el Soberano Congreso de la Unión (Acta del 24 de septiembre de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 23, foja 104).

El 25 de septiembre el Congreso al dar cumplimiento al decreto del 17 de agosto del Congreso General por el que se le fijó al Estado un préstamo forzoso por la cantidad

de 266,667 pesos, dispuso que “si este crédito no alcanzase a cubrir dichos pagos, se satisfará el resto por la Tesorería General, con la debida proporción y preferencia, dando oportuno aviso al Gobierno, en caso de no poderse verificar por falta de fondos u otras causas, para la conveniente resolución” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 170 del 25 de septiembre de 1829: 130).

El Congreso aprobó “el gasto de seiscientos pesos anuales, que el Gobierno ha asignado a la Administración de Alcabalas de Huejutla, ínterin se hace el arreglo general de las aduanas” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 171 del 25 de septiembre de 1829: 130).

El Congreso acordó que con motivo del aniversario de la sanción de la Constitución Federal, se celebrara el 4 de octubre en la Capital del Estado “el triunfo conseguido en Tampico por el Ejército Mexicano contra las fuerzas invasoras de la Gloria”, y que “en los demás pueblos del Estado se verificará el día que el Gobierno lo tenga por conveniente” (Acta del 25 de septiembre de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 23, foja 114).

El 26 de septiembre el Congreso determinó que “en defecto del Teniente Gobernador, cuando se halle funcionando de Gobernador, entrará a ejercer las veces de éste, el Consejero Secular más antiguo, en quien concurran las circunstancias que exige la Constitución para este encargo”, y que “si por algún inconveniente los consejeros seculares no puedan hacerse cargo del Gobierno, entrará a desempeñarlo el Magistrado más antiguo del Supremo Tribunal de Justicia (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 172 del 26 de septiembre de 1829: 132).

El Congreso nombró al Señor Severiano Quesada como Senador de la República, para que cubriera la vacante que dejó el Señor Paz (Acta del 26 de septiembre de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 23, foja 120).

El 29 de septiembre el Congreso autorizó una proclama que mandó circular a las legislaturas y a los gobiernos de los estados, en donde manifestó que “no admite en el Estado el decreto del Gobierno General de 15 de presente, sobre el establecimiento de un fondo para los gastos de guerra” (Manifiesto del 29 de septiembre de 1829. BJMLM: vol. 51, exp.156).

El 30 de septiembre el Congreso determinó que "los tabacos que resulten absolutamente inútiles al tiempo de su entrega a los comisionados del Gobierno de la Federación, no se cargarán al mismo en la liquidación general" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 173 del 30 de septiembre de 1829: 132).

El Congreso dispuso asignar a los administradores de alcabalas el tres por ciento de lo que recauden de los propietarios que por más de diez años hayan permanecido fuera del territorio de la República (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 174 del 30 de septiembre de 1829: 132).

El 1 de octubre el Congreso acordó que se exoneraba al Ciudadano Oficial Mayor José Osorio, del encargo de hacer los gastos menores de esta Secretaría; que "en consecuencia, liquidadas las cuentas, entregará el resto del fondo que haya en su poder, al Secretario más antiguo"; que "este individuo conservará el dinero, y lo distribuirá en sus objetos, presentando a su debido tiempo al Congreso la cuenta justificada para su aprobación, entregando el resto al que le suceda", y que "en el receso, el Secretario de la Diputación Permanente, cumplirá con lo dispuesto en el artículo anterior" (Acta de la sesión secreta del 1 de octubre de 1829. BJMLM: Colección de Actas).

El 2 de octubre el Congreso dispuso que "el Gobierno también dispondrá que al papel sellado llamado de oficio, se añada la siguiente inscripción, impresa en tinta negra, y sin ninguna abreviatura: Estado Libre de México, para los años… (Aquí el bienio)". Este papel debía usarse para las actuaciones judiciales puramente de oficio y para el gasto de oficinas se usaría "del corriente, excepto de los asuntos en que se requiera de determinada clase de papel sellado, conforme a la Ley de 6 de octubre de 823" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 176 del 2 de octubre de 1829: 133).

El Congreso en sesión secreta extraordinaria acordó mediante una proposición "que se revoque el acuerdo de 18 de abril próximo pasado, por el que se concedió dispensa al Ciudadano Lorenzo de Zavala, para encargarse del Ministerio de Hacienda", y que "el Teniente Gobernador actual, no entregue el Gobierno hasta la resolución del Congreso" (Acta de la sesión secreta del 2 de octubre de 1829. BJMLM: Colección de Actas).[157]

[157] Cabe señalar, que la licencia al Gobernador Lorenzo de Zavala, el Congreso la retiró "porque se manifestó que habiéndose ejecutado esto por un simple acuerdo, se había faltado a la Constitución que exige varios trámites en disposiciones que tienen el carácter de decreto, como no podía dejarlo de serlo el

El 5 de octubre el Congreso acordó “que se prevenga al Gobernador que habiendo muerto el Señor Diputado (José María) Velázquez (de León), llamase al Suplente Ciudadano Rafael Villagrán, para que ocupe su lugar, y se presente oportunamente a hacer su juramento de estilo” (Acta del 5 de octubre de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 23, foja 161).

El Congreso acordó que se realizaran honras fúnebres en honor del extinto Diputado José María Velázquez de León, y que se cubrieran los gastos por concepto de los derechos parroquiales y del cajón (Acta de la sesión secreta del 5 de octubre de 1829. BJMLM: Colección de Actas).

El Congreso acordó expedir un manifiesto, en el que se insertaran “los documentos relativos a aquellos decretos del Gobierno de la Federación, que no ha obsequiado esta Asamblea, por ser contrarios al sistema, como el de temporalidades, e igualmente las actas de las discusiones habidas sobre estos particulares” (Acta de la sesión secreta del 5 de octubre de 1829. BJMLM: Colección de Actas).

El 6 de octubre el Congreso al disponer que el derecho de consumo a los efectos extranjeros se cobrara por igualas, facultó al Gobierno para que reglamentara dicho cobro (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 178 del 6 de octubre de 1829: 137).

El Congreso eximió “del derecho de alcabala las ventas de las minas pertenecientes al Estado” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 179 del 6 de octubre de 1829: 138).

El Congreso determinó que “el Gobierno dispondrá que el Ayuntamiento de Tlalnepantla forme el presupuesto de gastos que pueden erogarse en la reparación del Puente de San Antonio, que examinará escrupulosamente, y aprobándolo se procederá a la obra, bajo la inspección del mismo Ayuntamiento”; que “los gastos en obsequio de la brevedad, se harán por la Tesorería del Estado con calidad de reintegro”, y que “se establecerá un peaje en la Municipalidad de Tlalnepantla, en el lugar más conveniente, a juicio del Gobierno” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 180 del 6 de octubre de 1829: 138).

El 7 de octubre el Congreso expidió el Reglamento sobre el Arreglo de la Biblioteca del Estado de México, el cual contemplaba títulos referentes a: la Comisión de Bibliotecas

---

de que se trata, por importar la dispensa de una Ley” (Dictamen del 15 de octubre de 1829. AHEM: G.G.G. vol. 15, exp. 34).

y a sus obligaciones, al bibliotecario y al fondo para gastos menores (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 177 del 7 de octubre de 1829: 135).

En este reglamento se dispuso que “la Comisión de Biblioteca se compondrá de dos diputados del Congreso, nombrados según su Reglamento Interior, y durarán en este encargo dos años” (art. 1º); que “los individuos de esta Comisión serán los jefes de esta Oficina Pública, y bajo su inmediata inspección estará el Bibliotecario, al que con causa justificada podrán separar de su destino, dando cuenta al Gobierno” (art. 2º), y que “estará a su cargo el principal cuidado, conservación y aumento de la Biblioteca; de las piezas del Museo destinadas a este objeto, formando los índices respectivos” (art. 3º), y que entre las obligaciones del Bibliotecario estaban: las de “abrir la Biblioteca todos los días de trabajo, incluso los festivos de solo cruz, por las mañanas desde las nueve hasta la una, y por las tardes desde las cuatro hasta las seis” (art. 10).

El 8 de octubre el Congreso indultó “de la pena capital a que han sido condenados en segunda instancia, a José Isidoro Martínez y José Miguel, aplicándoles la mayor extraordinaria” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 181 del 8 de octubre de 1829: 139).

El Congreso dispuso que “habrá en cada Partido una Administración de Rentas”, “que la residencia de las principales oficinas y sus jefes será en la misma Cabecera de Partido”, que “se pondrán receptorías dentro de un mismo Partido en las poblaciones que al Gobierno parezca conveniente, para la más fácil y segura recaudación de los derechos”, que “el Gobierno designará el número de empleados que deban desempeñar las tareas en cada Administración o Receptoría”, y que “el mismo graduará la cuota de los sueldos que hayan de disfrutar los administradores, receptores y demás oficinas establecidas sea por renta fija o tanto por ciento” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 182 del 8 de octubre de 1829: 139).

El Congreso aprobó la elección hecha para Tercer Diputado Suplente del Ciudadano Rafael Villagrán, el cual posteriormente rindió su protesta de ley (Acta del 8 de octubre de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 23, foja 176).

El 9 de octubre el Congreso no admitió “en el Estado el decreto del Gobierno General del 15 del mes anterior, sobre el establecimiento de un Fondo de Gastos de Guerra” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 183 del 9 de octubre de 1829: 140).

El Congreso en sesión secreta extraordinaria “dio cuenta con un oficio del Gobernador de este Estado, transmitiendo el del Ministro de Hacienda Ciudadano Lorenzo de Zavala, en que manifiesta haber renunciado a este empleo, para venir a desempeñar el de Gobernador de este Estado, en virtud de haber revocado esta Legislatura el permiso para servir aquel” (Acta de la sesión secreta del 9 de octubre de 1829. BJMLM: Colección de Actas).

El Congreso facultó “a la comisión que asistió en su enfermedad al Señor (Diputado José María) Velázquez, para que gaste lo necesario en sus honras, consultando la mayor economía”; que “presentará ésta la cuenta justificada de los gastos para su aprobación”, y que “se nombrarán además cuatro individuos del Honorable Congreso, para la asistencia a esta función” (Acta de la sesión secreta del 9 de octubre de 1829. BJMLM: Colección de Actas).

El Presidente del Congreso nombró a los integrantes de la comisión que asistiría a las honras fúnebres del Diputado José María Velázquez de León. Dicha comisión se integró con los diputados: Pablo Galeana, José Antonio Magos, Agustín Vallarta y Antonio María Cardona (Acta de la sesión secreta del 9 de octubre de 1829. BJMLM: Colección de Actas).

El 10 de octubre el Congreso dispuso que “felicitará oficialmente a los generales Santa-Anna y (Manuel Mier y) Terán y al Presidente de la República (Vicente Guerrero), por el triunfo de Tampico”, que “se mandarán hacer dos espadas con guarnición y puño de oro, para los dos expresados generales”, y que “por un decreto especial los expresados generales y los oficiales y jefes, que a juicio de los referidos se hubieren distinguido en la campaña y que no fuesen ciudadanos de este Estado, se agraciarán con este título” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 184 del 10 de octubre de 1829: 140).

El 12 de octubre el Congreso determinó que quedaban exentos del servicio a la Milicia Cívica “los administradores, mayordomos y ayudantes de fincas rústicas, quedando obligados al pago de los tres reales mensuales que la misma ley previene” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 185 del 12 de octubre de 1829: 140).

El Congreso dispuso (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 186 del 12 de octubre de 1829: 141) que “no se entregaran al Gobierno General las fincas de temporalidades del Estado, sino en caso de apremio o violencia” (art. 1), y que “de la misma suerte, no

consentirá en la entrega de existencias, muebles y semovientes, y si esto no pudiere impedirlo, procederá a ella, previo inventario y valúo de todos ellos, que remitirá al Congreso" (art. 2).

El 13 de octubre el Congreso integró a la Diputación Permanente del Segundo Periodo de Receso, presidida por el Diputado Atanasio Saavedra. Nombró como Secretario al Diputado Luciano Castorena, como miembros a los diputados: Mariano Campos y Rafael González Arratia y como Suplente al Diputado Rafael Villagrán (Acta del 13 de octubre de 1829. BJMLM: Colección de Actas: vol. 23, foja 201).

El 15 de octubre el Congreso le concedió "al Pueblo de Huejutla, en premio a los servicios con que se distinguió contra la invasión española en Tampico, una feria anual de cuatro días, desde la víspera de Pascua de Navidad, por el término de diez años, excepcionando su comercio en ese tiempo de todo derecho" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 187 del 15 de octubre de 1829: 142).

El Congreso acordó que se le abonara la cantidad que se le debía al Ciudadano Vicente José Villada por el tiempo que desempeñó provisionalmente la plaza de Tesorero de la Casa de Moneda (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 188 del 15 de octubre de 1829: 142).

El Congreso resolvió el problema suscitado con el Gobernador mediante la expedición de un acuerdo, en el que se declaró "expedito al Sr. D. Lorenzo de Zavala, para reasumir el mando de su Gobierno, luego de que a juicio del Congreso cesen las circunstancias políticas que ahora le impiden moralmente"; que "se le abonará el sueldo íntegro de su dotación desde el día en que conste le fue admitida la renuncia de la Secretaría de Hacienda", y que "todo acto que en cualquier modo se dirija a embarazar esta disposición, se reputa atentatorio a la soberanía del Estado, y como tal se castigará según a las leyes" (Acta de la sesión secreta del 15 de octubre de 1829. BJMLM: Colección de Actas).

El 16 de octubre el Teniente Gobernador Joaquín Lebrija, al acudir a la clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, señaló que "libre ya de este embarazo y sensibles admiradores del valor, habéis tendido una mano para coronar a los héroes, y con la obra habéis dado un impulso a la recaudación de las rentas de la Hacienda, arreglando los límites de las aduanas y autorizando al Ejecutivo para señalar las bases más propias para aquel efecto. Habéis concedido excepciones a la

agricultura librando de la obligación de servir a la Milicia Cívica, a los que están inmediatamente destinados a este importante ramo, y sobretodo, disipados del noble y glorioso empeño de no gravar a los pueblos" (Acta del 16 de octubre de 1829. BJMLM. Colección de Actas: vol. 23, foja 215).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Manuel Díez de Bonilla, señaló que "muy grandes y muy delicadas han sido las circunstancias en que ha tenido que deliberar este Honorable Congreso en las presentes sesiones. Apenas comenzaba a sistemar la Hacienda sobre unas bases sólidas, y aplicar saludables reformas a los demás ramos de la Administración, cuando toda su atención debió observarse en los grandes riesgos que amenazaban a la Patria" (Acta del 16 de octubre de 1829. BJMLM. Colección de Actas: vol. 23, foja 216).

Se instaló la Diputación Permanente del Segundo Receso del Congreso, bajo la Presidencia del Diputado Atanasio Saavedra (Acta del 16 de octubre de 1829. BJMLM. Colección de Actas: vol. 26, foja 1).

El Teniente Gobernador Joaquín Lebrija dirigió un manifiesto a los habitantes del Estado, en el que se comprometió a "llenar el periodo constitucional a que se extiende la elección recaída ahora sobre mí, con todos los servicios que me exige la Ley, sin perdonar aún los sacrificios más costosos que puedan influir en haceros sensible a la existencia de un Gobierno benéfico consagrado únicamente a los fines grandiosos de su institución, tales como el sostén de las garantías, el fomento de la industria, la recta y pronta Administración de Justicia, y por fin, el exacto cumplimiento de las leyes que constituyen y reglan nuestra sociedad" (Manifiesto del Ejecutivo del 16 de octubre de 1829. AHEM: G.G.G. vol. 20, exp. 7).

El 29 de octubre el Presidente de la República expidió el Tratado de Amistad, Navegación y Comercio celebrado entre el Rey de Dinamarca y los Estados Unidos Mexicanos (Decreto del 29 de octubre de 1829. BJMLM: vol. 49, exp. 103).

El Presidente de la República expidió el Tratado de Amistad, Navegación y Comercio celebrado entre el Rey de Hannover y los Estados Unidos Mexicanos (Decreto del 29 de octubre de 1829. BJMLM: vol. 49, exp. 104).

El 6 de noviembre la Diputación Permanente tomó conocimiento de un oficio del Diputado Rafael Sánchez Contreras, en el que anexaba una circular dirigida "a los

prefectos y ayuntamientos del Distrito de Huejutla y demás lugares vecinos, participándoles su marcha a aquel punto, para arreglar el establecimiento de educación pública" (Acta del 6 de noviembre de 1829. BJMLM. Colección de Actas: vol. 26, foja 12).[158]

El Presidente de la República ante los reclamos de los estados para revocar el decreto sobre el fondo de gastos del Erario expidió un decreto, en el que se indicaba que mientras se establece el sistema general permanente y fijo de los fondos de la Hacienda Federal los estados de: Jalisco, Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Michoacán, Yucatán, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Durango, Occidente, Tamaulipas, Tabasco, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila y Texas, contribuirían mensualmente con 193,351 pesos. El Estado de México que aún no tenía asignado contingente debía aportar 35,000, en tanto que el Distrito Federal y los territorios 36,648 (Decreto del 6 de noviembre de 1829. BJMLM: vol. 52, exp. 225).

El 20 de noviembre el Presidente de la República dispuso que "todos los mexicanos que estén inscritos en los ayuntamientos más inmediatos al mar ejerzan la profesión marítima, quedan exceptuados de toda especie de servicio militar de tierra, pero de del que en turno les corresponda en la armada naval" (Decreto del 20 de noviembre de 1829. BJMLM: vol. 57, exp. 132).

El 15 de diciembre la Diputación Permanente acordó devolverle al Gobierno el expediente relativo a la solicitud que le hizo para que se convocara a un periodo extraordinario de sesiones al Congreso, con el propósito de que "explique qué facultades, recursos o medidas le faltan en orden a conservar como debe, la independencia, la forma actual de gobierno y la pública tranquilidad" (Acta del 15 de diciembre de 1829. BJMLM. Colección de Actas: vol. 26, foja 35).

El 16 de diciembre como consecuencia del Plan de Jalapa proclamado por el Vicepresidente Anastasio Bustamante y secundado por el ex Gobernador Melchor Múzquiz, fue designado por la Cámara de Diputados del Congreso General como Presidente Interino de la República José María Bocanegra, con el voto a favor de 17 estados y uno solo a favor de Ignacio Rayón (Decreto del 16 de diciembre de 1829. AHEM: G.G.G. vol. 19, exp. 20).

[158] Este Diputado editó en noviembre de 1829 la obra intitulada "Ortología Teórica o Arte de Leer" (BJMLM: vol. 51, exp. 167).

El 18 de diciembre la Diputación Permanente volvió a negarle la solicitud al Gobierno para que el Congreso efectuara un periodo extraordinario de sesiones, al argumentar que “careciendo hoy esta Ciudad de defensa contra los pronunciados, y siendo futuros los casos en que el Gobierno crea necesario que abra el Congreso, no ha lugar por ahora a convenir en su reunión” (Acta del 18 de diciembre de 1829. BJMLM. Colección de Actas: vol. 26, foja 38).

El 20 de diciembre la Diputación Permanente al conocer un oficio del Teniente Gobernador Joaquín Lebrija, en que manifestaba separarse del Gobierno por motivos de salud, acordó que se “expresa del patriotismo del Excelentísimo Teniente Gobernador y del cumplimiento de su deber, que sin embargo, de sus enfermedades permanezca en su destino, por no quedar Gobierno en el Estado si se separa, supuesto que el Señor Consejero que ha entrado a funcionar de Gobernador, solo deja a dos individuos en ese cuerpo” (Acta del 20 de diciembre de 1829. BJMLM. Colección de Actas: vol. 26, foja 39).

El 22 de diciembre la Diputación Permanente tomó conocimiento del oficio del Teniente Gobernador Joaquín Lebrija, en el que manifestó que “continuará a la cabeza del Gobierno, a pesar de sus enfermedades” (Acta del 22 de diciembre de 1829. BJMLM. Colección de Actas: vol. 26, foja 40).

El 23 de diciembre el Consejo del Gobierno Federal depositó la Presidencia de la República en un triunvirato integrado por: Pedro Vélez, Lucas Alamán y Luis Quintanar (Dublan II, 1876. Acuerdo del 23 de diciembre de 1829: 742).

El 1 de enero de **1830** asumió la Presidencia de la República el Vicepresidente Anastasio Bustamante (Circular del 1 de enero de 1830. AHEM: G.G.G. vol. 20, exp. 18).

El 5 de enero la Diputación Permanente tomó conocimiento del oficio de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en el que comunicaba “haber reprobado la credencial del Senador por este Estado Severiano Quezada” (Acta del 5 de enero de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 26, foja 48).

El 6 de enero la Diputación Permanente expidió un Manifiesto con motivo del Pronunciamiento del Ejército de Reserva en Jalapa (Manifiesto del 6 de enero de 1830. BJMLM: vol.56, exp. 39).

El 8 de enero la Diputación Permanente acordó excitar el celo del Gobierno para que redoble sus esfuerzos, a fin de evitar los progresos de la epidemia de las viruelas, “haciendo que se propague la vacuna cuanto se pueda, avisando del resultado oportunamente a la Diputación (Acta del 8 de enero de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 26, foja 49).

El 14 de enero el Congreso General declaró “justo el pronunciamiento del Ejército de Reserva en Jalapa del 4 del último diciembre, secundado por la Guarnición y pueblos de varios estados, y en esta Capital el 23 del referido diciembre, pidiendo el establecimiento de la Constitución y leyes” (Decreto del 14 de enero de 1830. AHEM: L.L.D.F. vol. 8, exp. 2).

El 15 de enero la Diputación Permanente acordó que se le concediera “al Ciudadano José Ignacio Sotomayor, Consejero del Gobierno de este Estado, un mes más de licencia para que permanezca en la Capital del Distrito, curándose de sus enfermedades” (Acta del 15 de enero de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 26, foja 52).

El 23 de enero el Congreso General determinó que “se aumentarán los correos de los estados distantes, y en los demás se abrirán nuevas comunicaciones /Decreto del 23 de enero de 1830. BJMLM: vol. 61, exp. 291).

El 4 de febrero el Congreso General declaró que “el Ciudadano General Vicente Guerrero, tiene imposibilidad para gobernar la República (Decreto del 4 de febrero de 1830. BJMLM: vol. 57, exp. 87).

El 12 de febrero la Secretaría de Guerra del Gobierno Federal determinó “que el estar empleados en los estados los oficiales retirados, no es óbice para poder percibir sus pagas de retiro que les da la Federación, pues son distintas arcas, y la prohibición se entiende cuando los dos sueldos gravitan sobre el Erario Nacional” (Dublan II, 1876. Circular del 12 de febrero de 1830: 225).

El 17 de febrero el Congreso General dispuso que “por esta vez, y sin perjuicio de que se active el arreglo del ejercicio del patronato para cada Obispado vacante en la República, propondrá el Gobierno a su Santidad un individuo de los propuestos por los respectivos cabildos, y aceptados ya por los gobernadores, que sea mexicano por nacimiento” (Decreto del 17 de febrero de 1830. BJMLM: vol. 57, exp. 88).

El 18 de febrero el Congreso General declaró libre de porte la mayoría de la correspondencia oficial, entre la cual estaba la que dirigían los gobernadores a las oficinas de la Federación, a las comisarías y a las autoridades eclesiásticas y militares (Decreto del 18 de febrero de 1830. AHEM: G.G.G. vol. 21, exp. 20).

El 22 de febrero el Congreso General declaró vigentes las leyes prohibitivas de los juegos de suerte y azar (Decreto del 22 de febrero de 1830. BJMLM: vol. 56, exp. 29).

El 24 de febrero el Teniente Gobernador Joaquín Lebrija, distribuyó entre los diputados una proclama que dirigió a los habitantes del Estado, en la que indicaba que "restablecido el imperio de las leyes y vigorizado el resorte de la Administración Pública, en virtud del Plan de Jalapa, que la Nación ha sostenido y el Congreso de la Unión canonizado, algunos descontentos que trabajan por recobrar lo que perdieron en la caída del anterior orden de cosas, manejan con astucia todos los medios de seducción, no perdonando ni aún el de haber hecho correr en los pueblos más sencillos y menos civilizados la grosera especie de que el Ejército Español se ha apoderado de la Capital Federal, y que el de reserva con las demás tropas pronunciadas, han proclamado el Gobierno de España" (Proclama del Ejecutivo del 24 de febrero de 1830. BJMLM: vol. 57, exp. 105).

El 26 de febrero la Diputación Permanente al efectuar su última sesión tomó conocimiento de un "ejemplar del decreto del Congreso General, sobre que por esta vez proponga el Supremo Gobierno a su Santidad un individuo para cada Obispado vacante en la República (Acta del 26 de febrero de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 26, foja 70).

El 1 de marzo el Congreso General derogó "el decreto del Congreso General que impedía los efectos del 83 del Congreso Constituyente del Estado de México",[159] al determinar que "las elecciones celebradas en el año 28 para renovar la mitad del Congreso del Estado se hicieron contra el tenor del art. 158 de la Constitución General".[160] Por tal motivo, ordenó que se restableciera "el Congreso Constituyente del

[159] Este decreto era el 82 del Congreso Constituyente, expedido el 22 de noviembre de 1826, por el que el Congreso anuló las elecciones del Primer Congreso Constitucional. Este decreto fue declarado sin efectos por el Congreso General el 19 de enero de 1827.
[160] Este artículo indicaba que "el Poder Legislativo de cada Estado residirá en una Legislatura compuesta del número de individuos que determinarán sus constituciones particulares, electos popularmente, y amovibles en el tiempo y modo que ellas dispongan".

año 26, para solo los actos que fueran consiguientes a cumplir su decreto núm. 83" (Decreto del 1 de marzo de 1830. AHEM: L.L.D.F. vol. 8, exp. 15).

El Segundo Congreso Constitucional (1829-1830) que operó del 2 de marzo de 1829 al 1 de marzo de 1830 *se integró con 21 diputados nombrados por electores secundarios en la Junta General del Estado. Realizó dos periodos ordinarios de sesiones y un periodo extraordinario de sesiones y expidió 60 decretos entre el 10 de marzo de 1829 y el 15 de octubre de 1829 (Poder Legislativo II, 2001. Índice de decretos: 636-642).*

Capítulo 4
Congreso Constituyente (1830)

El Congreso Constituyente (1830) que operó del 8 de marzo al 14 de agosto de 1830 lo integraron 18 diputados nombrados por electores secundarios en la Junta General de Provincia de 1824. Los diputados propietarios y suplentes en funciones eran: José Francisco Guerra, José Benito Guerra, Ignacio Mendoza, Manuel Villaverde, Mariano Tamariz, Antonio de Castro (Suplente), José Calixto Vidal, (Suplente) Antonio Velasco de la Torre, José María Luis Mora, José María de Jáuregui, Pedro Martínez de Castro, Alonso Fernández, Joaquín Villa (Acta del 8 de marzo de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, fojas 2 y 5), José Antonio Magos (Suplente) (Acta del 15 de marzo de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 8), Baltazar Pérez (Acta del 20 de abril de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 12), Francisco de las Piedras, Pedro Valdovinos (Acta del 22 de abril de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 17) y José María Pérez Palacios Valdovinos (Suplente) (Acta del 10 de mayo de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 35).[161]

El 8 de marzo de 1830 en cumplimiento con lo dispuesto en el decreto del Congreso General por el que ordenó cesar sus funciones el Segundo Congreso Constitucional, se reunieron "once de los señores diputados que compusieron el Congreso Constituyente del Estado de México, en el Salón de Sesiones, presididos por el Señor Doctor D. José María Luis Mora, y funcionando de Secretario el Señor Licenciado D. José María de Jáuregui, cuyos oficios desempeñaban cuando cerró sus sesiones esta Asamblea" (Acta del 8 de marzo de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 1).

El Congreso tomó conocimiento de los oficios de los diputados: Francisco de las Piedras y José Nicolás de Oláez, por los que se excusaban de concurrir a las sesiones, a causa de sus enfermedades (Acta del 8 de marzo de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 2).

El Congreso integró la Mesa Directiva del primer mes de su Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado José Francisco Guerra y la Vicepresidencia

[161] Los diputados: Manuel Cotero, José Domingo Lazo de la Vega, Manuel de Cortázar, José Ignacio de Nájera y José Nicolás de Oláez no se incorporaron a las sesiones del Congreso y sí en cambio, los diputados suplentes: José Antonio Magos y Pérez Palacios Valdovinos, quienes no participaron en las sesiones del Congreso Constituyente efectuadas entre 1824 y 1827. Cabe recordar que en la primera etapa del Congreso Constituyente dada entre 1824 y 1827, el Diputado Mariano Casela falleció y los diputados: Francisco Moctezuma y José Figueroa fueron exonerados de su cargo al pedir licencia.

del Diputado Manuel de Villaverde. Nombró como secretarios propietarios a los diputados: Joaquín Villa y Alonso Fernández y como Secretario Suplente al Diputado Ignacio Mendoza (Acta del 8 de marzo de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 2).

El Presidente del Congreso, Diputado José Francisco Guerra, efectuó la declaratoria de instalación del Congreso (Acta del 8 de marzo de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 2).

El Congreso acordó que sus sesiones semanarias se efectuarán los lunes y jueves (Acta del 8 de marzo de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 3).

Cabe señalar, que los diputados que suscribieron el acta de ese día eran los señores: José Francisco Guerra, José Benito Guerra, Ignacio Mendoza, Manuel Villaverde, Mariano Tamariz, Antonio de Castro, José Calixto Vidal, Antonio Velasco de la Torre, José María Luis Mora, José María de Jáuregui y Pedro Martínez de Castro, y que los diputados ausentes Alonso Fernández y Joaquín Villa fueron nombrados miembros de la Mesa Directiva del Congreso (Acta del 8 de marzo de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 1).

El 11 de marzo el Congreso en sesión secreta acordó no llamar a su seno a los diputados: José Figueroa y Francisco Moctezuma, por haber sido exonerados de dichos cargos en el primer periodo del Congreso Constituyente (Acta del 11 de marzo de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 261).

El 14 de marzo el Congreso nombró como sus comisionados para el cuidado y el arreglo de la Biblioteca de la Ciudad de Tlalpan a los diputados Manuel de Villaverde y José Calixto Vidal (Comunicado del 14 de marzo de 1830. BJMLM: vol.56, exp. 31).

El 15 de marzo el Congreso nombró como integrantes de la Comisión de Biblioteca a los diputados: Manuel Villaverde y José Calixto Vidal (Acta del 15 de marzo de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 8).

El Congreso acordó que el Diputado Suplente José Antonio Magos se incorporara a sus sesiones, el cual posteriormente rindió su protesta de ley (Acta del 15 de marzo de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 8).

El Diputado Suplente José Antonio Magos acudió al Congreso a rendir su protesta de ley e incorporarse a sus sesiones (Acta del 15 de marzo de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 8).

El 13 de abril el Congreso General determinó que "los actos consiguientes al cumplimiento del decreto número 83 de la Legislatura Constituyente del Estado de México, son: fijar los días para las elecciones de modo que el nuevo Congreso quede instalado antes del 2 de junio de este año, y calificarlas conforme a su Constitución y leyes", así como "dictar las medidas legislativas que el mismo Congreso contemple absolutamente necesarias para dar cumplimiento" a esta disposición (Decreto del 13 de abril de 1830. AHEM: L.L.D.F. vol. 8, exp. 25).

El 20 de abril el Congreso al expedir su primer decreto, dispuso que "se restablecen para continuar en el Gobierno los individuos nombrados por el decreto 77 (es el 79 en la Colección de Decretos) del Congreso Constituyente del Estado", y que "entretanto se presenta el Gobernador o el Teniente Gobernador, se encargará del mando el Consejero más antiguo que se hallare en esta Ciudad" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 97 del 20 de abril de 1830: 143). Cabe señalar, que el 6 de octubre de 1826 el Congreso había nombrado a Melchor Múzquiz como Gobernador Constitucional, a Francisco Manuel Sánchez de Tagle como Teniente Gobernador y como consejeros a: José María Puchet, Mariano Esteva, Pedro Verdugo y Manuel Rosales.

El Congreso aprobó la lista de las comisiones permanentes del Congreso, nombradas conforme a su Reglamento. Dichas comisiones eran: las de Constitución; de Justicia, Negocios Eclesiásticos y Legislación; de Gobernación; de Hacienda; de Instrucción Pública; de Comercio, Agricultura, Minería e Industria; de Milicias; de Policía y Peticiones; de Corrección de Estilo, y de Poderes (Acta del 20 de abril de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 11).[162]

El Congreso integró la Mesa Directiva del segundo mes de su Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado Manuel de Villaverde y la Vicepresidencia del Diputado Antonio Velasco de la Torre. Nombró como Secretario Propietario al Diputado José Benito Guerra y como Secretario Suplente al Diputado Pedro Martínez de Castro (Acta del 20 de abril de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 9).

[162] No se hizo alusión a los nombres de los integrantes de las comisiones, ni al nombre de las comisiones.

Los diputados: Alonso Fernández, Joaquín Villa y Baltazar Pérez se incorporaron a las sesiones del Congreso (Acta del 20 de abril de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 12).

El 22 de abril se incorporaron a las sesiones del Congreso los diputados: Francisco de las Piedras y Pedro Valdovinos (Acta del 22 de abril de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 17).

El 28 de abril Melchor Múzquiz volvió a ocupar la Titularidad del Poder Ejecutivo. En un manifiesto dirigido a los habitantes del Estado ante tal acontecimiento, señaló que "los bribones han querido hacer creer que los males que se palpan son efectos del sistema; pero si logro que vuestras luces y brazos se reúnan alrededor del Gobierno, no habrá duda en que los hechos serán la mejor prueba de que podéis subsistir y ser felices bajo la actual forma de gobierno" (Manifiesto del 28 de abril de 1830. AHEM: G.G.G. vol. 22, exp. 25).

El 29 de abril el Congreso al admitir las renuncias del cargo de Teniente Gobernador de Francisco Manuel Sánchez de Tagle y de los consejeros de Gobierno: José María Puchet y Mariano Esteva, nombró "para Teniente Gobernador Constitucional del Estado al Ciudadano Manuel Muria, y para consejeros constitucionales de gobierno del mismo: 1º al Ciudadano Nicolás García de San Vicente, y 2º al Ciudadano Lic. Mariano Villela" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 98 del 29 de abril de 1830:143).

El Congreso autorizó "al Gobierno para que invierta hasta la tercera parte de los fondos municipales en el socorro de los pueblos del Estado, que se hallen plagados de la epidemia", y para que establezca "en cada pueblo una Junta de Hospitalidad, compuesta del Párroco, del Prefecto o Subprefecto en las cabeceras de Partido, de uno o dos regidores en las demás municipalidades, y a lo menos, dos vecinos acomodados y conocidos por sus virtudes sociales, para que conforme a las reglas que dicte el mismo Gobierno cuide de que la inversión de los fondos que se apliquen a su respectivo pueblo sea arreglada al objeto de su establecimiento" (Acuerdo del 29 de abril de 1830. BJMLM: vol. 56, exp. 34).

El 10 de mayo el Congreso determinó que "los prefectos y subprefectos no pertenecen a la clase de empleados, son simples comisionados del Gobierno y amovibles a su voluntad" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 99 del 10 de mayo de 1830:143).

El Congreso dispuso (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 100 del 10 de mayo de 1830:144) que “para la próxima elección de diputados al Congreso Constitucional del Estado, se celebrarán las juntas municipales el domingo 6 de junio, las de partido el 27 del mismo mes, y el 25 de julio la General del Estado” (art. 1º); que “se nombrarán veintiún diputados propietarios y siete suplentes” (art. 2º), y que “el 2 de marzo de 831 se renovará por mitad el Congreso, cesando los diez diputados últimamente nombrados” (art. 3º).

El Congreso reformó la Ley de Elecciones para Diputados al Congreso General y al Congreso Constitucional del Estado de México, para que “el Gobernador del Estado hará publicar, por la imprenta, las listas de diputados elegidos para el Congreso General; publicará también las de los nombrados para el del Estado, luego que fueran aprobados por el Congreso los actos de la Junta General, y circulará unas y otras a los pueblos del Estado” (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 101 del 10 de mayo de 1830:144).

El Congreso integró la Mesa Directiva del tercer mes de su Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado Joaquín Villa y la Vicepresidencia del Diputado Pedro Martínez de Castro. Nombró como Secretario Propietario al Diputado Pedro Valdovinos y como Secretario Suplente al Diputado José Calixto Vidal (Acta del 10 de mayo de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 35).

El Diputado Pérez Palacios Valdovinos acudió al Congreso a rendir su protesta de ley (Acta del 10 de mayo de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 35).

El 17 de mayo el Congreso dispuso que “no son ciudadanos del Estado los que siendo de origen extranjero y sin ser naturalizados en la República, con arreglo a las leyes, han obtenido carta de ciudadanía en el mismo Estado”, y que “a los señores Humboldt, Blanco, White y Bonpland se les hará una manifestación por este Congreso, de lo mucho que se honra el Estado con reputarlos por sus ciudadanos” (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 102 del 17 de mayo de 1830:145).

El Congreso emitió un manifiesto a los pueblos del Estado de México, en el que indicaba haber restablecido el Gobierno nombrado por el mismo en octubre de 826, revocando como nulo con ese procedimiento el que nombraron los congresos de 827 y 829” (Manifiesto del 17 de mayo de 1830. BJMLM: vol. 56, exp. 7).

El 21 de mayo el Congreso autorizó "al Gobernador para que use la media firma en todo lo concerniente al desempeño de su encargo, y sólo usará de la firma entera en las comunicaciones con esta Honorable Asamblea, y con el Congreso General" (Decreto 103 del 21 de mayo de 1830. BJMLM: vol. 56, exp. 37).

El Congreso conoció "el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, sobre las observaciones que el Gobierno hizo en el año del veintiséis a la Ley de Administración de Justicia" (Acta del 21 de mayo de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 61).[163]

El 29 de mayo el Congreso dispuso que "los diputados del Estado no disfrutarán viático alguno", y que "los que para trasladarse desde el lugar de su residencia hasta el de las sesiones necesitaren alguna cantidad, la recibirán por cuenta de dietas, si el Congreso o la Diputación lo acordaran" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 104 del 29 de mayo de 1830: 146).

El Congreso derogó el decreto número 138 del 7 de abril de 1829 por el que se estableció la Oficina de Taquigrafía (Redacción) del Congreso, con excepción del artículo que hacía referencia a la dotación del Redactor (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 105 del 29 de mayo de 1830: 147).[164]

El Congreso al cesar la Inspección de la Milicia Nacional, dispuso que "el Gobernador será el inspector nato de la Milicia, y desempeñará las funciones que como a tal le correspondan", y que "los prefectos ejercerán las de subinspectores, bajo las órdenes del mismo Gobernador" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 106 del 29 de mayo de 1830: 147).

El Congreso determinó que "la Secretaría del Consejo se compondrá de una Secretaría, un Oficial y un Escribiente nombrados por el mismo Consejo, y amovible el Secretario a voluntad de este cuerpo". El Secretario debía percibir mil 200 pesos de sueldo anual, el Oficial 700 y el escribiente 500 (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 107 del 29 de mayo de 1830: 148).

[163] Véase la reseña del acta de la sesión del 6 de junio de 1826.
[164] Con excepción de la dotación del Redactor, que disfrutaba el sueldo de mil 600 pesos anuales.

El Congreso cesó el “sobresueldo de seiscientos pesos, acordado al Prefecto de México y la ordenanza de la misma Prefectura dotado con trescientos sesenta y cinco pesos” (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 108 del 29 de mayo de 1830: 148).

El Congreso al cesar temporalmente el Instituto Literario, dispuso que el Gobierno proveyera de gastos extraordinarios para el sostenimiento de los niños que a ella asistían (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 109 del 29 de mayo de 1830: 148).

El Congreso autorizó al Gobierno “para celebrar con el de la Federación contrata, sobre la francatura de la correspondencia oficial de todas las autoridades del Estado” (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 110 del 29 de mayo de 1830: 149).

El Congreso cesó “los cinco mil seiscientos pesos, que se invierten en los empleados del Departamento de Cuentas de la extinguida factoría del tabaco y sus gastos menores” (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 111 del 29 de mayo de 1830: 148).

El Congreso derogó el decreto 46 del Congreso Constituyente del 1 de julio de 1825, por el que creó la Casa de Moneda (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 112 del 29 de mayo de 1830: 150).

El Congreso determinó que “todos los empleados que quedaren sin destino a resulta de las economías acordadas en el Presupuesto, serán colocados de preferencia, conforme a su aptitud y mérito, en las vacantes que resultaren desde esta fecha en adelante” (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 113 del 29 de mayo de 1830: 150).

El Congreso autorizó al Gobierno para que pudiera disponer hasta la cantidad de 40 mil pesos para gastos extraordinarios (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 114 del 29 de mayo de 1830: 150).

El Congreso autorizó al Gobierno 24 mil pesos para sostener la Fuerza de Seguridad Pública, la cual podía poner a disposición del Gobierno Federal en caso de invasión extranjera (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 115 del 29 de mayo de 1830: 151).

El Congreso derogó el decreto número 101 del 7 de mayo de 1825, el cual imponía la pensión de un peso por cada tarea de caña y restableció el derecho de alcabala que pagaba el azúcar, panocha y piloncillo de todas clases (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 116 del 29 de mayo de 1830: 148).

El 1 de junio el Congreso redujo el número de empleados de la Secretaría del Gobierno, al disponer que esta dependencia se arreglara con el número de escribientes y oficiales que establecía el decreto número 14 del 8 de mayo de 1824 (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 117 del 1 de junio de 1830: 152).

El Congreso al suspender el sueldo del Relojero de Tlalpan, dispuso que el reloj quedara a cargo del Ayuntamiento del lugar (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 118 del 1 de junio de 1830: 152).

El Congreso autorizó "al Gobierno para que auxilie, con calidad de reintegro, al General de la Federación, hasta con la cantidad de diez mil pesos cada mes" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 119 del 1 de junio de 1830: 152).

El Congreso al cesar las tesorerías foráneas, dispuso que sus funciones fueran desempeñadas por las receptorías de rentas del lugar (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 120 del 1 de junio de 1830: 153).

El Congreso determinó que "la Tesorería del Estado quedará con el mismo número de empleados y dotaciones que actualmente tiene" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 121 del 1 de junio de 1830: 153).

El Congreso expidió el Presupuesto de Gastos del Estado de México del Año Económico del 2 de junio de 1830 al 2 de junio de 1831, en el cual se excluyeron las partidas destinadas a la obra pública y se mantuvieron los sueldos de los funcionarios sin variación alguna (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 122 del 1 de junio de 1830: 154).[165]

En el Poder Legislativo se fijaron $6,000.00 para gastos de impresiones y $600.00 para gastos menores de oficina y se mantuvieron las percepciones de los 21 diputados en $3,000.00 anuales, las del Redactor en $1,600.00, las del Oficial Mayor en $1,500.00, las del Oficial Segundo en $1,200.00, las del Archivero en $1,000.00 y las de cada uno de los dos escribientes en $750.00.

En el Presupuesto de Egresos se mantuvieron sin variación alguna las contribuciones fijadas en el decreto número 114 del 20 de mayo de 1828, las cuales se referían a:

[165] Este decreto constó de apartados referentes a: los podres Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a la Contaduría General, a otros gastos y al resumen.

alcabalas, consumo de efectos extranjeros, impuesto a la moneda, renta del tabaco, papel sellado, derechos de ensaye y de metales preciosos, bienes vacantes y mostrencos, multas, media anata secular y eclesiástica, peajes, temporalidades, derechos de amortización, dos reales por tonelaje de buques extranjeros, nuevos diezmos, noveno y nuevo decimal, pensión a la Mitra de México, vacantes mayores y menores, espolios, oficios vendibles y renunciables, elaboración de la moneda y derechos accesorios y rentas de gallos.

El 7 de junio el Congreso le concedió una licencia por dos meses para separarse de su cargo al Oficial Mayor de la Secretaría del Congreso, José Osorio, para que pasara al Distrito Federal a curar su salud (Acta del 7 de junio de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 120).

El 11 de junio el Congreso integró la Mesa Directiva del cuarto mes de su Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado José Benito Guerra y la Vicepresidencia del Diputado Alonso Fernández. Nombró como Secretario Propietario al Diputado José María de Jáuregui y como Secretario Suplente al Diputado José María Pérez Palacios Valdovinos (Acta del 11 de junio de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 127).

El 14 de junio el Congreso aprobó la minuta del decreto por la que se derogó el decreto número 128 del 16 de octubre de 1828, en donde se establecían las cualidades que debían tener los funcionarios o empleados públicos del Estado, a más de las que exigen las leyes vigentes (Acta del 14 de junio de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 135).[166]

El 17 de junio el Congreso determinó que “no se admitirán escritos, ni se practicarán actuaciones en otro papel que no sea el sellado del Estado” (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 123 del 17 de junio de 1830: 157).

El Congreso estableció los requisitos para ejercer la Abogacía en el Estado (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 124 del 17 de junio de 1830: 158).

[166] Al parecer este decreto fue vetado por el Titular del Ejecutivo del Estado, pues no figura en la Colección de Decretos.

El Congreso aprobó con una moción la minuta de la Ley sobre Administración de Justicia en lo Civil (Acta del 17 de junio de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 143).[167]

El 30 de junio el Congreso dispuso que "la Junta General para las elecciones inmediatas se verificará en la Ciudad de Toluca el día designado por la ley, y será presidida por el Gobernador del Estado" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 125 del 30 de junio de 1830: 159).

El Congreso nombró a José Ignacio Espinosa como Ministro de la Suprema Corte de Justicia (Acta del 30 de junio de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 150).

El 5 de julio el Congreso dispuso (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 126 del 5 de julio de 1830: 158) que "el Congreso Constitucional que se instalara el 15 de agosto en la Ciudad de Toluca, y allí resolverá sobre la suerte que debe correr el art. 5º[168] de la Constitución" (art. 1), y que "el Gobernador arbitrará los recursos necesarios, pudiendo vender las fincas del Estado, o solicitar préstamo, con hipoteca de éstas o de sus rentas, y al menor rédito posible, para que con la mejor economía, sean trasladados los archivos y demás muebles de las oficinas, a la mayor brevedad" (art. 2).

El 8 de julio el Congreso determinó que "para que los agraciados con carta de naturaleza o ciudadanía puedan ser diputados al Congreso del Estado, es necesario que tengan propiedad en el mismo, valiosa al menos en seis mil pesos, y que cuenten cuatro años de poseerla", y que "los individuos que carezcan de esta calidad deberán residir en el Estado por lo menos un año, con algún arte, industria o profesión" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 127 del 8 de julio de 1830: 159).

El Congreso integró la Mesa Directiva del quinto mes de su Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado Alonso Fernández y la Vicepresidencia del Diputado Mariano Tamariz. Nombró como Secretario Propietario al Diputado Baltazar Pérez y como Secretario Suplente al Diputado Antonio Castro (Acta del 8 de julio de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 172).

[167] Al parecer este decreto fue vetado por el Titular del Ejecutivo del Estado, pues no figura en la Colección de Decretos.
[168] Establecía que la Ciudad de Texcoco era la Cabecera del Distrito de México y la Residencia de los Supremos Poderes del Estado.

El Congreso inició la discusión del dictamen por el que propuso al Gobierno suprimir la Milicia Cívica donde lo tuviera conveniente, que arreglara este cuerpo conforme a lo dispuesto en la Ley que expidió el Congreso General, y que estableciera "en cada Distrito una fuerza para conservar la tranquilidad y perseguir constantemente al malhechor" (Acta del 8 de julio de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 178).

El 11 de julio el Ayuntamiento de Toluca acordó que el Presidente Municipal, Ignacio Torrescano, el Regidor Decano y el Síndico Primero en Comisión, así como el Prefecto, saldrían hasta los términos de la Municipalidad para recibir y conducir al Gobernador. Se dispuso que se solicitara a las iglesias replique de campanas desde que el Gobernador entrara en la puerta de la Ciudad hasta que se recibiera en la Sala Capitular y que se invitara a los prelados de las comunidades para que unidos en la Iglesia Parroquial con los prelados del Templo de San Francisco recibieran al Gobernador y cantaran un Te Deum (Acta del Ayuntamiento de Toluca del 11 de julio de 1830).

El 12 de julio el Congreso dispuso (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 128 del 12 de julio de 1830: 159) que "las juntas electorales para el nombramiento de los diputados al Congreso General, y los que en el Estado han de reemplazar a los que concluyen en su renovación de marzo próximo, se celebrarán en los días fijados por la Constitución y conforme a la Ley de la materia, que adicionada se publicará con esta convocatoria" (art. 1); que "para el Congreso de la Unión se elegirán doce diputados propietarios y cuatro suplentes" (art. 2), y que "para el Estado diez propietarios y siete suplentes" (art. 3).

El Congreso concedió a la Ciudad de Toluca el permiso para establecer una Lotería (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 129 del 12 de julio de 1830: 169).

El Congreso determinó (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 130 del 12 de julio de 1830: 170) que "el Congreso, el Gobierno, los tribunales y oficinas del Estado empezarán a ejercer sus funciones en la Ciudad de Toluca el 24 del corriente" (art. 1); que "el Congreso tomará en consideración el día 27 del corriente el asunto, sobre el examen y calificación de los actos de la Junta General de Elecciones, y la habilidad de los diputados nombrados en ella" (art. 2), y que "el Congreso cerrará sus sesiones el día 14 de agosto" (art. 3).

El Congreso recibió la protesta de ley de Manuel Muria como Teniente Gobernador (Acta del 12 de julio de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 187).

El Congreso exhortó al Gobernador para que le remitiera la cuenta general de gastos del año económico anterior (Acta del 12 de julio de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 194).

El 13 de julio la Secretaría del Congreso recibió un comunicado del Gobernador, por el que informó que ha dictado las medidas necesarias "para la traslación de las oficinas y archiveros a Toluca para que esta Secretaría cumpla con ella (Comunicado del 13 de julio de 1830. BJMLM: vol.60, exp. 218).

El 17 de julio el Congreso al sesionar por última vez en Tlalpan, determinó que para discutir y votar los proyectos de ley "los dos tercios que exige el art. 38 de la Constitución,[169] deberán componerse por el número de diputados que de hecho compongan el Congreso" (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 131 del 17 de julio de 1830: 171).

El Congreso designó como Consejero del Gobierno a Ignacio Alvarado, ante la renuncia de Manuel Rosales (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 132 del 17 de julio de 1830: 171).

El Congreso aprobó trece proposiciones en materia política, dirigidas a las cámaras del Congreso de la Unión. Entre ellas estaban: las que pretendían que se fijaran las condiciones necesarias para ser ciudadano de la República, como las de la propiedad territorial o individual; que nadie puede ser ciudadano de los estados sin las condiciones necesarias para serlo de la República; que la elección de Presidente de la República, la del Senado y la de cada Cámara de Diputados se hagan cada una de ellas en distinto año; que el Presidente de la República durará en su cargo seis años; que el Senado durará seis años, renovándose por mitad cada tres años; que la Cámara de Diputados durará tres años y se renovará en su totalidad"; que las cámaras podrán declarar cada una en su caso, haber lugar a la formación en causa respecto sobre los funcionarios de la Federación; que la declaración se pasará al Senado, y éste fallará discrecionalmente ante la habilidad o inhabilidad en el sujeto; que el Presidente de la República iniciará el ejercicio de sus funciones el primero de

[169] Este artículo indica que "ningún proyecto de ley se discutirá ni votará no estando presentes las dos terceras partes del número total de los diputados".

diciembre, después de la elección; que las elecciones, y que las cámaras se declaran sin facultad para conceder indulto o amnistía (Acta del 17 de julio de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 197).

El Congreso aprobó la minuta del decreto por la que propuso disminuir los cívicos y establecer en cada Distrito una fuerza que conserve el buen orden (Acta del 17 de julio de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 201).[170]

El 24 de julio el Congreso al sesionar por primera vez en la Ciudad de Toluca. El Congreso aprobó el decreto por el que permitió que ejercieran la Abogacía en el Estado los ciudadanos: Juan Esteban Villa, Francisco María Beteta, Manuel Beteta y Manuel Zea, originarios de la República de Centro América (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 133 del 24 de julio de 1830: 172).

El Congreso recibió la protesta de ley de Ignacio Alvarado como Consejero del Gobierno (Acta del 24 de julio de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 216).

El Congreso tomó conocimiento de las proposiciones por las que pretendían reformar la Constitución Política del Estado los diputados: José Benito Guerra, José María de Jáuregui, José María Luis Mora y José Francisco Guerra. En ellas se proponía "que las elecciones sean directas"; "el establecimiento de dos cámaras: una de diputados, y otra de senadores"; que "cada Partido nombrara un Diputado, y cada Distrito dos senadores"; que "la Cámara de Diputados se renovara cada cuatro años en su totalidad, y la de senadores en aquel término, por mitad, de modo que la duración de los senadores sea por ocho años"; "que la elección de los senadores se hará en la Capital del Distrito, pudiendo votar todos los que en el mismo Distrito tengan derecho de elección", y la de diputados en la Cabecera de Partido en la misma forma; que "para ser Diputado se necesitan la edad y calidades ya prevenidas en la Constitución, y además la propiedad territorial o industrial"; que "para ser Senador se requería la edad de treinta y cinco años, mayor propiedad, haber sido Diputado o funcionario del Gobierno en los destinos de Gobernador, Teniente Gobernador, Consejero y Secretario del general"; que "las contribuciones solo podrán iniciar en la Cámara de Diputados, a la que se presentará anualmente el presupuesto de gastos"; que "el proyecto de ley o decreto de una Cámara que se desechase en la revisora con mayoría absoluta de votos, no se puede volver a proponer en la misma Legislatura";

[170] Al parecer esta minuta fue vetada por el Gobernador pues el decreto no figura en la colección de decretos.

que “en caso de observaciones del Gobierno, se requieren los dos tercios de ambas cámaras; que “las dietas de los diputados se determinarán cada cuatro años, con atención a que no pasen más allá de la indemnización de gastos”, y que “ésta será más estrecha con relación a los senadores en el mismo periodo”; que “las medidas administrativas que son del resorte del Gobierno no podrán proponerse por los miembros de las cámaras, y sólo se tomarán en consideración por el Senado cuando el mismo Gobierno las consulte”; que “las acusaciones contra todos los funcionarios del Congreso y del Gobierno del Estado para el solo objeto de ser destituidos de sus cargos e inhabilitarlos, sólo las podrá hacer la Cámara de Diputados en el Senado”, y que “antes de la decisión de éste, no podrán ser perseguidos aquellos en los tribunales”; que “la calificación de las elecciones se hará recíprocamente en el Senado de las de diputados, y en la Cámara de éstos las de los senadores”, y que “la calificación de los miembros y sus calidades corresponde a la Cámara respectiva de que son individuos” (Acta del 24 de julio de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 214).

El 26 de julio el Congreso nombró como ciudadanos del Estado a: José Segundo Martínez de la Vega, Cirilo Gómez Anaya, Mariano Villa Urrutia, Manuel Carpio, Antonio Gortari, José Ignacio Nájera, Andrés Huete, José María Casalola, José Ignacio Alva, Agustín Gómez Eguiarte y José Bernardo Couto (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 134 del 26 de julio de 1830: 172).

El Congreso aprobó una iniciativa al Congreso General, por la que se reforma la Constitución Federal, con el propósito de que el Distrito Federal tenga dos senadores en la Cámara de Senadores, que éstos tengan un voto en la elección de Presidente y Vicepresidente de la República y de los miembros de la Suprema Corte de Justicia; que los diputados al Congreso General tendrán para poder serlo, una propiedad raíz de diez mil pesos o una renta de ochocientos; que los senadores al Congreso de la Unión deberán tener una cantidad doble a la que se requiere para ser Diputado al mismo Congreso, y que para la calificación del hecho en las causas criminales, se establecerá constitucionalmente que todos los estados y territorios de la Federación establecerán el Jurado en propietarios antes de cuatro años (Acta del 26 de julio de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 222).

El 27 de julio el Congreso aprobó los nombramientos de diputados para el Congreso Constitucional (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 135 del 27 de julio de 1830: 172).

El Congreso para facilitar el traslado de los empleados de la Ciudad de Tlalpan a la nueva Capital, dispuso que “a los individuos que deben funcionar en Toluca se les adelantara media mesada, a cuenta de sus sueldos, si éstos lleguen a tres mil pesos”, que “si no lleguen a esta suma, se les adelantará una mesada”, y que “estos adelantos se satisfarán por descuentos que fijará el Gobierno” (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 136 del 27 de julio de 1830: 173).

El 29 de julio el Ayuntamiento de Toluca tuvo conocimiento de un comunicado del Prefecto para que inmediatamente se desocupe el Templo de San Juan de Dios (hoy Santa María de Guadalupe), porque allí se va a poner el Salón de Sesiones para el Congreso (Acta del Ayuntamiento de Toluca del 29 de julio de 1830).

El Ayuntamiento de Toluca tomó conocimiento de la propuesta del Superior Gobierno, para establecer el protocolo a seguir en la recepción de los Poderes del Estado. Se determinó que “los días 15, 16 y 17 del próximo mes, se adornaran los balcones con cortinas y por la noche haga iluminaciones del mayor lucimiento posibles”, y que “el 14 cerrara el comercio y en la parte de los días festivos se mantendrá cerrado, haciendo este día de corte” (Acta del Ayuntamiento de Toluca del 29 de julio de 1830).

El 14 de agosto el Congreso determinó que “D. José María Santiago no es Diputado al Primer Congreso Constitucional del Estado”, y que “el Primer Suplente D. Francisco Ortega entrará en clase de Propietario, a ocupar su lugar en el núm. 21” (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 137 del 14 de agosto de 1830: 175).

El Congreso expidió el Reglamento Interior para el Congreso del Estado de México, el cual constaba de capítulos referentes: a la reunión del Congreso, su receso y renovación; al lugar de las sesiones; a la elección de oficios; al Presidente; al Vicepresidente; a los secretarios; a los diputados; al modo de procederse en las causas criminales de los diputados; a las sesiones públicas; a las sesiones secretas, a las comisiones; a las iniciativas, sus trámites y discusión; a las votaciones; a las leyes, decretos y órdenes del Congreso; al orden y gobierno interior del Palacio del Congreso, y a la Secretaría del Congreso” (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 138 del 14 de agosto de 1830: 175).

En cuanto a la elección de oficios, se determinó que cada mes a la fecha en que se hubiere instalado el Congreso “se elegirán, por escrutinio secreto a pluralidad de votos el nuevo Presidente y Vicepresidente, que comenzarán desde luego a desempeñar

sus respectivas funciones, cesando en el acto los del mes anterior" (art. 37), y que "los secretarios nombrados al principio de las sesiones desempeñarán este cargo por todo el periodo ordinario de las sesiones en que fueron elegidos", y "los que fueren en las sesiones extraordinarias lo serán asimismo, por todo el tiempo de duración" (art. 39).

Dispuso que "el Presidente ejercerá en el Congreso las funciones de Juez entre sus individuos, terminando las contiendas que se susciten durante las sesiones, y de agente suyo, establecido y fijando las cuestiones de que se ocupe" (art. 42); que "el Vicepresidente ejercerá todas las facultades del Presidente en sus faltas" (art. 49); que uno de los secretarios daría "cuenta al Congreso con la acta del día anterior" (art. 51), y el otro asentaría "con la posible concisión, exactitud y claridad los puntos de discusión, trámites de proposiciones e informes, y la resolución que se dé a los negocios" (art. 52). Los secretarios tenían como obligaciones las de: copiar la minuta del acta aprobada "en el libro destinado al efecto donde la firmarán con el Presidente" (art. 55), autorizar "las órdenes y decretos para comunicarlas al Gobierno" (art. 56), y extender las actas de las sesiones secretas, las cuales las firmarían con el Presidente y las archivarían en lugar seguro y de reserva (art. 57).

Se determinó que "para facilitar el curso y despacho de los negocios, se nombrarán las comisiones particulares que les examinen e instruyan hasta ponerlos en criado de resolución" (art. 101), y que "para el despacho ordinario se nombrarán comisiones permanentes y especiales. Las primeras serán: de Puntos Constitucionales; de Justicia, Negocios Eclesiásticos y Legislación; de Gobernación; de Hacienda; de Instrucción Pública; de Comercio, Agricultura, Minería e Industria; de Milicia; de Policía y de Peticiones; de Corrección de Estilo, y de Poderes y Análisis. Las segundas serán las que exija la calidad de los negocios que ocurran" (art. 104).

Se indicaba que "el Presidente del Congreso designará el número de individuos de que haya de componerse cada comisión, y con los secretarios elegirá las personas" (art. 105); que "cualquier Diputado puede asistir sin voto a las discusiones de las comisiones que quiera" (art. 107); que "la Comisión de Policía tendrá exclusivamente el encargo y superintendencia de la redacción de actas y decretos y de su impresión, con la de los informes, proyectos de ley y cualquiera otros escritos que el Congreso mandare imprimir" (art. 108), y que "nombrará cada comisión de entre sus individuos un Secretario, que será responsable por los documentos y expedientes que se le pasen" (art. 110).

En cuanto a las votaciones en el Pleno, se determinó que éstas podían hacerse de tres modos. La primera, “por el acto de levantarse los que aprueben y quedarse sentados los que las reprueban”; la segunda, “por la expresión individual de si o no”, y la tercera, “por escrutinios” (art. 140). “La votación por escrutinio se hará de dos modos: o por escrutinio simple acercándose a la mesa uno a uno los diputados y manifestando al Secretario delante del Presidente la persona por quien voten, que a su presencia se anotará en la lista: o por escrutinio secreto o cédulas escritas que se entregarán al Presidente, para que sin leerlas las deposite en una caja o ánfora, que al efecto se colocará en la mesa “(art. 147).

Por lo que hace al gobierno interior del Congreso, se indicó que “la Comisión de Policía, compuesta del Presidente y secretarios, cuidará del orden y gobierno interior del Palacio del Congreso, y de la observancia de las ceremonias y formalidades” (art. 163); que dirigirá “las obras y reparos que convenga hacer para la conservación y seguridad del mismo edificio” (art. 164); que “todos los subalternos y dependientes del Congreso estarán bajo las órdenes de esta Comisión en el ejercicio de sus funciones, excepto las de la Secretaría en su instituto” (art. 165); que “si se cometiere algún exceso o delito dentro del edificio del Congreso, pertenecerá a esta Comisión detener a la persona o personas que aparezcan culpadas” (art. 166), y que “los diputados secretarios son jefes de la Secretaría del Congreso”, y que “queda sujeta esta Oficina a su Reglamento Particular, acordado el 27 de septiembre de 1825” (art. 167).

El Gobernador Melchor Múzquiz, al acudir a la clausura de las sesiones del Congreso, señaló que sus “miembros se retiran con el placer de haber procurado llenar sus obligaciones y con el de anunciar por el cúmulo de circunstancias reunidas oportunamente que el Estado de México no sólo recobró sino que va a afianzar para siempre, en libertad y en decoro la dignidad que había perdido. Ese pronóstico será seguro e infalible si los pueblos como debe esperarse de su ilustración y patriotismo y para que las lecciones, que les ha dado la experiencia, se proponen observar religiosamente la ley y obedecer las autoridades legítimas constituidas” (Acta del 14 de agosto de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 242).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Pedro Martínez de Castro, señaló “que ha llegado el verdugo de algunos genios inquietos al extremo de censurar la traslación de los Supremos Poderes del Estado a esta bella Ciudad, a este País de riqueza y de abundancia, a la Capital del fértil Valle de Toluca, a la Ciudad formada y habitada por muy honrados y virtuosos labradores. No, no habrá ya

en ella las distracciones, aunque involuntariamente, que se notaban en los empleados, ni tampoco la escandalosa dilapidación que en otro tiempo se hizo de los caudales públicos, porque no lo haya permitido el nuevo Congreso y porque las riendas del Gobierno han vuelto a caer en las manos de un Gobernador íntegro, desinteresado y exactísimo en el cumplimiento de sus deberes. Él ha sido nuestro colaborador y lo será también de los siguientes representantes que van a sucedernos" (Acta del 14 de agosto de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 27, foja 243).

El Congreso Constituyente al finalizar sus actividades dirigió un Manifiesto a los habitantes del Estado suscrito por el Diputado José María Luis Mora, en donde se señaló que el Congreso Constituyente "volvió a aparecer en la escena pública y tuvo de nuevo el honor de volver a presidir a vuestros destinos en el periodo de cuatro meses. La suerte que le tocó en su establecimiento nadie duda que fue más crítica y comprometida que la que tuvo en los últimos días de sus penosas tareas" (Manifiesto del 14 de agosto de 1830. BJMLM: vol.56, exp. 1).

El Congreso Constituyente (1830) que operó del 8 de marzo al 14 de agosto de 1830 se integró con 18 diputados nombrados por electores secundarios en la Junta de la Provincia de México de 1824. Expidió 42 decretos entre el 20 de abril y el 14 de agosto de 1830 (Poder Legislativo I, 2001. Índice de decretos: 202-206).

Capítulo 5
Primer Congreso Constitucional (1830-1831)

El Primer Congreso Constitucional (1830-1831) que operó del 15 de agosto de 1830 al 1 de marzo de 1831 se integró con 21 diputados nombrados por electores secundarios en la Junta General del Estado, bajo la aprobación del Congreso Constituyente. Los diputados eran: José María García Figueroa, Nicolás García de San Vicente,[171] Atanasio Saavedra, José Antonio de la Vega, Pedro Pérez Alamillo, Mariano Esteva, José Ignacio González Caraalmuro,[172] Diego Germán, Mucio Barquera, Andrés Millán, Juan Antonio Arce, Juan Ceballos, Luis Pérez Palacios, Juan Anza, Benito Peña y Medina, Trinidad Montaño, Félix Ortiz, José María Jiménez, José María Manzano (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 135 del 27 de julio de 1830: 172), Francisco Ortega (Suplente)[173] (Acta del 6 de septiembre de 1830. BJMLM. Colección Actas: vol. 28, foja 64) e Ignacio Alvarado (Suplente)[174] (Acta del 26 de enero de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 165).

El 27 de julio de 1930 el Congreso Constituyente aprobó las cartas credenciales de los diputados del Primer Congreso Constitucional. Los diputados propietarios eran: José María García Figueroa, Nicolás García de San Vicente, Manuel Montañez, Atanasio Saavedra, José Antonio de la Vega, Pedro Pérez Alamillo, Mariano Esteva, Ignacio González Caraalmuro, Diego Germán, Mucio Barquera, Andrés Millán, Juan Antonio Arce, Juan Ceballos, Luis Pérez Palacios, Juan Anza, Benito Peña y Medina, Trinidad Montaño, Félix Ortiz, José María Jiménez y José María Manzano (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 135 del 27 de julio de 1830: 172).

El 13 de agosto se efectuó la Reunión de Instalación del Primer Congreso Constitucional en el Salón de Sesiones habilitado en la Iglesia de San Juan de Dios de la Ciudad de Toluca, bajo la conducción de una Comisión del Congreso Constituyente presidida por el Diputado Pedro Martínez de Castro y la Secretaría del Diputado José Francisco Guerra (Acta del 13 de agosto de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 1).

---

[171] Ante la renuncia de este Diputado, su curul no fue ocupada por el Tercer Diputado Suplente.
[172] En el acta del 19 de agosto de 1830 se señala que este Diputado se apellida González Caraalmuro y no solamente Caraalmuro, como erróneamente se señaló en el decreto 135 del Congreso Constituyente (Acta del 19 de agosto de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 18).
[173] En su carácter de Diputado Suplente ocupó la curul que nunca ocupó el Diputado Electo Manual José Montañez.
[174] Se desconoce si ocupó la curul del Diputado José María Santiago inhabilitado por el Congreso Constituyente o del Diputado Nicolás García de San Vicente.

En el Congreso reunido en Junta rindieron su protesta de ley los diputados: José María García Figueroa, Nicolás García de San Vicente, Atanasio Saavedra, José Antonio de la Vega, Mariano Esteva, Diego Germán, Mucio Barquera, Andrés Millán, Juan Antonio Arce, Trinidad Montaño, Félix Ortiz y José María Jiménez (Acta del 13 de agosto de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 1).

El Congreso reunido en Junta integró la Mesa Directiva del primer mes de su Primer Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado Electo José María Jiménez y la Vicepresidencia del Diputado Electo José Antonio de la Vega. Nombró como secretarios propietarios a los diputados electos: Atanasio Saavedra y Mucio Barquera y como Secretario Suplente al Diputado Electo Trinidad Montaño (Acta del 13 de agosto de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 1).

El Presidente del Congreso, Diputado José María Jiménez, efectuó la declaratoria de instalación del Primer Congreso Constitucional (Acta del 13 de agosto de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 1).

El 14 de agosto el Congreso Constituyente determinó que “D. José María Santiago no es Diputado al Primer Congreso Constitucional del Estado”, y que “el Primer Suplente D. Francisco Ortega entrará en clase de Propietario, a ocupar su lugar en el núm. 21” (Poder Legislativo I, 2001. Decreto 137 del 14 de agosto de 1830: 175).

El 15 de agosto el Diputado José Ignacio González Caraalmuro rindió su protesta de ley ante el Pleno del Congreso (Acta del 15 de agosto de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 1).

El Gobernador Melchor Múzquiz, al asistir a la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Congreso Constitucional, les indicó a los diputados que “el Gobierno os irá presentando las reformas y arreglos que se hallen a su alcance, con la confianza de que al salir de vuestras manos, será con la perfección posible, no olvidarán las materias del Gobierno, las de Milicia, ni menos las de la Administración de Justicia, interesantísimas para el lleno de los trabajos del Gobierno, que tienen por objeto la seguridad de las personas e intereses” (Poder Legislativo, 1831. Acta del 15 de agosto de 1830: 3).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado José María Jiménez, señaló que “al abrir las presentes sesiones el Congreso no puede recordar

los sucesos mejorables que separan tres años continuos de revolución, sin asombrarse que el Estado de México y la República toda hayan llegado a un término a que no podía aspirar el deseo más atrevido" (Poder Legislativo, 1831. Acta del 15 de agosto de 1830: 3).

El 16 de agosto el Congreso aprobó la lista provisional de comisiones formada por el Presidente y los secretarios. De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento estas comisiones eran las: de Puntos Constitucionales, de Justicia, Negocios Eclesiásticos y Legislación, de Gobernación, de Hacienda, de Institución Pública, de Comercio, Agricultura, Minería e Industria, de Milicia, de Policía y de Peticiones, de Corrección de Estilo, y de Poderes y Análisis (Acta del 16 de agosto de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 9).[175]

El 20 de agosto el Congreso acordó "que el Gobierno excite el celo del Honorable Cabildo Metropolitano, para que ordene éste, que todos los párrocos del Estado, exhortando en un día festivo a sus feligreses a dirigir oraciones a Dios Nuestro Señor, para alcanzar de su divina majestad el acierto en las deliberaciones del Soberano Congreso (Acta del 20 de agosto de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 20).

El 21 de agosto el Congreso nombró al Licenciado Félix Lope de Vergara como Senador por el Estado, para cubrir la vacante que ocasionada por el fallecimiento del Senador José Agustín Paz (Acta del 21 de agosto de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 21).

El Congreso acordó pedirle "al Gobierno informe del estado en que se hayan los trabajos de la Comisión que se nombró para formar la estadística del Estado" (Acta del 21 de agosto de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 22).

El 23 de agosto el Congreso acordó concederle el tiempo necesario al Diputado Electo Juan Anza para que se incorporara a sus sesiones, una vez que se restableciera su salud (Acta del 23 de agosto de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 24).

[175] Se desconoce el nombre de los diputados que integraron dichas comisiones.

El 24 de agosto el Supremo Gobierno dispuso que los licores, géneros, frutos y efectos de procedencia extranjera pagaran un cinco por ciento de derecho de consumo sobre el que pagaban (Decreto del 24 de agosto de 1830. BJMLM: vol. 58, exp. 159).

El 27 de agosto el Congreso acordó que "por el correo inmediato se libre recuerdo a los señores (diputados) que faltan para que abrevien su venida al Congreso, que por no tener el número que previene la ley no puede despachar los graves asuntos de que debe ocuparse" (Acta del 27 de agosto de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 33).

El 31 de agosto los diputados: Pedro Pérez Alamillo y Benito Peña y Medina rindieron su protesta de ley ante el Pleno del Congreso (Acta del 31 de agosto de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 36).

El Presidente del Congreso nombró como integrantes de la Comisión Especial de Estadística a los diputados: Ignacio González Caraalmuro, Nicolás García de San Vicente y Benito Peña y Medina (Acta del 31 de agosto de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 37).

El 1 de septiembre el Congreso reeligió al Licenciado Félix Lope de Vergara como Senador del Estado ante el Congreso de la Unión (Acta del 1 de septiembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 38).

El 3 de septiembre el Congreso dispuso que se dijera "al Gobierno, que el Congreso ha dispuesto compeler a los diputados que no han venido, si no se ponen en camino dentro del tercer día, a cuyo efecto les comunicará esta resolución, exigiéndoles contesten inmediatamente, exceptuando a los señores (Juan) Anza y (Francisco) Ortega" (Acta del 3 de septiembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 46).

El 4 de septiembre el Congreso acordó dejar sin vigencia el decreto del Congreso Constituyente del 14 de agosto de 1830, por el que se declaró que el escaño de José María Santiago[176] como Diputado del Congreso Constitucional sería ocupado por Francisco Ortega (Acta del 4 de septiembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 58).

[176] El Congreso Constituyente había revocado el nombramiento de José María Santiago como Diputado, al argumentar que no tenía en el Estado las propiedades que exigía la Constitución para ser Diputado.

El 6 de septiembre el Congreso acordó que se nombrase una comisión especial para estudiar las reformas de la Constitución (Acta del 6 de septiembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 61).

El Congreso acordó declarar imposibilitado al Señor Manuel José Montañez como Diputado del Congreso, por lo que decidió llamar al Primer Diputado Suplente a su seno, Señor Francisco Ortega (Acta del 6 de septiembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 64).

El Congreso tomó conocimiento de un oficio del Gobernador del Estado, en el que manifestaba "tener varias dificultades para abonar a los señores diputados sus dietas desde el trece del próximo pasado, en que aún se hallaba funcionando el Congreso Constituyente (Acta de la sesión secreta del 6 de septiembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas).

El 9 de septiembre el Diputado Suplente Francisco Ortega rindió su protesta de ley como integrante del Congreso (Acta del 9 de septiembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 71).

El Congreso acordó exonerar "a los individuos que componen la Comisión de Puntos Constitucionales de ser nombrados para otras comisiones", a más tiempo que el que resta para concluir las sesiones ordinarias" (Acta del 9 de septiembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 71).

El Congreso nombró a Luis Varela como Consejero del Estado, ante la renuncia que hizo a dicho cargo Mariano Villela (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 189 del 9 de septiembre de 1830: 142).

El Congreso nombró a Luciano Castorena como Consejero del Estado, ante la renuncia que hizo a dicho cargo Nicolás García de San Vicente (Acta del 9 de septiembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 76).

El 10 de septiembre el Congreso dispuso que se integrara una comisión especial para que redactara una iniciativa a la Cámara de Senadores, para que se disminuyeran las contribuciones impuestas al Estado, toda vez que "con la ocupación de la Ciudad de México, perdió más de un millón de pesos que anualmente le producía la Aduana" (Acta del 10 de septiembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 86).

El Presidente del Congreso nombró como integrantes de la comisión especial que redactaría una iniciativa a la Cámara de Senadores en materia impositiva a los diputados: Francisco Ortega, Nicolás García de San Vicente e Ignacio González Caraalmuro (Acta del 10 de septiembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 86).

El 14 de septiembre el Congreso instruyó al Gobierno a nombrar una comisión compuesta de tres letrados, los que la mejor reputación con el público por su saber y talento, a fin de que formen un Código Penal para el Estado, dentro del plazo en que aquellos se comprometan con el mismo Gobierno" (Proposición del 14 de septiembre de 1830. BJMLM: vol. 61, exp. 312).

El 15 de septiembre el Congreso integró la Mesa Directiva del segundo mes de su Primer Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado José Ignacio González Caraalmuro y la Vicepresidencia del Diputado Mariano Esteva. Nombró como secretarios propietarios a los diputados: Atanasio Saavedra y Mucio Barquera y como secretarios suplentes a los diputados: Trinidad Montaño y Andrés Millán (Acta del 15 de septiembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 98).

El Congreso tomó conocimiento de un oficio del Gobernador, en el que indicaba que el Gobierno ya había abonado las dietas a los señores diputados (Acta de la sesión secreta del 15 de septiembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas).

El 18 de septiembre el Congreso aprobó la iniciativa que debía remitir a la Cámara de Senadores, "para que no se apruebe el acuerdo de la (Cámara de) Diputados, en que se impone al Estado de México un 40 por ciento por contingente sobre sus rentas" (Acta del 18 de septiembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 107).

El 20 de septiembre el Congreso dispuso que una comisión especial de su seno, "teniendo a la vista los expedientes que obran en su Secretaría y en la del Gobierno del Estado, sobre las ordenanzas de ayuntamientos, formara un Código Municipal, en que proponga las reformas que juzgue necesarias para la mejor organización de aquellos cuerpos, y reúna todas las disposiciones que hayan de quedar vigentes relativamente a este asunto" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 190 del 20 de septiembre de 1830: 142).

El 22 de septiembre el Congreso acordó que se continuara el pago de 150 pesos al Portero del Supremo Tribunal de Justicia, no obstante a que no se había incluido en el último presupuesto (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 191 del 22 de septiembre de 1830: 143).

El Congreso autorizó diez mil pesos al Ejecutivo, para que "continuará en la formación de la estadística y plan topográfico del Estado" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 192 del 22 de septiembre de 1830: 143).

La Municipalidad de Toluca envió un oficio al Congreso por el que ofreció su Sala Consistorial para la celebración de las sesiones de la Legislatura (Comunicado del 22 de septiembre de 1830. BJMLM: vol. 59, exp. 177).

El 24 de septiembre el Diputado Luis Pérez Palacios rindió su protesta de ley ante el Pleno del Congreso (Acta del 24 de septiembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 120).

El Congreso inició la discusión del dictamen sobre procedimientos criminales (Acta del 24 de septiembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 121).

El 27 de septiembre los diputados: Juan Anza y Juan Ceballos rindieron su protesta de ley ante el Pleno del Congreso (Acta del 27 de septiembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 139).

El Ayuntamiento de Toluca tomó conocimiento del oficio que le remitió el Congreso, por el que "aceptó la oferta que le hizo el C. Ayuntamiento de Toluca de la Sala Capitular para las sesiones, y colocar su Secretaría, y que los CC. Secretarios están comisionados para que de acuerdo con el C. Alcalde Primero (Ignacio Torrecano) se determine la traslación de los muebles necesarios.

El Ciudadano Secretario (Manuel Eizaguirre) manifestó que la oferta solo se contrajo a la Sala, pieza que queriendo el Honorable Congreso disponer también de las oficinas se propuso por indemnización una pieza en Risco, la cual fue a ver y estando absolutamente desalineada e incómoda, dijo el Oficial Primero de la Secretaría (del Congreso), que en hora buena se tomaría con el carácter de provisional, en el concepto de que se cubriera una puerta con vidrios y se aseara la pieza, a lo que

contestó aquel sujeto que lo manifestaría a los demás secretarios" (Acta del Ayuntamiento de Toluca del 27 de septiembre de 1830).

El 28 de septiembre el Congreso acordó no admitir al Señor José María Manzano la renuncia que hacía al cargo de Diputado (Acta del 28 de septiembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 145).

El 29 de septiembre el Congreso por primera vez otorgó una pensión. En aquella ocasión determinó que se aprobaba "la conducta del Gobierno en la concesión que ha hecho de una pensión de doce pesos cuatro reales al mes, a cada una de las viudas de José Perfecto y Manuel Román (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 193 del 29 de septiembre de 1830: 144).

El 30 de septiembre el Congreso emitió su voto a favor de un ciudadano para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia (Acta del 30 de septiembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 148).[177]

El 1 de octubre el Congreso nombró al General de Brigada Melchor Múzquiz como Gobernador Constitucional para el cuatrienio del 12 de marzo de 1831 al 12 de marzo de 1835. También nombró a Manuel Muria como Teniente Gobernador y como consejeros del Gobierno a: Pedro Verdugo, Ignacio Alvarado, Agustín Gómez Eguiarte y Luis Varela (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 194 del 1 de octubre de 1830: 144).

El Congreso acordó que nombrara una comisión que formulara "algunas medidas para la pronta pacificación del Estado (Acta de la sesión secreta del 1 de octubre de 1830. BJMLM. Colección de Actas).

El Presidente del Congreso nombró como integrantes de la comisión especial que formularía recomendaciones para pacificar al Estado a los diputados: Juan Ceballos, Félix Ortiz, Mariano Esteva, Luis Pérez Palacios y Benito Peña y Medina (Acta de la sesión secreta del 1 de octubre de 1830. BJMLM. Colección de Actas).

El 2 de octubre el Presidente del Congreso le concedió una licencia por ocho días para separarse de su cargo al Diputado Nicolás García de San Vicente, para restablecerse

[177] El nombre del ciudadano elegido es ilegible en el acta.

su salud en la Ciudad de México (Acta de la sesión secreta del 2 de octubre de 1830. BJMLM. Colección de Actas).

El 3 de octubre el Congreso acordó “excitar al Gobierno, a fin de que haga venir cuanto antes a esta Ciudad los libros de la Biblioteca” (Acta del 3 de octubre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 167).

El 6 de octubre el Congreso “facultó al Gobernador para levantar y organizar en el Estado, del modo que le parezca conveniente, las fuerzas necesarias para la completa pacificación de éste”, y para que invierta en este objeto “las cantidades que necesite, y si no bastaren los ingresos de las cajas del Estado, solicite un préstamo hasta la suma de cien mil pesos, con el menor sacrificio posible en el premio, hipotecando al efecto las rentas del mismo Estado” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 195 del 16 de octubre de 1830: 144).

El Congreso acordó que se pasase “nota al Cabildo Metropolitano, para que tenga a bien excitar a los párrocos del Estado, a efecto de que en el pacto espiritual que conminan a sus feligreses, les recomienden la paz, la tranquilidad, el respeto a las autoridades constituidas y el olvido de rencores” (Acta del 6 de octubre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 172).

El Congreso acordó hacer “una manifestación a los habitantes del Estado, como ha sido costumbre en la apertura de las nuevas legislaturas, concebida en los términos que exigen las actuales circunstancias” (Acta del 6 de octubre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 172).

El Presidente del Congreso nombró como integrantes de la comisión que elaboraría una proclama dirigida a los habitantes del Estado y a los diputados: Juan Ceballos, Francisco Ortega y Antonio de la Vega (Acta del 6 de octubre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 172).

El 11 de octubre el Congreso autorizó el nombramiento de peritos para reconocer los límites de los pueblos de Paintla y Atzala, en el Distrito de Taxco (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 196 del 11 de octubre de 1830: 145).

El 12 de octubre el Congreso recibió la colección de planas de los alumnos de la Escuela de Tenancingo que dedicaron al Congreso Ausencio Fuentes, Vicente

Segura, Juan Molina y José Leguizamo (Comunicado del 12 de octubre de 1830. BJMLM: vol. 57, exp. 83).

El 13 de octubre el Congreso integró la Diputación Permanente de su Primer Receso, presidida por el Diputado José María Jiménez. Nombró como Secretario al Diputado Félix Ortiz, como miembros a los diputados: Luis Pérez Palacios, Benito Peña y Medina y Trinidad Montaño y como Miembro Suplente al Diputado Francisco Ortega (Acta del 13 de octubre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 204).

El 14 de octubre el Congreso instruyó al Gobierno para que provea "la educación literaria de los niños del extinguido Colegio, estableciendo éstas entre tanto se proporciona mejor local, en el Convento de Nuestra Señora de la Merced" (Acta del 14 de octubre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 220).

El 15 de octubre el Congreso nombró "al Ciudadano Presbítero Fabián Rodríguez para que ocupe la vacante de Consejero de Estado, por fallecimiento del Ciudadano Licenciado Luciano Castorena (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 197 del 15 de octubre de 1830: 145).

El 16 de octubre el Congreso facultó al Gobernador para que arreglara las aduanas y sancionara a los administradores que no hicieran el corte de caja o sus enteros a la Tesorería General en los días prefijados (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 198 del 16 de octubre de 1830: 146).

El Congreso determinó que para la provisión de los empleos que no están prescritos en la Constitución, "el Gobierno expedirá en lo sucesivo las convocatorias de que ha usado en algunos casos, y sólo en el que no se encuentre individuo que reúna las cualidades que exigen las leyes, podrá colocar un ciudadano de otro Estado, o territorio, o Distrito Federal" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 199 del 16 octubre de 1830: 146).

El Congreso aprobó la primera reforma a la Constitución Política del Estado Libre de México, en la cual se estableció que la residencia de los Supremos Poderes sería la Ciudad de Toluca, que el Consejo de Gobierno se integraría con "el número suficiente de secretarios que sirvan el despacho de los negocios de gobierno", que en el Supremo Tribunal de Justicia se establecieran los tribunales de segunda y tercera instancia y de que se dejaba sin efecto el artículo 209 de la Constitución, que

establecía que “ningún Tribunal del Estado podrá pronunciar sentencia en materia criminal sobre delitos graves, sin previa declaración del jurado mayor de haber lugar a la formación de causa, y sin que califique el jurado menor el hecho que ha motivado la acusación” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 200 del 16 octubre de 1830: 146).[178]

El Congreso declaró válidos “los nombramientos que se han hecho para diputados propietarios al Congreso del Estado, en los ciudadanos: José Trinidad Montaño, José María Jiménez, Benito Peña y Medina, Victoriano Zimbrón, Francisco Valdovinos, Francisco Ortega, Félix Ortiz, Lorenzo Enríquez, Juan Icaza y Luis Pérez de Palacios” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 201 del 16 de octubre de 1830: 148).

El Congreso facultó al Gobernador para que expidiera el Reglamento para el Cobro de las Alcabalas (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 202 del 16 de octubre de 1830: 148).

El Congreso dispuso que “los alcaldes constitucionales continuaran como hasta aquí practicando las primeras diligencias del sumario, cuando en su territorio se cometa algún delito o se encuentre algún delincuente” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 203 del 16 de octubre de 1830: 152).

El Congreso recibió la protesta de ley de Fabián Rodríguez como Consejero del Estado (Acta del 16 de octubre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 28, foja 239).

El Congreso exhortó al Gobernador para que “excitara a los ciudadanos del Estado, a fin de que contribuyan según sus facultades para cubrir los gastos necesarios para restablecer la tranquilidad pública y sostener la defensa del Estado”, y para que en caso de que no surtiera “todo su efecto esta medida, se autoriza al mismo Gobernador para que de acuerdo con su Consejo, aumente la contribución de exentos con proporción a las facultades de cada uno, de dos reales hasta seis pesos, y las reglamente en los términos más justos y equitativos, no incluyendo en el número de los contribuyentes a los que voluntariamente se presten a ello” (Acta de la sesión secreta del 16 de octubre de 1830. BJMLM. Colección de Actas).

El Gobernador Melchor Múzquiz, al acudir a la clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, indicó a los diputados que “vosotros sabéis el triste estado

[178] Este decreto fue iniciado por el Congreso Constituyente de 1830.

en que recibí la Hacienda Pública y los ramos de gobierno, porque no ignoráis la desmoralización consiguiente a una revolución que atacó a todas las propiedades". De igual manera, afirmó que el Gobierno "sin persecución a nadie, castigará inflexiblemente el crimen que encuentre, y no tomará ningún descanso por aplicar todo el tiempo a los trabajos que puedan proporcionar la felicidad pública, inmolando por ella si fuese necesario su existencia en aras de la Patria" (Poder Legislativo, 1830. Acta del 16 de octubre de 1830: 393).

El respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado José Ignacio González Caraalmuro, señaló que "la opulencia de este Estado que en días más dichosos era objeto de la envidia, hoy se ha convertido en escasez y en verdadera miseria: su cultura en una escandalosa contrariedad de opiniones que han producido la desconfianza universal, y odios más sangrientos: la población sin seguridad, sin confianza, sin capitales y sin recursos, parte perece en la campaña con las discordias civiles, parte ha perecido en los caminos interceptados por ladrones, y el resto lleno de temor riega con su sudor y lágrimas sus fértiles campos, cuyos frutos no sabe si comerá o gime las calamidades públicas en sus hogares melancólicos" (Poder Legislativo, 1830. Acta del 16 de octubre de 1830: 393).[179]

El Congreso General dispuso que "se establecerá un banco de avío para fomento de la industria nacional, con un capital de un millón de pesos" (Decreto del 16 de octubre de 1830. BJMLM: vol. 61, exp. 276).

El 26 de octubre el Gobernador en cumplimiento con lo dispuesto en el decreto 202 del día 16 de ese mes, expidió el Reglamento para el Cobro del Impuesto de Alcabalas, en el cual se dispuso que "cada quince días, al tiempo que dichos comisionados recojan los productos pertenecientes a la Federación, deducirán los mismos administradores el quinto y décimo que corresponde al Estado" (Poder Legislativo II, 2001. Reglamento del Ejecutivo del 26 de octubre de 1830: 148).[180]

El 5 de noviembre la Diputación Permanente convocó al Congreso a su Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, en el cual se tratarían: "las iniciativas sobre reformas o adiciones a la Constitución del Estado en los artículos 4º, 18, 19 y 20, en los títulos 2º y 3º, en los artículos 191, 201 y 320, y en el capítulo 2º del título 7º"; "decretar el modo con que el Gobierno debe cumplir la obligación que le impone la parte 5ª del art. 135

[179] No se localizaron las actas de la Diputación Permanente del Primer Periodo de Receso.
[180] Este Reglamento incluyó tres tipos de formatos para efectuar los registros correspondientes.

de la Constitución del Estado, de cuidar de que la justicia se administre pronta y cumplidamente"; "de dictar las medidas que según los casos ocurrentes se juzgaren necesarias para la conservación del orden público"; "resolver las dudas y acordar las medidas que en materia de Hacienda ha propuesto o propusiere el Gobierno"; "señalar penas para asesinos y ladrones"; "dictar las medidas necesarias, a fin de que se vayan formando los códigos que deban regir en el Estado"; "tomar en consideración los puntos urgentes que inicie el Gobierno sobre Milicia Local; arreglar su Inspección y establecer el Tribunal que haya de ver en tercera instancia, las causas militares que se formen a los individuos de dicha Milicia"; "hacer las reformas que sean necesarias en los artículos 15, 16 y 17 del Reglamento Interior del Congreso"; "dictar las medidas legislativas que fueren necesarias para completar el Congreso"; "revisar el decreto del Congreso Constituyente del 17 de julio de este año, que declaró el sentido del art. 38 de la Constitución"; "resolver lo conveniente sobre las iniciativas que se han hecho en orden a la provisión de las canonjías vacantes"; "aumentar el número de jueces de letras en los partidos en que se estimase necesario"; "decretar lo conveniente al arreglo de las tesorerías de rescate, revisando el decreto del Congreso Constituyente del 1º de junio del presente año"; "resolver el expediente sobre el pago de cantidades que legítimamente se adeuden por la construcción de los muebles pertenecientes al Edificio del Congreso y a la Secretaría del Gobierno"; "los asuntos que ocurran sobre el gobierno económico interior del Congreso", y "las iniciativas sobre reformas o adiciones a la Constitución General" (Poder Legislativo II, 2001. Convocatoria del 5 de noviembre de 1830: 158).

El 8 de noviembre el Gobernador Melchor Múzquiz, dirigió un manifiesto a los propietarios y demás habitantes del Estado, en donde indicó que en las últimas sesiones ordinarias del Congreso se "revistió al Gobierno de la autoridad y fuerza necesarias, para reprimir a los enemigos de la quietud pública, y fijando su consideración en las penurias que sufre el Erario, a causa del mismo desorden, dispuso entre otras cosas, con fecha 16 de octubre próximo anterior, que se os excite a fin de que contribuyáis, según las facultades de cada uno, para cubrir los gastos necesarios para restablecer la tranquilidad y sostener la defensa del Estado" (Proclama del Ejecutivo del 8 de noviembre de 1830. AHEM: G.G.G. vol. 25, exp. 23).

El 15 de noviembre se efectuó la Junta Preparatoria para instalar el Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso, en la cual no fue posible elegir a su Mesa Directiva, ante la falta de quórum (Acta del 15 de noviembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 1).

El 18 de noviembre el Congreso reunido en Junta integró la Mesa Directiva de su Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, presidida por el Diputado Diego Germán. Nombró como Vicepresidente al Diputado José María García Figueroa, como secretarios propietarios a los diputados: Andrés Millán y Luis Pérez Palacios y como Secretario Suplente al Diputado Félix Ortiz (Acta del 18 de noviembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 2).

El Gobernador Melchor Múzquiz, al acudir a la apertura del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso, indicó que de "nada servirán seguramente los desvelos del Cuerpo Legislativo, la energía y sacrificios del Ejecutivo y si vosotros todos ciudadanos del Estado no os esforzáis a contribuir de cuantos modos están a vuestro alcance para acabar con una guerra que no merece el nombre de tal, sino el de porción de gavillas resentidas de asesinos y ladrones: y si os manifestéis apáticos e indiferentes a tamaños males que amenazaron vuestras cabezas con el exterminio y ruina de vuestras propiedades y aún de vuestras personas" (Acta del 18 de noviembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 3).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Diego Germán, le indicó al Gobernador que "la orgullosa presunción se halla tan lejos de mis dignos compañeros, cuando se encuentra en medio de su corazón el amor más puro de la prosperidad. Conocen lo difícil que es promover ésta donde se extiende el deseo; pero el Gobierno puede estar seguro de que al encargarse el Congreso de los negocios señalados en la convocatoria, atendiendo con particularidad los que le recomienda, abonará en todos hasta donde lo permitan las circunstancias que se nos rodean" (Acta del 18 de noviembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 4).

El Congreso acordó que el Gobierno hiciera saber al Señor José María Manzano que debía acudir al Congreso a rendir su protesta de ley como Diputado (Acta de la sesión secreta del 18 de noviembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas).

El 19 de noviembre el Congreso tomó conocimiento de un oficio del Diputado José María Manzano, en el que "manifestaba serle físicamente imposible presentarse a desempeñar su cargo, por ir en aumento sus males" (Acta del 19 de noviembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 8).

El 23 de noviembre el Gobernador les comunicó a los diputados que había dado la orden para trasladar de la Ciudad de Tlalpan a la Ciudad de Toluca el Archivo del Congreso (Comunicado del 23 de noviembre de 1830. BJMLM: vol. 59, exp. 162).

El 27 de noviembre el Congreso acordó que el Señor "José María Manzano se presentara a presentar el juramento dentro de seis días contados desde esta fecha" (Acta de la sesión secreta del 27 de noviembre de 1830).

El 3 de diciembre el Diputado José María Manzano acudió al Congreso a rendir su protesta de ley (Acta del 3 de diciembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 8).

El 6 de diciembre el Congreso dispuso que "se iniciara al Congreso de la Unión la reforma del artículo 169 de la Constitución Federal, de manera que las reformas de la misma Constitución, en términos que está en lo sucesivo reformarse sino cada ocho años por lo menos" (Acta del 6 de diciembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 21).

El 9 de diciembre el Congreso acordó dirigir una "iniciativa a la Cámara de Senadores, diciendo que el Estado de México reproduce la que sobre asignación de contingentes tiene hecha con fecha 18 de septiembre de este año como igualmente la oferta de contribuir en calidad de reintegro veinte mil pesos anuales para sus gastos, no pretendiendo de ningún modo desentenderse de sus necesidades" (Acta del 9 de diciembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 30).

El 14 de diciembre el Congreso revocó el decreto número 120, que prevenía la agregación de las tesorerías de rescate a las administraciones de rentas, debiendo continuar las primeras como estaban antes de la publicación de dicho decreto, por lo que "el Gobierno restablecerá los fondos de rescate luego que lo permitan la escasez de la Hacienda, haciéndolo de preferencia en las tesorerías situadas en lugares que no esté amagada la seguridad pública" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 204 del 14 de diciembre de 1830: 159).

El 15 de diciembre el Congreso acordó que se nombrara una comisión permanente de su seno, "a la que pasarán todas las leyes y decretos de las cámaras de la Unión, para que proponga cuáles deben archivarse, o la resolución que deba tomar el Congreso en

el caso de que opongan al sistema federal, o perjudiquen los intereses del Estado" (Acta del 15 de diciembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 52).

El 18 de diciembre el Congreso nombró como Presidente de la Mesa Directiva del segundo mes de su Primer Periodo Extraordinario de Sesiones al Diputado Francisco Ortega y como Secretario Propietario al Diputado Atanasio Saavedra (Acta del 18 de diciembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 73).

El Congreso aprobó una iniciativa dirigida al Congreso General para reformar la Constitución Federal, la cual se sustentó con base en una proposición presentada por los diputados del Congreso Constitucional (Acta del 18 de diciembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 73).

El 23 de diciembre el Congreso determinó que "la inteligencia del artículo 38 de la Constitución es que no pueda discutirse ni votarse ningún proyecto de ley no estando presentes las dos terceras partes del número total de diputados, que según los artículos 30 y 31 deben componer el Congreso", por lo que "en consecuencia, no tendrá efecto el artículo 98 del Reglamento Interior de la misma Asamblea" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 205 del 23 de diciembre de 1830: 159).

El Congreso le concedió al Diputado Francisco Ortega una licencia por un mes para separarse de su cargo (Acta de la sesión secreta del 23 de diciembre de 1830. BJMLM. Colección de Actas).

El 5 de enero de **1831** el Congreso acordó establecer "provisionalmente un Juez de Primera Instancia en los partidos de Toluca y Tulancingo" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 206 del 5 de enero de 1831: 160).

El Congreso inició el análisis del dictamen sobre el arreglo de la Inspección de la Milicia Cívica del Estado, en el cual se proponía derogar "el artículo 2º del decreto número 106 del 29 de mayo de 1830, en la parte que dispuso se encargase el Gobernador del Estado de la Inspección de la Milicia Cívica del mismo", y que "este encargo lo desempeñará el Teniente Gobernador, cuando no se halle funcionando de Gobernador, y en su defecto, el Consejero más antiguo del Estado Secular" (Acta del 5 de enero de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 105).

El 11 de enero el Congreso calificó la elección de José María Santiago como Diputado de la próxima Legislatura (Acta del 11 de enero de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 134).

El 12 de enero el Congreso acordó dirigir una iniciativa a las cámaras del Congreso de la Unión, “para que quede libre la correspondencia que reciban los gobiernos de los estados y dirijan a las autoridades subalternas, con objeto de circular las leyes, decretos y órdenes de los Supremos Poderes de la Federación, en la parte que por acuerdo de los gobiernos general y de los estados se estiman gravados los portes de éstos” (Acta del 12 de enero de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 135).

El Congreso facultó al Gobierno para que contratara una iguala con el Gobierno General, por la correspondencia que emanaba de los Poderes del Estado y que estaba sujeta al pago de portes (Acta del 12 de enero de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 136).

El 13 de enero el Congreso le concedió al Diputado José María Manzano una licencia por un mes para que restableciera su salud (Acta de la sesión secreta del 13 de enero de 1831. BJMLM. Colección de Actas).

El 15 de enero el Congreso aprobó la minuta del decreto sobre el arreglo de la Inspección de la Milicia Cívica del Estado (Acta del 15 de enero de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 142).

El 18 de enero el Congreso nombró como Presidente de la Mesa Directiva del tercer mes de su Primer Periodo Extraordinario de Sesiones al Diputado Atanasio Saavedra y como su Vicepresidente al Diputado Juan Ceballos (Acta del 18 de enero de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 148).

El Congreso acordó integrar una comisión de su seno, para que declarara si el Congreso aún podía ocuparse de las reformas de la Constitución (Acta del 18 de enero de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 148).

El Presidente del Congreso nombró como integrantes de la comisión que se ocuparía de las reformas de la Constitución a los diputados: Diego Germán, Mariano Esteva y Trinidad Montaño (Acta del 18 de enero de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 152).

El 20 de enero el Congreso acordó que “la Comisión de Justicia se encargará de formar el proyecto de Código Penal para que comience a discutirse en las sesiones de octubre”, y que “a esta Comisión se agregarán tres letrados de fuera del Congreso, nombrado uno por el Congreso, otro por el Tribunal de Justicia y otro por la Audiencia del seno de dichas corporaciones” (Acta del 20 de enero de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 153).

El 22 de enero el Congreso acordó que en el periodo de sesiones que estaba efectuando no podía “resolver si hay o no facultades en el Congreso para revisar el acto calificatorio del Constituyente con respecto al Doctor Don José María Santiago” (Acta del 20 de enero de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 155).

El Congreso acordó llamar al Diputado Suplente que debía “ocupar el lugar que resulta vacante por no ser Diputado El Señor (José María) Santiago” (Acta del 20 de enero de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 161).

El 24 de enero el Congreso acordó felicitar a Nicolás Bravo, “en razón de los triunfos alcanzados a favor de la Patria y el orden, en Chilpancingo (Acta del 24 de enero de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 162).

El 25 de enero el Congreso acordó que se llamara a su seno al Diputado Suplente de Nicolás García de San Vicente, para cubrir la vacante que dejó éste (Acta del 25 de enero de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 163).

El 26 de enero el Diputado Suplente Ignacio Alvarado rindió su protesta de ley (Acta del 26 de enero de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 165).[181]

El 1 de febrero el Gobernador Melchor Múzquiz, al acudir a la clausura del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso, les indicó a los diputados que “después de haber provisto a los principales objetos de la convocatoria, vais a cerrar las sesiones extraordinarias, no para ir a descansar a vuestras casas, sino para meditar con detenimiento los asuntos que os han de ocupar en las próximas ordinarias, en las que daréis mismas pruebas de amor al Estado y deseo de llenar vuestros deberes” (Acta del 1 de febrero de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 177).

[181] Se desconoce si ocupó la curul del Diputado José María Santiago inhabilitado por el Congreso Constituyente o del Diputado Nicolás García de San Vicente.

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Juan Ceballos, indicó que esta Asamblea “ha visto con singular agrado las notorias fatigas del digno Jefe del Ejército, y constantes trabajos del Gobierno por el restablecimiento de la pública tranquilidad, y espera que redoblando sus esfuerzos coadyuve con el Ejecutivo de la Unión al exterminio de los malvados, para conservar intacto el sagrado depósito de la Constitución y leyes” (Acta del 1 de febrero de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 29, foja 178).

El 9 de febrero el Congreso General determinó que “el gobierno procederá desde luego a hacer ejecutar las obras urgentes que demandan el Desagüe de Huehuetoca, invirtiendo en ellas hasta la cantidad de veinte mil pesos” (Decreto del 9 de febrero de 1831. BJMLM: vol. 66, exp. 196).

El Primer Congreso Constitucional (1830-1831) que operó del 15 de agosto de 1830 al 1 de marzo de 1831 se integró con 21 diputados nombrados por electores secundarios en la Junta General del Estado. Realizó un periodo ordinario de sesiones y un periodo extraordinario de sesiones y expidió 18 decretos entre el 9 de septiembre de 1830 y el 5 de enero de 1831 (Poder Legislativo II, 2001. Índice de decretos: 642-643).

Capítulo 6
Segundo Congreso Constitucional (1831-1832)

El Segundo Congreso Constitucional (1831-1832) que operó del 2 de marzo de 1831 al 16 de octubre de 1832 se integró con 21 diputados nombrados por electores secundarios en la Junta General del Estado. Los diputados eran: José Trinidad Montaño, José María Jiménez, Benito Peña y Medina, Victoriano Zimbrón, Francisco Valdovinos, Francisco Ortega, Félix Ortiz, Lorenzo Enríquez, Juan Icaza, Luis Pérez Palacios (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 201 del 16 de octubre de 1830: 148), Mariano Esteva, Atanasio Saavedra, Andrés Millán, Juan Antonio Arce, Diego Germán, Ignacio González Caraalmuro, José María García Figueroa, Mucio Barquera, Pedro Pérez Alamillo, Juan Ceballos y José Antonio de la Vega (Acta del 29 de febrero de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 5).

El 24 de febrero de 1831 se efectuó la Primera Reunión Preparatoria del Congreso, bajo la conducción del Presidente de la Diputación Permanente, Diputado Mariano Esteva y la asistencia de presuntos diputados: Atanasio Saavedra, Diego Germán, Ignacio González Caraalmuro, Mariano Esteva, José María García Figueroa, Juan Ceballos, Pedro Pérez Alamillo, José Antonio de la Vega, Juan Antonio Arce, Andrés Millán, Lorenzo Enríquez e Ignacio Alvarado (Acta del 24 de febrero de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 4).

El Congreso reunido en Junta integró la comisión revisora de las credenciales de los diputados integrada por los diputados electos: Mariano Esteva, Diego Germán, Juan Ceballos y Atanasio Saavedra (Acta del 24 de febrero de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 4).

El 26 de febrero en atención a lo dispuesto en el decreto número 100 del Congreso Constituyente,[182] se efectuó la Segunda Reunión Preparatoria del Congreso, con la asistencia de los señores: Mariano Esteva, José María Jiménez, Félix Ortiz, Benito Peña y Medina, Luis Pérez Palacios, José Trinidad Montaño, Atanasio Saavedra, Andrés Millán, Juan Antonio Arce, Francisco Valdovinos, Lorenzo Enríquez, Diego Germán, Ignacio González Caraalmuro, José Figueroa, Mucio Barquera, Pedro Pérez

[182] El 10 de mayo de 1830 el Congreso Constituyente al convocar a elecciones al Primer Congreso Constitucional señaló que "el 2 de marzo de 830 se renovará por mitad el Congreso, cesando los diez diputados últimamente nombrados".

Alamillo, Francisco Ortega, Juan Ceballos y José Antonio de la Vega (Acta del 26 de febrero de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 5).

El Congreso reunido en Junta calificó las cartas credenciales de los diputados: Trinidad Montaño, José María Jiménez, Benito Peña y Medina, Victoriano Zimbrón, Francisco Valdovinos, Francisco Ortega, Félix Ortiz, Lorenzo Enríquez, Juan Icaza y Luis Pérez Palacios (Acta del 29 de febrero de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 5).

El Congreso integró la Mesa Directiva del primer mes de su Primer Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado Electo Mariano Esteva y la Vicepresidencia del Diputado José Antonio de la Vega. Nombró para todo el periodo ordinario de sesiones como secretarios propietarios a los diputados: Benito Peña y Medina y Juan Antonio Arce y como secretarios suplentes a los diputados: Pedro Pérez Alamillo e Ignacio González Caraalmuro (Acta del 29 de febrero de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 5).

El Presidente del Congreso, Diputado Mariano Esteva, efectuó la declaratoria de instalación del Segundo Congreso Constitucional (Acta del 29 de febrero de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 5).

El 2 de marzo el Gobernador Melchor Múzquiz, al acudir a la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, señaló que “los males que el Estado ha sufrido han sido muy grandes y muy notorios, y por lo mismo, el Gobierno no puede figurarse que en el corto tiempo que lleva de hallarse al frente de los negocios los haya remediado todos ni la mayor parte de ellos; más el examen de la Memoria que os presentará dará por resultado algunas mejoras en el Ramo de Gobierno y algunos ahorros no cortos, en la Hacienda, pudiendo asegurarse que sin el auxilio que da hoy en día a la Federación, cubriría sus atenciones con la religiosidad que desea tener en todos casos y que hasta ahora ha sido imposible por los trastornos y escaseces en que recibió el Estado” (Acta del 2 de marzo de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 6).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Mariano Esteva, señaló que “la Constitución, esta Ley fundamental del Estado, en la que como indestructible base deben apoyarse toda mejora, prosperidad y engrandecimiento, y que ha sido formada para garantizar a los ciudadanos el pleno goce de un más casos

de derechos y preciosos intereses, está exigiendo imperiosamente las útiles y saludables reformas que el tiempo y la experiencia han indicado como necesarias y sin las que no podrá jamás llenar debidamente tan grandiosos y sagrados objetos. Y he aquí la primera, la más grande obra de que el Congreso debe ocuparse en las presentes sesiones" (Acta del 2 de marzo de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 8).

El Diputado Victoriano Zimbrón rindió su protesta de ley ante el Pleno del Congreso (Acta del 2 de marzo de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 6).

El Congreso General dispuso que el Supremo Gobierno formara el Censo General de Habitantes en cada uno de los estados, Distrito y territorios (Decreto del 2 de marzo de 1831. BJMLM: vol. 66, exp. 200).

El 8 de marzo el Teniente Gobernador Manuel Muria se presentó al Congreso, para leer la primera parte de la Memoria de Gobierno (Acta del 8 de marzo de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 28).[183]

El Gobernador Melchor Múzquiz en su Memoria de Gobierno, manifestó que en abril de 1830 al declararse nula la Legislatura Constitucional volvió a tomar las riendas del Estado, que "las circunstancias en que he tenido que desempeñarle no han sido ciertamente las más favorables para adquirirse concepto, ya sea por escasez de recursos, como por la falta de tranquilidad interior ocasionada por la funesta guerra del sur… De un lado, tenían que invertirse cuantiosos gastos por los establecimientos erigidos fuera de un cálculo provechoso, y de otro, la destrucción de los antiguos fondos en estos establecimientos y otros objetos, y la desconfianza y paralización de los giros por causa de las revueltas políticas, tenían restañados en su origen los manantiales de la riqueza pública" (Poder Legislativo, Memoria, 1831: 5).

El Gobernador señaló que con el restablecimiento del Instituto Literario se hacía necesario incluir otro método de enseñanza, que el Comisionado de Estadística estimaba que la Entidad tenía 1´050,153 habitantes, que existían 38 partidos y 182 municipalidades,[184] que en materia de seguridad pública se había retrocedido ante las

[183] La lectura de la Memoria continuó los días 9, 10 y 11 de marzo (Acta del 9 de marzo de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 34, Acta del 10 de marzo de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 35 y Acta del 11 de marzo de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 37).
[184] La Prefectura de Acapulco comprendía las municipalidades de: Acapulco, San Marcos, Tecpan, Zacatula, Chilapa, Quechultenango, Ahuacuacingo, Zitlala, Tenango del Río, Tixtla, Chilpancingo,

continuas convulsiones políticas, que estaba por concluirse el monumento sepulcral a Morelos en el Pueblo de Ecatepec, que por acuerdo del Congreso de la Unión se había nombrado un Comisionado para realizar estudios en el Canal del Desagüe de Huehuetoca, que se habían iniciado los trabajos de reposición de 19 cárceles y que ante la crisis económica "el Congreso Constituyente intentó disminuir las plazas y las dotaciones de los que a su juicio serían bastantes a su despacho: el Ejecutivo esforzando sus razones logró no se hicieran todas las bajas que se proponían, pero al fin se verificaron algunas, y se suprimieron dos plazas, a la vez que la de Inspección de Milicia Cívica se confió al Gobierno, suprimiendo la Secretaría de ésta que contaba de un Secretario y cuatro escribientes".

Entre los anexos de esta Memoria estaban: las tablas estadísticas de los ocho prefectos del Estado[185], la noticia que manifiesta los caudales existentes en la Tesorería General y en otras oficinas del Estado al 15 de octubre de 1830, los trabajos que han tenido el Supremo Tribunal de Justicia y la Audiencia, el estado que manifiesta los reos fugados,[186] los curatos que han sido provistos en el Estado, la "noticia que manifiesta el cupo total de hombres que se asignó a las ocho prefecturas en que se dividía el Estado y los estados que manifiestan el número de

---

Apango, Zumpango del Río; la Prefectura de Cuernavaca comprendía las municipalidades de: Cuernavaca, Yautepec, Tepoztlán, Xiutepec, Xochitepec, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Ixtla, San Francisco Tetecala, Miacatlán, Morelos, Zacualpan Amilpas, Ocuitulco, Xonacatepec, Xantetelco, Ayacapixtla y Tecpazingo; la Prefectura de México comprendía las municipalidades de: Tlalpan, Xochimilco, Coyoacán, Milpa Alta, Tuyahualco, San Ángel, Santa Fe, Cuajimalpa, Chalco, Tlalmanalco, Amecameca, Tenango, Tepopula, Xochitepec, Ozumba, Totolapa, Tlayacapa, Tláhuac, Ixtapaluca, Ayocingo, Texcoco, Papalotla, San Salvador Atenco, Acolman, Chiautla, San Vicente Chicoloapan, Tepetlaoxtoc, Calpulalpan, Teotihuacán, Otumba, Axapusco, Temascalapa, Tecámac, San Cristóbal Ecatepec, Zumpango, Tequixquiac, Nextlalpan, Hueypoxtla, Tlalnepantla, Huixquilucan, Tultitlán Monte Bajo (Melchor Ocampo), Monte Alto (Tlazala), Naucalpan, Cuautitlán, Tepotzotlán, Teoloyucan, Huehuetoca y Tultepec; la Prefectura de Huexutla comprendía las municipalidades de: Huexutla, Tlanchinol, San Felipe, Mextitlán, Xoxoquilpan, San Lorenzo, Chichicastla, Chapulhuacán, Zacualtipán, Tlahuelompa, Tlacolula, Lolotla, Molango, Tepehuacán, Yahualica, Huautla, Xochiatipán, Huasalingo, Calnali, Xochicoatlán, y Tianguistengo; la Prefectura de Taxco comprendía las municipalidades de: Taxco, Iguala, Tepecoacuilco, Huitsuco, Axuchillan, Cutzamala, Tlacotepec, Teloloapan, Ixcateopan, Tejupilco, Sultepec, Amatepec, Mineral de Temascaltepec, Ozoloapan, Zacualpan, Coatepec Harinas e Ixtapan de la Sal; la Prefectura de Tula comprendía las municipalidades de: Tula, Atitalaquia, San Pedro Tlaxcoapan, Tetepango, Tepexi del Río, Huichapan, Tecozautla, Nopala, Alfajayucan, Tasquillo, Actopan, Ixcuincuitlapilco, El Arenal, San Salvador, Yolotepec, Mixquiahuala, Jilotepec, Aculco, Acambay, Chapa de Mota, Villa del Carbón, Ixmiquilpan, El Cardenal, Zimapán, Xacala; la Prefectura de Toluca comprendía las municipalidades de: Toluca, Metepec, Lerma, Zinacantepec, Otzolotepec, Almoloya, San José Malacatepec (Villa de Allende), la Asunción Malacatepec (Donato Guerra), Amanalco, Ixtlahuaca, Temoaya, Jiquipilco, Jocotitlán, Atlacomulco, San Felipe del Obraje, Temascalcingo, Tenango del Valle, Calimaya, Santiago Tianguistenco, Capulhuac, Ocoyoacac, Tenancingo, Tecualoya, Malinalco, Joquicingo, y la Prefectura de Tulancingo comprendía las municipalidades de: Tulancingo, Atotonilco el Grande, Huaxcasaloya, Acaxochitlán, Tuctotepec, Tenango, Huehutla, Zinguiluca, Pachuca, Mineral del Monte, Mineral del Chico, Zempoala, Tizayucan, Apan, Tepeapulco.

[185] Incluían número de casamientos, bautizos, entierros, población y años en que se duplica la población.

[186] Se reportaban 229 reos fugados.

subinspectores, partidos de que se componen, batallones y regimientos, compañías y piquetes sueltos de infantería local y de caballería.

El 9 de marzo el Congreso aprobó el ceremonial que debía seguirse "el día en que el Gobernador y los consejeros de nueva elección deban presentar el juramento", así como el que debía observar el Gobernador cuando saliera de su Palacio para concurrir a alguna celebridad pública o dentro de la Iglesia (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 207 del 9 de marzo de 1831: 160).

El Diputado Juan Icaza acudió al Congreso a rendir su protesta de ley (Acta del 9 de marzo de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 28).

El 12 de marzo Melchor Múzquiz acudió al Congreso a rendir su protesta de ley como Gobernador Constitucional, de acuerdo con un protocolo establecido (Acta del 12 de marzo de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 38).[187]

El Presidente del Congreso, Diputado Mariano Esteva, después de recibir la protesta del Gobernador, le indicó que "cuando se trata de designar las personas a quienes deba confiar el sagrado depósito de la autoridad pública de quienes depende la buena o mala suerte de los pueblos, la felicidad o desgracia de millones de hombres, nada es más natural, nada más justo que el miedo de un caos, de una equivocación que pueda ser de trascendencia incalculable y de las consecuencias más funestas. Por fortuna, esta Honorable Asamblea se vio enteramente libre de estos temores en el nombramiento que hizo de vuestra excelencia para el Gobierno del Estado" (Acta del 12 de marzo de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 38).

Melchor Múzquiz, al intervenir en este acto protocolario, señaló que "la santidad del juramento debe ser por los habitantes del Estado una nueva garantía de la conservación de sus derechos, porque un corazón religioso siempre lo tendrá presente. Mas si por desgracia lo olvidase e hiciera a un lado la honradez con que he procurado justificar mi vida pública, los ciudadanos del Estado deben vivir tranquilos porque las luces y justificación de su Congreso sabrán reprimir los males sin consideración alguna, como es de su deber, así como es de hacer su dicha que ya ha

[187] En el decreto respectivo se indicaba que "el Teniente Gobernador o el que haga sus veces, llevará a su derecha al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y a su izquierda al Gobernador Electo, yendo mezclados los individuos del Supremo Tribunal de Justicia, con los consejeros que han de continuar, e inmediatamente después los nuevos" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 207 del 9 de marzo de 1831: 160).

comenzado y continúa con los trabajos de las presentes sesiones" (Acta del 12 de marzo de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 39).

El 15 de marzo el Congreso designó como individuos para juzgar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia a: Pedro Martínez de Castro, Mariano Tamariz, Manuel Rosales, Antonio Gortari, José María Muñoz, Manuel Peña y Medina, José Ignacio Nájera, José María Cuevas, Agustín Valdovinos, José Mariano Garduño, Leocadio Leguizamo, Pedro Asiain, José Antonio Aragón, José María Vázquez, Andrés Pliego, Manuel Ignacio Ortiz, Domingo Álvarez, Gregorio Leyva, Luis Vieyra, Francisco del Reyo, Baltazar Pérez, Manuel Agüero, José María Saavedra y Ricardo Camacho, y como Presidente de la Primera Sala a Leocadio Leguizamo, como magistrados a José María Cuevas y Manuel Rosales y como Fiscal a Gregorio Leyva (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 208 del 15 de marzo de 1831: 16).

El 26 de marzo el Congreso acordó que "el Gobierno con el acompañamiento que habla el decreto del 9 de marzo de este año, asistirá a las fiestas religiosas del jueves y viernes de la Semana Santa, día de Corpus, de la Santísima Virgen de Guadalupe y Santo Patrón de la Ciudad (San José) donde residan los Supremos Poderes", y que "el Gobierno cuidará que se hagan estas celebridades con la magnificencia que permitan las circunstancias del Erario, de cuya cuenta sean los gastos que al presente no salgan de otro fondo" (Acta del 26 de marzo de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 59).

El 29 de marzo el Congreso acordó que se hiciera "iniciativa a las cámaras de la Unión, pidiendo la derogación del artículo 11 de la Ley del 19 de febrero próximo pasado" (Acta del 29 de marzo de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 62).[188]

El Congreso acordó "que se manden imprimir todos los dictámenes que versen sobre reformas a la Constitución", a fin de que sean conocidos por la población, para que pueda hacerles observaciones (Acta del 29 de marzo de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 64).

El 6 de abril el Congreso nombró como Presidente de la Mesa Directiva del segundo mes de su Primer Periodo Ordinario de Sesiones al Diputado Juan Ceballos y como

[188] En el acta no se especifica la materia de dicha reforma.

Vicepresidente al Diputado José Trinidad Montaño (Acta del 6 de abril de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 66).

El 20 de abril el Congreso nombró como integrantes de la Sección de Gran Jurado a los diputados: Francisco Valdovinos, Mariano Esteva, Pedro Pérez Alamillo, Mucio Barquera, Diego Germán y Francisco Ortega (Acta del 20 de abril de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 145).

El 29 de abril el Congreso nombró al Diputado Atanasio Saavedra como integrante de la Sección de Gran Jurado, en sustitución del diputado Mucio Barquera (Acta del 29 de abril de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 159).

El 2 de mayo el Congreso nombró como Presidente de la Mesa Directiva del tercer mes de su Primer Periodo Ordinario de Sesiones al Diputado José María García Figueroa y como Vicepresidente al Diputado Andrés Millán (Acta del 2 de mayo de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 160).

El 16 de mayo el Congreso facultó “al Gobernador para que pueda dar la cantidad de trescientos pesos, previas las seguridades convenientes a Mister Olivar, por las obligaciones que éste contrate: primera, de enseñar a tejer según el método a dos oficiales que le señalará el mismo Gobierno, y segunda, de mejorar nuestros telares por el costo que ha dicho de diez pesos” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 209 del 16 de mayo de 1831: 163).

El Congreso al otorgar dos pensiones a las viudas de dos milicianos, dispuso que “el Gobierno no hará en lo sucesivo concesiones fijas y periódicas, sin previa autorización del Congreso” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 210 del 16 de mayo de 1831: 163).

El 20 de mayo el Congreso le concedió la carta de ciudadanía del Estado a Romualdo Ruano (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 211 del 20 de mayo de 1831: 163).

El Congreso declaró nula la elección de José María Torres Cataño para Fiscal del Supremo Tribunal de Justicia (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 212 del 20 de mayo de 1831: 163).

El Congreso autorizó “al Gobierno para proteger la redacción de un periódico en el que se insertaran documentos oficiales que convenga publicar, y se promueva entre otros

ramos, la instrucción general de los pueblos". Dicha protección consistía en "gastar en la impresión del periódico hasta la cantidad de veinticinco pesos semanarios, entre tanto pueda sostenerse dicho periódico con sus propios productos" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 213 del 20 de mayo de 1831: 163).

El 21 de mayo el Congreso General autorizó la formación de comisarías generales, entre las que estaba la correspondiente al Estado de México con el Distrito Federal. Estas comisarías tenían como atribuciones las de: "recoger y distribuir los caudales pertenecientes a la Federación con arreglo a las órdenes de la Tesorería General"; "intervenir en los cortes de caja de las oficinas recaudadoras de la Federación, que hubiere en el lugar de la residencia de las comisarías", y "desempeñar las comisiones o encargos que el Gobierno le hiciere, relativas al servicio de la Hacienda Pública, y también los que les hiciere la Dirección General, respecto de las oficinas recaudadoras" (Decreto del 21 de mayo de 1831. AHEM: L.L.D.F. vol. 9, exp. 35).

El 25 de mayo el Congreso General determinó que se establecieran "legaciones mexicanas para las potencias de Europa o América, en que el Gobierno las juzgue necesarias" (Decreto del 25 de mayo de 1831. BJMLM: vol. 65, exp. 122).

El 30 de mayo el Congreso concedió "a todo individuo que trabaje minas de hierro en el territorio del Estado, para que por el espacio de cinco años, desde el primer día de sus labores, no pague derecho alguno perteneciente al Estado, por el hierro que extraiga de las minas" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 214 del 30 de mayo de 1831: 164).

El Congreso integró a la Diputación Permanente de su Primer Receso, presidida por el Diputado José Trinidad Montaño. Nombró como Secretario al Diputado Francisco Valdovinos, como miembros a los diputados: Luis Pérez Palacios y Félix Ortiz y Mariano Esteva y como Suplente al Diputado José Antonio de la Vega (Acta del 30 de mayo de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 326).

El 31 de mayo el Congreso expidió el Presupuesto de Gastos del Estado de México del Año Económico del 2 de junio de 1831 al 2 de junio de 1832, en el cual se seguían manteniendo sin variación las contribuciones y las percepciones del personal de los

poderes.[189] Se incluían partidas especiales: para la reinstalación del Instituto Literario, y para la conclusión de las obras de los edificios destinados a los poderes Ejecutivo, Judicial y demás oficinas (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 215 del 31 de mayo de 1831: 164).[190]

El 2 de junio el Congreso determinó que "el Gobierno hará que se repitan las elecciones de ayuntamientos cuando no se verifiquen éstas conforme a la Ley que las arregla" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 216 del 2 de junio de 1831: 169).

El Congreso ordenó al Gobernador proceder a establecer las diputaciones territoriales de minas en los lugares donde no existieran (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 217 del 2 de junio de 1831: 169).

El Congreso le otorgó la ciudadanía del Estado a José Ramón Malo (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 218 del 2 de junio de 1831: 169).

El Congreso dispuso que "las funciones que daba la Ley al Inspector en lo judicial fueran desempeñadas por el Tribunal Ordinario de Segunda y Tercera Instancia" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 219 del 2 de junio de 1831: 169).

El Congreso al efectuar la segunda reforma a la Constitución Política del Estado Libre de México (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 220 del 2 de junio de 1831: 171) suprimió su artículo 5º, en el que se fijaba a la Ciudad de Texcoco como residencia de los Supremos Poderes, para establecer que "una ley designará el lugar donde hayan de establecerse" (art. 1º). También determinó que "en la residencia de los Supremos Poderes habrá un Tribunal Superior de Justicia, compuesto de nueve magistrados y dos fiscales" (art. 2º); que "los delitos puramente políticos, serán los únicos en que podrá haber lugar a rehabilitación especial del Congreso para ser nombrado" (art. 4º); que "el nombramiento de los ministros y fiscales será del Congreso, a propuesta en terna del Gobernador, de acuerdo con el Consejo, y oído previamente el informe del mismo Tribunal" (art. 6º); que entre las obligaciones del Tribunal Supremo estaban las

[189] Los 21 diputados percibían anualmente $3,000.00, el Redactor $1,600.00 y el Oficial Mayor $1,500.00. Las contribuciones eran: alcabalas, consumo de efectos extranjeros, impuesto a la moneda, renta del tabaco, papel sellado, derechos de ensaye y de metales preciosos, bienes vacantes y mostrencos, multas, media anata secular y eclesiástica, peajes, temporalidades, derechos de amortización, dos reales por tonelaje de buques extranjeros, nuevos diezmos, noveno y nuevo decimal, pensión a la Mitra de México, vacantes mayores y menores, espolios, oficios vendibles y renunciables, elaboración de la moneda y derechos accesorios y rentas de gallos.

[190] El Presupuesto incluía apartados referentes a: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los gastos comunes de Hacienda y al resumen.

de: “conocer en segunda y tercera instancia, en los casos que admitan esos recursos de las causas seguidas ante los juzgados de letras” (art. 8º), y que “para formar el Tribunal Supremo, elegirá el Congreso diez y seis individuos, los que se renovarán por mitad en los ocho primeros días de marzo del segundo año de cada bienio, saliendo la primera vez los ocho últimamente nombrados, y en lo sucesivo los más antiguos; pudiendo haber lugar a la reelección indefinidamente” (art. 10).[191]

El Gobernador Melchor Múzquiz, al acudir a la clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, indicó a los legisladores que “afortunadamente podéis dedicar a este objeto nuestras luces y saber, habiendo desaparecido del Estado la desoladora guerra que embargaba vuestras potencias y os robaba el precioso tiempo de vuestros trabajos y el Gobierno que tiene la mejor complacencia en haber cooperado en cuanto le ha sido loable a la pacificación del Estado, se había congratulado también de que esta Asamblea hubiera aprobado los gastos que presupuestó con el fin de afianzarla, recordando el principio de que para conservar la paz se debe estar preparado para la guerra” (Acta del 2 de junio de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 381).

En respuesta a dicho mensaje, el Vicepresidente del Congreso, Diputado Andrés Millán, señaló que la “Legislatura cierra sus sesiones con la dulce esperanza de que se afianzará la paz origen fecundísimo de bienes. Le aseguran este resultado tanto la precedencia del Ejecutivo en cuanto el buen juicio de los pueblos que amaestrados en la desgracia han llegado a conocer esta verdad” (Acta del 2 de junio de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 30, foja 383).

Se instaló la Diputación Permanente del Primer Receso del Congreso, bajo la Presidencia del diputado José Trinidad Montaño (Acta del 2 de junio de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 32, foja 1).

El 1 de julio la Diputación Permanente al acordar trasladar el Salón del Congreso a una casa que dejó el Gobernador, acordó que dicho “Salón no debe disponerse sino de un modo provisional mientras el Honorable Congreso determina definitivamente el local que debe ocupar”; que “se forme ante todas cosas y sobre la base asentada, el presupuesto de gastos”, y “que la Comisión de Policía se encargue de la ejecución de esta obra” (Acta del 1 de julio de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 32, foja 8).

[191] Esta reforma fue iniciada por el anterior Congreso, tal como lo disponía la Constitución Política.

El 5 de julio la Diputación Permanente aprobó el presupuesto para habilitar el Salón y la Secretaría del Congreso en una casa que dejó el Gobernador (Acta del 5 de julio de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 32, foja 9).

El 21 de julio el Congreso General dispuso que "los estados no pueden imponer a los géneros, frutos y efectos extranjeros otros derechos que los de consumo" (Decreto del 21 de julio de 1831. AHEM: G.G.G. vol. 65, exp. 143).

El 14 de agosto el Congreso reunido en Junta integró la Mesa Directiva del primer mes de su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado José Antonio de la Vega y la Vicepresidencia del Diputado Félix Ortiz. Nombró como secretarios propietarios a los diputados: José Trinidad Montaño y Luis Pérez Palacios y como secretarios suplentes a los diputados: Mucio Barquera y Juan Icaza (Acta del 14 de agosto de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 31, foja 8).

El 15 de agosto el Gobernador Melchor Múzquiz, al acudir a la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, señaló que "el Gobierno de la Unión, después de hablar de sus escaseces para no pagar al Estado una pequeña parte de la gran suma que le adeuda, recuerda el injusto decreto de treinta y cinco mil pesos que le impone el Gobierno arbitrario que ha pasado, y sostuvo la fuerza privando de este recurso que estaba en los intereses federales" (Acta del 15 de agosto de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 31, foja 3).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado José Antonio de la Vega, manifestó "los patrióticos sentimientos de que se halla animado el Congreso, quien se encargará de todos los asuntos que el Gobierno le recomienda, y de atender a la felicidad del Estado" (Acta del 15 de agosto de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 31, foja 4).

El 16 de agosto el Congreso aprobó la lista de comisiones formada nuevamente por la Comisión de Policía. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interior del Congreso, dichas comisiones eran: de Puntos Constitucionales, de Justicia, Negocios Eclesiásticos y Legislación, de Gobernación, de Hacienda, de Institución Pública, de Comercio, Agricultura, Minería e Industria, de Milicia, de Policía y de Peticiones, de

Corrección de Estilo, y de Poderes y Análisis (Acta del 16 de agosto de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 31, foja 9).[192]

El 31 de agosto el Congreso autorizó "al Gobierno para que convenga con el General de la Unión, sobre el modo y términos con que el Estado ha de percibir los derechos que le pertenezcan y que se hayan causado, o que se causasen en lo sucesivo, a virtud del art. 6º de la Ley de 19 de julio de 1828"[193] (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 221 del 31 de agosto de 1831: 173).

El Congreso determinó que "el fierro extraído de las minas del Estado será libre en éste de todo derecho, por el término de diez años" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 222 del 31 de agosto de 1831: 173).

El 1 de septiembre el Congreso inició la discusión del dictamen para expedir el Reglamento para el Tribunal Superior de Justicia (Acta del 1 de septiembre de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 31, foja 42).[194]

El 5 de septiembre el Congreso suprimió la plaza de Segundo Portero de su Secretaría (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 223 del 5 de septiembre de 1831: 175).

El 7 de septiembre el Congreso dispuso que sólo se proveerán en los tribunales superiores las plazas vacantes o por vacar de propiedad o provisionales que sean muy necesarias, mientras se concluye el arreglo del Tribunal Superior de Justicia (Acta del 7 de septiembre de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 31, foja 78).

El 9 de septiembre el Gobernador reglamentó lo dispuesto en el decreto número 222 del 1 de agosto de 1831, por el que el Congreso determinó que el fierro extraído de las minas del Estado sería libre de todo derecho por el término de diez años (Reglamento del Ejecutivo del 9 de septiembre de 1831. BJMLM: vol. 65, exp. 154).

El 15 de septiembre el Congreso nombró como Presidente de la Mesa Directiva del segundo mes de su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones al Diputado Mucio Barquera y como Vicepresidente al Diputado Benito Peña y Medina (Acta del 15 de septiembre de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 31, foja 88).

[192] En el acta no se especifica el nombre de las comisiones.
[193] Ley que permite la extracción de oro y plata en pasta.
[194] Este Reglamento no figura en la Colección de Decretos, por lo que se cree que fue vetado por el Titular del Ejecutivo del Estado.

El 22 de septiembre el Congreso inició la discusión de un dictamen, en el que se pedía el "establecimiento de una Dirección General de Rentas del Estado" (Acta del 22 de septiembre de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 31, foja 108).[195]

El 23 de septiembre el Congreso ordenó al Gobierno que ministrara "a los individuos de la Comisión de Policía de este Congreso un mil quinientos pesos, para el pago y reintegro al fondo de gastos de la Secretaría, de las cantidades que se hayan invertido tomadas de dicho fondo, y las que faltaren de gastar en la reposición y adorno del Salón de Sesiones y piezas de desahogo, comisiones, Secretaría y Archivo" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 224 del 23 de septiembre de 1831: 175).

El 3 de octubre el Congreso con el propósito de ahorrar gastos y obtener recursos extraordinarios, dispuso la venta de varias fincas que poseía el Estado en Tlalpan, así como la devolución de las máquinas de la extinta Casa de Moneda (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 225 del 3 de octubre de 1831: 175).

El 6 de octubre el Congreso determinó (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 226 del 6 de octubre de 1831: 175) que "solamente los decretos que contengan un interés común se imprimirán" (art. 1º); que "los demás decretos del Congreso sólo se comunicarán a quienes corresponda, publicándose en el lugar de residencia de los Supremos Poderes y en las cabeceras de Distrito" (art. 2º), y que "todas las comisiones del Congreso presentarán por artículo final de sus dictámenes, la declaración de ser de primera o segunda clase" (art. 3º).

El 8 de octubre el Congreso acordó que "los alcaldes conciliadores y sus suplentes, harán sus veces los alcaldes conciliadores del año próximo anterior, siempre que el impedimento no pase de dos meses, pues excediendo de este tiempo, la Junta Electoral procederá a nuevo nombramiento de estos funcionarios, conforme a los decretos de la materia" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 227 del 8 de octubre de 1831: 176).

El 12 de octubre el Congreso nombró como "Consejero de Gobierno del Estado al Ciudadano Lic. Antonio Madrid, en lugar del finado Ciudadano Ignacio Alvarado". También nombró "para igual cargo al Ciudadano Lic. José María Muñoz, mientras dure

[195] Este decreto no figura en la Colección de Decretos, posiblemente por haber sido observado por el Titular del Ejecutivo del Estado.

la comisión del Ciudadano Pedro Verdugo" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 228 del 12 de octubre de 1831: 177).

El 13 de octubre el Congreso dispuso que el niño Rafael Cabido continuara agraciado en el Instituto Literario (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 229 del 12 de octubre de 1831: 177).

El Congreso integró la Diputación Permanente de su Segundo Receso, presidida por el Diputado José María García Figueroa. Nombró como Secretario al Diputado Atanasio Saavedra, como miembros a los diputados: Victoriano Zimbrón, José María Jiménez y Pedro Pérez Alamillo y como Suplente al Diputado Andrés Millán (Acta del 13 de octubre de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 31, foja 246).

El 15 de octubre el Congreso acordó exonerar "a los habitantes de la Municipalidad de Tecpan, del pago de la contribución directa de todo el año de 31" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 230 del 15 de octubre de 1831: 177).

El Congreso aprobó el gasto hecho por el Administrador de Acabalas de Ixtlahuaca para pagar a varios dependientes (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 231 del 15 de octubre de 1831: 178).

El Congreso acordó que se pasen en data los gastos hechos por los administradores de la Aduana de Taxco (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 232 del 15 de octubre de 1831: 178).

El 16 de octubre el Congreso arregló los procedimientos en causas de comiso que debían seguir los jueces (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 233 del 16 de octubre de 1831: 178).

Se clausuró el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso sin que se registrara en el acta este acontecimiento y, por lo tanto, la intervención del Gobernador y del Presidente del Congreso, Diputado Mucio Barquera (Acta del 16 de octubre de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 31, foja 264).

Se instaló la Diputación Permanente del Segundo Receso del Congreso, bajo la Presidencia del Diputado José María García Figueroa (Acta del 16 de octubre de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 32, foja 21).

El 4 de noviembre el Congreso General dispuso que las legislaturas que no hayan dictado la ley que arregle el ejercicio de las canonjías tendrían 60 días para hacerlo, a fin de establecer en ellas que: "en las canonjías de oficio ejercerán los gobernadores esta exclusiva antes de los opositores", y que "concluidas éstas, los prelados y cabildos votarán una terna, de manera que el primer lugar recaiga en el individuo que obtenga la canonjía, y a los que fueren calificados por la mayoría de votos, los más aptos para el segundo y el tercero, les sirva esta calificación de mérito en su carrera sucesiva" (Decreto del 4 de noviembre de 1831. BJMLM: vol. 64, exp. 72).

El 18 de noviembre la Diputación Permanente convocó al Congreso a su Primer Periodo Extraordinario de Sesiones para el 9 de diciembre, el cual tenía por objeto: "deliberar lo conducente sobre la materia que contiene el decreto del General de la Unión de 4 del corriente, relativo a provisión de canonjías" (Poder Legislativo II, 2001. Convocatoria del 18 de noviembre de 1831: 180).[196]

El 21 de noviembre el Congreso General dispuso que "se formará un establecimiento científico que comprenda los tres ramos que le siguen: antigüedades, productos de industria, historia natural y jardín botánico" (Decreto del 21 de noviembre de 1831. BJMLM: vol. 67, exp. 36).

El 9 de diciembre el Congreso reunido en Junta integró la Mesa Directiva de su Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, presidida por el Diputado José María García Figueroa. Nombró como Vicepresidente al Diputado Atanasio Saavedra, como secretarios propietarios a los diputados: Pedro Pérez Alamillo y Diego Germán, y como secretarios suplentes a los diputados: José Ignacio González Caraalmuro y Mariano Esteva (Acta del 9 de diciembre de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 31, foja 273).

El Gobernador Melchor Múzquiz, al acudir a la apertura del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso, indicó que el Gobierno habría deseado que no se tuvieran estas sesiones, "porque está satisfecho de que el tiempo de receso apenas será bastante para meditar y preparar los trabajos de las próximas sesiones ordinarias, que serán muchos, atendidos los diversos asuntos considerables que quedaron pendientes en las sesiones que concluyeron" (Acta del 9 de diciembre de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 31, foja 274).

[196] Ese día se aprobó la minuta de dicho decreto (Acta del 18 de noviembre de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 32, foja 30).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado José María García Figueroa, señaló que el ceremonial augusto de este día: la gran pompa y aparato con que se abren los trabajos de una Academia, y lo que se observa en los actos todos en que se tiene por necesario captar la atención pública, dan un testimonio irrefutable de que el hombre ha de adentrarse con objetos los más sensibles. La Honorable Legislatura se halla al íntimo convencida de que el Ejecutivo abunda en estas ideas y sentimientos, y se honra por lo mismo de que los resultados serán prósperos" (Acta del 9 de diciembre de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 31, foja 275).

El 10 de diciembre el Congreso General permitió "la introducción de libros, sea cualquiera su origen y lugar de su impresión, quedando siempre vigentes las reglas a que está sujeta la introducción de estos efectos" (Decreto del 10 de diciembre de 1831. BJMLM: vol. 67, exp. 35).

El 20 de diciembre el Congreso aprobó el decreto por el que dio cumplimiento al decreto del Congreso General de 4 de noviembre relativo a provisión de canonjías, ya que en él se estableció que "el Venerable Cabildo Metropolitano, entretanto se da la Ley General de Arreglo de Patronato, pasará al Gobernador lista de los individuos en quienes piense hacer la provisión de las canonjías vacantes, poniendo cinco precisamente en cada una de las llamadas de gracia y en las de oposición el número total de los candidatos permitidos" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 234 del 20 de diciembre de 1831: 180).

El Congreso le otorgó al Teniente Gobernador Manuel Muria "una licencia hasta fin de febrero venidero, para pasar a México a curarse" (Acta del 20 de diciembre de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 31, foja 279).

El 21 de diciembre el Gobernador Melchor Múzquiz, al acudir a la clausura del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso, señaló que "las dulzuras y bienes de la paz se han hecho sentir en los corazones de nuestros conciudadanos y ello es debido al orden que se guarda en el Estado, y la manifestación de sus habitantes a no dejar que se les prive de sus bienes tan apreciables" (Acta del 21 de diciembre de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 31, foja 289).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado José Figueroa, señaló que este Órgano Legislativo "conservó al Estado las prerrogativas inherentes a

su soberanía, sin mancillar los derechos de la Iglesia, manteniendo con una justa conducta la concordia que debe reinar entre estas dos potestades" (Acta del 21 de diciembre de 1831. BJMLM. Colección de Actas: vol. 31, foja 290).

El 31 de enero de **1832** la Diputación Permanente acordó que "el Gobierno puede contestar al de Puebla, que esta Diputación Permanente está conforme en sentimientos con el Honorable Congreso de aquel Estado, por lo que respecta a la calificación que hizo del pronunciamiento del General Santa Anna" (Acta del 31 de enero de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 32, foja 41).

La Diputación Permanente acordó contestarle al Gobernador, que "ha visto con sumo aprecio las comunicaciones que ha dirigido al Gobierno Federal, sobre el pronunciamiento del General Santa Anna, y descansa en que continuara dictando las providencias más eficaces a fin de conservar la paz de que disfrutan los pueblos". De igual manera, dispuso "que el mismo Gobernador manifestara al Vicepresidente de la República que esta Corporación abunda en los sentimientos que expresan otras comunicaciones, y que reservando al Congreso decir lo que estime más justo y legal, sobre los actos del Ministerio, nunca podrá aprobar el grito de revolución dado por la Guarnición de Veracruz, el día 2 del presente mes, antes bien, se opondrá con todos sus esfuerzos, a todo el que tenga la osadía de atacar en cualquier sentido las leyes fundamentales de la Nación" (Acta del 31 de enero de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 32, foja 41).

El 9 de febrero el Supremo Gobierno reguló la portación de pensiones del sistema federal al estatal, como consecuencia del "ocurso promovido por Doña María Rita Figueroa y Doña Mariana Munguía, solicitando el correspondiente Montepío, como viuda e hija de Don José Carlos Munguía, Guardia Mayor que fue de la Aduana de Toluca". Fue así, como se dispuso "que se entreguen a la Hacienda Pública Federal los descuentos hechos a Munguía por el Estado de México, y lo mismo se haga por todos los estados respecto de los descuentos que hayan hecho a los empleados comprendidos en la Ley de 16 de noviembre de 1824" (Dublan II, 1876. Circular del 9 de febrero de 1832: 408).

El 11 de febrero el Congreso General dispuso que "cada uno de los Estados Unidos Mexicanos contribuirá para los gastos de la Federación, con el 30 por cada 100 del total producto de sus rentas públicas sin deducción alguna, entendiéndose de las establecidas y que se establecieren" con excepción del derecho de consumo sobre los

efectos extranjeros, y de “la renta del tabaco, de la que se cobrará el 30 por 100 sobre sus productos líquidos, después de rebajados el capital y los gastos de administración” (Decreto del 11 de febrero de 1832. AHEM: L.L.D.F. vol. 10, exp. 2).

El 22 de febrero el Congreso General dispuso que “está en las facultades del Supremo Gobierno expedir pasaportes y hacer salir del territorio de la República a cualquier extranjero, no naturalizado, cuya permanencia califique perjudicial al orden público, aún cuando aquel se haya introducido y establecido con las reglas prescritas en las leyes” (Decreto del 22 de febrero de 1832. BJMLM: vol. 67, exp. 29).

El Congreso General dispuso que “el gobierno cerrará para el comercio extranjero, y el de escala y cabotaje, cualquier puerto de la República, que esté o en lo sucesivo estuviere ocupado por fuerzas que no le obedezcan, prefijando en cada caso el plazo que le parezca oportuno, y tomando las medidas convenientes para que llegue a noticia de los capitanes de los buques que se dirijan a aquel puerto” (Decreto del 22 de febrero de 1832. BJMLM: vol. 67, exp. 31).

El Congreso General dispuso que “en caso de un pronunciamiento en cualquier punto de la República, los sustraídos de la obediencia del gobierno, serán responsables en mancomún, in solidum, con sus bienes propios, a las cantidades que por sí o por sus jefes tomasen violentamente, ya sean pertenecientes a particulares, a corporaciones, a los estados o a la hacienda pública de la Federación, perdiendo al mismo tiempo sus honores y empleos” (Decreto del 22 de febrero de 1832. BJMLM: vol. 67, exp. 32).

El 2 de marzo el Congreso reunido en Junta integró la Mesa Directiva del primer mes de su Tercer Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado José Trinidad Montaño y la Vicepresidencia del Diputado Pedro Pérez Alamillo. Nombró para todo el periodo ordinario de sesiones como secretarios propietarios a los diputados: Juan Icaza y José María Jiménez y como secretarios suplentes a los diputados: Mucio Barquera y Andrés Millán (Acta del 2 de marzo de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 1).

El Gobernador Melchor Múzquiz, al acudir a la apertura del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, señaló que “ante las difíciles circunstancias en que se ha puesto a la República, el patriotismo y prudencia del Congreso deben influir mucho a sustraerla de los graves males que ha empezado a sufrir” (Acta del 2 de marzo de 1832. BJMLM. Colección de actas: vol. 34, foja 3).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado José Trinidad Montaño, indicó que esta "Asamblea procurará la felicidad de los pueblos del Estado, contando siempre con la eficaz cooperación del Ejecutivo, a cuya vigilancia y cuidado están encomendados" (Acta del 2 de marzo de 1832. BJMLM. Colección de actas: vol. 34, foja 4).

El 3 de marzo el Congreso aprobó "la lista de las comisiones que han de despachar los asuntos de sus ramos" (Acta del 3 de marzo de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 7).[197]

El 5 de marzo el Congreso aceptó la renuncia al empleo de Ministro del Supremo Tribunal de Justicia que hizo el Licenciado Vicente Güido de Güido (Acta del 5 de marzo de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 8).

El 6 de marzo el Congreso dispuso "que el reloj cedido a la Ciudad de Tlalpan, por el decreto número 111 del 1º de junio de 1830, quedara a beneficio de la Ciudad de Toluca" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 235 del 6 de marzo de 1832: 181).

El 8 de marzo el Congreso nombró como integrantes de la Sección de Gran Jurado a los diputados: Benito Peña y Medina, Juan Antonio Arce, Mucio Barquera, José Ignacio González Caraalmuro, Atanasio Saavedra y José María García Figueroa (Acta del 8 de marzo de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 11).

El 9 de marzo la Comisión de Biblioteca presentó al Congreso las siguientes proposiciones (Proposiciones del 9 de marzo de 1832. BJMLM: vol. 64, exp. 83):

"1ª.- La Biblioteca del Estado quedará desde ahora bajo la inmediata inspección del Gobierno.

2ª.- El mismo Gobierno dictará las reglas que hayan de observarse para el orden interior de dicho establecimiento.

3ª.- Todo funcionario público en el Estado inclusos los de elección popular, que perciba del erario público más de mil pesos anuales, donará una obra a la Biblioteca del mismo al entrar en el ejercicio de su encargo.

[197] En el acta no se especifica el nombre de las comisiones.

4ª.- Lo prevenido en el artículo anterior comprende desde ahora a los actuales funcionarios que disfruten de mil pesos para arriba.

5º.- En cada caso que ocurra el Gobierno pasará al Bibliotecario una noticia de las personas de nueva elección o nombramiento a fin de que recoja en ellas las obras correspondientes, dando con oportunidad aviso al interesado.

6º.- El Bibliotecario llevará además del índice ordinario, otro en el que consulten las obras que hayan dado las personas de que habla en el artículo tercero con expresión de los nombres sin estar y de sus respectivas comisiones o ejemplares".

El Congreso General derogó "la ley de 19 de julio de 1828, que permite la extracción de oro y plata en pasta" (Decreto del 9 de marzo de 1832. BJMLM: vol. 67, exp. 45).

El 13 de marzo el Congreso inició el análisis del dictamen sobre la Memoria de Gobierno del año anterior (Acta del 13 de marzo de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 26).

El 14 de marzo el Gobierno Federal determinó que "el Supremo Gobierno de la Federación, como protector de los establecimientos científicos, goza del derecho de preferencia por el tanto para comprar las bellas producciones de arte y de ciencias que se descubran en terrenos de particulares, en concurrencia de otros compradores" (Decreto del 14 de marzo de 1832. BJMLM: vol. 69, exp. 126).

El 15 de marzo acudió al Congreso el Consejero José María Muñoz a leer la Memoria de Gobierno (Acta del 15 de marzo de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 39).[198]

El Gobernador Melchor Múzquiz en su Memoria de Gobierno, indicó que iniciarían los trabajos con el Distrito Federal para delimitar sus territorios, que el Gobierno del Estado de Querétaro pedía la incorporación a su jurisdicción de los pueblos de Pacula y Xiliapan, que la tranquilidad volvía a la Entidad con la conclusión de la revolución del sur, que existían continuas evasiones de criminales de las cárceles, que se hacía necesario aumentar una dotación para gastos de escritorio de los subprefectos, que se

[198] La lectura de la Memoria continuó los días 16 (Acta del 16 de marzo de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 40) y 17 de marzo (Acta del 17 de marzo de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 48).

continuaba con el cuidado de los caminos, que ya se dotaba a los preceptores de las escuelas de primeras letras de sueldos proporcionados de los fondos municipales, que infructuosamente se trató de integrar un índice de todas las disposiciones de Hacienda desde la época colonial, que el Ejecutivo había propuesto al Congreso la formación de juntas de letrados para integrar un Código Criminal, y que las finanzas se verían afectadas ante "el reciente decreto del Congreso General expedido el 11 de febrero de 832, en el cual se obliga al Estado a contribuir cada mes para los gastos federales con la cantidad de 10,000 pesos" (Poder Legislativo, Memoria, 1832: 13).

Entre los anexos que distinguen a esta memoria con relación a las anteriores están los referentes: al estado de los ingresos, gastos y productos líquidos que ha habido en las administraciones de peaje,[199] el estado de los trabajos que manifestaba la Contaduría General del Estado y la "noticia de las cantidades distribuidas entre viudas, huérfanos, padres, madres y hermanos que perdieron sus deudos en la revolución del sur en los pueblos de las prefecturas de Taxco y Acapulco, y fueron donadas por varios ciudadanos del Estado a excitación de este Gobierno".

El 17 de marzo el Congreso tomó conocimiento de un oficio del Teniente Gobernador Manuel Muria, en donde informaba que funcionaba de Gobernador por enfermedad del Gobernador Melchor Múzquiz (Acta del 17 de marzo de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 48).[200]

El 20 de marzo el Congreso tomó conocimiento de un comunicado del Gobernador, en donde indicó que "este Gobierno ha tomado las medidas conducentes a fin de que no falte la guardia que debe custodiar el Palacio de ese Honorable Congreso" (Comunicado del Gobernador del 9 de marzo de 1832. BJMLM: vol. 67, exp. 47).

El 23 de marzo el Congreso dispuso que "los géneros, frutos, efectos y licores extranjeros no pagarán en el Estado otros derechos que el tres por ciento prevenido por el decreto del 22 de diciembre de 1824, y el dos que establece el de 22 de agosto de 1829" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 236 del 23 de marzo de 1832: 181).

[199] Se cobraba en las garitas de: Dos Caminos, Cerro Gordo, Santa Úrsula, Buenavista, Tenango y Huitzilac.
[200] El 26 de abril seguía funcionado como Gobernador Manuel Muria (Acta del 25 de abril de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 145).

El 27 de marzo el Congreso tomó conocimiento de la reincorporación del Gobernador Melchor Múzquiz a sus funciones, al dar parte de la lectura de dos oficios (Acta del 27 de marzo de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 77).

El 28 de marzo el Congreso tomó conocimiento de un oficio del Consejero José María Muñoz de Cote que funcionaba de Gobernador por enfermedad del Teniente Gobernador Manuel Muria y del Gobernador Melchor Múzquiz (Acta del 28 de marzo de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 77).[201]

El 2 de abril el Congreso nombró como Presidente de la Mesa Directiva del segundo mes de su Tercer Periodo Ordinario de Sesiones al Diputado Francisco Valdovinos y como Vicepresidente al Diputado Félix Ortiz (Acta del 2 de abril de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 105).

El 5 de abril el Congreso autorizó al Gobierno para que invirtiera mil pesos, "con el fin de que invite a Mister Bristow, u otro de igual o mayor habilidad, a que venga a esta Ciudad y enseñe, según su método, a los preceptores de primeras letras que el Gobierno estime capaces de propagar aquel, dejándolo en libertad para que admita discípulos particulares" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 237 del 5 de abril de 1832: 182).

El 25 de abril el Congreso bajo ciertas excepciones dispuso que "quedan libres de las penas a que estaban sujetos por las leyes comunes, todos los mexicanos por nacimiento que hayan incurrido en delitos políticos, en cualquier parte de la República" (Decreto del 25 de abril de 1832. BJMLM: vol. 67, exp. 47).

El 26 de abril el Congreso acordó que "el producto de cada peaje se invertirá precisamente en su objeto, y cualquiera otro que se haga de aquel, aun cuando sea de utilidad pública, y en calidad de reintegro, será bastante para que no se pase en data, y además incurrirá el empleado que la ministre en la pena de peculado" (Acta del 26 de abril de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 145).[202]

[201] El 10 de abril seguía funcionado como Gobernador el Consejero José María Muñoz de Cote (Acta del 10 de abril de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 132).
[202] El 7 de mayo de 1832 el Congreso acordó que este decreto no se comunicara al Gobierno, ya que al Gobernador se le había autorizado "gastar lo que convenga en mantener el orden en el Estado" (Acta del 7 de mayo de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 154).

El 27 de abril el Congreso permitió al ex factor de tabacos de Texcoco Don Ramón Rayón, el que presente las cuentas en los términos que propuso y admitió el Gobierno (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 238 del 27 de abril de 1832: 183).

El Congreso ante la sublevación de la Guarnición de Toluca, dispuso que se mantenía "en su resolución de sostener en todo caso la Constitución y leyes", que desaprobaba "el pronunciamiento de la Guarnición de esta Capital", y que confiaba en "que el Ejecutivo tomará todas las providencias necesarias para conservar el orden en el Estado, la Constitución y leyes" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 239 del 27 de abril de 1832: 183).

El Congreso facultó "al Gobernador para levantar y reunir las fuerzas que juzgue convenientes, y hacer todos los gastos necesarios" para repeler la sublevación de la Guarnición de Toluca (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 240 del 27 de abril de 1832: 183).

El 29 de abril el Congreso manifestó que había "visto con sumo aprecio la conducta del Gobernador, Consejo, autoridades y tropa que manteniéndose fieles a la ley, en las críticas circunstancias, en que se ha visto el Estado, han cumplido con su deber, y confía en el patriotismo y honradez del Gobernador que conservará en el Estado sus sentimientos, que han sido conformes con los del Congreso" (Acta del 29 de abril de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 146).

El 2 de mayo el Congreso tomó conocimiento de la reincorporación del Gobernador Melchor Múzquiz a sus funciones, al dar parte de la lectura de un oficio (Acta del 2 de mayo de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 147).

El Congreso nombró como Presidente de la Mesa Directiva del tercer mes de su Tercer Periodo Ordinario de Sesiones al Diputado José María Jiménez y como Vicepresidente al Diputado Juan Antonio Arce (Acta del 2 de mayo de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 147).

El 7 de mayo el Congreso General autorizó al Gobierno Federal para "ejecutar las obras necesarias para el desagüe de las lagunas del Valle de México", asignándole para tal objeto "una cantidad anual de cincuenta mil pesos que será dotada en el presupuesto hasta la conclusión de la obra" (Decreto del 7 de mayo de 1832. AHEM: L.L.D.F. vol. 10, exp. 20).

El 8 de mayo el Congreso tomó conocimiento de dos oficios del Consejero José María Muñoz de Cote que funcionaba de Gobernador, por enfermedad del Gobernador Melchor Múzquiz (Acta del 8 de mayo de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 159).[203]

El 9 de mayo el Congreso aprobó "el arrendamiento que ha celebrado el Gobierno de la Imprenta del Estado, con el Ciudadano Coronel Alejandro Valdés" (Proposición del 9 de mayo de 1832. BJMLM: vol. 67, exp. 48).

El 14 de mayo ante la demanda de responsabilidad formulada por el Diputado Federal Carlos María de Bustamante en contra del Gobernador por los arreglos con los insurrectos, Melchor Múzquiz publicó un escrito, en el que una vez narrados los acontecimientos en Toluca, indicó haber "estado dos veces con el Excelentísimo Vicepresidente, a fin de que admitiese la renuncia de los señores secretarios; más su Excelencia, después de exponerme varias razones, me ha contestado que ahora no puede concederse; pero que se hará otra vez, que no está muy distante; aprobando mi conducta y la del Sr. Arista" (Informe de la conducta del General Múzquiz en los acontecimientos de Toluca del 14 de mayo de 1832. AHEM: G.G.G. vol. 30, exp. 2).

El 18 de mayo el Congreso tomó conocimiento de la reincorporación del Gobernador Melchor Múzquiz a sus funciones, al dar parte de la lectura de un oficio (Acta del 18 de mayo de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 193).

El Congreso dispuso que en lo sucesivo "la Biblioteca del Estado, quedará desde ahora bajo la inmediata inspección del Gobierno, quien dictará las reglas que deban observarse para el orden interior de dicho establecimiento" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 241 del 18 de mayo de 1832: 183).

El Congreso General dispuso que será libre de porte "la correspondencia de los secretarios de las cámaras del Congreso General con las legislaturas, diputaciones permanentes y gobernadores de los estados" (Decreto del 18 de mayo de 1832. BJMLM: vol. 69 Bis, exp. 183).

El 19 de mayo el Congreso hizo "extensivo el decreto de 5 del mes anterior, en el que se faculta al Gobierno para gastar mil pesos en la propagación del sistema anti-

[203] El 17 de mayo seguía funcionado como Gobernador el Consejero José María Muñoz de Cote (Acta del 17 de mayo de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 191).

angular de escritura y al de lectura, en un corto número de lecciones, pudiendo invertir en ambos objetos hasta la cantidad de tres mil pesos" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 242 del 19 de mayo de 1832: 184).

El 24 de mayo el Congreso General dispuso que "los estados podrán imponer para gastos municipales un uno por ciento de derecho de consumo a los efectos extranjeros" (Decreto del 24 de mayo de 1832. AHEM: L.L.D.F. vol. 10, exp. 33).

El 25 de mayo el Congreso General declaró que "el decreto de la Legislatura del Estado de México número 7 de fecha 22 de marzo de 1827,[204] es contrario al artículo 30 del Acta Constitutiva, a la parte tercera del artículo 161 de la Constitución Federal, y al artículo 9 del decreto de 4 de agosto de 1824" (Decreto del 25 de mayo de 1832. AHEM: L.L.D.F. vol. 10, exp. 25).

El 26 de mayo el Congreso dispuso que "el Gobierno podrá invertir hasta la cantidad de un mil quinientos pesos anuales en el cobro de las libranzas y otros caudales pertenecientes al Estado, que se recaudan en México", y que "este cobro se hará bajo la inmediata responsabilidad del Tesorero, el cual nombrará, con la aprobación del Gobierno, y podrá resolver a su arbitrio la persona que ha de encargarse de aquella comisión, exigiendo a éste las cauciones que tenga por conveniente" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 243 del 26 de mayo de 1832:184).

El 29 de mayo el Congreso aprobó el Presupuesto de Gastos del Estado de México para el Año Económico del 2 de junio de 1832 al 2 de junio de 1833,[205] en el cual se seguían manteniendo sin variación las contribuciones y las percepciones del personal de los poderes (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 244 del 29 de mayo de 1832: 184).[206]

---

[204] Declaraba pertenecientes al Estado todos los bienes que poseían en el mismo los hospicios destinados para las misiones de Filipinas.

[205] El Presupuesto incluía apartados referentes a: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los gastos comunes de Hacienda y al resumen.

[206] Los 21 diputados percibían anualmente $3,000.00, el Redactor $1,600.00 y el Oficial Mayor $1,500.00. Las contribuciones eran: alcabalas, consumo de efectos extranjeros, impuesto a la moneda, renta del tabaco, papel sellado, derechos de ensaye y de metales preciosos, bienes vacantes y mostrencos, multas, media anata secular y eclesiástica, peajes, temporalidades, derechos de amortización, dos reales por tonelaje de buques extranjeros, nuevos diezmos, noveno y nuevo decimal, pensión a la Mitra de México, vacantes mayores y menores, espolios, oficios vendibles y renunciables, elaboración de la moneda y derechos accesorios y rentas de gallos.

Se contempló una reducción de tres mil pesos por concepto de impresiones a cargo del Congreso y se precisó que todas las cantidades que formaran los caudales del Estado ingresaran a la Tesorería General, "y que el Estado no reconoce los gastos aún interinos que no estuvieren comprendidos en este Presupuesto, a excepción de los que haga el Gobierno mientras duren las circunstancias de la revolución".

El Congreso autorizó al Gobierno para que gastara recursos en las funciones de la Iglesia (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 245 del 29 de mayo de 1832: 190).

El Congreso determinó (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 246 del 29 de mayo de 1832: 190) que "el Tesorero General remitirá al Congreso, por conducto del Gobierno, la cuenta general de cada año en principios de marzo" (art. 1); que "la calificación de que habla la parte 10 del artículo 32 de la Constitución del Estado, se verificará sobre la legalidad de la inversión en general de los caudales del mismo, salvo la glosa que compete a la Contaduría, conforme al artículo 226" (art. 2), y que "hecha la calificación se remitirá la cuenta por el mismo conducto del Gobierno a la Contaduría, y verificada la glosa volverá al Congreso para los objetos que convengan, oída la Comisión de Hacienda" (art. 3).

El Congreso acordó que "el poseedor actual de bienes que estuvieren vinculados, podrá enajenar los que equivalgan a la mitad o menos de su valor, sin previa tasación de todos ello, obteniendo el consentimiento del siguiente llamado en orden" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 247 del 29 de mayo de 1832: 190).

El 30 de mayo el Congreso integró la Diputación Permanente de su Tercer Receso, presidida por el Diputado José Trinidad Montaño. Nombró como Secretario al Diputado Mucio Barquera, como miembros a los diputados: Pedro Pérez Alamillo, Francisco Valdovinos y Luis Pérez Palacios y como Suplente al Diputado José Antonio de la Vega (Acta del 30 de mayo de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 249).

El 31 de mayo el Congreso facultó "al Gobierno para invertir hasta mil pesos en abrir pozos artesianos donde lo crea conveniente" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 248 del 31 de mayo de 1832: 191).

El Congreso suprimió "los quinientos pesos que se libraban al Tesorero General en los años anteriores para pago de moneda falsa y falsas cuentas" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 249 del 31 de mayo de 1832: 192).

El 2 de junio el Congreso le concedió una pensión de mil pesos anuales al Administrador de Rentas de Texcoco, Ciudadano José Ignacio Peña Roja (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 250 del 2 de junio de 1832: 192).

El Congreso nombró a José Domingo Rus como Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y como magistrados de dicho Tribunal a: Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, Mariano Esteva, José María Esquivel, Pedro Jove, Francisco Ruano, José María Rosas, Mariano Buen Abad y Antonio Barquera y como fiscales a: Juan Wenceslao Barquera y José María Gallegos (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 251 del 2 de junio de 1832: 192).

El Congreso acordó (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 252 del 2 de junio de 1832: 193) que "para la próxima elección de diputados a los congresos general y del Estado, se celebrarán las juntas municipales conforme a la Constitución el domingo 5 de agosto: las de partido el 26 del mismo, y el 7 y 8 de octubre la general" (art 1º); que "se nombrarán para el Congreso General doce diputados propietarios y cuatro suplentes y para el Estado once propietarios y siete suplentes" (art. 2º), y que "el 2 de marzo de 833, se renovará por mitad el Congreso del Estado, cesando los once diputados más antiguos" (art. 3º).

El Congreso indultó a: "José María y Francisco Brito, Francisco Gordillo, Miguel Pérez y Matías Guadarrama, de la pena a que pudieran ser condenados definitivamente por los homicidios de Macedonio Guzmán y Juan Martínez" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 253 del 2 de junio de 1832: 193).

El Congreso determinó que "en los casos de discordia en las votaciones de los tribunales, se llamaran uno por uno a los suplentes que fueren necesarios, hasta que resulte mayoría de votos, con relación al número accidental de que conste la sala (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 254 del 2 de junio de 1832: 194).

El Gobernador Melchor Múzquiz, al acudir a la clausura del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, señaló que "habéis presenciado un suceso en esta Capital que pudo haber cambiado no solamente aquella sino también haber hecho desaparecer a la República, y con ésta en que la Nación se ha sabido colocar después de millares de trabajos y de millares de víctimas que patrióticamente se han sacrificado para ponernos entre las naciones libres e independientes, y hoy que van a cerrar vuestras sesiones sin llevar el consuelo que la paz quede restituida, aunque en

verdad que los negocios han cambiado su aspecto, y es probable que las calamidades se disminuyan, sin desaparecer del todo" (Acta del 2 de junio de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 263).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado José María Jiménez, señaló que dicha Asamblea arrastrada "por la fuerza del honor y del deber, se ocupó en la discusión de varios asuntos graves e importantes a la pública felicidad. El análisis a la Memoria que presentó el Gobierno en el año próximo anterior: el Presupuesto General de Gastos, con la resolución de otros puntos interesantes a la Hacienda del Estado" (Acta del 2 de junio de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 264).

Se instaló la Diputación Permanente del Tercer Receso del Congreso, bajo la Presidencia del Diputado José Trinidad Montaño (Acta del 2 de junio de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 33, foja 2).

El 8 de junio la Diputación Permanente convocó al Congreso a su Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones para el 10 del presente, el cual tenía por objeto: "resolver sobre el expediente promovido por el Gobierno acerca de la creación y organización de una fuerza de seguridad pública en el Estado", "determinar los medios de auxiliar al Gobierno General para contener la actual Revolución", y "tomar en consideración los negocios urgentes relativos directamente a la tranquilidad pública de la Federación y el Estado, que el Gobierno proponga o el Congreso estime tales" (Poder Legislativo II, 2001. Convocatoria del 8 de junio de 1832: 194).

El 10 de junio el Congreso reunido en Junta integró la Mesa Directiva de su Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, presidida por el Diputado Félix Ortiz. Nombró como Vicepresidente al Diputado Victoriano Zimbrón, como secretarios propietarios a los diputados: Juan Ceballos y Pedro Pérez Alamillo y como secretarios suplentes a los diputados: Francisco Ortega y Francisco Valdovinos (Acta del 10 de junio de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 267).

El Gobernador Melchor Múzquiz, al acudir a la apertura del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso, indicó a los diputados "que la Carta Fundamental de la República y la Constitución del Estado han imprevisto la obligación de sostener al Supremo Gobierno General: dictar algunos acuerdos para dar cumplimiento a aquella, y dictar algunas medidas en obsequio de llevar al cabo los

derechos que se han impuesto los mismos habitantes del Estado, son los objetos que os han reunido en sesiones extraordinarias inevitables" (Acta del 10 de junio de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 267).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Félix Ortiz, señaló que "esta Soberana Asamblea tiene los más ardientes deseos de contribuir al bien de sus conciudadanos. En consecuencia, se esforzará cuanto esté de su parte a dar el lleno debido a los puntos que contiene el decreto, por el que ha sido convocada: si logra satisfacer esta obligación a cuanto a sus comitentes, tendrá el dulce placer de haber manifestado que el único objeto que la guía en sus operaciones, es el bien y felicidad común de los pueblos que representa" (Acta del 10 de junio de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 34, foja 268).

El 20 de junio el Portero del Palacio del Congreso reportó un incidente ocurrido con el Sota Alcalde de la Cárcel de Toluca, al argumentar que en la madrugada de ese día se introdujo a la azotea del Palacio sin autorización, argumentado que "quería sacar unos caballos que están en la caballería del local perteneciente al Ayuntamiento, y requerido prudentemente por este procedimiento practicado en el Palacio se expresó en términos despectivos a la Soberanía, disponiendo además poner un vigilante en la puerta del zaguán que impidiera sacar agua al vecindario, como de hecho se impidió, rompiendo el cántaro a una mujer" (Reporte del 20 de junio de 1832. BJMLM: vol. 69, exp. 140).

El 30 de junio el Congreso expidió un decreto, en el que se indicó que "todo el que tenga alguna propiedad o giro, cuyo capital se estimase de quinientos pesos arriba, prestará lo correspondiente al valor total a razón de dos reales por cada cien pesos"; que tenían "los funcionarios y empleados que disfrutan sueldo anual de quinientos pesos arriba, la obligación de prestar lo que corresponde a un peso, rebajándoles por mitad en los meses consecutivos"; y que "el Gobernador excitará al Venerable Cabildo para que con vista de los datos que tenga del rendimiento de los curatos, exija a los párrocos un préstamo correspondiente a la base puesta para los funcionarios y empleados, y para que por sí haga el mayor posible, debiéndose enterarse ambos préstamos en dos meses consecutivos". Con estas medidas se facultó "al Gobernador para multar por sí o sus agentes hasta en cien pesos a los que no cumplan con el deber que les impone esta ley", y a que éste dé "a nombre del Estado al Gobierno General tres cuartas partes del monto total del préstamo, con tal que aquellos no

excedan la cantidad de cien mil pesos; y del resto tomará lo necesario que necesite" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 255 del 30 de junio de 1832: 194).

El Congreso facultó "al Gobernador para que arregle discrecionalmente la Milicia Cívica y el cobro de la contribución de exentos" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 256 del 30 de junio de 1832: 194).

El 3 de julio el Gobernador reglamentó lo dispuesto en el decreto número 256 del 30 de junio de 1832, para facilitar la operación de la Milicia Cívica y el cobro de la contribución de exentos (Poder Legislativo II, 2001. Decreto del Ejecutivo del 3 de julio de 1832: 197).

El 4 de julio el Congreso autorizó a "la Diputación Permanente y al Gobierno, para que procediendo de acuerdo, puedan dictar todas las medidas y providencias que juzguen necesarias para la tranquilidad pública, en circunstancias urgentes y extraordinarias" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 257 del 4 de julio de 1832: 199).

El Gobernador Melchor Múzquiz, al acudir a la clausura del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso, señaló que "la revolución, que desgraciadamente afligía a nuestro País, ha desaparecido, quedando únicamente los sinsabores consiguientes a las mudanzas repentinas de esta clase; más la Providencia que nos guio hasta conseguir nuestra adorada emancipación de la España, no nos ha de abandonar en la pequeña agitación, en la que nos encontramos, y de la que saldremos probablemente muy breve" (Acta del 4 de julio de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 33, foja 297).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Félix Ortiz, señaló que la "Legislatura deseosa de cumplir con la obligación que le impone la Constitución, no ha demorado una reunión a las sesiones extraordinarias que cierra hoy, y a que ha sido convocado por el decreto del 8 anterior. Examinando los puntos contenidos en dicha convocatoria, se ha esforzado hasta donde lo ha permitido la capacidad de sus individuos a la pronta expedición de las medidas legislativas que necesitaba el Ejecutivo, para conservar la tranquilidad del Estado, y los medios con que poder auxiliar al de la Unión" (Acta del 4 de julio de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 33, foja 298).

El 24 de julio la Diputación Permanente acordó que su Secretario "nombrara un Oficial de la Secretaría, para que visite la Oficina del Archivo, y si resultare no arreglado, procederá a verificarlo, nombrando a un individuo que desempeñe esta Comisión, en consorcio del Archivero" (Acta del 24 de julio de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 33, foja 10).

El 7 de agosto el Vicepresidente Anastasio Bustamante dejó la Titularidad del Poder Ejecutivo Federal, para combatir una revuelta armada en Veracruz (Decreto del 7 de agosto de 1832. AHEM: L.L.D.F. vol. 10, exp. 37).

En la Cámara de Diputados del Congreso General fue electo el Gobernador Melchor Múzquiz como Presidente Interino de la República por 15 votos de los estados y dos en contra, de los cuales uno fue para Nicolás Bravo y otro para Juan Ignacio Godoy (Decreto del 7 de agosto de 1832. AHEM: L.L.D.F. vol. 10, exp. 37).

El 9 de agosto la Diputación Permanente le concedió una licencia al Gobernador Melchor Múzquiz para separarse de su cargo (Acuerdo del 9 de agosto de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 33, foja 15), por lo que en esa fecha Manuel Muria funcionó como Gobernador en su calidad de Teniente Gobernador.

El 14 de agosto el Congreso reunido en Junta integró la Mesa Directiva del primer mes de su Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado Luis Pérez Palacios y la Vicepresiencia del Diputado Atanasio Saavedra. Nombró para todo el periodo ordinario de sesiones como secretarios propietarios a los diputados: Diego Germán y Juan Antonio Arce y como secretarios suplentes a los diputados: Mucio Barquera y Benito Peña y Medina (Acta del 14 de agosto de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 35, foja 2).

El 15 de agosto el Teniente Gobernador Manuel Muria, al acudir a la apertura del Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, señaló que "si en todo tiempo ha sido importante y grata en los países libres la reunión de sus cuerpos representativos, la que se verifica este día debe ser muy plausible para el Estado de México, porque en ella se le anuncia la revolución de asuntos de magnitud que envuelven nada menos que la conservación de los principios constitucionales, en que haya cimentada su independencia y soberanía" (Acta del 15 de agosto de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 35, foja 3).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Luis Pérez Palacios, señaló que “solo la ley y la justicia han sido y serán siempre la gema de sus operaciones, su conducta loable le harán derrotar toda clase de peligros aún con el riesgo de su existencia, y la confianza de la cooperación del Ejecutivo no le dejan duda para asegurar a sus comitentes, que el respeto a las autoridades legítimamente constituidas, la unión y decisión a formar la columna sostenedora de nuestras instituciones, nos salvan del precipicio a que estamos expuestos” (Acta del 15 de agosto de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 35, foja 4).

El 16 de agosto el Congreso aprobó la lista de integrantes de las comisiones (Acta del 16 de agosto de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 35, foja 10).[207]

El Congreso integró una segunda Comisión de Hacienda (Acta del 16 de agosto de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 35, foja 10).

El 22 de agosto el Congreso dispuso que “el Gobierno de acuerdo con el Consejo, dispondrá que la apertura y reposición de los caminos del Estado se verifique formándose provisionalmente el presupuesto de su importe y convocándose empresarios, debiéndose rematar con el que ofrezca mayores ventajas al Estado, y en caso de que ninguna propuesta la ofrezca, procederá el Gobierno a las obras que fueran necesarias” (Acta del 22 de agosto de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 35, foja 20).

El 31 de agosto el Congreso le aceptó a Agustín Gómez Eguiarte la renuncia que hizo al cargo de Consejero del Gobierno del Estado (Acta del 31 de agosto de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 35, foja 28).

El 1 de septiembre el Congreso eligió como individuos para ocupar los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República a Nicolás Bravo y a Anastasio Bustamante, respectivamente (Acta del 1 de septiembre de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 35, foja 29).[208]

[207] En el acta no se señala el nombre de las comisiones.
[208] El artículo 79 de la Constitución de la República señalaba que “el día 1º de septiembre del año próximo anterior a aquel en que deba el nuevo Presidente entrar en el ejercicio de sus atribuciones, la Legislatura de cada Estado elegirá á mayoría absoluta de votos dos individuos, de los cuales uno por lo menos no será vecino del Estado que elije”.

El Congreso nombró como Senador del Estado al Congreso de la Unión a Alonso Fernández (Acta del 1 de septiembre de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 35, foja 29).[209]

El 3 de septiembre el Congreso inició la discusión del dictamen correspondiente al análisis de la Memoria de Gobierno (Acta del 3 de septiembre de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 35, foja 31).

El 10 de septiembre el Congreso determinó que "las facultades concedidas a la Diputación Permanente, y al Gobierno, en decreto de 4 de julio de este año,[210] se conceden al Gobernador, poniéndose de acuerdo con el Consejo, siempre que lo permitan las circunstancias" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 258 del 10 de septiembre de 1832: 199).

El 15 de septiembre el Congreso nombró como Presidente de la Mesa Directiva del segundo mes de su Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones al Diputado Juan Antonio Arce y como Vicepresidente al Diputado Juan Icaza (Acta del 15 de septiembre de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 35, foja 66).

El 22 de septiembre el Congreso acordó que "el pulque gordo o tlachique pagara en lo sucesivo tres granos por arroba, en lugar de los cuatro que le señalaba la ley número 151" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 259 del 22 de septiembre de 1832: 200).

El Congreso acordó que "en vista del triunfo conseguido por la Constitución y las leyes sobre el Ejército Dictador de estas indestructibles bases, se libre orden al Gobierno, para que haga que mañana se celebre una solemne misa con asistencia del Gobierno y autoridades, en acción de gracias al Todopoderoso que ha librado a la República de la más espantosa dictadura" (Acta del 22 de septiembre de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 35, foja 80).

[209] El artículo 32 de la Constitución de la República señalaba que "la elección periódica de senadores se hará en todos los estados un mismo día, que será el 1º de septiembre próximo a la renovación por mitad de aquellos".
[210] Este decreto facultaba al Gobierno y a la Diputación Permanente a: "dictar todas las medidas y providencias que juzguen necesarias para la tranquilidad pública, en circunstancias urgentes y extraordinarias" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 257 del 4 de julio de 1832: 199).

El 25 de septiembre el Congreso habilitó al Licenciado Vicente del Pliélago para que pudiera ejercer la Abogacía en los tribunales del Estado (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 260 del 25 de septiembre de 1832: 200).

El 1 de octubre el Congreso nombró a Manuel Muria como Teniente Gobernador para el cuatrienio que comenzaría el 12 de marzo próximo, así como a José María Muñoz de Cote y Luis Velázquez de la Cadena para consejeros del Gobierno por el mismo periodo (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 261 del 1 de octubre de 1832: 200).

El 3 de octubre el Congreso acordó que se entregaran "a los apoderados de los misioneros de Filipinas, los bienes ocupados en virtud del decreto número 7 del 22 de marzo de 1827" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 262 del 3 de octubre de 1832: 201).

El 8 de octubre el Congreso nombró a Luis Velázquez de la Cadena como Consejero del Gobierno ante la renuncia de Agustín Gómez Eguiarte (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 263 del 8 de octubre de 1832: 201).

El Congreso determinó que el Teniente Gobernador disfrutara "el sueldo íntegro de Gobernador, desde el día en que empezó a funcionar, hasta la fecha en que cese" (Poder legislativo II, 2001. Decreto 264 del 8 de octubre de 1832: 201).

El Congreso autorizó el gasto hecho por el Gobierno en la compra de maíz "para socorrer a los pueblos del sur" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 265 del 8 de octubre de 1832: 202).

El Congreso inició la discusión del dictamen por el que se proponía reformar la Constitución Política del Estado, para dividir el Congreso en dos cámaras: la de Diputados y la de Senadores (Acta del 8 de octubre de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 35, foja 119).

El 13 de octubre el Congreso integró la Diputación Permanente de su Cuarto Receso, presidida por el Diputado Andrés Millán. Nombró como Secretario al Diputado Pedro Pérez Alamillo, como miembros a los diputados: José Antonio de la Vega, José María García Figueroa y Mucio Barquera y como Suplente al Diputado Mariano Esteva (Acta del 13 de octubre de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 35, foja 146).

El Congreso dispuso que “todos los pueblos, haciendas y ranchos que fueron del Pueblo de la Municipalidad de San Bartolomé Otzolotepec, y no están comprendidos en el decreto del 5 de abril de 1826, continuarán agregados al Partido de Toluca” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 266 del 13 de octubre de 1832: 202).

El Congreso acordó que “el Tribunal en Segunda Instancia, en las causas cortadas en sumario que le remitan los jueces inferiores, confirmara o revocara así la declaración de ser causa leve, como la pena impuesta, sin necesidad de dar vista al Fiscal, y dentro de ocho días útiles a lo más, contados desde el recibo de dichas causas” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 267 del 13 de octubre de 1832: 203).

El 15 de octubre acudió al Congreso Luis Velázquez de la Cadena a rendir su protesta de ley como Consejero del Gobierno (Acta del 15 de octubre de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 35, foja 150).

El Congreso acordó que “el Gobierno formara según las leyes vigentes, una instrucción sobre el modo con que deben verificarse los cortes de caja de las administraciones del Estado y la circulara a los pueblos para su observancia” (Acta del 15 de octubre de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 35, foja 151).

El 16 de octubre el Congreso dispuso el modo en que debía sellarse un papel de oficio para el Estado (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 268 del 16 de octubre de 1832: 203).

El Congreso declaró vigente el decreto del 2 de abril de 1827, en lo respectivo a la percepción de sueldos que debían disfrutar los prefectos que se retiraran de sus distritos con conocimiento del Gobierno (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 269 del 16 de octubre de 1832: 203).

Se clausuró el Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso con la asistencia del Teniente Gobernador Manuel Muria, el cual pronunció el discurso respectivo, junto con el Presidente del Congreso, Diputado Juan Antonio Arce (Acta del 16 de octubre de 1832. BJMLM. Colección de Actas: vol. 35, foja 161).[211]

[211] En el acta no se incluyen los discursos respectivos. No se localizaron las actas de la Diputación Permanente.

El Segundo Congreso Constitucional (1831-1832) que operó del 2 de marzo de 1831 al 16 de octubre de 1832 se integró con 21 diputados nombrados por electores secundarios en la Junta General del Estado. Realizó cuatro periodos ordinarios de sesiones y dos periodos extraordinarios de sesiones y expidió 63 decretos entre el 9 de marzo de 1831 y el 16 de octubre de 1832 (Poder Legislativo II, 2001. Índice de decretos: 643-649).

Capítulo 7
Primera Suspensión del Orden Constitucional (1832-1833)

El 11 de noviembre de 1832 en medio de la guerra civil, el Magistrado Wenceslao Barquera entregó la Gubernatura del Estado al Ciudadano Lorenzo de Zavala (Discurso del Gobernador del 17 de febrero de 1833. AHEM: L.L.D.E. vol. 1, exp. 1).

Lorenzo de Zavala en dicho discurso indicó que "al entrar al mando del Estado el 1º de noviembre último, ocupaba este cargo interinamente el Señor Don Wesceslao Barquera, en virtud de la ley del 26 de septiembre de 1829, que designa al magistrado más antiguo del Tribunal de Justicia como el que debe entrar al Poder Ejecutivo del Estado, a falta de los funcionarios que señala la Constitución; la completa desorganización en que se hallaba la Capital con la ausencia de las autoridades anteriores y más que toda la insurrección entendida por la mayor parte del Estado, cuyo principal propósito era desconocer los poderes supremos que de hecho gobernaban en la Federación y en él, llamaron al Señor Barquera, que fue reconocido desde luego, como yo lo fui posteriormente, por aquellos pueblos en que no existía fuerza armada del Gobierno de México, superior a la cívica que generalmente desconoció a éste. Todo estaba en el más completo desorden en aquellas circunstancias".

El 23 de diciembre la guerra civil concluyó con el Plan de Zavaleta que firmaron los militares del Vicepresidente Anastasio Bustamante con los de Manuel Gómez Pedraza y Antonio López de Santa Anna. En dicho Plan se ordenó el otorgamiento de ascensos a las tropas de ambos bandos, se pidió la renovación de las administraciones Federal y estatales, se llamó a elecciones para diputados federales y se pidió a Gómez Pedraza que concluyera el periodo gubernamental que debía haber iniciado en 1829 (Plan de Zavaleta del 23 de diciembre de 1832. AHEM: G.G.G. vol.31, exp. 1).

El 24 de diciembre Melchor Múzquiz le entregó la Presidencia de la República a Manuel Gómez Pedraza (Secretaría de la Presidencia, 1976: 94).

El 2 de enero de **1833** con base en el Plan de Zavaleta, el Ciudadano Lorenzo de Zavala se proclamó Gobernador del Estado, al señalar "que no hay en el Estado de México, ni reside en toda la extensión del territorio ningún funcionario con el título de Gobernador, y que yo me hallo funcionando en el mismo Estado, habiendo recibido felicitaciones de las autoridades al tomar el mando de nuevo, de que había sido

despojado por la fuerza, y que por el art. 7º del mismo Tratado se hallan reconocidos gobernadores los que se hallan en este caso, he venido a decretar el presente decreto (Manifiesto del Gobernador del 2 de enero de 1833. AHEM: G.G.G. vol. 31, exp. 1):

Artículo 1º.- Por esta única vez se celebrarán las juntas municipales o primarias el domingo veinte del actual para la elección de diputados al Congreso General y del Estado.

Artículo 2º.- Las juntas de partido se celebrarán el día 25 del actual.

Artículo 3º.- La Junta General se celebrará en la Capital del Estado el día 7 del próximo febrero, siendo en este día el reconocimiento de las cartas credenciales de los electores.

Artículo 4º.- El día 8 se elegirán diputados al Congreso General, y el 9 para la Asamblea Legislativa del Estado.

Artículo 5º.- Se elegirán para el Congreso General doce diputados propietarios y cuatro suplentes y para el Estado veintiún propietarios y siete suplentes, con arreglo al caso que se tuvo en las últimas elecciones.

Artículo 6º.- Los doce primeros nombrados para la Asamblea del Estado funcionarán por cuatro años, designándose nombrar a los diez resultantes para el bienio siguiente, con arreglo a la Constitución del mismo.

Artículo 7º.- Los diputados electos para el Congreso del Estado presentarán sus credenciales en la Secretaría del Gobierno, para dar cuenta en la Primera Junta Preparatoria.

Artículo 8º.- Éstas se verificarán el 15 de febrero, la segunda el 16, y la instalación del Congreso el día 17, siendo presididas las dos juristas vecinos de los diputados que protestaren.

Artículo 9º.- Estas elecciones se verificarán con sujeción a la Constitución del Estado, a la Ley de febrero de 1827 y a la adicional del 10 de mayo de 1830, en todo lo que sea compatible con el Plan de pacificación mencionado.

Artículo 10º.- A los cinco días de instalado el Congreso del Estado se harán por el mismo el de Gobernador y Vicegobernador, y también de consejeros, con arreglo a la Constitución".

El 13 de enero el Gobernador convocó a elecciones para diputados al Congreso del Estado, el cual debía nombrar al "Gobernador y Vicegobernador, y también a los consejeros, con arreglo a su Constitución" (Bando del Gobernador del 13 de enero de 1833. AHEM: G.G.G. vol. 31, exp. 25).

El 9 de febrero la Junta General del Estado efectuó la elección de diputados al Congreso del Estado de México, la cual arrojó los siguientes resultados (Lista del 9 de febrero de 1833. AHEM: G.G.G. vol. 31, exp. 2):

El 4 de febrero el Gobernador dirigió un decreto a los prefectos para su publicación y debida observancia, en el que se indicaba que "todo ciudadano que tenga en su poder fusiles, carabinas, pistolas, sables, lanzas, parque u otros útiles de guerra pertenecientes al Estado en general, a lo particular de la Milicia Cívica de los pueblos, al Ejército Permanente o a la Capital de la Federación, presentarán lo que sea a los alcaldes de los ayuntamientos de los lugares de su residencia en el preciso término de ocho días contados desde la publicación de este Bando" (Decreto del Gobernador del 4 de febrero de 1833. AHEM: G.G.G. vol. 31, exp. 25).

PROPIETARIOS

C. Lic. Mariano Arizcorreta (70 votos).
C. Lic. José María Heredia (31 votos).
C. Lic. José María del Villar y Bocanegra (45 votos).
C. Rafael Villagrán (83 votos).
C. Lic. Ramón Gamboa (45 votos).
C. Lic. Francisco Suárez Iriarte (87 votos).
C. Coronel Félix María Aburto (89 votos).
C. José Manuel González Arratia (50 votos).
C. Román García (50 votos).
C. Cristóbal Andrade (46 votos).
C. Antonio Escudero (45 votos).
C. Joaquín Bars (54 votos).
C. General Juan de Dios Lazcano (79 votos).

C. Juan Ignacio Dávila (90 votos).
C. Br. Pedro Guadarrama (44 votos).
C. Miguel Macedo Villanueva (46 votos).
C. José Joaquín Valdez (80 votos).
C. José Ramírez (81 votos).
C. José Rafael González Arratia (54 votos).
C. José María Vázquez (60 votos).
C. José Joaquín Solorzano Vizcarra (52 votos).

SUPLENTES

C. Br. Rafael María Martínez (62 votos).
C. Manuel Robredo (56 votos).
C. Simón de la Torre (55 votos).
C. Vicente Páez (53 votos).
C. Mariano Delgado (50 votos).
C. Pedro Díaz (43 votos).
C. Sebastián Ameche (38 votos).

Capítulo 8
Tercer Congreso Constitucional (1833-1834)

El Tercer Congreso Constitucional (1833-1834)[212] que operó del 17 de febrero de 1833 al 23 de agosto de 1834 se integró con 21 diputados nombrados por electores secundarios en la Junta General del Estado. Los diputados propietarios y suplentes eran: José del Villar y Bocanegra, Rafael Mario Villagrán, Francisco Suárez Iriarte, Félix María Aburto, José Manuel González Arratia, Antonio Escudero, Mariano Arizcorreta, Pedro Guadarrama, Miguel Macedo Villanueva, Joaquín Valdés, José Rafael González Arratia, José Ramírez, José María Heredia (Acta del 16 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 12), Ramón Gamboa, Román García, Joaquín Bars, Juan Ignacio Dávila (Acta del 20 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 32), Juan de Dios Lazcano (Acta del 22 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 40), Joaquín Solórzano (Acta del 27 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 49), Manuel Robredo (Suplente) (Acta del 12 de agosto de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 39, foja 119),[213] Vicente Páez (Suplente) (Acta del 15 de octubre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 40, foja 277),[214] Simón de la Torre (Suplente) (Acta del 23 de noviembre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 41, foja 8),[215] Pedro Díaz (Suplente) (Acta del 16 de noviembre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 41, foja 70)[216] y Rafael María Martínez (Suplente) (Acta del 1 de marzo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 3).[217] Los diputados integrantes de su Gran Comisión eran: Joaquín Solórzano, José Rafael González Arratia, José del Villar y Bocanegra y Ramón Gamboa (Acta de la sesión secreta del 13 de mayo de 1834. BJMLM: Colección de Actas).

---

[212] El Presidente al instalar esta Legislatura la reconoció como el Cuarto Congreso Constitucional no obstante a que en las actas se reconoció como el Quinto Congreso Constitucional al reconocer la numeración de los congresos desde la instalación del Primer Congreso Constitucional de 1827. Se denomina Tercer Congreso Constitucional, en virtud de que al reinstalarse el Congreso Constituyente en 1830, éste en su decreto 135 del 27 de julio de 1830 **aprobó las cartas credenciales de los diputados del Primer Congreso Constitucional.**

[213] Como Segundo Diputado Suplente ocupó la vacante que dejó por renuncia el Diputado José María Heredia.

[214] Como Cuarto Diputado Suplente ocupó la vacante que dejó por fallecimiento el Diputado Juan Ignacio Dávila.

[215] Como Tercer Diputado Suplente ocupó la vacante que dejó por renuncia el Diputado José María Vázquez, el cual nunca ocupó su cargo.

[216] Como Sexto Diputado Suplente ocupó la vacante que dejó el Diputado Félix María Aburto, para asumir la Titularidad del Gobierno del Estado.

[217] Como Primer Diputado Suplente ocupó la vacante que dejó el Diputado Suplente Mariano Delgado, el cual debía de ocupar la vacante que nunca ocupó el Diputado Cristóbal Andrade.

El 15 de febrero de 1833 se efectuó la Primera Reunión de la Junta de Instalación del Congreso, bajo la Presidencia del Diputado Electo José Manuel González Arratia (Acta del 15 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 1).

El Congreso reunido en Junta integró las dos comisiones que debían calificar las credenciales de los diputados presididas por los diputados electos: Mariano Arizcorreta y Antonio Escudero (Acta del 15 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 1).

El 16 de febrero el Congreso reunido en Junta aprobó las cartas credenciales de los diputados electos: José del Villar y Bocanegra, Rafael Mario Villagrán, Francisco Suárez Iriarte, Félix María Aburto, Manuel González Arratia, Antonio Escudero, Mariano Arizcorreta, Pedro Guadarrama, Miguel Macedo Villanueva, Joaquín Valdés, José Rafael González Arratia, José Ramírez y José María Heredia (Acta del 16 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 12).

En el Congreso reunido en Junta rindieron su protesta de ley los diputados: José del Villar y Bocanegra, Rafael Mario Villagrán, Francisco Suárez Iriarte, Félix María Aburto, Manuel González Arratia, Antonio Escudero, Mariano Arizcorreta, Pedro Guadarrama, Miguel Macedo Villanueva, Joaquín Valdés, José Rafael González Arratia y José María Heredia (Acta del 16 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 12).

El Congreso reunido en Junta integró la Mesa Directiva de su Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, presidida por el Diputado Electo Mariano Arizcorreta. Nombró como Vicepresidente al Diputado Electo José Manuel González Arratia, como secretarios propietarios a los diputados electos: José María Heredia y Francisco Suárez Iriarte y como secretarios suplentes a los diputados electos: Félix María Aburto y Pedro Guadarrama (Acta del 16 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 12).

El Presidente del Congreso, Diputado Mariano Arizcorreta, “declaró formalmente constituido el Cuarto Congreso del Estado, y en consecuencia nombró la Comisión que debía pasar a participarlo al Excelentísimo Señor Gobernador compuesta de los señores **Heredia**, Villar, Villagrán, Escudero, Valdés y Guadarrama (Acta del 16 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 12).

El 17 de febrero el Gobernador Lorenzo de Zavala al acudir a la apertura del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso, señaló que “después de tres años del tiempo que fui destituido violentamente del encargo de Gobernador que ejercía por elección constitucional en 1827: vosotros sabéis señores diputados, la serie de atentados que se cometieron a pretexto de restablecer la observancia de la Constitución Federal en los años de 1830 y 1831, y habéis sido testigo y aun parte de los grandes acontecimientos que en el último año de 1832 han proporcionado el desenlace que hoy nos reúne en este lugar, y a los representantes de la Unión en ambas Cámaras del Congreso General. Una revolución popular ha derribado la obra de una revolución militar que desde Jalapa proclamando el imperio de las leyes, entronizó el despotismo y usurpó los poderes públicos por tres años. La patria ha llorado bastante la pérdida de muchos de sus hijos beneméritos, el atraso en la marcha de su civilización, el retroceso de elementos republicanos hacia formales feudales, y los desastres de dos convulsiones, una para perder, otra para adquirir la libertad” (Discurso del 17 de febrero de 1833. AHEM: L.L.D.E. vol. 1, exp. 1).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Mariano Arizcorreta, señaló que “nobles y heroicos han sido los esfuerzos de los mexicanos para derrocar la sistemada tiranía de una administración bárbara, cuyos caracteres distintivos fueron la perfidia, el terror, la hipocresía y la más atroz persecución. En efecto, un cambio político que tuviera su origen de la ingratitud y de una asonada militar, y que haciendo retrogradas la marcha de la libertad y de la civilización conmoviera la máquina social desde sus fundamentos, siguiendo a la República por un despótico absolutismo, no hubiera podido subsistir sino apoyado en la superstición y en la fuerza brutal; y así es que atando al carro de sus triunfos la conciencia de los incautos por la liga que formó con el clero, sofocó la voz del ciudadano con las trabas que opuso a la libertad de la prensa, con espías sus suspiros, con el horror de los calabozos, con la impunidad de los asesinatos y con la repetición de los suplicios” (Acta del 17 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 18).

El 18 de febrero el Congreso dispuso “que se abra un buzón en el Palacio del Congreso en el lugar que designe la Comisión de Policía Interior, para que cualquier ciudadano pueda expresar por escrito sus conceptos con respecto a las providencias que diere la Legislatura, y proponga los proyectos que estime útiles o necesarios” (Acta del 18 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 28).

El Congreso recibió un comunicado “del Presidente de la República, manifestando que los enemigos de la libertad no cesan en sus maquinaciones contra la actual Administración, siendo una de ellas la de publicar la especie de que trabajan por su reelección para el Poder Ejecutivo Federal: que esto es notarialmente falso y que como libres ciudadanos tienen formada su opinión para la primera magistratura en favor de los ciudadanos Antonio López de Santa Anna y Valentín Gómez Farias. A una comisión especial compuesta por los señores Heredia, Escudero y Villar para que conteste debidamente” (Acta del 18 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 28).

El Congreso nombró a los integrantes de la Comisión de Poderes y de la Comisión de Corrección de Estilo (Acta del 18 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 30).

El 20 de febrero el Congreso aprobó las credenciales de los diputados: Ramón Gamboa, Román García, Joaquín Bars y Juan Ignacio Dávila (Acta del 20 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 32).

Rindieron su protesta de ley los diputados: Ramón Gamboa, Román García, Joaquín Bars y Juan Ignacio Dávila (Acta del 20 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 32).

El Congreso aprobó las proposiciones por las que dio respuesta al General Santa Anna a sus dos comunicaciones, en que manifiesta al Congreso que los enemigos de la libertad publican la especie de que trata de reelegirse para la Presidencia y que expone las razones que movieron su conducta en la última revolución (Acta del 20 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 31).

El 21 de febrero el Congreso nombró al Ciudadano Lorenzo de Zavala como Gobernador Constitucional del Estado, a José Figueroa como Teniente Gobernador y como consejeros del Gobierno a: Vicente Páez, Francisco Herrera Campos, José Ignacio Aguilera y Manuel Ignacio Ortiz (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 270 del 21 de febrero de 1833: 203).

El Congreso acordó que el Gobernador, el Teniente Gobernador y los consejeros “prestaran el juramento de costumbre ante el Congreso el día doce de marzo próximo con el ceremonial ordinario”, y que “un decreto especial designara el periodo que

deban funcionar, respectivamente, para observar las disposiciones constitucionales de la materia" (Acta del 21 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 37).

El Congreso a rendir su protesta de ley e incorporarse a sus sesiones el Diputado José Ramírez (Acta del 21 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 37).

El 22 de febrero el Congreso aprobó la credencial del Diputado Juan de Dios Lazcano (Acta del 22 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 40).

Acudió al Congreso el diputado Juan de Dios Lazcano a rendir su protesta de ley (Acta del 22 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 40).

El Congreso acordó que "las presentes sesiones se cerrarán el día 1º de marzo después que se hagan los nombramientos prevenidos en el artículo 4º del Plan de Zavaleta", y que "el mismo día en la tarde se celebrará la Junta Preparatoria para la apertura de las sesiones ordinarias, que se han de verificar el 2 de marzo siguiente" (Acta del 22 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 43).

El 23 de febrero el Congreso acordó que "el Gobierno excite al Presidente de la República para que en obsequio del Estado se sirva permitir al General Ciudadano José Figueroa, venga a desempeñar el empleo de Teniente Gobernador para que lo nombró esta Honorable Asamblea, a la mayor posible brevedad" (Acta del 23 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 45).

El 25 de febrero el Congreso acordó que las actas de sus sesiones se publicaran en un periódico de la Ciudad de Toluca (Acta del 25 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 46).

El Congreso nombró como miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales a los diputados: Francisco Suárez, Rafael Manuel Villagrán y José Manuel González (Acta del 25 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 46).

El Congreso nombró como responsable de la impresión de las actas al Diputado José María Heredia (Acta del 25 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 46).

El 27 de febrero el Congreso aprobó la carta credencial del Diputado Joaquín Solórzano (Acta del 27 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 49).

Acudió al Congreso a rendir su protesta de ley el Diputado Joaquín Solórzano (Acta del 27 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 49).

El 28 de febrero el Congreso tomó conocimiento de la primera petición que apareció en el buzón, en la cual se indicaba que "en el local donde éste se haya (buzón) se pinte una concha o cualquier adorno con un lema que manifieste el objeto de su apertura, así para llamar la atención del público, como para evitar las equivocaciones que pueda haber" (Acta del 28 de febrero de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 50).[218]

El 1 de marzo el Congreso propuso como candidato a la Presidencia de la República al General Antonio López de Santa Anna y como candidato a la Vicepresidencia de la República al Ciudadano Valentín Gómez Farías (Acta del 1 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 52).

El Congreso nombró como senadores del Estado al Congreso de la Unión al General Antonio Mejía y al Ciudadano Juan Wenceslao Barquera (Acta del 1 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 52).

El Gobernador Lorenzo de Zavala, al acudir a la clausura del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso, les indicó a los diputados que "en los doce días que han tenido las sesiones extraordinarias de esta Honorable Asamblea, se han hecho por parte del Ejecutivo del Estado las comunicaciones que en su opinión eran de absoluta necesidad poner en conocimiento de los legisladores para descargar la responsabilidad que ha pesado únicamente sobre sus hombros durante el periodo de tres meses y medio en las más asiduas circunstancias. La elección que habéis hecho por unanimidad en mi persona para desempeñar el cargo de Gobernador, me indica que mis procedimientos han merecido la aprobación del pueblo, y de sus representantes y que la calumnia se ha estrellado en la fuerza y energía que han puesto el resultado de vuestras luminosas investigaciones" (Acta del 1 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 52).

[218] Esta proposición se mandó pasar a la Comisión de Policía Interior.

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Mariano Arizcorreta, señaló que "la Legislatura a pesar de que en el corto periodo de su reunión extraordinaria ha tenido limitado el uso de sus facultades a determinados objetos, y atadas las manos, por decirlo así, para ocuparse de grandiosos proyectos, se congratula de haber puesto al frente de los negocios del Estado a la virtud y al mérito, de haberle dado dignas representaciones en la Cámara de Senadores y de haber designado con acierto a quienes sean los genios tutelares que deban conducir a la República al pleno goce de la libertad" (Acta del 1 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 53).

El Congreso reunido en Junta integró la Mesa Directiva del primer mes de su Primer Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado Román García y la Vicepresidencia del Diputado Joaquín Valdés. Nombró para todo el periodo ordinario de sesiones como secretarios propietarios a los diputados: José del Villar y Bocanegra y Ramón Gamboa y como secretarios suplentes a los diputados: Juan de Dios Lazcano y Miguel Macedo Villanueva (Acta del 1 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 55).

Se incorporó a las sesiones del Congreso el Diputado José Ramírez, toda vez que en aquella ocasión el Presidente del Congreso lo nombró integrante de la Comisión que debía manifestarle al Gobernador la elección de la Mesa Directiva (Acta del 1 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 55).[219]

El 2 de marzo el Gobernador Lorenzo de Zavala al acudir a la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, les indicó a los diputados que "nada sería de desear tanto como el poderos entregar a la pacífica y profunda ocupación de dar leyes útiles y benéficas al Estado que representáis. Hay tantas anomalías en nuestra actual legislación, tantas contradicciones entre los principios fundamentales del sistema adoptado y las prácticas de una vieja monarquía, tan grande heterogeneidad entre los elementos democráticos proclamados y las preocupaciones reverenciadas, que es casi imposible dar un paso sin atenerse a presencia de los obstáculos" (Acta del 2 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 55).

[219] Posiblemente la incorporación de este Diputado se dio en una sesión secreta del Congreso anterior a la fecha aquí señalada, ya que su elección como Diputado había sido aprobada el 16 de febrero de 1833.

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Román García, señaló que “la observancia escrupulosa de las instituciones adoptadas por la Nación Mexicana hará nuestra felicidad, y para conseguirla no morirán los legisladores diligencia alguna, puesto que en ellos se encuentra la energía, y que ya han manifestado por sus opiniones hallarse poco afectados de los hábitos de la educación colonial, y que no temen buscar el bien del pueblo, asediados de los peligros que consigo traen las innovaciones, pues que intentadas razonablemente, sus resultados deben ser seguros” (Acta del 1 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 59).

El 4 de marzo el Congreso acordó nombrar “una comisión especial que examine los actos de los cuerpos legislativos que han funcionado en el Estado durante los años de 1830, 1831 y 1832, y a la mayor brevedad presente su dictamen sobre los que deben derogarse o reformarse” (Acta del 4 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 64).

El Presidente del Congreso nombró como integrantes de la comisión especial que analizaría la actuación de las legislaturas anteriores a los diputados: José María Heredia, Ramón Gamboa y Mariano Arizcorreta (Acta del 4 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 64).

El Congreso acordó nombrar una comisión particular, para que “consultara las providencias que deban adoptarse acerca de la venta escandalosa que ha hecho el Señor Manuel de San Crisóstomo, de los bienes del Colegio del Carmen situado en el Pueblo de San Ángel” (Acta del 4 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 64).

El Presidente del Congreso nombró como integrantes de la comisión que estudiaría la venta de los bienes del Colegio del Carmen a los diputados: José del Villar, José Rafael González Arratia y Joaquín Solórzano (Acta del 4 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 64).

El Congreso publicó el nombramiento de las comisiones hechas por su Mesa Directiva. Dichas comisiones eran: la de Puntos Constitucionales; la de Justicia, Negocios Eclesiásticos y Legislación; la de Gobernación; la Primera de Hacienda; la Segunda de Hacienda; la de Industria, Agricultura, Comercio y Minería; la de Instrucción; la de Milicia; la de Corrección de Estilo; la de Poderes; la de Policía y Peticiones; la de

Impresiones; la Revisora; y la del Código Municipal (Acta del 4 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 64).[220]

El 5 de marzo el Congreso implementó un procedimiento, para determinar cuáles eran "los expedientes que existen en su Secretaría para su despacho", "su último trámite o estado", y "la causa que según el mismo expediente haya paralizado su giro y resolución" (Acta del 5 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 66).

El 6 de marzo el Congreso acordó que "no se admite al Ciudadano José María Vázquez la dimisión que hace al cargo de Diputado de esta Asamblea" (Acta del 6 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 69).

El 7 de marzo el Congreso acordó que "todos los pliegos que se hayan recibido o se recibieren por el buzón, se leerán según está acordado, en el último lugar, y se dejarán en la Secretaría para que pueda hacerlos suyos él o los diputados que lo crean conveniente" (Acta del 7 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 77).

El 9 de marzo el Congreso determinó que el Gobernador durará en su cargo cuatro años, en tanto que el Teniente Gobernador dos años, los "dos consejeros primeramente nombrados, el mismo periodo que el Gobernador, y los de segundo nombramiento durarán por el mismo tiempo que el Teniente Gobernador" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 271 del 9 de marzo de 1833: 204).

El Congreso acordó nombrar una comisión especial de su seno para que se encargara "de reformar el Reglamento Interior del Congreso y su Secretaría" (Acta del 9 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 87).

El Presidente del Congreso nombró como integrantes de la comisión especial que se encargaría de reformar el Reglamento Interior del Congreso y su Secretaría a los diputados: Antonio Escudero, José Rafael González Arratia y Joaquín Solórzano (Acta del 9 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 88).

[220] A diferencia de otras actas anteriores, en esta acta si se señalan los nombres de los diputados que conformaron las comisiones permanentes del Congreso.

El 11 de marzo el Congreso acordó que el buzón que había implementado llevara la siguiente leyenda: “1833. El Honorable Congreso del Estado, deseoso de oír al pueblo” (Acta del 11 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 95).

El 12 de marzo el Congreso nombró como individuos que han de juzgar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia a: Nicolás de Oláez, Francisco María Lombardo, Francisco Villar y Bocanegra, Rafael Reyes Bocanegra, José María Jáuregui, Luis Lozano, Justo Macedo, Pedro Valdovinos, Pedro del Villar, José Nabor Domínguez, José María Mondragón, Ignacio González Arratia, Antonio Cardona, José Vicente González, José Mariano Araujo, Juan Fonseca, José María González Arratia, José María Monroy, Ignacio Valdés, Joaquín Muñiz, José Zamorano, Félix Valois de Rojo, Félix Guevara y José María Benítez; y como Presidente de la Primera Sala del Tribunal a Rafael Reyes Bocanegra, como magistrados a: Félix Guevara y Pedro Valdovinos y como Fiscal a Pedro del Villar (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 272 del 12 de marzo de 1833: 204).

El Congreso ordenó al Gobierno formar “una instrucción sobre el modo con que deben verificarse los cortes de caja de las administraciones del Estado, e imponiendo varias penas a los empleados que no rindan cuentas y a los funcionarios que infrinjan la instrucción que dicte el Gobierno” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 273 del 12 de marzo de 1833: 205).

Lorenzo de Zavala al acudir al Congreso a rendir su protesta de ley como Gobernador Constitucional, señaló que “el Gobierno al jurar ante Dios y sus conciudadanos el principal desempeño de sus obligaciones ha contraído un nuevo vínculo que sobre el que generalmente liga a los depositarios de los intereses públicos. Fiel a sus principios y deberes, procurará difundir la ilustración frente a la moral pública y mejorar los derechos civiles de los ciudadanos por la norma segura de las leyes” (Acta del 12 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 106).

Previamente a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Román García, le indicó al Gobernador que “el Congreso que representa a los mismos pueblos y que se ha servido de mí para comunicaros sus sentimientos, descansa seguro en los nobles y patrióticos impulsos que os han inspirado esa conducta que hasta hoy habéis seguido y se promete los más felices resultados de vuestro gobierno. Por lo que toca a mí en lo particular, presagiando por la experiencia de lo pasado el nuevo porvenir me congratulo con todos los pueblos de que llenaréis satisfactoriamente las obligaciones

de vuestro encargo como lo habéis ofrecido ante Dios y los hombres y cumpliendo al dirigiros ahora la palabra con lo material del artículo reglamentario que así lo dispone, me creo escudo de lo formal de la exhortación de que trata y de que jamás han necesitado en el mundo los funcionarios públicos, a quienes adornan las virtudes y conocimientos que os merecieron la elección del Congreso para vuestros destinos" (Acta del 12 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 105).

El 13 de marzo el Presidente del Congreso nombró como integrantes de la Sección de Gran Jurado a los diputados: Román García, Joaquín Solórzano, Francisco Suárez Iriarte, Antonio Escudero, José del Villar y José Rafael González Arratia (Acta del 13 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 112).

El Congreso tomó conocimiento de un proyecto de ley que apareció en el buzón, por el que se pide que "ningún Diputado podrá ejercer el cargo de Procurador ni de Abogado, por sí ni por interpósita persona" (Acta del 13 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 107).[221]

El 15 de marzo el Congreso autorizó al "Gobierno para que cuando haya consumido los veinticuatro mil pesos, que se le asignaron por la anterior Legislatura para sostener la fuerza de seguridad pública, gaste en el propio objeto y por una sola vez hasta la cantidad de cuatro mil pesos" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 274 del 15 de marzo de 1833: 213).

El Congreso acordó pedir "a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exonere del cargo de Diputado que por el Estado de Yucatán recayó en el Excelentísimo Señor Gobernador de éste, Ciudadano Lorenzo de Zavala" (Acta del 15 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 122).

El Congreso acordó pedir "a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión no confirme el nombramiento que el Excelentísimo Presidente de la República ha hecho en la persona del Gobernador del mismo Estado, Ciudadano Lorenzo de Zavala, para Plenipotenciario de la República Mexicana cerca del Rey de Francia" (Acta del 15 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 124).

[221] Se mandó dejar esta proposición en la mesa, para que algún Diputado la adoptara.

El 18 de marzo el Congreso aprobó la proposición dirigida al Congreso de la Unión, por la que pidió que no fuera ratificado el nombramiento del Gobernador Lorenzo de Zavala como Ministro Plenipotenciario en Francia (Acta del 18 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 149).

El Gobernador reglamentó lo dispuesto en el decreto número 273 del 12 de marzo de 1833, para facilitar la verificación de los cortes de caja de las administraciones del Estado e imponer penas a los empleados que no rindieran cuentas o infringieran las instrucciones que dictara el Gobierno (Poder Legislativo II, 2001. Decreto del Ejecutivo del 18 de marzo de 1833: 206).

El 20 de marzo el Congreso indultó "de la pena del último suplicio, a que ha sido condenado en primera y segunda instancia, al reo Manuel Barrera, por el homicidio perpetrado en la persona de su mujer María Gertrudis". Dispuso que "el Tribunal a quien corresponda el conocimiento de su causa, le impondrá la pena extraordinaria que estime conveniente" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 275 del 20 de marzo de 1833: 213).

El 22 de marzo el Congreso dispuso (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 276 del 22 de marzo de 1833: 214) que el "Gobierno sólo podrá conceder licencia a los empleados, para separarse de sus destinos con el goce de todo su sueldo por el término de un mes, y con motivo grave suficientemente calificado" (art. 1º); que "podrá por igual motivo concederla hasta por seis meses, sin goce alguno de sueldo, siendo para atender a negocios particulares del empleado" (art. 2º); y en "caso de enfermedad, suficientemente calificada, podrá concederla hasta por seis meses de el goce de todo el sueldo, y pasado ese término dará cuenta al Congreso para su solución, o a la Diputación Permanente para los efectos legales" (art. 3º).

El Congreso nombró a Francisco Verde y Fernández como Ministro Suplente del Tribunal Superior de Justicia y como Fiscal de dicho Tribunal a José María Torres Cataño (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 277 del 22 de marzo de 1833: 215).

El Congreso acordó establecer "en la Capital del Estado, un periódico diario de a pliego, en el que se insertaran las actas del Honorable Congreso, y todas las comunicaciones oficiales, dictámenes de comisiones, u otros documentos que a su juicio, o al del Gobierno deban publicarse" (Acta del 22 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 197).

El 23 de marzo el Congreso al suprimir la plaza de Agente Fiscal menos antiguo y crear una tercera plaza de Relator en la Audiencia, dispuso que “todos los procesos civiles o criminales que reciba la Excelentísima Audiencia en lo sucesivo, se repartirán por turno entre los tres relatores” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 278 del 23 de marzo de 1833: 215).

El 26 de marzo el Congreso acordó nombrar un Letrado que sustituya durante su enfermedad a Pedro Jove, Ministro del Supremo Tribunal de Justicia, así como el presupuesto para cubrir sus percepciones anuales (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 279 del 26 de marzo de 1833: 215).

El 28 de marzo el Congreso aprobó la pensión vitalicia de treinta pesos mensuales a cada una de las viudas de los ciudadanos: Pablo Villavicencio y José María Guillén (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 280 del 28 de marzo de 1833: 216).

El Congreso nombró a Juan José Rosales como Ministro del Supremo Tribunal Superior de Justicia (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 281 del 28 de marzo de 1833: 217).

El Licenciado Francisco Verde y Fernández acudió al Congreso a rendir su protesta de ley como Ministro Provisional del Supremo Tribunal de Justicia (Acta del 28 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 259).

En sesión extraordinaria del Congreso, José María Torres Lamadrid rindió su protesta de ley como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia (Acta del 28 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 260).

El 29 de marzo el Congreso le otorgó “al Ciudadano José Manuel Sixto Ortega la pensión mensual de ocho pesos, dos reales, ocho granos” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 282 del 29 de marzo de 1833: 217).

El Congreso al indultar “a la indígena María Martina de la pena del último suplicio a que ha sido condenada en primera y segunda instancia”, dispuso que “el Tribunal respectivo le impondrá la pena extraordinaria que estime conveniente” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 283 del 29 de marzo de 1833: 217).

El Congreso declaró “pertenecientes al Estado todos los bienes que administraban los misioneros de Filipinas”. Para tal efecto, dispuso que “el Gobierno valiéndose de la autoridad correspondiente, revisará las escrituras de arrendamiento de dichos bienes, a efecto de que declare si son válidas, o si tienen vicios que induzcan nulidad” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 284 del 29 de marzo de 1833: 218).

El Congreso acordó que se le dirigiera “a la Cámara de Representantes del Congreso de la Unión una exposición, pidiendo insista no llamar al Ciudadano Lorenzo de Zavala a desempeñar el cargo de Diputado para que lo nombró el Estado de Yucatán” (Acta del 29 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 266).

El Congreso acordó excitar a las cámaras del Congreso de la Unión, para que derogaran los acuerdos que exceptuaban la expulsión de varios españoles. También acordó excitar “el celo del Ejecutivo de la Unión y del Estado, para que se cumpla religiosamente la Ley del 20 de marzo de 1829, sobre expulsión absoluta de españoles” (Acta del 29 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 267).

El 30 de marzo el Consejero Francisco Herrera Campos acudió al Congreso a leer la Memoria de Gobierno (Acta del 30 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 293).

El Gobernador Lorenzo de Zavala en su Memoria de Gobierno, señaló que antes de asumir la Gubernatura, la Administración fue atacada por todas partes, por lo que “se vio en la necesidad de ocurrir a medios extra-constitucionales. Se concedieron facultades extraordinarias, se decretó un préstamo forzoso, se invistió al Gobierno de un poder desconocido hasta entonces en el Estado de México, y el que ejercía las funciones del Ejecutivo por la ausencia del Gobernador, hizo sentir los efectos de un despotismo limitado” (Poder Legislativo, 1833. Memoria: 15).

El Gobernador indicó que la Comisión para formar la estadística del Estado fue desatendida por la anterior Administración, que el primer golpe dado a la Milicia Nacional fue el decreto que suprimió la oficina y empleo de su Inspector, que existían muchos pueblos que exigían una pronta composición y reedificación de sus cárceles, que era deplorable el estado de la educación, que se había reinstalado la Junta de Establecimientos Literarios, que se había nombrado un encargado para efectuar la reparación de los caminos a cargo de la Inspección del Estado, que el Gobierno

pretendía llamar extranjeros instruidos para fortalecer la enseñanza del Instituto Literario, que la Biblioteca lejos de haber recibido una mejora en los últimos tres años se encontraba exhausta en libros, que la salud pública se deterioraba ante el abandono que la tenían las autoridades anteriores y que la Hacienda aunque había "sido favorable para la causa de la libertad, no ha dejado de producir menoscabos en sus rentas, resultado indispensable de toda revolución".

El Congreso General designó para el cuatrienio que comenzaría ese año al General Antonio López de Santa Anna como Presidente y como Vicepresidente a Valentín Gómez Farías (Decreto del 30 de marzo de 1833. AHEM: G.G.G. vol. 32, exp. 9).[222]

El 31 de marzo el Congreso le concedió al Gobernador Lorenzo de Zavala una licencia por ocho días para pasar al Distrito Federal a partir del 1 de abril (Acta del 31 de marzo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 37, foja 304), por lo que el Gobierno quedó bajo el encargo del Consejero Vicente Páez.

El 1 de abril el Congreso nombró como Presidente de la Mesa Directiva del segundo mes de su Primer Periodo Ordinario de Sesiones al Diputado Joaquín Solórzano y como Vicepresidente al Diputado Juan Ignacio Dávila (Acta del 1 de abril de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 1).

Acudió al Congreso el Consejero Manuel Ignacio Ortiz a rendir su protesta de ley (Acta del 1 de abril de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 7).

El 10 de abril el Congreso al declarar vigente en el Estado la orden del 21 de mayo de 1821, dispuso que "el Gobierno hará de ningún valor las ventas de bienes religiosos que se hayan verificado con infracción de dicha providencia, impidiendo sus efectos y restituyendo los intereses vencidos a sus respectivas iglesias", y que "en caso de temerse que fraudulentamente quieran llevar a efecto la enajenación algunos prelados, el Gobierno pondrá en los bienes enajenados un Interventor, y hará que éste remita los productos al Prelado o Apoderado del respectivo Convento, para que disponga y goce de ellos la comunidad; a cuyo efecto le dispensará la protección conveniente" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 285 del 10 de abril de 1833: 219).

[222] Durante diez meses el despacho del Ejecutivo estuvo a cargo del Vicepresidente Valentín Gómez Farías, toda vez que el Presidente Constitucional le dejó el poder para conciliar con la parte civil que deseaba abolir las corporaciones y con la parte militar que deseaba conservar los fueros existentes entre el 1 de abril al 16 de mayo de 1833, el 3 al 18 de junio de 1833, el 5 de julio al 27 de octubre de 1833 y el 16 de diciembre de 1833 al 24 de abril de 1834 (Secretaría de la Presidencia, 1876: 109).

El 11 de abril el Congreso acordó que se "declarasen improcedentes de hecho las anteriores administraciones que han regido a la República, debiendo su existencia a las asonadas de la Acordada y Jalapa"; que "se revisarán todas las leyes y decretos expedidos por el Congreso General del mismo periodo, para que se reproduzcan los que se juzguen útiles, y quedando sin efecto los demás"; que "se declaran provisionales todos los empleos contraídos por el Gobierno y Congreso del mismo periodo, y amovibles los agraciados al arbitrio de las autoridades, que hoy funjan legalmente", y que igualmente son insubsistentes las previsiones de piezas eclesiásticas hechas por el Gobierno Federal en el mencionado periodo" (Acta del 11 de abril de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 29).

El 12 de abril el Congreso aprobó el decreto, por el que abrogó parte de los artículos de la Ley del 30 de junio de 1832, entre los cuales estaban los que imponían un préstamo forzoso a los párrocos y a los empleados y funcionarios públicos que percibieran un sueldo anual superior de 500 pesos (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 286 del 12 de abril de 1833: 220).

El 16 de abril acudió al Congreso el Licenciado Juan José Rosales a rendir su protesta de ley como Ministro del Supremo Tribunal de Justicia (Acta del 16 de abril de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 54).

El 17 de abril el Congreso acordó hacer una "iniciativa al Congreso de la Unión, para que declare ser el Ciudadano Antonio López de Santa Anna, libertador de la República, y que con este título se denomine en lo sucesivo" (Acta del 17 de abril de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 59).

El 20 de abril el Congreso tomó conocimiento de una exposición recibida en el buzón, por la que se pedía "designe el Congreso los autores que deban adoptarse para la enseñanza de la moral evangélica, moral pública y máximas políticas" (Acta del 20 de abril de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 71).[223]

El 22 de abril el Congreso acordó remitir al Gobierno "una exposición anónima que se recibió por el correo, contraída a manifestar varios abusos cometidos por el Cura y Prior del Pueblo de Mextitlán (Acta del 22 de abril de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 80).

[223] Se mandó dejar esta proposición en la mesa, para que algún Diputado la adoptara.

El Congreso tomó conocimiento de una proposición recibida en el buzón, en la que se manifestaba que la conducta observada por el Provincial del Carmen en la venta de algunas fincas, era contraria al instituto de aquella orden religiosa (Acta del 22 de abril de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 81).[224]

El Congreso tomó conocimiento de una proposición recibida en el buzón, por la que se pedía "trasladar la Biblioteca al edificio del Congreso, encargándose de su cuidado al Archivero de su Secretaría" (Acta del 22 de abril de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 81).[225]

El 23 de abril el Congreso tomó conocimiento de una proposición recibida en el buzón, sobre españoles (Acta del 23 de abril de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 86).[226]

El 24 de abril el Congreso al revocar el decreto número 99 del 1 de mayo de 1830,[227] declaró "empleados propietarios del Estado a los prefectos, y el Gobierno los nombrará con aprobación del Consejo". También dispuso que "los subprefectos deberán durar dos años, quedando sujetos a las leyes anteriores al decreto que se revoca por éste" (Acta del 24 de abril de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 97).

El 25 de abril el Congreso concedió "la gracia de exención de alcabala a la venta del pescado bobo, que se extrae de los ríos del alcabalatorio de Yahualica" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 288 del 25 de abril de 1833: 222).

El Congreso declaró "ciudadanos beneméritos del Estado, en grado heroico, a: Antonio López de Santa-Anna, Valentín Gómez Farías y Lorenzo de Zavala"; y como "ciudadanos beneméritos del Estado, a Juan Álvarez, José Salgado, José Antonio Mejía, Gabriel Valencia, Juan Arago, José de la Cuesta, Esteban Moctezuma y Adrián Woll" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 289 del 25 de abril de 1833: 222).

[224] Esta proposición se mandó pasar a la Comisión de Policía, una vez que la adoptó el Diputado Joaquín Solórzano.
[225] Esta proposición se mandó pasar a la Comisión a la Primera de Hacienda, una vez que la adoptó el Diputado Joaquín Solórzano.
[226] Esta proposición se dejó en la mesa, para que pudiera ser adoptada por algún diputado.
[227] Dicho decreto declaraba amovibles por el Gobierno a los prefectos y subprefectos del Estado.

El Congreso reservó para su discusión en sesión secreta un anónimo recibido en el buzón, “por contener injurias contra uno de los señores diputados (Acta del 25 de abril de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 102).

El 26 de abril el Congreso declaró “libre la venta y siembra del tabaco en rama y labrado en lo interior del Estado” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 287 del 26 de abril de 1833: 220).

El Congreso dispuso que el Gobierno haga comparecer a Don Ramón Rayón, para que liquide sus cuentas con la Contaduría General (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 290 del 26 de abril de 1833: 223).

El 27 de abril acudió al Congreso el Consejero Francisco Herrera Campos a sostener las observaciones que hizo el Gobernador a la Ley reglamentaria de la Milicia Cívica (Acta del 27 de abril de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 120).

El 30 de abril el Congreso (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 291 del 30 de abril de 1833: 223) declaró “propiedad del Estado de México los censos enfitéuticos, la Hacienda de Atlacomulco, el Palacio de Cuernavaca y las casas de Coyoacán que posee en el mismo el Duque de Monteleone y Terranova, descendiente del Conquistador Hernán Cortés” (art. 1). Dispuso que “la Hacienda de Atlacomulco se pondrá en arrendamiento por cinco años en subasta pública, debiéndose pagar el precio por tercios adelantados” (art. 2); que “los productos de esta Hacienda y de los censos, así como el valor de las existencias, se enterarán a la Tesorería General del Estado, y el Gobierno los destinará exclusivamente para el fomento de la educación pública” (art. 3), y que “el Palacio de Cuernavaca y las casas de Coyoacán se aplican a los ayuntamientos en donde están situados” (art. 4).

El 1 de mayo el Congreso tomó conocimiento de una exposición que se recibió en el buzón, sobre cofradías (Acta del 1 de mayo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 171).[228]

El 2 de mayo el Congreso nombró como Presidente de la Mesa Directiva del tercer mes de su Primer Periodo Ordinario de Sesiones al Diputado Antonio Escudero y

[228] Esta proposición fue adoptada por el Diputado Román García. Las actas del 27 y 29 de abril son ilegibles, por lo que se desconoce qué asuntos se trataron en esos días.

como Vicepresidente al Diputado Román García (Acta del 2 de mayo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 174).

El Congreso expidió la Ley Reglamentaria de la Milicia Cívica del Estado de México, en la cual se restituyó la figura del Inspector de la Milicia Cívica y se dispuso que "la Artillería se establecerá donde residan los Supremos Poderes del Estado, y en los demás puntos que a juicio del Gobierno deba haberla", y que "la fuerza que deberá haber en las tres armas será la que dé el número de ciudadanos, que por ésta se designe para el servicio efectivo, siendo el mínimum de ella el uno por ciento de la población" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 292 del 2 de mayo de 1833: 223).[229]

El Gobernador Lorenzo de Zavala dio a conocer un manifiesto, en donde ante un golpe militar que disolvió los poderes del vecino Estado de Michoacán, exhortó a los habitantes de la Entidad a manifestar cualquier queja que tuvieran contra la actual Administración, indicándoles que "si queréis ser libres sedlo: está en vuestras manos: elegid entre el fuego y el agua: entre la esclavitud y la libertad: entre la ignominia y la gloria: entre la superstición y la filosofía: entre la ignorancia y la ilustración" (Manifiesto del 2 de mayo de 1833. AHEM: G.G.G. vol. 32, exp. 37).

El 3 de mayo el Congreso tomó conocimiento de una proposición recibida en su buzón, en la "que se pide la expulsión de españoles" (Acta del 3 de mayo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 182).[230]

El 6 de mayo el Congreso les concedió "a los vecinos de la compresión de Ixtapan del Oro la gracia de remisión, de lo que adeudan por contribución directa hasta el último de marzo del presente año" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 293 del 6 de mayo de 1833: 241).

El Congreso dispuso que "el Gobierno hará que a la mayor posible brevedad se traslade a esta Ciudad, residencia de los Supremos Poderes, el Juzgado de Testamentos, Capellanías y Obras Pías, por lo que toca a las que se reconozcan

[229] Este Reglamento constaba de apartados referentes a: la formación y fuerza de la Milicia, a los exentos del servicio, a los fondos, a los nombramientos de los jefes y oficiales, al armamento, a las municiones, fornituras, caballos y monturas, a las divisas y uniformes, a la instrucción, a las obligaciones de la Milicia, a las prerrogativas, a las penas, al juramento, al Inspector, a los sub-inspectores y a las reglas generales.
[230] Se puso sobre la mesa, para que pudiera ser adoptada por un Diputado.

sobre fincas ubicadas en el Estado" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 294 del 6 de mayo de 1833: 241).

El Congreso acordó secundar "la exposición que el de Jalisco dirigió al Excelentísimo Señor Presidente de la República, pidiendo el castigo de los generales de Yucatán por los atentados que cometieron en la Capital del mismo los días 22 de noviembre y 22 de diciembre de 1831" (Acta del 6 de mayo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 193).

El 7 de mayo el Congreso autorizó al Gobierno para que nombrara una comisión que promoviera el pronto cumplimiento del decreto que dispuso la translación a la Ciudad de Toluca del Juzgado de Testamentos, Capellanías y Obras Pías (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 295 del 7 de mayo de 1833: 242).

El Congreso al derogar el decreto 95 del 18 de febrero de 1828, por el que se había creado el Instituto Literario, facultó al Gobernador para que estableciera "el Instituto Literario del Estado, bajo las bases que juzgue conveniente, pudiendo gastar en dicho Colegio hasta la suma de 1,500 pesos mensuales". Se dispuso que el Gobernador remitiera al Congreso lo más pronto posible el Reglamento y Plan de Estudios del Colegio y que el Congreso nombrara una Junta de tres individuos, la que se pondría de acuerdo con el Gobernador para dar cumplimiento a este decreto (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 296 del 7 de mayo de 1833: 242).

El 8 de mayo el Congreso impuso "penas a los empleados que emigraron, por no reconocer al Gobierno que existía el 17 de noviembre de 1832". En él se dispuso que los empleados que en ese día "emigraron de esta Ciudad, perdieron sus empleos y no podrán volver a ellos ni a otros hasta pasados dos años, en caso de que estén vacantes"; que los "que después de reconocer al Gobierno desertaron y fueron a servir al intruso, perdieron los empleos y la opción de obtenerlos en lo sucesivo"; y que los "que a juicio del Gobernador y de su Consejo merezcan ser colocados, podrán pedir habilitación al Congreso" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 297 del 8 de mayo de 1833: 243).

El 9 de mayo el Congreso dispuso que se "adjudican a los ayuntamientos para sus propios, los terrenos realengos o baldíos que existan en el territorio de sus municipalidades" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 298 del 9 de mayo de 1833: 244).

El Congreso dispuso “que todas las mieles que salgan de las haciendas de caña para su consumo en el Estado o fuera de él, llevarán precisamente la correspondiente guía de la aduana en cuyo suelo se elaboren (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 299 del 9 de mayo de 1833: 245).

El Congreso determinó que “el barril de aguardiente de caña, además de los veinte reales que satisface por derecho de permisión al pie de la fábrica, en cumplimiento de la Ley 101, pagará en el lugar de su consumo un peso por derecho de alcabala y a proporción de las porciones menores (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 300 del 9 de mayo de 1833: 246).

El Congreso acordó hacer una “iniciativa al Congreso de la Unión, para la derogación de la providencia tomada por el Ejecutivo de la Federación en febrero de 1822, por la que se gravaron con el siete por ciento las incrustaciones y piedras preciosas minerales que se exportan por los extranjeros del territorio de la República” (Acta del 9 de mayo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 242).

El Congreso nombró a los diputados que habían de formar la Junta Consultiva del Gobierno para la Dirección del Instituto Literario. En dicho escrutinio salieron electos como titulares los diputados: Mariano Arizcorreta, Antonio Escudero y Román García y como suplentes los diputados Joaquín Valdés y Joaquín Solórzano (Acta del 9 de mayo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 245).

El 10 de mayo el Congreso dispuso que “todo habitante del Estado puede ocurrir a sus tribunales a deducir sus derechos por sí o por el apoderado que guste, con tal que éste tenga las calidades requeridas por la Ley, sin necesidad de que sea Procurador de número” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 301 del 10 de mayo de 1833: 246).

El Congreso facultó al Gobernador para que verificase que los ayuntamientos de las cabeceras de partido cumplieran con la obligación de dotar a los alcaides de sus cárceles, así como para crear “en el Estado ciento veinte celadores que ayuden a los alcaides en la custodia de las cárceles, con la dotación de ciento veinte pesos mensuales cada uno, que se les pagarán mensualmente en las administraciones respectivas” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 302 del 10 de mayo de 1833: 246).

El Congreso tomó conocimiento de un oficio recibido en el buzón, por el que se "elogiaba a la Legislatura por haber establecido este medio de comunicación con el pueblo" (Acta del 10 de mayo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 246).

El 11 de mayo el Congreso acordó que "los señores diputados Don José María Vázquez y Don Cristóbal Andrade se presentaran a la mayor posible brevedad a esta Capital a desempeñar su encargo" (Acta del 11 de mayo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 253).

El 13 de mayo el Congreso aprobó "la imposición y cobro de tres granos por arroba con que se gravó el pulque que se introduzca al Pueblo de Huascazaloya, por disposición provisional de la Prefectura del Distrito en fines de 832" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 303 del 13 de mayo de 1833: 247).

El Congreso nombró Benemérito Ciudadano del Estado al Coronel José Vicente González (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 304 del 13 de mayo de 1833: 247).

El 14 de mayo el Congreso nombró como "Inspector Interino de la Milicia Cívica del Estado al Ciudadano Coronel Silvestre Camacho" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 305 del 14 de mayo de 1833: 247).

El 16 de mayo el Congreso autorizó al Gobierno para que termine todos los negocios que tenga en el Estado el Señor Vicente José Villada (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 306 del 16 de mayo de 1833: 247).

El 17 de mayo el Congreso tomó conocimiento de una petición recibida en el buzón, por la que se pedían "varias reformas sobre disminución del número de empleados, arreglo de diezmos, establecimiento de escuelas de primeras letras, Administración de Justicia y fábricas de aguardiente" (Acta del 17 de mayo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 298).

El Congreso recibió en su buzón una proposición referente a las ventas de los bienes de los carmelitas (Acta del 17 de mayo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 298).[231]

[231] El 20 de mayo esta proposición fue adoptada por el Diputado Ramón Gamboa (Acta del 20 de mayo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 314).

El Congreso recibió en el buzón una proposición, por la que se pedía disminuir o abolir el derecho de alcabala al aguardiente de caña (Acta del 17 de mayo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 300).

El 18 de mayo el Congreso tomó conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, por el que se pedía "que se prohíba la concurrencia de los protestantes a nuestros templos y se les permita poner los suyos" (Acta del 18 de mayo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 310).

El 20 de mayo el Congreso nombró Benemérito Ciudadano del Estado a Manuel Gómez Pedraza (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 307 del 20 de mayo de 1833: 248).

El Congreso indultó "de la pena a que se hayan hecho acreedores los reos: Francisco Téllez, José María Torices, José Guadalupe de la Piedra y José de la Luz Olvera" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 308 del 20 de mayo de 1833: 248).

El Congreso decretó el aumento de las prefecturas de ocho a once al dividir la Prefectura de México en dos distritos, uno llamado del Este de México con Cabecera en Texcoco y otro del Oeste de México, con Cabecera en Tlalnepantla y dividió las prefecturas de Taxco y Acapulco para crear las de: Sultepec y Chilapa. La Prefectura del Este de México se integró con los partidos de: Texcoco, Chalco y Teotihuacán; la Prefectura del Oeste de México con los partidos de: Tlalnepantla, Tlalpan, Zumpango y Cuautitlán; la Prefectura de Taxco con los partidos de: Taxco, Ajuchitlán y Teloloapan; la Prefectura de Sultepec con los partidos de: Sultepec, Temascaltepec, Zacualpan y Tejupilco; la Prefectura de Acapulco con los partidos de: Acapulco y Tecpan, y la Prefectura de Chilapa con los partidos de: Chilapa y Tixtla (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 309 del 20 de mayo de 1833: 249).

El 21 de mayo el Congreso aprobó recursos económicos para cubrir el pago de las espadas que se construyeron por cuenta del Estado para los generales Santa-Anna y Terán (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 310 del 21 de mayo de 1833: 248).

El 25 de mayo el Congreso al derogar el decreto número 28 del Primer Congreso Constitucional, permitió las corridas de toros bajo ciertas condiciones. Estableció que "los toros que se lidien en lo sucesivo no serán puntales", que "por cada corrida pública se pagarán veinticinco pesos por obtener licencia de la autoridad política

respectiva", y que "por las corridas que se hicieren sin la licencia… se exigirán cincuenta pesos de multa a los infractores" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 311 del 25 de mayo de 1833: 250).

El Congreso le concedió al Pueblo de Tetepango, por espacio de un año, un día de tianguis cada semana, con exención de los derechos aduanales (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 312 del 25 de mayo de 1833: 250).

El Congreso acordó que se trasladaran a la Ciudad de Toluca los papeles del extinto Juzgado de Tierras y Aguas pertenecientes al Estado (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 313 del 25 de mayo de 1833: 250).

El Congreso General determinó que "la siembra y expendio del tabaco será libre por parte del Gobierno General", y que "subsiste prohibida la importación del tabaco extranjero, así como en rama como labrado (Decreto del 25 de mayo de1833. BJMLM: vol. 72, exp. 97).

El 27 de mayo el Congreso General aprobó "las disposiciones acordadas en el Convenio de Zavaleta, dirigidas al restablecimiento de la paz y del orden constitucional en toda la República" (Decreto del 27 de mayo de 1833. BJMLM: vol. 72, exp. 98).

El 29 de mayo el Congreso facultó al Gobierno para que pudiera vender en subasta pública las casas conocidas por el Cuartel y Verdiguel de la Ciudad de Toluca (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 314 del 29 de mayo de 1833: 251).

El Congreso facultó al Gobierno "para que establezca peajes en los caminos del Estado que crea convenientes, rematándolos a la mayor brevedad en el mejor postor, e invirtiendo sus productos precisamente en la composición de esos caminos, para la que convocará igualmente empresarios, si lo juzga oportuno" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 315 del 29 de mayo de 1833: 251).

El Congreso rehabilitó al Licenciado Agustín Vallarta para ejercer su profesión y obtener empleo (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 316 del 29 de mayo de 1833: 250).

El Congreso determinó el establecimiento de la Dirección General de Rentas del Estado, la cual debía conformarse por un Director, un Oficial Mayor, un Segundo

Oficial y tres escribientes. El Director debía ser nombrado por el Poder Legislativo, los subalternos por el Ejecutivo a propuesta de terna del Director y el Oficial Mayor debía proponer a "cualquier individuo que le parezca a propósito, sea o no empleado del Estado" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 317 del 29 de mayo de 1833: 252).

El Congreso tomó conocimiento de una exposición recibida en el buzón, relativa al arreglo de la Contaduría (Acta del 29 de mayo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 368).

El Congreso a solicitud del Gobernador le concedió licencia para separarse de su cargo al Diputado Joaquín Solórzano, a fin de que dirija una fuerza destinada a auxiliar al Comandante General de Michoacán (Acta del 29 de mayo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 368).

El 30 de mayo el Congreso declaró propiedad del Estado la Fábrica conocida en Toluca con el nombre de Beaterio, para destinarla como local del Instituto Literario (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 318 del 30 de mayo de 1833: 253).

El Congreso gravó con un cinco por ciento sobre su valor la madera que se introducía al Distrito Federal por agua (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 319 del 30 de mayo de 1833: 253).

El Congreso integró la Diputación Permanente de su Primer Receso, presidida por el Diputado Mariano Arizcorreta. Nombró como Secretario al Diputado José Rafael González Arratia, como miembros a los diputados: Pedro Guadarrama, Joaquín Bars y José del Villar y Bocanegra y como Suplente al Diputado Rafael Mario Villagrán (Acta del 30 de mayo de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 384).

El 31 de mayo el Congreso dispuso que "el Gobernador proceda a la apertura de un canal desde la Laguna de Chalco hasta la de Texcoco, que para tal efecto "invitará a los interesados en este desagüe para que contribuyan de algún modo a la apertura del canal", y que "los terrenos que resulten desecados y no sean de propiedad particular, se repartirán a censo respectivo entre vecinos pobres y honrados de los pueblos" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 320 del 31 de mayo de 1833: 253).

El 1 de junio el Congreso aprobó el presupuesto del Periódico Oficial Reformador, en el cual se indicaba que se "encargará a los prefectos el cobro de las suscripciones al

Periódico, asignándoles el cinco por ciento de lo que recauden" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 321 del 1 de junio de 1833: 254).

El Congreso nombró como letrados para la instrucción y resolución en tercera instancia de las causas civiles y criminales a: Vicente Güido de Güido, Juan Rodríguez Puebla, José Luis Solórzano Guerrero, José María Esquivel, Juan Nepomuceno Canel, José María Tamayo, Gabriel Gómez de la Peña, Bernardo González Angulo, José Manuel Zozaya Bermúdez, Bernardino Olmedo, Mariano Guerra Manzanares y Rosalío José Arriaga (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 322 del 1 de junio de 1833: 254).

El Congreso aprobó el gasto de 700 pesos para la compra de muebles de la Inspección de la Milicia Cívica (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 323 del 1 de junio de 1833: 255).

El Congreso nombró a José Ramírez como Director General de Rentas del Estado (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 324 del 1 de junio de 1833: 255).

El Congreso expidió el Presupuesto de Gastos del Estado de México para el Año Económico del 2 de junio de 1833 al 2 de junio de 1834,[232] en el cual se seguían manteniendo sin variación las contribuciones y las percepciones del personal de los poderes (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 325 del 1 de junio de 1833: 255).[233]

Se incluían en las partidas del Poder Ejecutivo las correspondientes a: gastos de guerra, dos certámenes y el sueldo de un Escribano de Gobierno. En las partidas del Poder Legislativo se fijaron dos mil pesos para gastos de impresión y en forma separada de los poderes se presentaban los gastos comunes de Hacienda, en donde además de los sueldos del personal y otras partidas se incluían: pagos por concepto de pensiones, indemnizaciones, réditos, funciones de la Iglesia y apoyos a la Escuela Amiga de la Ciudad de Toluca.

[232] Constaba de apartados referentes: al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los gastos comunes de Hacienda y al resumen.

[233] Los 21 diputados percibían anualmente $3,000.00, el Redactor $1,600.00 y el Oficial Mayor $1,500.00. Las contribuciones eran: alcabalas, consumo de efectos extranjeros, impuesto a la moneda, renta del tabaco, papel sellado, derechos de ensaye y de metales preciosos, bienes vacantes y mostrencos, multas, media anata secular y eclesiástica, peajes, temporalidades, derechos de amortización, dos reales por tonelaje de buques extranjeros, nuevos diezmos, noveno y nuevo decimal, pensión a la Mitra de México, vacantes mayores y menores, espolios, oficios vendibles y renunciables, elaboración de la moneda y derechos accesorios y rentas de gallos.

El Congreso General autorizó “al Presidente de la República para que pueda mandar personalmente al Ejército, si así lo considera conveniente a la conservación de la tranquilidad pública” (Decreto del 1 de junio de 1833. BJMLM: vol. 72, exp. 101).

El 2 de junio el Congreso le entregó al Gobernador Lorenzo de Zavala el diploma que lo hacía acreedor al Título de Ciudadano Benemérito en Grado Heroico (Acta del 2 de junio de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 414).

El Presidente del Congreso, Diputado Antonio Escudero, al entregarle al Gobernador dicho reconocimiento señaló, que “la historia de todos los siglos nos enseña que en los pueblos civilizados se han acordado premios, honores y recompensas a las grandes acciones, a las sublimes virtudes” (Acta del 2 de junio de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 414).

El Gobernador Lorenzo de Zavala, al acudir a la clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, señaló que “me nombrasteis Gobernador con unanimidad de vuestros sufragios, aprobasteis en los días críticos en que ejercía el mando sin responsabilidad, disputasteis mi persona al Estado de Yucatán que me nombró su Representante y al Gobierno General que me honró con una alta Comisión Diplomática, y por último, me habéis declarado en Grado Heroico Benemérito del Estado en circunstancias cuando la calumnia comenzaba de nuevo a perseguirme, cuando la malevolencia pugnaba todos los resortes en la intriga para humillarme, y cuando el Partido Aristocrático me llamaba como el principal blanco de sus tiros” (Acta del 2 de junio de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 415).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Antonio Escudero, señaló que los diputados “se retiran pues, no a descansar sino a estudiar, a meditar y a trabajar nuevos proyectos que en las sesiones venideras produzcan la felicidad de sus comitentes al menos nuevos adelantos, nuevos beneficios, nuevas mejoras" (Acta del 2 de junio de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 38, foja 420).[234]

El 7 de junio el Congreso General facultó al Supremo Gobierno Federal para dictar todas las medidas que juzgue convenientes al restablecimiento del orden y

[234] No se localizaron las actas de la Diputación Permanente.

consolidación de las instituciones federales" (Decreto del 7 de junio de 1833. BJMLM: vol. 72, exp. 102).

El 9 de junio la Diputación Permanente al aclarar lo dispuesto en el decreto del 8 de mayo último, determinó que perderían sus cargos todos los empleados que no reconocieron al Gobierno que asistía el 17 de noviembre de 1832 y los que después de reconocer al Gobierno desertaron, aun cuando no sirvieran sus destinos en la Ciudad de Toluca (Poder Legislativo II, 2001. Decreto del 9 de junio de 1833: 260).

El 12 de junio el Congreso General ofreció "asilo dentro de los términos del Distrito Federal a los Supremos Poderes del Estado de México, para que puedan trasladarse cuando lo estimen necesario, y residan en él hasta que se consideren con seguridad en la Capital de dicho Estado" (Decreto del 12 de junio de 1833. AHEM: L.L.D.F. vol. 11, exp. 26).

El 14 de junio la Diputación Permanente convocó para el 21 del presente al Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso, el cual tenía por objeto: "dictar todas las providencias que tiendan a conservar la tranquilidad pública y sostener la actual forma de gobierno", "el arreglo de la Administración de Justicia", "todos los asuntos que a juicio del Congreso o del Gobierno sean de urgente resolución", y "los económicos de la Legislatura" (Poder Legislativo II, 2001. Convocatoria del 14 de junio de 1833: 261).

El 21 de junio el Congreso reunido en Junta integró la Mesa Directiva de su Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, presidida por el Diputado Félix María Aburto. Nombró como Vicepresidente al Diputado Rafael Mario Villagrán, como secretarios propietarios a los diputados: Mariano Arizcorreta y José Rafael González Arratia y como secretarios suplentes a los diputados: Juan Ignacio Dávila y Pedro Guadarrama (Acta del 21 de junio de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 39, foja 1).

El 22 de junio el Gobernador Lorenzo de Zavala, al acudir a la apertura del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso, señaló que el Gobierno había tomado las medidas necesarias para cortar la rebelión, que con "profundo sentimiento anunciaba la triste nueva de que el cólera asiático ha invadido nuestras costas y comienza a aparecer en el territorio del Estado", y que "el Convenio de Zavaleta que algunos supusieron el tratado de una paz durable y duradera, fue siempre visto por la Asamblea del Estado como un armisticio, una tregua, una suspensión de armas en la

guerra que constantemente destroza a la República" (Acta del 22 de junio de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 39, foja 3).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Félix María Aburto, señaló que esta Asamblea "que conoce los males de la República, que desea cortarlos de raíz, y que por lo mismo, comenzó a dictar remedios radicales en sus sesiones extraordinarias del presente año, protesta por mi órgano que se ocupará de los asuntos para que se ha reunido extraordinariamente; pero que sobretodo, no perdonará arbitrio de los que están en la órbita de sus atribuciones para asegurar la tranquilidad pública y sostener la actual forma de gobierno como el primero y más importante, de los objetos contenidos en la convocatoria" (Acta del 22 de junio de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 39, foja 4).

El 25 de junio el Congreso tomó conocimiento de la Memoria que presentó la Diputación Permanente, en la que se señaló que: "previéndose que podría ser necesaria en México la presencia del Gobernador Lorenzo de Zavala para acordar con el Vicepresidente de la República medidas que atacaran de proceso la revolución, le expidió circular, concediéndole cuarenta y ocho horas de licencia para usase de ésta en el momento que las circunstancias lo exigieran, y así es que la disfrutó en los días 18, 19 y 20, con notables ventajas en el servicio público (Acta del 25 de junio de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 39, foja 8).[235]

El Congreso tomó conocimiento del proyecto de Código Penal que elaboró la Comisión de Justicia, por acuerdo de la anterior Legislatura (Acta del 25 de junio de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 39, foja 22).[236]

Acudió al Congreso el Ciudadano Silvestre Camacho, a rendir su protesta de ley como Inspector Interino de la Milicia Cívica del Estado (Acta del 25 de junio de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 39, foja 45).

El 26 de junio el Congreso tomó conocimiento del proyecto que elaboró el Ciudadano Francisco Granados, por el que se proponía establecer en el Distrito Federal, estados y territorios de la República un Banco Nacional. Este proyecto "lo hicieron suyo el 31

[235] De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política, en este periodo se hizo cargo del Poder Ejecutivo el Teniente Gobernador José Figueroa.
[236] En el acta están insertos desde el artículo 1 al 63, indicándose que del 64 al 184 "constan en el Periódico Reformador del 21, 22, 23 y 25 de junio del corriente año".

del mes pasado los señores: Gamboa, Villar, Guadarrama, Villagrán y Bars" (Acta del 26 de junio de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 39, foja 47).

El 27 de junio el Congreso tomó conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, por el que se pedía que "se declaren fuera de la ley todos los que se pronuncien contra el sistema federal" (Acta del 27 de junio de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 39, foja 72).

El 28 de junio el Congreso acordó que se propusiera al Presidente de la República expulsar "del territorio de la República a los coroneles Don Ángel Pérez Palacios y Don Antonio Gaona, a Don José Fernández de Celis y a Don Luis Espino, por ser enemigos declarados del sistema representativo, popular y federal" (Acta del 28 de junio de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 39, foja 76).

Acudió al Congreso el Señor José Ramírez a rendir su protesta de ley como Director General de Rentas (Acta del 28 de junio de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 39, foja 78).

El Congreso acordó que se llamara a su seno al Primer Diputado Suplente, para remplazar al Diputado José Ramírez (Acta del 28 de junio de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 39, foja 78).

El 29 de junio el Congreso tomó conocimiento de un oficio del Diputado Electo Cristóbal Andrade, en el que pedía que se le exonerara de ocupar dicho cargo, para seguir ocupando el cargo de Prefecto de Huejutla (Acta del 29 de junio de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 39, foja 84).

El Congreso acordó que se propusiera al Presidente de la República expulsar del territorio de la República a: Luis Gonzaga Vieyra, Juan Bautista Morales, Felipe Neri del Barrio, Carlos María de Bustamante y Matías Carrasco (Acta del 29 de junio de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 39, foja 84).

El Congreso le concedió "al Señor Diputado Don Cristóbal Andrade licencia por tres meses, para que se encargue de la Prefectura de Huejutla" (Acta del 29 de junio de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 39, foja 85).

El 1 de julio el Congreso declaró “pertenecientes al Estado los bienes que poseen en el territorio los Religiosos Camilos” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 326 del 1 de julio de 1833: 261).

El Congreso tomó conocimiento de dos exposiciones recibidas en el buzón, en las que se pedía “la expulsión absoluta de españoles del territorio del Estado” (Acta del 1 de julio de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 39, foja 89).

El 2 de julio el Congreso nombró como ministros del Supremo Tribunal Superior de Justicia: a José María Torres Cataño y a Juan José Rosales, y como Fiscal a Francisco Verde y Fernández (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 327 del 2 de julio de 1833: 262).

El 3 de julio el Congreso le otorgó facultades extraordinarias al Gobernador para que “contrate un préstamo hasta de doscientos mil pesos”, para “que ocupe las cantidades que juzgue “oportunas de los bienes de los pronunciados”, para “que expulse del territorio del Estado a los que crea perjudiciales o le sean sospechosos”, para “que separe a los empleados que no merezcan de su confianza, aun cuando sean de nombramiento del Congreso”, para que “ponga sobre las armas cuantas tropas crea conveniente”, para “que erogue los gastos que juzgue precisos”, y para “que dicte todas las providencias que sean a su juicio necesarias para sostener la forma de gobierno y acallar la presente revolución” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 328 del 3 de julio de 1833: 262).

El Congreso en sesión secreta extraordinaria le admitió “al Ciudadano José María Heredia la dimisión que hace del cargo de Diputado” (Oficio del 3 de julio de 1833. AHEM: L.L.D.E. vol. 31, exp. 20).[237]

El 6 de julio el Gobernador dispuso que “los que hayan tomado las armas contra el Gobierno por el Plan Subversivo de D. Gabriel Durán podrán redimirse de la pena a que se han hecho acreedores, siempre que se presenten a las autoridades legítimas dentro de tres días después de publicado este decreto en las cabeceras de partido en que residan o en algún punto de él” (Decreto del Ejecutivo del 6 de julio de 1833. BJMLM: vol. 80, exp. 266).

[237] No se localizaron las actas de las sesiones secretas de esa Legislatura ni expedientes referentes a dicha renuncia.

El 7 de julio el Congreso efectuó su sesión en el Salón de las Casas Conciliares del Ayuntamiento de la Ciudad de Lerma, en virtud de "las circunstancias extraordinarias que el 5 del corriente obligaron a los Supremos Poderes del Estado a salir de la Capital" (Acta del 7 de julio de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 39, foja 107).

El Congreso dispuso que "el pronunciamiento hecho por D. Mariano Arista y D. Gabriel Durán proclamando dictador al Exmo. Sr. Presidente D. Antonio López de Santa Anna, es destructor del sistema federal adoptado por la Nación Mexicana", que "todos los ciudadanos del Estado que voluntariamente se hayan adherido a dicho pronunciamiento, a más de las penas a que se hayan hecho acreedores por las leyes preexistentes, se declaran indignos de la confianza pública, e inhábiles perpetuamente para obtener empleo alguno y desempeñar cargo o comisión en el Estado", y que "los ayuntamientos del Estado que se hallen en el mismo caso serán renovados, entrando a funcionar en sus respectivas municipalidades, los que existían en 1829, ínterin se procede a nuevas elecciones" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 329 del 7 de julio de 1833: 263).

El Congreso acordó que "los señores diputados que se hallen en Toluca y no se presenten a esta Ciudad (Lerma) el día de mañana a las 8 del día, sin causa legítima suficientemente comprobada, incurrirán por el mismo hecho en una multa de quinientos pesos"; que "a los señores diputados que se hallen en México o en otro punto, sin licencia se les oficiará a fin de que se presenten a esta Ciudad dentro del tercer día, bajo la misma pena en caso de contravención", y que "los señores diputados que estando hoy ya en esta Ciudad, se ausenten sin licencia se declararán indignos de ser representantes del Estado, y se llamará inmediatamente al Suplente o suplentes que deban remplazarlos" (Acta del 7 de julio de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 39, foja 107).[238]

El 10 de julio el Congreso dispuso que "se participará al Congreso General y a las legislaturas de los estados, los motivos por que la de México se ha trasladado a esta Ciudad (Lerma)" (Acta del 10 de julio de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 39, foja 113).

[238] Esta proposición se hizo porque a dicha sesión sólo habían asistido los señores diputados: Román García, Joaquín Valdés, Ramón Gamboa, Joaquín Bars, Pedro Guadarrama, José Ramírez, Rafael Mario Villagrán, Juan Ignacio Dávila, José del Villar, Mariano Arizcorreta, José Rafael González Arratia y Félix María Aburto.

El 18 de julio el Congreso acordó que “se suspendan las sesiones extraordinarias hasta que las circunstancias exijan su continuación” (Acta del 18 de julio de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 39, foja 114).

El Congreso le concedió al Diputado José Ramírez una licencia por veinte días, “para pasar a la Ciudad Federal a asuntos importantes, con obligación de comparecer luego que se me llame” (Acta del 18 de julio de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 39, foja 114).

El 1 de agosto el Congreso volvió a sesionar en su Recinto habitual de la Ciudad de Toluca (Acta del 1 de agosto de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 39, foja 114).

El 11 de agosto el Congreso nombró como Presidente de la Mesa Directiva del segundo mes de su Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones al Diputado Joaquín Solórzano y como Vicepresidente al Diputado José del Villar (Acta del 11 de agosto de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 39, foja 117).

El Congreso acordó llamar al Segundo Diputado Suplente, para entrar a funcionar en lugar del Diputado José María Heredia (Acta del 11 de agosto de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 39, foja 117).

El 12 de agosto el Congreso aprobó “la credencial del Ciudadano Manuel Robredo, para que como Segundo Suplente viniere a llenar la falta del Señor Heredia” (Acta del 12 de agosto de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 39, foja 119).

El Gobernador Lorenzo de Zavala, al acudir a la clausura del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso, señaló que “durante este periodo la Capital fue invadida por las fuerzas de los facciosos, y su accidental superioridad obligó al Gobierno a abandonar el asiento de los Supremos Poderes trasladándose a Lerma; plaza fortificada con anticipación para poder servir de asilo a las autoridades del Estado e imponer un obstáculo invencible a los invasores que se dirigían a la Capital de la Federación, combinados con las otras secciones sublevadas” (Acta del 12 de agosto de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 39, foja 119).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Joaquín Solórzano, le indicó al Gobernador que “reunida la Legislatura en sesiones extraordinarias para acudir al sostén de la Federación atacado por el pronunciamiento

que en distintas ocasiones hicieron algunos jefes del Ejército, se ocupó exclusivamente de la conservación del sistema y de la seguridad interior del Estado. Interrumpidas las sesiones por sucesos propios de la guerra, el Congreso creyó acudir mejor a todas las necesidades, facultando al Ejecutivo extraordinariamente y ocupándose de los casos particulares que ocurrieran, lo hizo así y la experiencia ha demostrado el acierto de esta medida que depositó una suma inmensa de poder en manos de vuestra excelencia, porque supo usarla con economía y nunca para oprimir al desgraciado" (Acta del 12 de agosto de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 39, foja 120).

El 14 de agosto el Congreso reunido en Junta integró la Mesa Directiva del primer mes de su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado José Rafael González Arratia y la Vicepresidencia del Diputado Ramón Gamboa. Nombró para todo el periodo ordinario de sesiones como secretarios propietarios a los diputados: Joaquín Solórzano y Félix María Aburto y como secretarios suplentes a los diputados: Juan Ignacio Dávila y Manuel Robredo (Acta del 14 de agosto de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 40, foja 2).

El 15 de agosto el Gobernador Lorenzo de Zavala, al acudir a la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, señaló que "antes de la desastrosa rebelión militar, que ha destrozado el Estado y una parte de la República, la marcha de los negocios era satisfactoria porque la Tesorería General llenaba sus atribuciones, los tribunales despachaban con rapidez las causas pendientes entre las cuales había muchas atrasadas por las pasadas convulsiones, las escuelas volvían a ser concurridas por los niños de uno y otro sexo, los caminos se componían invirtiendo en ellos el producto de los peajes, el Instituto Literario se había comenzado a organizar bajo los mejores auspicios, nuestra Ley de Milicia Cívica daba orden y regularidad a este cuerpo de ciudadanos armados cuyo instituto es el de sostener las instituciones, y al tiempo de que todos los ramos de la administración tomaban su curso natural, los habitantes del Estado se dedicaban a sus ocupaciones pacíficas bajo la protección de las leyes" (Acta del 15 de agosto de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 40, foja 3).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado José Rafael González Arratia, señaló que esta Legislatura sin hacer caso "de la calumnia, ni deseosa de aplausos seguirá dictando las leyes que crea justas para conservar la dignidad del culto, y la recta inversión de las cuantiosas rentas que con el nombre de eclesiásticas sólo han servido para dar pábulo a pasiones innobles". Indicó que "el

bienestar de los pueblos y su felicidad, será el único objeto de que ocupará esta Legislatura, pues para esto ha sido llamada a este Santuario Augusto, y así debe corresponder a la confianza de sus comitentes" (Acta del 15 de agosto de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 40, foja 5).

El 16 de agosto el Congreso aprobó las providencias dictadas por el Ejecutivo para precaver y evitar los estragos de la epidémica enfermedad del cólera, entre las cuales estaba el establecimiento de la Junta de Sanidad, cuya operación debía reglamentar (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 330 del 16 de agosto de 1833: 263).

El 19 de agosto el Congreso nombró a Juan José Rosales como Fiscal del Supremo Tribunal Superior de Justicia, y como Ministro a Juan José Zamorano (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 331 del 19 de agosto de 1833: 264).

El 31 de agosto el Supremo Gobierno acordó que "los hospicios, y las fincas rústicas y urbanas que poseían los Misioneros Religiosos de Filipinas, con todo cuanto les pertenezca, quedan a cargo de la Federación, y también todos los capitales y bienes de cualesquiera clase que deban por su función y objeto, distribuirse fuera del territorio de la República (Decreto del 31 de agosto de 1833. BJMLM: vol. 76, exp. 74).

El 9 de septiembre el Congreso confirmó los artículos 1º, 2º y 3º del decreto del 20 de julio que expidió el Gobernador, por los que se impusieron tres granos a cada arroba de pulque (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 332 del 9 de septiembre de 1833: 264).

El Congreso declaró "subsistentes todos los actos administrativos del Gobierno del Ciudadano Lorenzo de Zavala, desde principios de noviembre a 17 de febrero últimos, ínterin el Congreso ocupándose parcialmente de ellos los confirma o revoca" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 333 del 9 de septiembre de 1833: 265).

El 10 de septiembre el Congreso nombró como "Teniente Gobernador Interino del Estado, mientras se presenta el Propietario, al Ciudadano Domingo Bórica (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 334 del 10 de septiembre de 1833: 265).

El Congreso determinó que "entre las penas aplicadas a los que la autoridad competente declare por asesinos de (Vicente) Guerrero, una de ellas será, si fueren súbditos del Estado, la imposibilidad perpetua de adquirir derechos políticos en el mismo, aún por rehabilitación", y que "si no fueren súbditos del Estado los anunciados

asesinos, nunca se les permitirá que se domicilien en el mismo" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 335 del 10 de septiembre de 1833: 265).

El 12 de septiembre el Congreso aprobó "la providencia del Ejecutivo, contraída a que se trasladen a Lerma los Supremos Poderes del Estado, en el 6 de junio próximo pasado, con motivo de acercarse a esta Ciudad los facciosos Escalada y Cuadros" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 236 del 12 de septiembre de 1833: 266).

El Congreso nombró a Vicente Rocafuerte como Ciudadano del Estado (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 337 del 12 de septiembre de 1833: 266).

El Congreso al derogar los artículos 13 y 135 de la Ley Reglamentaria de la Milicia Cívica del Estado de México, dispuso que "se consideraran simples jornaleros, para los efectos de esta Ley, a los individuos que trabajan diariamente en obras ajenas, y cuyo estipendio no pasa de un real y medio" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 338 del 12 de septiembre de 1833: 266).

El 13 de septiembre el Congreso dispuso que "queda exenta la Municipalidad de Nextlalpan, de pagar lo que adeudan sus vecinos por contribución de milicia cívica" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 339 del 13 de septiembre de 1833: 267).

El Congreso les concedió "a los vecinos del Pueblo de San Pablo de las Salinas, de la Municipalidad de Teutitlán que por el término de tres años no satisfagan en los alcabalatorios del Estado derechos por ninguna clase de sal que se extraigan del territorio de su Pueblo" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 341 del 13 de septiembre de 1833: 268).

El 14 de septiembre el Congreso le concedió "al Pueblo de Zempoala un día de tianguis semanario con exención de los derechos aduanales, en los efectos que en él se vendan al menudeo, por el espacio de dos años" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 340 del 14 de septiembre de 1833: 267).

El Congreso dispuso que "lo agraciados y pensionistas por el Estado que se hayan pronunciado por el Plan de los facciosos Arista y Durán, no percibirán desde el día de la publicación de este decreto, las cantidades que disfrutaban" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 342 del 14 de septiembre de 1833: 268).

El 17 de septiembre el Congreso nombró como Presidente de la Mesa Directiva del segundo mes de su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones al Diputado Ramón Gamboa y como Vicepresidente al Diputado Joaquín Valdés (Acta del 17 de septiembre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 40, foja 110).

El Congreso le concedió al Gobernador Lorenzo de Zavala "un mes de licencia, para que pueda separarse del Gobierno" (Acta del 17 de septiembre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 40, foja 111).[239]

El Congreso al admitir la renuncia que hizo José María Vázquez al cargo de diputado,[240] acordó que se llamara al suplente que debiera cubrir dicha vacante (Acta del 17 de septiembre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 40, foja 112).

El 18 de septiembre el Congreso separó el Pueblo de Tesca de la Municipalidad de San Marcos, y la agregó a la Municipalidad de Acapulco (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 343 del 18 de septiembre de 1833: 268).

El 20 de septiembre el Congreso dispuso las pensiones que debían disfrutar quienes se inutilizaran en el servicio del Estado y las que debían concederse a las viudas, huérfanos o padres de los que perecieran en la campaña. El pago de las pensiones debía hacerse "por la caja que juzgue oportuno el Gobierno, consultando a la comodidad de los interesados" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 344 del 20 de septiembre de 1833: 268).

El Congreso tomó conocimiento de una petición recibida en el buzón, por la que se acusaba de la injusticia que se había cometido en contra de Ignacio Reyes, al haberlo sentenciado un Agente del Gobierno a ocho años de servicio en el Sexto Regimiento Permanente (Acta del 20 de septiembre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 40, foja 118).[241]

El Congreso acordó que un comisionado se entrevistara con el Vicepresidente de la República, para manifestarle su desacuerdo en torno al decreto del 31 de agosto

[239] De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política, debió de hacerse cargo del Poder Ejecutivo el Teniente Gobernador Interino Domingo Bórica.
[240] Este Diputado nunca rindió su protesta de ley ante el Pleno.
[241] Esta petición fue suscrita por el Diputado Mariano Arizcorreta y aprobada posteriormente mediante el decreto 347 del 3 de octubre de 1833.

último, referente a los bienes de las Misiones de Filipinas (Acta del 20 de septiembre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 40, foja 123).

El 27 de septiembre el Congreso tomó conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, en el que se pedía que se tomara "en consideración un proyecto, para que todo empleado del Estado, cuyo sueldo sea de mil pesos arriba, entregue a la Biblioteca una obra de las que no hayan en aquel Establecimiento" (Acta del 27 de septiembre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 40, foja 149).

El Congreso recibió la protesta de José Zamorano, como Ministro del Tribunal Supremo de Justicia (Acta del 27 de septiembre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 40, foja 150).

El 1 de octubre el Congreso acordó que "de todos los decretos que contengan interés particular y no existan copias en el Archivo de esta Asamblea, se darán las que le falten con la competente autorización" (Acta del 1 de octubre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 40, foja 169).

El Congreso acordó que se "trascriba al Gobierno Federal, los acuerdos de los días 13 y 20 del pasado, relativos a comisionar al Señor Zavala, para que en conferencias privadas termine con el Vicepresidente las diferencias que hay sobre bienes de filipinos, y contribuciones impuestas a las haciendas del Estado" (Acta del 1 de octubre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 40, foja 170).[242]

El 2 de octubre el Congreso dispuso que "los ministros que en lo sucesivo entren a cubrir las vacantes, que hay o hubiere en el Supremo Tribunal de Justicia, sólo disfrutarán el sueldo de tres mil pesos anuales" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 345 del 2 de octubre de 1833: 271).

El Congreso nombró a José María Esquivel como Ministro del Supremo Tribunal Superior de Justicia (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 346 del 2 de octubre de 1833: 271).

El Gobernador reglamentó lo dispuesto en el decreto número 344 del 20 de septiembre de 1833, para determinar el modo de pagar las pensiones que debían

[242] Algunas actas de este Congreso son ilegibles, por lo que se desconoce la totalidad de los asuntos tratados en el Pleno.

disfrutar quienes se inutilizaran en el servicio del Estado y las que debían concederse a las viudas, huérfanos o padres de los que perecieran en la campaña (Poder Legislativo II, 2001. Decreto del Ejecutivo del 2 de octubre de 1833: 268).

El 3 de octubre el Congreso indultó "a Ignacio Reyes de la pena de ocho años de servicio en el 6º Regimiento, a que fue condenado por la anterior Administración, poniéndose en consecuencia en absoluta libertad" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 347 del 3 de octubre de 1833: 271).

El Congreso facultó al Ejecutivo del Estado para que nombrara a los párrocos sustitutos de los españoles. De igual manera determinó que "los españoles que tengan cargos o empleos eclesiásticos en el Estado, solo disfrutarán en lo sucesivo de la tercera parte de la congrua, renta o dotación de sus respectivos destinos; debiendo quedar los otros dos tercios para los mexicanos que les sustituyan en sus encargos o empleos". También determinó que "el Gobierno ejercerá la exclusiva en el nombramiento de párrocos sustitutos de los españoles, y se guardarán las mismas formalidades para estas previsiones que las designadas para dar los curatos en propiedad" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 348 del 3 de octubre de 1833: 271).

El 5 de octubre el Congreso tomó conocimiento "de un anónimo encontrado en el buzón que contiene varias reformas al proyecto sobre Montepío a los empleados del Estado, presentado por el Señor Robredo" (Acta del 5 de octubre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 40, foja 201).

El Congreso tomó conocimiento del dictamen sobre la Ley de Herencias (Acta del 5 de octubre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 40, foja 208).

El Congreso inició el proceso de aprobación del dictamen de la Ley de Diezmos (Acta del 5 de octubre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 40, foja 213).

El 8 de octubre el Congreso el concedió "al Pueblo de Santo Tomás Tetelilla, por el término de seis años, una feria anual, cuya duración será desde el domingo de Carnestolendas hasta el sábado siguiente inclusive, con franquicia de derechos en los efectos que se vendan a menudeo" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 349 del 8 de octubre de 1833: 271).

El 9 de octubre el Congreso determinó que no se perjudicaría al heredero o legatario la condición absoluta y perpetua de no casarse puesta en los testamentos (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 350 del 9 de octubre de 1833: 272).

El Congreso aprobó la "minuta de decreto sobre que se declaren insubsistentes las restricciones impuestas a las segundas nupcias en testamentos o contratos" (Acta del 9 de octubre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 40, foja 251).

El Congreso dispuso que "ningún diputado podrá celebrar contrato alguno con el gobierno sobre bienes y ventas del mismo Estado, que por su naturaleza o leyes preexistentes sean susceptibles de remate o contrato (Proposición del 9 de octubre de 1833. BJMLM: vol. 72, exp. 70).

El 10 de octubre el Congreso tomó conocimiento de la protesta de José María Esquivel como Ministro del Tribunal Superior de Justicia (Acta del 10 de octubre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 40, foja 257).

El 11 de octubre el Congreso fijó la dotación del Escribano de Diligencias del Gobierno en 600 pesos anuales (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 351 del 11 de octubre de 1833: 273).

El Congreso tomó conocimiento de un anónimo recibido "en el buzón, sobre varias faltas que se atribuyen a las autoridades de Sultepec" (Acta del 11 de octubre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 40, foja 258).[243]

El Gobernador informó sobre el fallecimiento del Diputado Juan Ignacio Dávila (Comunicado del 11 de octubre de 1833. BJMLM: vol. 72, exp. 71).

El Congreso General declaró "acto patriotismo heroico, poner en libertad al Presidente de la República, D. Antonio López de Santa Anna" (Decreto del 11 de octubre de 1833. BJMLM: vol. 72, exp. 105).

El 12 de octubre el Congreso determinó que el nombramiento, remoción y traslado de un Distrito a otro de los prefectos lo haga el Gobierno, de acuerdo con el Consejo (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 352 del 3 de octubre de 1833: 273).

[243] El Congreso acordó que dicha petición se pasara al Ejecutivo, para que tomara las providencias de su resorte.

El Congreso al joven Lorenzo Pellón le dispensó “la edad en este caso correspondió (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 353 del 12 de octubre de 1833: 273).

El Congreso integró a la Diputación Permanente de su Segundo Receso, presidida por el Diputado Joaquín Solórzano. Nombró como Secretario al Diputado Pedro Guadarrama, como miembros a los diputados: Joaquín Valdés y Manuel Robredo y como Suplente al Diputado Rafael Mario Villagrán (Acta del 12 de octubre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 40, foja 266).

El Congreso tomó conocimiento de una excitativa dirigida a su Secretaría, para que hiciera los arreglos que estime convenientes para que las sesiones iniciaran a la hora indicada. En aquella ocasión el Diputado Miguel Macedo Villanueva argumentó su excitativa al manifestar que, “habiendo notado que por la falta de arreglo en los escribientes de la redacción, algunas veces, cuando son las actas muy largas, no podían concluirse temprano como lo previene el Reglamento, y como por este motivo algunas ocasiones no se abre la sesión a la hora señalada y el público nota que es por omisión de los señores diputados” (Acta del 12 de octubre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 40, foja 266).

El Congreso acordó que “se llamara al cuarto suplente que debe entrar en funciones por muerte del Diputado Don Juan Ignacio Dávila” (Acta del 12 de octubre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 40, foja 268).

El 14 de octubre el Congreso nombró a los párrocos: Manuel Ordaz y Luis Pizarro miembros de la Junta Directiva que establecía la Ley de Diezmos (Acta del 14 de octubre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 40, foja 270).

El 15 de octubre el Congreso nombró como Primer Consejero del Gobierno del Estado a Domingo Bórica (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 354 del 15 de octubre de 1833: 273), el cual no obstante lo anterior, siguió fungiendo como Encargado del Poder Ejecutivo, al no nombrarse quien lo remplazara en el cargo de Teniente Gobernador Interino.

El Congreso les concedió a la viuda e hijos del Ciudadano Francisco Verde, una pensión mensual de 40 pesos (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 355 del 15 de octubre de 1833: 273).

El Congreso aprobó “el nombramiento del cuarto suplente Ciudadano Vicente Páez para que entre a funcionar de diputado por la muerte del Señor (Juan Ignacio) Dávila por tener los requisitos que pide la Ley” (Acta del 15 de octubre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 40, foja 277).

El 16 de octubre el Congreso dispensó al Ciudadano Joaquín Ramírez España varios requisitos para recibirse de Abogado (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 356 del 16 de octubre de 1833: 274).

El Congreso erigió un Pueblo en el Santuario de Chalma (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 357 del 16 de octubre de 1833: 274).

El Consejero del Gobierno Domingo Bórica, al acudir a la clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, señaló que nada nuevo se podía agregar en este periodo, ya que la guerra intestina “aún no desaparece de algunos lugares del Estado, y por otra la asoladora epidemia de cólera, han difundido el terror en los pueblos haciendo que permanezcan como en espera del término de tantas calamidades. En consecuencia, es clara y a ninguno puede ocultarse: el comercio, que forma uno de los primeros ramos de riqueza pública se halla paralizado, y los mezquinos ingresos de las aduanas han sido tomados unas veces por las tropas que el Gobierno necesita para defender las causas de los libres, y otras, por las de los enemigos, que principalmente de esta manera hostilizan a los pueblos y al Gobierno” (Acta del 16 de octubre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 40, foja 286).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Ramón Gamboa, señaló que “los representantes se retiran satisfechos con los sentimientos de una pura conciencia. Ellos les dicen que nunca han dejado de procurar la felicidad de sus comitentes: que han cumplido fielmente con los juramentos que hicieron para su bien, y que este augusto Santuario es testigo de que ellos han repetido los patrióticos votos que pronunciaron con las medras y glorias del pueblo mexicano” (Acta del 16 de octubre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 40, foja 288).

El 17 de octubre la Diputación Permanente “dio cuenta de un anónimo recibido en el buzón, en el que exponía el desarreglo y mala Administración de Justicia notada en el Juzgado de Primera Instancia de esta Ciudad”. Se acordó que este escrito se pasara

al Gobernador, a fin de tomar las providencias de su resorte (Acta del 4 de marzo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 19).[244]

El 18 de octubre la Diputación Permanente convocó al Congreso a su Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones a efectuarse el día 20 de dicho mes, el cual tenía por objeto ocuparse "solamente de sufragar por la persona que reemplazará al Sr. Yáñez en la Suprema Corte de Justicia de la Federación" (Poder Legislativo II, 2001. Convocatoria del 18 de octubre de 1833: 275).[245]

La Diputación Permanente dispuso llamar al Consejero Domingo Bórica, para que acudiera a rendir su protesta de ley (Acta del 4 de marzo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 19).

El 22 de octubre el Presidente de la República acordó suprimir varías comisarías, quedando subsistentes las comisarías generales de los estados de México, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Jalisco, Tamaulipas, Coahuila y Texas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Chihuahua (Decreto del 22 de octubre de 1833. BJMLM: vol. 74, exp. 228).

El 3 de noviembre el Presidente Antonio López de Santa Anna reconoció "como a uno de los principales autores de su independencia a D. Agustín de Iturbide por haberla proclamado en Iguala y conquistándola con su prudencia y valor" (Decreto del 3 de noviembre de 1833. BJMLM: vol. 74, exp. 228).

El 8 de noviembre la Diputación Permanente acordó llamar "por conducto del Gobierno al Señor Diputado Suplente Don Mariano Delgado, para que se presentase en las sesiones de noviembre a ocupar la vacante del Señor (Cristóbal) Andrade" (Acta del 4 de marzo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 19).[246]

El 12 de noviembre la Diputación Permanente excitó "al Gobierno para que a la mayor brevedad se nombrasen a los jefes de la milicia cívica y se arreglen los batallones (Acta del 4 de marzo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 20).

---

[244] No se localizaron las actas de la Diputación Permanente.

[245] Al parecer el periodo extraordinario de sesiones antes señalado no se efectuó, toda vez que en los archivos no se localizaron las actas respectivas (BJMLM. Colección de Actas: vols. 40 y 41). Prueba de dicha afirmación es que en la convocatoria del 2 de enero de 1834 para convocar a un periodo extraordinario del Congreso se volvió a tratar el asunto del reemplazo del Sr. Yáñez en la Suprema Corte de Justicia de la Federación (Poder Legislativo II, 2001. Convocatoria del 2 de enero de 1834: 279).

[246] Se informó que "la Secretaría dirigió la comunicación al Gobierno, quien en respuesta insertó la renuncia que hace dicho Señor (Mariano Delgado) del encargo de Diputado".

El 14 de noviembre la Diputación Permanente volvió a convocar a la Legislatura a su Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones para el día 23 del referido mes, el cual tenía por objeto "sufragar por las personas que han de reemplazar en la Alta Corte de Justicia las vacantes de los señores Salgado y Villaurrutia", "nombrar Gobernador Constitucional del Estado", "dirigir al Congreso General todas las iniciativas que crea oportunas para la derogación de sus leyes y reforma de artículos constitucionales", "tomar en consideración el Reglamento de la Dirección General de Rentas", y "arreglar en el Estado el Ramo de Instrucción Pública" (Poder Legislativo II, 2001. Convocatoria del 14 de noviembre de 1833: 275).

El 16 de noviembre el Presidente Antonio López de Santa Anna declaró que "el Ciudadano Vicente Guerrero mereció hasta su muerte el título de Benemérito de la Patria" (Decreto del 16 de noviembre de 1833. BJMLM: vol. 74, exp. 228).

El 22 de noviembre el Congreso reunido en Junta integró la Mesa Directiva de su Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, presidida por el Diputado Francisco Suárez Iriarte. Nombró como Vicepresidente al Diputado Manuel Robredo, como secretarios propietarios a los diputados: Rafael Mario Villagrán y Vicente Páez y como Secretario Suplente al Diputado José Manuel González Arratia (Acta del 22 de noviembre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 41, foja 2).

El 23 de noviembre el Consejero del Gobierno Domingo Bórica, al acudir a la apertura del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso, señaló que "quisiera el Ejecutivo al daros cuenta de la Administración presentaros un cuadro en todos los ramos, halagüeño, y anunciaros solo prosperidades; más por desgracia no le permiten dar cuenta de solo progresos". Indicó que "sólo en el sur de este Estado, se conservan partidas armadas que perturban la tranquilidad pública: y aunque por la poca previsión de algunos jefes, han sufrido algún descalabro las ramas del gobierno, ya el Supremo de la Unión, ha destacado respetables fuerzas para el escarmiento de los malvados y el Ejecutivo del Estado ha librado sus órdenes para que se reúnan al valiente Jefe que las manda" (Acta del 23 de noviembre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 41, foja 7).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Francisco Suárez Iriarte, señaló que "la Hacienda Pública, alma de la sociedad, recibirá el complemento de su organización con el arreglo de su Dirección General, y el Estado sin volver a ocurrir a los préstamos siempre ruinosos será reintegrado de sumas

inmensas que se le adeudan; últimamente se van a desarrollar los elementos de prosperidad pública, intentando según demandan las luces del Siglo el interesante Ramo de la Instrucción Pública" (Acta del 23 de noviembre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 41, foja 7).

El Congreso aprobó el "nombramiento hecho en la persona del Ciudadano Simón de la Torre de Tercer Diputado Suplente de este Estado, para que entre a funcionar por la renuncia del Señor José María Vázquez", el cual nunca rindió su protesta de ley (Acta del 23 de noviembre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 41, foja 8).

El Diputado Simón de la Torre se incorporó a las sesiones del Congreso, una vez que rindió su protesta de ley ante el Pleno (Acta del 23 de noviembre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 41, foja 8).

El Congreso al efectuar la elección para reemplazar en la Suprema Corte de Justicia las vacantes de los señores Salgado y Villaurrutia, designó en la primera vacante a Andrés Quintana Roo y en la segunda a José Loreto Castañeda (Acta del 23 de noviembre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 41, foja 8).

El 25 de noviembre el Congreso conoció y mandó archivar "una nota oficial del Ministerio de Relaciones participando que el Exmo. Sr. D. Lorenzo de Zavala ha sido nombrado Ministro Plenipotenciario cerca del Rey de los franceses, y al mismo tiempo otra del mismo Sr. en que hace dimisión al Encargo de Gobernador del Estado" (Acta del 25 de noviembre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 41, foja 8).

El 27 de noviembre el Congreso aprobó la formación de una "comisión especial, que consulte las reformas que crea convenientes a la Constitución Federal" (Acta del 27 de noviembre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 41, foja 30).

El Presidente del Congreso nombró como integrantes de la comisión especial que propondría reformas a la Constitución Federal a los diputados: Manuel Robredo, José Manuel González Arratia, Pedro Guadarrama, Joaquín Solórzano, Rafael Mario Villagrán y Mariano Arizcorreta (Acta del 27 de noviembre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 41, foja 30).

El Congreso acordó hacer una iniciativa a las cámaras del Congreso de la Unión, para que en la clasificación de la deuda nacional se tenga presente la indemnización al

Estado por la pérdida de su Capital y Casa de Moneda (Acta del 27 de noviembre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 41, foja 31).

El 29 de noviembre el Presidente de la República cesó "la orden del 12 de septiembre de este año, y circular del 14 del mismo, aprobando el plan de coalición", el cual fue suscrito entre los estados de Zacatecas y Jalisco para combatir a los facciosos de la revolución (Decreto del 29 de noviembre de 1833. BJMLM: vol. 74, exp. 228).

El 2 de diciembre el Congreso nombró al Diputado Félix María Aburto como Gobernador del Estado, luego de aceptar la renuncia a dicho cargo de Lorenzo de Zavala, "por haber entrado en funciones de Diputado al Congreso General y aceptado el nombramiento de Plenipotenciario cerca del Rey de los franceses" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 358 del 2 de diciembre de 1833: 276).

El 3 de diciembre Félix María Aburto, al acudir al Congreso a rendir su protesta de ley como Gobernador del Estado, señaló que "la fuerza de mi poder no ha de ser otra que la fuerza de las leyes: todos encontrarán en ellas las necesarias garantías o el escarmiento a que se hagan acreedores y hoy mismo renunciaré a tan terribles facultades, puesto que quiero marcar con este acto el principio de mi Gobierno" (Acta del 3 de diciembre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 41, foja 52).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Francisco Suárez Iriarte, le indicó al Gobernador que "acabáis de protestar ante la Divinidad cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales y secundarias. Necesitáis resentiros de la energía e impasibilidad de ellas para desempeñar el difícil puesto que os han confiado los representantes del pueblo" (Acta del 3 de diciembre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 41, foja 52).

El 6 de diciembre el Congreso dispuso que el Gobierno haría salir del Estado por espacio de seis años a un número considerable de individuos, entre los cuales estaban: Luis Gonzaga Vieyra y Manuel Muria, personajes que posteriormente se hicieron cargo del Gobierno (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 359 del 6 de diciembre de 1833: 276).[247]

[247] En la lista estaban los señores: Manuel Rivera, Matías Carranco, Mariano Ortiz de la Peña, Ángel Pérez Palacios, Luis Pérez Palacios, Francisco Pérez Palacios, Nicolás Salazar, José Zárate, Francisco Zárate, José María Pérez, José María Careaga, Ángel Carmona, Manuel Carmona, José Antonio Sánchez Barquera, Mariano Reyes, Nicolás Aragón, Felipe Pérez, Francisco Pérez, Manuel Moreno, Ignacio Moreno, Epigmenio de la Piedra, Pedro Mendizábal, Gregorio Laspita, Manuel Villaverde, Ignacio

El 10 de diciembre el Congreso General le concedió licencia al Presidente de la República (Antonio López de Santa Anna) para retirarse por el espacio de seis meses a restablecer su salud al punto que elija de ella (Decreto del 10 de diciembre de 1833. BJMLM: vol. 74, exp. 228).

El 16 de diciembre el Congreso aprobó "la credencial que de Sexto (Diputado) Suplente ha presentado el Ciudadano Pedro Díaz", para llenar la vacante que dejó el Diputado Félix María Aburto, para hacerse cargo del Gobierno del Estado, el cual posteriormente rindió su protesta de ley (Acta del 16 de diciembre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 41, foja 70).

El 17 de diciembre el Congreso admitió "la dimisión que hace el Ejecutivo en oficio del 4 del que rige, de las facultades extraordinarias que le fueron concedidas por decreto de 3 del último julio", y cesó "igualmente éstas mismas concedidas al Gobierno por cualquier otro decreto, aunque las tenga en unión con la Diputación Permanente" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 360 del 17 de diciembre de 1833: 276).

El Congreso General determinó que se "proveerán en propiedad todos los curatos vacantes y que vacaren de la República en individuos del clero secular, observándose precisamente la forma y tiempo que prescriben las leyes". De igual manera, se "suprimirán las sacristías mayores de todas las parroquias, y los que actualmente las sirvan serán atendidos en la provisión de curatos" (Decreto del 17 de diciembre de 1833. BJMLM: vol. 74, exp. 228).

El 19 de diciembre el Congreso declaró que puede ejercer la Abogacía en el Estado el Ciudadano Luis del Castillo Negrete (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 361 del 19 de diciembre de 1833: 278).

El 23 de diciembre el Congreso **nombró como Presidente de la Mesa Directiva del segundo mes de su Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones al Diputado**

González Pliego, José Ignacio Montero, Juan Antonio Arce, Juan José Garduño, Ramón Pérez Palacios, Antonio Silva y su hijo, José María dueño de la hacienda de Cocoyotla, Manuel Peña de la hacienda de Actopan, José María Figueroa, José María Jiménez, Pedro Domínguez Esquivel, Juan Domínguez Esquivel, Luis Domínguez Esquivel, José Cuadros, Ignacio Díaz Leal, Crispín Urquijo, Lorenzo Ávila, Tomás Ávila, Francisco Muñoz, José María Fabián, Francisco Uribe, Ignacio Uribe, Tomás Díaz, Anastasio Román, Mariano Velázquez, Ignacio Peña, Antonio Peña, Francisco Ontiveros, Matías Guadarrama, Mauricio Aponte, Ignacio Ortega, Felipe Pineda, Juan Nepomuceno Soto, Rafael Durán y José María Boucet.

Pedro Guadarrama y como Vicepresidente al Diputado Miguel Macedo Villanueva (Acta del 23 de diciembre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 41, foja 96).

El Congreso acordó que los señores diputados al Congreso General por el Estado presentaran "la acusación contra los individuos de la Suprema Corte de Justicia que han atropellado nuestra Carta Constitucional, en el asunto regido entre Don José María Flores, dueño de la Hacienda de Pantitlán" (Acta del 23 de diciembre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 41, foja 96).

El 28 de diciembre el Congreso dispuso que "el Gobierno suspenderá los efectos de la Ley de Ostracismo en todos aquellos individuos que no hayan tomado parte alguna en la revolución", y que "esta calificación se hará por el Gobierno, de acuerdo con el Consejo, en vista de los informes que pida y de las pruebas que den los interesados" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 362 del 28 de diciembre de 1833: 278).

El Congreso acordó que el Gobierno no diera cumplimiento a la Ley del Congreso Federal que prevenía no ocupar de los bienes y capitales pertenecientes a las manos muertas, y que "la Ley de Diezmos expedida por este Congreso el 7 de octubre próximo pasado se devolviera al Ejecutivo para que la publique, a fin de que tenga un puntual cumplimiento" (Acta del 28 de diciembre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 41, foja 126).

El Congreso aprobó la proposición dirigida al Congreso de la Unión, por la que proponían reformas a la Constitución Federal (Acta del 28 de diciembre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 41, foja 133).

El 31 de diciembre el Gobernador Félix María Aburto, al acudir a la clausura del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso, señaló "que en los pocos días que dirige el timón del Gobierno, solo puede anunciaros con satisfacción que la Milicia Nacional comienza a organizarse con arreglo a la nueva Ley; que las armas del Estado se han cubierto de gloria en el Distrito de Sultepec, a la vez que las de la Federación en el de Guerrero" (Acta del 31 de diciembre de 1833. BJMLM. Colección de Actas: vol. 41, foja 149).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Pedro Guadarrama, le indicó al Gobernador que los diputados "se retiran hoy satisfechos, la verdad de que han puesto ya con solidez las primeras bases para hacer que este

Estado aparezca lo que debe ser entre sus hermanos que forman la Confederación Mexicana: es decir, en los primeros en ilustración, riqueza y poder" (Acta del 31 de diciembre de 1833. BJML. Colección de Actas: vol. 41, foja 150).

El 2 de enero de **1834** la Diputación Permanente convocó al Congreso a su Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones para el día 4 de ese mes, el cual tenía por objeto: "sufragar por el individuo que debe cubrir en la Alta Corte de Justicia la vacante del Sr. Yáñez", "elegir Teniente Gobernador Constitucional del Estado", "resolver sobre las observaciones que hizo el Ejecutivo al Reglamento de la Dirección de Rentas", "tomar en consideración los negocios relativos a la Ley Orgánica de Instrucción Pública", "acordar lo concerniente a la consulta que con fecha 20 del pasado, hace el Gobierno sobre objetos de guerra", y "encargarse del asunto de plazas que pide el Gobierno para la Contaduría General" (Poder Legislativo II, 2001. Convocatoria del 2 de enero de 1834: 279).

El 3 de enero el Congreso reunido en Junta integró la Mesa Directiva de su Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones, presidida por el Diputado Joaquín Solórzano. Nombró como Vicepresidente al Diputado Pedro Díaz, como secretarios propietarios a los diputados: José Rafael González Arratia y Joaquín Bars y como secretarios suplentes a los diputados: Joaquín Valdés y Vicente Páez (Acta del 3 de enero de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 41, foja 153).

El 4 de enero el Gobernador Félix María Aburto, al acudir a la apertura del Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso, les indicó a los diputados que "cuatro días hace que os manifesté las glorias obtenidas por nuestra Milicia Cívica en Temascaltepec y presagié el pronto término de la revolución en aquel Partido. Hoy tengo el placer de anunciaros que los principales corifeos de ella, el Padre Juan José Cuadros Uraga y otros varios están en nuestro poder" (Acta del 4 de enero de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 41, foja 154).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Joaquín Solórzano, señaló que "la elección de un Magistrado sabio y patriota que en la Alta Corte de Justicia reemplace la persona del Sr. Yáñez, será la primera ocupación del Congreso: justo es que dedique toda su atención en negocio de tanta importancia y de que en gran parte depende la tranquilidad de los ciudadanos" (Acta del 4 de enero de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 41, foja 155).

El Congreso al admitir la renuncia del General José María Figueroa al cargo de Teniente Gobernador, designó en su lugar al Ciudadano Juan Fonseca (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 363 del 4 de enero de 1834: 280).

El Congreso al efectuar la elección para remplazar en la Suprema Corte de Justicia al Señor Isidoro Yáñez, designó en su lugar al Señor José María Bocanegra (Acta del 4 de enero de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 41, foja 157).

El 9 de enero el Congreso expidió el Reglamento para la Dirección de Rentas del Estado de México, en donde se dispuso "que el Director de Rentas del Estado, nombrado por el Poder Legislativo, es el jefe inmediato de ellas y de los empleados que la administran, o manejan caudales que le pertenezcan", y que "la Dirección presentará anualmente al Congreso en las primeras sesiones de marzo un estado documentado de los ingresos y egresos efectivos que ha tenido la Hacienda Pública en todo el año" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 364 del 9 de enero de 1834: 280).

El 10 de enero el Congreso facultó "al Gobierno para que levante las fuerzas que crea necesarias, a fin de exterminar la revolución y conservar la tranquilidad pública en el Estado" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 365 del 10 de enero de 1834: 285).

El 13 de enero el Congreso expidió la Ley Orgánica de la Instrucción Pública del Estado de México, en la cual se regulaba la educación primaria en las escuelas municipales y de Partido, así como la educación secundaria con los programas del curso general y de los cursos de Jurisprudencia, Medicina, Farmacia, Mineralogía, Comercio y Agricultura. También incluía lo referente al manejo de la Biblioteca y Gabinete de Lectura; a la organización de la Dirección de Instrucción Pública con las juntas de instrucción pública municipales, de partido y directora de la instrucción pública; a las atribuciones del Director del Instituto, del Secretario de la Junta Directora, y del Tesorero de los Fondos de Instrucción; a los certámenes, premios y jubilaciones; al manejo de la Hacienda de la Instrucción Pública con sus fondos y gastos; y a los profesores públicos y las personas encargadas inmediatamente de la instrucción y de los discípulos (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 366 del 13 de enero de 1834: 285).[248]

[248] El Reglamento incluía apartados referentes a: la instrucción general, las escuelas municipales, las escuelas de partido, la educación de secundaria, los cursos de Jurisprudencia, Medicina, Farmacia, Mineralogía, Comercio y Agricultura, de la Biblioteca y su gabinete, de la Dirección de Instrucción Pública, de las juntas municipales, de partido y directora, del Tesorero y de los fondos de instrucción, de las personas encargadas inmediatamente de la instrucción y de los discípulos, de los profesores y

El Congreso nombró como individuos de la Junta de Instrucción Pública a: Francisco Herrera Campos, Román García, Felipe Ortigosa y José María Monroy, y como suplentes a Juan González y Joaquín Martínez de Castro (Acta del 13 de enero de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 41, foja 189).

El Congreso General cedió a los estados los edificios que eran de los Jesuitas (Decreto del 13 de enero de 1834. AHEM: L.L.D.F. vol. 13, exp. 6).

El 14 de enero el Gobernador Félix María Aburto, al acudir a la clausura del Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso, señaló que "los facciosos que ocupaban a Chilapa no pudiendo resistir más la presencia de nuestras tropas y temiendo por momentos su inevitable destrucción, salieron fugitivos de aquella Villa abandonando su Infantería y dirigiéndose a marchas forzadas hacia los distritos de Taxco y Cuernavaca que han invadido con quinientos caballos; pero los generales Victoria y Moctezuma, vienen sobre las huellas de los enemigos que pronto serán alcanzados y batidos" (Acta del 14 de enero de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 41, foja 186).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Joaquín Solórzano, indicó que "tamaños males amenazaban al Estado antes de expedirse las leyes que fueron el objeto principal de estas sesiones: el legislador los conocía y superando los inconvenientes que le presentara un País agitado por genios turbulentos y partidas armadas de hombres sediciosos, fijó por fin la suerte de sus comitentes trazándoles la suerte de su educación, dándoles posibilidad para emprenderla y organizando la Hacienda Pública de una manera que por su buena administración sea capaz de cubrir las atenciones del Gobierno sin gravar a los ciudadanos con nuevas contribuciones pecuniarias" (Acta del 14 de enero de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 41, foja 187).

El 22 de enero el Congreso General autorizó "a los estados para formar coaliciones, debiendo tener formadas las actas de ellas para el 15 de agosto, sin que puedan oponerse a la Constitución Federal y Acta Constitutiva" (Decreto del 22 de enero de 1834. AHEM: L.L.D.F. vol. 13, exp. 9).

---

alumnos, del Bibliotecario, del Prefecto de Disciplina, del Capellán del Instituto, del Director de la Hacienda Normal, de los sirvientes domésticos, de los certámenes, premios y jubilaciones, de la Hacienda de Instrucción Pública, de los gastos, de los profesores públicos y de las prevenciones generales.

El 28 de enero la Diputación Permanente acordó que el 31 de ese mes acudiera el Teniente Gobernador Juan Fonseca a rendir su protesta de ley (Acta del 4 de marzo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 20).

El 31 de enero la Diputación Permanente le otorgó licencia al Gobernador por seis a ocho días para ir al Distrito Federal (Acta del 31 de enero de 1834. BJMLM: vol. 76, exp. 79), por lo que el Teniente Gobernador Juan Fonseca asumió la Titularidad del Poder Ejecutivo.

El 4 de febrero el Congreso General determinó que sería "admitida a colonizar en los terrenos que estén o estuvieren a disposición del Gobierno Supremo en el Estado de Coahuila y Texas toda persona libre y que carezca de compromisos locales en otros puntos de la República", mediante la dotación de ganado mayor a las familias, el costeado de cabalgaduras o carros y la dotación durante un año de cuatro reales diarios a los mayores de 15 años y a los menores de esa edad dos reales (Decreto del 4 de febrero de 1834. AHEM: G.G.G. vol. 34, exp. 29).

El 25 de febrero la Diputación Permanente tomó conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, "contraído a exponer varios casos en que actualmente se abusa para poner sobre las armas a los cívicos de esta Ciudad". Se acordó que "se pasase el original al Gobierno, para que tomara las providencias que el caso demandaba" (Acta del 4 de marzo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 20).

El 1 de marzo el Congreso reunido en Junta aprobó la carta credencial del Primer Diputado Suplente Rafael María Martínez, para cubrir la vacante que dejó el Diputado Suplente Mariano Delgado, el cual debía de ocupar la vacante que nunca ocupó el Diputado Cristóbal Andrade (Acta del 1 de marzo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 3).

El Diputado Rafael María Martínez rindió su protesta de ley ante en Congreso reunido en Junta (Acta del 1 de marzo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 3).

El Congreso reunido en Junta integró la Mesa Directiva del primer mes de su Tercer Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado Manuel Robredo y la Vicepresidencia del Diputado Pedro Guadarrama. Nombró para todo el periodo ordinario de sesiones como secretarios propietarios a los diputados: Francisco Suárez Iriarte y Ramón Gamboa y como secretarios suplentes a los diputados: Rafael Mario

Villagrán y Miguel Macedo Villanueva (Acta del 1 de marzo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 3).

El 2 de marzo el Gobernador Félix María Aburto, al acudir a la apertura del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, indicó que "el Estado de México por su posición geográfica, la extensión de su territorio, el número de su población y sus cuantiosos elementos de riqueza debe necesariamente sufrir más que los otros el impulso de tantas excitaciones: así es que mientras los demás se miran sin desdichas y a poco tiempo libres de los horrores de la guerra, éste ve nacer la mayor parte de las revoluciones" (Acta del 2 de marzo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 4).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Manuel Robredo, señaló que "muy angustiosas y difíciles fueron las circunstancias que rodearon al Congreso del Estado en el año de 1833. La completa desorganización en que se hallaban los diversos ramos de la Administración Pública: el repudio incesante que habían adquirido los enemigos de la libertad bajo la misma dirección del anterior Gobierno, las profundas raíces que echaron en aquella fatal época, las preocupaciones las más nocivas a la felicidad: las avanzadas pretensiones del clero; las ambiciones de algunos militares: una formidable revolución: una asoladora deficiencia han sido los obstáculos que empezó en aquel periodo esta Legislatura marchando con firmeza por el sendero de las luces y del de la Federación" (Acta del 2 de marzo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 8).

El 3 de marzo el Congreso dispuso que "cumplirá el Gobierno con el decreto del de marzo de 1832, haciendo que venga a esta Ciudad el reloj que se haya en la de Tlalpan" (Acta del 3 de marzo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 18).

El 4 de marzo el Congreso tomó conocimiento del informe que presentó la Diputación Permanente que funcionó en su Segundo Receso del Congreso (Acta del 4 de marzo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 19).

El 5 de marzo el Congreso tomó conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, "sobre la nulidad de los obispos existentes en la República por haber sido aprobados por el Rey de España, y la necesidad de que la Honorable Legislatura inicie a las cámaras de la Unión para que declaren no haber podido dar pase a las bulas del nombramiento de obispos, y que éstos sean juzgados como conspiradores y

trastornadores del orden público por la conducta escandalosa que han observado" (Acta del 5 de marzo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 24).

El 12 de marzo el Congreso acordó que "se admite la renuncia que hace al cargo de Diputado (Suplente) el Señor Mariano Salgado" (Acta del 12 de marzo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 39).

El Congreso tomó conocimiento del informe que presentó el Diputado José del Villar y Bocanegra, sobre el juicio que promovió la Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Acta del 12 de marzo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 40).

El 13 de marzo el Congreso habilitó a los bachilleres Pedro y José González de la Vega para que puedan presentarse inmediatamente a examinarse de abogados (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 367 del 13 de marzo de 1834: 305).

El Congreso aprobó el gasto de 600 pesos para la compra de muebles de la Dirección General de Rentas (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 368 del 13 de marzo de 1834: 305).

El 15 de marzo el Congreso aprobó la lista de integrantes de las comisiones, la cual se integró "por faltar varios diputados, ya sea por tener licencia, por renuncia y otras causas" (Acta del 15 de marzo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 73).

El 18 de marzo el Congreso tomó conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, por el que se proponía establecer una Academia de Medicina en la Ciudad de Toluca (Acta del 18 de marzo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 88).[249]

El 20 de marzo el Congreso por primera vez en su historia otorgó una dispensa de edad para ocupar un cargo público, al decretar "la dispensa a los ciudadanos licenciados Francisco de Paula Espejo y Pascual González Fuentes, la edad que les falta para cumplir los veintiséis años y poder optar los empleos del Poder Judicial que exigen ese requisito" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 369 del 20 de marzo de 1834: 306).

[249] Este anónimo se remitió al Gobernador para su atención.

El Congreso le otorgó al Diputado Román García una licencia por 30 días “para permanecer en la Ciudad Federal, con el objeto de atender la salud de su esposa” (Acta de la sesión secreta del 20 de marzo de 1834. BJMLM: Colección de Actas).

El 22 de marzo el Congreso le concedió medio sueldo al Juez de Mextitlán, Ciudadano Licenciado José María Angulo mientras se le proporciona otro empleo (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 370 del 22 de marzo de 1834: 306).

El Congreso le concedió una pensión a la viuda del Contador General del Estado, Manuel Aguirre Peza (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 371 del 22 de marzo de 1834: 306).

El 26 de marzo el Gobernador Félix María Aburto participó al Congreso “que por cuatro o cinco días sale a un punto inmediato a esta Ciudad, quedando encargada del Ejecutivo la persona que señala la Constitución”, es decir, el Teniente Gobernador Juan Fonseca (Acta del 26 de marzo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 116).

En el Congreso “se presentó el Secretario del Gobierno a leer la memoria de los ramos de la administración pública”. Una vez que ésta fue leída el Presidente acordó “que se imprimiese y pasase a la Comisión de Análisis” para los efectos correspondientes (Acta del 26 de marzo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 117).

El Gobernador Félix María Aburto indicó en la Memoria de Gobierno, que “encargado a fines del año pasado de las riendas del Gobierno, conocí desde luego, el grave peso que abrumaba mis hombros y la difícil posición política que iba a desempeñar en la República: sólo confiado en vuestro patriotismo y luces me revolví a arrojarme en semejante caos, sin más guía que la Ley y sin más interés que continuar en el Gabinete mis servicios a aquella misma cara Patria a quien he consagrado mi juventud en la campaña. En tan corto periodo he podido formar una ligera idea de los inmensos ramos cuya dirección y vigilancia cometieran las leyes al Ejecutivo del Estado, y a la par que los revisaba uno a uno he formado las indicaciones que he creído debía elevar al augusto Congreso” (Gobierno del Estado de México, Memoria, 1834: 1).

El Gobernador señaló que la Comisión de Estadística había estimado la situación, superficie y límites del Estado, que la industria agrícola, fabril y mercantil se encontraba estancada ante la falta de seguridad y las frecuentes convulsiones

políticas, que una epidemia de cólera había azotado al Puerto de Acapulco, que en el Estado solo existía el Hospital de San Juan de Dios en su Capital, que se había nombrado un nuevo Comisionado para las obras del Desagüe en Huehuetoca, que en obras públicas de utilidad y ornato no se presentaban avances, que la Ley Orgánica de Instrucción Pública había separado al Gobierno de la dirección de ese ramo tan importante, que el Instituto Literario había formado su nuevo Plan de Estudios y que "creería agraviar la ilustración del Honorable Congreso si me detuviese a manifestar lo odioso, precario y nada conforme del sistema de impuestos que bajo mil denominaciones gravitan sobre los habitantes del Estado: la desproporción de su repartimiento, los multiplicados inconvenientes de su exacción, y el dispendioso gasto que se eroga en su cobro, el que acaso tiene todo lo molesto de cualquiera contribución sin la facilidad ni el aumento de fondos que podía proporcionar una sola bien sistemada".

El 2 de abril el Congreso nombró como Presidente de la Mesa Directiva del segundo mes de su Tercer Periodo Ordinario de Sesiones al Diputado Joaquín Bars y como Vicepresidente al Diputado Rafael María Martínez (Acta del 2 de abril de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 124).

El 3 de abril el Congreso dio cuenta de varios oficios recibidos en el buzón, los cuales mandó "quemar por contener injurias y estar concebidos en términos irrespetuosos" (Acta de la sesión secreta del 3 de abril de 1834. BJMLM: Colección de Actas).

El 4 de abril el Congreso le otorgó al Diputado Joaquín Solórzano una licencia por seis días, para pasar al Distrito Federal a un asunto importante (Acta de la sesión secreta del 4 de abril de 1834. BJMLM: Colección de Actas).

El 5 de abril el Congreso por primera vez en su historia exentó a los vecinos de un pueblo "del servicio personal de la Milicia Cívica", que en este caso correspondió a Huixquilucan (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 372 del 5 de abril de 1834: 306).

El Congreso mandó devolver al Licenciado Antonio Alvarado la plaza de Abogado de Pobres (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 373 del 5 de abril de 1834: 307).

El Congreso acordó secundar "la iniciativa que han dirigido las legislaturas de Zacatecas y Guanajuato a las cámaras de la Unión, para que cese el impuesto

denominado real de minería" (Acta del 5 de abril de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 144).

El 7 de abril el Congreso le dispensó al Licenciado Manuel Tejada la edad que le faltaba para ejercer la Abogacía (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 374 del 7 de abril de 1834: 307).

El Congreso tomó conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, por el que se pedía que la Legislatura hiciera una iniciativa al Congreso de la Unión, "para que derogue la Ley General dada respecto a diezmos y se lleve a efecto la particular del Estado, que establece una cuota competente para los respetables ministros del altar y su culto" (Acta del 7 de abril de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 146).[250]

El Congreso tomó conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, por el que se pedía "que se examine escrupulosamente la conducta política de los individuos comprendidos en la Ley de Ostracismo, por diez o doce personas adictas a nuestras instituciones federales ante las autoridades respectivas a que pertenezcan" (Acta del 7 de abril de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 146).

El Congreso tomó conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, por el que se pedía que los prefectos de los distritos visitaran "dos veces al año sus municipalidades respectivas, cuidando muy particularmente de encargarse de los adelantos de la juventud en las escuelas de primeras letras" (Acta del 7 de abril de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 146).

El Congreso tomó conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, para que los prefectos "como subinspectores de la Milicia Nacional ocupen una en cada Municipalidad, para que conozcan el estado de la instrucción y buena o mala organización de los cuerpos" (Acta del 7 de abril de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 146).

El Congreso tomó conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, para "que hagan perseguir a todo individuo que aparezca como sedicioso contra el sistema actual de gobierno sea de la clase y jerarquía que fuese, aplicando una multa desde diez hasta mil pesos que se dedicará al Fondo de la Milicia, y si el delito fuese de reincidencia, se

[250] Esta proposición fue adoptada por el Diputado José del Villar.

le ponga a disposición del Juez Letrado para que se castigue con arreglo a las leyes, juzgándosele como a un reo del Estado" (Acta del 7 de abril de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 146).

El Congreso tomó conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, en el que se pedía que se formara "causa al Alcalde Primero de esta Ciudad, Don Rafael Murguía, por haber infringido la Ley del 16 de octubre de 1830, que en el artículo 1º previene que los alcaldes conciliadores deben practicar las primeras diligencias del sumario, cuando en su territorio se cometa algún delito o encuentre algún delincuente, y habiendo resultado en un acto de conciliación que ante él se tuvo que el español Santiago Pérez ha estado robando al Estado desde el año 25, no procedió contra este delincuente" (Acta de la sesión secreta del 7 de abril de 1834. BJMLM: Colección de Actas).[251]

El 8 de abril el Congreso expidió el Reglamento Interior del Congreso del Estado de México, el cual constaba de capítulos referentes a: la reunión del Congreso, su receso y renovación, al lugar de sesiones, a la elección de oficios, al Presidente, al Vicepresidente, a los secretarios, a los diputados, a las sesiones públicas, a las sesiones secretas, a las comisiones, a las iniciativas, sus trámites y discusión, a las votaciones, a las leyes, decretos y órdenes del Congreso, al modo de procederse en causas criminales de los diputados y al orden y Gobierno del Palacio del Congreso (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 375 del 8 de abril de 1834: 307).

Se indicaba que se presentarán en sesión secreta: "las acusaciones que se hagan contra los diputados, el Gobernador, su Teniente, consejeros del Estado y ministros del Supremo Tribunal de Justicia"; "los oficios que con nota de reserva se dirijan al Congreso"; "los asuntos puramente económicos"; "las materias eclesiásticas o religiosas", y "los demás asuntos que el Presidente y Secretario califiquen de reservados" (art. 69).

Este Reglamento a diferencia del de 1830 ordenó la constitución de "una Gran Comisión, compuesta de cinco miembros, que elegirá el Congreso el 3 de marzo de cada bienio, la cual será la que nombre a las comisiones permanentes y especiales" (art. 73). Las comisiones permanentes eran: "las de Puntos Constitucionales, de Justicia, Negocios Eclesiásticos y Legislación, de Gobernación, de Hacienda, Primera

[251] Esta proposición fue adoptada por el Diputado Francisco Suárez Iriarte.

y Segunda: de Instrucción pública, de Comercio, Agricultura, Minería e Industria, de Milicia, de Código Municipal, de Policía, Peticiones e Impresiones, de Corrección de Estilo, de Poderes, de Análisis y Sección del Gran Jurado" (art. 72).

La única comisión que incluía sus funciones en este Reglamento era la de Policía,[252] la cual tenía: "el encargo y la superintendencia de la redacción de actas y decretos, y de su impresión, con la de los informes, proyectos de ley, y cualquiera otros escritos que el Congreso mande imprimir, haciendo los ajustes y contratas más convenientes y equitativas, que presentará a la aprobación del Congreso" (art. 78).

A esta Comisión que la integraban el Presidente y los secretarios también le correspondía: cuidar "el orden y gobierno interior del Palacio del Congreso y la observancia de las ceremonias y formalidades" (art. 153), y "dirigir las obras y reparos que convenga hacer para la conservación y seguridad del mismo edificio" (art. 154). Se indicaba que "todos los subalternos y dependientes del Congreso estarán bajo las órdenes de esta Comisión, en el ejercicio de sus funciones" (art. 155), y que "si se cometiere algún exceso o delito dentro del Edificio del Congreso, pertenecerá a esta Comisión detener a la persona o personas que aparezcan culpadas, poniéndolas a disposición del Juez competente, y ejecutado que sea dará cuenta al Congreso" (art. 156).

El 10 de abril el Congreso dispuso que se haga una "iniciativa al Soberano Congreso de la Unión, para que derogue la Ley General dada respecto de diezmos y se lleve a efecto la particular del Estado, que establece una cuota competente para los respetables ministros del altar y su culto" (Acta del 10 de abril de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 168).[253]

El 14 de abril el Congreso dio entrada a 19 iniciativas comprometidas por el Titular del Ejecutivo en su última Memoria de Gobierno. En ellas se pedían recursos adicionales para concluir la estadística del Estado, se solicitaba asignar a los ayuntamientos los arrendamientos de los palenques de gallos, se proponía que sólo el Gobernador podía expedir licencias para la portación de armas, se pretendía derogar la disposición por la que se establecieron 120 celadores en el Estado, se pedía que se gravara con un peso la expedición o revalidación de pasaportes, se proponían las bases para

[252] Cabe señalar, que en este Reglamento a la Comisión de Policía se le siguió reconociendo como el área responsable del orden y gobierno del Palacio del Congreso, y que a partir de esta fecha ya no se hizo alusión a la organización de la Secretaría en los reglamentos posteriores del siglo XIX.
[253] Esta proposición tuvo su origen en un anónimo recibido en el buzón.

establecer escuelas en las localidades que no fueran Cabecera de Municipalidad, se solicitaba reglamentar el pago del impuesto de alcabala al tabaco, se proponía derogar el sello que debían llevar las cuentas de los comerciantes, se solicitaba reformar la Ley Orgánica de Instrucción Pública para que quienes tuvieran destinos públicos pagaran la contribución directa, se pedía ampliar las plazas laborales de la Dirección General de Rentas y de la Contaduría, se proponía entregarle la mitad del sueldo al empleado que se encontrara impedido para desarrollar su encargo, se solicitaba reglamentar la operación del Periódico Reformador, se proponía reducir la exhibición (fianza) que debía dar el Tesorero Público, se solicitaba suprimir varios juzgados, se proponía imponer un gravamen al azúcar elaborado en el Estado, se sugería aumentar un Abogado de Pobres en la Audiencia, se proponía que el Cabildo Metropolitano estableciera un Tribunal en el Estado y se sugería que los milicianos quedaran exentos del pago de la contribución directa (Acta del 14 de abril de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 184).

El 15 de abril el Congreso autorizó al Gobierno para que franqueara al Señor Mariano Martínez de Lejarza tres mil pesos, para plantear en el Valle de Toluca una máquina (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 376 del 15 de abril de 1834: 324).

El Congreso acordó que “los poseedores de bienes vinculados, existentes en el Estado, los repartirán en sus testamentos entre sus herederos forzosos, con arreglo a las leyes comunes” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 377 del 15 de abril de 1834: 324).

El Congreso cedió a beneficio de los censatarios del Duque Monteleone las cantidades que adeudaban hasta el 1 de enero de 1833 (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 378 del 15 de abril de 1834: 325).

El 16 de abril el Congreso determinó que “los hijos ilegítimos, a falta de descendientes y ascendentes en línea recta, son herederos forzosos, sea cual fuere la clase, estado o condición de los padres” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 379 del 16 de abril de 1834: 325).

El 17 de abril el Congreso tomó conocimiento del dictamen del proyecto de aranceles para los tribunales, abogados, escribanos y demás agentes del Poder Judicial, formados por el Tribunal Superior de Justicia y la Excelentísima Audiencia (Acta del 17 de abril de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 209).

El Congreso acordó que “se excitara al Gobierno General para que ponga a disposición del Estado las cantidades depositadas en la Casa de Moneda de México, pertenecientes a capellanías fundadas en fincas del Estado” (Acta de la sesión secreta del 17 de abril de 1834. BJMLM: Colección de Actas).

El 18 de abril el Congreso derogó “la Ley del 4 de septiembre de 1823, en la parte que impone la pena de comiso a los efectos de libre comercio, que transiten por el Estado sin los requisitos legales” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 380 del 18 de abril de 1834: 326).

El Congreso acordó prorrogarle por quince días más la licencia que por 30 días gozaba el Diputado Francisco Suárez Iriarte para separarse de su cargo (Acta de la sesión secreta del 18 de abril de 1834. BJMLM: Colección de Actas).

El 19 de abril el Congreso facultó al Gobierno para que recogiera de los herederos de Francisco Luis Serrano las dos terceras de sus bienes que pertenecían al Beaterio (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 381 del 19 de abril de 1834: 326).

El Congreso tomó conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, “sobre la necesidad de evitar los daños que causa el que los ayuntamientos conozcan en la calificación de vagos por las arbitrariedades e insuficiencias que por su ignorancia o mala fe cometen los individuos que los componen, y porque no queda recurso para librarse de sus fallos” (Acta del 19 de abril de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 226).

El 21 de abril el Congreso nombró a José María Bocanegra como “individuo que debe remplazar al Señor Yáñez en la Suprema Corte de Justicia” (Acta del 21 de abril de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 227).

El Congreso acordó nombrar “una comisión especial para que proponga las reformas que deberán hacerse a la Constitución del Estado” (Acta del 21 de abril de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 229).

El Presidente del Congreso nombró como miembros de la comisión especial que propondría reformas a la Constitución a los diputados: Manuel Robredo, Pedro Guadarrama y José Rafael González Arratia (Acta del 21 de abril de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 230).

El Congreso dispuso que “no se permite la residencia en el territorio del Estado a los expulsos de otros por opiniones políticas, ni a los individuos que a consecuencia de ellas hayan sido expatriados” (Acta de la sesión secreta del 21 de abril de 1834. BJMLM: Colección de Actas).

El 22 de abril el Congreso le concedió una pensión a la Señora María Luisa Villaseñor (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 382 del 22 de abril de 1834: 326).

El Congreso erigió “en Pueblo la Congregación de Mapaztlán, perteneciente a la Municipalidad de Cuautla de Morelos, y avecindada en terreno del Cacicazgo de Salgado” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 383 del 22 de abril de 1834: 327).

El 23 de abril el Congreso tomó conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, “contraído a los perjuicios que causa el pago de alcabalas, a las extorsiones de sus recaudadores, principalmente de la Administración de Rentas de Tula y a la mala Administración de Justicia, y pidiendo la abolición de derechos en este ramo y los parroquiales” (Acta del 23 de abril de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 241).

El 24 de abril el Congreso dispuso que “en las causas de hacienda del Estado harán de promotores fiscales, en primera instancia, los letrados residentes en el Partido respectivo” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 384 del 24 de abril de 1834: 327).

El Congreso rehabilitó al Ciudadano José María Suria para poder obtener empleo en el Estado (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 385 del 24 de abril de 1834: 328).

El Congreso tomó conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, en el que se proponían varias reformas a la Constitución, en las cuales se contemplaba suprimir los artículos 13 y 14 referentes a la protección de la Religión Católica (Acta del 24 de abril de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 253).[254]

La Administración del Vicepresidente Valentín Gómez Farías concluyó como consecuencia de las sublevaciones de religión y fueros, ya que en ese mes el Congreso General había decretado la secularización de todas las misiones, aunado a que se había amenazado con el destierro a los obispos que no se sometieran al

[254] Esta proposición fue adoptada por el Diputado José del Villar y Bocanegra.

decreto que mandó proveer los curatos en la forma que acostumbraban los virreyes en uso del Patronato (Secretaría de la Presidencia, 1976: 109).

El 25 de abril el Congreso autorizó la disposición de fondos para la construcción de la Cárcel de Texcoco (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 386 del 25 de abril de 1834: 328).

El 28 de abril el Congreso dispuso que "el Gobierno hará salir del territorio del Estado por seis años a Don José López Uraga y a los que fueron aprehendidos en su compañía el 2 de enero del presente año", y "el mismo pondrá al primero a disposición del Presidente de la República, para que lo destine al punto que crea conducente, y que lo imposibilite de atentar de nuevo contra las instituciones federales" (Acta de la sesión secreta del 28 de abril de 1834. BJMLM: Colección de Actas).

El 29 de abril el Congreso al suprimir los partidos: de Mextitlán, Yahualica y Tejupilco dispuso que Mextitlán se uniera a Zacualtipán, Yahualipa a Huejutla y Tejupilco a Sultepec (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 387 del 29 de abril de 1834: 329).

El Congreso autorizó fondos para abastecer los almacenes militares (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 388 del 29 de abril de 1834: 329).

El Congreso autorizó fondos para la conclusión de la estadística del Estado (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 389 del 29 de abril de 1834: 330).

El Congreso dispuso que "el Gobierno prevendrá a los prelados de los conventos de religiosos en el Estado, no admitan a ninguno de su orden, a más de los que hoy existen, hasta la resolución del Congreso" (Acta de la sesión secreta del 29 de abril de 1834. BJMLM: Colección de Actas).

El 30 de abril el Congreso acordó que el Señor José Domingo Rus había "cesado de ser Ministro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, conforme a lo prevenido en la Ley del 14 de enero de 1826, desde el día 24 de marzo del presente año, en que aceptó la comisión que le confirió la Cámara de Diputados, para suplir en la Suprema Corte de Justicia al Señor Raz y Guzmán"; que "el Congreso nombrará a otro individuo que ocupe su lugar en el Supremo Tribunal de Justicia", y que "se dispensa de lo prevenido en la citada Ley del 14 de enero al Señor José María Torres Cataño, para

que pueda aceptar la comisión que le confirió la Cámara de Diputados" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 390 del 30 de abril de 1834: 330).

El Congreso designó "a los ayuntamientos los arrendamientos de los palenques de gallos", y cedió "a los mismos, para sus fondos, el producto de los bienes vacantes o mostrencos" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 391 del 30 de abril de 1834: 330).

El 2 de mayo el Congreso nombró como Presidente de la Mesa Directiva del tercer mes de su Tercer Periodo Ordinario de Sesiones al Diputado José del Villar y Bocanegra y como Vicepresidente al Dputado Simón de la Torre (Acta del 2 de mayo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 320).

El 3 de mayo el Congreso acordó remitirle al Presidente de la República una contestación, en la que pedía "el castigo a los sediciosos de Tabasco y Orizaba" (Acta del 3 de mayo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 323).

El 5 de mayo el Congreso aceptó que el Estado de México se adhiriera a la coalición conformada por los estados de: Puebla y Veracruz y a la coalición que integraban los estados de: Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Zacatecas. Para tal efecto, acordó nombrar dos comisionados amovibles, que con los integrantes de ambas coaliciones procurarían "formar una fuerza común para sostener la soberanía de los estados, y los Supremos Poderes de la Federación". (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 392 del 5 de mayo de 1834: 330).

El Congreso en apoyo a la Legislatura del Estado de Veracruz, acordó hacer "una exposición al Gobierno General, pidiéndole el castigo del Teniente Coronel del Ejército Permanente Don Pedro Muñoz Estepa, por los atentados que ha cometido contra la soberanía del Estado de Veracruz" (Acta del 5 de mayo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 334).

El Congreso le concedió al Gobernador Félix María Aburto una "licencia por ocho días, para pasar a la Ciudad Federal a tratar un asunto de interés al Estado" (Acta de la sesión secreta del 5 de mayo de 1834. BJMLM: Colección de Actas).[255]

[255] Se hizo cargo de la Titularidad del Poder Ejecutivo el Teniente Gobernador Juan Fonseca.

El 7 de mayo el Congreso por primera vez en su historia expidió un decreto por el que le concedió a un ciudadano una rebaja en un adeudo a favor del Estado, al conceder "la baja de una tercera parte, de la cantidad de que es responsable a la Hacienda Pública, el Ciudadano Rafael García, como fiador del Administrador de Rentas de Pachuca, Ciudadano Francisco Cisneros" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 393 del 7 de mayo de 1834: 331).

El Congreso derogó la parte 7° del artículo 9º de la Ley del 6 de octubre de 1823 que trataba sobre el uso del papel de sello cuarto (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 394 del 7 de mayo de 1834: 332).

El Congreso facultó al Gobierno para que invirtiera en la compostura de la Cárcel de Huichapan 700 pesos y para que le reintegrara al Erario la cantidad que indebidamente percibió el Ayuntamiento de Chilapa (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 395 del 7 de mayo de 1834: 332).

El Congreso por primera vez en su historia expidió un decreto por el que cedió un inmueble del Estado a una Municipalidad, al ceder a la Municipalidad de Tlalpan la Plaza del Mercado (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 396 del 7 de mayo de 1834: 332).

El Congreso determinó que "los efectos extranjeros pagaran en el lugar de su consumo el uno por ciento de derechos, además de los que por leyes anteriores deben satisfacer, y este nuevo impuesto será aplicado a los fondos de los ayuntamientos respectivos" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 397 del 7 de mayo de 1834: 332).

El 9 de mayo el Congreso prohibió "en los testamentos la mejora de tercio" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 398 del 9 de mayo de 1834: 333).

El Congreso nombró a los señores: José María Benítez y Manuel Flores comisionados para la junta de coalición con los estados de: Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Zacatecas, y a los señores: Francisco Herrera Campos y Juan José Rosales comisionados para la junta de coalición con los estados de: Puebla y Veracruz (Acta del 9 de mayo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 394).

El Congreso tomó conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, "contraído a manifestar las erratas garrafales que saca el Periódico Reformador por el descuido del

Encargado de su Corrección" (Acta de la sesión secreta del 9 de mayo de 1834. BJMLM: Colección de Actas).

El 10 de mayo el Congreso determinó que "todo empleado que maneje caudales del Estado y que esté suspenso por causa de quiebra o malversación, no percibirá los medios sueldos que hasta aquí ha disfrutado" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 399 del 10 de mayo de 1834: 333).

El 12 de mayo el Congreso le concedió una jubilación al Ciudadano José Luja (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 400 del 12 de mayo de 1834: 333).

El Congreso decretó la tercera reforma a la Constitución del Estado Libre de México (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 401 del 12 de mayo de 1834: 334), en la cual se precisó que: "para los casos de impedimento temporal del Gobernador, nombrará el Congreso un Teniente Gobernador" (art. 141); que "cuando ni el Gobernador ni su Teniente puedan ejercer el Poder Ejecutivo, recaerá éste en el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia" (art. 146), y que "si el impedimento del Gobernador o su Teniente durare más de un mes, podrá el Congreso nombrar un interino por el tiempo de la imposibilidad" (art. 147).[256]

Se indicó que "entre la elección del Gobernador y su Teniente habrá dos años de diferencia" (art.142); "que la duración del Teniente Gobernador será de cuatro años" (art. 143); que "para el despacho de los asuntos del Gobierno tendrá el Gobernador tres secretarios" (art. 149), y que cada "Secretario de Despacho dará cuenta anualmente al Congreso, en los primeros días de sesiones de marzo, por medio de una Memoria, del estado en que se hallen los objetos de su respectivo ramo, y adelantamiento o mejoras de que son susceptibles" (art. 156).

El Congreso determinó que "para la mejor distribución y despacho de las tres secretarías, creadas por decreto de esta fecha, sobre reformas a la Constitución del Estado, formará el Gobierno la planta y distribución de los ramos de los secretarios, y la pasará al Congreso para su examen y aprobación" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 402 del 12 de mayo de 1834: 336).

[256] Esta reforma fue iniciada por el anterior Congreso.

El Congreso dispuso al extinguir el Consejo del Gobierno, que “en todos los actos que por leyes vigentes obraba el Gobernador, unido con el Consejo, lo hará por sí solo” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 404 del 12 de mayo de 1834: 336).

El 13 de mayo el Congreso le concedió al Ayuntamiento de Toluca “cuatrocientos pesos anuales, por indemnización de la casa que ocupa el Congreso”, cantidad que se invertiría “en objetos de policía, prefiriendo el alumbrado, piso de las calles y acueductos, para abastecer al público de aguas potables” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 405 del 13 de mayo de 1834: 337).

El Congreso rehabilitó a los ciudadanos: Miguel Amat y Manuel María Villaseñor para que pudieran obtener empleos en el Estado (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 406 del 13 de mayo de 1834: 337).

El Congreso dispuso que “ningún individuo que perciba sueldo o asignación por el Estado, ni tampoco los párrocos de él, podrán entrar en posesión de su destino o comisión sin que de su despacho, o documento que le sirva de credencial se tome razón en la Tesorería de Instrucción Pública, por la que conste haber pagado la contribución literaria”, la cual consistía “en el dos por ciento del sueldo u honorario de un año, que pagarán los que en lo sucesivo obtengan algún destino, comisión con sueldo, o ascenso y del dos por ciento de los beneficios curados” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 407 del 13 de mayo de 1834: 337).

El Congreso recibió la Primera Cuenta Pública del Estado de México, al dar “cuenta de un oficio del Gobernador del Estado, en el que acompaña la cuenta y libros comprobantes de la Tesorería respectiva del año pasado de 831” (Acta de la sesión secreta del 13 de mayo de 1834. BJMLM: Colección de Actas).

El Diputado Francisco Suárez Iriarte presentó una acusación en contra del Tesorero del Estado, “por haber infringido una Ley que expresamente le previene, que en los primeros días de marzo remita al Congreso la cuenta del año anterior: que esta Ley se haya vigente desde el año 32, y desde entonces hasta la fecha, nunca se ha visto en el Congreso una cuenta de la Tesorería hasta hoy que se ha remitido la del año de 31” (Acta de la sesión secreta del 13 de mayo de 1834. BJMLM: Colección de Actas).

El Congreso nombró a los integrantes de la Primera Gran Comisión que funcionó en el Poder Legislativo de la Entidad. Esta comisión se integró con los diputados: Joaquín

Solórzano, José Rafael González Arratia, José del Villar y Bocanegra y Ramón Gamboa (Acta de la sesión secreta del 13 de mayo de 1834. BJMLM: Colección de Actas).

El Congreso tomó conocimiento del nombramiento que hizo la Gran Comisión de los individuos que integrarían la Sección de Gran Jurado que se haría cargo de la acusación vertida en contra del Tesorero del Estado. Dicha sección la integraron los diputados: José del Villar y Bocanegra, Joaquín Solórzano, Francisco Suárez Iriarte, Ramón Gamboa y Mariano Arizcorreta, así como el Diputado José Rafael González Arratia como Secretario y como suplentes los diputados Manuel Robredo y Joaquín Bars (Acta de la sesión secreta del 13 de mayo de 1834. BJMLM: Colección de Actas).

El 15 de mayo el Congreso aprobó la Ley sobre el Establecimiento del Montepío de Oficinas en el Estado de México, al cual debían de incorporarse todos los empleados públicos para obtener los beneficios de una pensión, previo descuento del cinco por ciento de sus respectivos sueldos. Se establecía que "las personas acreedoras a la pensión disfrutarán de la quinta parte del sueldo del empleado, que hubiere contribuido a sus fondos, desde un año hasta diez inclusive; la cuarta parte si lo hubiere verificado desde diez hasta veinte, y la tercera de veinte en adelante"[257] (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 408 del 15 de mayo de 1834: 339).[258]

El Montepío contaba con una Junta Inspectora compuesta por: el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el Teniente Gobernador, el Director de Instrucción Pública, el Secretario del Despacho Encargado del Ramo de Hacienda y el Contador General. El Tesorero General también lo era de los fondos del Montepío y tenía entre sus funciones: las de presentar "cada mes a la Junta Inspectora el respectivo corte de caja, y al fin de cada año la cuenta correspondiente a este Ramo".

El Congreso acordó secundar una iniciativa presentada por el Congreso de Coahuila y Texas (Acta del 15 de mayo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 441).

[257] Cabe señalar, que los fondos del Montepío se integrarían con el 5 por ciento aportado por los trabajadores y una cantidad igual aportada por la Tesorería General del Estado.
[258] Esta Ley constaba de apartados referentes a: las bases del establecimiento, a las personas incorporadas en el Montepío, a las personas acreedoras al Montepío y de las correspondientes pensiones, a los empleados que pierden el derecho al Montepío, a los fondos del Establecimiento, al Tesorero de los fondos, a la Junta Inspectora, al Secretario y a las solicitudes para las pensiones.

El 16 de mayo el Congreso nombró a José Zamorano y a José Gómez de la Peña como ministros del Supremo Tribunal Superior de Justicia (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 409 del 16 de mayo de 1834: 344).

El Congreso nombró al General Guadalupe Victoria como Ciudadano Benemérito del Estado (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 410 del 16 de mayo de 1834: 344).

El Congreso autorizó al Ayuntamiento de Toluca para imponer pensiones a las diligencias, a los mesones y a los billares públicos (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 411 del 16 de mayo de 1834: 344).

El 17 de mayo el Congreso acordó "que los milicianos del Estado se exceptúan del pago de contribución directa" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 412 del 17 de mayo de 1834: 345).

El Congreso dispensó al Ciudadano Agustín Flores Alatorre de diez meses de práctica para recibirse de Abogado (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 413 del 17 de mayo de 1834: 345).

El Congreso dispuso que "la azúcar que se labre en el Estado pagará por único impuesto tres granos por arroba" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 414 del 17 de mayo de 1834: 345).

El Congreso dispensó de las prácticas al Ciudadano Luis María Lazo de la Vega para que pueda examinarse de Escribano (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 415 del 17 de mayo de 1834: 345).

El 19 de mayo el Congreso dispuso que "el Gobierno proveerá a los vecinos del Pueblo de Zinacantepec de el agua que crea necesaria, tomándola de la Hacienda de Guadalupe, propia del Estado" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 403 del 19 de mayo de 1834: 336).

El 20 de mayo el Congreso dispuso que para la renovación de los diputados al Congreso General y del Estado, "las juntas municipales se celebrarán el día 3 de agosto del presente año: las de partidos el 31 del mismo, y la general los días 5 y 6 de octubre" (art. 2º); que "para el Congreso General se nombrarán doce diputados propietarios y cuatro suplentes, y para el Estado trece propietarios y siete suplentes"

(art. 3º), y que "los tres propietarios primeramente nombrados, durarán sólo dos años en el ejercicio de sus funciones" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 416 del 20 de mayo de 1834: 346).

El Congreso al suspender a los 120 celadores que custodiaban las cárceles, dispuso que "la Milicia Nacional del Estado dará en los pueblos donde resida, la guardia de la Cárcel que sea necesaria, a juicio de la autoridad política de los mismos, y los auxilios precisos para la custodia de los reos en el servicio público" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 417 del 20 de mayo de 1834: 346).

El Congreso le concedió al Ciudadano Basilio Estrada una pensión de 120 pesos anuales y un Escudo de Honor que portará en el brazo izquierdo. Dicho escudo contendrá la leyenda: "Triunfo en Tecopilco, defendiendo la soberanía del pueblo" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 418 del 20 de mayo de 1834: 347).

El Congreso acordó nombrar una comisión de su seno "que vaya cerca del Señor Presidente de la República, y manifestándole el peligro que corren las instituciones con la división que se nota entre el Ejecutivo y Legislativo de la Unión, medie para que se reconcilien y transijan en sus pretensiones" (Acta de la sesión secreta del 20 de mayo de 1834. BJMLM: Colección de Actas).

El 22 de mayo el Congreso tomó conocimiento de un anónimo en el buzón, "sobre la mala conducta que obraba el Prefecto de Cuernavaca" (Acta del 22 de mayo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 468).[259]

El Congreso tomó conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, en el que se manifestaban los errores presentados en los decretos publicados en el Periódico Reformador, acusando de los mismos a José María Saavedra, Oficial Mayor del Congreso (Acta del 22 de mayo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 468).[260]

El 26 de mayo José Zamorano acudió al Congreso a rendir su protesta de ley como Magistrado del Tribunal de Justicia (Acta del 26 de mayo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 472).

[259] El Congreso acordó pasar este anónimo al Gobierno para los efectos correspondientes.
[260] El Congreso acordó insertar dicho anónimo en el acta de la sesión, el cual fue suscrito en Tulancingo, a nombre de "el amigo del buen orden".

El Congreso nombró como Comisionado ante la Coalición que encabezaba el Estado de Guanajuato a Félix Salosi del Rojo, en lugar de Manuel Flores (Acta del 26 de mayo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 474).

El 27 de mayo el Congreso dispuso (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 419 del 27 de mayo de 1834: 347) que "el Estado de México protesta sostener a todo trance la Religión Católica, Apostólica y Romana" (art. 1º); que "protesta igualmente sostener las constituciones general y particulares en todas sus partes, y hacer que se respeten los Supremos Poderes de la Federación, de los estados y demás autoridades" (art. 2º), y que "en consecuencia, se opone a todo pronunciamiento particular, y no permitirá que por ningún motivo se altere la tranquilidad pública" (art. 3º).

Acudió al Congreso Manuel Flores a rendir su protesta de ley como Magistrado del Tribunal de Justicia (Acta del 27 de mayo de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 42, foja 477).

El Congreso acordó que "la Comisión de Gobierno abrirá dictamen precisamente para el día de mañana, proponiendo las medidas que juzgue convenientes para sostener en las actuales circunstancias políticas la soberanía del Congreso General y de los estados" (Acta de la sesión secreta del 27 de mayo de 1834. BJMLM: Colección de Actas).

El Congreso nombró al Diputado Miguel Macedo Villanueva como Comisionado ante el Presidente de la República, para que le entregara el acuerdo tendiente a sostener la Religión Católica y las constituciones (Acta de la sesión secreta vespertina del 27 de mayo de 1834. BJMLM: Colección de Actas).

El 28 de mayo el Congreso aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos para la Hacienda del Estado de México para el Año Económico del 2 de junio de 1834 al 2 de junio de 1835, en el cual se mantuvieron las contribuciones y las percepciones de los servidores públicos decretadas el año anterior (Decreto del 28 de mayo de 1834. BJMLM: vol. 80, exp. 281).[261]

En el rubro del Poder Legislativo se seguían contemplando $3,000.00 de dietas para cada uno de los 21 diputados, $1,600.00 para el Redactor del Congreso, $1,500.00

[261] No se publicó en la Colección de Decretos. Se publicó este decreto en forma de cuadernillo.

para su Oficial Mayor, $1,200.00 para su Segundo Oficial, mil para el Archivero, $500.00 para cada uno de los cuatro escribientes, la misma cantidad para dos escribientes provisionales y $450.00 para el mozo de oficios.

En cuanto a los otros dos poderes contempló sueldos para seis ministros y un Fiscal del Supremo Tribunal de Justicia, dos de ellos con $3,500.00 y otros cinco de $3,000.00. Presupuestó $5,000.00 de sueldo para el Gobernador, $3,500.00 para el Teniente Gobernador y $3,000.00 para cada uno de los tres secretarios y diez prefectos.

El 30 de mayo el Congreso suprimió las plazas de Contador de Moneda y Administrador de Papel Sellado en la Tesorería, cuyas funciones en el primer caso recaerían en el Cajero General y las segundas “en la Tesorería General, cuyo Jefe será responsable del sello y del papel” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 420 del 30 de mayo de 1834: 348).

El Congreso indultó “de toda pena al Cívico Martín Galindo, respecto del delito porque ha sido condenado a presidio” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 421 del 30 de mayo de 1834: 349).

El Tercer Congreso Constitucional (1833-1834), se integró con 21 diputados nombrados por electores secundarios en la Junta General del Estado, sesionó del 17 de febrero de 1833 al 30 de mayo de 1834, realizó tres periodos ordinarios de sesiones y cuatro periodos extraordinarios de sesiones y expidió 154 decretos entre el 21 de febrero de 1833 y el 30 de mayo de 1834 (Poder Legislativo II, 2001. Índice de decretos: 649-664).

Capítulo 9
Segunda Suspensión del Orden Constitucional (1834)

El 31 de mayo de 1834 con el apoyo de la Imprenta del Gobierno del Estado se dio a conocer una proclama de los insurrectos de la Ciudad de Toluca, en la cual al repudiar las leyes y decretos expedidos en materia religiosa y reconocer la autoridad del Presidente Antonio López de Santa Anna indicaban: que "el pueblo declara que no han correspondido a su confianza los diputados que han prestado su consentimiento para la sanción y publicación en el Estado de los decretos referidos, y espera que así ellos como los funcionarios que se han obstinado en llevar adelante las resoluciones de esta clase, se separen de sus puestos y no intervengan en contra ni a favor de esta manifestación, hasta que la Nación representada de nuevo, se reorganice conforme a la Constitución Federal y del modo más conveniente a su felicidad" (Proclama del 31 de mayo de 1834. AHEM: G.G.G. vol. 34, exp. 49).

El 12 de junio José María Esquivel en su carácter de Ministro del Tribunal Superior de Justicia y Encargado del Poder Ejecutivo emitió una proclama, en la cual indicaba que Querétaro es feliz y en "breve lo serán la infortunada Puebla, y reinarán por siempre la religión, la libertad y la paz. Gozaremos no hay duda, de bienes tan preciosos a la sombra del paternal Gobierno del Heroico General que preside los destinos de la Nación" (Baranda I, 1987. Proclama del Gobernador del 12 de junio de 1834: 338).

El 5 de julio el Ciudadano José María Esquivel, Gobernador Interino del Estado al señalar que su Gobierno contaba con el apoyo del Señor Presidente de la República, tuvo a bien "decretar lo siguiente (Decreto del Gobernador José María Esquivel del 5 de julio de 1834. BJMLM: vol. 75, exp. 32):

Artículo 1º.- Se deroga el decreto de convocatoria expedido el 10 de junio último y sus efectos se suspenderán donde haya sido observado.

Artículo 2º.- Se celebrarán las juntas municipales o primarias el domingo 13 del actual para la elección de diputados al Congreso General y del Estado.

Artículo 3º.- Las juntas de partido se celebrarán el 18 del mismo.

Artículo 4º.- La Junta General se celebrará en la Capital del Estado el domingo 3 de agosto, teniendo antes dos preparatorias para los objetos de la ley.

Artículo 5º.- El día 3 se elegirán diputados para el Congreso General, y el 4 de los del Estado.

Artículo 6º.- Para el Congreso General se elegirán doce diputados propietarios y cuatro suplentes, y para el del estado veinte y un diputados propietarios y siete suplentes conforme al censo que se tuvo presente en las últimas elecciones.

Artículo 7º.- Los once primeros nombrados para la Asamblea el Estado funcionarán por cuatro años, debiéndose renovar los diez últimos en el bienio siguiente con arreglo a la Constitución.

Artículo 8º.- Los diputados electos para el Congreso del Estado presentarán sus credenciales al Gobierno que dará cuenta con ellas a la Primera Junta Preparatoria, debiendo ser ésta presidida por el 1º en orden de nombramiento entre los diputados que concurran.

Artículo 9º.- La Junta Preparatoria se celebrará el 13 de agosto y al día siguiente la 2ª en la cual quedará instalado el Congreso para que abra sus sesiones el día 15.

Artículo 10.- Estas elecciones se verificarán con sujeción a la Constitución, a la ley del 14 de febrero de 1827 y su adicional del 10 de mayo de 1830".

El 14 de agosto el C. José María Esquivel, Ministro Decano del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Encargado del Poder Ejecutivo (Decreto del Gobernador José María Esquivel del 14 de agosto de 1834. BJMLM: vol. 75, exp. 32), dispuso que al no haberse reunido "el número de señores diputados para la celebración de las juntas preparatorias o instalación de la Legislatura el día señalado por la convocatoria; y en consideración a que no fijar uno cierto para tan grandioso objeto traería varios inconvenientes que deben resolverse, he venido a decretar lo siguiente:

Artículo 1º.- Se instalará el Honorable Congreso del Estado el día 20 del presente, celebrando en los dos días anteriores las juntas preparatorias.

Artículo 2º.- Esta disposición se comunicará a los señores diputados presentes para que conforme a la Constitución estrechen a los que falten a que concurran el día señalado indispensablemente".

Capítulo 10
El Cuarto Congreso Constitucional (1834-1835)

El Cuarto Congreso Constitucional (1834-1835) que operó del 25 de agosto de 1834 al 6 de octubre de 1835 se integró con 21 diputados nombrados por electores secundarios en la Junta General del Estado. Los diputados propietarios y suplentes en funciones eran: José María Vázquez, Alfonso Fernández, Pedro Domínguez Esquivel, José Pérez Palacios, José María Yermo, José María Tagle, José Ignacio González Pliego, José María Valiente, Lázaro de la Garza, José María Vizcarra, Antonio Madrid, Nicolás Aragón (Acta del 23 de agosto de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 4), José Ignacio González Caraalmuro, Juan Icaza, Diego Germán (Acta del 27 de agosto de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 18), José Joaquín Rosas, José Rafael Berruecos[262] (Acta del 29 de agosto de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 20), Víctor Bravo (Acta del 2 de septiembre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 25), Felipe Pozos (Acta del 17 de septiembre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 88), Epigmenio de la Piedra (Acta del 26 de septiembre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 141) y Felipe Pérez Arroyo (Suplente) (Acta del 7 de abril de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 90). Los diputados integrantes de su Gran Comisión eran: José María Vázquez, José María Vizcarra, Antonio Madrid, Alfonso Fernández y José María Tagle (Acta del 26 de agosto de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 16).

El 22 de agosto de 1834 se efectuó la primera Junta Preparatoria de la Cuarta Legislatura Constitucional bajo la Presidencia del Diputado Electo José María Vázquez y la asistencia de los demás presuntos diputados: Antonio Madrid, José María Vizcarra, Nicolás Aragón, José María Yermo, José María Valiente, José María Tagle, José Pérez Palacios, Pedro Domínguez Esquivel, y Alfonso Fernández (Acta del 22 de agosto de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 2).

El Congreso reunido en Junta integró las dos comisiones revisoras de las cartas credenciales de los diputados presididas por los diputados electos: Nicolás Aragón y José María Valiente (Acta del 22 de agosto de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 2).

[262] Se tiene conocimiento que el Diputado Berruecos renunció a su cargo, por haber sido designado Senador por el Estado de Puebla (Acta del 7 de mayo de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 130).

El 23 de agosto el Congreso reunido en Junta aprobó las cartas credenciales de los diputados: José María Vázquez, Alfonso Fernández, Pedro Domínguez Esquivel, José Pérez Palacios, José María Yermo, José María Tagle, José Ignacio González Caraalmuro, José María Valiente, Lázaro de la Garza, José María Vizcarra, Antonio Madrid y Nicolás Aragón (Acta del 23 de agosto de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 4).

En el Congreso reunido en Junta rindieron su protesta de ley los diputados: José María Vázquez, Alfonso Fernández, Pedro Domínguez Esquivel, José Pérez Palacios, José María Yermo, José María Tagle, José Ignacio González Caraalmuro, José María Valiente, José María Vizcarra, Antonio Madrid y Nicolás Aragón (Acta del 23 de agosto de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 5).[263]

El Congreso reunido en Junta integró la Mesa Directiva del primer mes de su Primer Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado Electo José María Vizcarra y la Vicepresidencia del Diputado Electo José María Tagle. Nombró para todo el periodo ordinario de sesiones como secretarios propietarios a los diputados electos: Alfonso Fernández y José María Valiente y como secretarios suplentes a los diputados electos: Nicolás Aragón y José Ignacio González Caraalmuro (Acta del 23 de agosto de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 5).

El Presidente del Congreso, Diputado José María Vizcarra, efectuó la declaratoria de instalación del Cuarto Congreso Constitucional (Acta del 23 de agosto de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 5).

El 25 de agosto el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Encargado del Gobierno José María Esquivel, al acudir a la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, señaló que “el Estado de México fue el primero que dio voz de alarma contra el opresor, pues Cuernavaca, uno de sus distritos y que ocupara una página brillante en nuestra historia, proclamó el Plan Salvador que secundó esta Capital, y que ha seguido la República entera” (Acta del 25 de agosto de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 6).

[263] La fórmula del juramento era la siguiente: “juráis a Dios y a los Santos Evangelios guardar la Constitución del Estado, la Federal y la Acta Constitutiva, en todo aquello que no se oponga a lo que acordasen el Congreso General y el de este Estado en uso de las facultades que la junta electoral les ha conferido extraordinariamente constantes en las credenciales e instrucciones de sus respectivos diputados”.

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado José María Vizcarra, señaló que “este Soberano Congreso, va a ser el más bien al acabado modelo, al promover la paz, la justicia, la autoridad, y cuantos bienes estén al alcance de esta Legislatura humana” (Acta del 25 de agosto de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 6).

El 26 de agosto el Congreso nombró como integrantes de la Gran Comisión a los diputados: José María Vázquez, como primer miembro; José María Vizcarra, como segundo miembro; Antonio Madrid, como tercer miembro, Alfonso Fernández, como cuarto miembro y José María Tagle, como quinto miembro (Acta del 26 de agosto de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 16).

El Congreso acordó que la Gran Comisión nombrara a los integrantes de la Comisión de Poderes, reservándose el nombramiento de las demás comisiones, hasta en tanto se presenten los demás diputados electos (Acta del 26 de agosto de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 16).

El 27 de agosto el Congreso aprobó el nombramiento que hizo la Gran Comisión de integrantes de la Comisión de Poderes. Dicha comisión se integró con los diputados: Nicolás Aragón, Gabriel Yermo y Antonio Madrid (Acta del 27 de agosto de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 17).

El Congreso tomó conocimiento de una exposición recibida en el buzón, en la que se pedía que se revocase “el acuerdo de la Legislatura anterior, que hizo salir de esta Ciudad al Reverendo Padre Franciscano Fray Mateo Torres” (Acta del 27 de agosto de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 17).

El Congreso aprobó las credenciales de los diputados: José Ignacio González Caraalmuro, Juan Icaza y Diego Germán (Acta del 27 de agosto de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 18).

El Diputado José Ignacio González Caraalmuro rindió su protesta de ley ante el Pleno del Congreso (Acta del 27 de agosto de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 18).

El 29 de agosto se aprobaron las credenciales de los diputados: José Joaquín Rosas y Rafael Berruecos (Acta del 29 de agosto de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 20).

Los diputados: José Joaquín Rosas y Rafael Berruecos rindieron su protesta de ley ante el Pleno del Congreso (Acta del 29 de agosto de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 21).

El 1 de septiembre los diputados: Juan Icaza y Lázaro de la Garza acudieron al Congreso a rendir su protesta de ley (Acta del 1 de septiembre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 21).

El Congreso nombró como senadores del Estado al Congreso de la Unión a los señores: Epigmenio José de Villanueva y José María Guerras (Acta del 1 de septiembre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 22).

El Congreso tomó conocimiento del comunicado de la Gran Comisión por el que designó diputados integrantes de las comisiones ordinarias: de Puntos Constitucionales, de Justicia, Negocios Eclesiásticos y Legislación, de Gobernación, la Primera de Hacienda, de Instrucción Pública, de Milicia, de Código Municipal y de Comercio, Agricultura, Minería e Industria, así como de la comisión especial que habría de formar la lista de jurados (Acta del 1 de septiembre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 23).

El 2 de septiembre el Congreso aprobó la credencial del Diputado Electo Víctor Bravo (Acta del 2 de septiembre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 25).

Acudió al Congreso Víctor Bravo a rendir su protesta de ley como Diputado (Acta del 2 de septiembre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 25).

El 4 de septiembre el Congreso aprobó la minuta del decreto por la que nombró al Licenciado Manuel Díez de Bonilla como Gobernador y a Valentín Canalizo como Teniente Gobernador para llenar el periodo constitucional (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 422 del 4 de septiembre de 1834: 349).[264]

[264] Para la Gubernatura Manuel Díez de Bonilla obtuvo 16 votos y Valentín Canalizo uno. Para Teniente Gobernador Valentín Canalizó obtuvo 15 votos y José María Jiménez dos.

El 5 de septiembre el Congreso nombró como integrantes de la Sección de Gran Jurado a los diputados: Lázaro de la Garza, Juan Icaza, José Ignacio González Pliego, Víctor Bravo, Rafael Berruecos y José Ignacio González Caraalmuro (Acta del 5 de septiembre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 42).

El 10 de septiembre el Congreso acordó que "el Gobierno pondrá en conocimiento del Señor Presidente de la República el obstáculo que impide al Señor Coronel Don Felipe Pérez (Arroyo), venir a desempeñar su encargo de Diputado, para que tomándolo su Excelencia en consideración dicte la providencia que tenga a bien" (Acta del 10 de septiembre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 59).[265]

El 11 de septiembre el Congreso determinó que el Gobernador y el Teniente Gobernador debían prestar su juramento en el Congreso ante la presencia del Gobernador Provisional y de las autoridades eclesiásticas, civiles, militares y jefes de oficina (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 423 del 11 de septiembre de 1834: 349).

El 13 de septiembre el Congreso dispuso que "la Junta Médica de esta Ciudad mientras se arregla definitivamente el método de enseñanza pública, sólo ejercerá la atribución de impedir el que ejerzan la Medicina los que no presentasen título de Médico aprobado (Acta del 13 de septiembre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 80).

En sesión extraordinaria, el Presidente del Congreso, Diputado José María Vizcarra, después de recibir la protesta del Gobernador Manuel Díez de Bonilla, señaló que "se acaba de presentar en este augusto Santuario de las Leyes al Primer Funcionario del Estado, nuevamente electo: ha prometido a presencia del cielo y de la tierra satisfacer completamente la pública expectación y ha firmado un pacto, sin duda el más solemne entre los hombres, poniendo como testigo nada menos que al Cristo de las Bondades" (Acta del 13 de septiembre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 81).

En respuesta a dicho mensaje, el Gobernador del Estado, Manuel Díez de Bonilla, les indicó a los diputados que: "al encargarme del mundo que me habéis confiado no os deberíais prometer los resultados del saber y los talentos, pero sí de la actividad y energía en el cumplimiento de mis deberes y los de la protección legal que reclaman las seguridades de los ciudadanos y de la Patria. Vuestra sabiduría será la que dicte

[265] Esta proposición se hizo porque el Diputado Electo manifestó que no podía dejar su encargo en la Comandancia de la demarcación de Tulancingo.

los oráculos de paz y yo quien los haga cumplir, vuestra será la gloria y mío el cuidado de conservarla en su esplendor" (Acta del 13 de septiembre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 82).

El 15 de septiembre el Congreso recibió la protesta de ley de Manuel Piña como Secretario de Hacienda, al ser nombrado para dicho cargo por el Gobernador (Acta del 15 de septiembre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 83).

El 17 de septiembre el Congreso aprobó la carta credencial del Diputado Felipe Pozos (Acta del 17 de septiembre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 88).

Felipe Pozos rindió su protesta de ley como Diputado del Congreso (Acta del 17 de septiembre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 88).

El Congreso aprobó el nombramiento que hizo la Gran Comisión de integrantes de las comisiones: Segunda de Hacienda, de Análisis, de Desistimiento a la Acusación de la Corte de Justicia y de Poderes (Acta del 17 de septiembre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 88).

El 19 de septiembre el Congreso tomó conocimiento de una proposición que debía desahogarse en sesión secreta, "relativa a que se excite a los señores Faguaga, Germán y Piedra, para que vengan a desempeñar su encargo de diputados" (Acta del 19 de septiembre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 98).[266]

El 22 de septiembre el Congreso declaró "insubsistente el acuerdo del 29 de abril de este año, en el que prohíbe a los prelados de los conventos de religiosos de este Estado admitir a ningún religioso a más de los que hoy existen" (Acta de la sesión secreta del 22 de septiembre de 1834. BJMLM: Colección de Actas).

El 25 de septiembre el Congreso nombró como Presidente de la Mesa Directiva del segundo mes de su Primer Periodo Ordinario de Sesiones al Diputado Antonio Madrid y como Vicepresidente al Diputado José Ignacio González Caraalmuro (Acta del 25 de septiembre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 133).

[266] En la sesión secreta se excitó a los referidos diputados "para que se presenten en esta Ciudad a desempeñar su encargo, a más tardar el 27 de los corrientes" (Acta de la sesión secreta del 19 de septiembre de 1834. BJMLM: Colección de Actas).

El 26 de septiembre el Congreso acordó modificar la fórmula de juramento de los diputados, al suprimir las palabras que indicaban: "en uso de las facultades que la Junta Electoral les ha conferido extraordinariamente constantes en las credenciales e instrucciones de sus respectivos diputados", para ser sustituidas por las que señalaban: "conforme a las facultades que éste tiene declaradas" (Acta del 26 de septiembre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 137).[267]

El Congreso aprobó la carta credencial del Diputado Epigmenio de la Piedra (Acta del 26 de septiembre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 141).

Epigmenio de la Piedra y Diego Germán rindieron su protesta de ley como diputados del Congreso (Acta del 26 de septiembre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 141).

El 29 de septiembre el Congreso acordó que la Prefectura de la Capital continuara desempeñándose con arreglo a la Constitución y leyes anteriores al 12 de mayo del presente año (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 424 del 29 de septiembre de 1834: 351), por lo que este funcionario dejó de fungir como Teniente Gobernador.

El Congreso determinó que haría nueva elección de Gobernador y que "el periodo que deben llenar el Gobernador y su Teniente, nombrados por decreto de 4 del mes presente, terminará para el primero el 12 de marzo de 835, para el segundo en igual fecha de 837" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 425 del 29 de septiembre de 1834: 351).

El 30 de septiembre el Congreso acordó suspender "la publicación del acuerdo del día 13, sobre restricción a la Junta Médica (Acta del 30 de septiembre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 150).

El Congreso acordó que daba "a los senadores por el Estado, el mismo poder e instrucciones que la Junta General Electoral dio a los diputados", y que "la Secretaría al comunicar a dichos senadores este acuerdo, les pasará en copia autorizada un

[267] Con dicha reforma el juramento se redujo a los siguientes términos: "Juráis a Dios y a los Santos Evangelios guardar la Constitución del Estado, la Federal y la Acta Constitutiva, en todo aquello que no se oponga a lo que acordasen el Congreso General y el de este Estado, conforme a las facultades que éste tiene declaradas".

ejemplar de la credencial dada a los diputados del Congreso de la Unión" (Acta del 30 de septiembre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 151).[268]

El 1 de octubre el Congreso aprobó el nombramiento que hizo la Gran Comisión de integrantes de la Primera Comisión de Hacienda (Acta del 1 de octubre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 155).

El 2 de octubre el Congreso aprobó la minuta por la que nombró al Ciudadano Manuel Díez de Bonilla como Gobernador Constitucional para el cuatrienio para el cuatrienio del 12 de marzo de 1835 al 12 de marzo de 1839 (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 426 del 2 de octubre de 1834: 352).[269]

El 6 de octubre el Congreso dispuso "que se hiciesen juntas en todas las municipalidades del Estado, para que expresasen (sus habitantes) su opinión sobre el sistema de gobierno" (Acta del 6 de octubre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 174).

El Congreso nombró a José María Aguilar como su Redactor, después de aceptar la renuncia que a dicho cargo hizo Urbano Fonseca (Acta de la sesión secreta del 6 de octubre de 1834. BJMLM: Colección de Actas).

El 8 de octubre la Legislatura determinó que "el Congreso, en la época de receso, no se reunirá a sesiones extraordinarias, sino para ocuparse exclusivamente de negocio o negocios urgentes de interés general del Estado, calificadas previamente estas circunstancias por el voto a lo menos de cuatro individuos de los cinco que componen la Diputación Permanente, y de acuerdo con el Gobierno" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 427 del 8 de octubre de 1834: 352).

Acudió al Congreso a rendir su protesta de ley Luis Varela como Secretario de Relaciones (Acta del 8 de octubre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 186).

El 13 de octubre el Congreso integró la Diputación Permanente de su Primer Receso, presidida por el Diputado Diego Germán. Nombró como Secretario al Diputado Antonio Madrid, como miembros a los diputados: José María Valiente, José Pérez Palacios y

[268] Se desconoce el texto que figuraba en la credencial dada a los diputados al Congreso de la Unión.
[269] El Gobernador fue electo por unanimidad en la sesión del 1 de octubre.

Nicolás Aragón y como Suplente al Diputado José Ignacio González Caraalmuro (Acta del 13 de octubre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 217).

El 14 de octubre el Congreso le concedió a la Villa de Cuernavaca el título de Ciudad (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 429 del 14 de octubre de 1834: 353).

El Congreso le concedió al Señor Gobernador "Manuel Díez de Bonilla, dispensa de la Ley de 14 de enero de 1828, para que pueda admitir empleo o comisión con sueldo de provisión de los Supremos Poderes, con retención del Gobierno de este Estado", indicándose que "cesará el sueldo de Gobernador desde el día que se separe del Gobierno, disfrutándolo el que haga sus veces (Acta del 14 de octubre de 1834. BJMLM: Colección de Actas).

El 15 de octubre el Congreso al efectuar la cuarta reforma a la Constitución Política del Estado Libre de México, suspendió sus artículos 34 y 37 de la misma, "en la parte relativa a los intervalos para sus lecturas de dictámenes y proposiciones y sólo se observará el de un día entre la primera y la segunda de las proposiciones presentadas por los diputados y el de tres entre las mismas lecturas de los dictámenes de comisiones, pudiendo hablar en la primera y segunda lectura de las proposiciones dos señores diputados, una sola vez en cada sentido". "El Congreso podrá dispensar todos los trámites, menos el de pase a comisión en caso de grave urgencia o de obvia resolución, calificada por los dos tercios de sus individuos presentes" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 430 del 15 de octubre de 1834: 352).[270]

El Congreso declaró insubsistente "el decreto del 12 de septiembre de 1833, en la parte que declaró simples jornaleros a los que trabajan diariamente en obras ajenas, y cuyo estipendio no pasa de un real y medio, sustituyéndolo por lo siguiente: quedan exentos del servicio personal de la Milicia Cívica los que ganen diariamente, en obras propias o ajenas, hasta tres reales siendo solteros, y hasta cinco siendo casados" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 431 del 15 de octubre de 1834: 354).

El Congreso al reconocer como nacional el Pronunciamiento de Cuernavaca del 25 de mayo (Reyes Heroles, Jesús III, 1982: 150), declaró insubsistentes y atentatorios contra los derechos sociales algunos decretos de la anterior Legislatura, entre los cuales estaban: el del 8 de mayo de 1833 contra los empleados y el del 9 de junio de

[270] Esta reforma fue iniciada por el Congreso anterior. El decreto indebidamente está fechado el 18 de octubre, cuando el Congreso ya no sesionaba.

dicho año que comprendió en el derecho citado a los empleados que servían sus destinos fuera de la Ciudad de Toluca. En tales circunstancias, determinó que "no será impedimento legal para la restitución de empleados […] el haber obtenido empleo o comisión con sueldos del Gobierno General, durante la destitución que han sufrido"; que "los que sirvan al Estado en calidad de interinos o provisionales, podrán volver asimismo, a sus plazas, si no están suprimidas ni provistas en propiedad, atendiéndolos el Gobierno en caso contrario según su actitud y mérito para las vacantes", y que "los empleados que obtuvieron nombramiento o ascensos de la última Administración, y que habiendo continuado en el servicio de sus plazas hasta la fecha, debieren cesar o descender a consecuencia de este decreto, serán atendidos por el Gobierno según su actitud y mérito, para las vacantes, con preferencia a nuevos pretendientes, en igualdad de circunstancias, previo expediente que instruirá el mismo Gobierno para la calificación que corresponda" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 432 del 15 de octubre de 1834: 354).

El 16 de octubre el Congreso desistió "de la injusta acusación hecha por la anterior Legislatura, ante la Cámara de Diputados del Congreso General, contra los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por haber decidido a favor del Juez de Letras del Distrito Federal, las competencias suscitadas entre éste y los jueces de Morelos y Cuernavaca" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 428 del 16 de octubre de 1834: 352).

El Congreso dispuso (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 433 del 16 de octubre de 1834: 356) que "los diputados solo disfrutaran dietas durante el tiempo de sesiones" (art. 1º); que "les correrán desde el día que se presenten a desempeñar su encargo, si llegaren a prestar el juramento" (art. 2º); que "se les abonará por meses vencidos a razón de tres mil pesos anuales, rebajándose una quinta parte a los miembros de la Diputación Permanente, durante el periodo de ésta" (art. 3º); y que "a la vez de cada reunión de sesiones, se abonará en viático de venida y regreso a los diputados ausentes, no vecinos del lugar de residencia del Congreso" (art. 4º).

El Congreso facultó al Ejecutivo para que "pueda gastar hasta diez y ocho mil pesos en comprar a esta Municipalidad y reparar el local, de manera que proporcione Palacio al Soberano Congreso, al Gobernador, y comodidad a las secretarías y a las oficinas de Hacienda" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 434 del 16 de octubre de 1834: 357).

El Congreso le concedió al Gobierno ocho mil pesos para gastos extraordinarios (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 435 del 16 de octubre de 1834: 357).

El Congreso autorizó al Gobierno para gastar la cantidad correspondiente destinada para objetos que no tengan determinada exhibición mensual (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 436 del 16 de octubre de 1834: 357).

El Congreso al revocar el decreto que organizó la educación, facultó al Ejecutivo para reglamentar la educación (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 437 del 16 de octubre de 1834: 357).

El Congreso al cesar los decretos del 6 de julio de 1833 y del 10 de enero y 5 de mayo de 1834, dispuso sobreseer "en las causas criminales instruidas en los tribunales del Estado, en virtud de algunas de dichas leyes" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 438 del 16 de octubre de 1834: 358).

El Congreso declaró nulas en el Estado las leyes generales sobre reformas eclesiásticas expedidas en los años 1833 y 1834 (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 439 del 16 de octubre de 1834: 358).

El Congreso dispuso que el Gobierno transija con el Señor Juan José Piña sobre la contrata relativa a la pensión de pulques (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 440 del 16 de octubre de 1834: 359).

El Congreso facultó al Gobierno para arreglar la Milicia Local (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 441 del 16 de octubre de 1834: 360).

El Congreso dispuso que no tendrían efecto "los decretos del 7 de mayo de 1833, relativos a la traslación a esta Ciudad del Juzgado de Testamentos, Capellanías y Obras Pías" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 442 del 16 de octubre de 1834: 360).

El Gobernador Manuel Díez de Bonilla, al acudir a la clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, les indicó a los diputados que "vuestras miradas no se han contraído al magnánimo horizonte de contemplaciones egoístas y criminales, sino que al excitar en la esfera de la prosperidad común, habéis atendido a los ramos todos de la Administración, de manera que desarraigando abusos y algunos

intereses, habéis lastimando las ventajas particulares de individuos o clases" (Acta del 16 de octubre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 238).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado Antonio Madrid, señaló que "las puertas del Estado están abiertas a todo el mundo; el negociante no tiene ya obstáculo para dar un rápido impulso a sus especulaciones, si el pacífico labrador trabajara en el desaliento de quien teme que el nuevo campo de libertad y derechos del hombre, se le prive en un momento del fruto de su humano sudor" (Acta del 16 de octubre de 1834. BJMLM. Colección de Actas: vol. 43, foja 239).[271]

El 4 de noviembre la Diputación Permanente convocó al Congreso a su Primer Periodo Extraordinario de Sesiones a efectuarse el día 18 de dicho mes, en el cual se tratarían los asuntos referentes: a "la votación para reemplazar en la Alta Corte de Justicia al finado Sr. D. José Domínguez Manzo"; a "las iniciativas del Gobierno sobre las bases para el arreglo de las oficinas generales de hacienda", "para el de las tesorerías foráneas de rescate", "de algunos puntos relativos a la obligación impuesta al Gobierno sobre la organización de la Milicia Cívica", "reformas de leyes vigentes contra el contrabando", "compostura y edificación urgente de algunos puentes y cárceles", "salubridad y tranquilidad pública", y "arreglo de los tribunales superiores", y a "los asuntos pendientes del estanco del tabaco y derogación de los decretos del 16 de abril y 9 de este año, acerca de la sucesión de los hijos ilegítimos y mejora de tercios", "observaciones hechas a los decretos del 16 de octubre de este año, relativas al nombramiento de empleados de la Secretaría del Congreso y al peaje de Tenango a Tepopula", "las iniciativas que a juicio del Congreso deban hacerse al de la Unión y a los negocios propios de sus facultades económicas" (Poder Legislativo II, 2001. Convocatoria del 4 de noviembre de 1834: 360).[272]

El 18 de noviembre el Congreso reunido en Junta integró la Mesa Directiva de su Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, presidida por el Diputado José Rafael Berruecos. Nombró como Vicepresidente al Diputado Alonso Fernández[273] y como secretarios propietarios a los diputados: Diego Germán y Pedro Domínguez Esquivel (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 443 del 17 de diciembre de 1834: 361).

[271] No se localizaron las actas de la Diputación Permanente.
[272] No se localizaron las actas de las sesiones de apertura de dicho periodo extraordinario, el cual se efectuó tal como se puede constatar con los decretos expedidos posteriormente.
[273] Este Diputado firmó como Presidente del Congreso el decreto 446 del 18 de diciembre de 1834 (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 446 del 18 de diciembre de 1834: 363).

Se efectuó la sesión de apertura del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso, bajo la Presidencia del Diputado José Rafael Berruecos (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 443 del 17 de diciembre de 1834: 361).

El 21 de noviembre el Congreso integró una comisión de su seno "para compeler a todos los diputados ausentes a que concurran a las sesiones que están convocadas". Dicha comisión se integró con los diputados: Diego Germán, José Rafael Berruecos y Antonio Madrid (Acta de la sesión secreta del 21 de noviembre de 1834. BJMLM: Colección de Actas).

El 6 de diciembre el Congreso le otorgó una licencia al Gobernador Manuel Díez de Bonilla, "para pasar algunos días a la Ciudad Federal con negocios de interés público" (Acta de la sesión secreta del 6 de diciembre de 1834. BJMLM: Colección de Actas).[274]

El 16 de diciembre el Congreso le otorgó al Gobernador Manuel Díez de Bonilla permiso "para pasar a la Ciudad Federal por ocho días" (Acta de la sesión secreta del 16 de diciembre de 1834. BJMLM: Colección de Actas).[275]

El 17 de diciembre el Congreso facultó al Gobierno para nombrar uno o dos visitadores de su confianza y para "arreglar las oficinas de hacienda, sin aumentar los gastos que en ella se hacen al presente, sino antes bien, procurando la posible economía, que no ceda en perjuicio de los actuales empleados propietarios" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 443 del 17 de diciembre de 1834: 361).

El Congreso autorizó "al Gobierno para que convoque a capitalistas que quisieran situar en los minerales del Estado el fondo para rescatar […] todas las platas y oro que se presenten al cambio" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 444 del 17 de diciembre de 1834: 361).

El Congreso derogó el decreto que estableció el peaje en el Camino de Tenango a Buenavista (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 445 del 17 de diciembre de 1834: 362).

El 18 de diciembre el Congreso facultó al Gobierno para "dictar las providencias que estime convenientes, para que por lo menos en cada Cabecera de Distrito haya una

[274] En ese periodo se hizo cargo del Poder Ejecutivo el Teniente Gobernador Valentín Canalizo.
[275] En ese periodo se hizo cargo del Poder Ejecutivo el Teniente Gobernador Valentín Canalizo.

cárcel segura, sana y con toda la comodidad que pueda conciliarse con la posible economía" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 446 del 18 de diciembre de 1834: 362).

El 19 de diciembre el Congreso autorizó al Gobierno a proveer supletoriamente de manera provisional las faltas de algunos individuos de los tribunales superiores (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 447 del 19 de diciembre de 1834: 363).

El Congreso autorizó al Gobierno para "arreglar provisionalmente la expedición de licencias para portar armas, sin exigir por ellas más que lo preciso para indemnizarse de sus gastos" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 448 del 19 de diciembre de 1834: 363).

El Congreso derogó los decretos del 16 de abril y del 9 de mayo de 1834, los cuales declaraban herederos forzosos a los hijos ilegítimos a falta de descendientes y ascendentes en línea recta y prohibían en los testamentos la mejora de tercio (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 449 del 19 de diciembre de 1834: 364).

El 27 de enero de **1835** concluyó el régimen de Antonio López de Santa Anna, cuando éste al ver restablecida la tranquilidad pública solicitó licencia para retirarse a su Hacienda, comprometiéndose a presentar su renuncia en el caso de que no se le otorgara dicho permiso. Como el Congreso no estaba dispuesto a que el Gobierno recayera nuevamente en Valentín Gómez Farías, éste se vio obligado a desconocerlo como Vicepresidente (Decreto del 27 de enero de 1835. AHEM: L.L.D.F. vol. 14, exp. 3).

El 28 de enero asumió la Presidencia de la República en forma interina Miguel Barragán (Decreto del 27 de enero de 1835. AHEM: L.L.D.F. vol. 14, exp. 2).

El 1 de marzo el Congreso reunido en Junta integró una comisión de su seno para compeler a los diputados que no habían asistido a la Primera Junta Preliminar. Dicha comisión se integró con los diputados: José María Vizcarra, José María Valiente y José Ignacio González Caraalmuro (Acta del 1 de marzo de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 4).

El 3 de marzo el Congreso reunido en Junta dispuso que "se excitara por conducto del Gobierno el día de mañana por el correo ordinario a los señores diputados que se hallen en la Ciudad Federal, para que se presenten en esta Capital a los dos días de

recibida la comunicación" (Acta del 3 de marzo de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 8).

El Congreso reunido en Junta integró la Mesa Directiva del primer mes de su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presdencia del Diputado José María Valiente y la Vicepresidencia del Diputado Nicolás Aragón. Nombró para todo el periodo ordinario de sesiones como secretarios propietarios a los diputados: Epigmenio de la Piedra y José Joaquín Rosas y como secretarios suplentes a los diputados: Alfonso Fernández y José María Vizcarra (Acta del 3 de marzo de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 10).

El Presidente del Congreso, Diputado José María Valiente, declaró abiertos los trabajos del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso (Acta del 3 de marzo de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 11).[276]

El 4 de marzo el Gobernador Manuel Díez de Bonilla al acudir a la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, señaló que "después de los desastres que se habían difundido sobre el territorio nacional, un espíritu de disgusto y aplicación, debemos tributar nuestras más humildes gracias a la eterna Providencia, porque se ha dignado dirigirnos una mirada propicia sobre nuestros infortunios" (Acta del 4 de marzo de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 11).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado José María Valiente, indicó que "deseosos de conocer las verdaderas necesidades de los pueblos, y de concurrir a ellas con la posible oportunidad y prontitud, esperan mucho de los esfuerzos de aquellos y que por su situación se hayan más al alcance de los males y de los remedios" (Acta del 4 de marzo de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 16).

El 12 de marzo Manuel Díez de Bonilla, al acudir al Congreso a rendir su protesta como Gobernador Constitucional, les indicó a los diputados que "de vuestra parte el saber, la prudencia y la justicia, y de la mía la energía, la exactitud y la vigilancia podrán hacer la dicha de los habitantes del Estado, contando especialmente para su logro con la tranquilidad que felizmente se goza y con el buen sentido de la Nación, que desengañada de una época de errores, tiene la experiencia bastante para

[276] De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 50 y 65 de la Constitución Política del Estado, la apertura del Periodo Ordinario de Sesiones debió de efectuarse el 2 de marzo, con la asistencia del Gobierno.

rectificar sus juicios y no dejarse guiar sino de las lecciones de la verdad. Contad señores con mi redoblado empeño y actividad en cuanto lo requieran vuestras disposiciones, así como el de mi resignación a permanecer en el Gobierno hasta que mis servicios dejen de ser útiles y necesarios; pues que entonces mi conciencia me impondrá la obligación que a todos los hombres públicos, de limitar su existencia política al tiempo preciso en que puedan ejercer un ministerio de bondades inagotables" (Acta del 12 de marzo de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 26).

Previamente a dicho discurso, el Diputado José María Valiente, en su calidad de Presidente del Congreso, le indicó al Gobernador que: "pensad que la grande empresa a que vais a cooperar, no es de aquellas en que sólo hay que vencer los obstáculos que oponen la naturaleza, se necesita luchar con opiniones extraviadas, con las exageraciones de la mala fe y con el coloso formidable que se apoya en el desempeño de las pasiones y en los espantosos progresos de la inmoralidad. Pensad que el terreno en que debe levantarse el edificio de la prosperidad común está lleno de escombros y ruinas; para limpiarla y preparar el arca de una manera conveniente, es para lo que se requiere suma prudencia y aquel tacto fino y delicado que tanto importa en los hombres de estado inagotables" (Acta del 12 de marzo de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 24).

El 13 de marzo el Gobernador expidió el Reglamento de las Oficinas Generales de Hacienda del Estado de México, en el cual se indicaba que: "en la Sección de Hacienda de la Secretaría de Gobierno habrá un Departamento para entender exclusivamente en todo lo directivo y económico de las rentas, el que estará a cargo del Secretario del Ramo, quien hará las funciones de director". "En consecuencia, todos los empleados de rentas obedecerán las órdenes que les expidiere o comunicare, haciendo lo mismo los demás funcionarios públicos, a quienes encomendare alguna comisión en el Ramo de Hacienda, que sea compatible con el desempeño de sus peculiares atribuciones" (Reglamento del Ejecutivo del 13 de marzo de 1835. BJMLM: vol. 32, exp. 98).[277]

En dicho reglamento además de precisarse las funciones del Departamento de Dirección, de la Tesorería General, de la Contaduría General y de la Junta de Hacienda, se indicaba que "el Director hará al Gobierno las propuestas en terna para

[277] No se publicó en la Colección de Decretos.

la provisión en propiedad o interinamente de los destinos de visitadores, administradores, receptores, guardas, tesoreros de rescate y demás empleados subalternos de hacienda, teniendo en consideración las que deben dirigirle los segundos para el nombramiento de los terceros y cuartos, en virtud de ser éstos inmediatamente responsables de sus operaciones a aquellos". Cabe indicar que la Junta de Hacienda estaba compuesta: "por el Secretario del Ramo, Fiscal de la Excelentísima Audiencia, Tesorero y Contador generales, para que el Gobierno pueda consultar con ella los casos dudosos, en que lo considere oportuno".

El 20 de marzo el Congreso tomó conocimiento de una iniciativa de ley, para establecer "en cada Cabecera de Partido un fondo para el fomento de la agricultura, que por ahora no bajará de mil pesos, ni subirá de tres mil" (Acta del 20 de marzo de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 43).

El 24 de marzo el Congreso nombró como integrantes del Gran Jurado a los diputados: José Joaquín Rosas como Presidente, a José Ignacio González Caraalmuro como Secretario y como miembros a: José María Vizcarra, Lázaro de la Garza, José María Tagle y Antonio Madrid (Acta del 24 de marzo de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 50).

El 26 de marzo acudió al Congreso el Secretario de Relaciones (Gobierno y Guerra), a leer la primera parte de la Memoria de Gobierno correspondiente a dicho ramo (Acta del 26 de marzo de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 51).[278]

Luis Varela en su calidad de encargado de las secciones de Gobierno y Guerra, indicó en la Memoria correspondiente a esos ramos, que después de salir de "una revolución que, aunque consumada sin sangre por la generalidad de la opinión que hizo, relajó más que ninguna otra los resortes del poder, desplegando con mayor violencia los de la anarquía, que por todas partes amenazaba, y que hubiera aniquilado, sin duda, todos los elementos de orden social, si la Providencia, que vela constantemente sobre nosotros, no nos hubiera deparado al hombre célebre que, puesto a la cabeza de la Nación (Antonio López de Santa Anna) y armado de su inmenso prestigio, hiciera nacer de la conflagración misma el restablecimiento del orden perdido, regenerando, por decirlo así, las garantías individuales, que habían desaparecido bajo un plan

[278] La lectura de la Memoria continuó los días 27 (Acta del 26 de marzo de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 54) y 28 de marzo de 1835 (Acta del 28 de marzo de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 55). Al parecer la Memoria de Gobierno y Guerra que firmó Luis Varela es la que en el acta se atribuye al Secretario de Relaciones.

sistemado de depravación" (Gobierno del Estado de México, 1835. Memoria de Gobierno y Guerra: 1).

En dicha memoria se señaló que después de hacer un viaje por todo el Estado el Gobernador dirigió su atención a todos los ramos de la administración pública, lo que derivó en mejoras aún insuficientes "a las cárceles, a los caminos, a la mejora de las poblaciones, y a la educación". De allí la decisión que dio origen a la contratación de un ingeniero para que "diese dirección a la compostura de las cárceles, a la construcción de algunos edificios públicos, a la compostura de los caminos y a la ejecución de otras obras de utilidad y ornato".

Entre los anexos de esta memoria resaltan: las iniciativas que a juicio del Gobierno del Estado debían de hacerse al Congreso de la Unión y a la Legislatura Local. En estas últimas están: las que pedían derogar los viáticos concedidos a los diputados, la que facultaba al Gobierno a arreglar la división de cada uno de los distritos y a reducir el número de ayuntamientos, la que facultaba a los prefectos a recabar noticias cuando éstas no fueran proporcionadas por los agentes civiles, la que establecía una pensión literaria para promover la educación, la que extinguía la obligación del Gobierno a adquirir obras por triplicado en Europa para la Biblioteca del Estado, la que facultaba al Gobierno a no entregarle sueldos al empleado que sin licencia o motivo justo no se presentare a trabajar a la hora indicada y la que facultaba al Gobierno a "pasar de una oficina a otra a los empleados que le parezca, bien porque sus conocimientos o actividad los llame a puestos más dedicados y laboriosos, o bien porque sus frecuentes omisiones, torpeza, impericia u otras faltas, puedan ser menos perjudiciales en el desempeño de otro destino".

El 30 de marzo el Congreso acordó secundar una iniciativa dirigida al Congreso de la Unión por el Congreso del Estado de Veracruz, para "impedir la introducción por otros puertos de todo efecto manufacturado por el extranjero y que se manufactura en la República" (acta del 30 de marzo de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 58).

El 1 de abril el Congreso nombró como individuos que han de juzgar en su caso, a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia a: José Ignacio Montero, Juan Antonio Arce, José Ignacio Sicilia, Gabriel Yermo, José Miguel Ozta, José María Piedra, Andrés Millán, Mariano Tamariz, José María Medina, Rafael Trejo, Mariano Tagle, Pedro Valdovinos, Urbano Fonseca, Joaquín Morales, Manuel Agreda, Luis González

Pliego, Baltazar Pérez Arroyo, Manuel Rivera, Manuel Díaz, Vicente Sánchez Barquera, Agustín Chávez Nava, Luis Gonzaga Vieyra, José María Muñoz de Cote y Manuel Montañez, y como Presidente de la Primera Sala a Manuel Rivera, como magistrados a: Rafael Trejo y Mariano Tagle y como Fiscal a Luis González de Pliego (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 450 del 1 de abril de 1835: 365).[279]

Acudió al Congreso el Señor José María Gallegos a rendir su protesta de ley como Ministro del Supremo Tribunal de Justicia, al ser nombrado para dicho cargo por el Gobernador, en función de las facultades que le concedió el Congreso (Acta del 1 de abril de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 64).

El Congreso dispuso que se acordara en sesión secreta una iniciativa al Congreso de la Unión, para pedir que no se apruebe un decreto, "a fin de que los extranjeros puedan adquirir en la República propiedades rústicas" (Acta del 1 de abril de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 65).

El 2 de abril el Congreso tomó conocimiento de una iniciativa de ley, en la cual se preveía destinar el importe de las dietas de los diputados y de las vacantes de cualquier clase de empleos no devengadas, para la compra de terrenos por parte del Gobierno, para repartirlas a las familias de indígenas (Acta del 2 de abril de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 71).

Se informó que aún no se habían presentado a las sesiones los diputados: Faguaga, (Felipe) Pérez Arroyo y Flores; así como los diputados: (José) Pérez Palacios y (Juan) Icaza, que ya habían rendido su protesta de ley (Acta del 2 de abril de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 73).

El 3 de abril acudió al Congreso el Secretario de Hacienda, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Manuel Piña, a leer la primera parte de la Memoria de Gobierno correspondiente a su Ramo (Acta del 3 de abril de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 74).[280]

En dicha memoria se señaló que "la inexactitud, obscuridad y falta de sistema en la formación de las cuentas; la omisión y retraso en presentarlas; embarazos y demoras

[279] El nombramiento de estas personas se efectuó el 31 de marzo de 1835 (Acta del 31 de marzo de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 63).
[280] La lectura de la memoria continúo en la sesión del 4 de abril de 1835 (Acta del 4 de abril de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 75).

en su glosa; los mismos inconvenientes para el cobro de los alcances; multiplicación de gastos de recaudación, viniendo a convertirse en objeto principal de las contribuciones lo que sólo se debe mirar como medio colectarlas; aumento indefinido de empleados, que sirve para mantener el ocio e introducir la funesta empleomanía; pábulo e incentivo a la inmoralidad, por el fomento del espionaje y por la dura alternativa en que la facilidad con que se hace el contrabando pone al hombre honrado de hacerlo él o perecer en la miseria; y pérdidas y menoscabo para el Erario, así por lo que invierte en agentes superfluos, como por lo que deja de percibir a causa del fraude y finalmente, por la parálisis y decadencia de la industria" (Gobierno del Estado de México, 1835. Memoria de Hacienda, Justicia y Negocios Eclesiásticos: 4).

Esta memoria incluía como anexos: varias iniciativas de Hacienda y Justicia, los reglamentos de las oficinas generales de hacienda y para los visitadores de rentas del Estado, la "noticia de los efectos y artículos que se hayan libres de pago de alcabalas en el Estado", la "noticia de los efectos y artículos cuya introducción está prohibida en la República", y la "instrucción para que los administradores de aduanas hagan la legítima exacción de los derechos de alcabala y demás impuestos, en los casos que por lo regular se ofrecen en las propias aduanas".

El 4 de abril el Congreso nombró como Presidente de la Mesa Directiva del segundo mes de su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones al Diputado José María Vázquez y como Vicepresidente al Diputado Pedro Domínguez Esquivel (Acta del 4 de abril de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 74).

El 6 de abril el Congreso acordó remitir una iniciativa a las cámaras del Congreso de la Unión, "para que manden arrendar las aduanas marítimas a comerciantes mexicanos" (Acta del 6 de abril de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 80).

El 7 de abril se tiene noticia de la incorporación a las sesiones del Congreso del Diputado Suplente Felipe Pérez Arroyo (Acta del 7 de abril de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 90).[281]

El 8 de abril el Congreso aprobó la sustitución de miembros que hizo la Gran Comisión en las comisiones: de Puntos Constitucionales, Código Municipal y Análisis (Acta del 8 de abril de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 92).

[281] Posiblemente este Diputado haya cubierto la vacante dejada por el Diputado José Rafael Berruecos y rendido su protesta de ley en una sesión secreta o del periodo extraordinario de 1834.

El 9 de abril el Congreso condonó “a los pueblos las deudas contraídas por las armas que han recibido del Gobierno y sus ayuntamientos”, y les perdonó “lo que de los fondos públicos les concedió el Congreso en calidad de préstamo, para obras de común utilidad y beneficencia, con tal de que haya invertido o invierta en aquellos objetos para lo que fue concedido” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 451 del 9 de abril de 1835: 365).

El 14 de abril la Sección de Gobierno de la Secretaría del Gobierno suscribió un comunicado, en el que indicaba que “habiéndose anunciado al público que se van a imprimir las actas de las sesiones de ese Honorable Congreso desde sus primeras sesiones: lo comunico a ustedes de orden del Excelentísimo Señor Gobernador con el fin de que se sirvan recaudar del Congreso la orden conveniente para que su Secretaría cuide de dar las copias de aquellas a esta Secretaría o al administrador de la Imprenta” (Comunicado del 14 de abril de 1835. BJMLM: vol. 83, exp.150).

El 25 de abril el Congreso aprobó la sustitución de miembros en la Comisión de Industria que hizo la Gran Comisión (Acta del 25 de abril de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 101).

El 29 de abril acudió al Congreso el Señor Agustín Barquera a rendir su protesta de ley como Ministro del Tribunal Superior de Justicia, en virtud del nombramiento que le había hecho el Gobernador, en uso de las facultades extraordinarias que le confirió el Congreso (Acta del 29 de abril de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 107).

El 4 de mayo el Congreso nombró como Presidente de la Mesa Directiva del tercer mes de su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones al Diputado José Ignacio González Caraalmuro y como Vicepresidente al Diputado Felipe Pérez Arroyo (Acta del 4 de mayo de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 112).

El 7 de mayo el Congreso tomó conocimiento de un comunicado del Gobernador del Estado, por el que informó que la Tesorería había liquidado las dietas del Diputado (José Rafael) Berruecos, hasta el día en que se aprobó su credencial de Senador por el Estado de Puebla (Acta del 7 de mayo de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 130).

El 11 de mayo el Congreso dispuso que “el Supremo Tribunal de Justicia continuara conociendo de las causas que se formen a los alcaldes por responsabilidad, ya funcionen como alcaldes, ya como jueces de primera instancia” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 452 del 11 de mayo de 1835: 366).

El Congreso dispuso que “la clausura de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso, no podrán verificarse después de las dos de la tarde” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 453 del 11 de mayo de 1835: 366).

El 13 de mayo el Congreso tomó conocimiento de una iniciativa de ley, por la que se proponía reducir el número de distritos a ocho y suprimir “todos los ayuntamientos que hay en el Estado, a excepción de los de Cabecera de Distrito y de Partido” (Acta del 13 de mayo de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 159).

El 16 de mayo el Congreso indultó “al Ciudadano Ignacio Martínez, de la pena de suspensión o de pérdida de empleo en que haya o pueda haber incurrido por cualquier ley vigente” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 454 del 16 de mayo de 1835: 367).

El 18 de mayo el Congreso determinó que “el Gobierno dispondrá lo necesario para que en los pueblos de Cutzamala, Tepecoacuilco, Taxco, Chilapa, Tixtla, Chilpancingo y en la Ciudad de Cuernavaca, se abra rescate del azogue que se extrajere de los criaderos del Estado” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 455 del 18 de mayo de 1835: 367).

El Congreso tomó conocimiento del nombramiento que hizo la Gran Comisión, de integrantes de la comisión especial que habría de estudiar la iniciativa de reducción de ayuntamientos y juzgados de primera instancia. Dicha comisión se integró con los diputados: Antonio Madrid, Felipe Pérez Arroyo y Alfonso Fernández (Acta del 18 de mayo de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 193).

El 19 de mayo el Congreso acordó que “la facultad concedida al Gobierno por el decreto del 19 de diciembre último, para arreglar provisionalmente la expedición de licencias para portar armas, continuara subsistente hasta las sesiones de marzo de 1836” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 456 del 19 de mayo de 1835: 369).

El 20 de mayo el Congreso ordenó al Gobierno contribuir con 300 pesos para la impresión de la obra intitulada: “Lecciones de Práctica Forense”, de Manuel de la Peña y Peña (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 457 del 20 de mayo de 1835: 370).

El Congreso dejó sin efecto el decreto del 15 del abril de 1834, por el que cedió a los censatarios del Duque Monteleone las cantidades que adeudaban hasta el 1 de enero de 1833 (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 458 del 20 de mayo de 1835: 370).

El 21 de mayo el Congreso indultó “a Manuela Ayala, de la pena de dos años de servicio en el Curato del Pueblo de Sultepec, a que ha sido condenada en sentencia definitiva” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 459 del 21 de mayo de 1835: 370).

El Congreso dispuso que “en los casos de ausencia u otros impedimentos del Teniente Gobernador, presidirá el Consejo el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 460 del 21 de mayo de 1835: 371).

El 22 de mayo el Congreso indultó “al Clarín que fue de la Caballería Cívica de Jilotepec, Antonio Figueroa, de la pena, aun correccional, a que se haya hecho acreedor por el delito de dos deserciones de que ha sido acusado” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 461 del 22 de mayo de 1835: 371).

El 23 de mayo el Congreso indultó “al reo Mariano Paulin de la pena de seis años de servicio en las obras públicas, a que ha sido condenado” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 462 del 23 de mayo de 1835: 371).

El Congreso dispuso que “mientras se arreglan definitivamente el número, límites y cabeceras de los distritos, se trasladará la de Sultepec al Mineral de Temascaltepec” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 463 del 23 de mayo de 1835: 371).

El Gobernador reglamentó del decreto número 455 del 18 de mayo de 1835, para facilitar el rescate del azogue que se extrajera en el Estado (Poder Legislativo II, 2001. Reglamento del Ejecutivo del 23 de mayo de 1835: 370).

El Congreso General dispuso que “los impresores en el ejercicio de su industria tipográfica no admitirán responsabilidad de vagos, presos, sentenciados, enfermos consuetudinarios reincidentes en los hospitales, ni de hombres cuyo domicilio, morada

y modo de vivir sea desconocido" (Decreto del 23 de mayo de 1835. BJMLM: vol. 82, exp. 79).

El 25 de mayo el Congreso estableció el modo de formarse la Sala para conocer en tercera instancia las causas civiles y criminales que hubieran sido iniciadas en el mismo Tribunal Supremo de Justicia (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 464 del 25 de mayo de 1835: 372).

El Congreso acordó secundar una iniciativa a las cámaras del Congreso de la Unión formulada por el Congreso del Estado de Michoacán, "contraída a que se estanque nuevamente el tabaco" (Acta del 25 de mayo de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 237).

El Congreso General determinó que "las comunidades y corporaciones eclesiásticas quedan expeditas en el uso legal de sus respectivas propiedades y dispondrán de ellas libremente, a cuyo efecto se dan por no existentes las disposiciones legislativas de diez y ocho de noviembre y veinticuatro de diciembre de mil ochocientos treinta y tres" (Decreto del 25 de mayo de 1835. BJMLM: vol. 82, exp. 80).

El 26 de mayo el Congreso facultó "al Gobierno para celebrar con la mayor magnificencia la venida a esta Ciudad del Excelentísimo Señor Presidente de la República, General D. Antonio López de Santa-Anna" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 465 del 26 de mayo de 1835: 372).

El Congreso dispuso que "el Gobierno reorganizara el Pueblo de San Luis Amatitlán, adaptando para el efecto cuantas medidas juzgue convenientes, sin faltar a las leyes, promoviendo en su caso, por persona de su satisfacción las acciones públicas y haciendo los gastos necesarios" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 466 del 26 de mayo de 1835: 372).

El 27 de mayo el Congreso acordó proceder a la elección de Teniente Gobernador Provisional, el cual debía disfrutar un sueldo anual de tres mil pesos (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 467 del 27 de mayo de 1835: 373).

El Congreso nombró a Esteban Villalba Teniente Gobernador Interino, por el tiempo de la imposibilidad del propietario (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 468 del 27 de mayo de 1835: 373).

El Teniente Gobernador Esteban Villalba acudió al Congreso a rendir su protesta de ley (Acta del 27 de mayo de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 278).

El 29 de mayo el Congreso al expedir el decreto que arregló el cobro de las alcabalas, exentó de este derecho a las harinas y a los tejidos de algodón y lana, fijó las tarifas que debían pagar el aguardiente de caña, los frutos y géneros extranjeros, las maderas que bajaban por ríos y las fincas rústicas y urbanas (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 469 del 29 de mayo de 1835: 373).

El 30 de mayo el Congreso dispuso que "eleve el Gobierno a las cámaras la exposición de esta Ciudad, que está conforme a las credenciales a que debe este Congreso su existencia, la que terminará según las mismas credenciales, luego que el Congreso General use las facultades que le están concedidas" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 470 del 30 de mayo de 1835: 377), las cuales consistían en hacer alteraciones a la Constitución de la República, para variar el sistema de gobierno (Dublan III, 1876. Ley del 2 de mayo de 1835: 43).

El Congreso integró la Diputación Permanente de su Segundo Receso, presidida por el Diputado José María Vizcarra. Nombró como Secretario al Diputado Epigmenio de la Piedra, como miembros a los diputados: Antonio Madrid y José María Valiente y como Suplente al Diputado Nicolás Aragón (Acta del 30 de mayo de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 282).

El Congreso aprobó la iniciativa de decreto a las cámaras del Congreso de la Unión, tendiente a prohibir "la introducción absoluta de los géneros ordinarios y creados de algodón y lana extranjeros bajo la pena de inutilización" (Minuta del 30 de mayo de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 282).

El 31 de mayo el Congreso indultó "al Coronel D. Rafael de la Vara, de la pena que ha merecido por el descubierto que tuvo en la Administración de la Aduana de Sultepec" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 471 del 31 de mayo de 1835: 377).

El Congreso indultó "al reo Francisco Omaña del tiempo que le falta para cumplir su condena" (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 472 del 31 de mayo de 1835: 377).

El 1 de junio el Congreso dispuso que se entregue la Finca de San Pedro al apoderado de los Misioneros de Filipinas (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 473 del 1 de junio de 1835: 378).

El Congreso indultó “a D. Pedro Antonio Fernández, de la pena a que ha sido condenado por el descubierto que tuvo en las cajas de Pachuca” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 474 del 1 de junio de 1835: 378).

El 2 de junio el Congreso expidió el Presupuesto de Gastos del Estado de México para el Año Económico del 2 de junio de 1835 al 2 de junio de 1836, en el cual se mantuvieron las contribuciones y las percepciones de los servidores públicos decretadas el año anterior (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 475 del 2 de junio de 1835: 378).

En el Poder Legislativo se contemplaron dietas de 21 diputados a razón de $3,000.00 anuales en las tres épocas de sesiones ordinarias y extraordinarias, dietas para cinco diputados y un suplente que componen la Diputación Permanente en los recesos del Congreso a razón de $2,400.00 anuales, viáticos para los 21 diputados en las tres épocas de sesiones a razón de $928.00 cada una, $1,600.00 para un Redactor, $1,500.00 para el Oficial Mayor, $1,200.00 para el Segundo Oficial, $1,000.00 para el Archivero, $600.00 para gastos menores de oficina, $1,500.00 para impresiones y $600.00 para el arrendamiento de la casa que ocupaba el Congreso.

En el Poder Ejecutivo se contemplaron $5,000.00 para el Gobernador, $3,500.00 para el Teniente Gobernador, $1,000.00 para la Casa del Gobernador, $3,000.00 para cada uno de los dos secretarios y $1,000.00 para gastos secretos del Gobierno.

En el Poder Judicial se contemplaron $3,500.00 para un Ministro del Supremo Tribunal de Justicia, $3,000.00 para seis magistrados y un Fiscal de dicho Tribunal. De los 36 jueces de letras dos disfrutaban de $2,000.00 y los demás $1,500.00.

En los gastos comunes de Hacienda se presupuestaron $3,000.00 para el Contador General y el Tesorero General, $5,000:00 para provisión de almacenes y $50,341.00 para la Federación.

El Congreso determinó habilitar de edad al menor Rafael Olascoaga para que administrara sus bienes (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 476 del 2 de junio de 1835: 383).

El Congreso indultó “a los alcaldes de la pena que puedan haber merecido por faltas cometidas por ignorancia en el desempeño de sus funciones” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 477 del 2 de junio de 1835: 384).

El Congreso indultó “al reo Benigno Juárez de los dos meses que le faltan para cumplir el año de prisión, a que fue condenado por la herida que infirió a Antonio Hidalgo” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 478 del 2 de junio de 1835: 384).

El Congreso indultó “a Manuel Banderas, José Cervantes y Luis Obispo, de la pena que hayan merecido por la parte que puedan haber tenido en el homicidio de Cristóbal Nazario y heridas de Pascual de los Reyes” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 479 del 2 de junio de 1835: 384).

El Congreso autorizó al Gobierno para que destinara anualmente mil 500 pesos para fomentar el Establecimiento Literario de Chilapa (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 480 del 2 de junio de 1835: 385).

El Congreso al derogar el decreto del 9 de mayo de 1833, dispuso que “los terrenos de que en virtud o a pretexto del referido decreto hayan sido despojados, los que los posean por repartimiento o cualquier otro título legítimo, para adjudicarlo a los ayuntamientos, serán restituidos por el Gobierno, asegurado del despojo” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 481 del 2 de junio de 1835: 385).

El Congreso dispuso que “el Pueblo de Iguala se denominara en lo de adelante, Ciudad de Iguala de Iturbide” y en él se realizara una feria, quedando libres los efectos que en ella se introdujeran o vendieran (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 482 del 2 de junio de 1835: 385).

El Congreso exceptuó “del pago de derechos en el Estado, los paramentos sagrados y utensilios para el servicio de las parroquias e iglesias de los pueblos anexos a ellas” (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 483 del 2 de junio de 1835: 386).

La Diputación Permanente abrió las sesiones de su Segundo Receso, Presidida por el Diputado José María Vizcarra (Acta del 2 de junio de 1835. BJMLM: vol. 81, exp. 51).

El Gobernador Manuel Díez de Bonilla, al acudir a la clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, señaló que "grandes en verdad han sido los acontecimientos de estos últimos tres meses: una revolución combinada con tiempos y con recursos, sostenida por todas las artes del engaño, del entusiasmo y reducción, y ramificada hasta los más remotos estados de la República, cayó al impulso de un leve esfuerzo, del libertador (Antonio López de Santa Anna)" (Acta del 2 de junio de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 297).

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente del Congreso, Diputado José Ignacio González Caraalmuro, indicó a los pueblos del Estado de México que "si este corte, que os respeta, y al mismo tiempo os conserva en amable tranquilidad, no os agradare, os ruego que no culpéis a vuestros diputados; sino al tiempo y a vosotros mismos, que los elegisteis. Si el Congreso ha cerrado en este negocio, si vosotros habéis errado también en elegirlos, aprended, cuan importante es una buena elección" (Acta del 2 de junio de 1835. BJMLM. Colección de Actas: vol. 44, foja 300).[282]

El 7 de junio el Gobernador aprobó el "Ceremonial acordado para recibir en esta Ciudad (Toluca) al E. Sr. General Presidente Benemérito de la Patria, Don Antonio López de Santa Anna". estableció que "una Comisión compuesta de uno de los Secretarios de Gobierno, el Sr. Prefecto del Distrito y el Alcalde Primero de la Municipalidad, saldrá a recibir a S. E. a la Hacienda de Tepetongo, cuidando que en los pueblos del tránsito se hagan los preparativos convenientes" (Ceremonial del 7 de junio de 1835. BJMLM: vol. 81, exp. 41).

El 11 de junio el Gobernador reglamentó el decreto número 482 del 2 de junio de 1835, para dejar libres de contribuciones los efectos que se introdujeran en la feria del Pueblo de Iguala (Poder Legislativo II, 2001. Decreto del Ejecutivo del 11 de junio de 1835: 386).

El 12 de junio la Diputación Permanente convocó al Congreso a su Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones para el día 30 de ese mes, la cual tenía por objeto elegir al Ministro que debía "llenar la vacante del Ciudadano Juan José Flores Alatorre, en la

[282] No se localizaron las actas de la Diputación Permanente.

Suprema Corte de Justicia" (Poder Legislativo II, 2001. Convocatoria del 12 de junio de 1835: 387).[283]

La Diputación Permanente tomó conocimiento del "Ceremonial acordado para recibir en esta Ciudad (Toluca) al E. Sr. General Presidente Benemérito de la Patria, Don Antonio López de Santa Anna" (Acta del 12 de junio de 1835. BJMLM: vol. 81, exp. 51).

El 1 de julio el Gobernador reglamentó el decreto número 469 del 29 de mayo de 1835, para facilitar el cobro de las alcabalas (Poder Legislativo II, 2001. Decreto del Ejecutivo del 1 de julio de 1835: 373).

El 14 de agosto la Diputación Permanente excitó a los diputados ausentes a que se presentaran a las sesiones del Congreso ante la falta de quóum para elegir a la Mesa Directiva de su Tercer Periodo Ordinario de Sesiones (Acta del 14 de agosto de 1835. BJMLM: vol. 81, exp. 51).

El 9 de septiembre el Congreso General se declaró "investido por la Nación de amplias facultades aún para variar la forma de gobierno y constituirla de nuevo" (Decreto del 9 de septiembre de 1835. AHEM: L.L.D.F. vol. 14, exp. 48).

El 1 de octubre el Congreso reunido en Junta integró la Mesa Directiva del primer mes de su Tercer Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado Diego Germán. Nombró para todo el periodo ordinario de sesiones como secretarios propietarios a los diputados: Alonso Fernández y José María Valiente, y como suplentes a los diputados: José María Tagle y Pedro Domínguez Esquivel (Acta del 1 de octubre de 1835. BJMLM: vol. 81, exp. 51).

El Teniente Gobernador Valentín Canalizo asumió la Titularidad del Poder Ejecutivo por Ministerio de Ley (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 485 del 5 de octubre de 1835: 387).[284]

[283] No se localizaron las actas correspondientes al periodo extraordinario.
[284] Esto se afirma porque el día 5 de ese mes, el Congreso dispuso que "mientras funcione el actual Teniente Gobernador, disfrutará el sueldo íntegro de Gobernador, cesándole a éste desde el 1º del presente.

El 3 de octubre el Congreso aprobó la sustitución de miembros en las Comisiones de Justicia y en la Segunda de Hacienda (Acta del 3 de octubre de 1835. BJMLM: vol. 81, exp. 51).

El Congreso General dispuso que "subsistirán los gobernadores que actualmente existen en los estados, aún cuando hayan cumplido el tiempo que prefijaban las constituciones de ellos; pero sujetos para su permanencia y en el ejercicio de sus atribuciones al Supremo Gobierno de la Nación", y que las legislaturas cesarán en el ejercicio "de sus funciones legislativas; pero antes de disolverse, y reuniéndose las que estén en receso, nombrarán una Junta Departamental compuesta por ahora de cinco individuos escogidos en su seno, o fuera de él, para que funjan de Consejo del Gobernador; en el caso de vacante de ese empleo, hagan propuesta en terna al Supremo Gobierno General, en personas que tengan las calidades que se han exigido hasta ahora; y mientras éste nombra, desempeñen las funciones gubernativas por medio del primero nombrado entre los seculares" (Decreto del 3 de octubre de 1835. AHEM: G.G.G. vol. 10, exp. 4).

El 5 de octubre el Congreso determinó que el Señor Antonio Sánchez Barquera ha podido ser restituido y tener el empleo de Ministro de la Audiencia (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 484 del 5 de octubre de 1835: 387).

El Congreso dispuso que "mientras funcione el actual Teniente Gobernador, disfrutará el sueldo íntegro de Gobernador, cesándole a éste desde el 1º del presente (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 485 del 5 de octubre de 1835: 387).

El Congreso dispuso que "se abonaran a D. Bernardo Berdi, Administrador de la Aduana de Tula, los trescientos diez y siete pesos seis reales ocho granos, que en fines de 832 ministró a D. Mariano Reyes, Prefecto de aquel Distrito, por sueldos devengados (Poder Legislativo II, 2001. Decreto 486 del 5 de octubre de 1835: 387).

El 6 de octubre el Congreso nombró como Vocales de la Junta Departamental de México para que fungieran como Consejeros del Gobernador a Alejandro Guitian, Antonio Icaza, Mariano Jaucarz, Manuel Díaz y Santiago Barrien (Acta del 6 de octubre de 1835. BJMLM: vol. 81, exp. 51).

El Cuarto Congreso Constitucional (1834-1835) que operó del 25 de agosto de 1834 al 6 de octubre de 1835 se integró con 21 diputados nombrados por electores

secundarios en la Junta General del Estado. Realizó tres periodos ordinarios de sesiones y dos periodos extraordinarios de sesiones y expidió 66 decretos entre el 4 de septiembre de 1834 y el 5 de octubre de 1835 (Poder Legislativo II, 2001. Índice de decretos: 664-669).

Sinopsis de los Órganos Legislativos y sus Predecesores

A manera de conclusión se presentan los aspectos más relevantes tratados en este libro, de los órganos legislativos y sus predecesores en el territorio del antiguo Estado de México correspondiente al periodo de 1809 a 1835.

I. Órganos Legislativos Provinciales (1809-1824)

En este apartado se presenta la actuación de los órganos legislativos que funcionaron en el actual territorio del Estado de México a partir del 24 de septiembre de 1810. Se analiza la actuación y el entorno en que operaron las diputaciones provinciales de la Nueva España y de la Provincia de México.

1. Génesis de la Diputación Provincial (1809-1814)

En la Constitución Política de la Monarquía Española del 18 de marzo de 1812 están las bases del funcionamiento de la Diputación Permanente de la Legislatura del Estado de México, ya que las diputaciones provinciales que ordenó establecer se integraban por un Presidente, un Secretario, siete diputados propietarios y tres diputados suplentes, los cuales cubrían las ausencias de los titulares en las sesiones, como hoy se hace.

En 1810 las Cortes Españolas declararon que las personas de los diputados son inviolables y que no se puede intentar por ninguna autoridad ni persona particular cosa alguna contra los diputados.

2. Diputación Provincial de la Nueva España de 1814

La Diputación Provincial de la Nueva España de 1814 que operó del 13 de julio al 5 de octubre de 1814 se integró con siete vocales propietarios y siete vocales suplentes nombrados por electores de partido de provincia, el Jefe Político de la Nueva España, el Intendente de la Provincia de México y el Secretario de la Diputación Provincial. No expidió decretos.

3. Suspensión del Orden Constitucional (1814-1820)

En el periodo comprendido entre 1814 y 1820 la Corona Española expidió disposiciones vanguardistas para aquella época, como son la prohibición a los servidores públicos para dedicarse a atender actividades particulares ajenas a su responsabilidad, la prohibición del otorgamiento del fuero a los servidores públicos que atentaran contra el Erario del Estado y la publicación de las vacantes de empleos.

4. Diputación Provincial de la Nueva España de 1820

La Diputación Provincial de la Nueva España de 1820 que operó del 20 de julio al 26 de septiembre de 1820 se integró con siete vocales propietarios y tres vocales suplentes nombrados por electores de partido de provincia, el Jefe Político de la Nueva España y el Intendente de la Provincia de México. No expidió decretos.

Este órgano fue precursor de la promoción de las instancias vecinales de fomento, ya que en su gestión instaló la Junta Superior de Sanidad de la Provincia con un Diputado y algunos vecinos.

5. Diputación Provincial de la Nueva España (1820-1821)

La Diputación Provincial de la Nueva España (1820-1821) que operó del 30 de septiembre de 1820 al 8 de octubre 1821 se integró con siete vocales propietarios y tres vocales suplentes nombrados por electores de partido de provincia, el Jefe Político de la Nueva España y el Intendente de la Provincia de México. No expidió decretos.

Este órgano legislativo fue precursor en el establecimiento de la normatividad legislativa, al expedir el Reglamento de la Secretaría de la Diputación Provincial de la Nueva España.

6. Diputación Provincial de México (1821-1822)

La Diputación Provincial de México (1821-1822) que operó del 9 de noviembre de 1821 al 23 de febrero de 1822 se integró con siete vocales propietarios y tres vocales suplentes nombrados por electores de partido de provincia, el Jefe Político de la Nueva España y el Intendente de la Provincia de México.

La Diputación Provincial previno a los ayuntamientos que los abonos gravosos vengan con la firma del letrado y que no nombren apoderados sin conocimiento de la Diputación e instruyó a los jefes políticos para que en los pueblos en que sus ayuntamientos no tengan fondos se siga la costumbre de pagarles a los maestros de escuela de los fondos de las comunidades.

Esta Diputación fue el primer órgano legislativo local que operó en el México independiente.

7. Diputación de la Intendencia de México (1822-1823)

La Diputación de la Intendencia de México (1822-1823) que operó del 5 de marzo de 1822 al 18 de septiembre de 1823 se integró con siete vocales propietarios y tres vocales suplentes nombrados por electores de partido de provincia y por el Jefe Político de la Intendencia de México. No expidió decretos.

Este órgano legislativo aprobó el Reglamento para el Gobierno Interior de la Junta Superior de Sanidad e instruyó a los Jefes de Rentas para que le informen el estado en que se hayan las mejoras que sean susceptibles de realizarse y los empleos que puedan suprimirse o deban conservarse. Se caracterizó por promover la transparencia, al acordar publicar sus actas en un periódico y por constituir su Tesorería, que a la postre se transformó en la Tesorería del Estado.

8. Diputación de la Provincia de México (1823-1824)

La Diputación de la Provincia de México (1823-1824) que operó del 23 de septiembre de 1823 al 1 de marzo de 1824 se integró con siete vocales propietarios y tres vocales suplentes nombrados por electores secundarios en junta de provincia y el Jefe Político de la Provincia de México. Expidió un decreto.

Se caracterizó por ser el primer órgano legislativo en recibir la protesta de ley de un servidor público y por emitir la convocatoria para la elección de los diputados del Congreso Constituyente del Estado de México como consecuencia de la erección el Estado Libre, Independiente y Soberano de México por el Segundo Congreso Constituyente Mexcano el 20 de diciembre de 1823.

II. Congresos de la Primera República Federal (1824-1835)

En este apartado se presentan las acciones más relevantes que realizó el Congreso del Estado de México en los primeros once años de su vida institucional, sin dejar de lado el entorno local y nacional en el que se desenvolvió.

1. Congreso Constituyente (1824-1827)

El Congreso Constituyente (1824-1827) que operó del 2 de marzo de 1824 al 1 de marzo de 1827 se integró con 21 diputados nombrados por electores secundarios en la Junta de Provincia. Expidió 96 decretos entre el 2 de marzo de 1824 y el 28 de febrero de 1827.

Este órgano legislativo expidió la Constitución Política del Estado, el decreto sobre la organización provisional del Gobierno Interior del Estado, la Ley para la Organización de los ayuntamientos, la Ley Orgánica Provisional para el Arreglo del Gobierno Interior del Estado, la Ley de Hacienda, el Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia, la Ley de Elecciones para Diputados al Congreso General y al Congreso Constitucional del Estado, el Reglamento Interior del Congreso, dos decretos para el arreglo de la Secretaría del Congreso, el decreto que estableció el depósito de papeles públicos en la Biblioteca del Congreso y la orden provisional para el arreglo de la Guardia del Congreso.

Se caracterizó por fijar las bases organizativas de los Poderes del Estado, por permitir al Gobierno participar en sus sesiones y emitir observaciones a sus resoluciones, por instituir la palabra Honorable para hacer referencia al Congreso, por incluir los considerandos en sus decretos, por determinar que el lugar de sus sesiones se llamara Palacio del Congreso del Estado, por oponerse a la segregación territorial de la Ciudad de México, por promover la participación de los ciudadanos en sus resoluciones, por emitir las primeras disposiciones de felicitación y para la construcción de monumentos, por fijar la mayoría de edad de los hombres a los 25 años y de las mujeres a los 23 años, por promover la realización de concursos y obras literarias, por instituir la calificación de las cuentas públicas y la asistencia del Gobierno en la apertura de los periodos ordinarios y extraordinarios de sesiones del Congreso, por fijar la renovación del Congreso parcialmente cada dos años por elección indirecta y popularmente en primer grado, por establecer la calificación de las elecciones de los diputados para admitirlos en el seno del Congreso, por incluir en la

Constitución Política la división territorial del Estado y el lugar de residencia de los Supremos Poderes del Estado y por expedir los primeros decretos para la conmutación de penas, la autorización de ferias y el otorgamiento de cartas de ciudadanía del Estado. Instituyó en su seno la Mesa Directiva, la Diputación Permanente, la Secretaría, la Guardia de Seguridad, la Imprenta y las comisiones permanentes y especiales.

Ordenó erigir un monumento y colocar un testimonio histórico en instalaciones públicas y otorgó cuatro reconocimientos de gratitud y una dispensa para ejercer derechos civiles.

Erigió un Ayuntamiento, erigió ocho distritos, erigió seis partidos, suprimió once partidos, emitió dos declaratorias de categoría política de localidades, emitió dos acuerdos sobre adscripción territorial y límites y asignó nombres históricos a dos jurisdicciones territoriales.

Otorgó una carta de ciudadanos del Estado y un indulto de penas carcelarias. Autorizó la realización de tres ferias.

2. Primer Congreso Constitucional (1827-1829)

El Primer Congreso Constitucional (1827-1829) que operó del 2 de marzo de 1827 al 1 de marzo de 1829 se integró con 21 diputados nombrados por electores secundarios en la Junta General del Estado. Realizó cuatro periodos ordinarios de sesiones y dos periodos extraordinarios de sesiones y expidió 128 decretos entre el 8 de marzo de 1827 y el 16 de octubre de 1828.

Se caracterizó por instalar por primera vez la Diputación Permanente, por recibir por primera vez una Memoria de Gobierno, por reglamentar la operación de la Diputación Permanente y de la Sección de Gran Jurado, por fundar el Instituto Literario, por prohibir las corridas de toros, por determinar que sus actas se publicaran en un periódico, por invitar a los especialistas a la formación de los códigos civil y penal, por desechar una acusación en contra del Gobernador por haber creado empleos y emprendido obras que no estaban autorizados en el presupuesto, por hacerse cargo de la Imprenta del Estado, por constituirse por primera vez en Gran Jurado para conocer una acusación que presentó el Gobernador en contra del Presidente del Congreso, por expedir por primera vez un decreto por el que le otorgó la dispensa de

estudios a un pasante y por disponer que para ser funcionario o empleado del Estado se requería ser natural del Estado o haber residido en él un año por lo menos con algún arte, industria o profesión. Expidió el Reglamento Interior para la Secretaría del Gobierno, el primer presupuesto de ingresos y egresos del Estado y el Reglamento para la Secretaría del Consejo del Estado.

Autorizó la entrega de tres premios económicos de gratitud y emitió tres reconocimientos de gratitud. Erigió un Pueblo, un Municipio y un Partido; suprimió dos municipios, emitió dos declaratorias de categoría política de localidades y emitió un acuerdo sobre adscripción territorial y límites.

Otorgó 21 cartas de ciudadanos del Estado, una dispensa para la conclusión de estudios y un indulto de penas carcelarias. Autorizó la realización de una feria.

3. Segundo Congreso Constitucional (1829-1830)

El Segundo Congreso Constitucional (1829-1830) que operó del 2 de marzo de 1829 al 1 de marzo de 1830 se integró con 21 diputados nombrados por electores secundarios en la Junta General del Estado. Realizó dos periodos ordinarios de sesiones y un periodo extraordinario de sesiones y expidió 60 decretos entre el 10 de marzo de 1829 y el 15 de octubre de 1829.

Este órgano legislativo expidió el Presupuesto de Egresos, el Reglamento de la Tesorería General del Estado, el Reglamento de la Milicia Cívica del Estado, el Reglamento para el Establecimiento de la Oficina de Redacción del Congreso y el Reglamento sobre el Arreglo de la Biblioteca del Congreso.

Se caracterizó por dirigir una iniciativa al Congreso de la Unión para derogar el decreto por el que se declaró a la Ciudad de México Residencia de los Supremos Poderes de la Unión, por expedir un manifiesto a la Nación ante la amenaza de invasión de las tropas españolas, por publicar en los periódicos la convocatoria para el nombramiento de los escribientes y taquígrafos de la Oficina de Redacción y por desacatar algunas disposiciones del Congreso de la Unión, lo que a la postre propició que dicho Congreso decretara la suspensión de sus labores.

Emitió tres reconocimientos de gratitud y una declaratoria de categoría política de localidades. Le asignó un nombre de carácter histórico a una jurisdicción territorial y

otorgó nueve cartas de ciudadanos del Estado, seis becas para la conclusión de estudios y tres indultos de penas carcelarias y una autorización para la realización de una feria.

4. Congreso Constituyente (1830)

El Congreso Constituyente (1830) que operó del 8 de marzo al 14 de agosto de 1830 se integró con 18 diputados nombrados por electores secundarios en la Junta de la Provincia de México en 1824. Expidió 42 decretos entre el 20 de abril y el 14 de agosto de 1830.

Este órgano legislativo expidió el Presupuesto de Gastos y el Reglamento Interior para el Congreso. Se caracterizó por restablecer a las autoridades que funcionaban en el mes de marzo de 1827, por cesar la Oficina de Redacción del Congreso y el otorgamiento de viáticos a los diputados, por nombrar comisionados para el cuidado y el arreglo de la Biblioteca de la Ciudad de Tlalpan, por disponer el traslado de los Supremos Poderes del Estado a la Ciudad de Toluca y por dirigir un manifiesto a los habitantes del Estado sobre las actividades que realizó en su gestión.

Otorgó once cartas de ciudadanos del Estado. Autorizó la realización de una feria y cuatro indultos para obtener empleos.

5. Primer Congreso Constitucional (1830-1831)

El Primer Congreso Constitucional (1830-1831) que operó del 15 de agosto de 1830 al 1 de marzo de 1831 se integró con 21 diputados nombrados por electores secundarios en la Junta General del Estado. Realizó un periodo ordinario de sesiones y un periodo extraordinario de sesiones y expidió 18 decretos entre el 9 de septiembre de 1830 y el 5 de enero de 1831.

Este órgano legislativo reformó la Constitución, para disponer que la Capital del Estado fuera la Ciudad de Toluca y dejó sin efecto el artículo 98 de su Reglamento Interior, al considerar que no pueda discutirse ni votarse ningún proyecto de ley, no estando presentes las dos terceras partes del número total de diputados.

Emitió un reconocimiento de gratitud y otorgó una pensión económica.

6. Segundo Congreso Constitucional (1831-1832)

El Segundo Congreso Constitucional (1831-1832) que operó del 2 de marzo de 1831 al 16 de octubre de 1832 se integró con 21 diputados nombrados por electores secundarios en la Junta General del Estado. Realizó cuatro periodos ordinarios de sesiones y dos periodos extraordinarios de sesiones y expidió 63 decretos entre el 9 de marzo de 1831 y el 16 de octubre de 1832.

Este órgano legislativo expidió la segunda reforma a la Constitución Política de 1827, para establecer que una Ley designará la sede de los Supremos Poderes.

Se caracterizó por establecer la sede del Congreso en una casa que ocupó el Gobernador, por expedir el decreto por el que dispuso que la Biblioteca del Congreso se adscribiera al Ejecutivo y por ordenar que se imprimieran los dictámenes que versaran sobre las reformas a la Constitución, para que pudiera captar las observaciones de la población.

Emitió un acuerdo sobre adscripción territorial y límites y otorgó dos cartas de ciudadanos del Estado, cinco indultos de penas carcelarias y una dispensa para ejercer derechos civiles.

7. Primera Suspensión del Orden Constitucional (1832-1833)

En el periodo comprendido entre los meses de noviembre de 1832 y enero de 1833 no se produjeron cambios significativos en el Estado de México. La única disposición relevante fue la convocatoria que emitió el Gobernador Lorenzo de Zavala para elegir a los diputados al Congreso del Estado.

8. Tercer Congreso Constitucional (1833-1834)

El Tercer Congreso Constitucional (1833-1834) que operó del 17 de febrero de 1833 al 23 de agosto de 1834 se integró con 21 diputados nombrados por electores secundarios en la Junta General del Estado. Realizó tres periodos ordinarios de sesiones y tres periodos extraordinarios de sesiones y expidió 154 decretos entre el 21 de febrero de 1833 y el 30 de mayo de 1834.

Este órgano legislativo expidió la Ley Reglamentaria de la Milicia Cívica, el Reglamento para la Dirección de Rentas del Estado, el Presupuesto de Ingresos y Egresos, la Ley Orgánica de la Instrucción Pública del Estado, la Ley sobre el Establecimiento del Montepío de Oficinas en el Estado y el Reglamento Interior del Congreso, por el que instituyó la figura de la Gran Comisión. Reformó la Constitución Política para extinguir el Consejo del Gobierno y reorganizar la Administración Pública en tres secretarios, que debían presentar anualmente al Congreso la memoria de las actividades de su ramo.

Se caracterizó porque por primera vez en la historia de la Entidad surgió de su seno un Titular del Poder Ejecutivo, por crear la Dirección General de Rentas, por declarar pertenecientes al Estado los bienes que administraban los Misioneros de Filipinas y los Misioneros Camilos, por dotar al Instituto Literario del local que ocupaba el Beaterio, por instituir la Junta de Sanidad, por abrir un buzón para recibir los comentarios e iniciativas que formularan los ciudadanos, por acordar que las actas de sus sesiones se publicaran en un periódico, por entregarle al Gobernador Lorenzo de Zavala el título de Ciudadano Benemérito en Grado Heroico, por otorgarle al Ciudadano Basilio Estrada un escudo de honor por defender la soberanía del pueblo en Tecopilco, por sesionar interinamente en el Salón de las Casas Conciliares del Ayuntamiento de la Ciudad de Lerma y por sesionar permanentemente en una casa que le arrendaba el Ayuntamiento de Toluca.

Por primera vez expidió decretos para dispensar a una persona la edad que le faltaba para administrar sus bienes, para dispensar la edad para ocupar un cargo público, para concederle a un ciudadano una rebaja en un adeudo a favor del Estado, para exentar a los vecinos de un pueblo del servicio personal de la Milicia Cívica y para ceder un inmueble del Estado a una Municipalidad.

Autorizó la entrega de un premio económico de gratitud. Erigió dos pueblos y tres prefecturas, suprimió tres prefecturas y emitió un acuerdo sobre adscripción territorial y límites.

Otorgó catorce reconocimientos de beneméritos del Estado, una carta de ciudadanos del Estado, tres indultos para obtener empleos, una recompensa económica, una dispensa para la conclusión de estudios, siete indultos de penas carcelarias y tres pensiones económicas. Autorizó la realización de dos ferias y la condonación de un adeudo fiscal.

9. Segunda Suspensión del Orden Constitucional (1834)

La suspensión del orden constitucional que se dio en el Estado de México entre el 31 de mayo y el 25 de agosto de 1834 no trajo cambios significativos al escenario político y social de la Entidad, salvo la convocatoria que debió expedir el Gobernador Interino para instalar un nuevo Congreso.

10. Cuarto Congreso Constitucional (1834-1835)

El Cuarto Congreso Constitucional (1834-1835) que operó del 25 de agosto de 1834 al 6 de octubre de 1835 se integró con 21 diputados nombrados por electores secundarios en la Junta General del Estado. Realizó tres periodos ordinarios de sesiones y dos periodos extraordinarios de sesiones y expidió 65 decretos entre el 4 de septiembre de 1834 y el 5 de octubre de 1835.

Este órgano legislativo acordó realizar juntas en las municipalidades para conocer la opinión de sus habitantes sobre el sistema de gobierno, dispuso comprarle a la Municipalidad de Toluca un local para albergar las oficinas del Congreso y del Poder Ejecutivo, acordó modificar la fórmula de juramento de los diputados, determinó que la Diputación Permanente solo podía ocuparse de los negocios urgentes de interés general del Estado, dispuso que los diputados solo disfrutaran dietas durante el tiempo de las sesiones, determinó que la clausura de sus sesiones no podía verificarse después de las 2 de la tarde, fijó las dietas de los diputados en 3,000 pesos anuales y autorizó al Congreso General para variar el sistema de gobierno. Al suspender los artículos 34 y 37 de la Constitución Política, abrió la posibilidad de dispensar algunos trámites legislativos.

Emitió tres acuerdos sobre adscripción territorial y límites y asignó un nombre histórico a una jurisdicción territorial, otorgó un indulto para obtener empleos, una dispensa para ejercer derechos civiles, un indulto para realizar obras comunitarias y siete indultos de penas carcelarias. Autorizó la realización de una feria y la condonación de dos adeudos fiscales por malversación de fondos.

Fuentes Documentales Consultadas

Anna, Timothy E. (1991). *El Imperio de Iturbide.* México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. BIMA: F1232 I853 A55

Baranda, Marta y Lía García, comp. (1987). *Estado de México Textos de su Historia.* Toluca, Gobierno del Estado de México e Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. BIMA: F1235 L63 B37

Benson, Nettie Lee (1994). *La Diputación Provincial y el Federalismo Mexicano.* México, El Colegio de México. BIMA: F1232 B45 1994

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (1985). *Los Presidentes de México Ante la Nación 1821-1984.* México, LII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. BIMA: J171 M4 1985

Dublán, Manuel y José Lozano (1876). *Legislación Mexicana o Colección Completa de las Disposiciones Expedidas Desde la Independencia de la República. Edición oficial.* México, Imprenta del Comercio. BFD: KB252/M47/1876

Gobierno de la Provincia de México (1822). *El Capitán General y Jefe Político Superior de la Provincia de México.* México, Imprenta Imperial. FRBN: RLAF214LAF

Gobierno del Estado de México (1999). *Constituciones del Estado de México.* Toluca, Dirección General Jurídica y Consultiva. BFD: JL1216M4A5

Gobierno del Estado de México (1827). *Discurso Pronunciado por el Gobernador del Estado de México, al Abrir sus Segundas Sesiones Ordinarias el Congreso Constitucional*. Tlalpan, Gobierno del Estado de México, 1827. BN: ECO1357

Gobierno del Estado de México (1998). *Historia General del Estado de México.* Zinacantepec, Gobierno del Estado de México y El Colegio Mexiquense. CIDFCPYS: F1301.5H57

Gobierno del Estado de México (1829). *Manifiesto del Gobernador del Estado de México Ciudadano Lorenzo de Zavala.* Tlalpan, Gobierno del Estado de México. BN: RLAF201LAF

Gobierno del Estado de México (1835). *Memoria de Hacienda, Justicia y Negocios Eclesiásticos, que el Secretario del Gobierno del Estado de México Encargado de dichos Ramos, Leyó al Congreso, en los Días 4 y 5 del Mes de Abril de 1835*. Toluca, Gobierno del Estado de México. FRBPC

Gobierno del Estado de México (1834). *Memoria del Gobierno del Estado de México Presentada por Félix María Aburto*. Toluca, Gobierno del Estado de México. FRBPC

Gobierno del Estado de México (1827). *Memoria de los Ramos que son a Cargo del Gobierno del Estado Libre de México, Leída al Primer Congreso Constitucional en Sesión del día 6 de Marzo de 1827*. México, Mariano Arévalo. FRBPC

Gobierno del Estado de México (1829). *Memoria que el Gobierno del Estado Libre de México, da Cuenta al Segundo Congreso Constitucional, de Todos los Ramos que han sido a su Cargo en el Año Económico Corrido desde el 16 de Octubre de 1828, Hasta 15 de Igual Mes de 1829*. Toluca, Gobierno del Estado de México. FRBPC

Gobierno del Estado de México (1826). *Memoria que el Gobierno del Estado Libre de México da Cuenta de los Ramos de su Administración al Congreso del Mismo Estado, a Consecuencia de su Decreto del 16 de Diciembre de 1825*. México, Martín Rivera. FRBPC

Gobierno del Estado de México (1835). *Memoria que el Secretario del Ejecutivo del Estado Libre de México Encargado de las Secciones de Gobierno y Guerra Leyó al Congreso en los Días 26, 27 y 28 del Mes de Abril*. Toluca, Gobierno del Estado de México. FRBN: 354.72008 MÉX.m.15.2

Gobierno del Estado de México. *Reformador. Periódico Diario del Estado Libre de México.* Toluca, Gobierno del Estado de México, 1833-1834. FRHN

Herrejón Peredo, Carlos, pról. (2007). *La Diputación Provincial de la Nueva España. Actas de Sesiones 1820-1821 Tomo I.* Zinacantepec, El Colegio Mexiquense, Instituto de Investigaciones Jurídicas Dr. José María Luis Mora y El Colegio de Michoacán. BJMLM: 972.04H5642007

Jarquín, María Teresa y Carlos Herrejón Peredo (1995). *Breve Historia del Estado de México*. México, El Colegio de México y Fondo de Cultura Económica. CIDFCPYS: F1301.5.J371995

Noriega Elio, Cecilia (2007). *La Diputación Provincial de México. Actas de sesiones Tomo II.* Zinacantepec. El Colegio Mexiquense, Instituto de Investigaciones Jurídicas Dr. José María Luis Mora y El Colegio de Michoacán. BJMLM: 972.04H5642007

Poder Legislativo del Estado de México (2006). *Actas de Debates de las Legislaturas del Estado de México 1820-1910*. LV Legislatura, Tecnológico de Monterrey e Instituto de Estudios Legislativos. BJRP

Poder Legislativo del Estado de México (1831). *Actas del Congreso Constitucional del Estado Libre de México Comprensivas del 13 de Agosto de 1830 al 1º de Febrero de 1831.* Toluca, Poder Legislativo del Estado de México. FRBN: ECO D342.7252 MÉX.act

Poder Legislativo del Estado de México (1827). *Actas del Congreso Constituyente del Estado de México: Revisadas por el Mismo, e Impresas de su Origen.* Tlalpan, Poder Legislativo del Estado de México. FRBN: ECO D342.7252 MÉX.a/FRBPC (vol. 1, 2 y 4) y FRBPC (vol. 3, 5, 6, 7, 8 y 9).

Poder Legislativo del Estado de México (1828). *Actas del Primer Congreso Constitucional de México.* Tlalpan, Poder Legislativo del Estado de México. FRBPC (5 volúmenes).

Poder Legislativo del Estado de México (1850). *Actas del Primer Congreso Constitucional del Estado de México, en la Segunda Época de la Federación Mandadas a Imprimir por el Mismo.* Toluca, Poder Legislativo del Estado de México. BJMLM

Poder Legislativo del Estado de México (1829). *Actas del Segundo Congreso Constitucional de México*. Toluca, Poder Legislativo del Estado de México. FRBN: ECO D342.7252 MÉX.act.2 v.1 y BJMLM

Poder Legislativo del Estado de México (2001). *Colección de Decretos del Congreso del Estado de México 1824-1910.* Toluca, Poder Legislativo del Estado de México, Universidad Autónoma del Estado de México y El Colegio Mexiquense. BJMLM

Poder Legislativo del Estado de México (1826). *Documentos Importantes Tomados del Expediente Instruido a Consecuencia de la Representación que Varios Electores a la Junta General del Estado Hicieron a su Congreso Constituyente Pidiendo se Anulen las Elecciones Verificadas en Toluca*. México, Imprenta del Gobierno. (Copia digital) JPP

Poder Legislativo del Estado de México (1828). *Dictamen de la Comisión de Análisis de las Memorias que en los Años de 26 y 27, Presentó el Ciudadano ex Gobernador Melchor Múzquiz: la Primera al Congreso Constituyente y la Segunda al Primero Constitucional del Estado Libre y Soberano de México de Cuya Orden se Imprime*. Tlalpan, Imprenta del Gobierno. FRBN: R354.72008 MÉX.m.15

Poder Legislativo del Estado de México (1831). *Memoria que el Gobierno del Estado Libre de México, da Cuenta al Congreso Constitucional, de todos los Ramos que han sido a su Cargo en el Año Económico Corrido Desde el 16 de Octubre de 1829, Hasta 15 de Igual Mes de 1830 Presentada el Día 2 de Marzo de 1831.* Toluca, Congreso del Estado de México. FRBPC

Poder Legislativo del Estado de México (1832). *Memoria que el Gobierno del Estado Libre de México, da Cuenta al Congreso Constitucional, de Todos los Ramos que han Sido a su Cargo en el año Económico Corrido Desde el 16 de Octubre de 1830, Hasta el 15 de Igual Mes de 1831*. Toluca, Congreso del Estado de México. FRBPC

Poder Legislativo del Estado de México (1833). *Memoria en que el Gobierno del Estado Libre de México, da Cuenta al Honorable Congreso Constitucional de Todos los Ramos que han Sido a su Cargo en el Último Año Económico*. Toluca, Congreso del Estado de México. FRBN: R354.72008 MEX.m.15.2

Poder Legislativo del Estado de México (1828). *Memoria en que el Gobierno del Estado Libre de México, da Cuenta al Primer Congreso Constitucional de Todos los Ramos que han Sido a su Cargo en el Año Próximo Pasado de 1827.* Texcoco, Gobierno del Estado de México. FRBN: R354.72008 MÉX.m.15.1

Poder Legislativo del Estado de México (1824). Reglamento Interior para el Congreso del Estado de México. México, Martín Rivera (copia fotostática). BJRP

Reyes Heroles, Jesús (1982). *El Liberalismo Mexicano.* México, Fondo de Cultura Económica. CIDFCPYS: JL1211/R42

Rives Sánchez, Roberto (1984). *Elementos para un Análisis Histórico de la Administración Pública Federal en México 1821-1940.* México, Instituto Nacional de Administración Pública. BIMA: JL1224 R58

Secretaría de Gobernación (2010). *Antecedentes Históricos y Constituciones Políticas de México.* México, Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional. http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/antecedentes.php

Secretaría de la Presidencia (1976). *México a Través de los Informes Presidenciales Tomo 5. La Administración Pública vol. 1. México*, Secretaría de la Presidencia. BIAPEM: 2326

Torre Villar de la, Ernesto, Moisés González Navarro y Stanley Ross (1974). *Historia Documental de México II.* México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. BIMA: F1226 H57 1974

Wikipedia (2011). *Agustín de Iturbide*. México, Wikipedia. www.wikipedia.org

Wikipedia (2011). *Antonio López de Santa Anna*. México, Wikipedia. www.wikipedia.org

Wikipedia (2011). *Félix Calleja*. México, Wikipedia. www.wikipedia.org

Wikipedia (2013). *Francisco Javier de Lizana y Beaumont*. México, Wikipedia. www.wikipedia.org

Wikipedia (2011). *Francisco Javier Venegas de Saavedra.* México, Wikipedia. www.wikipedia.org

Wikipedia (2011). *Juan O´Donojú*. México, Wikipedia. www.wikipedia.org

Wikipedia (2011). *Juan Prim*. México, Wikipedia. www.wikipedia.org

Wikipedia (2011). *Juan Ruiz de Apodaca*. México, Wikipedia. www.wikipedia.org

Wikipedia (2013). *Pedro María Garibay.* México, Wikipedia. www.wikipedia.org

Wikipedia (2011). *Primera Intervención Francesa en México*. México, Wikipedia. www.wikipedia.org

1. Expedientes del Archivo Histórico del Estado de México

Colección Imperio Mexicano (4 volúmenes de 1821 a 1822).

Colección Intendencia de México (2 volúmenes de 1821 a 1823).

G.G.G. Fondo Gobernación, Sección Gobernación, Serie Gobernación (Del vol. 1 de 1821 al vol. 68 de 1835).

L.L.B. Fondo Legislación, Sección Legislación, Serie Bandos (1 volumen de 1824 a 1835).

L.L.C.E. Fondo Legislación, Sección Legislación, Serie Comunicados Estatales (4 volúmenes de 1824 a 1835).

L.L.D.E. Fondo Legislación, Sección Legislación, Serie Discursos Estatales (1 vol. de 1833 a 1835).

L.L.D.F. Fondo Legislación, Sección Legislación, Serie Decretos Federales (Del vol. 1 de 1821 al vol. 54 de 1835).

2. Expedientes de la Biblioteca "Dr. José María Luis Mora"

Expedientes del Poder Legislativo del Estado de México de 1820 a 1835.

Actas del Poder Legislativo del Estado de México de 1824 a 1835.

Claves de las unidades documentales consultadas

AHEM.- Archivo Histórico del Estado de México.

BIAPEM.- Biblioteca del Instituto de Administración Pública del Estado de México.

BFD.- Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México.

BIMA.- Biblioteca Ignacio Manuel Altamirano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México.

BJMLM.- Biblioteca "Dr. José María Luis Mora" del Poder Legislativo del Estado de México.

BJRP.- Biblioteca de Jorge Reyes Pastrana.

CIDFCPYS.- Centro de Información y Documentación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México.

CIDOGEM.- Centro de Información y Documentación del Gobierno del Estado de México.

FRBN.- Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional.

FRBPC.- Fondo Reservado de la Biblioteca Pública Central del Estado de México.

FRHN.- Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional.

Índice Cronológico

1809	7
1810	8
1811	9
1812	11
1813	25
1814	29
1815	33
1816	33
1817	33
1818	34
1819	34
1820	34
1821	38
1822	48
1823	56
1824	66
1825	123
1826	137
1827	159
1828	224
1829	255
1830	295
1831	332
1832	352
1833	372
1834	424
1835	463